

# UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA



## TESIS DOCTORAL

**El cese de la lucha armada.**

**Un estudio sobre la supervivencia y desactivación de las  
organizaciones insurgentes en América Latina (1970-2000)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Patricia Pinta Sierra**

Directores

Secundino González Marrero  
Henar Criado Olmos

**Madrid, 2015**

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA**



**TESIS DOCTORAL**

**EL CESE DE LA LUCHA ARMADA**

---

**UN ESTUDIO SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y DESACTIVACIÓN DE  
LAS ORGANIZACIONES INSURGENTES EN AMÉRICA LATINA  
(1970-2000)**

**MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA**

**Patricia Pinta Sierra**

Directores:

Dr. Secundino González Marrero  
Dra. Henar Criado Olmos

Madrid, 2014

# **TESIS DOCTORAL**

## **EL CESE DE LA LUCHA ARMADA: UN ESTUDIO SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y DESACTIVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INSURGENTES EN AMÉRICA LATINA (1970-2000)**

Patricia Pinta Sierra



Universidad Complutense de Madrid  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología  
Programa de Doctorado en Ciencias Políticas

Trabajo realizado bajo la dirección de:  
Dr. Secundino González Marrero  
Dra. Henar Criado Olmos

Madrid, 2014







## ÍNDICE

---

<b>LISTADO DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICOS .....</b>	<b>i</b>
<b>AGRADECIMIENTOS .....</b>	<b>iii</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>1. POLÍTICA Y VIOLENCIA COLECTIVA: EL DESAFÍO ARMADO AL ESTADO ....</b>	<b>7</b>
1.1. ¿Qué es la violencia política?.....	8
1.1.1. Política, poder y conflicto: ¿qué lugar ocupa la violencia? .....	8
1.1.2. Hacia una definición de la violencia política.....	16
1.2. Violencia política y actores colectivos.....	22
1.2.1. Guerras civiles, guerrillas, terrorismo o un debate teórico inconcluso .....	23
1.2.2. Una propuesta tipológica de la violencia desde los actores. La insurgencia como concepto marco .....	32
1.3. Aproximaciones a la finalización de la lucha armada insurgente: estado de la cuestión .....	36
1.3.1. Con el foco en los Estados.....	38
1.3.2. Trasladando el foco a los actores colectivos.....	42
1.3.3. ¿Dónde se sitúa este trabajo de investigación? .....	44
<b>2. LOS ESCENARIOS DE LA INSURGENCIA: CONTEXTOS Y CAUSAS DEL FINAL DE LA LUCHA ARMADA.....</b>	<b>47</b>
2.1. El marco analítico: las teorías de la acción colectiva.....	48
2.1.1. El estudio de la acción colectiva contenciosa en la literatura sobre movimientos sociales.....	49
2.1.1.1. <i>La estructura de oportunidades – y restricciones – políticas.....</i>	<i>50</i>
2.1.1.2. <i>La teoría de la movilización de recursos.....</i>	<i>54</i>
2.1.1.3. <i>Los marcos cognitivos para la acción.....</i>	<i>57</i>
2.1.2. La desmovilización de los grupos armados desde un enfoque tripartito de la acción colectiva.....	61
2.2. El impacto del régimen político sobre la incidencia y duración de la actividad insurgente: una relación discutida.....	63
2.2.1. Democracia e insurgencia. Los efectos de la apertura de oportunidades políticas sobre la actividad armada.....	67
2.2.1.1. <i>La hipótesis de la “paz democrática” .....</i>	<i>67</i>
2.2.1.2. <i>La hipótesis de la “vulnerabilidad democrática” .....</i>	<i>80</i>
2.2.1.3. <i>La hipótesis de los “efectos mixtos” .....</i>	<i>84</i>
2.2.2. ¿Cómo afectan los cambios de régimen a la estrategia insurgente? Incorporando al análisis el papel de los procesos de transición y consolidación democrática .....	85

2.2.2.1. Conceptos, definiciones y algunos mitos .....	86
2.2.2.2. La hipótesis de la “violencia transicional” .....	89
2.2.3. Las dinámicas de la represión estatal y su impacto en la actividad insurgente.....	98
2.2.3.1. Represión estatal y régimen político .....	99
2.2.3.2. Represión estatal y lucha armada: el “dilema del castigo” .....	101
2.3. Algunas explicaciones alternativas .....	109
2.3.1. La capacidad estatal .....	110
2.3.2. Los agravios socioeconómicos .....	113
2.3.3. El contexto internacional: las consecuencias del final de la Guerra Fría.....	115
2.3.4. Las características de las organizaciones insurgentes: una incursión en el nivel micro-analítico .....	119
 <b>3. MARCO, METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: LA ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO .....</b>	<b>125</b>
3.1. Marco geográfico y temporal: América Latina, 1970-2000.....	126
3.1.1. El contexto histórico latinoamericano: de dictadores, insurgentes y procesos de democratización.....	127
3.1.2. Breve cartografía de la violencia insurgente latinoamericana .....	136
3.1.3. La importancia de los estudios de área: un enfoque comparado de <i>N</i> intermedia .....	145
3.2. Métodos y técnicas de investigación.....	150
3.2.1. Un análisis estadístico de la supervivencia de las organizaciones armadas: la aplicación de modelos Cox y <i>logit</i> en los estudios de duración.....	150
3.2.2. La incorporación de una mirada cualitativa: alumbrando mecanismos mediante la ilustración histórica.....	157
3.3. Descripción y estructura de la base de datos: el “libro de códigos”.....	159
3.3.1. Operacionalización de la variable dependiente.....	161
3.3.1.1. Criterios de selección de los grupos armados.....	162
3.3.1.2. El cálculo de la duración de los grupos armados .....	166
3.3.2. Operacionalización de las variables independientes .....	171
3.3.2.1. Variables de nivel macro .....	172
3.3.2.2. Variables de nivel micro.....	180
3.4. Sistematización de las hipótesis y variables de investigación.....	180
 <b>4. SUPERVIVENCIA Y DESACTIVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INSURGENTES LATINOAMERICANAS: ANÁLISIS EMPÍRICO .....</b>	<b>183</b>
4.1. ¿Cuánto dura el camino de la lucha armada? .....	184
4.2. Modelos y evidencia empírica: oportunidades, restricciones e incentivos para la finalización de la actividad armada en América Latina .....	192
4.2.1. El régimen político y la supervivencia de las organizaciones insurgentes latinoamericanas .....	193
4.2.1.1. Democracia, democratización y paz en América Latina .....	193
4.2.1.2. Represión estatal y contrainsurgencia: ¿estímulo o disuasión de la actividad armada?.....	224



4.2.2. Una mirada más allá del régimen: explorando las hipótesis alternativas.....	240
4.2.2.1. <i>La debilidad estatal como fortaleza rebelde</i> .....	241
4.2.2.2. <i>Los agravios socioeconómicos: pobreza, desigualdad y conflicto armado</i> .....	246
4.2.2.3. <i>El impacto de la Guerra Fría en América Latina: recursos, discursos y marcos para la acción</i> .....	252
4.2.2.4. <i>Apuntes sobre el nivel micro-analítico</i> .....	260
4.3. Un balance de la supervivencia y desmovilización de los grupos insurgentes latinoamericanos .....	265
<b>EPÍLOGO Y CONCLUSIONES</b> .....	<b>269</b>
<b>ANEXOS</b> .....	<b>279</b>
ANEXO A: Información y análisis complementarios .....	279
ANEXO B: Resumen de la tesis doctoral en inglés.....	293
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	<b>301</b>



## LISTADO DE FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICOS

---

### FIGURAS

Figura 2.1. Argumento del “riesgo revolucionario” para la extensión del derecho al sufragio..	73
Figura 3.1. Tipos de episodios y modalidades de observación incompleta.....	152
Figura 3.2. Generación de variables de transición democrática y democracias postransición	177

### TABLAS

Tabla 1.1. Tipología de la violencia política.....	34
Tabla 3.1. Cuadro resumen de las hipótesis y variables independientes de la investigación..	182
Tabla 4.1. Valores de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Estimador de Kaplan-Meier.....	188
Tabla 4.2. Estimaciones Cox y <i>logit</i> para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. <i>Modelo 1: El efecto de la democracia</i> .....	196
Tabla 4.3. Fin de las organizaciones insurgentes según edad democrática (transición/consolidación). Porcentajes de columna.....	214
Tabla 4.4. Estimaciones Cox y <i>logit</i> para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. <i>Modelo 2: El efecto de la edad democrática (transición/consolidación)</i> .....	216
Tabla 4.5. Fin de las organizaciones insurgentes según nivel de represión estatal (recodificada en tres categorías). Porcentajes de columna.....	226
Tabla 4.6. Estimaciones Cox y <i>logit</i> para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. <i>Modelo 3: El efecto de la represión estatal</i> .....	228
Tabla 4.7. Estimaciones Cox y <i>logit</i> para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. <i>Modelo 4: El efecto de los agravios socioeconómicos</i> .....	251
Tabla 4.8. Fin de las organizaciones insurgentes según contexto internacional de Guerra Fría. Porcentajes de columna.....	253
Tabla 4.9. Estimaciones Cox y <i>logit</i> para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. <i>Modelo 5: El efecto de la Guerra Fría</i> .....	254
Tabla 4.10. Test del <i>log-rank</i> para la comparación de funciones de supervivencia.....	262
Tabla 4.11. Estimaciones Cox y <i>logit</i> para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. <i>Modelo 6: El efecto de la fortaleza del grupo armado</i> .....	264
Tabla A1. Listado de las organizaciones insurgentes incluidas en la base de datos.....	279
Tabla A2. Disponibilidad de información para el caso puertorriqueño.....	282
Tabla A3. Estadísticos descriptivos de la variable dependiente.....	283

Tabla A4.	Estadísticos descriptivos de las variables independientes.....	283
Tabla A5.	Valores de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Método de las tablas de vida (ltable).....	284
Tabla A6.	Valores de la función de riesgo acumulado para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Método de Nelson-Aalen (sts).....	285
Tabla A7.	Matriz de correlaciones entre las variables independientes (método pairwise)....	286
Tabla A8.	Test del supuesto de proporcionalidad de Cox basado en los residuos de Schoenfeld (phtest).....	287
Tabla A9.	Réplica de los <i>Modelos Cox</i> sin los grupos armados puertorriqueños.....	288
Tabla A10.	Réplica de los <i>Modelos logit</i> sin los grupos armados puertorriqueños.....	289
Tabla A11.	Réplica de los <i>Modelos logit</i> introduciendo <i>cubic splines</i> .....	290
Tabla A12.	Probabilidades de ocurrencia de la variable dependiente para determinados valores de las variables independientes (prvalue). Cálculos sobre el <i>Modelo 6d</i> ..	291

## GRÁFICOS

Gráfico 2.1.	Intensidad media de la agitación social en los años previos y posteriores a las extensiones del sufragio.....	76
Gráfico 3.1.	Evolución de la violencia política no estatal por regiones. Número de incidentes violentos (1970-2000).....	133
Gráfico 3.2.	Número de países en democracia en América Latina (1946-2008).....	135
Gráfico 3.3.	Número de organizaciones insurgentes e incidentes registrados por países en América Latina (1970-2000).....	166
Gráfico 3.4.	La duración de las organizaciones insurgentes en América Latina (1970-2000)..	170
Gráfico 4.1.	Representación gráfica de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Estimador de Kaplan-Meier.....	186
Gráfico 4.2.	El riesgo de finalización de los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000).....	190
	<i>Gráfico 4.2a. Función de riesgo acumulado. Estimador de Nelson-Aalen</i>	
	<i>Gráfico 4.2b. Función de riesgo suavizada. Estimación basada en el método kernel</i>	
Gráfico 4.3.	Violencia política no estatal según periodos de democratización en América Latina (1970-2010).....	213
Gráfico 4.4.	Índice Gini de la distribución del ingreso por regiones. Promedios decenales y promedio total del periodo (1970-2000).....	248
Gráfico 4.5.	Porcentaje de población alfabetizada por países en América Latina (1970-2000).....	249
Gráfico 4.6.	Representación gráfica de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos según el tamaño de la organización en número de miembros (1970-2000). Estimador de Kaplan-Meier.....	261
Gráfico A1.	Representación gráfica de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Método de las tablas de vida (ltable).....	285

## AGRADECIMIENTOS

---

Es una suerte contar con tantas personas a quienes dar las gracias. Una suerte haber disfrutado de la compañía de aquéllos que con generosidad y paciencia han amortiguado la soledad y las dudas surgidas a lo largo de mis años de investigación doctoral, compartiendo también las alegrías que alumbraron este largo camino. Todos ellos han hecho posible con sus consejos, su escucha, su aliento y sus necesarias críticas, que consiguiera llevar a término este trabajo que en muchos momentos creí inacabable. A todos ellos va dedicada esta tesis.

En primer lugar, es de justicia mencionar las diversas becas que, tras el final de la licenciatura, me proporcionaron soporte económico y contribuyeron a mi crecimiento como investigadora. Los programas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), así como la beca predoctoral de Formación del Profesorado Universitario concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación y en cuyo marco elaboré esta tesis doctoral, han sido cruciales para el desarrollo de mi labor científica. Espero haber sabido aprovechar el dinero público invertido en mi formación; desde luego en ello puse todo mi empeño.

Este trabajo es deudor de las enseñanzas, orientación y observaciones de mis directores de tesis, Secundino González Marrero y Henar Criado Olmos. Ha sido un placer compartir con ellos esta andadura. Su agudeza, rigor y curiosidad intelectual han estado siempre acompañados por una enorme paciencia, comprensión, flexibilidad y cercanía. No puedo sino darles las gracias por su magisterio, amistad y confianza. No quisiera dejar de recordar a los profesores del Departamento de Ciencia Política I de la Universidad Complutense, al que me he encontrado adscrita durante mis años de doctoranda. A todos ellos agradezco su buena acogida y sus incesantes ánimos en mi tarea de investigación durante mi paso por el departamento. Quiero dedicar también una mención especial a mis profesores del Máster en Estudios Contemporáneos de América

Latina por transmitirme su compromiso, profesional y personal, con esta región. Finalmente, en el curso de la beca predoctoral pude realizar diversas estancias de investigación en la New York University, la University of Essex y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Aprovecho para expresar aquí mi agradecimiento a cuantos me ayudaron entonces, principalmente a Jeff Goodwin, María Inclán Oseguera y Brian Phillips, quienes siguieron con interés mi trabajo, brindándome importantes claves para avanzar.

Son muchos los colegas y amigos a los que he conocido desde que ingresé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Ellos han hecho de esta travesía un periodo inolvidable y profundamente enriquecedor. Las discusiones y el intercambio de ideas, las risas y experiencias compartidas, han sido una parte esencial de mi aprendizaje. Es imposible nombrarlos a todos. Vaya, no obstante, mi agradecimiento para los compañeros y amigos de licenciatura, máster y seminarios de investigación. Para las personas a las que conocí en las instituciones donde tuve la oportunidad de colaborar, especialmente para mis compañeras becarias del CIS. Para los amigos que encontré en Inglaterra, México y Estados Unidos. Para mis viejas amistades de Erasmus.

A lo largo de estos años la tesis doctoral le ha robado mucho tiempo, más del que hubiera deseado, a mi familia y demás seres queridos. Lamento mis ausencias. Sé que todos ellos se sienten orgullosos de mí y se alegran de la conclusión de este proyecto. Gracias por vuestro impulso y cariño. Quisiera mencionar en particular a mis amigas y amigos del barrio, María José, Maribel, Marta, Jorge y Ramón. A mis tíos, primos y abuelos, los que están y los que ya marcharon. Gracias especialmente a Álvaro Martín por su apoyo inquebrantable. Este trabajo es de los dos. Finalmente, dedico esta tesis doctoral a mis padres, José y Laude, referentes, maestros y fuente de generosidad sin límites; y a mi querido hermano David, tan distinto y tan parecido a mí. De ellos aprendo cada día más de lo que sospechan. Y a ellos les debo más de lo que cabe expresar en estas líneas. Gracias por todo.

## INTRODUCCIÓN

---

La violencia ocupa un espacio destacado, aunque de amplitud variable, en la configuración, devenir y estructura de las sociedades humanas. El hecho violento atraviesa los vínculos sociales y permea las instituciones, adquiriendo en su transcurso formas heterogéneas de expresión y grados de intensidad diversos (González Calleja, 2002: 11). Su impronta alcanza, de este modo, a las más variadas esferas de la realidad sociopolítica que nos envuelve. Y es que la violencia, que “es tan vieja como el mundo” (Domenach, 1978: 777), ha acompañado al hombre – de manera abierta o subrepticia – desde el propio origen de los tiempos. El carácter omnipresente de este fenómeno hace de su estudio una tarea insoslayable para quienes aspiran a comprender el orden social vigente y dar cuenta de las relaciones que se establecen entre diferentes individuos, organizaciones y grupos. Así, en palabras de Hannah Arendt (2005: 16), “nadie consagrado a pensar sobre la Historia y la Política puede permanecer ignorante al enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos”.

La Ciencia Política ha mantenido, sin embargo, una relación inestable con el análisis de la violencia en cuanto que objeto particularizado de estudio. De hecho, no resulta difícil encontrarse, dentro del panorama académico de la disciplina, con la programación de congresos, la publicación de manuales o el diseño de planes de estudios en los que el examen de la violencia ostenta, en el mejor de los casos, una posición marginal. El presente trabajo de investigación la sitúa, no obstante, en el centro de sus indagaciones. Los vínculos existentes entre la esfera de la política y el ejercicio de la actividad violenta pasan así a un primer término de la reflexión para convertirse en eje vertebrador de nuestros esfuerzos analíticos. Más específicamente, este estudio se orienta al examen de los procesos de finalización de aquellos enfrentamientos armados que tienen a insurgencia y Estado como agentes protagonistas de la contienda. La resolución de estos escenarios de disputa constituye un asunto de primer orden,

merecedor de atención científica en virtud de las múltiples y profundas consecuencias que experimentan aquellas sociedades traspasadas por la violencia. De este modo, dentro del marco y compromiso con la denominada “investigación para la paz”, esta tesis doctoral aspira a contribuir al conocimiento de las condiciones favorables para la desactivación de los conflictos políticos de carácter violento.

Para el abordaje de dicha cuestión, apostaremos por un enfoque de acción colectiva en el que las organizaciones insurgentes se convierten en unidades privilegiadas de observación y análisis. Este tipo de aproximación se aparta de los estudios *estadocéntricos* ajenos a la perspectiva y decisiones estratégicas de la insurgencia, aportando una nueva mirada al estudio de la violencia insurreccional. Nos situamos así en la senda recientemente inaugurada por autores como Jones y Libicki (2008), Blomberg et al. (2010; 2011), Young y Dugan (2010), Phillips (2011), Carter (2012) o Gaibullov y Sandler (2013), cuyas investigaciones se consagran al análisis de la supervivencia de las organizaciones rebeldes. El objetivo central de la investigación consistirá, por tanto, en el rastreo e identificación de los factores subyacentes a la desmovilización de los grupos subversivos que desafían, mediante las armas, la autoridad del Estado. Pretendemos con ello desentrañar las causas por las que aquellos movimientos contendientes que un día optaron por la violencia como estrategia de oposición política cesan, en un momento dado, el ejercicio de su actividad armada. Se trata, en definitiva, de dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿por qué finalizan las organizaciones insurgentes? ¿Bajo qué condiciones se encuentran los grupos armados dispuestos – o conminados – a la renuncia de la violencia como estrategia de lucha política? ¿Qué circunstancias determinan que ciertos grupos rebeldes duren más que otros? ¿Cuáles son los mecanismos que amplían o restringen su longevidad?

Esta búsqueda de respuestas sobre el declive de las organizaciones insurgentes estará guiada por una serie de hipótesis teóricas que serán comprobadas, para su verificación, mediante el análisis empírico. En primer lugar, y como eje central de la investigación, atenderemos al impacto del régimen político sobre la supervivencia de los grupos armados. Nos adentramos así en un intenso – e inconcluso – debate sobre las dinámicas que operan entre forma de gobierno y actividad insurgente. Para ello someteremos a examen el argumento de la “paz democrática”, explorando los posibles efectos de la poliarquía como herramienta de disuasión o fomento del recurso a la violencia. Asimismo, abordaremos la influencia específica de los procesos de cambio de



régimen sobre las estrategias de los insurrectos. La observación de los periodos de transición y consolidación democrática nos permitirá analizar el comportamiento de los actores colectivos alzados en armas ante escenarios políticos en transformación. Finalmente, situaremos el foco sobre la represión estatal. Así, tras la discusión de sus nexos con el tipo de régimen político imperante, analizaremos las consecuencias de la violencia gubernamental en la configuración de los repertorios de contienda adoptados por la insurgencia.

Junto a las citadas dimensiones, núcleo fundamental de nuestras pesquisas, la literatura ha ofrecido además diversas explicaciones alternativas a la presencia y desarrollo de actividad armada de carácter contestatario. Aspectos como la fortaleza del Estado, las condiciones materiales de vida y magnitud de los agravios socioeconómicos, el impacto del contexto internacional, o los recursos disponibles para los movimientos subversivos han sido frecuentemente señalados como factores relevantes en el estudio de la insurgencia. Estos argumentos rivales, “sospechosos habituales” de incidir en los niveles de violencia colectiva, darán forma a las hipótesis secundarias de esta investigación. Su consideración en los análisis como variables de control nos permitirá determinar su papel específico en la configuración de las causas de finalización de las organizaciones armadas.

Este trabajo de aproximación a la pacificación de los conflictos violentos se halla circunscrito a un determinado marco geográfico y temporal: América Latina entre los años 1970 y 2000. La demarcación de estas coordenadas de investigación, cuyos límites nos sitúan en el ámbito de los denominados estudios de área, se ajusta a los oportunos criterios de pertinencia e interés científico. La región presenta a lo largo del periodo señalado una serie de características sociopolíticas que hacen de ella un terreno propicio para el abordaje de nuestro objeto de investigación y el análisis de las dimensiones explicativas propuestas. Así, durante el último tercio del siglo XX el subcontinente latinoamericano fue testigo de numerosos episodios de violencia insurgente que dejaron su huella desde el Río Bravo hasta la Tierra de Fuego. El surgimiento y desarrollo de múltiples organizaciones armadas se convirtió en un fenómeno recurrente, adquiriendo una notable relevancia y peso político en prácticamente todos los países de la región. Asimismo, América Latina experimentó entonces un profundo proceso de transformación política. La denominada “tercera ola” democratizadora (Huntington, 1991a; 1991b) barrería los regímenes dictatoriales que

asediaban al subcontinente latinoamericano, trayendo hasta sus costas la presencia de nuevas instituciones democráticas. Finalmente, el debate abierto sobre la fragilidad estatal en América Latina, el azote de la desigualdad en la región, su particular posición geoestratégica durante la Guerra Fría o la magnitud alcanzada por algunos de sus movimientos armados acreditan también la idoneidad de nuestro marco espacio-temporal para la observación empírica de las cuestiones teóricas planteadas. El encaje de todas estas piezas nos permitirá, en definitiva, aportar luz sobre los diversos interrogantes que motivaron el presente trabajo de investigación.

El diseño empírico realizado nos sitúa ante un estudio comparado de *N* intermedia. La metodología específica empleada para el abordaje de nuestro problema de investigación se sustenta, en primer lugar, sobre un análisis cuantitativo basado en la aplicación de modelos estadísticos de duración, también conocidos como análisis de supervivencia o análisis de la historia de acontecimientos. Esta técnica, a partir de la cual hemos efectuado diversas sofisticaciones estadísticas orientadas a testar la robustez de los hallazgos, se aplica sobre una extensa y detallada base de datos elaborada *ad hoc* para el desarrollo de esta investigación. En ella se incluye información referida tanto a las unidades de observación, es decir, los grupos insurgentes latinoamericanos, como al contexto sociopolítico en que desarrollaron su actividad armada. Este conjunto de datos constituye, por tanto, una valiosa herramienta de aproximación a la realidad del subcontinente en el transcurso del periodo temporal considerado. Su empleo supone, asimismo, una destacada novedad en las investigaciones sobre la insurgencia en América Latina. Éstas han estado mayoritariamente dominadas por estudios de caso o comparaciones de muestras muy reducidas que, si bien conforman una inestimable fuente de conocimiento sobre los sucesos que abordan, carecen de resultados empíricos generalizables. Esta investigación cuantitativa será, finalmente, complementada a través de un ejercicio de ilustración histórica. La incorporación de esta breve mirada cualitativa facilita la identificación de los mecanismos y microfundamentos que subyacen a las tendencias generales detectadas mediante el análisis estadístico de los datos. Los relatos y narrativas sobre los casos concretos, basados en fuentes secundarias de diverso tipo, iluminan los procesos causales que actúan bajo las dinámicas de conjunto. Este planteamiento metodológico se encuentra, así, a medio camino entre las estrategias intensivas de los enfoques *case-oriented* y el carácter más extensivo propio de las perspectivas *variable-oriented*. Dicha conjugación de enfoques y técnicas

pretende contribuir, en definitiva, a la generación de sinergias que enriquezcan la investigación al integrar las virtudes propias de cada uno de los métodos, minimizando de algún modo sus posibles déficits o debilidades.

La exposición de esta investigación doctoral adoptará la siguiente estructura. El Capítulo I se encuentra dedicado a la reflexión teórica y conceptual sobre nuestro objeto de estudio. Comenzaremos, para ello, interrogándonos sobre el significado mismo del concepto “violencia política”. Trataremos así de delimitar los principales rasgos y características definitorias del término, internándonos en el profuso debate sobre la naturaleza de los lazos trabados entre el ejercicio de la violencia y el ámbito de la actividad política. A continuación, situaremos el foco de nuestro análisis sobre la violencia y actores de carácter colectivo, sometiendo a consideración diferentes manifestaciones y propuestas tipológicas de la actividad armada desafiadora del Estado. Dicho recorrido desemboca en el concepto de “insurgencia”, fundamento de nuestras indagaciones. Por último, realizaremos una breve revisión del estado del arte en los estudios sobre finalización de conflictos armados, centrando así nuestro problema específico de investigación y planteando una propuesta alternativa de abordaje. Una vez definidos los contornos precisos de nuestra variable dependiente, el Capítulo II procederá a la discusión teórica de las variables independientes consideradas relevantes para el estudio. Así, tras la exposición de nuestro marco analítico de referencia, procedente de las teorías de la acción colectiva, se llevará a cabo la formulación de las hipótesis de trabajo. En primer lugar, según se ha señalado con anterioridad, abordaremos el impacto del régimen político sobre la actividad insurgente, atendiendo a las perspectivas de supervivencia de las organizaciones armadas en función de la forma de gobierno imperante. Dicha dimensión, eje primordial de la investigación y fuente de nuestras hipótesis principales, será acompañada por una serie de variables de control. Entre ellas figuran, como ya dijimos, argumentos alternativos como la capacidad estatal, los agravios socioeconómicos, el marco internacional o la fortaleza de los grupos rebeldes. El Capítulo III marca el tránsito desde el bloque teórico de la investigación hacia su fase de desarrollo empírico. En él se explicita, de manera detallada, el diseño y metodología adoptados para el contraste de hipótesis. En sus páginas mostraremos, además, los pormenores de la construcción de nuestra base de datos, así como el procedimiento de operacionalización de cada una de las variables consideradas. Los resultados de este trabajo empírico se hallan expuestos en el Capítulo IV. Durante su

transcurso podrán encontrarse los diversos modelos estadísticos estimados, así como la evidencia histórica que los complementa y profundiza en sus averiguaciones. Para terminar, se incluye un breve epílogo y conclusiones en los que se plantean algunas consideraciones finales. En este último apartado se destacan los principales hallazgos y aportaciones de esta tesis doctoral, apuntando algunos elementos clave para la reflexión.

## **CAPÍTULO I**

---

### **POLÍTICA Y VIOLENCIA COLECTIVA: EL DESAFÍO ARMADO AL ESTADO**

Nuestros primeros pasos en este trabajo de investigación estarán orientados a la reflexión teórica en torno a la presencia y papel de la violencia en política. Así, a lo largo de este capítulo inicial, analizaremos los vínculos – múltiples y heterogéneos – existentes entre esta díada de conceptos. No es ésta una cuestión menor ni de fácil abordaje, puesto que son muchas las preguntas que cabría formularse en relación al empleo de la violencia en el ámbito de “lo político”, y muchas también las respuestas que autores diversos han ido dando a tales interrogantes a lo largo de la historia. Por ello, este apartado no pretende ser – ni podría serlo – una recapitulación minuciosa de los numerosos enfoques desde los que las ciencias sociales se han aproximado al “hecho violento”. Más bien, las páginas que siguen tienen el objetivo de trazar un mapa que nos permita aproximarnos a nuestro objeto de estudio equipados de los instrumentos teóricos y conceptuales necesarios para arrojar algo de luz sobre nuestro problema de investigación.

Con tales propósitos, comenzaremos interrogándonos sobre el significado mismo del concepto “violencia política”, tratando de dilucidar sus principales elementos constitutivos e indagando en la posición que ocupa la violencia en la esfera de la política. A continuación, centraremos el análisis en la violencia y actores de carácter colectivo, sometiendo a consideración diversas propuestas tipológicas de la violencia colectiva desafiadora del poder estatal. Por último, concluiremos este capítulo con una revisión del estado del arte de los estudios en torno a la finalización de los conflictos armados. Descendemos así a nuestra pregunta concreta de investigación, construyendo un marco teórico adecuado para la aproximación a nuestra variable dependiente.

## **1.1. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POLÍTICA?**

La presencia de la violencia en las relaciones humanas y su impacto en el ámbito de la política resultan innegables para cualquier observador de la realidad social. Generadora de fascinación y rechazo, la violencia ha tenido una indiscutible relevancia en el devenir de las sociedades a lo largo de los tiempos. Su desarrollo, no obstante, como objeto de estudio por parte de las ciencias sociales ha tenido un carácter intermitente y desigual, basculando entre la profusión y el letargo. El hecho violento ha sido catalogado en múltiples ocasiones como irracional, anómalo, caótico, aberrante, inaceptable o antisocial, lo que explica parte de su frecuente postergación y arrinconamiento en la producción científica. Asimismo, la propia naturaleza multidimensional y compleja de la violencia dificulta la aprehensión del fenómeno, tratándose, en palabras de González Calleja (2002: 65), de “una categoría sociohistórica muy escurridiza”. Sus numerosas y heterogéneas formas, manifestaciones, orígenes y consecuencias hacen imprescindible una definición y posicionamiento previos a la hora de abordar esta cuestión. Éste es precisamente el objetivo del presente epígrafe.

### **1.1.1. Política, poder y conflicto: ¿qué lugar ocupa la violencia?**

La discusión en torno a la naturaleza de la relación existente entre política y violencia ha estado presente, aunque de manera irregular, en las cavilaciones de diversos autores a lo largo de la historia del pensamiento occidental. Tales reflexiones, efectuadas desde diferentes enfoques, con intenciones y objetivos – desde lo reprobatorio hasta lo estratégico – en muchos casos antagónicos, pueden agruparse de manera sintética en torno a dos extremos de un eje que transita de la inherencia a la contingencia (Eckstein, 1980; González, 1994: 251; Conteh-Morgan, 2004: 13-14). De un lado podríamos ubicar a quienes estudian la violencia como un hecho consustancial a la política, bien situándola en el origen y raíz de la misma, bien considerándola una de sus principales manifestaciones; en el lado opuesto estarían aquellos autores que entienden el hecho violento como una anomalía en el natural discurrir de la actividad política, interpretándola de algún modo como su propia antítesis. Por ello, el punto de partida básico a la hora de realizar un estudio en torno al fenómeno de la violencia en la vida política reside en la elección de la mirada que se adoptará dentro de dicha dicotomía (Conteh-Morgan, 2004: 13). Tal opción dependerá de la respuesta dada a la pregunta sobre el lugar que la violencia ocupa en el ámbito de la política. A

continuación plantearemos sucintamente los fundamentos del debate teórico desarrollado en torno a este interrogante.

La política ha sido definida con frecuencia como aquella actividad colectiva llevada a cabo por los miembros de una comunidad con la finalidad de regular los conflictos existentes entre grupos diversos en el seno de la misma, a través de la adopción de decisiones que obligan a todos sus integrantes (Vallès, 2000: 18). Esta conceptualización de la política se asienta de manera esencial sobre las nociones de “conflicto” y “poder” y establece entre ellas un vínculo primordial. Estos serán precisamente los conceptos que articulen nuestra reflexión, pues de ambos, poder y conflicto, brotarán los nexos que unen a política y violencia.

Partiremos del carácter consustancial del conflicto a las sociedades humanas. De acuerdo con Leyte (2005: 108), dicho conflicto tendrá una “doble naturaleza: interna al propio sujeto y externa al mismo. Del conflicto interno se hará responsable la Ética y del conflicto externo la Política, pero en ambos se presupone una violencia original y una disarmonía que hay que reducir”. La discrepancia y la pugna se sitúan, por tanto, en la propia base de la actividad política. Ésta nace y encuentra su razón de ser en la naturaleza conflictiva de las relaciones sociales. Tal idea constituye el foco central de la reflexión de Chantal Mouffe (1999) en su obra *El retorno de lo político*, en la que defiende esta “inerradicabilidad del poder y el antagonismo” del ámbito de la política<sup>1</sup> (Mouffe, 1999: 10). En su crítica al liberalismo, la autora propone la configuración de una democracia radical y pluralista, que garantice la salvaguarda de los derechos y la libertad individuales, sin soslayar el componente de hostilidad propio de las relaciones humanas<sup>2</sup>. Con este propósito, la autora recuperará la visión de la política fundamentada en la división “amigo-enemigo” de Carl Schmitt (2002), desplazando, no obstante, la noción de enemigo por la de adversario, e invocando al *agonismo* como sustituto del antagonismo y garantía democrática.

---

<sup>1</sup> Conviene aclarar aquí que, en sentido estricto, la autora establece una distinción entre “lo político”, como vinculado a la ya citada dimensión conflictual de las relaciones humanas, y “la política”, en cuanto que actividad orientada a establecer el orden y organizar la convivencia en ese entorno de hostilidad. Tal distinción, de acuerdo con Chantal Mouffe (1999: 14), “tiene el mérito de establecer un lazo entre las dos raíces comunes del término «político/a»: por un lado *polémos*; por otro lado, *polis*”.

<sup>2</sup> Otros autores como Ernesto Laclau o Jaques Rancière han incidido también en este papel del litigio como elemento fundante y constitutivo de lo político a través de sendos desarrollos teóricos en torno a los conceptos de “antagonismo” y “desacuerdo”.

Dentro de este escenario de litigio e intereses encontrados, los diversos actores tratarán de intervenir en la regulación del conflicto social a través del ejercicio del poder. En este sentido, Michael Mann (1986) explica las sociedades humanas como redes superpuestas y entrecruzadas de poder<sup>3</sup>, al tiempo que autores tales como Max Weber (1946: 78) o Wright Mills (2000: 171) llegarán a afirmar que toda política no es sino una lucha por el mismo. No resulta sencillo, sin embargo, determinar cuál es el significado exacto de este término. Robert Dahl (1957), en su ya clásico artículo “El concepto del poder”, lo definía como la capacidad de A para que B haga algo que de otro modo no haría. Dicha conceptualización, aunque con matices diversos, ha sido compartida por numerosos autores. De este modo, la facultad y los medios necesarios para alcanzar los propios intereses, así como su imposición sobre – y contra – la voluntad ajena, se tornan ideas clave del concepto del poder (v.g. Weber, 1946: 180; Hobbes, 1980: 69; Bobbio, 1994: 1216). La violencia será interpretada, desde esta óptica, como un mecanismo fundamental de A en ese intento de dominación sobre B.

Este tipo de aproximaciones a la idea del poder ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. Giddens (1987: 9) reconocerá la importancia de esta mirada hacia el poder como “capacidad transformativa” del curso de los hechos mediante la adopción de decisiones incluso frente a la contestación de otros. Pero, afirma, este componente es únicamente uno de los posibles aspectos de la dominación. De acuerdo con el autor, lo que verdaderamente importa es que ciertas decisiones no son ni tan siquiera consideradas: “El poder puede tener su manifestación más alarmante y, a menudo, terrorífica cuando se aplica como una sanción de fuerza. Pero es más intenso y duradero cuando corre silenciosamente a través de la repetición de prácticas institucionalizadas” (Giddens, 1987: 9). Asimismo, Lukes (2005) afirmará que el poder es tanto más efectivo cuanto menos observable. Cuestiona de este modo el *behaviorismo* propio de las definiciones clásicas del poder y su foco sobre el conflicto visible, ignorando lo que él denomina “conflicto latente”. Su visión “tridimensional” del poder pretende, por tanto, incidir en su componente conflictivo, atendiendo a las contradicciones entre poderosos y excluidos, y rescatando aquellas demandas e intereses no expresados – e

---

<sup>3</sup> En palabras de Mann (1986: 2), “la mejor explicación general de las sociedades, su estructura, y su historia puede darse en términos de lo que yo llamo las cuatro fuentes del poder social: ideológico, económico, militar y político”. Cita traducida por la autora a partir de la edición original de la obra en inglés. De aquí en adelante, se ofrecerá la traducción de todas aquellas citas extraídas de obras referenciadas en la bibliografía en lenguas diferentes al español.



incluso no conscientes – que ni siquiera llegan a convertirse en asuntos de debate político. En esta misma línea de crítica a las nociones clásicas del poder, encontramos destacadas formulaciones teóricas tales como el concepto *gramsciano* de “hegemonía/bloque hegemónico”, la idea de “capilaridad del poder” de Foucault o el “poder simbólico” teorizado por Pierre Bourdieu. Todas ellas ponen de relieve la existencia manifestaciones del poder menos evidentes que la coerción y la fuerza – la cultura, la disciplina y autovigilancia, etc. –, pero igualmente preñadas de ese componente de conflicto y enfrentamiento intrínseco que subyace siempre a su ejercicio.

Dentro de este esquema de interacciones entre la tríada conflicto-poder-política, se han trazado numerosas líneas que, como hemos apuntado, asocian de un modo u otro a sus componentes con el hecho violento. No obstante, la literatura ofrece visiones muy dispares sobre la posición general de la violencia en el marco de la actividad política. Comenzaremos aludiendo brevemente al ya mencionado enfoque de la inherencia. Desde esta perspectiva, defendida por buena parte de la tradición occidental, se concibe el fenómeno violento como íntimamente vinculado a la política, el ejercicio del poder y el origen del Estado. Entre las primeras aproximaciones del pensamiento moderno a esta idea se encuentra la obra de autores clásicos como Nicolás Maquiavelo. En su célebre tratado *El Príncipe*, publicado en 1532, Maquiavelo expuso con una claridad descarnada su visión de la política como actividad esencialmente ligada al empleo de la fuerza. Bajo este enfoque, la génesis y sostenimiento de los Estados depende en gran medida de su capacidad para hacer uso de los instrumentos necesarios de coacción y violencia. Así, el autor florentino proclamaría:

Pues bien, los principales cimientos y fundamentos de todos los Estados – ya sean nuevos, ya sean viejos o mixtos – consisten en las buenas leyes y las buenas armas. Y, dado que no puede haber buenas leyes donde no hay buenas armas y donde hay buenas armas siempre hay buenas leyes, dejaré a un lado la consideración de las leyes y hablaré únicamente de las armas (Maquiavelo, 1996: 71-72).

Este posicionamiento no implica, según aclara el propio autor, la consideración de la violencia como una circunstancia deseable *per se* sino, más bien, como un proceso en muchos casos irremediable cuando se trata de la práctica política: “Debéis, pues saber, que existen dos formas de combatir: la una con las leyes, la otra con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de las bestias; pero como la primera muchas veces no basta, conviene recurrir a la segunda” (Maquiavelo, 1996: 90). El pragmatismo

y la disociación del binomio “moral-política”<sup>4</sup> son, en definitiva, la base sobre la que se asienta su visión de la violencia como fenómeno inseparable de la actividad política.

Por su parte Thomas Hobbes, en su obra el *Leviatán* de 1651, asocia la violencia a la competencia e incesantes lizas por el poder que atraviesan a la sociedad, manifestando que “la pugna de riquezas, placeres, honores y otras formas de poder, inclina a la lucha, a la enemistad y a la guerra” (Hobbes, 1980: 80). Pero Hobbes desprenderá además de esta situación de enfrentamientos previa a la aparición del Estado – un escenario descrito como una “guerra de todos contra todos” –, la necesidad de un Leviatán al que ceder, mediante pactos mutuos, el poder absoluto con el fin de mantener la paz y seguridad. De este modo, Hobbes convierte a la violencia no sólo en justificación del origen estatal, sino además en característica del poder de éste para cumplir sus objetivos, puesto que “los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno” (Hobbes, 1980: 137).

Esta visión de la violencia como rasgo definitorio del poder estatal se encuentra también en la obra de autores posteriores entre los que destaca, por su amplia repercusión, Max Weber. Es de sobra conocida su formulación del Estado moderno en términos de lo que considera su instrumento de acción específico – aunque no único, aclara –: el uso de la fuerza física. Comparte, así, la célebre sentencia de Trotsky “todo Estado está fundado en la violencia”, al afirmar que “el Estado es una comunidad humana que (exitosamente) reclama el *monopolio del uso legítimo de la fuerza física* dentro de un territorio dado” (Weber, 1946: 78)<sup>5</sup>. La violencia se presenta, de acuerdo con este enfoque, como el elemento específico del poder político, interpretado como “el poder coactivo en el sentido más estricto de la palabra” (Bobbio, 1994: 1217).

Pero la violencia no es, desde el punto de vista de la inherencia, un atributo exclusivo del poder del Estado. Su presencia desborda tales límites y trasciende hacia

---

<sup>4</sup> En este sentido afirmará que “un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son. Por todo ello es necesario a un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder ser no bueno y a usar o no usar de esta capacidad en función de la necesidad” (Maquiavelo, 1996: 83).

<sup>5</sup> Esta definición del Estado ha inspirado las posteriores formulaciones de numerosos autores. Por citar tan sólo un ejemplo, Giddens (1987: 20) conceptúa al Estado como “una organización política cuyo gobierno está territorialmente ordenado y es capaz de movilizar los medios de la violencia para sostener tal dominio”. El propio Giddens se reconocerá deudor del autor alemán, afirmando: “Esta definición es próxima a la de Weber, pero no acentúa el monopolio de los medios de la violencia o el factor de legitimidad” (p. 20).

otros actores y ámbitos de la práctica política, en la medida en que se trata de una de las manifestaciones posibles del conflicto inmanente a las sociedades humanas (González Calleja, 2002). Así, desde esta perspectiva de lo que podríamos denominar *conflictivismos* sociológicos o politológicos (Aróstegui, 1994: 39), se incide en la necesidad de analizar la violencia en el contexto del conflicto social y la lucha por la defensa y salvaguarda de intereses encontrados. De este modo, la violencia ha sido abordada como una estrategia de acción política llevada a cabo no sólo por gobiernos sino también por ciudadanos, vinculándose a la búsqueda de determinados fines para cuyo alcance se considera un instrumento efectivo; en palabras de Clausewitz (1984: 87), “la guerra es simplemente la continuación de la política por otros medios (...). El objeto político es la meta, la guerra es el medio para alcanzarla”.

Esta visión táctica de la violencia fundamentada en el conflicto – en este caso esencialmente en términos de lucha de clases – ha sido también objeto de amplio desarrollo por buena parte del pensamiento marxista<sup>6</sup>. Ya en el *Manifiesto Comunista* de 1848, Marx y Engels apuntaban a la revolución violenta como herramienta necesaria para la destrucción del Estado burgués: “Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente” (Marx y Engels, 2001: 69). Por esta misma senda han transitado autores tan diversos como Georges Sorel (1976), Lenin (1975) o Frantz Fanon (1977)<sup>7</sup>, reflexionando sobre el papel de la violencia –a través del sindicalismo y la huelga general, el partido revolucionario o la lucha anticolonialista – en la superación de las diversas formas de opresión capitalista.

Por su parte, las llamadas teorías de la contienda política beben también del argumento de la inherencia. Desarrolladas fundamentalmente por autores vinculados al análisis de la acción colectiva y los movimientos sociales (v.g. Charles Tilly, Sidney

---

<sup>6</sup> Alan C. Tidwell (1998: 48-55) sitúa, sin embargo, la teoría marxista del conflicto en la línea argumental de la contingencia. La clave del desacuerdo radica, desde nuestra óptica, en que aquí analizamos la violencia como inherente a la actividad política, sin explorar sus vínculos últimos con la naturaleza del ser humano. Así, y a diferencia de autores como el ya mencionado Thomas Hobbes, el marxismo no deriva su análisis del antagonismo de un posicionamiento pesimista antropológico. De este modo, Marx interpreta el conflicto no tanto como consecuencia de la condición humana, sino como resultado de la sociedad de clases impuesta por el sistema capitalista; desde su punto de vista, “los humanos han sido separados de su verdadera naturaleza por la organización del trabajo” (Tidwell, 1998: 49).

<sup>7</sup> Es en el prólogo a esta obra de Fanon, *Los condenados de la tierra*, donde Sartre formula la conocida sentencia: “Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro (...): quedan un hombre muerto y un hombre libre”.

Tarrow, Doug McAdam), contemplan la violencia como una elección estratégica – y por tanto racional – dentro de un *repertorio* de posibles formas de acción política. Tilly, uno de los principales representantes de esta línea interpretativa, realiza una sugerente lectura de la violencia colectiva en cuanto que resultado de interacciones y procesos sociales básicamente no violentos. De acuerdo con el sociólogo estadounidense, muchas de las dinámicas y causas que operan tras la violencia son esencialmente las mismas que actúan en las “zonas no violentas” de la vida política y, de hecho, mantienen con ellas continuos vínculos e interrelaciones (Tilly, 1978; 2007b). La violencia no se interpreta, por tanto, como una aberración o patología social, sino como una forma entre otras de lucha política, ocupando “un lugar arriesgado pero coherente en la política contenciosa” (Tilly, 2007b: 240).

Hemos recorrido hasta el momento algunas de las principales formulaciones teóricas que otorgan a la violencia una posición central e inmanente a la actividad política. Sin embargo, y como apunta Aróstegui (1994: 39), este punto de vista tropieza de manera irremediable con aquellas concepciones de la política como mecanismo destinado, precisamente, a evitar la resolución violenta de los conflictos existentes en el seno de las sociedades. Dicha advertencia nos sitúa en la senda de los enfoques que analizan el papel de la violencia en términos de contingencia, accidente o anomalía. Dentro de este bloque cabría mencionar, en primer término, a los denominados enfoques psicosociales. Tales estudios ponen el foco del análisis en el individuo, recibiendo influencias de ramas del saber como la psicología, la psiquiatría e incluso la biología. La obra *La psicología de las masas*, escrita por Gustave Le Bon en 1895, es un ejemplo paradigmático de este tipo de aproximaciones. En ella, el autor argumenta la conformación de una suerte de estado mental colectivo, caracterizado por la irracionalidad, la violencia y los instintos, que se activa cuando los sujetos actúan dentro de un grupo y pasan a formar parte de “la masa” (LeBon, 2000). Pero dentro de este tipo de perspectivas destacan, debido a su influencia y desarrollo, aquéllas vinculadas al concepto de “frustración”. Encontramos, así, elaboraciones teóricas como la hipótesis de la “frustración-agresión” desarrollada junto a otros por John Dollard (1939), “la curva en J” de James C. Davies (1962) o el concepto de “privación relativa” de Ted Robert Gurr (1970), que explican la violencia como resultado de la frustración provocada por las expectativas no satisfechas, debido a las limitaciones impuestas por el

entorno. Cuando las fallas entre deseos/aspiraciones y recompensas son leídas por los sujetos como *intolerables* tiene lugar un estallido de violencia.

Esta idea de violencia anómala o patológica subyace también a los enfoques estructural-funcionalistas de raíz parsoniana. Tales aproximaciones consideran la violencia una desviación del funcionamiento normal de los sistemas sociales. Bajo este paradigma, las sociedades son concebidas como organismos homeostáticos capaces de generar estabilidad mediante la actuación interdependiente de todas sus partes, adaptándose así al cambio de manera armónica. No hay lugar, en definitiva, para la violencia en política si no es, como argumenta Chalmers Johnson (1966: 81) en su estudio sobre las revoluciones, por causa de graves desequilibrios o disfunciones (axiológicas y ambientales) que han alterado la marcha y actividad ordenada del sistema:

[Ante un desequilibrio agudo del sistema social] se generan tensiones personales en todos los estratos de población. Dichas tensiones pueden ser controladas por algunas personas recurriendo a mecanismos internos de defensa psicológica, y los sentimientos alienantes de otros pueden ser disipados a través de un comportamiento desviado (como las fantasías, el crimen, la enfermedad mental o un mal psicossomático). Sin embargo, con el paso del tiempo, estos mecanismos tienden a perder su eficacia y las personas sujetas a muy diversos estatus de protesta comenzarán a unirse entre sí y a unirse también a aquéllos de conducta desviada, con lo que por lo general se formará un grupo o movimiento subcultural [predispuesto a la confrontación violenta] (cit. en González, 1994: 255).

Una de las máximas expresiones de este rechazo radical – en cuanto que desde la propia raíz – al tratamiento de la violencia como fenómeno consustancial al ejercicio de la política se encuentra en la obra de la filósofa alemana Hannah Arendt. En su ensayo *Sobre la violencia*, Arendt se desmarca del concepto de poder como relación de mando-obediencia, así como de la idea de violencia como una manifestación flagrante del mismo, vinculándolos con la tradición hebreo-cristiana. Frente a ésta, propone recuperar la herencia de las antiguas Grecia y Roma, los conceptos de *isonomía* y *civitas*, impulsando una idea de poder basada en el consentimiento y la concertación: “Poder corresponde a la capacidad humana no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente” (Arendt, 2005: 60). De esta noción de poder sustentada en el consenso frente a la coacción, se colige la tesis central de su libro, según la cual la violencia es entendida como fenómeno antitético al poder: “Políticamente hablando es insuficiente decir que poder y violencia no son la misma cosa. El poder y la violencia

son opuestos; donde uno domina absolutamente, falta el otro (...). No es correcto pensar que lo opuesto a la violencia es la no violencia; hablar de un poder no violento constituye en realidad una redundancia” (Arendt, 2005: 77). La actividad política y el ejercicio del poder quedan así plenamente desvinculados de la violencia, considerada ilegítima en todo caso y circunstancia por la autora, quien nos alerta además sobre los terribles riesgos de la sustitución de los primeros por la segunda.

En conclusión, y como hemos podido constatar a lo largo del breve recorrido realizado, el debate teórico sobre el papel de la violencia en la esfera política se halla lejos de alcanzar el consenso, repleto por el contrario de posiciones enfrentadas y argumentos rivales. En lo que respecta al presente estudio, y aun reconociendo que en el mundo real “las condiciones contingentes e inherentes se encuentran en buena medida entrelazadas” (Conteh-Morgan, 2004: 14), nos situaremos en el segmento del eje que se orienta hacia la inherencia. Nos distanciamos, así, de las aproximaciones que abordan la violencia política en términos de conducta irracional, caótica o anómala; de hecho, según señalaba Norbert Elías (1994), tal vez lo verdaderamente insólito no sea la violencia, sino la convivencia pacífica de tantos millones de personas. Por ello, la violencia será aquí analizada como parte integrante – aunque extrema e indeseable – del transcurso de la actividad política, derivada de los conflictos existentes en el seno de las sociedades y vinculada al ejercicio y la lucha por el poder. En definitiva, coincidimos con González Calleja (2002: 538) al afirmar que “la violencia no es un acontecimiento anómico, excepcional o patológico de la vida política, sino que, como todo comportamiento y relación social, obedece a unas motivaciones, sigue unas determinadas reglas de desarrollo y persigue unos fines concretos”. Establecidos así los postulados generales bajo los que se desarrollará esta investigación en torno a la violencia política, a continuación propondremos una definición que nos ayude a esclarecer el contenido específico de tal concepto.

### **1.1.2. Hacia una definición de la violencia política**

Enunciar una definición de la violencia política no es tarea sencilla. Se trata de un concepto multívoco que alude a realidades tan disímiles como los tumultos, las guerras o los actos de terrorismo, por lo que la literatura ha desarrollado un sinnúmero de aproximaciones a dicho término. Asimismo, la ya señalada multiplicidad de enfoques en el estudio de la relación existente entre política y violencia contribuye también a

explicar la proliferación de conceptualizaciones. La definición de la violencia dependerá en buena medida del actor que la formule, de sus propósitos, del contexto en que haga uso del término y de su relación con el poder establecido (Aróstegui, 1994: 42). Así, la dificultad para sustraerse a la propia mirada del investigador que caracteriza a las ciencias sociales se vuelve aún mayor al abordar un fenómeno como la violencia, capaz de levantar fuertes pasiones y generar sentimientos encontrados. Tales complicaciones se unen, además, a la posición que la violencia ocupa como objeto de análisis científico. Muchas veces desdeñado y relegado a segundo término, cuenta por ello con un desarrollo teórico desigual y sujeto a mayor disputa e imprecisiones que otras áreas temáticas. Esta ubicación de la violencia en los márgenes de los ámbitos analíticos dominantes en la Ciencia Política y la Sociología es referida del siguiente modo por Donatella Della Porta (1995: 2):

Mientras que los académicos que trabajan en cuestiones tales como partidos, grupos de interés, gobiernos o administración pública pueden apoyarse en conceptos relativamente bien definidos y elegir entre teorías ya formuladas, los científicos sociales que desean centrarse en la violencia política necesitan, antes de nada, una definición de violencia política *per se*.

En definitiva, el primer obstáculo con el que se encuentra un investigador a la hora de abordar la cuestión de la violencia política es la propia formulación del término. Se trata, sin embargo, de una labor que no puede ser sorteada o pospuesta, ya que la comprensión del fenómeno y el avance en su investigación dependerán en buena medida de una adecuada concreción del campo de estudio abordado. Conscientes de las dificultades expuestas, no aspiramos aquí a encontrar una formulación de la violencia política con validez universal; de hecho, objeto de polémica, su naturaleza y definición serán probablemente siempre contestadas. El propósito de las líneas que siguen será más bien delimitar los fenómenos sociales entendidos bajo la rúbrica de la violencia política a lo largo del presente estudio. Trataremos de aprehender sus elementos diferenciales y perfilar el concepto de manera precisa, discriminatoria y operativa para el análisis empírico. Desde nuestra óptica, la amplitud excesiva del concepto termina por convertirse en inversamente proporcional a su capacidad explicativa. Indudablemente, si *todo* es violencia, la violencia termina por no ser *nada*. Nos desmarcamos, así, de las denominadas definiciones “extensivas” o “estructurales” de la violencia, que la equiparan con conceptos tales como la injusticia, la pobreza, la explotación o la desigualdad, en la línea de autores entre los que destaca Johan Galtung (1969).

Concordamos, por tanto, con Tilly (2007b: 4) cuando afirma que “ampliar el término «violencia» hasta abarcar todas las relaciones interpersonales y acciones individuales que desaprobamos perjudica de hecho a los esfuerzos por explicar la violencia”. De este modo, señalaremos una serie de rasgos y elementos constitutivos de la violencia política que nos permiten diferenciarla de otras formas de violencia existentes en la sociedad, como la violencia de carácter delictivo o criminal. Así, nuestra definición se caracterizará por la presencia ineludible de las siguientes propiedades: su naturaleza relacional, su referencia al daño físico, su componente de voluntariedad y su vinculación a motivaciones de carácter político. La confluencia de tales elementos definirá un hecho social dado como susceptible de ser calificado bajo la etiqueta de “violencia política”.

El primero de los elementos señalados, a saber, su carácter relacional, nos acerca a la interpretación de la misma como forma de interacción social. La violencia política no es, como ya apuntamos en el epígrafe precedente, una aberración o ruptura de todo vínculo social; “la violencia no puede interpretarse nunca como falta de comunicación, sino como un modo especial de intercambio social” (González Calleja, 2002: 44). Esta perspectiva se sitúa en la senda de lo que González Calleja (2002) denomina “definiciones relacionales” de la violencia, de las que Charles Tilly es uno de los principales impulsores. Bajo este enfoque, la violencia es vista como una forma específica de interlocución en la que se transmite un cierto mensaje, una interacción entre dos sujetos – la víctima y el victimario –, “un tipo de conversación, por muy brutal o parcial que esta pueda ser” (Tilly, 2007b: 6).

Los actores partícipes en este tipo de relación social pueden ser de muy diversa índole, incluyendo no sólo a distintos segmentos de la ciudadanía, sino también al propio Estado. Esta afirmación supone un claro distanciamiento respecto a planteamientos de carácter “legitimista” en la aproximación a la violencia política. De acuerdo con González Calleja (2002), dicho enfoque parte de la diferenciación entre la violencia surgida desde la sociedad civil y orientada a la transformación del orden social existente, y aquella desplegada por el Estado con el propósito fundamental de preservar el *statu quo*. Desde una perspectiva legitimista, el primer caso estaría referido al ejercicio de la “violencia”, mientras que el segundo aludiría al uso de la “fuerza”. Sin embargo, aquí consideraremos la represión estatal como una forma o proceso de violencia política (González Calleja, 2002; 2012), cuestionando aquellas formulaciones



que tratan de excluir a la coacción del Estado del ámbito de aplicación de este término<sup>8</sup>. Aróstegui (1994: 44) expresará con firmeza tal posición al afirmar:

La equiparación de violencia política simplemente con las formas de la rebelión, con la acción violenta de abajo-arriba, de la ruptura del orden establecido por parte de los grupos sometidos frente a los dominantes es escasamente satisfactoria y priva a cualquier teoría de la violencia, y de la violencia política en particular, de partes importantes de su significación. Equiparar violencia política únicamente a manifestaciones tales como terrorismo, guerrilla, formas diversas de lucha armada, como acostumbra a hacerse con frecuencia desde ciertos enfoques es, simplemente, una manipulación con fines políticos que no puede ser seriamente aceptada.

Este tipo de definiciones se asientan sobre la asignación de un carácter legítimo a ciertos actos – susceptibles por tanto de ser catalogados como fuerza – frente a otros – considerados por ello violentos –. Sin embargo, atribuir tal cualidad encierra enormes complicaciones, en buena medida infranqueables, que convierten a éste en un criterio inadecuado de clasificación. Así, el juicio sobre la legitimidad de una acción determinada puede resultar objeto de disputa, variando en función de los ojos y las lentes que la sometan a juicio. Como subraya Charles Tilly (2007b: 26-27), “¿dónde exactamente, en ese continuo, podríamos situar en términos razonables una frontera sólida entre la fuerza legítima y la violencia ilegítima? ¿Desde la perspectiva de quién?”.

La generación de daños físicos sobre bienes o personas es el segundo de los componentes de nuestra definición de violencia política. Este elemento nos permite discriminar nuestro objeto de estudio respecto de la violencia estrictamente discursiva, puesto que, como advierte Paul Wilkinson (1986: 24), es de vital importancia a la hora de llevar a cabo una investigación “distinguir claramente entre violencia física y retórica agresiva y emotiva”. Asimismo, la alusión explícita a la provocación de daños personales o materiales nos separa de conceptos tales como el de violencia simbólica (Pierre Bourdieu) o estructural (Johan Galtung), que caerán fuera del foco central de nuestra investigación. Prestaremos atención, en definitiva, únicamente a aquellas manifestaciones que conlleven el ejercicio de la fuerza física y la producción de daños

---

<sup>8</sup> González Calleja (2002: 537) considera que “caben fundadas sospechas de que las diferentes teorías estén abocadas a incidir sobre unos tipos determinados de violencia colectiva (en general, la violencia subversiva) con preferencia a otros, como por ejemplo la violencia estatal”.

sobre terceros<sup>9</sup>. Donatella Della Porta (1995: 2-3) advierte de las posibles dificultades en la operacionalización de esta dimensión de la violencia. Así, señala cómo diversas formas de acción colectiva generalmente no consideradas violentas implican en la práctica un cierto uso de la fuerza física, y cómo toda acción contenciosa busca, en último término, generar un daño sobre el adversario político – pone como ejemplo el caso de los piquetes de huelga –. La interpretación de dichas acciones como violentas dependerá en gran medida de las normas y valores mayoritarios en el seno de una sociedad dada. La autora incide, por ello, en el componente histórico y cultural del contenido del término, concluyendo que la violencia política es “un repertorio particular de acción colectiva, que implica fuerza física considerada ilegítima en un momento determinado por la cultura dominante” (Della Porta, 1995: 3-4).

Ese daño físico sobre personas o bienes materiales ha de tener un carácter intencional para ser catalogado como ejercicio de violencia. Un acto será por tanto violento si se produce a resultas de un intento deliberado de infligir tal daño (Kalyvas, 2006: 19), si existe un “vínculo reflexivo entre agente y paciente” (González Calleja, 2002: 40). Quedan así excluidas circunstancias de carácter accidental o indeseado que no responden a un cálculo intencional por parte de un agresor<sup>10</sup>. Este componente de voluntariedad de la acción violenta no excluye la posibilidad de efectos inesperados consecuencia de la misma. Como apunta Kalyvas (2006: 20), “las víctimas violentas pueden ser también no intencionales, las denominadas daños colaterales”. En este sentido, Wilkinson (1986: 30) definirá la violencia política como el acto de “infligir deliberadamente, o amenazar con hacerlo, lesiones o daños físicos con objetivos políticos, o aquella violencia que ocurre de manera no intencionada en el curso de conflictos políticos severos”. En el trabajo que nos ocupa consideraremos violenta toda acción orientada a provocar daños sobre personas y propiedades de manera

---

<sup>9</sup> El daño físico infligido por un acto de violencia puede adoptar formas muy diversas no siempre fácilmente observables. Así lo advierte Weinstein (2007: 200) en su estudio sobre las rebeliones, pudiendo aplicarse dicha cautela también al análisis de la violencia estatal: “Las matanzas son eventos bien definidos relativamente fáciles de identificar y contar. Pero los rebeldes perpetrar también otras formas de abuso que incluyen golpear a no combatientes, la violación de mujeres y niños, el secuestro, los desplazamientos y trabajo forzosos, los saqueos y la destrucción”. Si bien es cierto que aquí reconocemos como violentos los hechos enumerados, asumimos también las dificultades en el registro de algunos de ellos, especialmente en lo que respecta a las bases de datos existentes para el análisis estadístico de los casos.

<sup>10</sup> González Calleja (2002: 40) menciona como ejemplos de esta circunstancia a las víctimas de una catástrofe natural, de una avalancha humana o de un accidente de tráfico, casos todos en que falta la figura del ejecutor o instigador.

premeditada, consciente e intencional, con independencia de que éstos diverjan en la práctica de los destinatarios previstos o trasciendan la magnitud esperada.

El último componente de nuestra definición hace referencia a la búsqueda de objetivos de carácter político. Como ya mencionamos anteriormente, excluimos de nuestros análisis a aquellos actos de violencia cuyas motivaciones no se encuentran vinculadas a propósitos de tal tipo, como es el caso de la violencia criminal. Conviene aquí reseñar las dificultades que en muchos casos presenta el examen de la realidad a la hora de establecer una frontera nítida entre la violencia política y la violencia *común*<sup>11</sup>. Los contornos de ambas resultan con frecuencia difusos, pudiendo hallarse una mezcla o solapamiento de actividades políticas y criminales difíciles de discernir. Así lo constata Peter Waldmann (1992a: 140) al analizar la violencia política organizada en América Latina:

Se trata de la desaparición de los límites entre la criminalidad común, rebelión social y violencia política en el sentido más estrecho de la palabra (...). En consecuencia, las nociones correspondientes tienen una cierta arbitrariedad. Además, suele suceder que el mismo grupo armado se presenta y se articula a veces como movimiento político y otras como banda criminal sin metas socio-políticas.

Pese a los retos que dicha situación plantea para la catalogación de un fenómeno como violencia política, en este trabajo de investigación consideraremos como tal a aquél en el que los objetivos declarados por parte del grupo perpetrador respondan a motivaciones políticas, adoptando no obstante las cautelas necesarias derivadas de la posible existencia de intenciones veladas y superposición de prácticas políticas y delincuenciales.

Esta pretensión de conquista de metas políticas a través del ejercicio de la violencia supone la atribución de un carácter instrumental a la misma. La violencia política pretende, así, incidir en la realidad social, ya sea para su transformación, ya sea para garantizar el mantenimiento de la situación vigente. Esta visión estratégica del uso de la violencia – sin menoscabo de su posible contenido expresivo como manifestación de descontento, indignación o rechazo – se aparta de su concepción en términos de

---

<sup>11</sup> Este debate ha sido objeto de desarrollo por la literatura en torno a guerras civiles bajo la distinción de “greed *versus* grievances” (Collier y Hoeffler, 2004) o “greed *versus* creed” (DeRouen y Sobek, 2004) como motivadores de los enfrentamientos armados. De acuerdo con Grossman (1999: 269), cuando la insurrección es concebida como una actividad económica en la que se compite por la producción y el consumo de bienes escasos, “los insurgentes son indistinguibles de bandidos o piratas”.

conducta irracional y la presenta como orientada a la consecución de ciertos fines. Por ello, como ya vimos al analizar el denominado enfoque de la inherencia, buena parte de la literatura ha catalogado la violencia como uno de los repertorios posibles de la contienda política. Bajo esta perspectiva, la violencia se presenta como una forma de acción política frente a otras vías alternativas de participación, institucionales o extrainstitucionales, convencionales o no, en las que se excluye el empleo de la fuerza física (Della Porta, 1995; González Calleja, 2002; Tilly, 2007b; Tarrow, 2009).

A la luz de lo visto en las páginas previas, concluimos definiendo la violencia política como una forma de interacción social a resultas de la cual se inflige daño físico de manera deliberada sobre bienes o personas, con el objetivo de alcanzar determinadas metas de carácter político. Esta definición aspira a ser suficientemente específica como para discriminar la violencia política frente a otros tipos de fenómenos sociales, pero suficientemente amplia como para englobar las múltiples y variadas manifestaciones existentes de la misma (v.g. guerras civiles, represión estatal, terrorismo, tumultos, etc.). En el siguiente apartado situaremos la lente de nuestra lupa sobre las expresiones concretas de la violencia política objeto de observación en este estudio.

## **1.2. VIOLENCIA POLÍTICA Y ACTORES COLECTIVOS**

La violencia política puede ser ejercida por una gran variedad de actores y, como ya hemos mencionado, adoptar formas muy heterogéneas. Esta amplitud del abanico de manifestaciones posibles hace necesario un esfuerzo de concreción a la hora de precisar cuál será el ámbito específico de la investigación. Por este motivo, esta sección estará orientada a determinar qué tipo de actores centrarán las pesquisas de nuestro estudio y quiénes configurarán nuestra variable dependiente dentro del extenso campo de la violencia política. Para ello es imprescindible hacer explícitos los criterios básicos de selección o condiciones *sine qua non* que habrán de reunir todas aquellas expresiones de violencia contempladas por el presente análisis. Estos requisitos pueden ser sintetizados inicialmente en tres grandes rasgos. Así, las expresiones de violencia política sometidas a examen tendrán un carácter *colectivo, organizado y dirigido contra el Estado*<sup>12</sup>. Nos adentramos, por tanto, en el terreno de la acción colectiva de carácter transgresivo,

---

<sup>12</sup> Tal vez habría que decir, más específicamente, contra quienes ocupan el poder del Estado. No obstante, la expresión “violencia contra el Estado” será, por su mayor sencillez expositiva, la que predomine a lo largo de este trabajo de investigación.

circunscribiendo nuestra mirada a un tipo de violencia que puede, a su vez, mostrar muy diversas caras. Por ello, a lo largo de las líneas que siguen nos introduciremos en el debate teórico sobre la naturaleza, estrategias y principales formas de organización de los actores detentadores de las características descritas. Para concluir, plantearemos una propuesta tipológica de la violencia que nos permitirá delimitar con claridad nuestro objeto de investigación, ubicándonos dentro del complejo mapa de la violencia política a través de la adopción de un enfoque clasificador proyectado desde los actores.

### **1.2.1. Guerras civiles, guerrillas, terrorismo o un debate teórico inconcluso**

En su obra *From mobilization to revolution*, Charles Tilly (1978: 5) definía el estudio de la acción colectiva como una “aventura arriesgada”. Tales riesgos, continuaba, derivan de la propia naturaleza de la acción colectiva, en la medida en que “trata del poder y la política, e inevitablemente plantea preguntas sobre lo correcto o lo incorrecto, la justicia y la injusticia, la esperanza y la desesperación”. Estas dificultades se tornan aún mayores cuando nos enfrentemos al análisis de la acción colectiva de carácter violento. Entonces, los consensos teóricos disminuyen e incrementan las disputas entre las diferentes lecturas e interpretaciones del fenómeno. Por ello, y como constataremos a continuación, el debate académico en torno a las diferentes estrategias y manifestaciones de esta forma de contienda política es, de algún modo, un debate todavía inconcluso.

Retomando lo expuesto en párrafos anteriores, decíamos que el presente estudio tiene por objeto, específicamente, la violencia colectiva organizada contra el poder del Estado. Sin embargo, tal acotación no parece remitirnos a un único fenómeno, sino que evoca al menos tres términos distintos que pueden acudir, confusos, a nuestra memoria: terrorismo, guerrilla y guerra civil<sup>13</sup>. Estos conceptos se han asociado, generalmente, a los criterios de selección prefijados, siendo así susceptibles de convertirse en objeto de nuestro análisis. Pero al recurrir a la literatura tratando de aclarar cuál es el contenido exacto de tales términos, encontramos un laberinto de definiciones del que resulta difícil encontrar la salida.

---

<sup>13</sup> Podría argumentarse la existencia de otras manifestaciones de la violencia que se acomodan igualmente a la descripción aquí detallada, fundamentalmente los golpes de Estado y las revoluciones. En el siguiente apartado justificaremos los motivos de su exclusión.

Lo primero que constatamos es una presencia más que notable de categorizaciones basadas en fuertes juicios de valor, fundamentalmente en lo que respecta a la distinción teórica entre los conceptos de terrorismo y guerrilla. Aquél es empleado en numerosas ocasiones para designar, por oposición a éste, el ejercicio de la violencia colectiva que se considera ilegítimo, injusto o condenable. Se convierte entonces en un arma política arrojadiza que pretende desacreditar a ciertos grupos y causas frente a otros, en “un vehículo para atacar verbalmente a los enemigos, para juzgar a los rivales o para conseguir algunos puntos de propaganda frente al lado opuesto” (Conteh-Morgan, 2004: 254). Este componente de subjetividad es el que subyace a la ya tan manida expresión “el terrorista para unos, es un luchador por la libertad para otros”. Sin embargo, formulaciones como ésta encierran no sólo un fuerte relativismo, sino además, como señala Boaz Ganor (2002), una clara confusión entre medios y fines que poco ayuda a esclarecer el significado del término<sup>14</sup>. Sería preciso, por tanto, fijar un criterio objetivo que nos ayude a establecer una distinción conceptual nítida entre estos tipos de actividad armada contra el Estado. Ganor (2002) insiste en que la búsqueda de esa objetividad conceptual no actúa en menoscabo del establecimiento de diferenciaciones morales o éticas entre terrorismo y guerrilla, sino que pretende, más bien, que éstas se apoyen en clasificaciones claras de ambos fenómenos. Diversos autores se han embarcado en esta difícil tarea, conscientes de que la subjetividad y la militancia política han supuesto con frecuencia una venda en los ojos de académicos y gobernantes que ha impedido analizar la realidad de manera exhaustiva.

Una de las líneas de desarrollo teórico que ha adquirido una mayor relevancia a la hora de establecer las características diferenciales entre organizaciones terroristas y guerrilleras es aquella que pone el acento en la naturaleza de las víctimas de sus acciones. De este modo, y en términos generales, aquellos actos violentos dirigidos contra civiles serían catalogados como actos terroristas, mientras que los que tienen a las fuerzas armadas como destinatarios de los ataques, responderían al apelativo de guerrilleros (Ganor, 2002; Black, 2004; Goodwin, 2006). Los segundos mostrarían, así, un mayor respeto por las normas y leyes que rigen los conflictos armados, referidas fundamentalmente al trato de los prisioneros y a los derechos de los no-combatientes;

---

<sup>14</sup> De acuerdo con Ganor (2002: 297), un guerrillero y un terrorista podrían compartir exactamente los mismos objetivos políticos, optando, no obstante, por estrategias diferentes para alcanzarlos.

por el contrario, los primeros harían gala de una total inobservancia de los principios recogidos en las Convenciones de Ginebra y la Haya (Wilkinson, 1986: 54-55; Ganor, 2002; Schmid, 2004: 202-205). Asimismo, cada uno de estos tipos de violencia se ha asociado a diferentes *modus operandi* que guardan una estrecha relación con el carácter de las víctimas de las acciones. Las guerrillas se vincularían a combates irregulares contra las tropas del ejército mediante emboscadas, escaramuzas y ataques relámpago (tácticas de *hit-and-run*), frente al terrorismo ligado más bien a acciones tales como la explosión de artefactos bomba, el secuestro, el robo o la extorsión (De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011b: 455).

Este tipo de definiciones, basadas en la víctima de las acciones armadas, no ha estado tampoco exento de polémica. Así, son diversos los “apellidos” (inocentes, no-combatientes, desarmados, etc.) que se han incorporado al término “civiles”, pretendiendo excluir o incluir determinados grupos sociales dentro los potenciales afectados por ofensivas consideradas terroristas. ¿Sería un ataque a un policía un acto de terrorismo? ¿Y a un miembro del gobierno? ¿Tendrían entonces tales incidentes la misma denominación que un ataque, pongamos por caso, en un colegio o centro comercial? O, de acuerdo con la pregunta formulada por De la Calle y Sánchez-Cuenca (2011b: 452), “¿podríamos decir que el ataque contra el WTC fue terrorista porque se dirigió contra civiles, mientras que el ataque al Pentágono no lo fue porque se dirigió contra el principal símbolo del ejército de EEUU?”. La respuesta a dichos interrogantes no es, en ningún caso, sencilla. En este sentido, Jeff Goodwin (2006) distinguirá entre dos posibles manifestaciones del terrorismo: selectivo/individualizado *versus* indiscriminado/categorico. El primero se dirige contra individuos concretos en virtud de su ocupación, cargo o identidad específica, mientras que el segundo tendrá como víctimas a miembros anónimos de un determinado grupo étnico, religioso o nacional, más allá de sus identidades o roles sociales. El carácter “indiscriminado”<sup>15</sup> de este segundo tipo de violencia es precisamente, para muchos observadores, lo que define la propia esencia del terrorismo.

---

<sup>15</sup> En realidad, Goodwin (2006: 2036-2037) matizará este carácter indiscriminado de los ataques del terrorismo categorico a través del término “civiles cómplices”. De acuerdo con el citado autor, “los revolucionarios no atacan de manera indiscriminada simplemente a *cualquier* civil o no combatiente”, sino que existe una construcción social y asignación de culpa previas sobre sus enemigos, a quienes atribuyen beneficios de las acciones gubernamentales, apoyo a las mismas o capacidad de influencia directa sobre el Estado.

La naturaleza impredecible y arbitraria del terrorismo deriva en un clima de miedo, inquietud y alarma entre los miembros de la comunidad atacada, utilizado como herramienta de presión para la consecución de metas políticas; el terrorismo es, desde esta óptica, una “técnica de guerra psicológica” (Wilkinson, 1986: 51). Así, Schmid y Jongman (2005: 28) lo definirán como un “método generador de ansiedad a través de la acción violenta reiterada”, destacando la particularidad de que las víctimas de las acciones terroristas no son en realidad sus principales destinatarios. A diferencia de lo que sucede en la actividad guerrillera, en la que se atacan directamente a estructuras y miembros del Estado contra el que se libra la lucha armada, el “terrorismo renuncia de antemano a poder competir con el Estado a nivel militar, [y] en lugar de ello confía en el efecto psíquico de sus acciones violentas” (Waldmann, 1992b: 277). En este sentido, Martha Crenshaw (1981: 379) subraya el escaso valor intrínseco que las víctimas de los ataques tienen para el grupo terrorista, quien se dirige en realidad a una “audiencia” más amplia a la que se transmite un cierto mensaje político y en la que se espera provocar una reacción en pro de determinados objetivos<sup>16</sup>. El componente simbólico y comunicativo del terrorismo, la idea de “terrorismo como teatro”<sup>17</sup> (Jenkins, 1974), se convierte, bajo esta perspectiva, en una consideración clave para entender el fenómeno.

La literatura referida hasta el momento pone el acento, como hemos visto, en la naturaleza de las acciones violentas y sus destinatarios a la hora de establecer la distinción entre terrorismo y guerrilla. Sin embargo, diversos autores han enfatizado en sus trabajos la importancia de tomar en consideración los recursos y características de los propios grupos armados. Así, de acuerdo con De la Calle y Sánchez-Cuenca (2011b), frente a las definiciones de terrorismo basadas en la acción – *the action-sense of terrorism* –, donde la unidad de análisis es el ataque, encontramos aquellas construidas sobre los actores – *the actor-sense of terrorism* –, donde el foco radica en la organización armada. Desde esta perspectiva, y aunque pudiera parecer tautológico, será terrorismo toda aquella acción violenta llevada a cabo por un grupo terrorista, por lo que la catalogación de las organizaciones como tales se convierte en una cuestión clave.

---

<sup>16</sup> Esta idea nos evoca al concepto anarquista de la “propaganda por el hecho”. La célebre sentencia formulada por Kropotkin en su artículo *El Espíritu de la Revuelta* de 1880, es una clara expresión de tal estrategia: “Mediante acciones que atraen la atención general, la nueva idea se filtra en las mentes de las gentes y gana adeptos. Un acto puede, en unos pocos días, hacer más propaganda que miles de panfletos”.

<sup>17</sup> De acuerdo con Jenkins (1974: 4), “los ataques terroristas son a menudo cuidadosamente coreografiados para atraer la atención de los medios y la prensa internacional (...). El terrorismo se dirige a la gente que mira, no a las propias víctimas”.



La dimensión de clandestinidad y subrepción de los entramados terroristas ha sido generalmente considerada un elemento determinante en este sentido. Donatella Della Porta definirá el terrorismo como “la acción de organizaciones políticas clandestinas, de pequeñas dimensiones, que tratan de alcanzar metas políticas a través del uso continuo y casi exclusivo de formas violentas de actuación” (cit. en Schmid y Jongman, 2005: 37). El carácter minoritario y encubierto de estas organizaciones, en contraposición al mayor tamaño y a la lucha abierta desarrollada por los grupos guerrilleros, así como las restricciones al reclutamiento y a la acción impuestas por su carácter secreto, son centrales para este tipo de definiciones (De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011b: 459).

Junto a dichas cuestiones, la capacidad de controlar el territorio ha sido también estimado uno de los elementos fundamentales para el análisis (Merari, 1993; Sánchez-Cuenca, 2009; Sánchez-Cuenca y De la Calle, 2009; De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011a; 2011b). Según este enfoque, los repertorios de acción violenta y la opción por una estrategia guerrillera o terrorista estarán vinculados en gran medida a la capacidad o no de control territorial por parte de las organizaciones:

Cuando los insurgentes son capaces de controlar el territorio, están mejor equipados para proceder con la típica guerra de guerrillas contra el Estado. Por el contrario, si los insurgentes no liberan territorio de las manos del Estado, deben permanecer en la clandestinidad, y por lo tanto no pueden sino apoyarse en ataques que la mayor parte de la gente identificaría como terroristas (De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011a: 2).

La base territorial de los grupos armados y el potencial de dominio que éstos tienen sobre la misma<sup>18</sup> se interpreta, por tanto, como un elemento esencial configurador tanto de la estructura organizativa adoptada, como del tipo de actuaciones llevadas a cabo. Esta importancia del control del territorio deriva, según Sánchez-Cuenca (2009: 14), de su capacidad para proporcionar a la organización seguridad, logística e infraestructuras, así como para servir de escenario facilitador de las interacciones y vínculos con la población local que lo habita.

---

<sup>18</sup> Conscientes de las posibles ambigüedades que pueden derivarse de la idea de control del territorio, los citados autores señalarán tres requisitos de los cuales las organizaciones habrán de cumplir al menos uno para encontrarse en situación de control territorial: 1) levantamiento de campos o bases de operaciones dentro del territorio estatal; 2) establecimiento de controles de carretera estables que impiden el tráfico normal de personas o mercancías; 3) ejercicio del gobierno como nueva autoridad local en las zonas bajo su dominio (De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011b: 458).

De las afirmaciones expuestas no puede colegirse, no obstante, que la cuestión del territorio sea determinante único de la estrategia armada de acuerdo con este enfoque. Existen también otros factores vinculados a los actores y relevantes para la elección de sus formas de lucha, tales como la competición entre diferentes grupos armados y los bienes en manos de las organizaciones (De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011b: 464). Ésta última será, precisamente, la tesis central de Weinstein (2007) en su análisis de las rebeliones internas, donde destaca el papel de los recursos materiales a disposición de los líderes rebeldes en las fases iniciales del conflicto. El autor argumenta que esta cuestión será fundamental para la caracterización del perfil de la membresía de las organizaciones – vía incentivos para la participación derivados del cálculo de costes/beneficios – y de las propias estrategias de violencia que ponen en práctica durante el enfrentamiento armado – vía estructuras de control y disciplina interna –<sup>19</sup>. El énfasis en el análisis de la violencia es aquí desplazado, en resumidas cuentas, sobre los grupos armados y sus principales rasgos constitutivos<sup>20</sup>.

Por último, mencionábamos al inicio del presente apartado un tercer concepto que, junto a terrorismo y guerrilla, se asocia a la idea de violencia colectiva desafiadora del poder del Estado: la guerra civil. Existe también una disputa académica por dotar de contenido específico a dicho término, siendo muy diversas las respuestas dadas a la pregunta formulada por Sambanis (2004: 816): “¿Cómo reconoceríamos una guerra civil si la viésemos?”. Sin embargo durante los últimos años se ha alcanzado un cierto nivel de consenso en la caracterización de este concepto, fundamentalmente desde los estudios de carácter empírico y cuantitativo (Singer y Small, 1972; 1982; Doyle y Sambanis, 2000; Gleditsch et al., 2002; Fearon y Laitin, 2003b; Collier y Hoeffler, 2004; Sambanis, 2004)<sup>21</sup>. Desde esta perspectiva, las guerras civiles han sido definidas

---

<sup>19</sup> El autor sostiene que los grupos rebeldes surgidos en entornos ricos en recursos naturales tienden a cometer altos niveles de violencia indiscriminada, en lo que él llama “rebeliones oportunistas”. Por el contrario, aquellos movimientos que se desarrollan en contextos más pobres tienden a emplear la violencia selectiva, en el marco de las denominadas “rebeliones activistas”.

<sup>20</sup> Si bien hemos hecho alusión a los que consideramos los elementos distintivos entre terrorismo y guerrilla más destacados en la literatura, lo cierto es que se han señalado muchos otros componentes discriminantes de ambas manifestaciones de la violencia. Así, Merari (1993) citará junto a las víctimas, las tácticas y el control territorial, cuestiones entre las que se encuentran el tamaño de las organizaciones, el tipo de armas empleado, el uso de uniforme o el reconocimiento de zonas de guerra, al tiempo que Waldmann (1992b) incorpora aspectos como el grado de apoyo social o la posibilidad de conquista del poder político.

<sup>21</sup> Es preciso destacar, por su relevancia, el denominado *Correlates of War Project (COW)*. Fundado por David J. Singer en la Universidad de Michigan en 1963, tiene como objetivo la acumulación de

como la confluencia – aunque con ciertas variaciones – de al menos tres componentes básicos que detallaremos a continuación.

En primer lugar, y por lo que respecta a los actores implicados, el concepto de guerra civil aparece asociado a la lucha armada, en el interior de las fronteras de un país, entre agentes del Estado y grupos opositores no estatales que aspiran a la consecución de ciertos objetivos políticos<sup>22</sup> – sean éstos bien la toma del gobierno o el control de determinadas regiones del país, bien la alteración de políticas gubernamentales (Fearon y Laitin, 2003b: 76) –. El carácter doméstico del conflicto – Kalyvas (2006; 2007) afirma que, de hecho, *guerra interna* sería un término más preciso – lo distingue tanto de las guerras interestatales como de las denominadas guerras extraestatales<sup>23</sup>, pues se trata “de un combate armado librado, dentro de las fronteras de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad común al inicio de las hostilidades” (Kalyvas, 2006: 17). Asimismo, la implicación activa del gobierno nacional en la contienda y la existencia de una oposición organizada con demandas de carácter político permiten aislar el concepto de guerra civil de fenómenos tales como los enfrentamientos privados vinculados a intereses particulares o los conflictos librados por el Estado contra bandas criminales – v.g. la llamada “guerra contra el narco” desarrollada en México desde 2006 –. Sin embargo, Peter Waldmann (1999) previene de las dificultades que, en ciertos casos, puede suponer la apreciación de quiénes son los auténticos contendientes en la disputa, fundamentalmente en lo que respecta a la

---

conocimiento científico e información sistemática sobre las guerras. El manual original *The wages of war*, publicado en 1972 por Singer y Small, estableció una definición estándar del concepto, sentando las bases para posteriores desarrollos e investigaciones de numerosos autores. La obra *Resort to war: 1816-2007*, recientemente publicada por Sarkees y Wayman (2010), ofrece una última actualización del proyecto (“COW Wars v.4.0., 1816-2007”). La amplia colección de datos que forma parte del *COW Project* se encuentra disponible en la página web: [www.correlatesofwar.org/](http://www.correlatesofwar.org/).

<sup>22</sup> Stathis Kalyvas (2001: 100) alude al frecuente empleo del término “nuevas guerras civiles” para calificar a los conflictos desarrollados tras la Guerra Fría e interpretados como “criminales, despolitizados, privados y predatorios”, frente a las “viejas guerras civiles” definidas como “ideológicas, políticas, colectivas, e incluso nobles”. El autor sostiene, no obstante, que tal distinción deriva en términos generales de una información sesgada e incompleta, así como de la ausencia de categorías teóricas adecuadas, y no de la existencia de diferencias sustanciales entre esos recientes conflictos armados y sus viejos predecesores. Autores clave en la formulación del concepto de “viejas y nuevas guerras” son, entre otros, Mary Kaldor (1999) y Herfried Münkler (2004). Asimismo, mencionamos con anterioridad el debate “greed *versus* grievance” (Collier y Hoeffler, 2004) y la concepción de las guerras civiles como pillaje y saqueo.

<sup>23</sup> El término “guerras extraestatales”, también llamadas “extrasistémicas”, alude al enfrentamiento bélico entre un Estado y un entidad política no estatal situada fuera de sus límites fronterizos (Sarkees y Wayman, 2010).

participación de fuerzas gubernamentales. Esto sucede especialmente, señala, en países donde los líderes políticos ejercen un escaso control sobre sus propias tropas y cuerpos de seguridad, o donde los bandos beligerantes alteran su perfil y objetivos durante la contienda. Habida cuenta de tales circunstancias, “¿cómo habría que juzgar, por ejemplo, una situación en la que las tropas gubernamentales regulares abjuraran del gobierno y persiguieran sus propias metas políticomilitares? ¿O una situación en que unas milicias surgidas «espontáneamente» de la sociedad pretendieran luchar por el Estado y el gobierno?” (Waldmann, 1999: 29). Dichas cuestiones suponen, sin lugar a dudas, un desafío de difícil abordaje para los estudiosos de las guerras civiles.

En segundo término, la literatura alude a la idea de conflicto armado de gran envergadura y capacidad destructora. Las guerras civiles se diferencian de estallidos violentos de menor intensidad y virulencia, así como de incidentes armados de carácter esporádico, constituyendo una expresión de la contienda de magnitud superior. Tal criterio se ha operacionalizado con frecuencia mediante el establecimiento de un umbral mínimo de víctimas mortales producidas como consecuencia del enfrentamiento bélico. Si bien es cierto que el umbral comúnmente aceptado, en la línea del *Correlates of War Project (COW)*, se sitúa en 1.000 víctimas, también lo es, como señala Sambanis (2004: 820), que no hay nada “inherentemente cierto” en esta convención dominante en la literatura. Por este motivo, existe un amplio debate sobre si las víctimas referidas han de ser producidas estrictamente en el campo de batalla o también a resultas de las hambrunas y enfermedades derivadas del conflicto; sobre si el umbral fijado ha de ser mayor o menor, anual o acumulado, de rango o de línea de corte; sobre si han de tenerse en cuenta criterios poblacionales en el establecimiento de tales límites, etc.<sup>24</sup>. En todo caso, sí hay un consenso a la hora de considerar la dimensión del conflicto y sus consecuencias devastadoras en términos de vidas humanas como rasgos constitutivos de esta expresión de la violencia política.

Finalmente, el concepto de guerra civil implica la presencia necesaria de una resistencia efectiva por ambas partes contendientes; la violencia en el curso del conflicto ha de ser, por tanto, recíproca. A menudo observamos situaciones de violencia caracterizadas por un fuerte desequilibrio entre los contendientes, situaciones en las que no puede hablarse de un verdadero enfrenamiento entre dos grupos, “ya que el riesgo de

---

<sup>24</sup> Para aproximarse a estas discusiones, remitimos a los autores y textos referidos más arriba, donde podrán encontrarse diversas propuestas alternativas a este respecto.

ser derrotado y morir se reparte de manera extremadamente desigual entre los bandos” (Waldmann, 1999: 28). Por ello, y de acuerdo con este criterio, los ataques – y las víctimas – habrán de proceder de ambos combatientes, excluyéndose de este modo los genocidios y las masacres en las que las víctimas mortales provienen únicamente de la facción más débil en términos de armamento, organización y recursos – generalmente la no estatal –. De nuevo aquí la literatura ha planteado diversos procedimientos para valorar el cumplimiento o no de este principio de resistencia efectiva y equilibrio relativo entre fuerzas. Citando algunos ejemplos relevantes, Fearon y Laitin (2003b) establecen como requisito que se produzcan al menos 100 víctimas mortales en cada una de las fuerzas en pugna, mientras que autores como Singer y Small (1982) o Collier y Hoeffler (2004) mantienen un criterio proporcional, señalando que el bando más fuerte habrá de sufrir al menos un 5% del total de las bajas del conflicto.

Este tipo de definiciones ha sido blanco de críticas que cuestionan el desplazamiento de ciertos elementos cualitativos esenciales para la aprehensión de las guerras civiles, tales como la implicación y compromiso de la población civil con cada uno de los bandos contendientes o la generación de discursos y construcción identitaria en torno a los mismos. En este sentido, y al analizar las causas de la violencia política, Wilkinson (1986: 34) lamentaba:

Muchas de las llamadas teorías de la violencia colectiva no resultan ser más que crudos modelos, planteando simplemente posibles relaciones entre variables (...), bien obviando totalmente, bien subestimando gravemente la influencia de diferentes ideologías, creencias y percepciones en la incitación al odio y la hostilidad y la instigación del conflicto político.

Desde esta óptica, si bien es cierto que las definiciones aquí referidas se adecuan a los principios de parsimonia, precisión y operatividad del concepto, tratándose de una herramienta útil para la selección y clasificación de los casos, resultaría también de crucial importancia incorporar en el análisis otros aspectos cualitativos para alcanzar una comprensión holística de este fenómeno violento.

En el breve itinerario realizado hasta el momento por las nociones de guerrilla, terrorismo y guerra civil, hemos podido constatar la existencia de posturas encontradas en un debate teórico todavía abierto. Asimismo, aunque generalmente abordados de manera separada por la literatura, tales conceptos mantienen entre sí múltiples lazos que difuminan en buena medida las fronteras levantadas entre ellos. Terrorismo y guerrilla

no son en la práctica estrategias de lucha completamente excluyentes, sino que diversos autores han señalado cómo ambas se superponen con frecuencia siendo combinadas por grupos armados que recurren a una u otra en distintos momentos en función de circunstancias diversas (v.g. Merari, 1993; Wilkinson, 2000: 14-16; Schmid y Jongman, 2005: 15-18; Goodwin, 2006: 2031; De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011b: 461). Del mismo modo, se ha señalado no sólo la asociación entre las guerras civiles y el empleo de la estrategia guerrillera por parte de los rebeldes, sino también cómo los actos de terrorismo no se encuentran exclusivamente limitados a los tiempos de paz. Así, en contextos bélicos algunos grupos armados harán uso de prácticas terroristas, dibujando un complejo mapa de interacciones entre ambos conceptos (v.g. Kalyvas, 2004; Schmid, 2004: 202-205; Sambanis, 2008; Findley y Young, 2012). Ante esta maraña terminológica, ¿cuál será la perspectiva adoptada por el presente estudio? El siguiente epígrafe tratará de dar respuesta a dicha cuestión.

### **1.2.2. Una propuesta tipológica de la violencia desde los actores. La insurgencia como concepto marco**

Esta investigación doctoral tiene por propósito, de acuerdo con lo previamente expuesto, estudiar la violencia política llevada a cabo por grupos armados que se oponen y desafían al poder del Estado. Tal objeto de estudio trasciende y engloba cada uno de los conceptos previamente analizados, a saber, terrorismo, guerrilla y guerra civil. El foco de nuestro análisis se sitúa, por tanto, sobre el ejercicio de la violencia organizada contra el orden estatal, más allá de las estrategias específicas adoptadas por las organizaciones rebeldes, más allá de la magnitud de la lucha librada y de la escala de violencia desplegada en el conflicto. Como indicábamos más arriba, dichas tácticas y escenarios se encuentran además en gran medida entrelazados si descendemos del plano teórico al terreno de la realidad. Por tales motivos, este trabajo quebranta las barreras levantadas entre los estudios rígidamente compartimentados que abordan unas y otras manifestaciones de la violencia. Existe una tendencia generalizada al desarrollo de análisis focalizados en literaturas monotemáticas que emplean vocabularios, técnicas y modelos teóricos completamente diferenciados para el análisis de fenómenos contenciosos que encierran, no obstante, similitudes y pautas compartidas (McAdam et al., 2001: 6). En este sentido, Sambanis (2004: 815-816) afirmará la conveniencia de cuestionar la estricta categorización de los eventos de violencia política, concluyendo que “puede ser difícil estudiar la guerra civil sin considerar cómo los grupos en

conflicto cambian de una forma de violencia a otra, pudiendo ser provechoso analizar la violencia política en agregado, más que seccionar ese complejo fenómeno social con definiciones arbitrarias”. Este estudio toma el testigo de tales reflexiones, observando grupos armados catalogados bien como guerrilleros bien como terroristas, que han combinado o no ambas formas de lucha y que desarrollan su actividad violenta en contextos tanto de paz como de guerra civil<sup>25</sup>. Analizaremos, en definitiva, aquellas organizaciones que deciden optar por la violencia como instrumento de acción política.

De dicho posicionamiento no se deduce, en ningún caso, que el debate previamente expuesto en torno a las distintas expresiones de la contienda violenta sea accesorio o irrelevante. Por el contrario, consideramos imprescindible el esfuerzo analítico en torno a las causas y características específicas de las diferentes estrategias de lucha – ya sean entendidas en términos de cualidad de los ataques o de los atacantes – seguidas por los grupos armados. Sin embargo, las cavilaciones sobre las particularidades de unas y otras no responden a los propósitos de la presente investigación. Por ello, haremos uso del concepto de insurgencia en cuanto que enmarcador de las diversas formas de violencia colectiva organizada contra el gobierno.

Numerosos trabajos han apuntado a la insurgencia como término comprehensivo de las distintas alternativas de enfrentamiento armado contra el Estado arriba exploradas (Waldmann, 1992b; Wilkinson, 2000: 1-17; González Calleja, 2002: 445 y ss.; De la Calle y Sánchez-Cuenca, 2011a). Sin embargo, aquí pondremos especial énfasis en el artículo de Ariel Merari (1993) publicado bajo el título “Terrorism as a strategy of insurgency”. En él, el autor realiza una interesante propuesta tipológica de la violencia motivada por aspiraciones políticas. Si bien es cierto que pueden encontrarse tantas taxonomías de la violencia como criterios posibles para su clasificación – en función de objetivos, ideología, volumen de participantes, contexto en que se desarrolla, etc. –, la planteada por Merari resulta especialmente oportuna y clarificadora para nuestro

---

<sup>25</sup> En realidad, otros trabajos han aplicado previamente este enfoque, si bien es cierto que sin hacerlo explícito y, en nuestra opinión, induciendo a error a través de la terminología empleada. Así, buena parte de los estudios apoyados en la *Global Terrorism Database* (GTD) (START, 2010a), mezclan en sus análisis grupos armados con diferentes perfiles estratégicos, así como conflictos de intensidad variable, todos ellos incluidos en el mencionado conjunto de datos. Sin embargo, y como le sucede a la propia GTD, han tendido a categorizarlos como “terroristas” sin realizar las matizaciones oportunas e incurriendo así en imprecisiones terminológicas. En el capítulo metodológico de esta tesis doctoral, retomaremos estas cuestiones al caracterizar esta fuente primordial de información sobre violencia política.

estudio, debido a la relevancia que concede a los *actores*, convertidos en criterio básico de clasificación. Guiado, según sus propias palabras, por los criterios de parsimonia y utilidad, presenta una tabla de doble entrada en la que ofrece una tipología básica de la violencia política mediante la puesta en relación del actor perpetrador de la acción violenta (Estado/ciudadanos) con la víctima o destinatario de la misma (Estado/ciudadanos). Basándonos en esta propuesta, aunque introduciendo ciertas modificaciones, hemos elaborado la siguiente clasificación<sup>26</sup>:

**Tabla 1.1.** Tipología de la violencia política

		OBJETIVO/DESTINATARIO	
		ESTADO	CIUDADANOS
INICIADOR/ DESAFIADOR	ESTADO	Guerras interestatales <i>[Golpes de Estado]</i>	Represión estatal <i>[Guerras extraestatales]</i>
	CIUDADANOS	<i>Violencia espontánea:</i> Motines, reyertas, tumultos  <i>Violencia organizada:</i> <b>Insurgencia</b> (Terrorismo, guerrilla) ↓ Guerras civiles	Vigilantismos (Linchamientos)

Elaboración propia, basada en la propuesta de Ariel Merari (1993: 218)

La apuesta de este trabajo por situar el foco del análisis de la violencia en los actores que la llevan a cabo hace de ésta una aproximación especialmente oportuna a sus diversas manifestaciones. Asimismo, permite observar con claridad cómo el cumplimiento de los requisitos de la violencia que señalábamos al comienzo de este apartado, es decir, su carácter colectivo, organizado y orientado contra el Estado, nos remite inmediatamente al concepto teórico de la insurgencia. Tales criterios nos permiten, en definitiva, discriminar los distintos tipos de violencia y excluir del análisis el resto de expresiones recogidas en la tipología aquí mostrada. En conclusión, y recapitulando lo hasta ahora visto:

<sup>26</sup> Para ver el esquema original planteado por Ariel Merari, remitimos al artículo anteriormente referenciado.



a. Los episodios de violencia analizados estarán protagonizados por *actores de carácter colectivo*. Todas aquellas acciones de violencia política llevadas a cabo de manera individual y aislada por sujetos que actúan en solitario, quedarán fuera de nuestro estudio. Del mismo modo, descartamos la violencia ejercida por el propio Estado contra sus ciudadanos – represión estatal –, contra otros Estados – guerras interestatales – o contra agentes no estatales en el extranjero – guerras extraestatales –. Ciertas expresiones colectivas de la violencia tales como los golpes de Estado o las conspiraciones y revueltas palaciegas serán también excluidas debido al carácter elitista y específico de los actores que las perpetrar. Se tratan, fundamentalmente, de miembros de las fuerzas armadas o agentes cercanos al poder y vinculados al propio aparato estatal, teniendo por tanto un encaje problemático en la categoría de “ciudadanos contra el Estado”. La revolución es también un concepto generalmente asociado a la violencia colectiva contra el poder vigente<sup>27</sup>. Sin embargo, desde nuestra óptica, dicho término hace referencia más al objetivo de transformación del orden existente y al empleo de procedimientos no reglados en la búsqueda del cambio político, que a las estrategias específicas adoptadas durante el combate<sup>28</sup>.

b. Además, estos actos de violencia colectiva habrán de estar dirigidos – al menos en último término<sup>29</sup> – *contra el Estado*. No contemplaremos, por ende, la violencia denominada “vigilantista”, llevada a cabo entre grupos sociales que efectúan ataques violentos contra sus conciudadanos tanto como castigo “privado” por delitos cometidos, como por cuestiones étnicas, raciales, religiosas o ideológicas, siendo los linchamientos su forma de expresión más frecuente.

c. Finalmente, esa violencia desplegada de manera colectiva contra el Estado tendrá un carácter *organizado* y sostenido en el tiempo. Nos ocuparemos, por tanto, de

---

<sup>27</sup> Ariel Merari (1993) considerará, de hecho, que tanto los golpes de Estado como las revoluciones “leninistas” son diferentes formas de materialización de la insurgencia.

<sup>28</sup> Este planteamiento bebe de la formulación realizada por Secundino González (1994: 261), basándose en una definición previa de Gianfranco Pasquino, en la que describe las revoluciones como “la tentativa, por parte de determinadas élites, acompañada de una movilización ciudadana intensa, por canales y con medio ajenos o contrarios a las normas vigentes, incluyendo la violencia, dirigida a derribar a las autoridades políticas existentes en un determinado régimen político y sustituirlas con el fin de efectuar cambios en las relaciones políticas, que a su vez pueden ir seguidos de modificaciones más o menos sustanciales del ordenamientos jurídico-constitucional, en las relaciones socioeconómicas o en alguna combinación de todo ello”.

<sup>29</sup> Ya hemos abordado con anterioridad este punto, referido básicamente a la distinción entre víctima y objetivo de los ataques desarrollada por los estudiosos del terrorismo.

aquellos episodios de violencia protagonizados por grupos con una estructura mínimamente estable y un cierto, aunque variable, grado de organización. Este último criterio nos aleja del ámbito de los motines, algaradas, tumultos, reyertas y demás expresiones de violencia colectiva puntual y escasamente coordinada<sup>30</sup>.

Todas aquellas organizaciones que reúnan las condiciones aquí detalladas, más allá de su perfil estratégico concreto (terrorismo/guerrilla) y de la dimensión alcanzada por el conflicto (guerra civil), serán objeto de análisis en esta investigación; nuestra mirada estará puesta, a lo largo de los capítulos que siguen, sobre la violencia insurgente.

### **1.3. APROXIMACIONES A LA FINALIZACIÓN DE LA LUCHA ARMADA INSURGENTE: ESTADO DE LA CUESTIÓN**

La enorme heterogeneidad registrada en las expresiones de la violencia política exige, como señalamos con anterioridad, un esfuerzo en la delimitación del objeto de estudio. Con tal finalidad hemos ido aproximando la lente de nuestra investigación hasta enfocarla de manera específica sobre la violencia insurgente y las organizaciones que la llevan a efecto. Son, sin embargo, aún muchas las preguntas que cabría hacerse en torno a dicho ámbito de análisis y muy variados los problemas de investigación aledaños a esta forma de violencia. Esta tesis doctoral se centrará particularmente sobre la finalización de la lucha insurgente, indagando en las causas y condiciones que subyacen al abandono de las armas por parte de los grupos rebeldes que desafían al orden estatal. Trataremos, en resumidas cuentas, de dar respuesta a los interrogantes ya expuestos en el apartado introductorio: ¿Bajo qué condiciones se encuentran las organizaciones insurgentes dispuestas a la renuncia de la violencia como estrategia de lucha política? ¿Cuándo consideran agotada la “vía armada”? ¿Qué determina que ciertos grupos rebeldes duren más que otros?

La literatura ha estado dominada en buena medida por el análisis del estallido de la violencia, en el intento de desentrañar las circunstancias en que se produce y sus principales factores explicativos. Numerosos estudios rastrean así las causas del recurso a las armas, inquiriendo en las motivaciones tanto individuales como colectivas que

---

<sup>30</sup> Tales manifestaciones se situarían en lo que Della Porta (1995: 4) denomina violencia “espontánea”, caracterizada por sus bajos niveles de organización.

conducen a esta forma de acción política de costes enormemente elevados. El cómo y el por qué del enfrentamiento armado entre los ciudadanos y el Estado han ocupado, por tanto, gran parte de las reflexiones sobre la violencia insurgente, postergando el análisis de los procesos conducentes a su desactivación; así, en palabras de Audrey K. Cronin (2006: 8), “la cuestión de cómo decaen los grupos terroristas<sup>31</sup> está insuficientemente estudiada, y la investigación disponible está prácticamente sin explotar”. Pese a ello, puede encontrarse también un considerable – y creciente – esfuerzo por analizar el contexto en que se produce el fin de la contienda violenta, los mecanismos que conducen a él y determinan su éxito o fracaso.

Vinculado a lo que ha dado en llamarse “investigación para la paz”<sup>32</sup>, el origen de esta reflexión científica y sistemática en torno al fin de los conflictos armados puede situarse en el convulso periodo de entreguerras, consolidándose fundamentalmente tras la Segunda Guerra Mundial, durante los años de la Guerra Fría. Es entonces cuando surgen las primeras instituciones y publicaciones especializadas en esta área de investigación, entre las que podrían destacarse el *Journal of Conflict Resolution*, el Centro para la Investigación y Resolución de Conflictos (CRCR), el Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo (PRIO) o el *Journal of Peace Research*, que contribuyen de manera fundamental al impulso e institucionalización de este campo de análisis (Arenal, 1987; Fisas, 2004: 47-52; Harto de Vera, 2004: 41-56). En este último apartado del capítulo ofreceremos una panorámica de las principales aproximaciones al cese de la actividad armada insurgente, con el propósito de situar nuestro estudio dentro del cuerpo de la literatura desarrollada hasta la fecha en este campo.

---

<sup>31</sup> La autora emplea en este artículo el término “terrorismo”, si bien es cierto que su concepción del mismo resulta tan amplia que podría equipararse al concepto de insurgencia. Así, entre los grupos que menciona en sus análisis existen organizaciones tan dispares como Al Qaeda, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Sendero Luminoso, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) salvadoreñas, el Partido de los Trabajadores del Kurdistan (PKK), las Brigadas Rojas o Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

<sup>32</sup> También la definición de lo que se entiende por “paz” es objeto de debate académico. Una de las tipologías más destacadas es la que apunta hacia la distinción entre paz positiva (ausencia de violencia tanto física como estructural) y paz negativa (ausencia de violencia directa y sistemática) (Galtung, 1969; Harto de Vera, 2004: 135-143). En términos generales, aunque reconociendo el valor de aproximaciones de carácter holístico, este estudio se apoya en una definición esencialmente negativa de la paz, entendida fundamentalmente como ausencia de enfrentamientos armados, coherente con nuestra definición de la violencia política.

### 1.3.1. Con el foco en los Estados

Los estudios sobre la finalización de conflictos violentos han tenido un carácter eminentemente *estadocéntrico*. Los autores han enfatizado en sus reflexiones el papel de los agentes estatales en la conclusión de la contienda armada, indagando en las sendas por las que los gobiernos habían de transitar para poner fin al derramamiento de sangre, en las políticas más adecuadas en la lucha contra la insurgencia, así como en los contextos estatales favorables al cese de los combates. Esta mirada sobre los Estados es el punto de unión entre las distintas perspectivas y desarrollos teóricos en torno a la finalización de la violencia que señalaremos a continuación.

Una de las principales vías de aproximación a la terminación de los enfrentamientos armados es la que se corresponde con lo que aquí denominaremos enfoque de procesos de paz. Es, probablemente, el que ha gozado de una mayor profusión y desenvolvimiento desde su origen, siendo muy numerosos los trabajos que adoptan tal perspectiva. La desactivación de las situaciones de violencia política será analizada, desde esta óptica, como una secuencia gradual constituida por una serie de estadios o pasos sucesivos conducentes al final del conflicto armado. En este sentido, Vicenç Fisas (2004) menciona la prenegociación, negociación, acuerdo e implementación como fases básicas que han de ser atravesadas en esa senda hacia el cese de las hostilidades<sup>33</sup>. El proceso de paz es interpretado, por tanto, como “el recorrido que se sigue en la búsqueda de un compromiso entre las partes enfrentadas” (Fisas, 2004: 152). El rastreo de procedimientos que hagan posible una salida pacífica del conflicto a través del diálogo y el acuerdo entre los contendientes “sobre cuestiones que trascienden la naturaleza estrictamente militar” (Arnson, 1999a: 1) será el principal rasgo diferenciador de este enfoque<sup>34</sup>.

Esta idea de pacto o compromiso hace de las fases vinculadas a la negociación un componente clave para el análisis. Son muy numerosos los trabajos que abordan las condiciones facilitadoras de una solución dialogada, las diversas técnicas y modelos

---

<sup>33</sup> En esta misma línea, Christopher R. Mitchell (1991) señalará la decisión, la comunicación, la negociación y la materialización como subprocesos que configuran el proceso general de terminación del conflicto bélico.

<sup>34</sup> Conviene apuntar aquí que este tipo de aproximaciones se ha aplicado, fundamentalmente, al análisis de la desmovilización de grupos insurgentes de una cierta magnitud, relevancia y, por tanto, capacidad de acción y chantaje. Sólo ellos suponen un verdadero desafío al Estado, explicando la disposición de éste a negociar y, llegado el caso, alcanzar acuerdos.

estratégicos de negociación, así como el papel desempeñado por árbitros o mediadores (v.g. Zartman, 1978; Wittman, 1979; Mitchell y Nicholson, 1983; Mitchell, 1991; Schellenberg, 1996; Darby y MacGinty, 2003; Fisas, 2004; Harto de Vera, 2004). La negociación entre Estados – especialmente si son democráticos – y grupos insurgentes suscita, no obstante, enormes controversias. La legitimidad de los contactos establecidos, la selección de interlocutores válidos, el contenido de las conversaciones, las materias susceptibles de cesión y los ámbitos considerados innegociables han sido objeto de arduas discusiones tanto entre políticos como entre miembros de la comunidad científica.

Asimismo, existe una vertiente de la literatura dedicada al estudio específico de la última fase del proceso de paz: la implementación, en sus múltiples facetas, de los acuerdos alcanzados. Barbara Walter (2001) sitúa de hecho en esta etapa las causas del fracaso final de numerosas negociaciones<sup>35</sup>. Así, de acuerdo con la autora, resulta imprescindible trascender en el análisis las conversaciones y mesas de diálogo, puesto que, frente a lo que comúnmente se piensa, es en la implementación de los acuerdos donde los combatientes encuentran los mayores obstáculos para conseguir la paz (Walter, 2001: 5). Por ello, numerosos autores han orientado sus análisis al abordaje del desarme y organización de la seguridad tras la contienda, la desmovilización y reintegración de los insurgentes, el retorno de los desplazados, así como las circunstancias sociopolíticas favorables para la estabilidad, consolidación y cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz<sup>36</sup> (v.g. Licklider, 1995; Berdal, 1996; Stedman et al., 2002; Hoddie y Hartzell, 2003; Sambanis y Glassmyer, 2008).

Frente a estas aproximaciones a la finalización de la contienda a través de la negociación y el acuerdo, encontramos aquellos estudios realizados desde perspectivas de seguridad, defensa y contrterrorismo (v.g. Alexander, 2002; Ganor, 2005; Alexander, 2006; Zimmermann y Wenger, 2007). El eje vertebrador de tales trabajos es la búsqueda de estrategias y mecanismos que hagan posible la *victoria* en el combate contra la insurgencia, alejándose en términos generales de alternativas dialogadas y de

---

<sup>35</sup> Según Walter (2001: 3), sólo un tercio de todas las negociaciones llevadas a cabo entre 1940 y 1992 terminó en un acuerdo de paz implementado de manera exitosa.

<sup>36</sup> La estrategia conocida como Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) hace alusión a este intento de conclusión exitosa de los procesos de paz.

compromiso entre las partes<sup>37</sup>; se trataría, en palabras de Fisas (2004: 52), de miradas dirigidas hacia las “técnicas que persiguen «ganar», «vencer» y «derrotar»” en una situación conflictiva. Desde esta óptica se pone el acento en la importancia de la adopción de medidas coactivas, jurídicas, policiales, o llegado el caso militares, en la lucha contra la violencia desafiadora del Estado, en el diseño de las políticas adecuadas para combatir la actividad de los grupos armados<sup>38</sup>. Tal perspectiva impone, no obstante, la necesidad de cautelas contra los excesos o “patologías del contraterrorismo” asociadas a respuestas represivas desproporcionadas e indiscriminadas (Reinares, 1998: 166-173), planteando importantes dilemas en torno a la conciliación y equilibrio entre legitimidad y eficacia (Zimmermann y Wenger, 2007: 219-226).

Este enfoque adquirió especial relevancia tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center de Nueva York y la posterior activación de lo que ha dado en llamarse “guerra contra el terrorismo”. Tales acontecimientos desencadenaron una fuerte promoción e impulso de esta clase de estudios, asociados en gran medida – aunque no exclusivamente – al análisis del terrorismo internacional, especialmente en los Estados Unidos. Así, muchos de ellos han sido realizados bajo los auspicios y financiación de entidades gubernamentales. De acuerdo con Audrey K. Cronin (2006: 13-14), ese carácter “subsidiado” de buena parte de las investigaciones en la materia y el sesgo impuesto por los imperativos políticos han tendido a sobreestimar el papel del comportamiento estatal y las políticas contraterroristas. Jeff Goodwin (2004: 259) lo expresaba del siguiente modo:

Nuestro conocimiento acumulado sobre el terrorismo permanece bastante limitado, a pesar de la disponibilidad de una buena cantidad de estudios descriptivos de especialistas de área y periodistas (...). Un factor importante es que muchos de los que han escrito sobre el terrorismo han estado directa o indirectamente implicados en el negocio del contraterrorismo, y su visión se ha visto reducida y distorsionada por su búsqueda de respuestas tácticas efectivas, y a

---

<sup>37</sup> En su Prólogo al libro de Yonah Alexander (2006: xi) *Counterterrorism Strategies*, el ex presidente del gobierno José María Aznar expone con claridad esta postura, al afirmar: “Siempre he creído que la victoria sobre el terrorismo es posible, que el terrorismo puede ser derrotado (...). Debemos y podemos luchar efectivamente contra el terrorismo. Y todos aquéllos que creen que es mejor hacer concesiones para conseguir una paz inestable, y aquéllos que caen presas del derrotismo, están francamente equivocados”.

<sup>38</sup> Alexander (2006: 215) menciona un amplio espectro de acciones consideradas “buenas prácticas” en la lucha contra el terrorismo, entre las que se encuentran la captura y eliminación de operativos y su liderazgo, la destrucción de comandos, comunicaciones e infraestructuras, la denegación de apoyo material y financiación, o la imposición de severos castigos a colaboradores.

menudo muy vagamente definidas (...). Los académicos sobre movimientos sociales, con muy escasas excepciones, han dicho poco acerca del terrorismo.

Por último, haremos alusión a los trabajos de carácter empírico que analizan las diferentes causas posibles de la duración y terminación de las guerras civiles<sup>39</sup>, tanto a través del análisis de conflictos concretos (v.g. Licklider, 1993), como mediante estudios de *N* grande (v.g. Mason y Fett, 1996; Collier et al., 2004; DeRouen y Sobek, 2004; Fearon, 2004; Hegre, 2004)<sup>40</sup>. Haremos especial énfasis en este último tipo análisis, debido a su considerable profusión a lo largo de la última década. Apoyados eminentemente en técnicas estadísticas de explotación de datos, exploran las condiciones facilitadoras del fin de los enfrentamientos armados entre insurgencia y gobierno, rastreando fundamentalmente en los atributos y características del contexto estatal en que éstos surgen y se desarrollan. El conflicto se convierte así en unidad básica de observación, y sus rasgos definitorios, unidos a los del Estado que le sirve como escenario, en termómetros esenciales de la duración de la lucha armada. Aspectos tales como la fortaleza estatal, los niveles de pobreza y desigualdad, el grado de fragmentación étnica o el tipo de insurrección que provoca el estallido de violencia condicionan, de acuerdo con estos análisis, la esperanza de vida de la contienda<sup>41</sup>. Se considera, en resumidas cuentas, que la persistencia de los combates se encuentra asociada, de manera sistemática, tanto a las condiciones estructurales previas al conflicto como a aquellas circunstancias vigentes durante su transcurso (Collier et al., 2004: 268), estudiándose a través de ellas la variabilidad registrada en la prolongación de los enfrentamientos violentos y sus probabilidades de conclusión.

Este tipo de enfoques ha prestado, por tanto, una muy escasa atención a los actores rebeldes como tales, primando en el análisis, como objetos de observación, a los

---

<sup>39</sup> La propia determinación de cuándo se considera terminado un conflicto armado y de cuál es, por ende, su duración, es objeto de debate. Son muy diversos los posibles criterios de aplicación, desde la firma de acuerdos formales de armisticio, hasta la constatación de periodos más o menos prolongados de cese o reducción sustancial de las hostilidades. Como señala James Fearon (2004: 279), “al fin y al cabo, *cualquier* regla parsimoniosa generará códigos discutibles sobre las fechas de inicio y fin [del conflicto]”, por lo que “al menos en algunos casos, la cuestión de cuándo ha terminado una guerra civil, o si efectivamente lo ha hecho, será eternamente contestable”.

<sup>40</sup> Hegre (2004) ofrece en este artículo un interesante recorrido a través de la literatura sobre duración de guerras civiles, exponiendo algunas de sus contribuciones más destacadas.

<sup>41</sup> Como veremos en el curso de esta investigación, algunos de estos factores han sido también tenidos en cuenta para la realización de nuestros análisis. Sin embargo, las unidades de observación del presente estudio no serán ya los Estados o los conflictos armados, sino los grupos insurgentes que recurren a la violencia como herramienta de acción política.

propios enfrentamientos bélicos y a los Estados en que éstos se desarrollan. De hecho, incluso los intentos de incorporar aspectos relacionados con las motivaciones y características de la insurgencia, se han llevado generalmente a cabo mediante *proxies* nacionales con variables e indicadores a nivel de país. Por ello, y partiendo de tal crítica, Cunningham, Gleditsch y Salehyan (2009) reivindican la necesidad de observar las interacciones diádicas entre Estados y grupos armados e incorporar de manera efectiva a los agentes antagonistas no estatales en el análisis. Tal será, precisamente, el objetivo fundamental de los trabajos recogidos en el siguiente apartado.

### **1.3.2. Trasladando el foco a los actores colectivos**

Según hemos visto hasta el momento, buena parte de los estudios orientados al análisis de la finalización de los episodios violentos entre Estados e insurgencia ha puesto el acento en los primeros, relegando a los actores colectivos a un segundo plano. Sin embargo, diversos autores han señalado la necesidad de trasladar el foco sobre los grupos armados. Como afirma Martha Crenshaw (1991) en su estudio sobre el declive del terrorismo, las políticas y respuestas gubernamentales, tanto de carácter coercitivo como conciliador, son sólo uno de los múltiples factores que explican la evolución de la actividad insurgente. Junto a ellas, concluye, han de tomarse también en consideración las decisiones estratégicas, percepciones y recursos organizativos de los grupos armados. Por esta misma senda transitó también Ross y Gurr (1989: 407) en su pionero análisis de la disminución de la actividad terrorista en Canadá y EEUU en las últimas décadas del siglo XX, aseverando que “una explicación completa del estallido y declive del terrorismo debería incluir un análisis tanto de conflictos políticos más amplios, incluyendo las acciones y reacciones de las autoridades y el público en general, como de los objetivos específicos y acciones de los grupos radicales y sus consecuencias para las propias organizaciones”. La unidad de observación se desplaza así desde el conflicto armado hasta las organizaciones desafiadoras del Estado, examinando las circunstancias de su desmovilización y abandono de las armas.

La inmensa mayoría de los trabajos que optan por tal aproximación lo hacen a través de la realización de estudios de caso. Muchos de ellos tienen un carácter fuertemente descriptivo, construyendo relatos detallados sobre las causas específicas por las que el grupo insurgente objeto de su investigación abandonó la lucha armada. Se trata de trabajos que incorporan la perspectiva de los rebeldes, las motivaciones



individuales y colectivas que se esconden tras la renuncia a la violencia, y exploran los pormenores de su desmovilización. Este tipo de abordajes del fin de la contienda violenta ha aportado un valioso conocimiento en profundidad sobre los casos analizados, así como interesantes reflexiones teóricas sobre las que se han construido otras investigaciones. Sin embargo, las explicaciones derivadas de estos análisis tienen con frecuencia un carácter *ad hoc*, un contenido vinculado a la “excepcionalidad” del caso de estudio, que las convierte en difícilmente generalizables o extrapolables a otros escenarios y organizaciones.

Las limitaciones señaladas han impulsado a diversos autores a llevar a cabo intentos de sistematizar las diversas circunstancias conducentes al desarme de los grupos armados, incorporando además aspectos referidos a las propias organizaciones desmovilizadas. Tal es el caso de los trabajos realizados por John Horgan (2009), Audrey K. Cronin (2009) o Tore Bjørge y John Horgan (2009), donde recopilan las diversas vías de salida de la actividad insurgente, ofreciendo un mapa de la complejidad del camino hacia el final de la violencia. Sin embargo, destacaremos aquí de manera especial, por su relevancia para nuestra investigación, los estudios sobre duración y finalización de grupos armados llevados a cabo desde metodologías cuantitativas. Estos trabajos de publicación muy reciente – o incluso pendientes aún de la misma en el momento en que se escriben estas líneas –, realizados por tanto de manera prácticamente simultánea a esta investigación, tratan de extraer, mediante el diseño de modelos estadísticos, pautas o patrones de análisis para explicar el cese de actividad de los grupos armados. Elaborados mayoritariamente desde un enfoque de Relaciones Internacionales, incorporan información relativa tanto a las organizaciones insurgentes como a las circunstancias sociopolíticas en que operan, tomando a los grupos rebeldes como unidades básicas de observación. Indagan, por citar algunos ejemplos, en cuestiones tales como la efectividad de las soluciones políticas y de la fuerza militar o policial para poner fin a la actividad insurgente (Jones y Libicki, 2008); en la sostenibilidad de las organizaciones terroristas en función de su perfil ideológico, tamaño, tácticas y base de operaciones (Blomberg et al., 2010; Blomberg et al., 2011; Gaibullov y Sandler, 2013); en la importancia del apoyo y patrocinio estatal (Carter, 2012); en la fortaleza de insurgencia y Estado (Young y Dugan, 2010); o en las redes e interacciones entre diferentes grupos armados (Phillips, 2011).

Estos novedosos estudios aportan un marco de análisis fundamental para nuestra investigación, ofreciendo una mirada nueva y enriquecedora sobre el fin de la insurgencia. Adolecen, no obstante, de ciertas carencias y debilidades. Estos trabajos prestan una muy escasa atención a los microfundamentos que subyacen tras las dinámicas generales observadas en los análisis estadísticos. Del mismo modo, muestran un limitado – o nulo – interés por el análisis particularizado de los desafíos de carácter doméstico al poder del Estado. Existe por tanto en ellos un claro sesgo hacia el terrorismo internacional, estrechamente vinculado con la procedencia fundamentalmente estadounidense de tales análisis y el ya mencionado impulso dado a esta área temática tras el 11-S. Por último, la inclusión indiscriminada de grupos armados en el análisis, con definiciones laxas e imprecisas, si bien es cierto que permite obtener muestras con una  $N$  muy elevada, también lo es que favorece la mezcla de fenómenos y organizaciones de perfiles muy dispares cuya comparación es, cuando menos, cuestionable.

Hemos expuesto hasta aquí el rompecabezas de literaturas que se aproximan, desde diferentes perspectivas, a nuestro objeto de estudio, tratando de resolver la pregunta de investigación planteada. Para terminar, señalaremos cuál es la pieza con la que este trabajo contribuye, modestamente, en los esfuerzos por esclarecer las causas explicativas del fin de la actividad insurgente.

### **1.3.3. ¿Dónde se sitúa este trabajo de investigación?**

En el transcurso de este primer capítulo hemos ido construyendo las bases conceptuales sobre las que se asienta la construcción de nuestro objeto de estudio, formulando además el problema específico de investigación al que intentaremos dar respuesta a lo largo de las páginas que componen esta tesis doctoral. Este trabajo se enmarca dentro las reflexiones en torno al papel de la violencia en el ámbito de las relaciones sociales, tomando precisamente el concepto de “violencia política” como punto de partida y principal eje articulador de nuestros esfuerzos analíticos. Esa violencia será aquí interpretada como modo específico de interacción social, una determinada forma de diálogo y respuesta a los conflictos existentes en el seno de las sociedades. La visión de la violencia como repertorio posible de acción política supone un claro distanciamiento respecto de aquellas aproximaciones a la misma en términos de

estallido patológico de irracionalidad e inconsciencia, que la contemplan como expresión anómala del natural discurrir de la actividad política.

El carácter multiforme de la violencia exige además un ejercicio de concreción que haga explícita cuál de sus múltiples manifestaciones configurará el objeto de investigación. En particular, este trabajo sitúa el foco sobre aquella violencia definida por su perfil colectivo, organizado y desafiador del poder estatal, rasgos que hemos agrupado bajo la rúbrica general de la insurgencia. Más específicamente, trataremos de aproximarnos a los procesos de finalización de conflictos armados, indagando en los factores que inciden en la desactivación de la contienda violenta. Para acometer la tarea propuesta, apostaremos por la adopción de un “enfoque de actores” que sitúe a las organizaciones insurgentes en el núcleo del estudio, convirtiéndolas en las unidades básicas de análisis. Nos desmarcamos de este modo del grueso de la literatura desarrollada hasta la fecha en torno a la terminación y pacificación de los conflictos violentos. Ésta se ha encontrado dominada en su mayor parte por abordajes de carácter eminentemente normativo, *estadocéntrico* e institucional, relegando a un segundo plano la perspectiva de los actores insurgentes. Dicha postergación ha generado, desde nuestra óptica, un cierto vacío analítico sobre el que consideramos oportuno poner el acento. Seguiremos para ello la senda iniciada por los trabajos recientemente desarrollados en torno a la duración y desmovilización de grupos armados, integrando en el estudio tanto aspectos micro-sociológicos referidos a las organizaciones insurgentes, como cuestiones asociadas al contexto sociopolítico en que desarrollan su actividad armada.



## **CAPÍTULO II**

---

### **LOS ESCENARIOS DE LA INSURGENCIA: CONTEXTOS Y CAUSAS DEL FINAL DE LA LUCHA ARMADA**

La violencia insurgente ha sido definida en el capítulo previo como objeto de estudio vertebrador de este trabajo de investigación. Pretendemos así analizar los procesos de desactivación de la contienda violenta, inquiriendo las causas que motivan la llegada a término de la actividad armada perpetrada por las organizaciones insurgentes. Una vez delimitada nuestra variable dependiente y expuesto el problema de investigación al que trataremos de dar respuesta, el siguiente escalón en nuestro recorrido será el análisis de las explicaciones que la literatura ha dado a la incidencia de la violencia colectiva organizada contra el poder estatal. De este modo extraeremos los principales argumentos defendidos en estudios previos sobre el desarrollo de la insurgencia, lo que nos permitirá formular las variables independientes e hipótesis de investigación que contrastaremos en el posterior análisis empírico.

Para ello, y en coherencia con el enfoque de actores propuesto, comenzaremos planteando un marco analítico para el estudio del fin de la actividad insurgente derivado de las teorías de la acción colectiva. Revisaremos así las propuestas realizadas desde la literatura de los nuevos movimientos sociales, reflexionando sobre su aplicabilidad a nuestro ámbito específico de estudio. Una vez expuestas las herramientas analíticas mediante las cuales abordaremos nuestro objeto de investigación, procederemos a la formulación de las hipótesis centrales de este estudio. En primer lugar, analizaremos los vínculos existentes entre el tipo de régimen político y la presencia de actividad insurgente contra el poder del Estado. En el examen de esta relación discutida, atenderemos al papel que la literatura ha otorgado tanto a la democracia como a la represión estatal en la configuración de las estrategias insurgentes. Rescataremos además la influencia específica – aunque frecuentemente postergada – de los procesos

de transición y consolidación democrática sobre el devenir de la actividad armada. Por último, transitaremos a través de los principales mecanismos y explicaciones alternativas apuntadas por otros autores en el examen de la duración de la actividad rebelde, que servirán como variables de control para nuestro análisis.

## **2.1. EL MARCO ANALÍTICO: LAS TEORÍAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA**

El estudio de la insurgencia se sitúa dentro los límites de la acción colectiva. Definida por el desafío planteado por un conjunto – de amplitud variable – de ciudadanos contra el Estado, esta forma de violencia se caracteriza por la naturaleza colectiva de los actores que la protagonizan y llevan a efecto. Son ellos, de acuerdo con lo previamente expuesto, quienes se sitúan en el centro de nuestra investigación, convertidos en unidades básicas de observación y análisis. Por ello, acudiremos a la literatura sobre acción colectiva y movimientos sociales, de la que extraeremos el marco analítico para el estudio de esta categoría de violencia organizada contra el poder estatal.

La actividad insurgente es aquí interpretada como una de las múltiples expresiones de la contienda política de carácter transgresivo<sup>42</sup> (McAdam et al., 2001; Tilly, 2007b). Se trata, así, de un repertorio de confrontación, empleando la terminología de Charles Tilly<sup>43</sup>, que se aleja tanto de las formas convencionales de participación política, como de aquéllas basadas en la alteración del orden, recurriendo en su lugar al empleo de la violencia como estrategia – racional – de lucha política (Tarrow, 2009). Entendiendo los movimientos sociales, con Sidney Tarrow (2009: 26), como “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las

---

<sup>42</sup> El concepto de contienda política (*contentious politics*) es definido como “la interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones, y (b) las reivindicaciones, en caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores”. La contienda se considerará transgresiva – frente a la calificada como contenida – cuando, junto a los rasgos anteriores, al menos uno de los participantes en el conflicto sea un actor recientemente auto-identificado o alguna de las partes emplee métodos de acción innovadores o prohibidos por las autoridades (McAdam et al., 2001: 5-8).

<sup>43</sup> Los repertorios de contienda pueden ser definidos como el conjunto de formas posibles de actuación de que un grupo dispone en la lucha por sus intereses y expresión de sus reivindicaciones. En palabras de Tilly, estos repertorios están constituidos por una serie limitada de “esquemas que se aprenden, se comparten y se realizan mediante un proceso relativamente deliberado de elección” (cit. en Tarrow, 2009: 59).

autoridades”, podemos constatar que han sido muchos los actores colectivos que han recurrido a expresiones violentas como instrumento de reivindicación y pugna a lo largo de la historia. Sin embargo, y pese a su innegable impacto, la literatura sobre movimientos sociales se ha orientado en mayor medida al análisis de las formas pacíficas de la contienda, relegando con frecuencia a una posición subalterna el estudio del comportamiento político violento (Della Porta, 1995: 5).

Frente a dicha tendencia, este trabajo aboga por incorporar los hallazgos realizados por los estudiosos de la acción colectiva al análisis de la actividad insurgente. Sus herramientas teóricas y conceptuales pueden servirnos de brújula a la hora de aproximarnos a esta manifestación de la violencia política, cuyo abordaje no requiere, por fortuna, que los investigadores volvamos a “reinventar la rueda” (Beck, 2008). Esta propuesta analítica se sitúa en una senda ya transitada con anterioridad por ciertos autores (Della Porta, 1995; Oberschall, 2004; De la Corte, 2006; Beck, 2008). De este modo, las virtudes del estudio de la violencia política desde un enfoque teórico de movimientos sociales han sido señaladas por diversas investigaciones. Concebida como una más de entre las tácticas posibles de confrontación y protesta, estos trabajos han abordado la insurgencia – especialmente la de carácter terrorista – atendiendo a las dimensiones básicas de la acción colectiva, a saber, las estructuras de oportunidad política, los recursos organizativos y las narrativas o marcos culturales implicados en el desarrollo de la actividad violenta. En el siguiente apartado dirigiremos nuestra mirada hacia la literatura sobre movimientos sociales, profundizando en el contenido de cada uno de estos conceptos, fundamentales para la formulación de nuestras hipótesis y variables independientes.

### **2.1.1. El estudio de la acción colectiva contenciosa en la literatura sobre movimientos sociales**

El análisis de los actores colectivos, y más específicamente de los movimientos sociales, el examen de sus orígenes, repertorios de contienda y papel en la arena política, ha tenido un considerable desarrollo dentro de las ciencias sociales. Cabe señalar, por un lado, los estudios historiográficos sobre las movilizaciones colectivas registradas en la Europa medieval y preindustrial, atendiendo a expresiones de descontento y agitación popular tan variadas como el milenarismo, las *jacqueries*, las revueltas anti-fiscales, los motines del pan o las primeras revoluciones liberales (Rudé,

1960; 1978; Thompson, 1979; Cohn, 1997). Por otra parte, y junto a los análisis de los “rebeldes primitivos”, utilizando las palabras de Eric Hobsbawn (1974), destacan de manera fundamental los trabajos consagrados al abordaje del posterior movimiento obrero, considerado de algún modo el movimiento social por excelencia. Surgido a partir de la Revolución Industrial, y forjado en el transcurso del convulso – y “largo”<sup>44</sup> – siglo XIX con el desarrollo de los primeros sindicatos y partidos socialistas, ha sido foco de numerosas miradas que han hecho de este actor colectivo un fenómeno objeto de profusa reflexión y producción científica (Cole, 1961; 1974; Droz, 1976; Thompson, 1977; Abendroth, 1980; Hobsbawn, 1987).

Sin embargo, fue a partir de la década de 1960 cuando la literatura dedicada al estudio de los movimientos sociales adquirió una mayor proliferación e impulso. Este desarrollo estuvo vinculado en buena medida al contexto de agitación social y descontento, asociado a nuevos valores postmaterialistas (Inglehart, 1977), registrado en las sociedades occidentales tras el paso del ecuador del siglo XX. Es en este escenario donde tiene lugar la formulación e institucionalización de las denominadas teorías de los “nuevos movimientos sociales”, que pretenden dar respuesta a los actores y repertorios de protesta emergentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, durante las últimas décadas<sup>45</sup>. En este apartado prestaremos atención a este desarrollo teórico reciente, sintetizando las principales aportaciones realizadas por los estudiosos de estos sujetos políticos de carácter colectivo. Para ello, hemos diferenciado tres líneas fundamentales de reflexión y análisis planteadas desde esta fecunda literatura: el estudio de las estructuras de oportunidad política, la propuesta teórica de la movilización de recursos y el examen de los marcos cognitivos para la acción.

#### *2.1.1.1. La estructura de oportunidades – y restricciones – políticas*

El primero de los enfoques de aproximación a la acción colectiva que abordaremos en este trabajo es el desarrollado bajo el rótulo de “la estructura de

---

<sup>44</sup> La expresión “the long nineteenth century” fue acuñada por el historiador británico Eric Hobsbawn (1989; 1991; 2003) para referirse al periodo comprendido entre 1789 y 1914, en el transcurso del cual sitúa las denominadas eras de la revolución, del capital y del imperio.

<sup>45</sup> Si bien es cierto que los conceptos formulados por estos teóricos de la acción colectiva nacen vinculados a marcos geográficos y contextos sociopolíticos concretos, consideramos oportuna su aplicación al estudio de la realidad latinoamericana, teniendo en cuenta, no obstante, las posibles particularidades y características propias de la movilización social desarrollada en el subcontinente a lo largo de nuestro periodo de observación.



oportunidades políticas” (EOP), acuñado por Peter K. Eisinger (1973). Los estudios realizados desde esta óptica comparten la relevancia otorgada a los vínculos existentes entre la acción desplegada por los movimientos sociales y el entorno político e institucional en que ésta surge y se desenvuelve. Consideran, así, que los procesos de movilización colectiva asociados a la contienda política no pueden ser entendidos de manera aislada, sino que se hallan imbricados en un determinado marco sociopolítico, al que ha de prestarse la atención debida si aspiramos a comprender las dinámicas protagonizadas por los actores colectivos. Se trata, en definitiva, de acometer el estudio de la acción colectiva integrándola en el sistema político en el se circunscribe, de analizarla en cuanto que inserta en un serie específica de condiciones contextuales fundamentales para explicar su desarrollo.

Esta perspectiva, postulada por los teóricos del denominado “paradigma del proceso político”, entre los que destacan Charles Tilly, Sidney Tarrow y Doug McAdam, sostiene que la EOP tiene un papel fundamental en el estallido y configuración de la acción colectiva contenciosa. Pero ¿cómo podrían definirse las oportunidades políticas? ¿Cuál es su contenido y componentes específicos? En su trabajo sobre la incidencia de la protesta en las ciudades norteamericanas, Eisinger (1973: 25) las definía como “el grado de probabilidades que los grupos tienen de acceder al poder e influir sobre el sistema político” (cit. en McAdam, 1999a: 49-50). Se trata, por tanto, de un “conjunto de factores y procesos que facilitan la movilización” (McAdam, 1999a: 53), ventanas cuya apertura es aprovechada por los actores colectivos para entrar en la escena política y plantear allí sus demandas y reivindicaciones.

Sin embargo, la vaguedad en que han incurrido con frecuencia las formulaciones del concepto de EOP ha derivado en el riesgo de convertirlo en una suerte de “cajón de sastre” en el que, por su excesiva amplitud y mezcla de contenidos, todo cabe y poco de utilidad se encuentra. Tal es la cautela de Gamson y Meyer (1999: 389) al afirmar que este término amenaza con devenir “una esponja capaz de absorber cualquier aspecto relacionado con el entorno de los movimientos sociales, instituciones y culturas políticas, crisis de diversos tipos, alianzas y variaciones en las políticas”. Por ello, y para evitar este peligro que erosiona la capacidad explicativa del término, diversos autores han tratado de especificar los elementos constitutivos de la EOP, sistematizando las dimensiones del contexto político intervinientes en la activación y caracterización de la movilización colectiva. No existe, sin embargo, un consenso claro en torno a cuáles

sean tales componentes, pudiendo registrarse variaciones entre las obras de unos y otros autores. Por este motivo, mencionaremos aquí la propuesta de síntesis realizada por Doug McAdam (1999a: 53 y ss.) a partir de los trabajos de Brockett (1991), Rutch (1999), Tarrow (2009) y Kriesi et al. (1992). Así, y de acuerdo con este sociólogo estadounidense, la EOP estaría compuesta por los siguientes factores: a) el nivel de apertura o cierre relativo del sistema político institucional y las posibilidades de acceso a la participación de nuevos actores; b) la estabilidad/inestabilidad de las alianzas y divisiones entre las elites y dirigentes políticos; c) la presencia o ausencia de aliados influyentes; y d) la capacidad y propensión del Estado a la represión de la disidencia.

Como puede observarse, la EOP incorpora aspectos de carácter tanto estructural como coyuntural, dimensiones formales e informales que afectan a la acción colectiva, influyendo no sólo en las probabilidades de surgimiento de los movimientos sociales, sino también en su estructura, estrategias y resultados obtenidos. El concepto de oportunidad política permite, por tanto, poner en relación las esferas de la política institucional y no institucional, destacando el papel de los vínculos existentes entre Estados y actores sociales frente a la falsa idea de que ambos actúan en campos nítidamente diferenciados (Ibarra et al., 2002: 10). Convenimos así, con Charles Tilly (2007b: 27), que “ningún estudioso de la violencia colectiva puede permitirse excluir [del análisis] las acciones de las autoridades gubernamentales, o las interacciones entre agentes gubernamentales y actores no gubernamentales”.

De lo hasta ahora expuesto se colige la existencia de una clara propensión en la literatura a interpretar las estructuras de oportunidad en clave nacional, aludiendo a aspectos facilitadores de la movilización propios exclusivamente del ámbito intraestatal. Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado, resulta imprescindible incorporar al estudio dimensiones asociadas a los procesos políticos y económicos que, aun trascendiendo la esfera del Estado, afectan de manera sustancial a las probabilidades de articulación de la agitación social interna (González Calleja, 2002: 179). En definitiva, la esfera internacional importa – y mucho, como veremos en esta investigación – a la hora de analizar la contestación y la protesta, haciendo ineludible su abordaje como elemento integrante de la EOP para la superación del sesgo estatista dominante (McAdam, 1999a: 62-65).

Este contexto nacional e internacional, cambiante y dinámico, ha de ser *percibido e interpretado* en términos de oportunidad política por parte de los actores para que se desencadene la movilización social. Diversos autores han señalado, en este sentido, cómo la acción colectiva no es un proceso automático derivado de ciertas circunstancias objetivas que lo determinan, sino que responde, además, a un ejercicio de atribución colectiva<sup>46</sup>. Desde esta perspectiva, la participación de los individuos estará asociada a la aprehensión e interpretación de una serie de rasgos del entorno político que afectan a sus expectativas de éxito o fracaso. Su valoración de la vulnerabilidad – o receptividad – del sistema ante las propuestas de cambio será clave para el incentivo de la acción colectiva contestataria. En este sentido, Tarrow (1999: 89) definirá las oportunidades políticas como “señales continuas – aunque no necesariamente permanentes, formales o a nivel nacional – percibidas por los agentes sociales o políticos que les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que cuentan para crear movimientos sociales”.

Dicha percepción registra, de acuerdo con la literatura, una tendencia generalizada de los actores colectivos a sobrevalorar sus probabilidades de éxito. Subestiman, en consecuencia, los potenciales obstáculos y limitaciones de la protesta, arrastrados por una especie propensión sistemática hacia el optimismo (González Calleja, 2002: 180). Esta huida de la desesperanza puede jugar un papel fundamental para la activación de la contienda política, puesto que sólo si los actores se consideran capacitados para impulsar el cambio se embarcarán en la lucha colectiva por la transformación social. Por ello, Gamson y Meyer (1999: 405) consideran imprescindible una cierta inclinación de los activistas a sobrestimar el nivel de oportunidades políticas existentes, pues de lo contrario, afirman, “no estarían ejerciendo su oficio sabiamente”. De acuerdo con estos autores, esa hipotética falta de realismo puede actuar como acicate y motor del cambio, en la medida en que “las percepciones «poco realistas» de lo que es posible, pueden alterar lo posible” (Gamson y Meyer, 1999: 407).

Por último, se ha señalado la necesidad de reflexión y análisis en torno al papel desempeñado por los actores colectivos en la apertura de nuevas oportunidades

---

<sup>46</sup> Más adelante, al abordar el enfoque de los llamados “procesos enmarcadores”, volveremos sobre nuestros pasos para profundizar en esta cuestión.

políticas. En líneas generales, y como hemos podido observar a lo largo de este epígrafe, la perspectiva teórica de la EOP ha situado el foco de su atención en la influencia de los aspectos de carácter macro que envuelven a la acción, analizando los posibles roles del marco político e institucional en la irrupción de la acción contestataria. Sin embargo, se encuentran escasos estudios sistemáticos que recorran el camino inverso, es decir, el efecto de la acción colectiva sobre la creación de oportunidades políticas. De hecho, una de sus características más destacadas es, precisamente, su capacidad de expandir y generar nuevos espacios de movilización, ventanas de oportunidad que pueden ser aprovechadas no sólo por grupos rebeldes, sino en ocasiones también por las propias elites u oponentes políticos (Tarrow, 1999: 95-98; 2009: 130-133).

#### *2.1.1.2. La teoría de la movilización de recursos*

El estudio de la acción colectiva desde la teoría de la movilización de recursos supone un desplazamiento del foco respecto al abordaje de las oportunidades políticas siguiendo un doble eje. Por un lado, el nivel macro de análisis propio del enfoque anterior es sustituido por interpretaciones de carácter meso/micro-sociológico. Se descende, así, desde el contexto institucional y el marco sociopolítico en el que emergen y se desarrollan los actos de contestación, hasta las propias estructuras y organización de los actores colectivos que protagonizan la protesta. Este cambio en la mirada del investigador implica, además, el traslado del énfasis analítico desde los recursos externos y el entorno que configura las estructuras de oportunidad, hacia los recursos internos de los actores participantes en la contienda. Se incide, en definitiva, en la importancia de las características propias de los sujetos colectivos, más allá de las condiciones estructurales en que operan.

Esta perspectiva teórica, cuyos iniciadores son John McCarthy y Mayer Zald (1973; 1977), se construye sobre la idea de que, ante condiciones y escenarios de similares características, pueden observarse en la práctica grados muy diversos de evolución y movilización de los actores de colectivos. Los citados autores inciden en la presencia ininterrumpida de motivos de agravio en las sociedades humanas que, potencialmente, podrían desencadenar la protesta. Rechazan, por ello, aquellas aproximaciones a la movilización social que ponen el acento sobre la frustración generada en los individuos por las situaciones de desigualdad e injusticia, pues el

descontento no es, por sí mismo, generador de cambio social. Plantean, así, su deseo de moverse “desde una asunción fuerte sobre la centralidad de las privaciones y agravios, a una débil que haga de ellos un componente más, en ocasiones secundario, en la generación de los movimientos sociales” (McCarthy y Zald, 1977: 1215).

De acuerdo con la teoría de la movilización de recursos es, por tanto, imprescindible dar un paso más en el estudio de la acción colectiva, considerando junto a las estructuras de oportunidades para la contestación, aspectos referidos a las “estructuras de movilización” de los participantes en la misma. Este concepto se refiere a las “formas consensuadas de llevar a cabo acciones colectivas, a los repertorios tácticos, a formas organizativas de movimientos sociales concretos y a repertorios modulares de los movimientos sociales” (McCarthy, 1999: 206). La emergencia de la acción colectiva, así como su éxito o fracaso, tendrán, desde esta óptica, mucho que ver con la capacidad de las organizaciones para obtener recursos de diverso tipo y afrontar los dilemas estratégicos a los que habrán de dar respuesta a la hora de articular la movilización social.

Por lo que respecta a los recursos concretos cuyo control, necesario para la activación de la acción colectiva, tratarán de adquirir los grupos durante el proceso de movilización (Jenkins, 1983: 532), la literatura ha señalado componentes tanto de carácter tangible como intangible u organizativo. Así, los propios McCarthy y Zald (1977: 1220) mencionan la importancia del trabajo y la legitimidad, junto al dinero y las instalaciones, mientras que Oberschall (2004: 28) alude al reclutamiento, las fuentes de financiación, el liderazgo, la comunicación interna y los procesos de toma de decisiones, como dimensiones básicas de la capacidad organizativa de los actores colectivos. Asimismo, y por lo que respecta a la propia estructura y organización interna de los movimientos sociales, Tarrow (2009: 178) advierte la necesidad de distinguir en el análisis tres niveles diferenciados. En primer lugar, encontramos la organización formal, una estructura sólida, jerárquica y bien definida que intentará materializar los objetivos del movimiento. En segundo término, la organización de la acción colectiva, referida más bien al modo específico en que se llevan a cabo los enfrentamientos con los oponentes, a través de formaciones como las delegaciones, las células, etc. Y, por último, las estructuras conectivas o nexos encargados de vincular a los líderes con las bases del movimiento, con el propósito de coordinar y garantizar su permanencia en el tiempo. Se ha apuntado además, en este sentido, la enorme importancia que pueden

llegar a adquirir en la movilización los canales conectivos de carácter informal, los contactos “cara a cara” y núcleos cotidianos de micromovilización que incluyen, por ejemplo, las redes familiares y de parentesco, los centros de trabajo o las asociaciones voluntarias (McCarthy, 1999: 206). Todo un entramado de nexos que, junto a las estructuras formales de las organizaciones, pueden jugar un papel fundamental en la generación de la acción contestataria.

Este paradigma, cuyo acento se sitúa sobre los actores colectivos que protagonizan la protesta, nace en sus orígenes asociado a las teorías de la elección racional. Se enfrenta, por ello, a los retos y obstáculos planteados por Olson (1992) en su estudio sobre la lógica de la acción colectiva, particularmente con el denominado problema del “free-riding”<sup>47</sup>. Como consecuencia, la movilización requerirá, de acuerdo con McCarthy y Zald (1977: 1216), la selección de incentivos y beneficios adecuados, así como de mecanismos o estructuras capaces de reducir los costes de participación. Según el enfoque de la movilización de recursos, los sujetos actúan, por tanto, guiados por una racionalidad instrumental. Apoyados en el cálculo de costes-beneficios, buscarán las estrategias maximizadoras de ganancias en función de los recursos disponibles, tratando de emplear los medios más adecuados para el alcance de los objetivos perseguidos. La acción se plantea en términos económicos, dibujando un “modelo empresarial de la movilización”. Los actores colectivos son interpretados como empresas que compiten por un mercado de demanda – los potenciales adherentes – al que tratan de vender un determinado producto – los fines deseados –, compitiendo para ello con otros grupos (McCarthy y Zald, 1977).

La perspectiva teórica de la movilización de recursos aporta, en definitiva, una mirada sobre los movimientos sociales que, más allá de los agravios y las ventanas de oportunidad política existentes, subraya el papel de las estructuras y recursos internos del movimiento a la hora de examinar el origen, despliegue y resultados de la acción contenciosa. Sin embargo, su énfasis en la racionalidad y organización de los actores

---

<sup>47</sup> El problema del “free rider” (traducido generalmente como polizón o, incluso, gorrón) alude, básicamente, a las dificultades de conciliación entre intereses individuales y colectivos. De acuerdo con este planteamiento, el hecho de que un conjunto de individuos comparta un determinado objetivo no garantiza necesariamente la cooperación entre ellos. Tal es así debido a que, racionalmente, cada individuo puede pensar que su participación no afectará de manera sustancial a la consecución de los bienes públicos deseados, de los que, sin ser alcanzados, se beneficiará en todo caso sin haber incurrido en los costes derivados de la participación.

colectivos ha postergado en el análisis el papel del almacén sociocultural que envuelve las estrategias de lucha adoptadas por los sujetos, ignorando la dimensión simbólico-cognitiva de la protesta. Tal será, precisamente, el reto del último de los enfoques aquí analizados.

### *2.1.1.3. Los marcos cognitivos para la acción*

El estudio de los movimientos sociales desde los marcos cognitivos introduce en el análisis elementos de carácter simbólico, cultural y discursivo asociados a la activación e incidencia de la protesta. Desde este enfoque, se subraya la relevancia de la construcción de identidades y significados colectivos a la hora de afrontar el estudio de la contienda, cuestionando las aproximaciones de carácter determinista que interpretan la acción colectiva como apéndice y derivación directa de condiciones materiales o circunstancias políticas concretas. Esta perspectiva sostiene, por ende, que la estructura de oportunidades, así como los recursos organizativos de los actores, resultan insuficientes para explicar la existencia de episodios de movilización social, siendo imprescindible incorporar el abordaje de los procesos de creación de marcos interpretativos que dotan de sentido e impulsan la acción colectiva.

David A. Snow y Robert D. Benford (1986; 1988; 2000), precursores de este modelo analítico, introducirán el concepto de “procesos enmarcadores” en el estudio de la acción colectiva. Así, y tomando como punto de partida el “frame analysis” propuesto anteriormente por Goffman (1974)<sup>48</sup>, señalarán la relevancia de las dinámicas y luchas por la construcción de significados para el examen de la activación de la protesta<sup>49</sup>. Los marcos de la acción colectiva pueden ser definidos, de acuerdo con estos autores, como “conjuntos de creencias y significados que inspiran y legitiman las actividades y campañas de la organización del movimiento social” (Snow y Benford, 2000: 614). La articulación y difusión de estos patrones de lectura de la realidad responde a “esfuerzos estratégicos conscientes”, llevados a cabo de manera deliberada con el objetivo impulsar la acción colectiva (McAdam et al., 1999: 27). Tales esquemas interpretativos dan sentido, simplifican y condensan el mundo que rodea a los sujetos, dotándoles de

---

<sup>48</sup> De acuerdo con Goffman (1974: 21), los marcos primarios son esquemas interpretativos que “permiten a su usuario ubicar, percibir, identificar y etiquetar un número aparentemente infinito de ocurrencias concretas definidas en sus términos”.

<sup>49</sup> Esta pugna por la interpretación, definición y representación de la realidad fue referida por Stuart Hall (1982) como las “políticas de significación”.

herramientas cognitivas para explicar los acontecimientos que atestiguan. Contribuyen así a ordenar la experiencia y sirven, en consecuencia, de guía y acicate para la acción (Snow y Benford, 2000: 614).

Los agravios no son suficientes, por lo tanto, para dar cuenta del estallido, duración y éxito de la movilización social. Lo fundamental es, desde esta perspectiva, la manera en que se interpreta ese descontento y el éxito que se alcanza en la difusión y aceptación de tales patrones de representación (Snow et al., 1986: 466). Para ello, ha de llevarse a cabo un proceso de “movilización del consenso” (Klandermans, 1988) que resulte en una cierta sintonía o concordancia entre las demandas y opiniones de la ciudadanía, y el discurso y praxis llevados a cabo por los actores colectivos. Es el proceso de “alineación de marcos” que Snow y Benford (1986: 464) definen como “la conexión entre las orientaciones interpretativas de individuos y organizaciones, de modo que un determinado conjunto de intereses, valores y creencias individuales sean congruentes y complementarias con las actividades, objetivos e ideología del movimiento social”<sup>50</sup>.

Esta generación de marcos interpretativos, considerada paso previo ineludible para el surgimiento de la acción colectiva, contribuirá a la “liberación cognitiva” (McAdam, 1999b) de los individuos, estimulando así la protesta social. Pero, ¿cuál habrá de ser su contenido discursivo para que se desencadene tal proceso? William A. Gamson (1994; 1995) señala la presencia necesaria de tres componentes básicos en los marcos de la acción colectiva, a saber: injusticia, agencia e identidad<sup>51</sup>. En primer lugar, es preciso que la situación atravesada por los sujetos sea definida como injusta y, por tanto, no deseable. Asimismo, ha de ser atribuible a la actuación deliberada y *maliciosa* de personas, grupos u organizaciones concretas e identificables, a quien se responsabilizará de los agravios y sufrimientos experimentados. La activación de la contienda política requiere, por consiguiente, la superación de lo que Lee Ross (1977) denominó el “error fundamental de atribución”, es decir, la propensión existente entre

---

<sup>50</sup> Este proceso dinámico de alineación de marcos cognitivos, necesario para la movilización social, podrá adoptar formas diversas según los actores referenciados, quienes señalan la existencia de al menos cuatro variantes: la unión de marcos, la amplificación de marcos, la extensión de marcos y la transformación de marcos (Snow et al., 1986).

<sup>51</sup> Tales componentes nos recuerdan a los elementos señalados por John Wilson (1973) como integrantes fundamentales de toda ideología: diagnóstico, pronóstico y llamada a la acción, incorporados también más tarde por Snow y Benford (1988) al analizar las tareas básicas que han de cumplir los marcos movilizadores.



los sujetos a valorar y explicar la situación en que se encuentran en función de errores individuales o motivos de carácter personal, subestimando el papel de las circunstancias externas y las deficiencias del sistema (cit. en McAdam et al., 1999: 31). Únicamente cuando se generan discursos capaces de atribuir fallas al orden político y económico dominante, sólo cuando se establecen vínculos causales entre determinadas prácticas políticas y ciertas situaciones injustas, es posible la activación de la protesta y la lucha para su transformación.

En segundo lugar, Gamson (1995: 90) alude al componente de la agencia, referido a la valoración como posible de la alteración de las políticas o condiciones de vida previamente definidas como agravios. Los marcos cognitivos de la acción colectiva posibilitan la toma de conciencia sobre la capacidad subversiva del orden social que posee la movilización contestataria. Se propaga, así, el convencimiento de que los ciudadanos pueden ser “agentes de su propia historia” (p. 90). Este proceso de empoderamiento pasa, por tanto, por el reconocimiento de la eficacia de su intervención en la regulación del conflicto social y el rechazo a la idea de ausencia de alternativas e inmutabilidad del sistema; se trata, en resumidas cuentas, de dar crédito e interiorizar aquella consigna de que “otro mundo es posible”.

Finalmente, los procesos enmarcadores incluirán una dimensión identitaria. Se ha señalado, en este sentido, la importancia de las dinámicas de conformación de “identidades colectivas” para la puesta en marcha de la movilización social (Melucci, 1995)<sup>52</sup>, a través de la generación de sentimientos de pertenencia a un *nosotros* que se reconoce como tal. Este proceso de construcción identitaria adquiere un papel fundamental en la integración del movimiento, constituyéndose en criterio básico para distinguir entre lo que Alberoni (1984) denomina fenómenos colectivos de agregado, en los que los sujetos no constituyen una identidad social de orden superior – por ejemplo, un estallido de pánico –, y fenómenos colectivos de grupo, donde existe una conciencia de colectividad que se define y relaciona con un sistema exterior – por ejemplo, una organización guerrillera –. Este proceso de auto-reconocimiento como miembros de un determinado colectivo tiene, como toda dinámica de construcción identitaria, un

---

<sup>52</sup> Alberto Melucci (1995: 44) denomina identidad colectiva al “proceso de «construcción» de un sistema de acción. La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida, producida por varios individuos (o grupos en un nivel más complejo) y asociada a las orientaciones de la acción en el campo de oportunidades y restricciones en las que ésta tiene lugar”.

carácter eminentemente relacional. El “nosotros” se definirá, en consecuencia, por oposición a un “ellos” a quien se atribuyen intereses y valores propios, por lo que la activación de la contienda incluye un componente ineludible de antagonismo (Gamson, 1995: 90).

Como hemos podido constatar a lo largo de las páginas precedentes, la aproximación a la acción colectiva desde los marcos cognitivos introduce nuevos elementos de juicio que ponen de relieve la importancia de cuestiones simbólicas y discursivas. Sin embargo, autores como Jeff Goodwin o James Jaspers (1999) han señalado el sesgo estructural en el que consideran “atrapado” al estudio de la movilización social. Afirman, así, que esta tendencia estructuralista afecta no sólo al enfoque de las oportunidades políticas<sup>53</sup>, sino también al análisis de la movilización de recursos, e incluso de los propios procesos enmarcadores. De acuerdo con estos autores, buena parte de las dinámicas culturales, fundamentales para el estudio de la protesta, han sido *de facto* ignoradas por el análisis de los marcos cognitivos, pese a su apuesta por incorporarlas. Reclaman, por ello, una mayor atención a la cultura en un sentido amplio<sup>54</sup>, capaz de trascender la visión estructural, instrumental y estratégica de la misma dominante en los estudios de la acción colectiva. Entendida de este modo, la cultura es interpretada como una “dimensión ubicua y constitutiva de todas las relaciones sociales, estructuras, redes y prácticas” (Goodwin y Jaspers, 1999: 47). En este sentido, media y envuelve tanto las ventanas de oportunidad política como las estructuras de movilización, en ella operan y se encuentran irremediabilmente inmersos los activistas, afectando de numerosas maneras, incluso no intencionales, a las posibilidades de articulación de la movilización social.

Asimismo, sostienen la necesidad de rescatar el rol de las intuiciones y la afectividad en el estudio de los movimientos sociales, generalmente relegados en favor de las dimensiones cognitivas. Por ello, en su obra editada junto a Francesca Polletta bajo el título *Passionate politics* (2001a), insistirán en el papel de las emociones en el desarrollo de la contienda política, lamentando el escaso lugar que han ocupado en la

---

<sup>53</sup> Estos autores señalan que, en función de cómo sean planteadas, las tesis de la EOP pueden llegar a ser “tautológicas, triviales, inadecuadas o simplemente erróneas” (Goodwin y Jaspers, 1999: 28).

<sup>54</sup> De hecho, señalan cómo aspectos tan variados de la cultura como “las tradiciones, el «sentido común», los artefactos materiales, los modismos, los rituales, las rutinas informativas, el saber-hacer, las identidades, el discurso y género discursivo” influyen en la acción colectiva, bien como constrictores bien como facilitadores de la misma (Goodwin y Jaspers, 1999: 48).

literatura debido al predominio de estudios de carácter racionalista, estructural y organizacional. Este desplazamiento se debe, en buena medida, a lo que consideran una falsa oposición entre emoción y racionalidad, entre lo instrumental y lo expresivo, incapaz de captar las combinaciones y sinergias generadas en la práctica por ambas dimensiones, pues “los movimientos instrumentales son también emocionales y expresivos” (Goodwin et al., 2001a: 15). Es preciso, desde esta perspectiva, reincorporar “la ira y la indignación, el temor y el disgusto, la alegría y el amor” en la investigación sobre la contienda política (Goodwin et al., 2001b: 2), pues estas emociones permean y contribuyen a explicar, junto a las estructuras de oportunidad, los recursos organizativos y los marcos cognitivos, la realidad política.

### **2.1.2. La desmovilización de los grupos armados desde un enfoque tripartito de la acción colectiva**

Los pasos dados durante los epígrafes previos nos han permitido realizar un breve recorrido por los principales enfoques analíticos desarrollados por la literatura de los movimientos sociales durante las últimas décadas. Hemos tratado con ello de exponer las principales perspectivas desde las que se ha abordado la acción colectiva, organizándolas, para su exposición, en tres grandes bloques diferenciados, a saber, las estructuras de oportunidad política, las teorías de la movilización de recursos y los marcos cognitivos de la acción colectiva. Sin embargo, y junto a otros autores (McAdam et al., 1999; Oberschall, 2004; Beck, 2008; Tarrow, 2009), consideramos necesario adoptar una mirada holística de la contienda política capaz de incorporar las diferentes dimensiones descritas, reconociendo con ello la importancia de los numerosos nexos que las vinculan. Como señalan McAdam, McCarthy y Zald (1999a: 29), “el reto real consiste en intentar esbozar el entramado de relaciones existente entre estos tres factores, logrando así una mejor comprensión de la dinámica inherente a los movimientos sociales”.

Con el objetivo de afrontar tal reto, este trabajo de investigación tomará en consideración aspectos referidos tanto a las oportunidades políticas, como a las estructuras de movilización y los procesos enmarcadores, si bien es cierto que con especial énfasis en las primeras, de las que derivaremos nuestras variables e hipótesis principales. Conciliaremos, en todo caso, diferentes niveles analíticos, en la senda de autores como Donatella Della Porta (1995), atendiendo tanto a la configuración del

contexto político en que se desarrolla la movilización contestataria, como a las características de los actores colectivos que operan dentro del mismo.

Según mencionamos al comienzo de este apartado, este marco analítico derivado de las teorías de la acción colectiva será aquí aplicado al estudio de la violencia insurgente, entendiendo ésta como uno de los repertorios posibles de confrontación y expresión de la contienda política. Las herramientas conceptuales procedentes de tales teorías han sido tradicionalmente empleadas para el estudio del origen de la movilización social de protesta y, en menor medida, para el examen de su evolución y resultados. No obstante, en este trabajo recorreremos el camino analítico inverso, tratando de dar respuesta a las causas que subyacen a la finalización del desafío violento al Estado, indagando en los motivos que explican el abandono de la “vía armada” como estrategia de lucha por parte de las organizaciones insurgentes. Este giro analítico ha de ser llevado a cabo con las debidas cautelas pues, como advierte Audrey K. Cronin (2006: 10), si bien es cierto que las hipótesis sobre la desmovilización de grupos rebeldes suelen estar conectadas al estudio de sus orígenes, la asunción de que las causas de estallido y fin de la violencia son sistemáticamente las mismas es, en ocasiones, una “sobresimplificación”.

Trataremos, por ello, de trazar argumentos teóricos sólidos que expliquen la naturaleza de los vínculos entre los marcos de oportunidad política, los recursos organizativos y las construcciones simbólico-culturales, y su relevancia específica para el estudio de la desactivación de la lucha armada. El empleo de este enfoque tripartito nos permitirá alcanzar una visión comprehensiva de los diversos factores intervinientes en la llegada a término de la violencia insurgente. Para ello, y a lo largo de los epígrafes siguientes, formularemos las hipótesis de investigación que serán objeto de comprobación en el posterior análisis empírico. Abordaremos, de este modo, los principales desarrollos teóricos propuestos por la literatura sobre violencia política colectiva, reflexionando en torno a las variables independientes consideradas clave para el estudio de la prevalencia y declive de la insurgencia.

## 2.2. EL IMPACTO DEL RÉGIMEN POLÍTICO SOBRE LA INCIDENCIA Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSURGENTE: UNA RELACIÓN DISCUTIDA

La violencia insurgente – desde su emergencia y envergadura hasta su finalización e impactos – ha de ser situada dentro del contexto específico en que se desarrolla, estudiándose en cuanto que fenómeno imbricado en una realidad sociopolítica concreta. Sólo si contemplamos las características del escenario en el que los actores se desenvuelven y representan la trama, podremos comprender de manera adecuada las motivaciones y estrategias adoptadas por los protagonistas de la misma<sup>55</sup>. Por este motivo, nuestra reflexión teórica en torno a la finalización de la actividad armada partirá, precisamente, del análisis del papel desempeñado por el marco en que tiene lugar el conflicto armado, así como de sus nexos e interacciones con la actividad desplegada por los sujetos colectivos. Para llevar a cabo tal aproximación, prestaremos atención a las ampliaciones y constricciones en la estructura de oportunidades derivadas del tipo régimen político imperante<sup>56</sup>.

El régimen político ha sido definido, de manera amplia, como el conjunto de instituciones que regulan el ejercicio y la lucha por el poder, así como los valores que inspiran y dotan de sentido a dicho entramado institucional (Levi, 1994: 1362). Este concepto alude, por ende, a la *forma de gobierno* vigente en una sociedad dada, a las normas y pautas de actuación que rigen su organización y funcionamiento político

---

<sup>55</sup> Theda Skocpol (1979: 18) emplea también, en su ya clásica obra *Los Estados y las revoluciones sociales*, una metáfora teatral de Hobsbawm (1975: 10), aseverando que “la evidente importancia de los actores en el drama...no significa que sean también dramaturgo, productor y escenógrafo”. La socióloga estadounidense defiende así un enfoque estructural de la violencia, alejado de interpretaciones voluntaristas, que pone de relieve el peso fundamental del Estado y el contexto internacional en los estallidos revolucionarios. Sin embargo, una de las críticas fundamentales a esta obra ha sido precisamente esa escasa atención prestada a los actores colectivos, que parece situarnos frente a “revoluciones sin revolucionarios” (Casanova, 1987). Existe un amplio debate en torno al equilibrio analítico entre actores políticos y marcos contextuales a la hora de analizar los procesos de movilización colectiva. Como hemos expuesto anteriormente, en este trabajo integraremos estos diversos niveles de análisis, con el propósito de obtener una visión comprehensiva del fenómeno de la violencia insurgente.

<sup>56</sup> Como ya mencionamos con anterioridad, el contenido de la EOP es una cuestión discutida y que, en todo caso, no agota su significado en el concepto de régimen político. Por ello, y pese al especial énfasis puesto en este aspecto en nuestra investigación, más adelante indagaremos en otras posibles dimensiones constitutivas de ventanas de oportunidad para la acción, tales como la capacidad estatal, el contexto internacional o las condiciones socioeconómicas.

básico<sup>57</sup>. En este sentido, resulta casi inevitable la referencia a la tipología clásica de los regímenes políticos propuesta por Aristóteles en su *Política* del siglo IV a.C. Como es bien sabido, el filósofo de Estagira clasificó entonces las diferentes formas de gobierno posibles en función de un doble eje: el número de personas detentadoras del poder – un solo individuo, una minoría o la multitud de los ciudadanos –, y su voluntad de velar por la justicia y el interés general. De tales criterios, derivaba tres formas puras de gobierno – la monarquía, la aristocracia y la república<sup>58</sup> –, y tres formas corruptas – la tiranía, la oligarquía y la demagogia<sup>59</sup> – resultado de la anteposición de los intereses particulares del gobernante, sea éste quien fuere, en su ejercicio del poder (Aristóteles, *Política*, Libro III, capítulo 4)<sup>60</sup>.

Numerosos autores han recorrido con posterioridad esta travesía de catalogación de regímenes políticos trazada en sus orígenes en la Antigua Grecia. Sin embargo, en este trabajo consideraremos únicamente las dos bifurcaciones finales del mencionado camino, correspondientes a la dicotomía básica “democracia *versus* dictadura”<sup>61</sup>. Así, a lo largo de las páginas siguientes, indagaremos en las relaciones que existen entre tales regímenes políticos y la actividad insurgente, partiendo de la consideración de que inciden de manera fundamental en el carácter e intensidad adoptados por la violencia colectiva (Tilly, 2007a; 2007b)<sup>62</sup>. Más específicamente, someteremos a examen el papel

---

<sup>57</sup> De modo similar, O'Donnell y Schmitter (1988: 118, nota 1) conceptualizan el término del siguiente modo: “Entendemos por «régimen» el conjunto de pautas, explícitas o no, que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos de gobierno, las características de los actores admitidos y excluidos con respecto a ese acceso, y los recursos o estrategias que pueden emplear para generar tal acceso”.

<sup>58</sup> Esta última clase de constitución pura recibirá el nombre de “república”, “*politeia*” o “democracia” en función de la traducción del texto original que se maneje.

<sup>59</sup> De nuevo aquí el papel del traductor se torna fundamental para entender la clasificación aristotélica de los regímenes políticos. Así, el término “democracia” es empleado con frecuencia para referirse a la forma desviada del gobierno de la mayoría, es decir, aquél que vela exclusivamente por el interés particular de los pobres.

<sup>60</sup> En particular, la edición de la obra en castellano que ha sido consultada para el abordaje de esta cuestión es, tal y como figura en la bibliografía, Aristóteles (1997: 121-128).

<sup>61</sup> Empleamos el término dictadura para referirnos a los regímenes monocráticos autoritarios sin vincularlo a su origen en la Antigua Roma, donde el Dictador era la autoridad suprema investida de un poder absoluto, de manera extraordinaria y temporal, con el propósito de superar circunstancias de emergencia particularmente difíciles (por ejemplo una guerra).

<sup>62</sup> Si bien es cierto que Charles Tilly defiende esta importancia crucial del tipo de régimen político en el estudio de la violencia colectiva, es preciso señalar que en sus análisis incorpora una doble dimensión bajo dicho concepto: la democracia o “consulta protegida” – a la que consagramos este apartado – y la capacidad gubernamental – que en nuestro caso será abordada más adelante –.

de la democracia – frente a la dictadura –, en cuanto que posible elemento potenciador o disuasorio del empleo de la violencia como instrumento de oposición política al Estado.

Llegados a este punto, y antes de dar paso al mencionado debate teórico, conviene aclarar brevemente de qué estaremos hablando al emplear el término “democracia”. No entraremos, no obstante, en las arduas disquisiciones filosóficas y terminológicas en torno a esta idea de “poder del pueblo” a la que el pensamiento político occidental ha consagrado buena parte de sus cavilaciones. No glosaremos tampoco las numerosas definiciones formuladas hasta la fecha sobre lo que sea democracia, ni las múltiples clasificaciones que han tratado de dotarles de una cierta coherencia y orden lógico. Tales empresas excederían los límites de la tarea aquí planteada, situándonos en la trampa de la imprecisión y la vaguedad. Sin embargo, es precisamente el reconocimiento de este carácter discutido del concepto de democracia, el que torna ineludible la tarea de explicitar el contenido del término al que nos referimos.

Partiremos, para ello, de un concepto asumible desde el punto de vista normativo, pero válido para la operacionalización requerida en toda investigación empírica. Desde una perspectiva electoralista *schumpeteriana*, la democracia es interpretada como un mecanismo de selección de las elites gobernantes a través de la celebración de procesos electorales. En palabras del propio autor, “el método democrático es el acuerdo institucional para alcanzar decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir a través de una lucha competitiva por el voto popular” (Schumpeter, 1976: 269). Este tipo de aproximación a la democracia, fundamentalmente basada en la presencia de elecciones libres, periódicas y competitivas<sup>63</sup>, será ampliado en este estudio siguiendo la dirección apuntada por Robert Alan Dahl. De acuerdo con el citado autor, los regímenes democráticos se caracterizan por el reconocimiento de la *igualdad política* de los miembros de la comunidad, así como por su continua vocación de satisfacer las aspiraciones y preferencias de la ciudadanía (Dahl, 1997: 13). El propio Dahl advierte, no obstante, de

---

<sup>63</sup> En este sentido, Adam Przeworski (1995: 14) llega a definir la democracia como aquel “sistema en el cual algunos partidos pierden las elecciones”.

las enormes dificultades de encontrar un régimen con tales características en el mundo real, por lo que reserva para éste el término *poliarquía*<sup>64</sup>.

El sistema poliárquico puede ser definido como “aquel régimen político que se distingue, en el plano más general, por dos amplias características: la ciudadanía es extendida a una proporción comparativamente alta de adultos, y entre los derechos de la ciudadanía se incluye el de oponerse a los altos funcionarios del gobierno y hacerlos abandonar sus cargos mediante el voto” (Dahl, 1992: 266). Estas dos dimensiones básicas constitutivas de la poliarquía – participación y oposición – se concretan según el autor a través de una serie de instituciones cuyo grado de presencia permitirá clasificar como tal a un régimen político dado. Así, el carácter electivo de los funcionarios, la existencia de elecciones libres e imparciales, el sufragio inclusivo, el derecho a ocupar cargos públicos, la libertad de expresión, la variedad de fuentes de información y la autonomía asociativa permiten dibujar un mapa político en el que pueden ubicarse – y ordenarse – las “democracias reales” frente a los sistemas no democráticos.

Esta perspectiva trasciende, por tanto, la visión exclusivamente electoral de la democracia, considerándola sujeta a principios básicos más amplios que garantizan la igualdad política, tales como la igualdad de voto, la participación efectiva de los ciudadanos, la comprensión informada de las políticas alternativas y sus consecuencias, el control de la agenda de decisiones públicas y la inclusión de los adultos (Dahl, 1992; 1999). En el transcurso de esta investigación, por tanto, donde se diga democracia, habrá de leerse democracia liberal representativa, en la que se reconocen de manera efectiva los derechos civiles y políticos – fundamentales e irrenunciables – anteriormente expuestos. La participación de los ciudadanos en la gestión de la “cosa pública”, y la posibilidad – legal y abierta – de contestación y oposición a las políticas del gobierno serán, en definitiva, elementos fundamentales de la operacionalización de este concepto para el posterior análisis empírico<sup>65</sup>.

Una vez abordadas, si bien de manera sucinta, estas cuestiones conceptuales básicas, retomaremos a continuación el objeto de la discusión teórica que aquí nos

---

<sup>64</sup> “A mi entender, no hay en la realidad ningún régimen, de dimensión considerable, totalmente democratizado (...). Así, pues, cabría considerar las poliarquías como regímenes relativamente (pero no completamente) democráticos” (Dahl, 1997: 18).

<sup>65</sup> En el Capítulo III de este trabajo, dedicado a los aspectos metodológicos de la investigación, examinaremos de manera pormenorizada los indicadores de democracia empleados en el análisis estadístico de los casos.



ocupa, es decir, el impacto del régimen político en la persistencia y eventual desaparición de la actividad insurgente. Para ello, comenzaremos revisando las diversas elaboraciones teóricas planteadas por la literatura sobre la relación existente entre democracia y violencia colectiva. Posteriormente, incorporaremos al análisis dos elementos adicionales que, desde nuestra óptica, pueden contribuir de manera notable en la profundización del estudio de las dinámicas operantes entre forma de gobierno e insurgencia. Por un lado, examinaremos la influencia específica de los procesos de cambio de régimen en las estrategias de los grupos armados, incidiendo en los efectos de los periodos de transición y posterior consolidación democrática. Por otro, y para terminar, pondremos nuestra lupa sobre las dinámicas propias de la represión estatal, atendiendo a su relación con el tipo de régimen político y sus consecuencias sobre la actividad armada contra el Estado.

### **2.2.1. Democracia e insurgencia. Los efectos de la apertura de oportunidades políticas sobre la actividad armada**

Las complejas relaciones trabadas entre la vigencia de regímenes democráticos y el recurso a la violencia por parte de los actores políticos opositores han sido tema de recurrente abordaje en la literatura. Sin embargo, pese a este considerable desarrollo, son escasos los consensos alcanzados en torno al carácter de las conexiones entre ambos fenómenos políticos. Así, pese a reconocerse en términos generales la relevancia tal vínculo, su naturaleza y efectos recíprocos permanecen aún hoy discutidos. La diada “democracia y violencia” configura, por tanto, todo un rompecabezas teórico en el que trataremos de encajar algunas piezas.

#### *2.2.1.1. La hipótesis de la “paz democrática”*

Tomaremos como punto de partida una de las ideas-fuerza que ha orientado buena parte del debate académico que aquí nos concierne: el concepto de “paz democrática”. Esta perspectiva propugna el carácter pacificador de los sistemas democráticos, cuyas características y funcionamiento favorecen el desplazamiento de la violencia como instrumento de competición y pugna en la arena política. Como sostienen Dam Reiter y Allan Stam (2002: 1), la defensa de los regímenes democráticos realizada por buena parte de líderes políticos y científicos sociales se apoya, precisamente, en “la creencia de que la democracia liberal trae consigo al menos tres

importantes virtudes: libertad, prosperidad y paz”<sup>66</sup>. Desde esta óptica, democracia y paz aparecen, por tanto, como términos asociados de manera intrínseca, de donde se colige que los países regidos por instituciones democráticas registran niveles sustancialmente inferiores de violencia colectiva que sus congéneres monocráticos.

Esta idea de la existencia de una “comunidad liberal-democrática pacífica” ha sido referida tanto a la esfera doméstica como a la internacional. Por lo que respecta a la segunda, se ha argumentado que la prevalencia de regímenes democráticos favorece un contexto internacional de concordia, menos proclive a los enfrentamientos bélicos. Esta línea de pensamiento, uno de cuyos precedentes más destacados se remonta a la publicación de *Sobre la paz perpetua* de Immanuel Kant en 1795<sup>67</sup>, ha sido desarrollada con posterioridad por numerosos autores (v.g. Rummel, 1983; Doyle, 1986; Russett, 1993; Gleditsch y Ward, 1998). El tan repetido enunciado de que “las democracias no luchan entre sí” y que, en términos generales, se muestran menos propensas a los conflictos armados interestatales, se apoya en soportes argumentales diversos. De este modo, cuestiones como la necesidad de rendición de cuentas de los gobernantes a los ciudadanos propia de este tipo de regímenes políticos<sup>68</sup>, la activación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el peso de determinados valores y principios normativos antibelicistas o la generación de una suerte de “fraternidad democrática” que disuade del empleo de las armas, han sido manejadas como explicaciones de este escenario de paz entre Estados<sup>69</sup>.

Sin embargo, en este trabajo descenderemos al plano de la política doméstica, pues son los conflictos violentos desarrollados en el seno de los Estados los que

---

<sup>66</sup> El subrayado es nuestro.

<sup>67</sup> Conviene aclarar que, entre los principios apuntados por Kant (2005) como garantía de mantenimiento de esa “paz perpetua” en la comunidad internacional, no se encontraban las democracias en el sentido actual del término. En su lugar, el autor menciona la importancia de la existencia de constituciones *republicanas*, con gobiernos representativos y separación de poderes, sustentadas sobre la libertad de sus ciudadanos.

<sup>68</sup> Este tipo de argumento estaba ya presente en *La paz perpetua* de Kant. Así, el filósofo prusiano mantenía que “si, como sucede con este tipo de constitución, el consentimiento de los ciudadanos es requerido para decidir si se declarará la guerra, es natural que sopesen bien la cuestión antes de emprender tan mal negocio. Decretando la guerra, estarían resolviendo echar todas las miserias de la guerra sobre su propio país. Esto implica: tener que luchar, tener que pagar los costes de la guerra con sus propiedades, tener que reparar dolorosamente la devastación que la guerra deja detrás y, finalmente, aceptar las pesadas deudas que amargarán incluso la propia paz” (Kant, 2005: 10).

<sup>69</sup> No han faltado, por supuesto, quienes han cuestionado esta hipótesis, bien negando la mayor, al rechazar este concepto paz democrática en el plano internacional, bien introduciendo matizaciones que alteran el contenido de la misma (v.g. Gowa, 1999; Reiter y Stam, 2002).

configuran nuestro objeto de investigación. En este nivel de análisis, el argumento de la paz democrática ha hecho énfasis en la capacidad de estos regímenes políticos para incorporar las demandas de los ciudadanos. La mayor permeabilidad de esta forma de gobierno frente a los regímenes dictatoriales supone, desde esta óptica, un efectivo antídoto contra la violencia colectiva, situándose en la base de la asociación negativa entre democracia e insurgencia. La ausencia de canales – permitidos – de participación y oposición, tanto institucionales como no institucionales, incentiva el empleo de la violencia por parte de los agentes opositores al Estado (Crenshaw, 1981: 383-384; Huntington, 1991b: 28-29; Tilly, 2007b; Gleditsch y Ruggeri, 2010)<sup>70</sup>. De acuerdo con la clásica formulación de Trotsky, recuperada por Jeff Goodwin (2001) en el propio título de una de sus obras, la violencia – revolucionaria – “tiene lugar sólo cuando *no hay otra salida*”<sup>71</sup> (cit. en Goodwin, 2001: 289), cuando el resto de vías de acceso a la arena política se encuentran bloqueadas al paso de la ciudadanía.

En este sentido, y según los argumentos expuestos, cuando existe la posibilidad de plantear reivindicaciones y expresar el descontento a través de la participación en partidos políticos, sindicatos, manifestaciones, huelgas o movimientos sociales, disminuyen de manera significativa las probabilidades de que la disidencia incurra en los elevados costes que las prácticas violentas llevan aparejados. Este reconocimiento del derecho a disentir, así como la intervención ciudadana en la actividad política, contribuyen a la percepción de una mayor legitimidad del sistema, lo que hace de las democracias una forma de gobierno con niveles superiores de aceptación y apoyo (Davenport, 1995: 690), reduciendo con ello el riesgo de que los ciudadanos opten por tomar las armas<sup>72</sup>. De acuerdo con Schmid (1992: 23-24):

La fortaleza de un Estado democrático es una emanación de la legitimidad de su gobierno. Donde las autoridades responden a las

---

<sup>70</sup> Como ya expusimos anteriormente, el concepto de insurgencia que manejamos en este estudio incluye en su seno desafíos armados al Estado de diversa magnitud y perfil estratégico. Por ello, las obras aquí referenciadas hacen alusión a la relación negativa entre democracia y guerras civiles, terrorismo o violencia colectiva en un sentido más amplio.

<sup>71</sup> El subrayado es nuestro. Por lo que respecta al referido estudio de Jeff Goodwin, cuyo objeto de análisis son los movimientos revolucionarios surgidos durante el periodo de la Guerra Fría, fue publicado bajo el nombre *No other way out: states and revolutionay movements, 1945-1991*.

<sup>72</sup> Al abordar este argumento de Davenport, Francisco Herreros (2005a) señala como posible objeción al mismo el hecho de que “aunque las democracias cuenten con un nivel de aceptación mayor entre sus ciudadanos del esperable en una dictadura, en realidad para que surja un grupo insurgente sólo se requiere que un porcentaje insignificante de la población tenga un incentivo suficiente para «alzarse en armas» contra el gobierno”.

demandas políticas de la mayoría y respetan los derechos de las minorías, los terroristas no pueden explotar con éxito cuestiones políticas para legitimarse. En tales circunstancias, las propias tácticas de los terroristas los desacreditan, privándoles de legitimidad.

Por lo tanto, la apertura de la estructura de oportunidades políticas a formas no violentas de intervención en los asuntos públicos favorece, de acuerdo con este enfoque, la pacificación interna. En palabras de Charles Tilly (2007b: 42):

La ampliación de la participación política, la extensión y la igualación de los derechos políticos, la regularización de medios no violentos de realizar reivindicaciones y la mayor disposición de terceras partes a intervenir en contra de la resolución violenta de las disputas que envuelven las reivindicaciones, restan fuerza a los procesos que generan las contiendas violentas.

Esta capacidad de los sistemas democráticos para integrar en su seno tanto actores como demandas de diverso tipo, por medio de los canales de participación señalados, es un mecanismo clave de reducción de la violencia. Sin embargo, de acuerdo con ciertos autores, no todas las democracias resultan igualmente permeables e integradoras. En su estudio sobre la incidencia de guerras civiles, Reynal-Querol (2002a; 2002b; 2005) señala cómo el grado de inclusividad del régimen resulta un elemento esencial para el análisis de la violencia colectiva: “La idea fundamental es que cuanto más incluyente sea un sistema político, más elevados serán los costes de oportunidad de la rebelión, y por tanto más baja será la probabilidad de que se produzca” (Reynal-Querol, 2002a: 35). La vigencia de regímenes democráticos y el reconocimiento de determinados derechos civiles y políticos no son, por tanto, protección suficiente contra la violencia. La clave es, desde esta perspectiva, la capacidad de los sistemas políticos de articular mecanismos efectivos de “pesos y contrapesos” e incorporar a agentes multipartidistas en los procesos de toma de decisiones, de manera que se generen políticas públicas de carácter consensual. El argumento que subyace a su propuesta es que los sistemas incluyentes de tipo consociacional serán capaces de garantizar mayores niveles de estabilidad en el país – vinculándose por ende con una menor incidencia de rebeliones –, en la medida en que son los grupos excluidos de los procesos de toma de decisiones quienes pueden quebrar el orden, activando procesos de agitación y conflicto sociopolítico (Reynal-Querol, 2005: 450).

Existen, por tanto, diferencias relevantes en la propensión a la violencia colectiva dentro de los propios regímenes democráticos en función de ciertas

características de su estructura y diseño institucional. La autora señala, en concreto, el impacto de los diferentes sistemas de representación en el riesgo de estallido de guerras civiles. De acuerdo con sus análisis, las probabilidades de rebelión disminuyen, por ejemplo, en los sistemas proporcionales frente a los mayoritarios, y en los parlamentarios frente a los presidencialistas, debido a su carácter más inclusivo (Reynal-Querol, 2002a; 2002b). En definitiva, un país democrático, pero excluyente, no será capaz de impulsar la paz.

En todo caso, si hay una herramienta básica de participación política y clave para la definición de un régimen como democrático es, según señalamos en páginas anteriores, la selección de cargos públicos mediante elecciones libres, periódicas y competitivas. La extensión del derecho a voto supuso un hito fundamental en el proceso de reconocimiento del principio de igualdad política sobre el que se asientan las democracias liberales. El reconocimiento del sufragio a las masas de trabajadores – y, posteriormente, de trabajadoras – hizo posible incorporar al sistema político a los pobres y excluidos que, de este modo, podían defender sus intereses a través de la participación en las instituciones democráticas. El sufragio universal permitía a los miembros de las clases bajas no sólo expresar sus preferencias a través del voto, sino también postularse como candidatos y promover sus reivindicaciones mediante la creación de partidos políticos de corte socialista.

Ante tales procesos de cambio y democratización, cabe preguntarse: ¿qué motivos subyacen a la expansión del derecho al sufragio?, ¿qué llevó a las elites políticas y económicas a aceptar la cesión de poder que implicaba la intervención del proletariado en la gestión de los asuntos públicos?, ¿por qué asumieron los riesgos redistributivos que dicha participación podía acarrear? La literatura nos brinda interpretaciones muy heterogéneas de este fenómeno. Así, la influencia de cambios en la escala de valores derivados de la Ilustración, la búsqueda de bases sociales de apoyo más amplias por parte de determinadas facciones de las elites enfrentadas, o el intento de las clases medias de lograr alianzas que permitieran un cambio a su favor en el equilibrio de poder, han sido esgrimidas con frecuencia como posibles causas explicativas de esta ampliación del derecho a voto (Acemoglu y Robinson, 2000: 1186-1191).

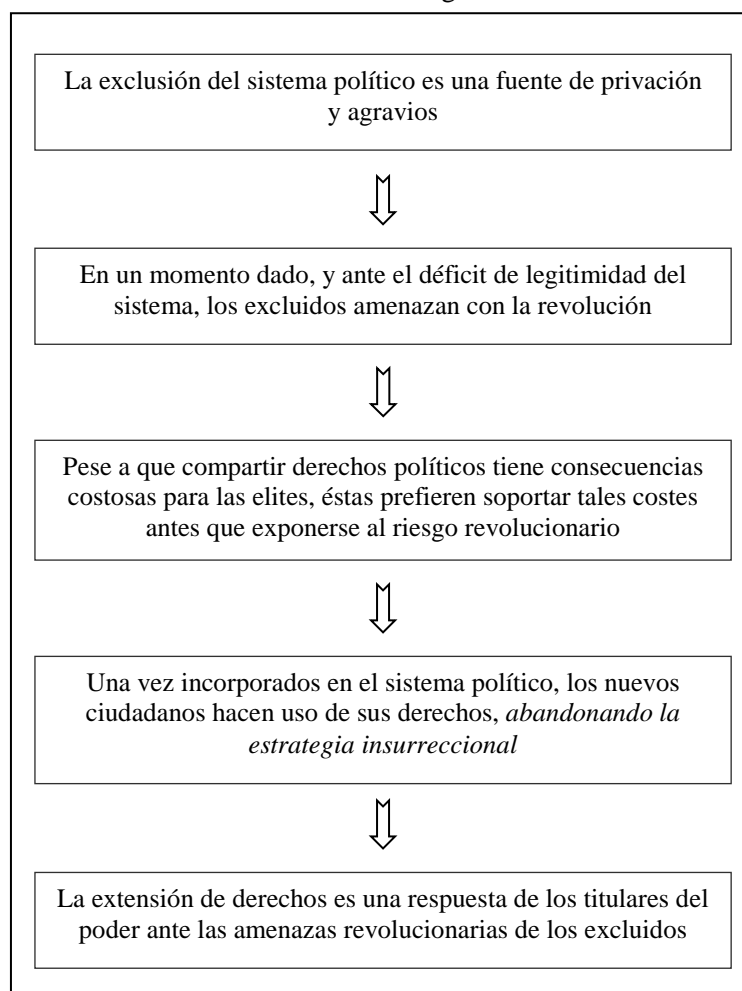
Sin embargo, por su relevancia para nuestro objeto específico de investigación, prestaremos aquí especial atención a aquellas teorías que asocian la extensión del sufragio al fenómeno de la violencia colectiva. En particular, atenderemos a la propuesta planteada por Acemoglu y Robinson (2000; 2006) en sus análisis sobre la universalización del reconocimiento de este derecho en los países occidentales y las raíces económicas de los regímenes políticos, desarrollada también años más tarde por Adam Przeworski (2008). El argumento central, expuesto de manera sencilla, es que la extensión del sufragio se explica por la voluntad de las elites dominantes de evitar intentonas revolucionarias por parte de los trabajadores. En este sentido, la ampliación del voto a las clases bajas es interpretada como una herramienta útil para la disuasión del empleo de la violencia por parte de las mismas, un “mal menor” para los grupos de poder orientado en último término al mantenimiento del *statu quo*<sup>73</sup>. Así lo expresaba, con claridad meridiana, el Primer Ministro británico Earl Grey en el debate parlamentario sobre la reforma electoral en 1831: “No hay nadie más decidido que yo contra los parlamentos anuales, el sufragio universal y el voto (...). El objetivo de mi reforma es prevenir la necesidad de revolución. Estoy reformando para preservar, no para derrocar” (cit. en Acemoglu y Robinson, 2000: 1182)<sup>74</sup>. De este modo, la secuencia lógica que vincula democratización y amenaza revolucionaria puede ser planteada, de acuerdo con Przeworski (2008: 292), de la siguiente forma:

---

<sup>73</sup> Este tipo de planteamiento nos recuerda a la célebre cita de *El gatopardo*, novela escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en la que aseveraba que “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

<sup>74</sup> La promoción de reformas como antídoto contra posibles estallidos revolucionarios ha estado presente en numerosos episodios a lo largo de la historia. Peter H. Smith (2009: 115-116) alude a esta cuestión al analizar la denominada Alianza para el Progreso, impulsada en 1961 por el gobierno estadounidense para América Latina. Los programas de ayuda que conformaban dicha iniciativa tenían el propósito de “estimular el crecimiento económico, el desarrollo social y la democracia política” en la región. De acuerdo con el citado autor, los objetivos de Washington eran explícitamente políticos, tal como manifiestan estas reveladoras declaraciones del presidente John F. Kennedy: “América Latina arde en descontento y malestar. Debemos actuar para calmar de inmediato un peligro a gran escala para que las instituciones libres tengan la oportunidad de elaborar soluciones a largo plazo” (cit. en Smith, 2009: 116).

**Figura 2.1.** Argumento del “riesgo revolucionario” para la extensión del derecho al sufragio



Fuente: Przeworski (2008: 292). Elaboración propia

Esta decisión estratégica de ampliar el derecho al sufragio no ha de ser interpretada como una dádiva concedida por las elites a las masas de trabajadores. Se trata, como subraya Przeworski (2008), de una *conquista* de las clases bajas, en la medida en que es el temor a que éstas tomen el poder a través de la insurrección armada la que impulsa los cambios hacia la democratización. Éstos se producen, por tanto, cuando tal amenaza resulta “creíble”, es decir, cuando la organización del movimiento obrero y la agitación social alcanzan niveles que hacen verosímil para las clases dominantes el riesgo de revolución. De acuerdo con Emmeline Pankhurst, líder del movimiento sufragista británico, “el Parlamento nunca concede reformas, a no ser que sea aterrorizado (...). El terrorismo es, de hecho, el único argumento que el Parlamento entiende” (cit. en Acemoglu y Robinson, 2000: 1186)<sup>75</sup>.

<sup>75</sup> En realidad, según Acemoglu y Robinson (2000: 1186), la estrategia de la violencia no resultó efectiva para la lucha de las mujeres por el reconocimiento de su derecho al voto debido, precisamente, a que no

En definitiva, esta línea interpretativa apunta en la dirección previamente expuesta, al considerar que la apertura de la EOP, vía articulación de canales de participación – en este caso electoral –, reduce las probabilidades del uso de la insurgencia como estrategia de oposición política. Sin embargo, una vez señalados los motivos que impulsan a las clases altas a la aprobación de reformas electorales que garantizan el sufragio universal, cabría preguntarse también cuáles son los incentivos de los trabajadores alzados en armas para considerar la democracia como una alternativa válida a la violencia revolucionaria. Retomando nuestra pregunta de investigación, el interrogante que se plantea es: ¿por qué deciden los insurgentes, en este contexto, abandonar la “vía armada”?

Si continuamos avanzando a lo largo la senda trazada por la obra de Acemoglu y Robinson (2000; 2006), la respuesta dada a esta pregunta tiene que ver en buena medida con la promesa de redistribución futura que se asocia al establecimiento de sistemas democráticos<sup>76</sup>. Desde esta óptica, las clases bajas cejarían sus intentonas revolucionarias ante la perspectiva de mejora de su situación socioeconómica tras el cambio de régimen. Pero la única forma de que las masas de trabajadores creyeran que esas concesiones económicas se mantendrían una vez esfumado el riesgo de insurrección armada, era que las elites aceptaran la – relativa – cesión de poder y modificación del equilibrio político que implica la ampliación del sufragio. Los grupos dominantes optaban así por soportar los costes de la subida de impuestos y la redistribución, al considerar que sus pérdidas materiales serían aún mucho mayores si la revolución triunfaba.

Bajo este enfoque, el abandono de la violencia insurgente se relacionaría, por tanto, no sólo con el aumento de la legitimidad del régimen y la obtención de *voz* dentro del mismo para las clases bajas, sino también con los resultados en términos de mejora de la calidad de vida que los insurrectos esperarían alcanzar como consecuencia de las

---

llegaron a constituir una amenaza revolucionaria creíble para las elites. De acuerdo con los mencionados autores, en la aprobación del sufragio femenino entraron en juego otro tipo de mecanismos, como el ya citado impacto de la alteración de los valores sociales dominantes. Por su parte, Przeworski (2008) sostiene que en la mayor parte de los países la concesión del derecho a voto a las mujeres fue más bien un instrumento de competición electoral, resultado de cálculos de los partidos contendientes sobre la posible ampliación de su base de apoyo tras el reconocimiento de este derecho.

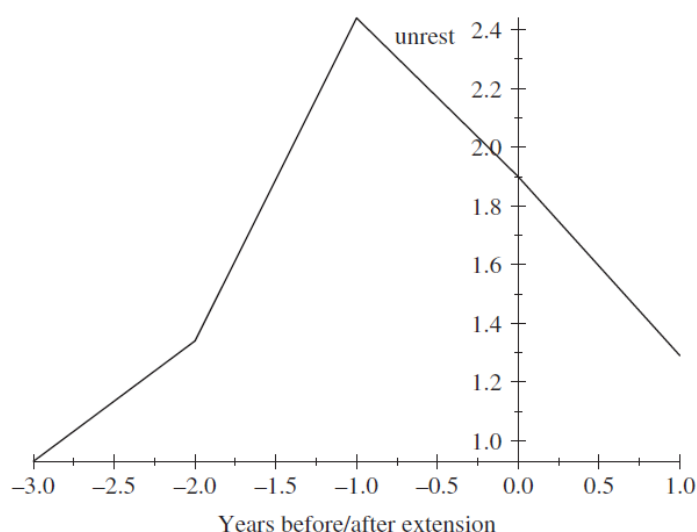
<sup>76</sup> De acuerdo con estos autores, las décadas posteriores a la democratización de los países europeos fueron testigos de importantes transformaciones sociales, aumento de impuestos, extensión de la educación a las masas y reducción de la desigualdad (Acemoglu y Robinson, 2000).



transformaciones políticas derivadas de la democratización. Así lo expresaba el líder cartista J. R. Stephens al reclamar el sufragio universal como instrumento para obtener “el derecho a un buen abrigo... a un buen sombrero... a un buen techo... [y] a una buena cena” (cit. en Acemoglu y Robinson, 2006: 24). En la medida en que las democracias redistribuyen más que las dictaduras, tiene sentido pensar que esta forma de gobierno puede ser un factor relevante para impulsar la paz doméstica. La democracia podría ser interpretada, en resumidas cuentas, como un mecanismo considerablemente eficaz para desactivar los desafíos armados al Estado, o al menos aquéllos procedentes de grupos que plantean reivindicaciones vinculadas a agravios de carácter socioeconómico.

De este tipo de aproximación al paso del sufragio censitario – el voto de los hombres ricos – al sufragio universal podría derivarse, como advierte Adam Przeworski (2008: 307), una visión instrumental de los derechos políticos por parte de la clase obrera. Así, los trabajadores no interpretarían la igualdad política como un fin en sí mismo, sino más bien como un medio para conseguir ciertas mejoras socioeconómicas. Este tipo de asunciones pueden resultar problemáticas, pues parece claro que no ha de concluirse la existencia de una relación mecánica y determinista entre redistribución, democracia y rebelión. Así, si bien es cierto que de acuerdo con Acemoglu y Robinson (2000; 2006) los países más igualitaristas, o aquéllos que reconocieron antes ciertos sistemas de protección social, sufrieron democratizaciones más tardías, también lo es que en términos generales esas condiciones no fueron suficientes para prevenir las revueltas y acabaron experimentando también el impulso democrático. Asimismo, la inclusión en el sistema político no fue garantía directa e inmediata de desactivación de la lucha armada. De hecho, la propia relación del socialismo con la democracia representativa fue objeto de encendidos debates durante años y el nivel de organización – y disciplina – de los partidos obreros tuvo además importantes repercusiones en su capacidad de prevención del conflicto (Przeworski, 2008: 307-308). Sin embargo, pese a tales observaciones, parece plausible asociar la agitación social con las extensiones del sufragio, y las estrategias de lucha adoptadas por los trabajadores con la naturaleza del régimen político imperante. En el siguiente gráfico puede hallarse una visión esquemática de tales relaciones:

**Gráfico 2.1.** Intensidad media de la agitación social en los años previos y posteriores a las extensiones del sufragio<sup>77</sup>



Fuente: Przeworski (2008: 309)

Según indicábamos más arriba, la promesa de redistribución futura y políticas favorables a las mayorías sólo se torna creíble para las clases bajas a través de la extensión del sufragio. Los canales de participación política abiertos con la instauración de sistemas democráticos producen una transformación del poder *de facto* de las masas de trabajadores, representado por su fuerza revolucionaria en un momento dado de convulsión social, al poder *de iure* que implica su participación como decisores mediante los procesos electorales (Acemoglu y Robinson, 2006). De este modo, el carácter temporal y transitorio del primer tipo de poder adquiere vocación de continuidad a través de las instituciones democráticas. Son éstas las que hacen posible pensar que esas decisiones redistributivas adoptadas hoy tendrán un carácter duradero y serán respetadas también mañana.

En realidad, este cambio en el equilibrio entre poder *de facto* y *de iure*, así como su vinculación con el tránsito hacia la democracia, podía observarse ya en cierto modo formulado en algunas de las justificaciones clásicas de la regla de las mayorías. Basta pensar en el concepto de democracia de Herodoto, quien afirmaba que “en su viejo y estricto sentido denota un gobierno en el cual rige la voluntad de la mayoría de ciudadanos cualificados (...), de modo que la fuerza física de los ciudadanos coincide (hablando en términos generales) con su poder de voto” (cit. en Przeworski, 2005: 266).

<sup>77</sup> En este trabajo, Adam Przeworski operacionaliza la variable “agitación social” como la suma de huelgas, manifestaciones y disturbios. Su base de datos cubre 187 países desde 1919 hasta el año 2000.

De modo similar, aunque unos cuantos siglos más tarde, Condorcet apuntaba cómo “por el bien de la paz y la utilidad general, hay que situar la autoridad donde está la fuerza” (cit. en Przeworski, 2005: 271), defendiendo así la conveniencia de que las sociedades se rijan por las decisiones y voluntad de la mayoría. En este sentido, podría considerarse a los sistemas democráticos capaces de convertir, al menos teóricamente, la fortaleza del número y la capacidad revolucionaria de las masas de trabajadores, en poder político derivado del cumplimiento de las reglas del juego democrático.

Tales reflexiones nos sitúan frente a otro de los factores que consideramos clave para el análisis de la relación existente entre insurgencia y democracia. El establecimiento de este tipo de régimen vuelve factible el acceso al poder de esas mayorías anteriormente excluidas, suponiendo así un incentivo para el abandono de la estrategia de las armas. En este sentido, el concepto de “oportunidades electorales”, señalado por Adam Przeworski (1995; 2001; 2004; 2005) en varios de sus trabajos, puede jugar un papel fundamental para la prevención y supresión del conflicto violento. Pero reconstruyamos este argumento desde el principio. De acuerdo con el citado autor, una de las dinámicas más sorprendentes – ¡milagrosa llega a decir! – de la democracia es, precisamente, que los grupos contendientes acepten los resultados electorales. Tras los comicios, y en condiciones normales, quien pierde las elecciones asume la derrota y abandona la Casa de Gobierno – en caso de ser el inquilino –, o admite que, por el momento, seguirá sin ser él quien la ocupe – en caso de tratarse de la oposición –. En realidad, este hecho que tiende a darse por sentado, no deja de plantear interrogantes sobre por qué deciden los diferentes grupos en liza someterse a la incertidumbre<sup>78</sup> de un proceso electoral y respetar después el mandato de las urnas. La pregunta es, por tanto, y según la enuncia el propio Adam Przeworski (1995: 23), “¿en virtud de qué mecanismos las fuerzas políticas perdedoras en una contienda acatan los resultados y continúan participando, en vez de subvertir las instituciones democráticas?”.

La respuesta a esta cuestión nos permite retomar el hilo conductor de nuestra argumentación. Esa incertidumbre a la que hemos aludido, institucionalizada mediante las normas de funcionamiento del proceso democrático, contribuye a explicar la

---

<sup>78</sup> Este concepto ocupa una posición central en la teoría de Przeworski sobre la democracia. Así, definirá esta forma de gobierno como “un sistema de resultados abiertos regulados o de incertidumbre organizada” (Przeworski, 1995: 19), un proceso caracterizado por el sometimiento de “todos los intereses a la competencia, en la institucionalización de la incertidumbre” (Przeworski, 1995: 22).

participación y sometimiento a la contienda electoral. El carácter incierto e indeterminado de los resultados de la misma permite imaginar – y confiar – en un escenario ulterior en el que los perdedores consigan hacerse con el poder. Las instituciones de la democracia hacen posible para los diversos actores políticos pensar en un largo plazo en el que el equilibrio de poder se vea alterado. Desde esta perspectiva, las derrotas presentes son acatadas debido al convencimiento de que podrán ser trocadas por victorias en el futuro, permitiendo así promover los propios intereses una vez alcanzado ese triunfo aún por venir (Przeworski, 1995: 30).

Vinculando este razonamiento a nuestro objeto específico de estudio, es decir, a la finalización de las estrategias insurgentes, podríamos considerar que la democracia será efectiva para desmovilizar a aquellos grupos armados que, transformados en partidos o con un brazo político concurrente a elecciones, tienen alguna probabilidad – o creen tenerla – de ganar en el futuro. La contemplación de la democracia como alternativa a la lucha armada se asociaría, por tanto, con la valoración de las propias oportunidades electorales. La posibilidad de conquista del poder y la perspectiva de llegar a gobernar puede hacer más atractivo esperar “el turno” de ganar en las urnas que rebelarse contra el sistema, evitando así el derramamiento de sangre (Przeworski, 2001: 13-14; 2004: 312). Este tipo de régimen sería, de este modo, capaz de canalizar los conflictos sociales, institucionalizando, mediante sus reglas de actividad, el enfrentamiento sin violencia. Las armas de fuego se sustituirían así por las armas propias de la competencia electoral, los votos, que como ya indicaba Friedrich Engels pueden ser también “piedras de papel” (cit. en Przeworski y Sprague, 1986; Przeworski, 2005: 270).

Sin embargo, asumiendo que los mecanismos expuestos hasta el momento actúan tal y como hemos señalado, no seríamos capaces de dar cuenta aún de algunas cuestiones que probablemente rondan ya la cabeza del lector de este texto. En primer lugar, y considerando la probabilidad de acceder al poder como elemento disuasorio de la violencia en sistemas democráticos, es difícil explicar por qué motivo habrían de desmovilizarse entonces grupos armados más pequeños, o con escaso apoyo entre la ciudadanía, cuyas probabilidades de ganar elecciones parecen remotas. Asimismo, y pensando también en organizaciones rebeldes de mayor tamaño – y por ende capacidad de desafío al Estado –, podríamos preguntarnos por qué tendría que dejar de resultarles atractiva, en contextos democráticos, la opción de la toma del poder por la vía

revolucionaria, con el objetivo de conseguir así transformaciones y políticas redistributivas más profundas o radicales. Sugeriremos aquí al menos dos ideas clave que contribuyen a darnos algunas pistas sobre la solución a estos interrogantes: los elevados costes del uso de la violencia y la aversión al riesgo de los actores<sup>79</sup>.

Fieles a su declarada voluntad de cumplir con el principio de la denominada “navaja de Occam”, Acemoglu y Robinson (2006: 26-27) responderán con parsimonia a la cuestión que nos ocupa: la revolución deja de ser atractiva en democracia sencilla y fundamentalmente porque resulta enormemente costosa. Estos costes derivados de la violencia insurgente habrán de ser soportados no sólo, como ya hemos visto en páginas precedentes, por las elites que pueden ver peligrar su riqueza y privilegios, sino también por el conjunto de la ciudadanía. Por ello, la perspectiva de obtener políticas favorables en el futuro a través de una forma de gobierno democrática puede desincentivar el deseo de asumir esos elevados costes en términos de pérdidas materiales y humanas acarreados por la revolución<sup>80</sup>. La articulación de una alternativa menos costosa que la lucha armada para alcanzar los objetivos propuestos estaría, según esta línea argumental, en la base de la desmovilización de las organizaciones rebeldes.

Asimismo, el propio desafío al sistema democrático y la posibilidad de poner en peligro su supervivencia a través de la violencia puede ser también interpretado en términos de coste por los actores. Éstos tendrán en cuenta, por tanto, el riesgo de que el conflicto desatado desemboque en una dictadura, en la que la represión y el monopolio del poder puedan no sólo aplastar los posibles logros alcanzados, sino además poner en riesgo su propia integridad física. Como sostiene Adam Przeworski (1995: 53), el valor atribuido a la derrota desempeña aquí un papel fundamental:

Las fuerzas políticas que disponen de una alternativa externa – la de subvertir la democracia o inducir a otros a la subversión – pueden

---

<sup>79</sup> Efectivamente, no son éstos los únicos mecanismos explicativos que podrían ser aducidos. Aspectos como el afianzamiento y compromiso con la cultura democrática y sus reglas de juego, la adhesión a valores cívicos y antibelicistas, o el impacto del contexto y las presiones internacionales en pro de la democracia pueden desempeñar también un papel en la relación trabada entre régimen político y abandono de la “vía armada”. A lo largo de este trabajo, en epígrafes posteriores, haremos alusión y retomaremos algunas de estas cuestiones.

<sup>80</sup> Se trata, lógicamente, de una visión “modelizada” de la realidad. Pese a que los autores afirman que tal es la tendencia general, reconocen también la posibilidad de que la democracia no sea capaz de evitar un estallido revolucionario. Precisamente por este motivo, Acemoglu y Robinson (2000: 1177; 2006: 26-27) señalan las dificultades de prevenir la revolución en sociedades donde las democracias han creado escasas ganancias para los pobres.

seguir participando en el juego democrático si consideran que incluso una repetida sucesión de derrotas bajo la democracia resulta preferible para ellas a un futuro bajo un sistema alternativo. La democracia ofrece, a fin de cuentas, un valor fundamental que puede ser suficiente para inclinar las preferencias de muchos grupos a su favor (...): el de la protección frente a la violencia arbitraria<sup>81</sup>.

La aversión al riesgo podría, por tanto, coadyuvar a explicar el abandono de las armas por parte de la insurgencia en contextos democráticos. En este tipo de régimen las intentonas revolucionarias resultan menos apetecibles porque es mucho lo que hay en juego y mucho lo que perder<sup>82</sup>. En definitiva, y valiéndonos de la célebre cita del *Manifiesto Comunista*, podría decirse que aunque efectivamente quede aún todo “un mundo que ganar”, en los sistemas democráticos habría mucho que perder además de “las cadenas” (Marx y Engels, 2001: 69)<sup>83</sup>.

#### 2.2.1.2. La hipótesis de la “vulnerabilidad democrática”

Como hemos visto hasta el momento, la apertura de canales de participación y expresión, el grado de inclusividad del régimen, la promesa de redistribución futura y la posibilidad – al menos teórica – de acceder al poder a través del procedimiento electoral, pueden contribuir a explicar el impacto de la democracia en el abandono de la estrategia de las armas. Sin embargo, parte de la literatura argumenta, frente a lo anteriormente expuesto, la existencia de una relación positiva entre la forma de gobierno democrática y los niveles de violencia política colectiva a los que la sociedad se ve expuesta. De acuerdo con esta perspectiva, diversas características propias de los regímenes democráticos hacen de ellos sistemas especialmente vulnerables a los desafíos violentos. A continuación, expondremos brevemente los principales mecanismos aducidos por la que podría denominarse “tesis de la vulnerabilidad democrática”.

---

<sup>81</sup> En este mismo texto, Przeworski (1995: 53) menciona a continuación unas palabras pronunciadas por Santiago Carrillo en 1974, por aquel entonces secretario general del Partido Comunista de España, que ejemplifican la dinámica expuesta: “Debemos tener el valor de explicar a la clase obrera que es preferible pagar una plusvalía a ese sector de la burguesía antes que crear una situación que podría volverse en su contra”.

<sup>82</sup> Przeworski (2001; 2005) matizará que este mecanismo actúa fundamentalmente en sociedades prósperas, pues es en ellas donde hay más en riesgo ante un posible colapso democrático.

<sup>83</sup> La cita textual de Marx y Engels (2001: 69) decía, como bien es sabido: “Las clases dominantes pueden temblar ante una Revolución Comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar”.

En primer lugar, se ha señalado el efecto de la competición política, situada en la propia esencia de los regímenes democráticos, sobre la probabilidad de experimentar ataques violentos. Tal es la perspectiva de autores entre los que se encuentra Erica Chenoweth (2010), quien sostiene que la democracia puede provocar una proliferación de la actividad terrorista. Según esta línea argumental, ese incremento de los incidentes armados deriva de la competencia entre organizaciones con diferentes ideologías, que tratarán de ganar influencia y notoriedad mediante la violencia, ante la existencia de intereses en disputa. La autora pone así de relieve la importancia de las dinámicas intergrupales, de la pugna tanto entre grupos armados diversos, como entre éstos y organizaciones políticas convencionales. Este entorno de fuerte competitividad política por el control de la agenda y la influencia en la formulación de políticas públicas alienta a los actores a buscar tácticas efectivas para la expresión de sus preferencias. Se generan, desde esta óptica, dinámicas agresivas entre los grupos que rivalizan entre sí, recurriendo incluso a las armas y suscitando un aumento de la violencia.

Junto al papel de la competición política propia de las democracias, se ha señalado también el impacto de las restricciones impuestas al Estado por el “imperio de la ley” y el reconocimiento de determinadas libertades civiles y políticas (Eubank y Weinberg, 1994; 1998; 2001). De acuerdo con esta perspectiva, derechos democráticos como la libertad de expresión, de movimiento, de reunión y de asociación pueden favorecer la actividad de aquellas organizaciones que plantean un desafío armado al Estado, redundando en un aumento de la violencia. Estas características democráticas actuarían, por tanto, en detrimento de la seguridad interna, ampliando el margen de maniobra de los insurgentes y “facilitando” sus operaciones.

Asimismo, los costes de la actividad armada podrían verse reducidos no sólo como consecuencia de esta supuesta “permisividad democrática” y su apertura de oportunidades para la acción – en este caso violenta –, sino también debido al propio sometimiento del aparato estatal a la legalidad. La existencia de procedimientos reglados de inculpación, la necesidad de pruebas sólidas y concluyentes para encarcelar a los integrantes de la insurgencia, y en todo caso el control y restricciones a la actividad estatal por parte de la legislación, podrían interpretarse como impulsores de la actividad armada, en la medida en que limitan la política contrainsurgente de los gobiernos. Los obstáculos y contención a la hora de contraatacar, represaliar y hacer uso de la fuerza estatal propios de los países democráticos jugarían, de acuerdo con esta

óptica, en favor de los grupos rebeldes al disminuir los costes de la acción, incentivando y prolongando así su actividad insurreccional (Pape, 2003: 349-350; 2005: 44; Kydd y Walter, 2006: 61).

Sin embargo, una de las principales líneas de desarrollo teórico en torno a esta relación positiva entre democracia y violencia – fundamentalmente terrorista – es aquella que analiza la incidencia de la actividad insurgente vía impacto en la opinión pública. Debido a las normas de funcionamiento del proceso democrático, y al papel fundamental de la celebración periódica de elecciones, resulta evidente la importancia que las opiniones de la ciudadanía adquieren para los gobernantes en este tipo de régimen político. El hecho de que las democracias se muestren especialmente sensibles a los avatares de la opinión pública ha sido señalado por diversos autores como posible causa explicativa de la incidencia del terrorismo en esta forma de gobierno. Por este motivo, los estudios sobre la relación entre opinión pública, preferencias electorales y violencia han adquirido una especial relevancia en los últimos años.

El argumento central de este tipo de enfoque tiene, en realidad, mucho que ver con las definiciones de terrorismo que analizamos en el primer capítulo de este trabajo. De acuerdo con este enfoque, y expuesto de manera sintética, los atentados violentos tienen como objetivo infligir dolor en la población del país atacado que, atemorizada, presionará a sus gobiernos para que cedan en los objetivos perseguidos por los grupos armados. En sus estudios sobre el terrorismo suicida, Robert A. Pape (2003; 2005) destaca el hecho de que este tipo de ataques ha sido conducido, desde los años ochenta, exclusivamente contra Estados con fuerzas de ocupación en el extranjero y una forma de gobierno democrática. De acuerdo con el autor, tal hecho no es, obviamente, fruto de la casualidad, sino que tiene que ver con la interpretación que los insurgentes hacen de los efectos que sus ataques tendrán en un público con “bajos umbrales de tolerancia a los costes y una gran habilidad de afectar a las políticas del Estado” (Pape, 2003: 349). Sin embargo, algunos autores como Savun y Phillips (2009) han señalado que, en realidad, la incidencia del terrorismo transnacional tiene más que ver con la política exterior seguida por los Estados – por ejemplo la ocupación extranjera señalada por Pape (2005: 23) –, que con la naturaleza democrática de sus respectivos gobiernos.

Otros trabajos han incidido, más específicamente, en la influencia del terrorismo sobre los resultados electorales, mostrando su capacidad de modelar – en diferentes



grados y sentidos – las preferencias de los votantes. En su examen sobre los efectos de los ataques palestinos en el electorado israelí, Berrebi y Klor (2008) advierten la existencia de una tendencia al incremento del voto a partidos conservadores, así como a una polarización ideológica del electorado. Por su parte, Bali (2007) destaca la importancia del “timing” de los ataques y la relevancia de los asuntos y políticas vinculadas al conflicto violento, a través de su análisis de los atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004. De acuerdo con su estudio, éstos ampliaron la movilización del electorado de centro e izquierda, así como de numerosos ciudadanos generalmente reticentes participar en política, alterando además las opciones electorales de ciertos votantes<sup>84</sup>.

En este sentido, Criado (2011) subraya la necesidad de analizar no sólo la influencia de las estrategias de los grupos armados sobre la opinión pública en general, sino también sobre su propio electorado cuando disponen de un “brazo político” concurrente a elecciones. Así, a través de su estudio de la organización terrorista ETA, concluirá que determinadas decisiones tácticas de los grupos armados, como la declaración de treguas y la apertura de negociaciones con el gobierno, pueden tener también consecuencias políticas importantes. En el caso concreto que analiza, tales procesos redundaron en un ascenso del apoyo electoral a Herri Batasuna, como resultado de la credibilidad de la organización en términos de compromiso con la causa independentista vasca, y la confianza en su capacidad de presión en la mesa de negociaciones en pos de tales objetivos.

Los ejemplos previamente expuestos coinciden en destacar el impacto que la violencia colectiva organizada puede tener sobre los sistemas democráticos a través de su influencia en la opinión pública, cristalizada en los procesos electorales. Por ello, se ha afirmado con frecuencia que, en la medida en que los gobiernos democráticos han de responder ante el electorado, la estrategia del terror podría volverlos más receptivos a las demandas de los grupos armados (Criado, 2011: 498). En definitiva, este tipo de explicaciones contribuiría a respaldar la hipótesis de que el terrorismo es más frecuente en países democráticos, bajo la consideración de que en ellos resulta potencialmente más efectivo.

---

<sup>84</sup> En todo caso, la autora señala también el innegable papel que la política exterior del gobierno del Partido Popular y su falta de transparencia en la gestión de los atentados tuvieron en los resultados de los comicios (Bali, 2007: 670).

### 2.2.1.3. La hipótesis de los “efectos mixtos”

Para terminar, en este maremágnum teórico sobre la naturaleza de los vínculos existentes entre democracia e insurgencia no han faltado los autores que señalan el carácter mixto de los efectos del tipo de régimen sobre la actividad armada. Schmid (1992) recupera e incorpora buena parte de los argumentos aducidos hasta el momento. En su trabajo señala cómo, efectivamente, mientras algunos de ellos constituyen fortalezas (v. g. la alternancia en el poder mediante elecciones), otros son debilidades (v. g. la libertad de movimiento y asociación o las mencionadas limitaciones impuestas por el imperio de la ley) en la manera en que las democracias bregan con el fenómeno de la violencia, enfrentándose al dilema de la “aceptabilidad-efectividad” en sus políticas contraterroristas. En esta misma línea, Li (2005: 294) sostiene que “la democracia ha demostrado promover y reducir los incidentes terroristas transnacionales, sólo que vía diferentes mecanismos causales”. Disecciona así el concepto de democracia, argumentando que los diferentes atributos de este tipo de régimen tienen, de hecho, impactos diversos sobre la violencia terrorista. Concluye, de este modo, que pese a que las restricciones institucionales a los gobiernos debilitan su capacidad de lucha contra el terrorismo, manteniendo por tanto una asociación positiva con la violencia insurgente, el establecimiento de canales de participación política pone de manifiesto una relación inversa. Desde esta perspectiva, no puede, en resumidas cuentas, encontrarse una respuesta única al interrogante sobre la relación forjada entre ambos fenómenos.

En conclusión, como ya adelantamos al comienzo de nuestro recorrido teórico, la naturaleza de la relación entre democracia e insurgencia es objeto de arduas discusiones. Hemos constatado la existencia de posiciones encontradas en la literatura, de explicaciones antagónicas que apuntan hacia interacciones muy diversas entre violencia colectiva y tipo de régimen. Nos hallamos, por tanto, en un terreno teórico enfangado, en el que la escasez de acuerdos y la ausencia de consensos pueden dificultar nuestro avance trabándonos los pasos. Conscientes de estas dificultades, en el análisis empírico pondremos a competir los argumentos rivales expuestos a lo largo de las páginas precedentes<sup>85</sup>. Para ello, trataremos de verificar la hipótesis con la que

---

<sup>85</sup> Estos argumentos serán aplicados, específicamente, a nuestro marco temporal y geográfico de estudio. Como ya avanzamos en el apartado introductorio a esta investigación, analizaremos la violencia insurgente en América Latina entre 1970 y 2000. En todo caso, en el Capítulo III, destinado a la reflexión

comenzábamos este apartado, a saber, la llamada hipótesis de la “paz democrática”. De este modo, el objetivo es comprobar si los mecanismos aducidos por esta línea de argumentación – la apertura de canales de participación, la inclusividad y redistribución propias de las democracias, y la posibilidad de acceso al poder mediante elecciones – son efectivamente capaces de aumentar las probabilidades de finalización de la insurgencia. En definitiva, se trata de constatar, como ya dijera Bertrand Russell, refiriéndose en aquella ocasión a la violencia ejercida desde los Estados, si “la democracia, pese a no ser una solución completa, es una parte esencial de la solución” (cit. en Davenport, 2007a: vii).

*Hipótesis 1a:*

*Incrementos en los niveles de democracia favorecen la desmovilización de los grupos insurgentes a través de la apertura de oportunidades y canales de participación no violenta para la promoción de sus objetivos políticos. La permeabilidad del sistema democrático, la legitimidad gubernamental, la posibilidad de acceso al poder o las expectativas de redistribución futura aumentan las probabilidades de finalización de la actividad armada.*

### **2.2.2. ¿Cómo afectan los cambios de régimen a la estrategia insurgente? Incorporando al análisis el papel de los procesos de transición y consolidación democrática<sup>86</sup>**

En el camino recorrido hasta el momento, hemos rastreado la naturaleza de las relaciones que se establecen entre tipo de régimen y violencia política insurgente, indagando en el papel que la democracia juega en este rompecabezas. Argumentábamos así que una de las dimensiones clave de la EOP, a saber, el nivel de apertura o cierre del sistema político, afecta de manera fundamental a las estrategias adoptadas por los

---

metodológica, justificaremos la selección de dicho marco, debatiendo en profundidad las decisiones tomadas.

<sup>86</sup> Cabe aclarar aquí que, a lo largo de este trabajo, prestaremos atención a los posibles efectos de las transiciones sobre la violencia política insurgente, sin escudriñar la existencia de una posible relación opuesta. Efectivamente, el estudio sistemático de la eventual bidireccionalidad de dicha asociación, y la necesidad de desenmarañar la madeja de la violencia generada por las transiciones *versus* las transiciones generadas por la violencia, son en gran medida tareas pendientes que es preciso continuar explorando. Ya aludimos brevemente, en el anterior apartado, cómo la expectativa de violencia revolucionaria podía vincularse con la extensión del sufragio en los países occidentales. Sin embargo, un análisis exhaustivo de estas cuestiones se apartaría de nuestro objeto específico de estudio, suponiendo la delimitación de una variable dependiente distinta, por lo que, por el momento, habrá de quedar aplazado para futuras investigaciones.

actores rebeldes. Sin embargo, en este trabajo consideramos imprescindible incorporar al análisis no sólo el impacto del régimen, sino también el efecto de los procesos de transición y cambio político *per se*. Pese a tratarse de momentos de grandes transformaciones en el seno del Estado, convulsión sociopolítica y fracturas entre las elites, aspectos que presumiblemente influirán en las decisiones de los actores colectivos, esta cuestión ha sido con frecuencia postergada en los estudios en torno a la insurgencia. Intentaremos aquí contribuir a este debate, bajo la premisa de que los procesos de democratización constituyen periodos relevantes para entender la configuración de la estructura de oportunidades bajo la que operan los grupos armados.

#### *2.2.2.1. Conceptos, definiciones y algunos mitos*

El estudio de los cambios de régimen, y más específicamente de las transiciones hacia la democracia, experimentó un enorme desarrollo a partir de la década de los años setenta del siglo XX. Tanto fue así, que comenzó a hablarse de la “transitología” (Schmitter, 1994) como una suerte de subdisciplina de la Ciencia Política que tenía a tales procesos como objeto específico de estudio<sup>87</sup>. La emergencia y auge de esta área de conocimiento ha de entenderse dentro de un contexto histórico específico: la denominada “tercera ola” de democratizaciones (Huntington, 1991a; 1991b). Este concepto, sobre el que volveremos de nuevo más adelante, alude al conjunto de transiciones a la democracia que tuvieron lugar a partir de la “revolución de los claveles” de Portugal en 1974. De acuerdo con Samuel P. Huntington, las transformaciones políticas acaecidas durante las décadas subsiguientes, constitutivas de la tercera era democratizadora del mundo moderno<sup>88</sup>, afectaron a multitud de países del Sur y Este de Europa, así como de América Latina, que transitaron desde autoritarismos de diverso tipo hacia formas de gobierno de corte democrático. Ante la magnitud de los cambios que estas mareas democratizadoras dejaron a su paso, las ciencias sociales trataron de alumbrar un faro que hiciera posible comprender las causas, modos y consecuencias de estos cambios de régimen.

---

<sup>87</sup> En Geddes (1999) puede encontrarse un recorrido por los principales hallazgos y conclusiones alcanzadas por esta literatura sobre transiciones a la democracia.

<sup>88</sup> Según el politólogo estadounidense, la primera ola democratizadora comenzó en los años de 1820 con la ampliación del sufragio a parte de la población masculina en Estados Unidos y continuó durante cerca de un siglo, dejando tras de sí 29 nuevas democracias. Tras la contra-ola de los fascismos, y con el triunfo de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, una segunda era de democratizaciones incorpora 36 nuevos países a la lista de aquéllos gobernados de manera democrática hasta llegados los años sesenta, seguidos por un nuevo retroceso democrático (Huntington, 1991a: 12).

En realidad, el análisis de los procesos de transición se sustenta en buena medida sobre la idea de que “los factores que mantienen a una democracia estable pueden no ser los mismos que facilitaron su existencia: las explicaciones de la democracia deben distinguir entre función y génesis” (Rustow, 1970: 346). Este énfasis realizado por Rustow sobre la necesidad de desarrollar una perspectiva genética de la democracia abría, como bien apunta Anderson (1999: 2), un “espacio conceptual” que hacía posible llevar a cabo el estudio de los periodos de transición como objeto de investigación independiente y diferenciado de la consolidación democrática y de la democracia en sí. Las transiciones se erigían, de este modo, como entidad con características y dinámicas propias, susceptibles – y merecedoras – de ser analizadas de manera autónoma.

El término “transición democrática” alude, como es bien sabido, al paso desde un gobierno autoritario hacia una democracia o, más concretamente, como apuntan O'Donnell y Schmitter (1988: 19), “al intervalo que se extiende entre un régimen político y otro”. De modo similar, Morlino (2009: 94) se referirá a las transiciones como ese “periodo ambiguo e intermedio en el que el régimen ha abandonado algunas características determinantes del ordenamiento institucional anterior sin haber adquirido todas las características del nuevo régimen que se va a instaurar”. Por lo tanto, a lo largo de estos periodos de cambio político, las normas, las reglas de juego, las instituciones y los valores distintivos de una dictadura irán siendo desplazados por aquéllos que constituyen el armazón propio de un sistema democrático (Santamaría, 1982: 372). Existe un cierto debate académico en torno a los límites temporales de estos procesos de democratización, cuyas fronteras son cuando menos difusas. No resulta, por tanto, sencillo determinar cuándo empiezan o terminan los periodos de transición, o en qué momento específico puede hablarse ya del nacimiento de una nueva democracia. En todo caso, la literatura coincide en señalar el reemplazo de un gobierno no electo por otro “seleccionado mediante elecciones libres, abiertas y justas”, como “punto crítico” de tales procesos<sup>89</sup> (Huntington, 1991b: 9).

Estos periodos de interludio entre regímenes políticos constituyen, desde la perspectiva de este estudio, coyunturas relevantes para el examen de la violencia

---

<sup>89</sup> En general, tanto O'Donnell y Schmitter (1988: 20-27) como Huntington (1991b: 9) y Morlino (2009: 96-97) señalan la existencia de una fase previa de *liberalización* del régimen, consistente en una cierta apertura del mismo a través del reconocimiento de determinadas garantías, derechos y libertades civiles, que, sin embargo, no necesariamente desembocará en todos los casos en la instauración de una democracia plena.

insurgente y su relación con los sistemas democráticos. Sin embargo, la literatura especializada en el análisis de las transiciones ha prestado generalmente escasa atención al papel de la violencia a lo largo de estos procesos de transformación política, subestimado las dinámicas de confrontación y movilización social desarrolladas en contextos de cambio. En este sentido, Nancy Bermeo (1999) advierte cómo la producción científica ha incidido fundamentalmente en las decisiones tácticas adoptadas por las elites políticas del país en pos de la democratización, obviando en gran medida los movimientos populares producidos al margen de los pactos y negociaciones entre grupos dirigentes. De este modo, el rol específico de la ciudadanía en los estadios de interregno, así como el grado de relevancia adquirido por la denominada “violencia transicional”, han quedado inmersos hasta la fecha en una considerable bruma<sup>90</sup>.

La posición mayoritaria en la literatura clásica sobre transiciones a la democracia defiende la necesidad de contención de la movilización popular durante el proceso de cambio como condición facilitadora de su éxito y estabilización. Existirían, de acuerdo con esta óptica, unos ciertos límites a la intensidad y forma adoptados por la presión ciudadana que, una vez transgredidos, harían peligrar el tránsito hacia un gobierno democrático. Esta es, precisamente, una de las “conclusiones tentativas” de O'Donnell y Schmitter (1988: 26) en su estudio sobre las transiciones desde el autoritarismo<sup>91</sup>:

Es posible y conveniente que la democracia política se alcance sin una movilización violenta y sin una discontinuidad espectacular. Virtualmente siempre está presente la amenaza de la violencia, y hay frecuentes protestas, huelgas y manifestaciones; pero una vez que se adopta la «vía revolucionaria» o que la violencia se difunde y se vuelve

---

<sup>90</sup> Bermeo (1999: 121) afirma que, pese a que buena parte de los trabajos sobre democratizaciones han sugerido la importancia de la movilización popular para el cambio de régimen, este tipo de proposiciones han sido en términos generales insuficientemente desarrolladas y escasamente compartidas. Existen, no obstante, notables excepciones que han dotado de relevancia a los movimientos sociales y la oposición ciudadana en la erosión de los regímenes dictatoriales. En este sentido podría mencionarse, como ejemplo, la obra de José M. Maravall (1978) *Dictadura y disenso político: obreros y estudiantes bajo el franquismo*.

<sup>91</sup> Más de dos décadas después de esta obra, Schmitter (2010) publicó un artículo bajo el título “Twenty-five years, fifteen findings” en el que discute, con la perspectiva de los años transcurridos y de las investigaciones realizadas, cada uno de los principales hallazgos y conclusiones que aventuraron entonces. En este texto retrospectivo el autor reafirma algunas de las proposiciones formuladas en aquella obra inicial, matiza otras y muestra cómo otras han resultado insuficientes o inadecuadas para dar cuenta de la realidad.

recurrente, las perspectivas favorables a la democracia política se reducen de manera drástica<sup>92</sup>.

La idea de medida, templanza y autocontrol de las organizaciones populares, tanto en lo que respecta a demandas como a estrategias, y su interpretación en términos de requisito para el avance adecuado del proceso de democratización, es referida por Bermeo (1999) como el “mito de la moderación”<sup>93</sup>, en cuya base se encuentra, según la autora, un cierto sentimiento de temor o desconfianza de las masas. De acuerdo con los trabajos realizados bajo este enfoque, si bien es cierto que la movilización ciudadana es considerada importante y efectiva para la llegada de la democracia, se torna peligrosa y contraproducente si se prolonga “por demasiado tiempo o con demasiada intensidad” (Bermeo, 1999: 122). En ese caso, podría desestabilizar al régimen en ciernes, o provocar reacciones autoritarias defensivas del gobierno saliente que amenazarían con arruinar el avance democrático. El potencial impacto de la lucha de las clases populares sobre la democratización parecería, por tanto, invertir sus efectos, o al menos matizarlos, durante los periodos específicos de transición política.

#### 2.2.2.2. *La hipótesis de la “violencia transicional”*

Frente a las corrientes teóricas previamente descritas, en este trabajo trataremos de poner el acento sobre la movilización ciudadana. De este modo, pretendemos observar, “desde abajo”, qué sucede entre los sectores populares durante los periodos de transición, mientras en los despachos de los dirigentes políticos se producen esos ya mencionados pactos y negociaciones estratégicas entre las elites. En concreto, y de acuerdo con nuestro objeto de investigación, dirigiremos nuestra atención hacia la acción colectiva de carácter violento, aspirando con ello a subsanar el olvido – más o menos intencionado – al que la literatura ha relegado esta cuestión. Al trasladar el foco hacia otras esferas y actores políticos se destapan dinámicas anteriormente ocultas que muestran, con frecuencia, combinaciones de extremismo y moderación mucho más complejas de lo que inicialmente cabría esperar. En resumidas cuentas, se trata de arrojar algo de luz sobre el modo en que las lógicas de acción de los grupos armados

---

<sup>92</sup> Cabe señalar, en todo caso, que los autores contemplarán la cuestión del levantamiento popular en su análisis de lo que denominan la “resurrección de la sociedad civil” (O'Donnell y Schmitter, 1988: 79-91).

<sup>93</sup> Remitimos a este artículo de Nancy Bermeo (1999: 120-123) para una revisión de la literatura que respalda el argumento de la moderación necesaria durante los periodos de transición.

pueden verse alteradas por los periodos de democratización, adentrándonos así en la relación existente entre insurgencia y cambio de régimen<sup>94</sup>.

Para ello, seguiremos el recorrido que algunos autores han comenzado a trazar con sus obras, sugiriendo la relevancia de los vínculos entre transiciones y conflicto político violento. Así, diversos estudios han mostrado la pertinencia de tomar en consideración el impacto específico de estos periodos de cambio de régimen sobre la probabilidad y magnitud de la contienda violenta. En el plano interestatal, Mansfield y Snyder (1995; 2002) sostienen que, si bien es cierto que las democracias maduras y estables pueden resultar favorables a escenarios internacionales de paz, en los periodos de transición democrática los países se muestran, por el contrario, especialmente agresivos y propensos a la guerra, incrementando sus probabilidades de confrontación militar. Las fases iniciales de la política de masas son, según señalan, caldo de cultivo de conflictos bélicos entre Estados.

El mecanismo causal que subyace a este argumento se sitúa, según los mencionados autores, en los intentos de las elites – amenazadas – del régimen anterior de buscar aliados y competir por el apoyo popular para fortalecer su posición en el nuevo escenario político, así como de las elites emergentes que aspiran a afianzar su recién estrenada situación de privilegio. Para ello harán uso de llamamientos de carácter nacionalista con el objetivo de galvanizar y atraer a las masas, generando escenarios de conflicto étnico. De este modo, y en palabras de los propios autores, “la probabilidad de guerra aumenta debido a los intereses de ciertos grupos de las elites, la efectividad de su propaganda, y el incentivo para los líderes débiles de recurrir a estrategias de prestigio en los asuntos exteriores, en un intento de aumentar su autoridad sobre electorados diversos” (Mansfield y Snyder, 1995: 20)<sup>95</sup>. Según esta perspectiva de análisis, la

---

<sup>94</sup> La forma específica en que se lleva a cabo la transición política hacia la democracia podría afectar también a las estrategias de los opositores y al volumen de violencia registrado durante el cambio de régimen. Alfred Stepan (1988) distingue hasta diez vías diferentes en el tránsito democrático, sintetizables en tres grandes bloques: aquellas asociadas con la guerra internacional y la ocupación extranjera (restauración o reformulación democrática e imposición externa); transformación desde las elites autoritarias; y ruptura con papel protagónico de las fuerzas opositoras. Queda pendiente, no obstante, para futuras investigaciones analizar el posible impacto que el tipo de transición democrática tiene en la incidencia de la violencia insurgente.

<sup>95</sup> Jack Snyder (2000) desarrolla en profundidad esta línea argumental en su obra *From voting to violence*, aplicándola no sólo a guerras internacionales sino también a enfrentamientos internos. En este libro, Snyder sostiene que la relación entre democratizaciones y conflicto étnico violento deriva de las



debilidad e incoherencia institucional propia de los regímenes en transición, tanto en lo que respecta a la regulación de la competición política de las masas, como a la centralización de la autoridad y la efectiva rendición de cuentas de los gobernantes, favorecerán el éxito de esas estrategias de beligerancia y el estímulo de las hostilidades (Mansfield y Snyder, 2002).

Gleditsch y Ward (1998; 2000) introducirán algunos matices en la que denominan “hipótesis de las transiciones peligrosas”. Así, afirman que, aunque en términos generales las democratizaciones promueven la paz, algunas transiciones pueden ser particularmente propensas a los conflictos internacionales como consecuencia de determinadas características del proceso de transformación política. En concreto, señalan cómo los episodios de cambio de régimen caracterizados por la incertidumbre, la inestabilidad, la fragilidad o las oscilaciones y reveses, pueden efectivamente favorecer esos estallidos de violencia internacional.

Por lo que respecta al conflicto político de carácter doméstico, y retomando con él nuestro ámbito específico de investigación, pueden encontrarse también diversas aportaciones en la literatura que inciden en estos nexos entre democratización y violencia colectiva. El estudio detallado de diferentes casos de transición democrática hace emerger realidades de contienda en muchas ocasiones veladas en los relatos habituales sobre estos procesos. Tal es el ejemplo de la transición española, tradicionalmente estudiada desde el punto de vista de los pactos entre las elites, y cuyos análisis han dejado escaso lugar a la movilización ciudadana. Con el objetivo de avanzar por estos terrenos escasamente explorados, Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar (2009b; 2009a) realizan un examen pormenorizado de la protesta y la violencia política en España durante este periodo. De acuerdo con su investigación, los autores señalan que “aunque siempre se ha presentado como paradigma de transición pacífica y negociada, el hecho es que la violencia estalló con fuerza en el periodo de democratización”<sup>96</sup> (Sánchez-Cuenca y Aguilar, 2009a: 429). Así, durante los años posteriores a la muerte del dictador, España fue testigo de episodios de violencia

---

estrategias interesadas de persuasión nacionalista por parte de las elites, desechando así las hipótesis de rivalidades y odios étnicos ancestrales.

<sup>96</sup> Los autores concluyen que el caso de la transición española respalda la hipótesis de la irrupción de la violencia política como resultado de la caída de la movilización popular, con el objetivo de compensar el desplome y debilidad de la protesta pacífica. Se constataría así una relación inversa entre violencia y acción colectiva de masas, sugerida ya con anterioridad por otros autores como Donatella Della Porta (1995).

separatista, revolucionaria, fascista y estatal, que se cobraron numerosas vidas<sup>97</sup>. De modo similar, en su trabajo sobre la democracia en Sudáfrica, Secundino González (2012a) advierte una escalada significativa de la violencia durante el periodo de tránsito hacia el nuevo régimen<sup>98</sup> seguida, sin embargo, por una radical disminución asociada a su consolidación. Asimismo, Bermeo (1999: 131) revisa los niveles de movilización social registrados en procesos de transición democrática de países tan diversos como Perú, Filipinas, Corea del Sur, España o Portugal, concluyendo que, “en muchos casos, la democratización parece haber avanzado acompañada por fuertes, e incluso sangrientos, desafíos populares”.

Este tipo de asociación entre violencia y cambio de régimen ha sido también corroborada por diversos estudios de *N* grande. En buena medida, estos trabajos se han apoyado en el concepto de régimen intermedio, mixto o híbrido<sup>99</sup>, para referirse a esos periodos de paso entre una y otra forma de gobierno. La idea de un efecto no monocorde entre nivel de democracia y escenarios de conflicto armado<sup>100</sup> se ha aplicado tanto a estudios sobre la violencia terrorista (v.g. Abadie, 2006; Findley y Young, 2011) como al análisis del estallido e incidencia de guerras civiles (v.g. Hegre et al., 2001; Reynal-Querol, 2005; Regan y Bell, 2010). Todos ellos atribuyen a estos sistemas políticos híbridos o transicionales una serie de características propias, diferenciadas de

---

<sup>97</sup> Los autores hablan de 718 víctimas mortales, de las cuales 504 se debieron a la violencia no estatal, y 214 a la represión por parte del Estado español, entre 1975 y 1982 (Sánchez-Cuenca y Aguilar, 2009a: 430).

<sup>98</sup> De acuerdo con el autor, durante las primeras elecciones democráticas sudafricanas había incluso áreas del país en las que ningún partido, salvo el dominante en la zona, podía acceder sin correr serios riesgos para su seguridad durante las campañas electorales (González, 2012a: 71).

<sup>99</sup> La literatura anglosajona se ha referido también con frecuencia a este tipo de regímenes mediante el término *anocracies*.

<sup>100</sup> Este tipo de relación con la democracia en forma de “U invertida” ha sido también atribuida a la violencia ejercida por los Estados, vinculándola, entre otros factores, a la existencia de un mayor clima de oposición y disidencia en los regímenes intermedios. En los estudios sobre la represión estatal y la capacidad de las democracias para proteger los derechos humanos, esta hipótesis ha sido con frecuencia referida como “MMM”, por las siglas en inglés de “More Murder in the Middle” (“Más Asesinatos en el Medio”). Así, de acuerdo con Helen Fein (1995: 174), “los Estados en etapas intermedias de democracia tienden a producir violaciones gubernamentales más severas de la integridad física que los Estados no democráticos, mientras que la expansión continuada de la democracia (...) conduce hacia un incremento en el respeto a la integridad física”. Este tipo de afirmaciones han sido, no obstante, cuestionadas en la literatura por autores diversos, como Mauricio Rivera (2010). En todo caso, volveremos sobre la cuestión de la represión estatal y su relación con el régimen político y la insurgencia en el próximo epígrafe.

los gobiernos democráticos y dictatoriales, que impulsan la acción colectiva violenta, haciéndoles más propensos y vulnerables al desafío de las armas<sup>101</sup>.

En su estudio sobre las raíces del terrorismo, Alberto Abadie (2006) sitúa en los factores de carácter político la clave de bóveda sobre la que han de erigirse las explicaciones sobre esta forma de violencia colectiva. Se desmarca de este modo de quienes ponen el acento en las condiciones socioeconómicas para dar cuenta de los ataques violentos, al señalar la importancia fundamental de los derechos políticos. De acuerdo con su investigación, los países con niveles intermedios de democracia son más propensos al terrorismo que los fuertemente autoritarios o los que reconocen y respetan plenamente la libertad política. De tales resultados colige que “las transiciones desde un gobierno autoritario hacia la democracia pueden ir acompañadas por incrementos temporales del terrorismo” (Abadie, 2006: 51). Esto es así, según el autor, debido a las elevadas cotas de inestabilidad política características de estos periodos. De este modo, la incertidumbre y la debilidad gubernamental son consideradas circunstancias favorables al empleo de la violencia contra el Estado.

De modo similar, Hegre et al. (2001) aplican este tipo de argumentación al estudio del estallido de conflictos bélicos civiles, respaldando la hipótesis de la existencia de una función en forma de “U-invertida” entre democracia y violencia. Las incoherencias y contradicciones inherentes a este tipo de regímenes políticos, atrapados de algún modo entre el autoritarismo y la democracia, estarían en la base de su propensión a la guerra. La combinación de represión estatal y apertura política parcial, propia de estos estadios intermedios, resulta propicia a la rebelión, en la medida en que deviene generadora de agravios y facilitadora de espacios para la organización de actividades contra el gobierno (Hegre et al., 2001: 33). Asimismo, prosiguen, los momentos de transición de régimen vienen marcados por el debilitamiento de las instituciones, la inestabilidad y una mezcla volátil entre política de masas y la política elitista y autoritaria heredada del régimen anterior (Hegre et al., 2001: 34). Estas características configuran un terreno abonado para la violencia, haciendo de la senda

---

<sup>101</sup> Algunos autores como Gleditsch y Ruggeri (2010: 308) sostienen que, en realidad, “probablemente no hay nada en las instituciones de las democracias parciales *per se* que hagan a tales Estados más propensos al conflicto”, sino que se trata más bien de una cuestión de debilidad estatal. En el último apartado de este capítulo incidiremos en el peso de la capacidad del Estado como elemento constitutivo de la EOP.

democrática un camino pedregoso y lleno de obstáculos para el mantenimiento de la paz doméstica.

Sin embargo, este tipo de argumentación en torno a los regímenes híbridos pone sobre la mesa el debate sobre su auténtica relación con los procesos de cambio político. La equivalencia entre periodos de transición y regímenes intermedios puede generar ciertos equívocos, por lo que han surgido voces que cuestionan el carácter intercambiable de ambos conceptos. Tal es el caso de Leonardo Morlino (2008), quien señala la necesidad de introducir las convenientes cautelas en la distinción entre regímenes híbridos y regímenes en transición. Son muchas las direcciones que puede seguir un sistema político una vez alcanzada esa fase intermedia, de las cuales la democratización es tan sólo una de ellas<sup>102</sup>. De hecho, según el análisis del politólogo italiano, buena parte de los regímenes híbridos se estabilizan como tales debido bien al empate técnico entre fuerzas democratizadoras y *veto players*, bien a la voluntad de las elites de mantener al sistema en esta especie de limbo o a la ausencia de una autoridad central con capacidad para impulsar el cambio político (Morlino, 2008: 15). Por ello, asimilar régimen mixto con transición democrática podría resultar problemático.

Hegre et al. (2001) no se mantienen ajenos a esta clase de cuestiones, por lo que tratarán de dilucidar si los regímenes intermedios y transicionales verdaderamente constituyen un mismo mecanismo explicativo del incremento de la insurgencia. La pregunta sería entonces, según ellos mismos la formulan: “¿Es la mayor propensión a la violencia de los regímenes intermedios equivalente al hallazgo de que los Estados en transición política experimentan más violencia?” (Hegre et al., 2001: 33). De acuerdo con sus análisis, ambas variables resultan significativas en los modelos estadísticos, incrementando el riesgo de inicio de una guerra civil. Si bien es cierto que estos dos factores se superponen parcialmente, parecen tener también un impacto propio que les hace complementarios. De similares características y conclusiones es el estudio de Cederman, Hug y Krebs (2010), en el que, nuevamente, se inquiere esta relación entre democratización y violencia. A través de un nuevo algoritmo capaz de identificar los periodos de transición democrática – y autocrática –, los autores analizan la hipótesis de

---

<sup>102</sup> El autor señala, en concreto, cinco trayectorias posibles de los regímenes híbridos: la estabilización, el tránsito hacia la democracia, el tránsito hacia un régimen autoritario y la no estabilización bajo el asedio de la incertidumbre procedente bien del anterior gobierno autoritario, bien de su predecesor democrático (Morlino, 2008: 14).

la violencia transicional, para concluir que los cambios de régimen efectivamente incrementan la probabilidad de guerra civil, manteniendo sus efectos propios incluso en la presencia de controles por tipo de régimen.

En realidad, los trabajos e interpretaciones expuestos hasta el momento se sitúan, de algún modo, sobre la misma línea argumental que ya habíamos comenzado a dibujar en el anterior apartado. Según hemos visto, la ambigüedad, la inestabilidad y la debilidad gubernamental propias de los procesos de transición aparecen señaladas en las investigaciones referidas como principales mecanismos causales del incremento de la violencia colectiva a lo largo de tales periodos. En este sentido, O'Donnell y Schmitter (1988: 106) destacaban los elevados niveles de indeterminación que rodean a los procesos de transición democrática, no sólo en lo que respecta a las interacciones más inmediatas de los actores, sino también a sus posibles consecuencias en el medio y largo plazo. Los diversos sujetos políticos mostrarán en estas fases iniciales de la democracia numerosos recelos y dudas “en torno a sus respectivas capacidades y demasiadas sospechas en torno de los respectivos propósitos” (O'Donnell y Schmitter, 1988: 115). En estos contextos de incertidumbre<sup>103</sup> las promesas y compromisos que se derivan de los sistemas democráticos pueden resultar aún escasamente creíbles para los opositores alzados en armas – o al menos para aquéllos alzados en pro de la democracia –, de lo que se derivaría su reticencia al abandono de la estrategia de la violencia durante los pasos iniciales de los procesos de transición.

Esta interpretación de la violencia transicional en términos de “problemas de compromiso” ha sido recientemente explorada por Findley y Young (2011) en un estudio sobre las causas del terrorismo. De acuerdo con los autores, los dilemas estratégicos asociados a la confianza en el cumplimiento de los pactos alcanzados influirán de manera sustancial en el comportamiento de los grupos armados. Por este motivo, señalan cómo los periodos de cambio de régimen resultan especialmente propensos a la violencia, debido a la dificultad de hacer creíbles, en escenarios de incertidumbre e inestabilidad institucional, los compromisos gubernamentales de respetar las diversas limitaciones impuestas a su poder con la llegada de la democracia. Podría argumentarse, en definitiva, que el abandono de las tácticas insurgentes por parte de los grupos opositores estará en buena medida supeditado a su interpretación en tanto

---

<sup>103</sup> O tal vez podría decirse, readaptando la ya citada expresión empleada por Przeworski (1995: 22) para definir la democracia, “contextos de incertidumbre no institucionalizada”.

que *permanente* del nuevo escenario político. Será, por tanto, clave que en su lectura de la situación interpreten que la democracia “llegó para quedarse” o, según reza la célebre expresión, que el recién estrenado sistema político democrático es, efectivamente, “the only game in town”.

Asimismo, los periodos de transición son momentos de definición de las reglas de juego que regirán el ordenamiento político en ciernes. Estas normas y principios configuradores del nuevo régimen serán objeto de disputas entre los diversos actores con intereses contrapuestos, pues de ellas dependerá en gran medida quiénes serán los futuros ganadores y perdedores en el sistema político emergente (O'Donnell y Schmitter, 1988: 19-20). Por esta razón, los procesos de cambio pueden ser considerados por las organizaciones insurgentes un momento propicio para conminar al gobierno, percibido como vulnerable y tal vez por ello más receptivo a las demandas, y hacer un despliegue de fuerza que sirva de presión para influir en la delimitación de esas nuevas reglas de funcionamiento. En este sentido, Tilly advierte (2007b: 42-43) cómo “en el camino hacia la democratización las luchas suelen volverse más violentas durante un periodo, según va en aumento lo que hay en juego en relación con quién saldrá beneficiado o saldrá perdiendo con las instituciones democráticas”. De este modo, el incremento de la violencia en estas fases iniciales de la democracia se encontraría también asociado a la intensificación de los enfrentamientos por el control del régimen (Tilly, 2007b: 51).

Estas reflexiones nos conducen al concepto de “consolidación democrática”, estrechamente vinculado al fenómeno de las transiciones políticas. La consolidación implica la “confirmación y asentamiento” del nuevo régimen, su adquisición de “coherencia, firmeza, arraigo y solidez” (Santamaría, 1982: 373). Por ello, Morlino (1986: 19) definía la consolidación como el “proceso de adaptación-congelación de estructuras y normas democráticas que son aceptadas como legítimas, en parte o del todo, por la sociedad civil (...). Tal proceso, complejo y variado, se desarrolla en direcciones diferentes y alcanza tal refuerzo de aquellas instituciones y normas como para permitir su persistencia”. La culminación de esta fase de fortalecimiento y afirmación de los procedimientos y pautas democráticas<sup>104</sup> contribuirá, de acuerdo con

---

<sup>104</sup> Los límites temporales de tal proceso son, de nuevo, objeto de discusión en la literatura. Existen aproximaciones muy diversas a la determinación del momento en que el sistema político será considerado una democracia madura. Por ejemplo, algunos autores como Samuel P. Huntington (1991b: 266-267)

la lógica anteriormente descrita, a la resolución de los conflictos violentos. Es el carácter no lineal de estos procesos de cambio político quien torna relevante el estudio del impacto de la consolidación democrática en las decisiones de las organizaciones armadas. La democracia no es sólo un camino de ida, sino que se producen con frecuencia avances y retrocesos en la marcha hacia esta forma de gobierno, reveses autoritarios que perturban y hacen peligrar el proceso democratizador<sup>105</sup>. En este sentido, el cese de la violencia insurgente podría encontrarse vinculado a la percepción de estabilidad democrática por parte de los rebeldes. Si éste fuera el caso, el abandono de las armas no se produciría hasta transcurrido un cierto lapso de tiempo desde la transición, que garantice, o al menos sugiera, que la democracia no es tan sólo un visitante temporal. Sería preciso, por tanto, diferenciar entre el corto plazo de los inciertos periodos de transición democrática, y el medio/largo plazo de la consolidación, en la medida en que, presumiblemente, afectarán a las probabilidades de continuidad o suspensión de la lucha armada.

En definitiva, esta investigación sostiene la necesidad de contemplar, junto al impacto del régimen político sobre las estrategias insurgentes, las posibles consecuencias derivadas de los procesos de cambio. Así, si bien es cierto que la democracia puede suponer un antídoto – relativamente – eficaz contra la violencia política insurgente, también lo es que sus efectos curativos no parecen ser tan inmediatos como cabría esperar. En muchos casos, se atravesará una primera fase de aumento de las fiebres de la violencia transicional, hasta alcanzar la situación deseada. Por consiguiente, los efectos positivos del sistema democrático para poner fin a los desafíos violentos llegarán, fundamentalmente, una vez finalizado el periodo de democratización, cuando nos encontremos ante una democracia ya madura y estable (Snyder, 2000; Hegre et al., 2001). En este sentido, la teoría de la paz civil democrática

---

sostienen que el régimen democrático estará consolidado cuando supere el denominado “two-turnover test”, es decir, cuando el poder cambie de manos dos veces de manera pacífica y como resultado de elecciones libres y competitivas. Otros, sin embargo, prestarán atención a la aceptación y legitimación de las normas y principios democráticos por la sociedad en su conjunto. Así, la ausencia de intentos de alcanzar el poder mediante canales que desafíen el orden político existente será clave desde esta perspectiva para estimar finalizado el periodo de consolidación del régimen, destacando así la ya referida idea de que la democracia sea “the only game in town” (Linz y Stepan, 1996: 3-7).

<sup>105</sup> América Latina, como veremos más adelante, refleja de manera clara ese escenario de retrocesos autoritarios y procesos de redemocratización. De acuerdo con Schmitter (2010: 18-19), desde 1900, y hasta la tercera ola, en esta región habían fracasado aproximadamente dos de cada tres intentos democratizadores. No es difícil imaginar, entonces, que tal circunstancia pudiera influir en las estrategias de las organizaciones armadas.

debería, tal vez, ser reformulada de manera más específica como hipótesis de la “paz democrática postransicional”.

*Hipótesis 1b:*

*Los efectos positivos de la democratización para el desarme operan, fundamentalmente, tras la consolidación democrática. Durante los periodos de transición disminuyen, por tanto, las probabilidades de abandono de la lucha armada.*

### **2.2.3. Las dinámicas de la represión estatal y su impacto en la actividad insurgente<sup>106</sup>**

Nuestro itinerario a través de los efectos derivados del grado de apertura del sistema político sobre la insurgencia nos conduce, finalmente, al concepto de represión estatal. Como ya mencionamos con anterioridad, la capacidad represora del Estado ha sido señalada como uno de los principales elementos constitutivos de la EOP en que operan los grupos opositores (McAdam, 1999a: 53 y ss.)<sup>107</sup>. En este sentido, Donatella Della Porta (1995: 55 y ss.) sostiene que el llamado “policing of protest”, definido como el tratamiento que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dan a los actos de protesta contra el gobierno, es precisamente uno de los principales *barómetros* de las oportunidades políticas disponibles<sup>108</sup>. De acuerdo con la autora, se trata de una variable con impacto directo sobre la movilización social, cuya observación contribuye de manera sustancial a una mejor comprensión de las consecuencias del entorno político sobre la disidencia. Por tanto, y desde esta perspectiva, la propensión al empleo de la violencia contra los ciudadanos por parte de las autoridades del Estado influirá

---

<sup>106</sup> Como señalamos también al inicio del anterior apartado, sería de nuevo interesante probar la posible bidireccionalidad de la relación existente entre represión estatal y actividad insurgente. Así, Christian Davenport (2007b: 7) se referirá como “Law of Coercive Responsiveness” a la medida en que los incrementos en el desafío al *statu quo* irán sistemáticamente asociados a una reacción represiva gubernamental. Sin embargo, en esta investigación nos centraremos en la relación inversa, es decir, en los impactos de la coerción sobre la disidencia. Es entonces, como veremos, cuando parecen terminarse los consensos y surgir las incongruencias en la literatura (Davenport, 2007b: 8).

<sup>107</sup> En realidad, McAdam (1999a: 55) reacciona con sorpresa al constatar que la mayor parte de clasificaciones de los componentes de la EOP halladas en la literatura no incluyen entre ellos a la represión estatal. Sin embargo, compartimos con el autor su valoración del comportamiento represivo de los gobiernos como conformador fundamental de las oportunidades para la acción de los movimientos sociales.

<sup>108</sup> En sentido estricto, Della Porta no considera la represión una dimensión de la EOP como tal, sino un “derivado” o medidor de la misma, “una expresión general del grado de apertura o receptividad por parte del Estado” (Della Porta, 1995: 56).



previsiblemente en las tácticas y repertorios de contienda adoptados por los rebeldes. Se producirán así una serie de adaptaciones recíprocas y respuestas acomodaticias entre las estrategias estatales e insurgentes, que generarán complejas dinámicas de interacción sobre las que centrará su atención el presente epígrafe.

#### *2.2.3.1. Represión estatal y régimen político*

En el Capítulo I de esta investigación aludíamos a la represión como una de las posibles manifestaciones de la violencia política, caracterizada por ser ejercida desde los Estados contra la ciudadanía. De este modo, ha sido definida como “el conjunto de mecanismos [estatales] dirigidos al control y sanción de conductas «desviadas» en el orden ideológico, político, social o moral” (González Calleja, 2006: 5), es decir, aquella “acción regulatoria del gobierno orientada contra quienes desafían las relaciones de poder existentes” (Davenport, 1996: 377, nota 1). Sin embargo, tales definiciones nos dicen aún poco sobre el tipo concreto de actividades gubernamentales que, destinadas al control y supresión de la disidencia, son susceptibles de ser catalogadas como represión política. Por ello, avanzaremos en la especificación del término apoyándonos en la formulación que, a partir del trabajo de R. J. Goldstein (1978), realiza el politólogo estadounidense Christian Davenport (2007b: 2). De acuerdo con el citado autor, la represión estatal consiste en “la amenaza o uso efectivo de sanciones físicas contra individuos u organizaciones, dentro de la jurisdicción territorial del Estado, con el propósito de imponer costes sobre las víctimas, así como de disuadir determinadas actividades y/o creencias percibidas como amenazantes para el personal, prácticas o instituciones gubernamentales”. De acuerdo con dicho enfoque, en este estudio consideraremos represoras las actividades del Estado que restrinjan o vulneren las libertades civiles y violen el derecho a la integridad física de los ciudadanos (Davenport, 2007a: xiii; 2007b: 2). En definitiva, hechos como la tortura, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones y encarcelamientos por causas políticas o los actos de genocidio y masacre, responderán a dicho apelativo.

Una de las cuestiones más estudiadas por la literatura en lo que respecta al comportamiento represivo del Estado es, precisamente, su relación con el régimen político imperante. Existe un consenso amplio y generalizado sobre la existencia de una relación negativa entre el establecimiento de sistemas democráticos y la propensión a la

represión gubernamental<sup>109</sup>. Así, numerosos estudios han concluido en sus indagaciones que las democracias muestran, de manera sistemática, un mayor respeto por los derechos humanos, haciendo un uso significativamente inferior de las tácticas de represión política (v.g. Henderson, 1991; Poe y Tate, 1994).

El riesgo de tales consensos es, no obstante, la escasa especificación de las dinámicas propias de la represión política más allá del tipo de régimen establecido, la confusión derivada del solapamiento de ambos conceptos que subsume, erróneamente, al uno en el otro. Así, y pese a que la asociación general descrita entre democracia y coerción estatal ha resultado, como promedio, ampliamente probada y cierta, la realidad se muestra, de manera obstinada, mucho más compleja y rebelde al análisis. En este sentido, Davenport (2007a: 15) nos recuerda que régimen político y represión estatal “no siempre se mueven en tándem”, por lo que no ha de asumirse una relación mecánica y directa entre estos fenómenos, que no pueden ser tratados como equivalentes. De acuerdo con el citado autor, la relación existente entre coerción estatal y régimen político estará en realidad mediada por factores muy diversos, entre los que destaca el nivel de democratización alcanzado<sup>110</sup>, los distintos componentes del sistema democrático – sintetizados en “voz” y “veto” –, la forma específica adoptada por el comportamiento represivo o el impacto de los contextos de conflicto político (Davenport, 2007a: 177-178).

En este sentido, Rivera (2010: 60) subraya cómo existen, de hecho, sistemas democráticos cuyos niveles de represión estatal resultan similares, e incluso superiores, a los ejercidos por ciertas dictaduras<sup>111</sup>. La democracia no parece ser, por tanto, garantía

---

<sup>109</sup> Dicha relación se ha atribuido, fundamentalmente, a tres factores diferenciados: a) en los sistemas democráticos los gobernantes habrán de someterse al mandato de las urnas, por lo que serán menos partidarios de asumir el desgaste y los costes de reputación derivados del empleo de prácticas represivas; b) la ciudadanía democrática conlleva la aceptación de una serie de valores de tolerancia, deliberación y no-violencia contrarios a la coerción y el uso de la fuerza; y c) la existencia de canales de participación y oposición en los regímenes democráticos debilita la justificación de la represión mediante la reducción del conflicto social (Davenport, 2007b: 10-11).

<sup>110</sup> En particular, Davenport (2007a: 177) afirma a este respecto que “la democracia reduce el comportamiento represivo del Estado sólo en los niveles más altos de las características del sistema. Por debajo de este umbral, no hay influencia”.

<sup>111</sup> Rivera (2010) centra sus análisis en la región latinoamericana, señalando los elevados niveles de incidencia de la represión estatal experimentados por los sistemas democráticos postransicionales del subcontinente. Para explicar tales circunstancias, el citado autor distingue entre dos modalidades de represión, basadas en la diferenciación entre gobernantes y burocracia. Por un lado, la represión centralizada sería el producto de las decisiones estratégicas de las autoridades gubernamentales del Estado, mientras que, por otro, la violencia estatal descentralizada respondería más bien al

infalible o condición suficiente – aunque sí necesaria – para el respeto efectivo a los derechos humanos, en la medida en que la represión no es un atributo exclusivo de los gobiernos autoritarios (Rivera, 2010: 84). La existencia de una violencia estatal democrática supone, en definitiva, un reto para los estudiosos del conflicto político, que hace oportuno contemplar las posibles consecuencias, complementarias y distinguibles, de ambas variables sobre la actividad insurgente. Por este motivo, consideramos necesario completar el análisis de los nexos entre régimen político y lucha armada, introduciendo el papel específico de la represión dentro de este rompecabezas conceptual.

#### *2.2.3.2. Represión estatal y lucha armada: el “dilema del castigo”*

Ya en el inicio de este apartado planteábamos como premisa de partida que la represión ejercida desde los Estados influirá, de manera sustancial, en las estrategias desplegadas por la disidencia. Parece evidente que las actividades de coerción y las sanciones negativas impuestas desde los gobiernos condicionarán, de algún modo, la actividad de los grupos insurgentes. Sin embargo, lo que no resulta tan claro es el sentido que adquirirá dicha influencia. Como señala Lichbach (1987), es posible encontrar trabajos que respalden el efecto disuasorio de la represión, así como investigaciones que constaten su rotundo fracaso; es posible hallar justificaciones de la disminución de la disidencia como resultado de la violencia estatal, pero también de su eventual estímulo e incremento. Zimmerman (1980) da buena cuenta de estas contradicciones, afirmando que “hay argumentos teóricos para todas las relaciones básicas concebibles entre coerción gubernamental y protesta o rebelión colectiva, excepto para la no-relación” (cit. en Lichbach, 1987: 267). La inconsistencia entre los resultados alcanzados por las diferentes investigaciones y la constatación de los eventuales efectos antagónicos derivados de la represión siembran numerosas dudas sobre los resultados esperables tras su ejercicio, constituyendo lo que aquí denominaremos el “dilema del castigo”<sup>112</sup>.

---

incumplimiento de la legalidad por parte de las agencias de seguridad pública y a la incapacidad del gobierno para ejercer un control efectivo sobre las mismas. De acuerdo con su estudio, éste segundo es “el patrón más común de represión en las nuevas democracias” (Rivera, 2010: 66).

<sup>112</sup> Otros autores han bautizado de maneras similares a este complejo entramado teórico. Así, Davenport (2007b: 8) alude a tales hallazgos como el “rompecabezas del castigo”, mientras que Ronald A. Francisco (2001) se refiere a ellos como “dilema del dictador”.

Tal vez una primera intuición, dentro de este confuso paisaje de relaciones de ambivalencia, nos llevaría a pronosticar un decremento de la actividad opositora contra el Estado como consecuencia de la puesta en práctica de políticas represivas. La violencia estatal supone, sin lugar a dudas, un cierre o restricción de las posibilidades organizativas de la insurgencia, elevando enormemente los costes de participación en actos de protesta. La posibilidad de ser detenido, encarcelado, torturado e incluso asesinado por agentes estatales actuaría, desde esta óptica, como incentivo negativo para los rebeldes, disminuyendo sus probabilidades de implicación en la lucha antigubernamental. Sería previsible entonces que, ante escenarios de represión estatal extrema, la racionalidad de los actores impusiera el rechazo al desafío armado al gobierno, debido a los altos costes personales que podrían derivarse del mismo.

Éste es el tipo de razonamiento subyacente a trabajos como el de Gordon Tullock (1971) quien, en su “paradoja de la revolución”, augura una relación negativa entre ambas variables. Sostiene, así, que en los cálculos de utilidad previos a la decisión de implicarse en un proceso revolucionario, los aspectos asociados a la búsqueda del bien público son irrelevantes frente a los pagos privados procedentes de “las recompensas y castigos ofrecidos por las dos partes [contendientes] y el riesgo de sufrir daños durante los combates” (Tullock, 1971: 92)<sup>113</sup>. Asimismo, los potenciales costes de una violencia estatal severa serán tenidos en cuenta por quienes postulan una relación curvilínea en forma de “U-invertida” entre rebelión y coerción estatal (Gurr, 1970; Muller y Weede, 1990; Opp, 1994). El argumento, en este caso, apunta hacia la existencia de un cierto nivel de represión estatal que, una vez alcanzado, actuará como disuasorio de la acción colectiva. En palabras de Gurr (1970: 238), “la amenaza y severidad de la violencia coercitiva usada por un régimen incrementa la ira de los disidentes, intensificando de este modo su oposición, hasta llegar a un umbral elevado de violencia gubernamental más allá del cual la ira deja paso al temor”.

Frente a las perspectivas anteriormente expuestas, este trabajo rastreará el argumento contrario, es decir, la posible generación de dinámicas que, producto de la represión estatal, retroalimentan e impulsan la protesta, describiendo una relación de

---

<sup>113</sup> En la defensa de tal argumento, Tullock (1971: 92) llegará a afirmar que “la gente desea tomar algunos riesgos por pura diversión, pero sólo si no son demasiado severos. Si consideramos pseudorrevoluciones como los recientes problemas universitarios acaecidos en buena parte del mundo democrático, es probable que el entretenimiento haya sido uno de los motivos más importantes. Los estudiantes, en general, evitaban cuidadosamente correr cualquier riesgo muy severo de lesiones o castigos serios (...)”.

signo positivo entre ambos fenómenos. De acuerdo con esta aproximación, la adopción de estrategias represivas por parte de los Estados con el objetivo de acallar la disidencia puede, en realidad, resultar un arma de doble filo para los gobernantes, generando consecuencias contrarias a las previstas. En tales casos, la disuasión esperable en escenarios de coerción severa como resultado del miedo y el deseo de preservación de la propia integridad física es, por el contrario, sustituida por un “efecto contragolpe” que incrementa las probabilidades de desafío violento por parte de los opositores (Francisco, 2001; Goodwin, 2001; Kalyvas, 2004)<sup>114</sup>.

Son diversos los mecanismos aducidos por la literatura para explicar este tipo de reacciones de la ciudadanía ante contextos de represión estatal. En términos generales, la pérdida de legitimidad por parte del gobierno represor ha sido una de las interpretaciones más frecuentes. El ejercicio de la violencia contra la población civil muestra la cara más terrible de los Estados e incrementa los riesgos de que la opinión pública se vuelva en su contra, retirándole su confianza y potenciando, en consecuencia, el apoyo a las organizaciones insurgentes. Asimismo, la severidad de las estrategias coactivas supone un cierre de los canales de oposición política que contribuye a propagar entre la disidencia la percepción de que no existen alternativas pacíficas de lucha contra el poder establecido. Se generan, de este modo, dinámicas de radicalización política forjadas al calor de la creencia de que la acción violenta es, en la práctica, la estrategia de resistencia más efectiva. Así, de acuerdo con Goodwin (2001: 47-48), los escenarios de violencia estatal indiscriminada refuerzan la “plausibilidad, justificación y (por tanto) difusión de la idea de que el Estado ha de ser violentamente «aplastado»”. Tal circunstancia puede conllevar un fortalecimiento de las organizaciones que propugnan la “vía armada”, en la medida en que sean percibidas por la población reprimida como las más realistas y potencialmente eficaces, frente a la menguante credibilidad en términos de resultados de los moderados políticos (Goodwin, 2001: 47).

Esta lectura de la polarización o giro radical de la oposición como efecto secundario de la represión estatal ha sido destacada por numerosos autores. En este

---

<sup>114</sup> Este tipo de reacción fue descrita también por Frantz Fanon quien, al hablar de la dominación colonial, advertía cómo “los símbolos del orden social – la policía, los toques de corneta en las barracas, los desfiles militares y las banderas ondeantes – son al mismo tiempo inhibidores y estimulantes: no transmiten el mensaje «No te atrevas a moverte»; sino más bien gritan «Prepárate para atacar»” (cit. en Goodwin y Jaspers, 2004: 3).

sentido, Della Porta (1995: 79-80) sostiene que, si bien es cierto que los elevados costes impuestos por una violencia gubernamental severa suelen suponer un debilitamiento de la movilización social pacífica, aquella puede también generar, como resultado colateral, una radicalización de los sectores más militantes. Se produciría así, de acuerdo con la autora, una suerte de “ajuste” entre las estrategias policiales y opositoras, que desencadenaría una escalada en la dureza táctica. De similares conclusiones es el estudio de Regan y Norton (2005: 331) sobre las causas explicativas de la presencia de episodios de agitación social y guerra civil. En él, los autores constatan cómo el ejercicio de la coerción por parte de los Estados puede ser efectivo para intimidar a la población, reduciendo los niveles de protesta, pero contraproducente en la elusión del desafío violento, incrementando la probabilidad de rebelión y estallido del conflicto armado. En definitiva, y aunque las medidas represoras dificulten la capacidad de las organizaciones armadas para llevar a cabo sus ataques, pueden también avivar las llamas del enfrentamiento, fomentando la oposición ideológica al gobierno, movilizando simpatías y aumentando el número de potenciales voluntarios y activistas antigubernamentales (Bueno de Mesquita, 2005).

La represión es, por tanto, una herramienta generadora de nuevos agravios entre la población civil, otorgándole de esta manera razones adicionales para respaldar, directa o indirectamente, a la insurgencia. El aparato estatal será interpretado por los opositores como un agente capaz de imponer, con su política de violencia, sanciones y costes insoportables para la ciudadanía. Por una lado, la literatura ha señalado la relevancia de las externalidades económicas de carácter negativo derivadas de las medidas antiterroristas de “mano dura”, a la hora de dar cuenta del auge en el apoyo a las organizaciones armadas (Bueno de Mesquita, 2005; Bueno de Mesquita y Dickson, 2007). Por otra parte, la percepción de un incremento exponencial en los riesgos de sufrir agresiones por parte de los agentes gubernamentales alimentará también a las organizaciones rebeldes, gracias a quienes verán en ellas una posible fuente de protección y auto-defensa frente a la violencia del Estado (Goodwin, 2001: 48; Regan y Norton, 2005: 326). De acuerdo con Kalyvas (2004: 120-121), a medida que aumenta la represión estatal indiscriminada, incrementa también el valor de la protección brindada por las organizaciones armadas a la población civil. En tales circunstancias, continúa, la capacidad de proporcionar seguridad y defensa se convierte en un incentivo selectivo, que contribuye a resolver los problemas de acción colectiva de la insurgencia. En la

medida en que el apoyo y la colaboración con los grupos rebeldes sean interpretados como vía de acceso a un refugio seguro, la coerción gubernamental puede conceder, *de facto*, una importante ventaja a sus opositores, favoreciendo su reclutamiento de nuevos cuadros.

Junto a los mecanismos expuestos, el papel de la emocionalidad ha sido considerado también clave para el análisis de la relación positiva entre represión y actividad insurgente. Según señalábamos en los primeros epígrafes de este capítulo, Goodwin, Jaspers y Polleta (2001b: 2) reclaman la necesidad de incorporar el impacto de sentimientos tales como la ira, la indignación o el temor, en el estudio de la protesta y la movilización social. Si hay un ámbito propicio para la observación de dichas cuestiones ése es, sin lugar a dudas, el de la violencia estatal. La violación sistemática de los derechos humanos y la falta de respeto por la vida e integridad física de los ciudadanos propaga entre la población la imagen de un Estado arbitrario e injusto con un enorme potencial movilizador de la disidencia. Las reacciones afectivas de rabia, odio e indignación desencadenadas por los abusos cometidos desde el gobierno pueden contribuir a engrosar las filas de aquéllos dispuestos a asumir los elevados costes de la acción violenta contra el Estado. La imposición de castigos desmesurados puede, en definitiva, reducir la aversión al riesgo de los ciudadanos, incrementando las probabilidades de que participen de manera activa en la insurrección armada, al aceptar condiciones de peligrosidad anteriormente inhibidoras de la acción (Kalyvas, 2004: 115)<sup>115</sup>. Asimismo, la represión puede contribuir, involuntariamente, a la acumulación de capital simbólico mediante la creación de mártires y la forja mitos que dignifican y estimulan la lucha contra la autoridad (Della Porta, 2008: 228). En este sentido, Ronald A. Francisco (2001: 5-6) advierte cómo la detención y encarcelamiento de líderes de la disidencia puede conferir a los arrestados una especie de “insignia de honor”, catapultando su autoridad moral y potencial movilizador.

En su estudio sobre la militancia del anarquismo durante la dictadura franquista, Romanos (2011) subraya este papel esencial de las emociones como factor explicativo

---

<sup>115</sup> Según Kalyvas (2004: 116), la ira sólo tendrá resultados en términos de impulso a la movilización colectiva cuando existan organizaciones fuertes con capacidad de actuar como catalizadores de esos sentimientos de repulsa contra el gobierno. En caso contrario, la indignación conducirá tan sólo a la pasividad o, en el mejor de los casos, a acciones desordenadas abocadas al fracaso. Secundino González (1994: 265) alude también a esta cuestión, referida bajo el nombre de “la condición del cilindro de Trotsky”, rescatando la sentencia del revolucionario ruso en la que señala cómo “sin organización, la fuerza del descontento popular se disiparía como el vapor no encerrado en un cilindro”.

del “activismo de alto riesgo”. De acuerdo con el autor, los componentes subjetivos, simbólicos y emocionales contribuyen a la atribución de oportunidades políticas para la acción, incluso en contextos de cierre del sistema político. De este modo, sostiene que, al menos en el caso del anarquismo español, la coerción del régimen político coadyuvó al fortalecimiento de los vínculos afectivos entre los miembros de la disidencia, revitalizando las identidades ideológicas y de grupo, claves para el sostenimiento de la actividad opositora. En sus propias palabras, “la represión y el miedo que extendía su percepción engrosaron los cimientos simbólicos del muro que separaba a los reprimidos de los represores, fortaleciendo al mismo tiempo los lazos que unían a las víctimas” (Romanos, 2011: 101)<sup>116</sup>.

Como hemos podido observar hasta el momento, la violencia estatal puede poner en funcionamiento una serie de mecanismos que, contra los objetivos esperados por el gobierno, redunden, en la práctica, en un ascenso y fortalecimiento de la insurgencia, ampliando – o cuando menos afianzando – sus bases sociales de apoyo. Las organizaciones armadas no se mantendrán ajenas a tales efectos, que influirán, por tanto, en el diseño de sus tácticas y actividad. Según el estudio de Eduardo Romanos (2011: 96-98) arriba mencionado, los propios dirigentes de la oposición, conscientes de los impactos de la represión y la sensación de injusticia, movilizaron la indignación moral<sup>117</sup> de manera deliberada en sus discursos, instrumentalizándola dentro del marco estratégico del movimiento, con el objetivo de conseguir nuevos apoyos, recursos y efectivos. Algunos autores han ido incluso más allá, sugiriendo que, a sabiendas de estos posibles efectos, determinadas organizaciones insurgentes tratarían de provocar, de manera intencionada, este tipo de represalias por parte del Estado (v.g. Kalyvas, 2004: 113; Bueno de Mesquita y Dickson, 2007). Se trata de lo que podría denominarse una estrategia de “acción-reacción-acción” (o aquello de que “cuanto peor, mejor”), según la cual los grupos rebeldes incrementarían el empleo de la violencia, bajo la expectativa de obtener una respuesta coactiva – y desproporcionada – por parte de la autoridad estatal, que refuerce su posición granjeándole nuevos apoyos y potencial para futuras acciones. Sin embargo, como apunta Jeff Goodwin (2001: 48-49), y al igual que sucede con la represión estatal, esta violencia de las organizaciones insurgentes puede

---

<sup>116</sup> No parece, no obstante, que ese fortalecimiento de los vínculos emocionales redundara, en la práctica, en un incremento significativo de su capacidad opositora.

<sup>117</sup> Junto al papel de la indignación, el autor explora también el peso de otras emociones como la esperanza, la ansiedad o la inquietud en el mantenimiento de la lucha anarquista durante el franquismo.



resultar contraproducente para sus propósitos. Así, según el sociólogo estadounidense, la coerción a los rivales políticos moderados y los ataques dirigidos contra civiles, pueden generar un fuerte rechazo popular, que distanciará a la ciudadanía de los grupos rebeldes, percibidos como culpables, junto al Estado, de las penurias y el dolor infligido a la población<sup>118</sup>.

Por último, mencionaremos aquí la importancia de tener en cuenta no sólo la presencia de prácticas gubernamentales represivas, sino también las características específicas que éstas adquieren. Se han señalado, en particular, rasgos como la inconsistencia o incoherencia (Lichbach, 1987), la indiscriminación (Kalyvas, 2004) o la aleatoriedad (Herreros, 2005b) de los ataques, a la hora de explicar los resultados negativos derivados del ejercicio de la coerción estatal sobre la disidencia. Stathis Kalyvas (2004: 117) menciona cómo la generación de estructuras de incentivos confusas para los potenciales participantes en la insurgencia puede disparar la militancia en las filas de la oposición armada. En los casos de represión indiscriminada<sup>119</sup>, según explica, la conformidad con el régimen político es casi tan insegura como la insumisión, por lo que la no colaboración con la insurgencia ofrece un escaso aliciente.

Pero esta ambigüedad en la estructura de incentivos se acentúa aún más cuando la violencia del Estado resulta completamente aleatoria. De acuerdo con Francisco Herreros (2005b: 149), la represión estatal arbitraria – frente a la selectiva – se apoya en el establecimiento de cuotas de detenciones, carentes de garantías legales e independientes de la culpabilidad real de los sujetos sometidos a arresto<sup>120</sup>. En estos casos, la actividad coercitiva del gobierno puede incrementar significativamente la oposición popular al régimen en lugar de eliminarla, al suprimir los posibles beneficios esperables de la connivencia y aceptación del régimen. El argumento se sitúa, por tanto, en la misma línea que el formulado por Kalyvas en relación a la violencia estatal indiscriminada. Así, como apunta Herreros (2005b: 151), en contextos de información completa, cuando el Estado reprime a la ciudadanía aplicando una lógica de terror

---

<sup>118</sup> Goodwin (2001: 48-49) menciona como ejemplo de tal circunstancia al grupo armado Sendero Luminoso en Perú, al que haremos de nuevo alusión más adelante.

<sup>119</sup> Kalyvas (2004: 97) define la violencia indiscriminada como aquella en la que “las víctimas son seleccionadas sobre la base de su afiliación a algún grupo sin importar sus acciones individuales”.

<sup>120</sup> En particular, Francisco Herreros (2005b: 147) centrará sus análisis en el denominado “Gran Terror” de la Unión Soviética cuando, en el periodo de quince meses entre 1937 y 1938, resultaron detenidas en torno a 1.565.000 personas, de las que aproximadamente 700.000 fueron ejecutadas. Muchos de ellos fueron seleccionados, según señala, de manera aleatoria.

aleatorio, resultaría racional apoyar activamente a la disidencia en caso de desacuerdo con el régimen político, en la medida en que los riesgos de ser detenido son los mismos independientemente de que se conspire o no contra el poder establecido<sup>121</sup>.

Como hemos podido constatar en el transcurso de este apartado, la represión estatal puede provocar reacciones muy diversas en la insurgencia, generando consecuencias imprevistas sobre la actividad opositora, que hacen de su aplicación un difícil – y arriesgado – dilema para las autoridades gubernamentales. Así, las estrategias represivas contra la disidencia resultan con frecuencia enormemente contraproducentes para el poder, retroalimentando a la oposición y fortaleciendo a los grupos armados. La coerción estatal severa pone en marcha una serie de mecanismos que, contra lo esperado, reavivan el descontento popular, pudiendo prolongar la supervivencia de las organizaciones rebeldes. Así, la pérdida de legitimidad del régimen, la percepción de eficacia de la lucha armada, las reacciones emocionales de indignación e ira, la búsqueda de autoprotección frente a la violencia gubernamental o la supresión de incentivos a la sumisión política, tendrán, en la práctica, efectos adversos para el mantenimiento del *statu quo*, mermando las probabilidades de abandono de la violencia por parte de la oposición alzada en armas.

Asimismo, hemos expuesto cómo la hipótesis de la “paz democrática doméstica” no parece ser suficiente para dar cuenta de la relación entre régimen político y represión estatal, exigiendo por ello ser “reconsiderada” (Davenport, 2007a). Pese a la evidencia de que los regímenes autoritarios son efectivamente los más proclives al ejercicio de la violencia contra la ciudadanía, algunos sistemas democráticos parecen dispuestos a desafiar esta regla general, poniendo en cuestión la asociación directa entre democracia y paz civil. Por este motivo, los efectos de los sistemas democráticos sobre la actividad insurgente analizados en las páginas previas pueden verse erosionados en contextos de represión estatal. La proposición de la paz democrática se quiebra, por tanto, cuando la violencia del Estado convive con el reconocimiento legal de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones para el nombramiento de cargos públicos. En tales circunstancias, los compromisos derivados del juego democrático serán

---

<sup>121</sup> El autor señala, no obstante, una circunstancia bajo la cual la violencia arbitraria del gobierno puede resultar exitosa. En particular, esto sucedería en escenarios de información imperfecta en los que el Estado simulara un comportamiento legalista, que generaría entre los ciudadanos incentivos – falsos – para no conspirar contra el régimen, en la medida en que se extienda la creencia de que sólo los opositores están en peligro.

escasamente creíbles para las fuerzas opositoras. La apertura formal de canales de participación y discrepancia política resultará insuficiente para plantear una alternativa considerada válida por la insurgencia en aquellos escenarios en que las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado coexistan con el proceso democrático.

*Hipótesis 1c:*

*El ejercicio de la represión estatal por parte del régimen político imperante disminuye las probabilidades de desarme de la insurgencia, retroalimentando la lucha armada. Por tanto, los efectos positivos para la paz de la democratización y consolidación democrática se inhibirán, en gran medida, en contextos de represión estatal severa.*

### **2.3. ALGUNAS EXPLICACIONES ALTERNATIVAS**

Para finalizar la construcción de las bases teóricas que sostendrán nuestro análisis empírico, y una vez explorado ya el impacto del régimen político sobre la actividad insurgente, este apartado abordará los principales argumentos alternativos esgrimidos por la literatura para el examen de la persistencia y llegada a término de la lucha armada contra el Estado. Se tratará de un breve repaso de los posibles mecanismos que, más allá de los hasta ahora expuestos, consideramos que pueden tener un papel relevante en las decisiones estratégicas de los grupos rebeldes y contribuir, de maneras diversas, a la determinación de su “esperanza de vida”. Mediante esta revisión de las aportaciones teóricas realizadas por trabajos precedentes al nuestro, estaremos en disposición de formular las hipótesis alternativas y determinar las variables de control que nos permitan profundizar en el conocimiento de nuestro objeto de estudio.

Como señalábamos en páginas anteriores, el análisis del contexto político en que se desenvuelven los actores colectivos es de vital importancia para comprender tanto sus decisiones estratégicas como el devenir de su actividad contestataria. La apertura o cierre relativo de la EOP resulta fundamental en la configuración de las características adquiridas por la movilización social, contribuyendo a esclarecer las circunstancias en que los opositores optarán – o dejarán de hacerlo – por la “vía armada”. En este sentido, según hemos expuesto, factores como el grado de democratización o represión del sistema político proporcionan pistas esenciales para seguir el rastro del comportamiento adoptado por las organizaciones insurgentes.

Sin embargo, éstos no son, en ningún caso, los únicos elementos conformadores de las oportunidades para la acción de la disidencia. A lo largo del presente epígrafe examinaremos, por ello, el potencial impacto sobre la desmovilización de las organizaciones armadas de otros componentes relevantes del entorno en que actúan, tales como la capacidad y fortaleza del Estado, los agravios de carácter socioeconómico o la influencia del contexto internacional. Para terminar, descenderemos a un nivel micro-analítico, situando el foco de atención sobre las características de los propios grupos armados objeto de nuestra investigación. Aludiremos brevemente a la importancia de los recursos internos y rasgos organizacionales de la insurgencia para la delimitación de sus repertorios tácticos y probabilidades de éxito, en línea con lo establecido por los teóricos de la movilización de recursos.

### **2.3.1. La capacidad estatal**

La fortaleza del Estado ha sido interpretada por numerosos autores como uno de los elementos clave para la comprensión y análisis de la actividad insurgente (v.g. Skocpol, 1979; Wickham-Crowley, 1993; Goodwin, 2001; Fearon y Laitin, 2003b; DeRouen y Sobek, 2004; Tilly, 2007b; Acemoglu et al., 2010; Gleditsch y Ruggeri, 2010). De acuerdo con esta perspectiva, la capacidad gubernamental para hacer efectivo su control sobre la población, recursos, actividades y territorio dentro de las fronteras objeto de su jurisdicción, contribuye a dar cuenta de la existencia de grupos rebeldes que desafíen mediante las armas la autoridad estatal. De este modo, allí donde el Estado muestre síntomas de fragilidad, las probabilidades de estallido y perpetuación de la violencia política colectiva se verán notablemente incrementadas.

Esa incapacidad gubernamental para garantizar la aplicación y cumplimiento de las normas, así como para llevar a cabo sus proyectos y políticas, es decir, el déficit crónico en el “poder infraestructural” del Estado (Goodwin, 2001: 11) facilitará la organización y reclutamiento de los rebeldes, sirviendo por ello de terreno abonado para el desarrollo de una insurrección armada. En este sentido, Fearon y Laitin (2003b: 75-76) argumentan que los “gobiernos centrales financiera, organizacional y políticamente débiles hacen más viable y atractiva la insurgencia, como consecuencia de la debilidad en el control policial local o de las ineptas y corruptas prácticas de contra-insurgencia”. Asimismo, al enfrentarse a estructuras estatales frágiles, los rebeldes estimarán que disponen de mayores probabilidades de alcanzar el poder mediante el derrocamiento del

gobierno o, cuando menos, de conseguir concesiones favorables a sus reivindicaciones, lo que podría servir de estímulo al recurso a la violencia (Gleditsch y Ruggeri, 2010: 300). Estos escenarios de institucionalidad frágil, incoherente e ineficaz estarían, desde esta óptica, en la base de la activación de la lucha armada, interpretando los conflictos internos como una suerte de “patología del Estado” (DeRouen y Sobek, 2004: 308).

La literatura ha tomado numerosos caminos para aproximarse empíricamente a la capacidad estatal, subrayando mecanismos de diversa naturaleza que explican los efectos de este concepto sobre la actividad armada. Indicadores tan dispares como el tamaño del ejército y el funcionamiento de la burocracia (DeRouen y Sobek, 2004)<sup>122</sup>, o la irregularidad en la forma de acceso al poder de los dirigentes políticos (Gleditsch y Ruggeri, 2010), han sido utilizados como *proxies* del grado de fortaleza del Estado en las investigaciones sobre violencia política. Aquí haremos referencia, en particular, a tres elementos frecuentemente asociados a la capacidad estatal, utilizados más tarde en nuestro análisis de los casos, a saber: el PIB *per cápita*, la población y las características orográficas del territorio.

Por lo que respecta al primero de los indicadores mencionados, cabría esperar, según los desarrollos teóricos previos, que aquellos países con un mayor nivel de riqueza fueran menos propensos al estallido de episodios de violencia política (Hegre y Sambanis, 2006). De acuerdo con Fearon y Laitin (2003b: 80), esta asociación negativa entre ingresos *per cápita* e insurgencia ha de ser interpretada en, al menos, un triple sentido: a) es un indicador de las capacidades financieras, administrativas, policiales y militares del Estado; b) los países más desarrollados dispondrán de un territorio más conectado y “disciplinado” a través de una amplia red de carreteras, y la administración central podrá ejercer un mayor control sobre el ámbito rural; y c) en contextos de penuria económica incrementan las probabilidades de que las organizaciones rebeldes consigan nuevos reclutas dispuestos a empuñar las armas.

Asimismo, una mayor población aumentaría, de acuerdo con este enfoque, el riesgo de conflicto armado (Hegre y Sambanis, 2006). El argumento, en este caso, pone

---

<sup>122</sup> Estos autores incorporan también a la democracia como una medición de la capacidad estatal en su estudio sobre la duración y resultados de las guerras civiles. Nosotros sin embargo, y pese a reconocer las posibles relaciones entre ambos conceptos, consideramos que se tratan de variables sustancialmente diferentes, que activan mecanismos distintos para la explicación de la finalización de la violencia insurgente.

el acento sobre la ampliación en el número de miembros potenciales de los grupos armados que se derivaría de un entorno populoso, así como en las dificultades de los centros de poder para controlar de manera eficaz las actividades de poblaciones muy numerosas (Fearon y Laitin, 2003b: 81). Estas dificultades de fiscalización de posibles acciones subversivas de la ciudadanía se incrementan aún más en contextos orográficos adversos. Por ello, se ha defendido con frecuencia que, en países montañosos o con zonas geográficas de difícil acceso, existirá una probabilidad mayor de activación y desarrollo de luchas insurgentes contra el Estado (Fearon y Laitin, 1999; 2003b; Abadie, 2006; Hegre y Sambanis, 2006). Los terrenos escarpados suponen un obstáculo natural a la vigilancia de los agentes gubernamentales y dificultan la puesta en práctica de las políticas de contrainsurgencia. Por el contrario, este tipo de relieves accidentados puede brindar un refugio seguro para los rebeldes, proporcionando un lugar donde establecer sus “cuarteles generales”, organizar sus entrenamientos y preparar los ataques lejos del control de las autoridades estatales.

De este tipo de análisis se colige, en definitiva, que en escenarios caracterizados por la debilidad e ineficacia del Estado, los grupos armados tendrán mayores perspectivas de supervivencia y éxito, incentivando el recurso a tácticas violentas. La reflexión sobre esta línea de interpretación teórica nos conduce, además, a una dicotomía expresada en repetidas ocasiones por la literatura, que podría sintetizarse en la expresión “oportunidades *versus* agravios”<sup>123</sup>. El tipo de planteamientos expuestos a lo largo de este apartado pone el acento, precisamente, en las oportunidades para sublevarse, y no tanto en los motivos para ello, bajo la consideración de que la existencia de potenciales razones para la protesta es casi una constante a lo largo de la historia. Tal es la posición de Fearon y Laitin (1999; 2003b: 88), al afirmar que “las condiciones que favorecen la insurgencia (...) son mejores predictores de los países en riesgo de guerra civil que los indicadores sobre diversidad étnica o religiosa o las mediciones sobre agravios (...)”.

---

<sup>123</sup> El debate entre estos dos modelos explicativos ha adquirido diversas formulaciones en la literatura sobre guerras civiles. Como ya anotamos en el capítulo previo, Collier y Hoeffler (2004) hablarán, por ejemplo, de la dicotomía “agravios *versus* codicia”, mientras que DeRouen y Sobek (2004: 303) se refieren a la misma en términos de “credo *versus* codicia”. En realidad, y según señalamos en los epígrafes iniciales de este capítulo, se trata de un debate que no es tampoco ajeno a la literatura sobre movimientos sociales, y que se sitúa en el fondo de las discusiones teóricas de la EOP y la teoría de la movilización de recursos. Remitimos, en todo caso, a ese primer bloque para retomar tales cuestiones y enfatizar nuestra propuesta de enfoque sintético.

Sin embargo, creemos conveniente hacer al menos dos matizaciones. En primer lugar, las oportunidades para la acción y los agravios que la impulsan no son siempre fenómenos fácilmente distinguibles. En el ya analizado caso de las dictaduras o la represión estatal, hemos podido observar cómo estos factores suponen al mismo tiempo un obstáculo para la organización de los ataques contra el Estado, y un estímulo derivado de la generación de agravios entre la población, por lo que ambos modelos analíticos se complementan y superponen en buen grado. Asimismo, y si bien es cierto que en toda sociedad pueden detectarse causas para el descontento y la indignación ciudadana, también lo es que no todas las situaciones de injusticia son equiparables, ni igualmente proclives por tanto a la irrupción de la acción colectiva de carácter violento. En todo caso, sí parece evidente que las condiciones facilitadoras de la acción contestataria influirán de distintos modos en las actividades de la insurgencia, por lo que consideramos interesante y oportuno determinar el posible impacto que la fortaleza del Estado tendrá en la duración de los grupos rebeldes.

*Hipótesis 2:*

*La fortaleza del Estado contribuye a obstaculizar las actividades subversivas, por lo que una mayor capacidad estatal incrementará las probabilidades de abandono de la violencia por parte de las organizaciones insurgentes.*

### **2.3.2. Los agravios socioeconómicos**

Como hemos señalado previamente, el “modelo de agravios” es uno de los posibles esquemas interpretativos de la rebelión armada. Según este tipo de aproximación a la violencia colectiva, los insurgentes lucharán motivados por la existencia de circunstancias interpretadas como injustas, perjudiciales u ofensivas para un determinado segmento de la población. Estas condiciones agraviantes pueden ser de muy diverso tipo, desde situaciones de carácter político – como los contextos de represión, exclusión y dictadura abordados con anterioridad –, hasta fracturas sociales de signo étnico y religioso, o conflictos económicos asociados a la pobreza y la desigualdad. Éstos últimos serán los que ocupen ahora nuestra reflexión y análisis,

debido tanto a su relevancia teórica y amplia atención recibida por la literatura, como a su pertinencia e interés específico para nuestra investigación<sup>124</sup>.

Los factores económicos y las condiciones materiales de vida han sido considerados causa de rebeliones armadas desde los orígenes del pensamiento político, en la medida en que son fuente de descontento popular. Autores tan diversos como Platón, Aristóteles, Montaigne<sup>125</sup>, Tocqueville o Marx han invocado a este principio general en sus reflexiones sobre las causas de la violencia colectiva. Por citar tan sólo un ejemplo entre los muchos posibles de la formulación de esta hipótesis clásica de la desigualdad, tomaremos como referencia al autor de *La democracia en América*. En esta obra, Alexis de Tocqueville declara:

Casi todas las revoluciones que han cambiado el aspecto de las naciones han sido hechas para consolidar o destruir la desigualdad social. Elimina las causas secundarias que han producido las grandes convulsiones del mundo, y casi siempre encontrarás el principio de la desigualdad en el fondo (...). Si se pudiera fundar un estado social en el que cada hombre tuviese algo que conservar y poco que obtener de los otros, se habría hecho mucho por la paz en el mundo (cit. en Russett, 1964: 442; Muller, 1985: 47).

Este vínculo entre circunstancias económicas de escasez y enfrentamientos armados ha sido postulado, con posterioridad, por numerosos autores. Blomberg y Hess (2002) mencionan, en este sentido, la existencia de una “trampa de pobreza-conflicto”, patente en la asociación bidireccional entre recesión económica y violencia política doméstica. Pero, sin duda, uno de los aspectos económicos más analizados por las ciencias sociales en relación al estallido de rebeliones armadas es, precisamente, la desigualdad. Pueden encontrarse, así, diversos trabajos que propugnan la existencia de una asociación positiva (v.g. Russett, 1964; Muller, 1985) o curvilínea (Nagel, 1974) entre inequidad y violencia colectiva, en la senda marcada por los autores clásicos. De

---

<sup>124</sup> Como veremos más adelante, buena parte de los grupos armados objeto de nuestro análisis situarán en los agravios de tipo socioeconómico las causas – junto a otras – de su alzamiento, planteando reivindicaciones de carácter redistributivo.

<sup>125</sup> En su recorrido por las diversas perspectivas analíticas sobre la relación existente entre desigualdad y conflicto, Cramer (2005: 1) recupera, a modo de ilustración, una curiosa referencia de Michel de Montaigne recogida en su ensayo *De los caníbales*. El humanista francés conoció, en 1562, a un grupo de indígenas brasileños que habían viajado a Francia. Interrogados por lo más sorprendente de su visita, respondieron lo siguiente, según palabras del propio Montaigne: “Se habían dado cuenta de que, entre nosotros, algunos hombres se hallaban repletos de bienes y comodidades de todo tipo, mientras otros eran mendigos en sus puertas, demacrados por el hambre y la pobreza. Les pareció extraño que aquéllos afectados por la pobreza debieran sufrir tal injusticia, y que no cogieran a los otros por la garganta y prendieran fuego a sus casas”.



acuerdo con esta propuesta teórica, los excluidos – o agraviados – por un sistema injusto de distribución de los recursos, que concentra la riqueza en unas pocas manos, recurrirían a las armas con el objetivo de expresar su descontento y revertir la situación.

Sin embargo, la literatura se halla muy lejos de alcanzar unos consensos mínimos sobre los lazos que se establecen entre los agravios socioeconómicos y la opción por la “vía armada”. En sus revisiones de los enfoques teóricos existentes sobre esta cuestión, autores como Lichbach (1989) o Cramer (2005) dan cuenta de las enormes controversias y contradicciones que rodean a este debate académico. Asimismo, probablemente cualquier observador de la realidad o conocedor de la historia podrá constatar que el nexo entre desigualdad e insurgencia es, en muchos casos, puesto entredicho por episodios que atestiguan que ambos fenómenos no caminan de la mano de manera sistemática. Aun así, y debido al enorme peso que esta hipótesis ha tenido para los científicos sociales en el transcurso de los siglos, consideramos pertinente testar su relevancia para nuestro objeto específico de investigación.

De este modo, y retomando el hilo argumental sobre la duración de los grupos armados, la consecuencia lógica del tipo de razonamiento expuesto sería que, ante situaciones de disminución sustancial – o desaparición en el mejor de los casos – de los niveles de desigualdad social, las probabilidades de finalización de la lucha armada se verían significativamente incrementadas. La supresión de los agravios que motivaron la decisión de tomar las armas, o su reducción hasta niveles interpretados como “tolerables” por los insurrectos, estarían en la base de la terminación del conflicto. Por el contrario, en contextos de desigualdad y pobreza severa, los enfrentamientos violentos tenderían a perpetuarse, en la medida en que las condiciones socioeconómicas actuarían como retroalimentación de la insurgencia.

*Hipótesis 3:*

*Las mejoras en los indicadores de agravios socioeconómicos y desigualdad social irán acompañadas de un incremento en las probabilidades de desarme de los grupos insurgentes.*

### **2.3.3. El contexto internacional: las consecuencias del final de la Guerra Fría**

En las primeras páginas de este capítulo señalábamos cómo el análisis de la EOP adolece, en términos generales, de un fuerte sesgo estatista, que obvia el impacto del

contexto internacional sobre las estrategias y supervivencia de los actores colectivos (McAdam, 1999a: 62-65). Los conflictos armados internos y, en general, la contienda política doméstica, han sido frecuentemente analizados sin atender a las dinámicas desatadas más allá de las fronteras estatales. De este modo, buena parte de las investigaciones ha abordado los procesos de movilización social en cuanto que fenómenos aislados, situados en departamentos estancos, entendiendo los Estados casi como entidades herméticas capaces de mantenerse ajenas al devenir transnacional. Sin embargo, lo cierto es que el sistema internacional puede también influir, y mucho, en el desarrollo de las luchas libradas en el interior de los países. Por ello, junto a los aspectos de la política doméstica ya analizados en epígrafes previos, aludiremos a continuación a la importancia del contexto internacional y, como dijera Theda Skocpol (1979: 23) en su célebre estudio de las revoluciones, al “tiempo del mundo”.

En particular, haremos referencia a las repercusiones intraestatales derivadas del periodo de la Guerra Fría y su posterior finalización. Durante aquellos años del “telón de acero”, la influencia del contexto internacional en el transcurso de los procesos políticos de ámbito doméstico se manifestó con especial claridad y crudeza. El enfrentamiento entre el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, encabezado por la URSS, tuvo evidentes consecuencias sobre el discurrir de los acontecimientos sociopolíticos acaecidos en la mayor parte de países del mundo. Este periodo generó también, como señalan Kalyvas y Ballcells (2010), un impacto clave sobre las “tecnologías de la rebelión”, dando forma en gran medida a los conflictos internos de carácter violento que se desarrollaban en numerosos Estados. Los efectos de este sistema internacional bipolar sobre la actividad y supervivencia de las organizaciones insurgentes pueden examinarse siguiendo dos ejes fundamentales de análisis: los recursos y la ideología<sup>126</sup>.

Uno de los principales efectos de la Guerra Fría sobre la incidencia tanto del terrorismo transnacional como de los grupos rebeldes de carácter doméstico fue la apertura de importantes vías de financiación a través del patrocinio estatal (Enders y Sandler, 1999; Chenoweth, 2010: 23; Kalyvas y Balcells, 2010). En ausencia de un enfrentamiento bélico directo entre las dos superpotencias, tanto EEUU como la URSS

---

<sup>126</sup> De modo similar, en su estudio sobre guerras civiles, Kalyvas y Balcells (2010: 420) señalan tres canales de comunicación entre el contexto de Guerra Fría y la insurgencia doméstica, a saber: apoyo material, creencias revolucionarias y doctrina militar.

proporcionaron importantes dosis de asistencia económica y militar no sólo a países aliados sino también a aquellos movimientos subversivos afines a su bloque de poder. Mediante este tipo de intervenciones ampliaban su órbita de influencia, tratando de configurar así un mapa geopolítico que les fuese favorable. Como concluyen Kalyvas y Ballcells (2010: 416), el sistema internacional contribuyó entonces a moldear la dimensión militar de los conflictos internos, alterando el poder relativo de los contendientes mediante el suministro de recursos a Estados y organizaciones rebeldes.

Por un lado, EEUU respaldó a numerosos grupos armados, facciones militares y gobiernos nacionales de perfil anticomunista, con el propósito de impulsar su lucha encarnizada contra la expansión del “socialismo real”. Ese intervencionismo, plasmado en programas de entrenamiento, recursos financieros y suministro de armas fue, como veremos más adelante, fundamental en la región latinoamericana, situada en lo que consideraba su “patio trasero”. Paralelamente, la URSS libraba también su feroz batalla contra el bloque capitalista, amparando a organizaciones insurgentes a lo largo de todo el globo, principalmente en los países del Sur. En estas labores de financiación, apoyo logístico y adiestramiento militar de grupos armados filocomunistas, jugaron también un papel destacado Estados como China, Cuba y Libia entre otros (Kalyvas y Balcells, 2010: 420). En este contexto, y gracias al auspicio de las grandes potencias del sistema bipolar, muchas organizaciones insurgentes vieron fortalecidos su capacidad y recursos para continuar su actividad en la senda de la lucha armada, lo que podría constituir un factor de incremento en su esperanza de vida<sup>127</sup>.

Asimismo, y junto a la importancia del apoyo material a las organizaciones rebeldes, cabe señalar también el impacto clave que el “combate ideológico” librado durante la Guerra Fría tuvo sobre las formaciones armadas. Muchos rebeldes actuaron alentados e inspirados por un imaginario revolucionario generador de marcos cognitivos capaces de ofrecer esquemas alternativos de interpretación de la realidad y la contienda

---

<sup>127</sup> En su estudio de los efectos del patrocinio estatal sobre la duración de grupos terroristas, Carter (2012) advierte, no obstante, de las posibles consecuencias adversas de esta fuente de apoyo para la supervivencia de tales organizaciones. De acuerdo con el autor, el aprovisionamiento de recursos disminuye efectivamente las probabilidades de disolución interna de los grupos insurgentes. Sin embargo, prosigue, cuando terceros países ofrecen refugio y bases de operaciones para las organizaciones rebeldes, aumenta significativamente el riesgo de ser eliminadas, puesto que dichos Estados tendrán incentivos para delatar a sus “protegidos” y evitar así posibles intervenciones militares extranjeras. Por ello, Carter concluye que este tipo de padrino estatal puede, en la práctica, resultar “una bendición o un maleficio”.

política. Así, como nos recuerdan Kalyvas y Ballcells (2010: 420), las creencias son relevantes para la acción insurgente en al menos un triple sentido: plantean un modelo contra-hegemónico creíble de ordenación sociopolítica; son fuente de motivación fundamental para los iniciadores del proceso, dispuestos a asumir enormes costes en su pugna por la causa revolucionaria; y promueven la confianza en la factibilidad de una transformación radical del sistema a través de la “vía armada”.

Esa configuración de un paradigma político de contra-hegemonía se tornó aún más creíble, adquiriendo nuevo impulso, tras el triunfo de la revolución cubana de 1959<sup>128</sup>. La victoria de “los barbudos de Sierra Maestra” alentaba la mitología guerrillera y perfilaba un modelo de lucha que se extendía como la pólvora a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Era la plasmación empírica de un sistema de organización sociopolítica alternativo al capitalismo que, ahora sí, se presentaba como viable. Como dijera Régis Débray, “Cuba apareció como un trueno en medio del escepticismo y la legalidad. Demostró que la revolución anti-imperialista en América Latina era posible, y en ese mismo instante” (cit. en Martí i Puig, 2002: 3).

De este modo, la caída del muro de Berlín no sólo entrañó el estrangulamiento de las vías de suministro y financiación que alimentaban a numerosas organizaciones insurgentes, sino que además supuso para muchos el temido despertar del “sueño de la revolución”. Con el colapso del bloque comunista, la ideología del marxismo-leninismo entra en crisis, se activa un proceso de deslegitimación de la “vía armada” como forma de lucha política, y la fe en la posibilidad de un cambio radical de modelo socioeconómico se ve intensamente resquebrajada<sup>129</sup>. El debilitamiento de este paradigma alternativo al sistema capitalista afectó de manera fundamental a numerosas organizaciones armadas, en la medida en que “activistas radicales procedentes de los países en vías de desarrollo despertaron en un nuevo mundo en el que su ideología se encontraba hecha añicos” (Kalyvas y Balcells, 2010: 421). En este sentido, autores

---

<sup>128</sup> Veinte años más tarde, en julio de 1979, la toma de poder sandinista ponía fin a la larga noche del somocismo en Nicaragua, brindando un aliento renovado al ideario de la revolución.

<sup>129</sup> Como es bien sabido, muchos auguraron entonces la llegada del “fin de la Historia” (Fukuyama, 1992), firmando de manera precipitada el “acta de defunción” de todo paradigma contrario al modelo político y económico imperante. Desde esta óptica, se proclamaba el “triunfo” de una forma única de organización social que demostraba la ausencia de alternativas viables al capitalismo y la democracia liberal. Esta perspectiva analítica ha sido, no obstante, fuertemente cuestionada, convirtiéndose en objeto de numerosas críticas formuladas desde posiciones teóricas e ideológicas muy diversas, que sostienen, como también nosotros, que “la Historia continúa”.

como Edward Crenshaw, Jenkins y Robinson (2006) sitúan también en esa rivalidad ideológica propia de la Guerra Fría, la fuente de actividad de múltiples grupos armados izquierdistas de carácter transnacional vigentes durante el periodo. Según sus análisis, tal es el motivo por el que, una vez finalizada la política de bloques, este tipo de terrorismo sufrió una acusada disminución<sup>130</sup>.

Los argumentos previamente expuestos respaldan la hipótesis del incremento en las probabilidades de desarme de la insurgencia tras la Guerra Fría. De acuerdo con los mecanismos señalados, tanto el desmantelamiento de las estructuras de apoyo logístico y financiero procedentes de los polos del sistema, como la alteración de los marcos cognitivos y discursos movilizadores que impulsaron la acción de multitud de organizaciones armadas, son fundamentales para dar cuenta de la desactivación de numerosos focos de disidencia intraestatal. En definitiva, las líneas precedentes pretenden poner de manifiesto cómo las decisiones estratégicas de los grupos rebeldes estarán mediadas no sólo por la situación política nacional, sino también por el marco internacional en que se desarrollan los enfrentamientos armados.

*Hipótesis 4:*

*El contexto internacional incide en el desarrollo de los conflictos internos. En particular, la finalización de la Guerra Fría fue favorable a la desmovilización de la insurgencia, aumentando las probabilidades de pacificación de los enfrentamientos violentos.*

#### **2.3.4. Las características de las organizaciones insurgentes: una incursión en el nivel micro-analítico**

En el transcurso de este capítulo hemos expuesto los principales argumentos teóricos que relacionan la desmovilización de las organizaciones insurgentes, y su consiguiente abandono de la lucha armada, con las características del entorno sociopolítico en que llevan a cabo su actividad. Sin embargo, y como ya señalamos anteriormente, diversos estudiosos de la acción colectiva, partidarios de enfoques ligados a la teoría de la movilización de recursos, han propugnado la necesidad de trascender aquellas aproximaciones restringidas a los componentes contextuales,

---

<sup>130</sup> En realidad, este artículo está orientado a la discusión de la hipótesis planteada por Rapoport (2004) sobre la existencia de una “cuarta ola” de terrorismo islamista internacional, sucesora de las tres oleadas previas: anarquista, anticolonial y, finalmente, izquierdista.

incorporando elementos referidos a las propias organizaciones objeto de estudio. Tal propuesta amplía la perspectiva del investigador, planteando el empleo de un “gran angular” capaz de contemplar no sólo los agravios y ventanas de oportunidad política, sino también la estructura y recursos de las organizaciones contendientes. En la presente investigación, y debido al énfasis analítico realizado sobre las dimensiones asociadas al régimen político y otros aspectos de nivel macro, se tratará tan sólo de una leve mirada hacia el interior de las organizaciones, cuya profundización quedará pendiente para futuros trabajos. No obstante, conscientes de su importancia, glosaremos a continuación las principales líneas explicativas que, situadas en el ámbito de los actores colectivos, pueden ser vinculadas a la duración de los grupos rebeldes.

En este sentido, autores como Cunningham, Gleditsch y Salehyan (2009) defienden la necesidad de un enfoque diádico en el estudio de los enfrentamientos armados que, junto a los atributos estatales, tenga en cuenta las capacidades de los actores antagonistas del conflicto. En particular, establecen dos dimensiones básicas en la fortaleza de las organizaciones rebeldes, imprescindibles para el estudio de la contienda: su capacidad ofensiva para atacar al gobierno y su habilidad para resistir los embates de la represión estatal. Se trata, en definitiva, de integrar en el análisis las características internas de los grupos armados, bajo la premisa básica de que su supervivencia dependerá en buena medida de la disposición de capacidades y recursos suficientes, ingredientes sin los cuales la organización no será apta para continuar operativa y llevar a cabo sus ataques (Young y Dugan, 2010: 6).

Esos recursos necesarios para la actividad insurgente, y fundamentales en la configuración de sus opciones estratégicas, pueden clasificarse en tres categorías diferenciadas: materiales, personales y estratégicos/organizativos. Por lo que respecta a los primeros, parece obvio que la disposición de canales de financiación, infraestructuras y, en resumidas cuentas, un aparato logístico eficaz, afectará a las probabilidades de sostenimiento de la actividad armada. Junto a la cuestión del patrocinio estatal, abordada en el epígrafe anterior, la literatura ha aludido a la importancia de otros canales estables de obtención de fondos económicos como la extorsión, los secuestros, los robos, o las diásporas en el exterior. En particular, James Fearon (2004), Collier y Hoeffler (2004) o Söderbom junto a los anteriores autores (Collier et al., 2004) destacan el papel de los recursos naturales como factor de riesgo en el estallido y prolongación de las guerras civiles. Así, en aquellos contextos en los que

los rebeldes tienen acceso a la financiación derivada del contrabando de piedras preciosas (v.g. Angola o Sierra Leona), opio (v.g. Birmania-Myanmar) o cocaína (v.g. Colombia), los enfrentamientos armados tenderán a ser significativamente más largos (Fearon, 2004: 283-284).

Al impacto de las finanzas, se une el peso indiscutible del volumen de la militancia. La existencia de combatientes dispuestos a empuñar las armas es, sin lugar a dudas, uno de los requisitos básicos para la continuidad de la estrategia violenta de desafío al Estado<sup>131</sup>. Desde esta perspectiva, las organizaciones armadas que cuenten con un mayor número de miembros entre sus filas tendrán la capacidad de mantener, durante un tiempo más dilatado, la actividad insurgente contra el gobierno. Sin embargo, como advierten Cederman et al. (2012: 89), los grupos rebeldes se enfrentan, en este punto, a un doble reto: el reclutamiento inicial de nuevos combatientes y la conservación de los antiguos reclutas. Para ello, prosiguen, será necesaria una estructura de recompensas e incentivos que impulse la permanencia de los rebeldes en las organizaciones armadas, destacando la importancia de mecanismos como el compromiso, la tolerancia a los costes y la solidaridad grupal.

En su estudio sobre los conflictos internos, Weinstein (2007: 7 y ss.) profundiza precisamente en la cuestión del compromiso y los incentivos a la colaboración con las organizaciones insurgentes. Como ya señalamos previamente, distingue entre “rebeliones activistas” *versus* “rebeliones oportunistas”. En las primeras, las ganancias a corto plazo para los participantes en la contienda resultan altamente improbables y la acción lleva aparejados grandes riesgos, por lo que las organizaciones únicamente atraerán a aquellos individuos más comprometidos, a los que denomina “inversores”. Sin embargo, cuando los grupos insurgentes cuentan con abundantes recursos económicos, los potenciales combatientes podrán esperar recompensas inmediatas a su colaboración, convirtiéndose en “consumidores” con un menor grado de implicación. Por tanto, los recursos disponibles por la organización determinan, de acuerdo con Weinstein, el perfil de sus miembros, afectando también a su organización interna, estrategias y formas de ejercicio de la violencia.

---

<sup>131</sup> Esa “buena disposición” para participar en las actividades insurgentes no siempre nace de la voluntad de sus miembros. En ocasiones, las organizaciones armadas llevan a cabo campañas de reclutamiento forzoso que amplían el contingente de combatientes a través de amenazas y coerción.

De modo similar, Collier, Hoeffler y Söderbom (2004) agrupan en tres grandes bloques las diversas perspectivas existentes en torno a las motivaciones para la rebelión, asociándolas a la prolongación de los enfrentamientos armados<sup>132</sup>. En primer lugar, el enfoque de la “rebelión-como-inversión” alude a la expectativa de recompensas – políticas o materiales – alcanzables sólo tras la victoria, como estímulo fundamental de la revuelta, interpretándola en términos de “inversión” de altos costes, pero con importantes ganancias en juego. En segundo lugar, recogen la idea de “rebelión-como-error”, según la cual es el optimismo militar y la sobreestimación de las probabilidades de éxito quienes espolean la insurrección e impiden interpretar los posibles acuerdos de armisticio como mutuamente ventajosos<sup>133</sup>. Por último, la conceptualización de la “rebelión-como-negocio” sitúa los incentivos para la participación en la esperanza de obtener beneficios privados durante el transcurso del conflicto. Desde esta óptica, la insurgencia es interpretada como un medio de vida o negocio a través del cual los rebeldes obtendrán considerables ganancias, pese a los terribles costes derivados de los enfrentamientos para la sociedad en su conjunto. Esta línea interpretativa corresponde a los ya mencionados “modelos de la codicia” en el análisis de las guerras civiles. Algunos autores han llegado a señalar, incluso, que los rebeldes son en ciertas ocasiones “indistinguibles de bandidos y piratas” (Grossman, 1999: 269), tachando la insurrección armada de actividad esencialmente orientada al saqueo y el pillaje. Por el contrario, no faltan quienes han apuntado hacia la importancia esencial del altruismo a la hora de dar cuenta de la participación y permanencia de los activistas en las organizaciones insurgentes. Así, en palabras de Hoffman (2006: 37), “el terrorista es fundamentalmente un *altruista*: cree que está al servicio de una «buena» causa diseñada para alcanzar un bien mayor para una población más amplia – ya sea real o imaginada – a quien el terrorista y su organización pretenden representar” (cit. en Young y Dugan, 2010: 30).

Finalmente, existen diversos trabajos que inciden en el impacto de los recursos estratégicos y organizativos de los grupos armados sobre la continuidad y características de su lucha. En este sentido, se ha señalado la relevancia de cuestiones tales como el papel de las alianzas entre organizaciones insurgentes (Phillips, 2011; Bapat y Bond,

---

<sup>132</sup> Según los citados autores, sus análisis empíricos rechazan el primero de los modelos que aquí exponemos, respaldando no obstante los dos siguientes.

<sup>133</sup> Se ha señalado también la importancia de los denominados “dilemas de seguridad” a la hora de llegar a acuerdos de desarme entre las partes en liza (Herreros, 2005a). En este sentido, la desconfianza en el cumplimiento de los términos del convenio por parte del oponente dificulta los pactos y puede prolongar los enfrentamientos violentos.



2012), la reincidencia, severidad y violencia de los ataques (Blomberg et al., 2010), el control territorial (Cunningham et al., 2009), o su capacidad adaptativa e innovación táctica (Young y Dugan, 2010). Asimismo, existe un debate sobre la posible función que la ideología desempeña en la persistencia de los enfrentamientos violentos, que ha llevado a diversos autores a indagar el posible impacto del perfil religioso, étnico, izquierdista o derechista de las organizaciones armadas en su duración (Jones y Libicki, 2008; Carter, 2012)<sup>134</sup>.

En definitiva, existen en la literatura razones fundamentadas para pensar que las prácticas, recursos y rasgos organizativos de los grupos rebeldes afectarán de manera crucial a su duración y permanencia dentro los márgenes de la “vía armada”. Por ello, parece conveniente contemplar factores asociados a la capacidad de estos actores colectivos en el estudio de la finalización de la violencia insurgente, bajo la consideración de que una mayor fortaleza de las organizaciones hará factible una supervivencia significativamente más duradera<sup>135</sup>. De este modo, y junto al análisis del marco contextual en que se desarrollan los enfrentamientos, resulta preciso situar un foco que permita iluminar el nivel micro de investigación.

*Hipótesis 5:*

*Las características internas de las organizaciones armadas afectan también a sus tasas de supervivencia. Así, una mayor capacidad y fortaleza de la insurgencia irá asociada a un descenso en las probabilidades de desmovilización y a una duración más prolongada.*

---

<sup>134</sup> Hay, por ejemplo, quienes han apuntado al carácter rígido e indivisible de las identidades étnicas, dificultando la resolución de los conflictos armados articulados en torno a ideologías nacionalistas, que tenderían a prolongarse en el tiempo (Kaufmann, 1996). Además, se ha atribuido a este tipo de enfrentamientos un marcado componente de “todo o nada”, poco favorable a la transacción, donde la única salida real al conflicto viene de la mano de la partición cuando “los grupos contrincantes son demográficamente separados en enclaves defensivos” (Kaufmann, 1996: 137). Se trata, en todo caso, de posiciones ampliamente cuestionadas, para las que no resulta difícil encontrar argumentos rivales en la producción académica. Tal sería el caso del trabajo de Cederman et al. (2012) sobre la relación entre etnicidad y duración de las guerras civiles. En él los autores rechazan perspectivas esencialistas en torno a los conflictos étnicos, concluyendo que son las prácticas estatales de discriminación y los agravios generados por las mismas los que explican este tipo de enfrentamientos violentos, y no las identidades étnicas *per se*. Para un debate en profundidad sobre la partición como salida a los conflictos étnicos remitimos al trabajo de Nicholas Sambanis (2000).

<sup>135</sup> En realidad, algunos autores realizan una lectura contraria de la fortaleza de los rebeldes. Tal es el caso de los ya citados Cunningham, Gleditsch y Salehyan (2009), quienes en su estudio sobre la duración y resultados de las guerras civiles afirman que las organizaciones insurgentes más fuertes, capaces de plantear desafíos militares serios al Estado y obtener de él concesiones a sus demandas, conducirán a enfrentamientos bélicos más cortos.



### CAPÍTULO III

---

#### MARCO, METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: LA ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO

Dotados ya de las herramientas teóricas y conceptuales adquiridas a lo largo de los capítulos previos, afrontamos ahora una nueva etapa en el curso de nuestra investigación. De este modo, abrimos paso al estudio empírico que nos permitirá contrastar las hipótesis planteadas y avanzar en el análisis de la actividad insurgente. Pero antes de dar tal paso, resulta imprescindible aclarar el *cuándo*, el *dónde* y el *cómo* de este trabajo de investigación. Ése es el objetivo central del presente capítulo, en el que presentaremos las características del diseño metodológico aplicado a la observación de los casos. Se trata, en definitiva, de exponer el modo en que daremos respuesta a las preguntas formuladas en la definición de nuestro objeto de estudio.

Partiremos, para ello, de la ubicación de nuestro trabajo en el eje espacio-tiempo, señalando el marco geográfico que albergará los análisis, así como el periodo en que situaremos el foco de atención. Procederemos, a continuación, a explicitar los métodos y técnicas de investigación que serán empleados en el posterior estudio empírico. Esta exposición de las estrategias metodológicas adoptadas servirá de paso previo a la descripción de la base de datos en que se fundamentan nuestros análisis. Mostraremos, así, tanto el procedimiento de operacionalización de las variables teóricas definidas con anterioridad, como la configuración y estructura del conjunto de datos. Para terminar, llevaremos a cabo un ejercicio de sistematización de las hipótesis, variables e indicadores que vertebran este estudio, sirviendo de antesala al examen empírico de los casos.

### 3.1. MARCO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL: AMÉRICA LATINA, 1970-2000

El punto de partida de nuestro diseño empírico sitúa este trabajo de investigación en un lugar y momento histórico determinados: América Latina entre los años 1970 y 2000. La delimitación de dicho marco geográfico y temporal responde a criterios de relevancia científica, que justifican su interés para nuestro estudio en al menos un doble sentido. En primer término, el subcontinente latinoamericano presenta una serie de características sociopolíticas a lo largo del periodo señalado que hacen de él un escenario óptimo para el abordaje de las cuestiones que aquí nos ocupan. La incidencia de episodios de violencia política insurgente, los procesos de cambio de régimen acontecidos en la mayor parte de los países de la región, o su posición estratégica durante el desarrollo de la Guerra Fría, acreditan su adecuación para dar respuesta a los interrogantes planteados. Asimismo, cabe destacar la escasez de estudios comparados y análisis sistemáticos sobre la duración y desmovilización de organizaciones armadas que tomen a esta región del globo como ámbito geográfico de referencia<sup>136</sup>. Existe, por tanto, un cierto vacío en la literatura que hace pertinentes las contribuciones científicas que esta investigación aspira a aportar.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, trataremos de referir en detalle los motivos de esa idoneidad espacial y temporal de la selección de nuestro ámbito de análisis. Para ello, esbozaremos una visión panorámica del contexto histórico donde se ubican nuestras indagaciones, dando cuenta de las peculiaridades de la realidad latinoamericana durante el último tercio del siglo XX. Incidiremos, además, en la especial vinculación del subcontinente con nuestro objeto específico de estudio. Realizaremos, así, un breve recorrido por la actividad insurgente desarrollada en la región a lo largo del periodo observado, a través de un mapeo de sus principales organizaciones armadas. Finalmente, plantharemos una reflexión sobre la importancia y significado de los estudios de área, dentro de cuyos márgenes se halla emplazado el presente trabajo de investigación.

---

<sup>136</sup> Pueden encontrarse, por supuesto, ciertas excepciones a las ausencias señaladas. Entre ellas podemos encontrar trabajos sobre las causas e incidencia de la violencia política en América Latina (v.g. Feldmann y Perälä, 2004; Schatzman, 2005), estudios exhaustivos sobre los grupos insurgentes activos en la región (v.g. Wickham-Crowley, 1993; Pereyra, 1997) o análisis comparados sobre sus procesos de paz (v.g. Arnson, 1999a). En todo caso, y hasta donde alcanza el conocimiento de la autora, no se han desarrollado hasta la fecha estudios sistemáticos sobre los motivos de la supervivencia o finalización de las organizaciones armadas, comprensivos de todo el conjunto de países latinoamericanos.

### **3.1.1. El contexto histórico latinoamericano: de dictadores, insurgentes y procesos de democratización**

Las peculiaridades del devenir político latinoamericano durante el último tercio del siglo XX convierten al subcontinente en un marco propicio para el estudio de la insurgencia. A lo largo del periodo comprendido entre 1970 y 2000 la región presenta una serie de características compartidas que, más allá de las especificidades nacionales, dibujan un tapiz cuyos trazos contribuyen a dar respuesta a los interrogantes que motivan la presente investigación. Este apartado realiza un pequeño itinerario a través de los principales rasgos configuradores de este particular contexto sociopolítico. Pretendemos con ello ofrecer una primera aproximación a la historia reciente de América Latina que nos permita ubicar en ella nuestro objeto de estudio y dar cuenta de su relevancia para los análisis.

Es ya un lugar común aludir al carácter convulso, inestable y cambiante de la realidad política latinoamericana como preámbulo recurrente al examen de su evolución y rasgos definitorios<sup>137</sup>. Y lo cierto es que, sin pretender con ello “salvar los muebles” de otras latitudes del globo, el periodo histórico sobre el que situamos nuestra lupa parece responder a tales caracterizaciones. En el transcurso de aquellos años, la región fue testigo de numerosas dictaduras, violentos enfrentamientos armados, una profunda crisis económica y una “ola democratizadora” que trajo – de vuelta – al subcontinente las instituciones de la democracia representativa.

En la década de 1960 dio comienzo un ciclo de autoritarismo que asoló la región durante más de veinte años. A las viejas dictaduras ya imperantes en diversos países latinoamericanos como Nicaragua, México, El Salvador o Paraguay, se unieron aquéllas derivadas de la sucesión de golpes de Estado que hicieron caer a numerosos gobiernos civiles de carácter electivo. Iniciada con la intervención de los militares en Brasil en 1964, esta proliferación de asonadas golpistas se extendió como la pólvora por los rincones más diversos del subcontinente, alcanzando a países como Argentina (1966 y 1976), Perú (1968), Chile (1973) o Uruguay (1973). La llegada de estos nuevos dictadores fue configurando una “cartografía del terror” que situaba a la región en un

---

<sup>137</sup> Peter Smith (2009: 52) habla, por ejemplo, de la inestabilidad política endémica en América Latina a lo largo del siglo XX, ilustrando tal afirmación con la ocurrencia de 155 cambios de régimen entre 1900 y 2000. Así, y en términos comparados, la región mostró a lo largo de este periodo un número inusualmente elevado de fluctuaciones.

escenario tal que a finales de la década de los setenta sólo Costa Rica, Venezuela y Colombia contaban con presidentes elegidos a través de las urnas.

Las fuerzas armadas pasaban así al primer plano de la arena política, como ya lo habían hecho en numerosos momentos desde la independencia latinoamericana de las metrópolis europeas. Las Juntas militares, como dieron en llamarse comúnmente estas formas de gobierno integradas por miembros del ejército, se presentaban como los “cirujanos” que habían de intervenir con urgencia para socorrer al cuerpo enfermo de la nación. Como señala Peter H. Smith (2009: 81), estas ideas de defensa de la patria y servicio a la nación terminaron por equipararse, a lo largo del subcontinente, con la necesidad de una “tutela militar de la política”. De acuerdo con el autor, el ejército se autoproclamó entonces el ungido para llevar a cabo la “gran misión histórica” de proteger a la patria combatiendo, con mano firme, a sus enemigos tanto internos como externos. Era preciso, conforme a tal creencia, que los militares tomaran las riendas del Estado para liberar a la nación del caos y el desorden en que, según afirmaban, se encontraba inmersa. Así lo expresaba – con terrible cinismo – José Toribio Merino, Almirante de la Armada de Chile y posterior miembro de la Junta Militar de Gobierno, el 11 de septiembre de 1973:

Las fuerzas armadas, organismos esencialmente profesionales, no pueden permanecer impasibles ante el derrumbe de nuestra patria y la desesperación de millones de chilenos. Esto no es un golpe de estado, pues es un tipo de esquema que no calza con nuestro modo de ser y repugna a nuestra conciencia legalista y profunda convicción cívica (...). Formados en una escuela de civismo, de respeto por la persona humana, de convivencia de justicia y de patriotismo, no se persigue otra finalidad que no sea la felicidad de todos los chilenos, no importa cual sea su posición, pero que puedan vivir en paz, tranquilidad y sin temor al mañana, ni de ellos ni el de sus hijos (CEME, 2003-2007).

Esta ola de autoritarismo presentó, no obstante, semblantes variopintos a través de los distintos países latinoamericanos. No existe, pues, una pauta única o perfil común en los regímenes dictatoriales imperantes en la región, sino que exhibieron características diversas, oscilando desde los gobiernos militares del Cono Sur, agrupados por O'Donnell (1996) bajo la rúbrica del “modelo burocrático-autoritario”, hasta el “sultanato” de la familia Somoza en Nicaragua (González, 1991: 450-451), pasando por el paradigma de partido hegemónico del PRI mexicano. En todo caso, la concentración del poder y su ejercicio despótico por parte de los gobernantes tuvieron consecuencias nefastas para la población del subcontinente sometida al yugo del

autoritarismo. Así, y aunque pudo observarse también una importante variabilidad en este sentido, la represión y las violaciones de los derechos humanos se convirtieron durante las décadas estudiadas en una ominosa seña de identidad de la política latinoamericana.

De este modo, aquellos años dejaron tras de sí un reguero atroz de persecuciones, encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones de miles de ciudadanos desde el Río Bravo hasta la Tierra de Fuego. La erradicación de cualquier forma de disidencia, cristalizada en el concepto de “enemigo interno” según la Doctrina de la Seguridad Nacional, se convirtió en una obsesión para los dictadores de la región. Esta “guerra sucia” contra la oposición alcanzó, de hecho, dimensiones continentales a través de la denominada “Operación Cóndor”. Puesta en funcionamiento en 1975, impulsaba una red de cooperación entre las dictaduras latinoamericanas, con el objetivo de coordinar acciones de inteligencia que facilitaran la persecución, repatriación y exterminio de los opositores políticos más allá de las propias fronteras estatales (McSherry, 2002: 38)<sup>138</sup>. Tales campañas de terror adquirieron enormes magnitudes, amenazando la integridad física no sólo de los activistas militantes de la disidencia, sino también de cualquier sospechoso de izquierdismo, en la medida en que, en palabras del propio Jorge R. Videla, “un terrorista no es sólo alguien con una pistola o una bomba, sino también alguien que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana” (cit. en Smith, 2009: 90).

Junto a los diversos factores domésticos que, en cada uno de los casos, contribuyen a explicar la llegada al poder de estos gobiernos dictatoriales, el contexto internacional de la Guerra Fría juega también un papel crucial en el análisis de la realidad latinoamericana. Como ya señalamos en el capítulo previo, las dinámicas desatadas por la política de bloques tuvieron consecuencias directas sobre el discurrir de los acontecimientos sociopolíticos desarrollados en el interior de los países de la región a lo largo de este periodo. Su ubicación geográfica situaba a América Latina, parafraseando la célebre sentencia de Porfirio Díaz, “demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de los Estados Unidos”<sup>139</sup>.

---

<sup>138</sup> Los principales países miembros de este plan de represión coordinada eran Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, incorporándose también más tarde Ecuador y Perú (McSherry, 2002: 38).

<sup>139</sup> La cita textual atribuida al dictador mexicano, que ocupó la presidencia del país en periodos alternos entre 1976 y 1910, dice así: “¡Pobre México! Tan lejos de Dios, y tan cerca de los Estados Unidos”.

En su liderazgo del bloque capitalista, este país trató, con todos los medios a su alcance, de ahuyentar el riesgo de contagio comunista dentro de su área de influencia. De este modo, la política exterior estadounidense centró buena parte de sus esfuerzos en evitar que los países de “su patio trasero” cayeran en la órbita soviética. Para ello, no dudó en intervenir de manera activa en la política interna de los países latinoamericanos. El derrocamiento, auspiciado por la CIA, del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954 constituye un hito fundamental en la activación de la política estadounidense de “contención” durante la Guerra Fría. Su puesta en práctica a lo largo del subcontinente entrañó la promoción de golpes de Estado contra presidentes “incómodos” para la gran potencia<sup>140</sup>, la formación y adiestramiento de militares latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia – destacando el papel desempeñado por la Escuela de las Américas<sup>141</sup> –, y el respaldo a dictadores considerados garantes de sus intereses y antídoto eficaz contra el marxismo. George Kennan, uno de los principales artífices de esta doctrina de contención, lo expresaba del siguiente modo: “La respuesta final podría ser desagradable, pero no debemos vacilar ante la represión policial por parte del gobierno local. No es vergonzoso, porque los comunistas son esencialmente traidores (...). Es mejor tener en el poder a un régimen fuerte que a uno liberal si es indulgente, relajado y está infiltrado por comunistas” (cit. en Smith, 2009: 114). Así se lo hacía saber también John Foster Dulles, secretario de Estado norteamericano, a sus diplomáticos: “No hagan nada que ofenda a los dictadores; son las únicas personas con las que podemos contar” (cit. en Smith, 2009: 88)<sup>142</sup>.

Este contexto de enfrentamiento bipolar vino acompañado no sólo por un incremento de la violencia estatal en la región, sino también por una fuerte presencia de organizaciones rebeldes que desafiaron mediante las armas al poder del Estado. En este sentido, y como ya apuntamos en páginas previas, el impacto de la revolución cubana de 1959 fue fundamental en la configuración de este nuevo escenario de insurgencia. Así, y

---

<sup>140</sup> El golpe de Estado contra Salvador Allende, presidente chileno de la Unidad Popular, el 11 de septiembre de 1973 constituye también un ejemplo paradigmático.

<sup>141</sup> Encuadrada en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la Escuela de las Américas proporcionó entrenamiento a miles de militares y policías latinoamericanos, adiestrados por el Ejército y los Servicios de Inteligencia estadounidenses en métodos de tortura, extorsión y asesinato. Entre sus egresados figuran nombres como Leopoldo Galtieri, Hugo Banzer, Efraín Ríos Montt o Manuel Noriega.

<sup>142</sup> En esta misma dirección apunta también la popular sentencia referida al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, supuestamente pronunciada – aunque continúa la controversia sobre su autoría – por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt: “Puede que sea un hijo de puta, pero es *nuestro* hijo de puta”.



aunque la movilización colectiva y la lucha armada no eran ajenas a la historia latinoamericana<sup>143</sup>, lo cierto es que la derrota de Fulgencio Batista por los guerrilleros de la Sierra Maestra supuso un importante revulsivo para la movilización colectiva. La idea – casi convertida en mito – de una revolución victoriosa posible y la doctrina táctica del “foco”<sup>144</sup> calaron en las mentes y los corazones de numerosos jóvenes dispuestos a emular la empresa cubana a lo largo y ancho de toda América Latina (Martí i Puig, 2002)<sup>145</sup>.

El periodo comprendido por nuestro marco temporal de análisis fue, por lo tanto, testigo de una intensa actividad armada. Se corresponde, en particular, con la denominada “segunda oleada insurgente”, desarrollada como veremos más adelante a partir de 1970, tras el deceso de los primeros grupos guerrilleros creados al calor de la experiencia en Cuba (Wickham-Crowley, 1993: 209 y ss.; Castañeda, 1995: 107 y ss.)<sup>146</sup>. En esta etapa se produce un incremento considerable de la lucha armada en América Latina, con la presencia de organizaciones insurgentes con una notable capacidad operativa y conflictos violentos de gran envergadura en países como

---

<sup>143</sup> Christina Schatzman (2005: 293, nota 5) incide en este pasado de subversión señalando que, según clasificaciones diversas – alude, en particular, a los trabajos de Zimmerman (1990), Walt (1992) y Russell (1974)–, en torno a un tercio de todas las revoluciones y rebeliones de masas desarrolladas en el siglo XX han tenido lugar en esta región.

<sup>144</sup> De acuerdo con la teoría del foco guerrillero, planteada por Ernesto Che Guevara (1977) y desarrollada por Régis Debray (1967), el componente voluntarista podía desempeñar, más allá de las condiciones objetivas, un papel fundamental para el estallido revolucionario. En palabras del Che, “un pequeño grupo de hombres decididos y sin miedo a la muerte, con el apoyo del pueblo, puede vencer a un ejército regular y disciplinado” a través de la estrategia de la guerra de guerrillas (cit. en Martí i Puig, 2002: 20, nota 5). Ese peso fundamental de la subjetividad en la promoción de los procesos revolucionarios se hace también patente en las siguientes palabras de Fidel Castro, pronunciadas en la que se conoce como Segunda Declaración de La Habana de 1962: “El deber de todo revolucionario, es hacer la revolución. Es sabido que la revolución va a triunfar en América y en el resto del mundo, pero este acontecimiento no será gracias a los revolucionarios sentados esperando ver pasar el cadáver del capitalismo a través de la ventana” (cit. en Martí i Puig, 2002: 20, nota 5).

<sup>145</sup> Junto a la influencia de la revolución en Cuba y la política de bloques de la Guerra Fría, Martí i Puig (2002: 5-6) señala el impacto de otras organizaciones y construcciones ideológicas importantes para explicar las luchas libradas en América Latina a lo largo del periodo que analizamos. Incide, concretamente, en el desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base y la Teología de la Liberación, cuyo peso en los procesos de movilización de la época resultó fundamental. En todo caso, resulta preciso aclarar que, si bien es cierto que la mayor parte de grupos armados activos en la región durante este periodo respondían a orientaciones ideológicas izquierdistas de diverso cuño, no faltaron, según observaremos posteriormente, organizaciones de inspiración conservadora, nacionalista o indigenista.

<sup>146</sup> Tanto Timothy Wickham-Crowley (1993) como Jorge Castañeda (1995) identifican dos oleadas sucesivas de movimientos armados en América Latina. Así, mientras la primera ola englobaría el final de los años cincuenta y la década inmediatamente posterior a la revolución cubana, el segundo ciclo revolucionario arrancaría, según hemos apuntado, en 1970, prolongándose a lo largo de las siguientes décadas.

Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia o Perú. Así puede constatar en el Gráfico 3.1, donde se ofrece una perspectiva comparada de la incidencia de la violencia política no estatal, según regiones geográficas, durante el último tercio del siglo XX. La ilustración muestra el número de incidentes violentos registrados en la *Global Terrorism Database (GTD)*<sup>147</sup>, elaborada por el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) (2010a)<sup>148</sup>, a lo largo del periodo. De acuerdo con los resultados obtenidos, América Latina presenta, durante buena parte del arco temporal observado, niveles de violencia no estatal superiores a cualquier otra región del globo. Asimismo, si atendemos a la media anual de incidentes computados por la GTD durante estas tres décadas, el subcontinente experimenta un mayor número de episodios violentos que el resto de latitudes del planeta (América Latina: 916; Europa: 500; África y Oriente Medio: 476; Asia: 398; América del Norte: 72; Oceanía: 7)<sup>149</sup>. Parece, por tanto, evidente la enorme relevancia del fenómeno de la insurgencia en América Latina en el transcurso del periodo analizado.

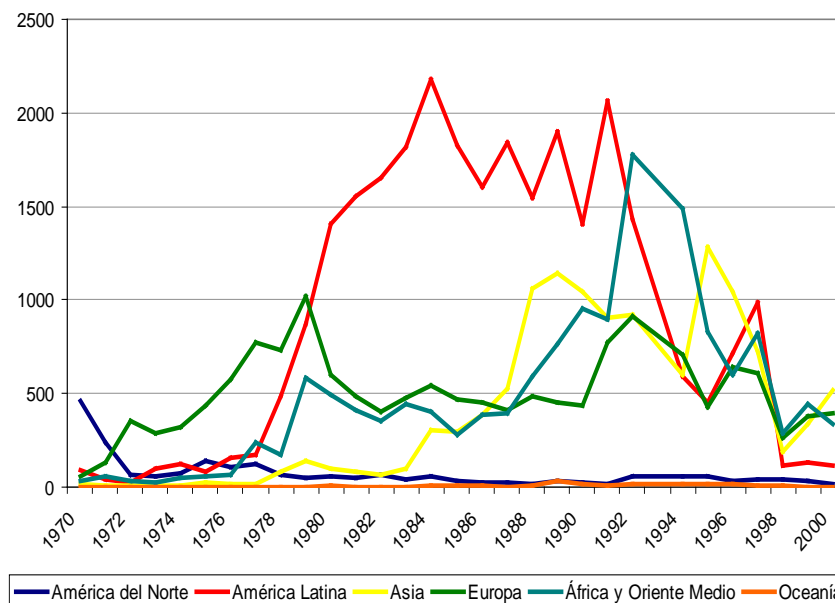
---

<sup>147</sup> Volveremos con más detalle sobre las características de la GTD al abordar la estructura y configuración de nuestra base de datos. En todo caso, conviene aclarar aquí el tipo de información recogida en esta gráfica bajo la rúbrica de “incidentes violentos”. De acuerdo con los criterios de inclusión establecidos por el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) (2010b: 5), los incidentes referidos han de ser intencionales, implicar violencia o amenaza de la violencia y ser perpetrados por actores no estatales. Asimismo, han de cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: a) estar orientados a la consecución de objetivos políticos, económicos, religiosos o sociales; b) tener la intención de coaccionar, intimidar o transmitir un mensaje a una audiencia más amplia que las víctimas directas de la acción; c) situarse fuera de los parámetros de las leyes internacionales humanitarias que regulan los enfrentamientos armados. Cabe señalar, además, que los ataques representados en la ilustración para América Latina fueron perpetrados por un universo de organizaciones más amplio que aquél que constituye nuestro objeto de estudio, cuyos criterios específicos de selección serán expuestos más adelante.

<sup>148</sup> En el momento de escribir estas líneas, se encuentra ya disponible en la web del proyecto GTD (<http://www.start.umd.edu/gtd/>) una versión posterior, del año 2012, de la base de datos y su correspondiente *Codebook*. Aquí referenciamos, no obstante, la versión empleada durante la elaboración de esta tesis doctoral.

<sup>149</sup> La recodificación de categorías regionales efectuada para la realización del gráfico es la siguiente: 1. América del Norte = América del Norte; 2. América Latina = América Central y Caribe + América del Sur; 3. Asia = Asia Oriental + Sudeste Asiático + Sur de Asia + Asia Central; 4. Europa = Europa Occidental + Europa del Este + Rusia y los Estados Post-soviéticos; 5. África y Oriente Medio = Oriente Medio y Norte de África + África Subsahariana; 6. Oceanía = Australasia y Oceanía.

**Gráfico 3.1.** Evolución de la violencia política no estatal por regiones.  
Número de incidentes violentos (1970-2000)



Fuente: Global Terrorism Database (START, 2010a). Elaboración propia.

Si continuamos avanzando cronológicamente en nuestro breve recorrido por el contexto en que se encuadra esta investigación, los años ochenta aparecen como un momento histórico de grandes transformaciones para América Latina. Los países de la región experimentan entonces una profunda crisis económica, la denominada crisis de la deuda, cuyos devastadores resultados para las sociedades latinoamericanas hicieron de ésta una “década perdida” para el crecimiento y desarrollo del subcontinente, asolado por la recesión y las presiones inflacionarias<sup>150</sup>. Frente a tales circunstancias, se impulsó un cambio de modelo económico, de modo que el intervencionismo estatal propio de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), surgida en torno a la Segunda Guerra Mundial, dio paso a las recetas neoliberales del conocido como “Consenso de Washington” (Paramio, 2006). La disciplina presupuestaria, la reducción del gasto público, las privatizaciones, la liberalización comercial o la desregulación de los mercados formaban parte del nuevo decálogo de reformas estructurales que regiría durante años las economías de la región, con terribles consecuencias sociales en términos de pobreza y desigualdad.

<sup>150</sup> El mes de agosto de 1982 constituye un hito en la crisis latinoamericana de la deuda, considerándose el inicio simbólico de la misma (Paramio, 2006: 10). En tal fecha, el gobierno mexicano anuncia una moratoria unilateral en el pago de su deuda pública externa, aduciendo su incapacidad para hacer frente a los pagos dentro de los plazos previstos.

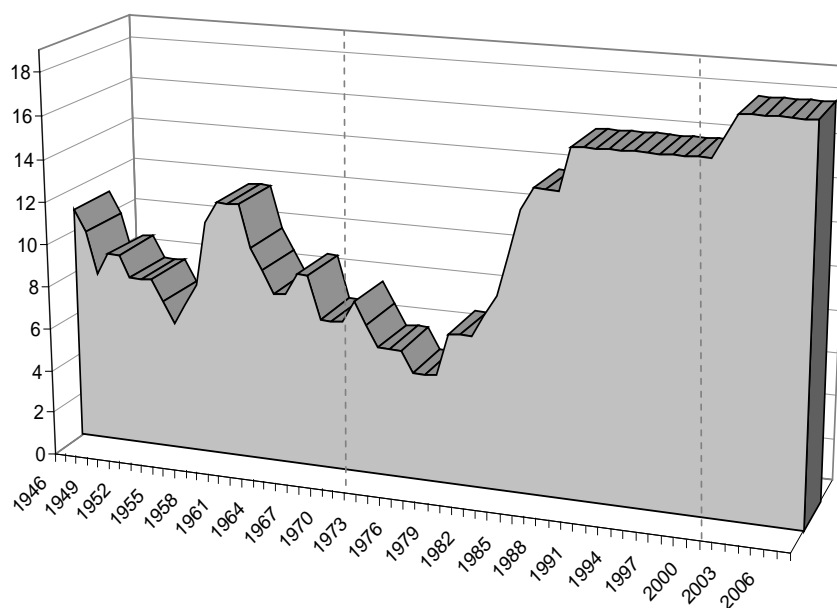
En este escenario económico adverso, los civiles comenzaron su retorno a los Palacios de Gobierno, ocupados en muchos casos por militares, y las instituciones de la democracia liberal representativa recuperaron posiciones alterando el mapa político de la región. La tercera ola democratizadora (Huntington, 1991b; 1991a) alcanzaba entonces las costas del subcontinente latinoamericano, tras dar sus primeros pasos al ritmo de “Grândola Vila Morena” el 25 de abril de 1974 en Portugal. Con el final de la dictadura salazarista, la marea democrática recorría el Sur de Europa, transformando los regímenes políticos de Grecia y España, para cruzar después el Océano Atlántico. La celebración de elecciones en Ecuador en 1979 inauguraba así una sucesión de transiciones democráticas que atravesaría toda América Latina. Países como Perú (1980), Bolivia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Brasil (1985) o Chile (1989) entre otros, abandonaban el autoritarismo de las décadas previas, engrosando las listas de gobiernos democráticos. De hecho, en los albores del siglo XXI, la región invertía de manera radical el equilibrio de regímenes políticos registrado en los años setenta. Así, frente al predominio casi absoluto de las dictaduras que caracterizó entonces a los países latinoamericanos, la nueva centuria presenciaba cómo todos ellos, a excepción de Cuba, contaban con sistemas democráticos – aunque de calidad variable – y gobiernos elegidos mediante las urnas. El Gráfico 3.2 muestra con claridad la magnitud de los cambios políticos experimentados por la región a partir de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo esta gran marea democrática de final de siglo<sup>151</sup>. Elaborada a partir de la propuesta de clasificación de regímenes políticos planteada por Cheibub et al. (2010a)<sup>152</sup>, la ilustración permite dar cuenta del gran número de países que transitaban desde dictaduras hasta formas democráticas de gobierno a lo largo de nuestro periodo de observación, situando en el inicio de la década de los ochenta un punto de inflexión crucial en la configuración del nuevo rostro político de la región.

---

<sup>151</sup> El gráfico recoge información de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

<sup>152</sup> La investigación de tales autores se apoya, a su vez, en los trabajos previos de Álvarez et al. (1996) y Przeworski et al. (2000).

**Gráfico 3.2.** Número de países en democracia en América Latina (1946-2008)



Fuente: Democracy and Dictatorship Revisited Dataset (Cheibub et al., 2010b)<sup>153</sup>.  
Elaboración propia.

La literatura ha señalado la concurrencia de causas diversas que contribuyen a explicar este ocaso de las dictaduras latinoamericanas. Por un lado, la ya mencionada recesión económica y el malestar social derivado de la misma socavaron la credibilidad de los gobiernos militares, incapaces de poner fin a la profunda crisis en que la región se encontraba inmersa (Paramio, 2006: 18). Asimismo, la presidencia de Carter (1976-1980) supuso un cierto giro en la política exterior estadounidense, orientándose hacia un mayor compromiso con la democracia y los derechos humanos. Paradójicamente, y de acuerdo con Ludolfo Paramio (2001: 11 y ss.; 2006: 18), el mandato de su sucesor, Ronald Reagan, coadyuvó también a la promoción de los sistemas democráticos en la región. Pese a su negligencia o desdén por los derechos humanos, su obsesión por la derrota del sandinismo en Nicaragua le llevó a la defensa del discurso prodemocrático como vía de legitimación de su intervención en el país centroamericano, modificando así las preferencias de Washington respecto a los regímenes políticos de los Estados vecinos del Sur. Finalmente, se han aducido otras razones justificativas de esta tercera ola democratizadora, tales como el efecto demostración o “bola de nieve” (Huntington,

<sup>153</sup> Para la realización de esta gráfica hemos empleado, en particular, la variable dicotómica *democracy*, que codifica con un ‘1’ los regímenes definidos como democráticos, asignando un ‘0’ al resto de categorías. En todo caso, remitimos al libro de códigos del proyecto “Democracy and Dictatorship Revisited” para más detalles sobre su elaboración y características (Cheibub et al., 2009).

1991a: 13; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005: 18), la difusión cada vez mayor de los valores democráticos, la memoria de las barbaries perpetradas en la etapa dictatorial o la nueva actitud condenatoria del autoritarismo adoptada por la Iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II (Huntington, 1991a: 13).

En definitiva, y de acuerdo con lo expuesto a lo largo de este breve epígrafe, el último tercio del siglo XX transformó de manera fundamental la realidad política latinoamericana. La represión que asolaba la región en los años setenta, la actividad y posterior desarme de numerosas organizaciones insurgentes, la abundancia de procesos de cambio político y el predominio de las democracias al final del periodo configuran un escenario óptimo para la observación empírica de las cuestiones teóricas previamente planteadas. Por tanto, el estudio de las causas que subyacen a la desmovilización de los grupos armados encuentra en este contexto un marco adecuado en el que testar nuestras hipótesis y dar respuesta a los interrogantes que originaron esta investigación, mediante el examen de las variables independientes seleccionadas. Consideramos, en conclusión, que la delimitación de este lugar y momento histórico responde a los criterios oportunos de relevancia científica y puede constituir una aportación de interés en el área de conocimiento en que se encuadra esta investigación.

### **3.1.2. Breve cartografía de la violencia insurgente latinoamericana**

Una vez definido el contexto histórico general del estudio, este apartado pretende realizar un pequeño “mapa de situación” que nos permita aproximarnos, con mayor detalle, al estado de la lucha armada en América Latina a lo largo del último tercio del siglo XX. No se trata con ello de efectuar un listado pormenorizado de todas y cada una de las organizaciones operativas en la región, sino más bien de obtener una panorámica ilustrativa de la incidencia y características de nuestro objeto de estudio. El subcontinente latinoamericano ha sido catalogado con frecuencia como una región en “rebelión permanente” (Mires, 1988). Se alude con ello a la relevancia histórica de los procesos de movilización social en América Latina y la recurrencia de desafíos violentos de carácter colectivo al poder vigente. Puede trazarse, así, una larga senda de levantamientos armados, en cuyo transcurso encontramos numerosos hitos insurreccionales. Entre ellos, destacan episodios tan diversos como las luchas contra las autoridades coloniales españolas lideradas por Túpac Amaru II o Túpac Katari a finales

del siglo XVIII<sup>154</sup>; las guerras de independencia desarrolladas a lo largo del siglo XIX; la revolución mexicana iniciada en 1910 contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz; el levantamiento antiimperialista de Augusto César Sandino contra la ocupación norteamericana en Nicaragua durante los años veinte y treinta; la insurrección campesina salvadoreña de 1932 dirigida por Agustín Farabundo Martí contra el general Hernández Martínez<sup>155</sup>; o la rebelión que, en 1952, lleva al poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Bolivia (Mires, 1988; Pereyra, 1997: 33-46). Todos estos procesos de movilización colectiva son ejemplo de esa larga historia de lucha armada latinoamericana, en cuya trayectoria se sitúa este trabajo de investigación.

Dentro de esta crónica de violencia, rebeldía y actividad insurgente, un suceso marcaría de manera fundamental el posterior desarrollo e impacto de las organizaciones armadas en la región: el triunfo de la revolución en Cuba. Según señalábamos con anterioridad, la derrota de Batista el 1 de enero de 1959 a manos de las fuerzas guerrilleras lideradas por Fidel Castro constituyó un punto de inflexión en el panorama político del subcontinente, influyendo en el devenir de buena parte de los acontecimientos acaecidos a lo largo de las siguientes décadas. El ejemplo vivo de la revolución supuso un estímulo sin precedentes para la adopción de la “vía armada” como estrategia de acción en la búsqueda de objetivos políticos. Tomás Borge, miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), expresaba décadas más tarde el vigor de aquel nuevo aliento revolucionario: “La victoria de la lucha armada en Cuba (...) representó el levantamiento de innumerables velos, un destello de luz que permitió ver más allá de los simples y aburridos dogmas de la época (...). Vimos en

---

<sup>154</sup> José Gabriel Condorcanqui, alias “Túpac Amaru II”, cacique descendiente del último Inca de Vilcabamba Túpac Amaru, encabezó un amplio movimiento insurreccional, que alcanza carácter anticolonial, en los territorios del Virreinato del Perú entre los años 1780 y 1781. De manera casi simultánea, y al calor de dicha rebelión, se iniciaron también levantamientos en la región del Alto Perú (actual Bolivia). En este caso, el líder de las revueltas fue el indígena aymara Julián Apaza, conocido como Túpac Katari (Mires, 1988: 15-58; Pereyra, 1997: 33-34). Ambos fueron ejecutados por las autoridades españolas, descuartizados tras amarrar sendos caballos a cada una de sus extremidades, convirtiéndose en símbolos de resistencia. De hecho, ambos dieron nombre a organizaciones armadas que operaron en el último tercio del siglo XX, durante nuestro periodo de observación, como son el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en Uruguay, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en Perú, o el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) en Bolivia.

<sup>155</sup> Como sucedía con los ya mencionados casos de Túpac Amaru II y Túpac Katari, tanto Sandino como Farabundo Martí se convirtieron también en referentes de la lucha popular, inspirando a organizaciones insurgentes que desarrollaron su actividad armada en décadas posteriores. Así, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), triunfante en 1979 contra la dictadura de la dinastía Somoza – imperante en Nicaragua desde el asesinato del propio Sandino – o el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, dan cuenta del legado y la relevancia simbólica de ambos líderes.

Fidel la resurrección de Sandino, la respuesta a nuestras dudas, la justificación de nuestros sueños” (cit. en Martí i Puig, 2002: 3; González, 2012b: 19). Así, tras la exitosa empresa de los hombres de la Sierra Maestra se desencadenaba en América Latina una primera ola insurreccional cuyas aguas inundarían los años posteriores a 1960 (Wickham-Crowley, 1993: 51-206; Castañeda, 1995: 107-152).

Durante este ciclo insurgente fueron muchas, por tanto, las organizaciones que recurrieron a la violencia a modo de instrumento de oposición al Estado. De esta manera, numerosos países de la región presenciaron insurrecciones y enfrentamientos armados entre rebeldes y agentes gubernamentales. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Venezuela, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolivia, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Perú, o los colombianos Ejército Popular de Liberación (EPL), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron algunos de los grupos insurgentes más destacados del periodo (Wickham-Crowley, 1993: 16-18; Feldmann y Perälä, 2004: 106-107; Feldmann, 2005: 10-11). Sin embargo, el balance de aquellas primeras aventuras revolucionarias de la década de los sesenta fue profundamente negativo para las organizaciones armadas que, aplastadas por las fuerzas de seguridad del Estado, experimentaron una muerte prematura en la mayor parte de los casos (Wickham-Crowley, 1993: 16)<sup>156</sup>.

Probablemente el símbolo más potente del fracaso de los grupos armados latinoamericanos de la primera ola es el representado por la trayectoria del ELN boliviano (Feldmann y Perälä, 2004: 107)<sup>157</sup>. La estrepitosa derrota de la llamada

---

<sup>156</sup> Existen, no obstante, destacadas excepciones al descalabro generalizado de las guerrillas de esta primera oleada insurgente. Como veremos más adelante, algunas de las organizaciones operativas a partir de 1970, punto de apertura de nuestra ventana de observación, remontan sus orígenes a la década de los sesenta. Por ejemplo, tal es el caso de las organizaciones guerrilleras guatemaltecas, cuya trayectoria se prolongaría, si bien alternando periodos de menor actividad, hasta el decenio de 1990. El conflicto colombiano ofrece, asimismo, una clara muestra de la supervivencia de grupos armados surgidos a lo largo de aquel periodo. De hecho, en el momento de escribir estas líneas, organizaciones tales como el ELN y las FARC continúan aún en activo.

<sup>157</sup> Diversos autores (v.g. Waldmann, 1992b: 299-300; Feldmann y Perälä, 2004: 107) atribuyen el descalabro de las organizaciones insurgentes de la época fundamentalmente a errores estratégicos y de interpretación de las condiciones objetivas para la lucha armada. De acuerdo con esta perspectiva, la réplica del experimento cubano en contextos desfavorables, muy distantes al escenario imperante en la isla caribeña, facilitó la aniquilación de muchos de estos grupos. En este sentido, Jean Lartéguy (1970) llegará a afirmar: “Ha quedado probado que la Sierra Maestra nunca podrá ser recreada fuera de Cuba,



guerrilla de Ñancahuazú, comandada por Ernesto *Che* Guevara, y la posterior captura y ejecución del líder revolucionario en octubre de 1967, encarnaron con crudeza el colapso de las experiencias insurgentes ensayadas a lo largo del periodo. El aislamiento del foco guerrillero conformado en la selva boliviana, la falta de apoyo campesino, las delaciones de la población local, los desacuerdos con el Partido Comunista Boliviano (PCB), la represión de las fuerzas estatales de seguridad y la intervención estadounidense dinamitaron por completo la intentona revolucionaria en el país andino<sup>158</sup>. Las mareas insurgentes de la década de 1960 se encontraban, por aquel entonces, en pleno retroceso. Como dijera Régis Debray (1974) en *La critique des armes*: “La desaparición física del Che, brutal, precipitada, increíble, fue como una ducha fría para los que vivían en la euforia de aquel periodo excepcional. Es más que un símbolo; su muerte representa un giro real en la lucha. En 1967, la curva de la guerrilla rural se fue para abajo, inapelable e irreversiblemente” (cit. en Castañeda, 1995: 95-96).

Sin embargo, ese descenso de la lucha armada latinoamericana resultó ser, en realidad, tan sólo un espejismo temporal. En la década de los setenta se gesta una segunda oleada insurgente que se extendería hasta entrados los años noventa (Wickham-Crowley, 1993: 209-326; Castañeda, 1995: 107-152). El triunfo de la revolución sandinista nicaragüense en 1979 supondría, además, un impulso renovado a la estrategia insurgente, alentando la conformación de nuevos movimientos subversivos. A lo largo de este periodo se recrudecen los enfrentamientos armados y se multiplica el número – y envergadura – de organizaciones rebeldes que desafían a sus respectivos gobiernos mediante prácticas insurreccionales. Un fuerte temporal de violencia estatal e insurgente recorre de norte a sur los territorios de América Latina, dejando a su paso cientos de miles de víctimas mortales, heridos, desplazados, desaparecidos y daños materiales de

---

que la revolución cubana es un fenómeno excepcional que nunca reaparecerá de la misma manera” (cit. en Wickham-Crowley, 1993: 210).

<sup>158</sup> En sus diarios, el propio *Che* narra las dificultades atravesadas por el grupo armado durante sus operaciones en Bolivia. Por ejemplo, en su resumen del mes de abril de 1967, el líder guerrillero escribía: “En otro plano, el aislamiento sigue siendo total; las enfermedades han minado la salud de algunos compañeros, obligándonos a dividir fuerzas, lo que nos ha quitado mucha efectividad (...); la base campesina sigue sin desarrollarse; aunque parece que mediante el terror planificado lograremos la neutralidad de los más, el apoyo vendrá después. No se ha producido una sola incorporación” (Guevara, 2005: 131). Algunos meses más tarde, en los balances de agosto y septiembre, no mucho antes de su captura, reconocía: “Estamos en un momento de baja de nuestra moral y de nuestra leyenda revolucionaria. Las tareas más urgentes siguen siendo las mismas del mes pasado, a saber: restablecer los contactos, incorporar combatientes, abastecernos de medicina y equipo (...). El ejército está mostrando más efectividad en su acción y la masa campesina no nos ayuda en nada y se convierten en delatores” (Guevara, 2005: 209 y 232).

los que algunas economías de la región tardarían aún mucho tiempo en recuperarse<sup>159</sup>. Durante esta segunda ola se configura, por tanto, un mapa político insurgente del que forman parte, si bien en grados diversos, prácticamente todos los países de la región. Es precisamente en este resurgir de la actividad armada donde esta investigación centra sus indagaciones.

Uno de los rasgos distintivos del periodo es que, frente al carácter casi exclusivamente rural de la primera generación insurgente, se desarrollan y adquieren también relevancia las denominadas “guerrillas urbanas”<sup>160</sup>. Inspiradas por ideólogos y activistas como Abraham Guillén (1966) o Carlos Marighella (1969), estas organizaciones comenzaron su andadura en la segunda mitad de la década de los sesenta, adentrándose en las aguas de la nueva ola insurreccional en el transcurso de los setenta<sup>161</sup>. El punto de partida de esta propuesta de subversión política fue la constatación del fracaso de las intentonas revolucionarias previas, fraguadas al calor del agro y eminentemente basadas en el apoyo del campesinado. Desde esta perspectiva, el imparable proceso de urbanización en América Latina sugería la conveniencia de trasladar el centro de gravedad de la lucha armada desde el campo hasta las ciudades, lugar de concentración de los mayores núcleos poblacionales (Feldmann y Perälä, 2004: 107; Feldmann, 2005: 11).

Este nuevo tipo de organizaciones armadas surge fundamentalmente en los países del Cono Sur, donde experimenta un notable desarrollo a través de ataques y operaciones en áreas urbanas. Así, a finales de los años sesenta, Brasil es testigo de la formación de grupos como Ação Libertadora Nacional (ALN), fundada por el propio

---

<sup>159</sup> Por citar tan sólo algún ejemplo de los muchos posibles, Lehoucq (2011: 1) señala cómo las guerras civiles centroamericanas provocaron, entre las décadas de los ochenta y noventa, la muerte de al menos 300.000 personas, la mayor parte de las cuales eran civiles. Asimismo, tales conflictos produjeron, según el autor, entre 1,8 y 2,8 millones de refugiados. Por lo que respecta a las economías de países como Guatemala, Nicaragua o El Salvador, el grado de devastación derivada de los conflictos fue tal que hasta la primera década del siglo XXI las cifras del PIB *per cápita* no alcanzarían los niveles previos a los estallidos bélicos.

<sup>160</sup> De acuerdo con lo expuesto en el primer capítulo, la aplicación del término “guerrilla” a estas organizaciones resultaría, *stricto sensu*, errónea o controvertida desde el punto de vista teórico. No obstante, emplearemos aquí dicho concepto debido a su uso frecuente y generalmente aceptado, tratándose además del apelativo que propugnan los propios teóricos de esta estrategia de oposición al Estado.

<sup>161</sup> Los grupos armados venezolanos de principios de los sesenta, organizados contra el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), han sido señalados por algunos autores como un primer antecedente fallido de las guerrillas urbanas (Feldmann y Perälä, 2004: 107; Feldmann, 2005: 11, nota 17).

Marighella, o la Vanguarda Popular Revolucionaria (VPR). En Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) adquiere una enorme relevancia, mientras que en Chile aparece el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) seguido, años más tarde, por organizaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) o el Movimiento de Acción Popular Unitaria-Lautaro (MAPU-L)<sup>162</sup>. Finalmente, en Argentina, iniciaban su actividad grupos tales como los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el Frente Argentino de Liberación (FAL), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) o las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El enfrentamiento entre las organizaciones rebeldes y los gobiernos dictatoriales sudamericanos adquirió para éstos el carácter de una “cruzada necesaria” en defensa de la nación, y la presencia de fuerzas subversivas en la región fue empleada como herramienta de justificación de golpes de Estado y medidas represivas de contrainsurgencia durante la década de 1970 (Feldmann y Perälä, 2004: 108; Feldmann, 2005: 12; Smith, 2009: 89-91).

A pesar de lo hasta ahora expuesto, los grupos armados latinoamericanos no habían abandonado el campo de manera definitiva. De hecho, como señala Wickham-Crowley (1993: 209), el peso de las guerrillas rurales fue fundamental durante esta segunda ola, en la que junto al protagonismo de las ciudades se produce un redescubrimiento de “la montaña”. Asimismo, la lucha armada no se encontró tampoco restringida a los países del Cono Sur, sino que extendió su influjo por todos los rincones del subcontinente. De este modo, Centroamérica contempla, junto al victorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, a numerosas organizaciones rebeldes que toman las armas contra los diferentes gobiernos del istmo<sup>163</sup>. Los enfrentamientos derivan en cruentas guerras civiles en Guatemala y El Salvador, donde la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) logran aglutinar a miles de combatientes<sup>164</sup>. Honduras

---

<sup>162</sup> En realidad, el MAPU chileno era un partido político fundado en 1969 a partir de un sector izquierdista del Partido Demócrata Cristiano. Sin embargo en los años ochenta, durante la dictadura de Augusto Pinochet, sufre una escisión liderada por Guillermo Ossandón que adopta la “vía armada” como estrategia de oposición al régimen, dando lugar al MAPU-Lautaro.

<sup>163</sup> Costa Rica, como en tantas otras cuestiones, marca la diferencia regional y se erige en excepción también en lo que respecta al impacto y prevalencia de la violencia insurgente.

<sup>164</sup> Tanto el FMLN como la URNG eran coordinadoras guerrilleras que albergaban en su seno a diversas organizaciones armadas. El primero, conformado en 1980, incluía las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Partido Comunista

registra también la presencia de diversos grupos armados. Así, el Movimiento Popular de Liberación-Cinchonero (MPL-C), las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya (FPR-LZ), el Frente Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLH) o el Frente Patriótico Morazanista (FPM) actuaron en el territorio hondureño a lo largo del periodo (Canizales, 2008). No obstante, su magnitud y capacidad de desafío al Estado fue muy inferior, apenas comparable, al alcanzado por las organizaciones operativas en los países vecinos<sup>165</sup>. Finalmente en México, frontera norte de América Latina, esta etapa trae consigo movimientos insurgentes como la Unión del Pueblo (UP) y la Liga Comunista 23 de Septiembre o, llegados ya los años noventa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Durante esta segunda ola se produce también un recrudecimiento del conflicto armado en Colombia<sup>166</sup>. Junto al ELN, el EPL y las FARC, que incrementan su actividad insurgente, emergen nuevas organizaciones entre las que destaca, por su envergadura y capacidad operativa, el Movimiento 19 de Abril (M-19)<sup>167</sup>. Además de estos grandes actores subversivos, pueden encontrarse también grupos de menor tamaño como el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) o el Frente Ricardo Franco (FRF), escindido de las FARC. Asimismo, a lo largo del periodo tienen lugar dos proyectos de coordinación de la insurgencia, si bien no tan exitosos como sus homólogos centroamericanos, mediante la

---

Salvadoreño (PCS). Por lo que respecta a la URNG, su fundación en 1982 es resultado de la unión del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

<sup>165</sup> Diversos autores aluden al reformismo militar hondureño, la inestabilidad, inconsistencia y apertura parcial del régimen autoritario, y el ejercicio comparativamente menor de la represión estatal, como fuentes primordiales de esas diferencias en el volumen de actividad insurgente registrada en Honduras frente a los países limítrofes (Booth, 1991; Schulz y Schulz, 1994; Goodwin, 2001: 169-176; Canizales, 2008; Lehoucq, 2011).

<sup>166</sup> En realidad, los orígenes del enfrentamiento armado colombiano pueden situarse más allá de la primera ola insurgente, en el periodo conocido como *La Violencia*. Tras el asesinato en 1948 de Jorge Eliécer Gaitán, candidato liberal a la Presidencia, y las revueltas y altercados del “Bogotazo” que siguieron al magnicidio, se produce un estallido de violencia que asola por completo al país andino. Los enfrentamientos entre liberales y conservadores dejaron a su paso miles de muertes en el transcurso de los quince años siguientes – hasta 200.000 personas, fundamentalmente campesinos, perdieron la vida de acuerdo con autores diversos (Wickham-Crowley, 1993: 17; Feldmann, 2005: 10, nota 14) –. Esta etapa de luchas e inestabilidad es considerada antecedente inmediato de la guerra civil iniciada en Colombia durante los años sesenta, y de sus cenizas surgen algunas de las principales organizaciones rebeldes del país, como es el caso de las FARC, legatarias de la “república campesina de Marquetalia” surgida en aquellos años (Wickham-Crowley, 1993: 17-18).

<sup>167</sup> Una de las primeras acciones de la organización fue el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974, mediante la que lograron un enorme impacto mediático debido a su fuerte contenido simbólico.

creación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) o el conocido como Batallón América<sup>168</sup>.

Dentro de la región andina, destaca también la fuerte presencia de actividad insurgente en Perú donde, a partir de los años ochenta, se produce un feroz enfrentamiento bélico interno. El protagonista principal del desafío al Estado peruano fue Sendero Luminoso, aunque en el desarrollo del conflicto actuaron también otras organizaciones entre las que se encuentra el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El último tercio del siglo XX asiste, igualmente, a la movilización de grupos armados en los países limítrofes atravesados por la cordillera de los Andes, aunque muy inferiores en fortaleza y volumen de militantes. En Ecuador, también en la década de 1980, se alza en armas la organización ¡Alfaro Vive, Carajo! (AVC)<sup>169</sup> mientras que, en Venezuela, Bandera Roja (BR) perpetra diversos ataques a lo largo de todo el periodo. Por último, en Bolivia destaca la actividad del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), así como los atentados de otras agrupaciones menores entre las que se hallan, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka (FAL-ZW).

Las organizaciones armadas mencionadas hasta el momento comparten, en términos generales, su inspiración en los ejemplos de la revolución cubana y nicaragüense, así como su encaje dentro de las luchas ideológicas características de la Guerra Fría. Asociados en gran medida a las diversas corrientes del marxismo, la mayor parte de los grupos insurgentes latinoamericanos presentaron un perfil ideológico izquierdista o revolucionario<sup>170</sup>, si bien pueden registrarse importantes divergencias, incluso irreconciliables, entre algunos de ellos. Ciertas organizaciones referidas presentan, además, un marcado carácter indigenista. Tal es el caso del EGTK en Bolivia, el EZLN en México, o el colombiano MAQL, para los que la defensa de la

---

<sup>168</sup> En 1985 se forma la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), de la que es heredera la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), creada en 1987. La CGSB integraba a las FARC, el M-19, el ELN, el EPL, el PRT y el MAQL. Por su parte, el Batallón América fue una columna guerrillera internacionalista, de la que formaron parte, junto al M-19 y al MAQL, el ecuatoriano ¡Alfaro Vive, Carajo! (AVC) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú, con la presencia de algunos combatientes de otras organizaciones del subcontinente como los Tupamaros uruguayos.

<sup>169</sup> El nombre de la organización rinde tributo a Eloy Alfaro, presidente liberal de Ecuador a comienzos del siglo XX. Curiosamente, y guardando un claro paralelismo con el M-19 colombiano, una de las primeras apariciones públicas de AVC consistió, precisamente, en el robo de la espada de Alfaro en 1983.

<sup>170</sup> Es, de hecho, esta escasa variabilidad en la población observada la que nos impide, frente a otros estudios, introducir la ideología como variable independiente relevante en el análisis de la supervivencia y desmovilización de los grupos armados. Esta prevalencia de un determinado perfil ideológico y programático será relevante, como veremos, para la interpretación de los resultados obtenidos.

cultura y derechos de los pueblos originarios se torna en aspecto central de sus reivindicaciones. Dignas también de especial mención, por su volumen y singularidad, son las organizaciones revolucionarias independentistas puertorriqueñas (Reinares, 1995). El particular estatus político de esta isla – o más bien archipiélago –, Estado Libre Asociado a los Estados Unidos de América, se sitúa en la base de las demandas de estos grupos armados. Así, durante los años setenta y ochenta, se registran numerosos atentados perpetrados tanto en Puerto Rico como en diversas ciudades norteamericanas, con el propósito de precipitar un proceso de emancipación que culminara con la ordenación de la isla caribeña como Estado independiente. Entre las organizaciones activas a lo largo de estas décadas pueden citarse el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas (MIRA), las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), el Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros), la Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña (OVRP) o las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular (FARP)<sup>171</sup>.

En todo caso, ese predominio ideológico de la izquierda no impide la existencia de notables excepciones. Así, nuestra muestra recoge también algunos – aunque escasos – grupos insurgentes reaccionarios, anticomunistas o contrarrevolucionarios<sup>172</sup>. La llamada *Contra* nicaragüense constituye, precisamente, el máximo exponente de tal circunstancia debido a su elevada capacidad de movilización y número de combatientes. Compuesta por organizaciones diversas – y heterogéneas – que compartían su oposición al gobierno revolucionario del FSLN, y financiada por los Estados Unidos, la *Contra* protagonizó un largo conflicto armado con los sandinistas a lo largo de los años ochenta<sup>173</sup>. Junto al caso expuesto, cabe también mencionar la violencia derechista y

---

<sup>171</sup> Varias de estas organizaciones se encuentran asociadas a la figura del líder del independentismo puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos, asesinado por el FBI en 2005. En particular, Ojeda Ríos fue fundador del MIRA, las FALN y el EPB-Macheteros.

<sup>172</sup> En realidad, en el transcurso del periodo analizado emergieron muchas otras organizaciones armadas derechistas no ajustadas, sin embargo, a los criterios de definición de nuestro objeto de estudio. En particular, y como veremos más adelante, quedan excluidos de nuestra muestra aquellos grupos violentos cuyos ataques se dirigieron contra determinados colectivos sociales y no contra el poder político establecido, situándose por tanto al margen del concepto de “insurgencia”. Así, los grupos vigilantistas, paramilitares y escuadrones de la muerte, frecuentemente operativos en connivencia con el Estado, no formarán parte de nuestra variable dependiente. Éste es el caso de organizaciones como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o la Unión Guerrera Blanca (UGB) salvadoreña entre otros.

<sup>173</sup> Entre esta amalgama de organizaciones contrarrevolucionarias, aunque con escasa unidad ideológica, se encontraban, por ejemplo, la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) o los grupos indígenas KISAN y MISURASATA.

ultranacionalista de grupúsculos como OAS-MRP<sup>174</sup>, desplegada durante la transición argentina con el propósito de desestabilizar al gobierno de Raúl Alfonsín, así como los ataques perpetrados contra objetivos británicos tras la derrota en la guerra de las Malvinas (Feldmann y Perälä, 2004: 108-109; Feldmann, 2005: 13). Finalmente, se registran algunos ejemplos aislados como el Movimiento 20 de Diciembre (M-20) en Panamá, integrado por militares partidarios del general Noriega, contrarios al gobierno resultante de la intervención estadounidense en diciembre de 1989 (MIPT/START, 2008).

El mapeo de organizaciones armadas realizado en el transcurso de las páginas previas ilustra la enorme relevancia que la violencia política insurgente adquirió en América Latina a lo largo del periodo analizado. La mayor parte de los países del subcontinente atestiguaron la emergencia de grupos rebeldes que desafiaron a la autoridad vigente adoptando la “vía armada” como estrategia de oposición al Estado. En la actualidad, prácticamente todas estas organizaciones han depuesto ya sus armas, abandonado el camino de la violencia. Es necesario, por tanto, abordar los interrogantes que se plantean en torno a los factores y condiciones explicativas de su persistencia y posterior finalización.

### **3.1.3. La importancia de los estudios de área: un enfoque comparado de *N* intermedia**

El ámbito geográfico arriba definido coloca a esta investigación en la órbita de los denominados estudios de área. Este término ha sido aplicado a trabajos con características epistemológicas, teóricas y metodológicas muy diversas, cuyo nexo de unión fundamental es, precisamente, su atención particular a un único país o región del globo (Basedau y Köllner, 2007: 110)<sup>175</sup>. De acuerdo con Mainwaring y Pérez-Liñán (2005: 2-3), el término “región” se refiere, en este contexto, a “partes del planeta

---

<sup>174</sup> Según información publicada en el diario *EL PAÍS* el 31 de marzo de 1988, esta organización, con el lema *Por la liberación nacional*, y en cuyos panfletos incluía una representación del general José de San Martín, se atribuyó diversos atentados con bombas en Buenos Aires (Ares, 1988). La Secretaría de Inteligencia consideró entonces a OAS-MRP como un pequeño grupo de civiles de ultraderecha que trataba de atraerse a los militares partidarios de Aldo Rico, “carapintada” que lideró sublevaciones contra la presidencia de Alfonsín en 1987 y 1988, oponiéndose a los procesos judiciales llevados a cabo contra las Juntas Militares de la dictadura.

<sup>175</sup> Algunos autores han destacado la relevancia de las comparaciones no sólo intra-regionales, sino también entre regiones diversas. En este sentido, Basedau y Köllner (2007) aluden al interés del “primo poco conocido” de los estudios de área, a saber, los estudios de área comparados.

vinculadas geográficamente, a las que comúnmente se ve ocupando una misma parte del mundo”. De este modo, prosiguen, áreas como Europa, África, Oriente Medio, Asia o América Latina, responderían a dicho apelativo<sup>176</sup>.

Buena parte de los trabajos escritos en el ámbito de la política comparada han estado, *de facto*, consagrados al análisis exclusivo de alguna de estas regiones. Así, de acuerdo con datos del estudio realizado por Munck y Snyder (2005) sobre el estado de la subdisciplina, en torno al 70% de los artículos publicados entre 1989 y 2004 por las tres principales revistas especializadas en estudios comparados<sup>177</sup> había abordado únicamente una sola de estas áreas geográficas (cit. en Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005: 1). Existen, además, destacadas publicaciones de impacto en ciencias sociales orientadas al análisis exclusivo de la realidad sociopolítica de una determinada región<sup>178</sup>, así como departamentos, institutos de investigación y programas de estudios en numerosas universidades del mundo enfocados a la exploración de áreas geográficas concretas. Sin embargo, y pese a su gran profusión, este tipo de aproximaciones analíticas han sido blanco de críticas diversas.

La premisa básica de los estudios de área es la existencia de especificidades regionales y diferencias contextuales relevantes para el adecuado abordaje del objeto de estudio en cuestión. Es, precisamente, sobre esta asunción sobre la que sus detractores sitúan el eje fundamental de las críticas. De este modo, diversos autores han puesto en cuestión la validez científica de las aportaciones realizadas por los estudios de área, apoyándose en los posibles sesgos e imprecisiones derivados de tales demarcaciones geográficas. Por una parte, no han faltado quienes, como apuntan Basedau y Köllner (2007: 3), han basado sus críticas en una supuesta homogeneización derivada de los procesos de globalización, que tornarían estériles e irrelevantes los esfuerzos por llevar

---

<sup>176</sup> Pese a tratarse de denominaciones generalmente aceptadas, existen quienes cuestionan esta división del globo en grandes regiones. Como señala Ariel Ahram (2009: 3-4), algunos autores las han considerado agrupaciones arbitrarias de países, sin una coherencia conceptual sólida, reflejo en muchos casos de perspectivas sesgadas elaboradas desde los centros de poder. El autor recuerda cómo, de hecho, se han presentado divisiones alternativas que reflejan ese carácter discutido de las regiones. Entre ellas destaca aportaciones tan dispares como las “civilizaciones” planteadas por Huntington (1996), o la división del mundo en zonas según utensilios culinarios – tenedor, dedos y palillos – propuesta por Lewis (2002).

<sup>177</sup> Aluden, en particular, a *Comparative Political Studies*, *Comparative Politics* y *World Politics*.

<sup>178</sup> Junto a las publicaciones mencionadas por Mainwaring y Pérez-Liñán (2005: 35, nota 2), como el *European Journal of Political Research* o *Post-Soviet Affairs*, podrían citarse muchas otras referidas a regiones muy diversas del globo, como el *Journal of Modern African Studies*, *Journal of Latin American Studies*, *Journal of Asian Studies*, *Middle Eastern Studies* o *América Latina Hoy*.



a cabo exámenes particularizados de regiones concretas. No obstante, y de acuerdo con el análisis de esta controversia realizado por Robert H. Bates (1997), la fuente esencial de reprobación de los estudios de área brota de la idea de que los científicos sociales han de buscar e identificar regularidades, testar hipótesis y desarrollar teorías generales no asociadas al contexto regional específico en que tienen lugar los fenómenos examinados. En sus propias palabras, “dentro de la academia se ha formado el consenso de que los estudios de área han fracasado en generar conocimiento científico” (Bates, 1996: 1).

Tal es la postura defendida por Gary King (1996) en su artículo de título revelador “Why context should not count”. De acuerdo con el autor, “el objetivo profesional de todo científico debería ser intentar demostrar que el contexto no produce ninguna diferencia” (King, 1996: 160)<sup>179</sup>. Por ello, y admitiendo la posibilidad de variaciones regionales, rechaza sin embargo la existencia de efectos contextuales significativos a la hora de dar cuenta de los procesos sociales, cuestionando la labor de la geografía política en este sentido<sup>180</sup>. Según su perspectiva, la incorporación del contexto como elemento fundamental genera en la práctica confusiones analíticas serias que pueden lastrar el trabajo del investigador (King, 1996: 159-160).

Frente a tales objeciones, esta investigación defiende la importancia de los estudios de área, propugnando su utilidad para el análisis específico de la actividad insurgente. Nos situamos, de este modo, en la línea de autores como Mainwaring y Pérez-Liñán (2005), quienes señalan al menos dos motivos por los que la toma en consideración de las regiones resulta pertinente desde el punto de vista académico. En primer lugar, destacan la existencia de determinadas dinámicas y procesos políticos íntimamente asociados a áreas geográficas concretas. La presencia de patrones causales diferenciados, que podrían quedar sepultados por análisis globales ajenos a las especificidades regionales, justificaría esa atención a los contextos históricos y

---

<sup>179</sup> Aludiendo a esta sentencia de Gary King, Mainwaring y Pérez-Liñán (2005: 16) sostienen que sería efectivamente deseable sustituir la significatividad de las variables contextuales – como la región geográfica –, por otras variables explicativas de carácter sustantivo. Sin embargo, aclaran, no puede colegirse de aquí que el contexto no importa, sino más bien que resulta preciso explicar por qué lo hace.

<sup>180</sup> Para ilustrar esta aseveración, King (1996: 161) emplea el siguiente ejemplo – extremo y algo perverso, según él mismo advierte –. En su texto señala cómo los físicos, cuyo conocimiento de los electrones es razonablemente amplio, no emplearán su tiempo en desarrollar una teoría geográfica del electrón, ni en realizar un mapeo en colores del número de electrones de Canadá según provincias. Por el contrario, gracias a su entendimiento de la materia, estos científicos asumirán que allá donde encuentren un electrón, éste tendrá las mismas características intercambiables que cualquier otro electrón del planeta.

geográficos que envuelven al fenómeno estudiado. Asimismo, añaden, resulta preciso atender a los procesos de difusión, aprendizaje intra-regional y efectos demostración, en cuanto que mecanismos fundamentales a la hora de explicar ciertos acontecimientos políticos de carácter interno. De esta forma, los sucesos acaecidos en determinados Estados pueden tener un impacto esencial en el desarrollo de los países vecinos, generando dinámicas análogas o comparables a lo largo de la región.

De modo similar, Stephen Hanson (2008: 39-40) expone tres causas justificativas de la relevancia científica de los estudios de área en política comparada. Junto al mencionado efecto difusión en escenarios de proximidad geográfica, alude a la importancia de los legados del pasado y a los marcos interpretativos culturales de la realidad. La importancia de la herencia histórica – en muchos casos asociada a un tiempo pretérito de conquista imperial<sup>181</sup> – y la presencia de estructuras socioeconómicas e institucionales compartidas estarían en la base de estos análisis regionales. Asimismo, rescata el concepto weberiano de *verstehen* para referirse a la comprensión interpretativa del mundo, asociada a las características del entorno y sus sistemas de creencias. Así, la vivencia de contextos culturales, religiosos y lingüísticos comunes, dota de sentido y contribuye a dibujar esas líneas geográficas que distinguen a los estudios de área.

Por lo que respecta a la presente investigación, los mecanismos descritos operan de manera significativa en el ámbito latinoamericano durante el periodo analizado. Las recurrentes intervenciones de la insurgencia, las características compartidas y lazos trabados entre las organizaciones armadas y la confluencia de procesos políticos similares en rincones diversos del subcontinente sugieren la relevancia de un estudio de área<sup>182 183</sup>. En todo caso, el reconocimiento de estas dinámicas no significa la apuesta

---

<sup>181</sup> De acuerdo con Hanson (2008: 39), los estudios sobre Oriente Medio engloban en buena medida el territorio de los imperios persa y otomano, los estudios sobre Asia Oriental las áreas de influencia de los imperios chino y japonés, los estudios de América Latina el territorio de los imperios español y portugués, y los estudios de las repúblicas exsoviéticas el territorio de la antigua URSS.

<sup>182</sup> En su estudio sobre las causas del terrorismo no estatal en América Latina, Feldmann y Perälä (2004: 116) señalan también la existencia de numerosos atributos compartidos por los diversos países de la región, que hacen valiosa una investigación de estas características. Entre ellos señalan la existencia de un pasado precolombino, la dominación española y portuguesa con un importante peso del componente mestizo, la conquista de la independencia en el siglo XIX, la inestabilidad política o la desigualdad económica estructural.

<sup>183</sup> No pretendemos aquí, en ningún caso, defender una mayor validez inherente y sistemática de los estudios de área respecto de otras estrategias empíricas, ni su necesaria aplicabilidad a la totalidad de las

por una visión monolítica y uniformadora de América Latina, sino más bien la identificación de rasgos comunes que trascienden a las innegables particularidades propias de cada país. Por ello, partiendo de la existencia de ciertas semejanzas reconocibles a lo largo de la región, prestaremos también atención diferenciada a las distintas entidades estatales y grupos insurgentes constitutivos de nuestra muestra.

La perspectiva metodológica adoptada nos sitúa ante una investigación comparada de *N* intermedia (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005: 33), que algunos autores han asociado con la “estrategia de los sistemas más similares” debido a las semejanzas atribuidas a los países integrantes de las regiones geográficas analizadas por los estudios de área (Przeworski y Teune, 1970: 33; Landman, 2008: 71)<sup>184</sup>. La principal virtud de este tipo de diseño comparativo radica en la posibilidad de atender a las especificidades de los casos en su contexto, evitando así simplificaciones o generalizaciones excesivamente amplias (Feldmann y Perälä, 2004: 116; Ahram, 2009: 22), sin descuidar la vocación de contribuir al corpus teórico de la disciplina y observar tendencias comunes en el comportamiento de las variables seleccionadas. El trabajo desarrollado se hallará, por tanto, a medio camino entre las aproximaciones *variable-oriented* propias de los análisis que incluyen una muestra de gran tamaño y los enfoques *case-oriented* de los estudios consagrados al examen pormenorizado de determinados casos (Ragin, 1989). Todd Landman (2008: 25-26) subraya, basándose en los trabajos de Mair (1998) y Sartori (1970), el *tradeoff* existente entre el nivel de abstracción conceptual y la cantidad de países objeto de investigación. Los estudios dedicados, como éste, al análisis de “pocos países”<sup>185</sup> figurarían en una posición intermedia de la intersección entre ambos ejes, combinando en grados diversos el carácter extensivo de los estudios de *N* grande con el intensivo propio de los estudios de caso. En este sentido, y como afirmaba Bates (1997: 169), “la cuestión no es si usar la parte izquierda del cerebro en

---

investigaciones desarrolladas en política comparada (Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005: 1). Se trata, simplemente, del reconocimiento de su pertinencia y potenciales contribuciones al abordaje de determinados fenómenos sociopolíticos como el que aquí nos ocupa.

<sup>184</sup> El método de “los sistemas más similares” (MSSD, por sus siglas en inglés) se caracteriza por la búsqueda de rasgos diferenciales entre sistemas semejantes, que contribuyan a dar cuenta del fenómeno político objeto de investigación. Frente a él, el diseño de “los sistemas más diferentes” (MDSD) compara países disímiles en todos sus atributos, salvo en la variable dependiente y en determinados factores explicativos claves para la obtención del resultado observado (Landman, 2008: 70).

<sup>185</sup> Landman (2008: 27-28) establece, de manera orientativa, una horquilla de entre 2 y alrededor de 20 países como ámbito de aplicación de los estudios comparados de pocos casos, señalando no obstante el carácter difuso de tales límites numéricos.

lugar de la derecha. Es, más bien, cómo emplear ambas”. Se trata, en definitiva, de establecer un diálogo fructífero entre las construcciones teóricas abstractas o los modelos deductivos y el conocimiento de los mecanismos específicos que operan en determinadas zonas del globo (Hanson, 2008: 41).

### **3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN**

De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, la presente investigación ubica sus indagaciones en el subcontinente latinoamericano, con el propósito de analizar la duración de los grupos insurgentes activos en la región entre 1970 y 2000. Sin embargo, es preciso aclarar aún el modo específico en que se llevará a cabo este estudio comparado. Por ello, las líneas que siguen estarán destinadas a explicitar las técnicas, procedimientos y estrategias adoptadas para el abordaje del trabajo empírico. Este bloque tratará, en resumidas cuentas, de dar respuesta al *cómo* de esta investigación doctoral.

#### **3.2.1. Un análisis estadístico de la supervivencia de las organizaciones armadas: la aplicación de modelos Cox y *logit* en los estudios de duración**

Las causas que subyacen al cese de la actividad insurgente y dan cuenta de la variabilidad en la supervivencia de diferentes organizaciones armadas constituyen el núcleo de nuestras pesquisas. Para dar respuesta a estos interrogantes realizaremos un estudio cuantitativo sustentado en la aplicación de modelos estadísticos de duración (Yamaguchi, 1991; Hosmer y Lemeshow, 1999; Blossfeld y Rohwer, 2002; Bernardi, 2006)<sup>186</sup>. Asociada en sus orígenes fundamentalmente a la bioestadística, esta técnica ha alcanzado en la actualidad un amplio desarrollo en ámbitos de conocimiento muy diversos, incluyendo las ciencias sociales. Su presencia en distintas disciplinas le ha otorgado múltiples denominaciones, por lo que podremos encontrar referencias a la misma bajo designaciones tales como análisis de supervivencia, modelos de riesgos, análisis de duración o análisis de la historia de acontecimientos. A continuación, trataremos de exponer algunos de sus rasgos más destacados, incidiendo en su

---

<sup>186</sup> Los aquí mencionados son algunos de los principales trabajos de referencia sobre el empleo y características de este tipo de análisis. Remitimos a ellos para ampliar información y profundizar en los pormenores de tales modelos.

pertinencia y aplicabilidad al estudio de la persistencia y eventual desactivación de las organizaciones insurgentes<sup>187</sup>.

Los modelos de supervivencia tienen como propósito estudiar el tiempo transcurrido desde que la unidad de análisis se encuentra expuesta al riesgo de experimentar el acontecimiento objeto de interés, hasta el momento en que éste efectivamente se produce (Steele, 2005: 4)<sup>188</sup>. Como apunta Fabrizio Bernardi (2006: 13), dicha técnica requiere, por tanto, que los procesos analizados se caractericen por la confluencia de al menos tres aspectos: “a) la unidad de análisis puede cambiar desde un estado de origen  $j$ , a un estado de destino  $k$ ; b) el cambio no está restringido a un momento específico del tiempo; c) el cambio está influido por un conjunto de variables independientes que son constantes o que se modifican en el tiempo”. De acuerdo con el citado autor, lo relevante y distintivo de este tipo de técnicas es que permiten analizar no sólo el tránsito de un estado a otro, sino también el momento en que tiene lugar (Bernardi, 2006: 14)<sup>189</sup>. Por lo que respecta al presente estudio, el acontecimiento analizado será la desmovilización de las organizaciones armadas y su renuncia a la estrategia de la violencia<sup>190</sup>. De este modo, someteremos a examen la duración de los grupos insurgentes activos en América Latina entre 1970 y 2000.

La prolongación del episodio o intervalo de tiempo que las unidades de análisis permanecen en el estado inicial ocupa una posición preeminente en los estudios de supervivencia. Sin embargo, el investigador carecerá en muchos casos de información precisa sobre la duración de las unidades de análisis, enfrentándose a distintas modalidades de información incompleta. En primer lugar, es posible que el evento investigado no se haya producido aún para parte de la muestra en el momento en que finaliza el periodo de observación, conformando lo que se denomina un episodio

---

<sup>187</sup> Cabe recordar aquí la reciente publicación de otras investigaciones sobre la duración de grupos terroristas que emplean también este tipo de modelos estadísticos en sus análisis. En particular, destacamos los trabajos de Jones y Libicki (2008), Young y Dugan (2010), Blomberg et al. (2010; 2011), Brian Phillips (2011), David Carter (2012) o Gaibullov y Sandler (2013).

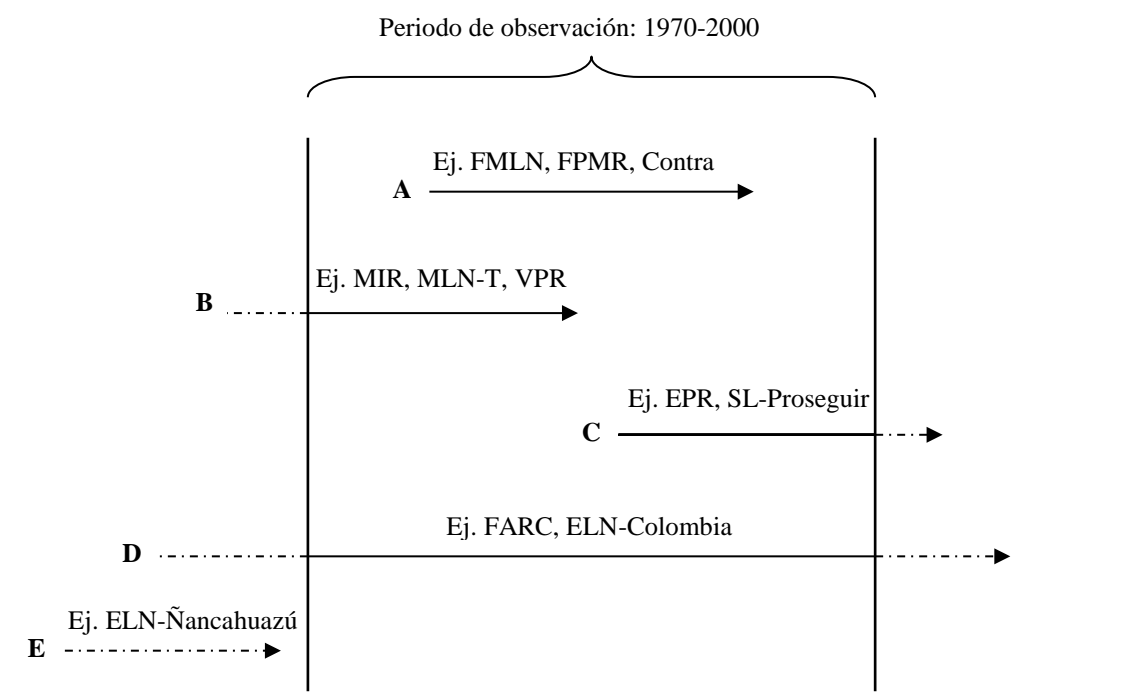
<sup>188</sup> Bernardi (2006: 13) define el acontecimiento como “un cambio de tipo cualitativo de la unidad de análisis, desde el estado  $j$  al estado  $k$ , que ocurre en un momento concreto del tiempo”.

<sup>189</sup> En realidad, el análisis de la historia de acontecimientos permite investigar también el cambio entre más de dos estados, denominados “riesgos competitivos”. No obstante, este trabajo examina únicamente el paso de un estado  $j$  a otro  $k$ .

<sup>190</sup> En el próximo apartado abordaremos con detalle la operacionalización de nuestra variable dependiente y el modo en que se ha llevado a cabo el cómputo de la duración de las organizaciones insurgentes.

“censurado a la derecha”<sup>191</sup>. Del mismo modo, pueden darse casos en que la unidad de análisis se encuentre expuesta al riesgo de sufrir el evento desde una fecha anterior al periodo estudiado, tratándose entonces de un episodio “truncado a la izquierda”. Por su parte, las “censuras a la izquierda” se refieren a episodios originados, como los truncados, antes del periodo de observación, de los cuales, sin embargo, desconocemos la fecha de inicio. Finalmente, las denominadas “censuras completas” aluden a todas aquellas duraciones cuyas fechas de inicio y término son previas al marco temporal examinado, y por tanto no se encuentran contenidas en la base de datos. En todo caso, los dos primeros tipos de observaciones incompletas, presentes en este estudio, son en términos generales fácilmente manejables por los análisis de la historia de acontecimientos, e incluidas por ello en la estimación de nuestros modelos<sup>192</sup>.

**Figura 3.1.** Tipos de episodios y modalidades de observación incompleta



Elaboración propia a partir de Steele (2005: 34, Fig. 1) y Bernardi (2006: 21, Fig. 1.1)

<sup>191</sup> Son también casos de censura a la derecha aquellos episodios en los que, a partir de un determinado momento del periodo temporal considerado, no ha sido posible continuar recopilando información relativa al sujeto en cuestión, por lo que éste desaparece del estudio por razones distintas a la ocurrencia del evento objeto de análisis (Bernardi, 2006: 21-22).

<sup>192</sup> Bernardi (2006: 22-23) advierte, no obstante, dos tipos de problemas potenciales en el tratamiento específico de los episodios truncados a la izquierda. Por un lado, es posible que se produzca un sesgo en la muestra, sobrerrepresentando los episodios con duraciones más largas, en la medida en que aquéllos que se iniciaron al mismo tiempo, pero finalizaron antes del marco temporal de observación, no estarán incluidos en el estudio. Por otra parte, alude a la frecuente falta de información referida a las variables independientes incluidas en el modelo estimado para los años previos al marco temporal analizado.

La Figura 3.1 ofrece un pequeño esquema ilustrativo de las diferentes clases de duraciones exploradas por esta investigación. El caso “A” alude a los grupos presentes en la muestra cuya existencia como organización insurgente se desarrolla dentro de los límites de nuestro marco temporal. Ejemplos de tal circunstancia serían el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en Chile o las organizaciones de la denominada “Contra” nicaragüense. El tipo “B” se corresponde con un episodio de información incompleta truncado a la izquierda. Las organizaciones que se ajustan a este patrón comenzaron su lucha armada antes de 1970, abandonándola a lo largo de los años observados. Éste sería el caso de grupos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) uruguayo o la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) de Brasil. Por su parte, el episodio “C” muestra un ejemplo de censura a la derecha. Se trata de grupos insurgentes que comenzaron su actividad dentro de nuestro marco temporal, pero que en el momento de finalización del mismo aún no habían abandonado la “vía armada”. El Ejército Popular Revolucionario (EPR) en México o la facción “Proseguir” de Sendero Luminoso (SL-P) en Perú manifiestan tal pauta de comportamiento. Bajo la letra “D” se sitúan los episodios de actividad armada iniciados antes de 1970 – truncados, por tanto, a la izquierda –, que en el año 2000 no habían experimentado aún el acontecimiento del desarme, sufriendo también una censura a la derecha. Entre las unidades de análisis que adolecen de ambos tipos de información incompleta se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Finalmente, hemos incluido a modo de ilustración un último caso “E”, representando la duración de todas aquellas organizaciones operativas antes de la apertura de nuestra ventana de observación, y por ende completamente censuradas y excluidas de la base de datos. Entre ellas se encuentran los grupos armados pertenecientes a la primera oleada guerrillera de los años sesenta, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comandado por el Che Guevara en Bolivia, y conocido como la guerrilla de Ñancahuazú.

El componente central del análisis estadístico de supervivencia es la denominada función de riesgo, tasa de fracaso o tasa de transición. Expresada formalmente como

$$h(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{Pr(t \leq T < t+dt | T \geq t)}{dt},$$

alude a la probabilidad instantánea – en un intervalo  $(t, t + dt)$  cuando  $dt$  tiende a 0 – de que el evento tenga lugar, produciéndose un cambio del estado de origen al de destino, condicionada a que dicho evento no se haya producido con anterioridad – es decir, que  $T \geq t$ , siendo  $T$  la duración total del episodio y  $t$  un instante genérico de tiempo – (Steele, 2005: 7; Bernardi, 2006: 29)<sup>193</sup>.

Los modelos de estimación de la función de riesgo permiten analizar el impacto de determinadas variables independientes seleccionadas por el investigador sobre la ocurrencia del acontecimiento estudiado. Existen, para el supuesto de tiempo continuo<sup>194</sup>, modelos estadísticos de carácter tanto paramétrico como semiparamétrico. En nuestros análisis emplearemos, en particular, el modelo semiparamétrico de riesgos proporcionales de Cox<sup>195</sup>:

$$h(t; x_i) = h_0(t) \exp(\beta' x_i) ; \ln h(t; x_i) = \ln h_0(t) + \beta' x_i,$$

donde  $x_i$  es el vector de covariables incluidas en el modelo y  $\beta'$  el vector de coeficientes de la regresión. Se trata de un modelo frecuentemente utilizado en ciencias sociales debido a su gran flexibilidad. A diferencia de lo que sucede en los modelos de carácter paramétrico, Cox no exige una asunción previa sobre la forma adoptada por la función de riesgo<sup>196</sup>. Por ello, cuando el investigador carece de una expectativa *ex ante* sobre la misma, resulta un modelo adecuado, permitiendo dejar dicha función sin especificar.

---

<sup>193</sup> Las denominadas funciones de supervivencia y densidad resultan también cruciales para este tipo de análisis (Bernardi, 2006: 29-30). La función de supervivencia, expresada como  $S(t) = \Pr(T > t)$ , indica la probabilidad de que el evento no haya tenido lugar antes del tiempo  $t$ , es decir, que la unidad de análisis haya sido capaz de sobrevivir hasta entonces en el estado de origen. La función de densidad  $f(t) = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\Pr(t \leq T < t+dt)}{dt}$ , por su parte, hace referencia a la probabilidad instantánea no condicionada de que el evento se produzca en el intervalo infinitesimal de tiempo  $(t, t + dt)$ . La relación de ambas con la función de riesgo puede ser formulada en los siguientes términos:  $h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$ .

<sup>194</sup> Hablamos de tiempo continuo cuando el evento objeto de investigación puede ocurrir en cualquier instante de  $t$  y la duración del episodio es una variable continua medida con un número real positivo que, en principio, puede ser fraccionario (Bernardi, 2006: 16).

<sup>195</sup> El concepto de “riesgos proporcionales” – frente a los modelos de “riesgo acelerado” – alude a la asunción de que el efecto de las variables independientes sobre la función de riesgo será el mismo para todos los valores de  $t$  en el intervalo temporal considerado (Bernardi, 2006: 88). En el Anexo A Tabla A8 se muestran los resultados de los tests de proporcionalidad llevados a cabo para nuestros modelos.

<sup>196</sup> Por ejemplo, en el caso de los modelos paramétricos exponenciales se asume un riesgo constante en el tiempo, mientras que en los modelos Weibull la tasa de transición tiene un carácter monotónico creciente o decreciente.



Nos hemos referido, hasta el momento, a la aplicación del análisis de duración para estudios de tiempo continuo. Sin embargo, la tasa de transición puede también ser estimada para duraciones de tipo discreto<sup>197</sup>. En este caso, la función de riesgo se define como la probabilidad de que el evento se produzca en un intervalo  $a_i$ , condicionada a que dicho evento no haya ocurrido anteriormente, representándose mediante la siguiente fórmula:

$$h_i = Pr(T = a_i | T \geq a_i)$$

Uno de los modelos generalmente empleados en estos casos, apropiado para variables dependientes binarias de valores 0-1 (en el presente estudio equivalentes a “no abandono” - “abandono” de la lucha armada), es el modelo *logit* (Steele, 2005: 14)<sup>198</sup>:

$$\text{logit}(h_i) = \log\left(\frac{h_i}{1-h_i}\right) = \alpha(t) + \beta'x_i,$$

donde  $\alpha(t)$  es una función de tiempo que habrá de ser especificada por el investigador con el objetivo de controlar la dependencia temporal de la tasa de transición y a la que nos referiremos de nuevo más adelante.

Los modelos de tiempo discreto son, de acuerdo con Bernardi (2006: 136), aplicables en dos circunstancias<sup>199</sup>. Por un lado, se prescribe su empleo para aquellos casos en que el acontecimiento analizado es intrínsecamente discreto, es decir, el evento se produce únicamente en determinados intervalos de tiempo. En otras ocasiones, sin embargo, dicho evento puede tener lugar en cualquier instante, como corresponde al tiempo continuo, pero la información de que dispone el investigador es, no obstante, de tipo discreto. Éste es el caso del presente estudio, para el que en numerosas ocasiones carecemos de información sobre la fecha exacta de desaparición del grupo insurgente – aunque ésta pueda, de hecho, producirse en cualquier punto del tiempo –, contando además con datos únicamente anuales para la mayor parte de variables independientes.

---

<sup>197</sup> El evento objeto de investigación sucede, en tales ocasiones, en intervalos discretos de tiempo y la duración de los episodios se mide mediante números enteros positivos (Bernardi, 2006: 16).

<sup>198</sup> Según Fabrizio Bernardi (2006: 138), el modelo de tasa de transición logística está particularmente indicado para el análisis de procesos intrínsecamente discretos. En todo caso, el citado autor apunta cómo, en la práctica, las diferencias registradas entre los coeficientes estimados por los modelos *logit* y *cloglog* – recomendados para todo tipo de datos discretos – suelen ser irrelevantes.

<sup>199</sup> Steele (2005: 11) menciona un tercer supuesto de aplicabilidad de tales modelos. En concreto, alude a la posibilidad de emplear una aproximación de tiempo discreto en casos de vulneración del principio de riesgos proporcionales anteriormente expuesto para los modelos Cox de tiempo continuo.

En tales circunstancias, y de acuerdo con la literatura existente, resulta también adecuada la realización de aproximaciones de tipo discreto. En todo caso, esta distinción entre tiempo continuo y discreto está, con frecuencia, llena de sutilezas que tornan difusa la distinción entre uno y otro<sup>200</sup>. De hecho, cuando los intervalos de tiempo analizados tienen una amplitud pequeña – y adecuada al proceso objeto de análisis –, los modelos de tiempo discreto son una buena aproximación de los aplicados para tiempo continuo, presentando resultados prácticamente idénticos (Bernardi, 2006: 17; 138).

Para terminar, haremos una breve alusión a dos aspectos adicionales sobre los modelos aplicados en este trabajo de investigación: el tratamiento de los errores y el control de la dependencia temporal. Por lo que respecta a la primera cuestión, y teniendo en cuenta la existencia de varias filas de observación por cada unidad de análisis, estimaremos errores típicos robustos, agrupándolos en *clusters* por grupo insurgente<sup>201</sup>. De este modo, tendremos en cuenta que las observaciones asociadas a una misma organización armada – y, por tanto, con un identificador común – no son en realidad independientes entre sí y sus errores estándar pueden no hallarse distribuidos de manera homogénea (Wooldridge, 2003; Bernardi, 2006: 145; Zorn, 2006; Escobar et al., 2009: 347; Phillips, 2011: 26).

Por otro lado, para la modelización de la dependencia temporal de la tasa de transición en modelos *logit*, seguiremos la propuesta recientemente planteada por Carter y Signorino (2010). El método empleado para controlar tal dependencia en estudios panel con variable dependiente dicotómica ha sido, con frecuencia, la introducción de *splines* o *dummies* temporales, sugerida por Beck, Katz y Tucker (1998) en su célebre artículo sobre la necesidad de “tomar el tiempo en serio”. Sin embargo, Carter y Signorino proponen, frente a dichas prácticas, una sencilla – y eficaz – alternativa: la introducción en los modelos de un polinomio cúbico de la variable tiempo, capaz de

---

<sup>200</sup> En realidad, como señala Bernardi (2006: 135), las mediciones de la duración de cualquier episodio responden, de algún modo, a una división del eje temporal en intervalos, ya sean éstos años, meses, semanas, días, horas, etcétera. El grado de precisión alcanzado a través de dichas unidades de medida dependerá en gran parte del tipo de fenómeno analizado. Para el caso que nos ocupa, consideramos que los datos anuales de que disponemos ofrecen un nivel de especificación significativamente elevado.

<sup>201</sup> Los errores típicos robustos permiten abordar la vulneración del supuesto de homocedasticidad, por lo que reciben también el nombre de errores típicos consistentes con la heteroscedasticidad (*heteroscedasticity-consistent standard errors*).

capturar cualquier forma de la función de riesgo<sup>202</sup> (Carter y Signorino, 2010: 282). Así, en nuestros análisis daremos cuenta de la dependencia temporal mediante la incorporación como regresores de  $t$ ,  $t^2$  y  $t^3$ , siendo  $t$  el tiempo transcurrido desde la aparición de cada grupo armado<sup>203</sup>.

En resumen, los objetivos de la presente investigación y las características de nuestros datos hacen apropiada la utilización de los denominados modelos de duración. Además, habida cuenta de la permeabilidad que en muchos casos caracteriza a la distinción existente entre estudios de tiempo continuo y tiempo discreto, y con el propósito de testar así la robustez de nuestros modelos, emplearemos ambos tipos de aproximación en el análisis de los datos. De este modo, el estudio de la supervivencia de las organizaciones armadas latinoamericanas se llevará a cabo a través de la aplicación tanto del modelo semiparamétrico de riesgos proporcionales de Cox como del modelo *logit* para duraciones discretas<sup>204</sup>.

### **3.2.2. La incorporación de una mirada cualitativa: alumbrando mecanismos mediante la ilustración histórica**

Según lo expuesto en el epígrafe anterior, el estudio estadístico de los casos a través de la técnica del análisis de supervivencia constituye un pilar fundamental de este trabajo de investigación. Sin embargo, junto a dicho enfoque cuantitativo de aproximación al objeto de estudio, el abordaje empírico de la duración de los grupos armados latinoamericanos incorporará además una mirada cualitativa. En realidad, han sido numerosos los autores que, frente a pugnas irreconciliables entre perspectivas metodológicas, han apostado por el diálogo entre diferentes estrategias y técnicas de investigación (v.g. Ragin, 1989: 69-84; Bennett y Braumoeller, 2002; Lieberman, 2005). De acuerdo con tales planteamientos, los métodos mixtos de combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos favorecen la generación de sinergias capaces de

---

<sup>202</sup> En realidad, los autores señalan que podría elegirse un polinomio de cualquier orden. Sin embargo, recomiendan un polinomio cúbico en la medida en que será suficientemente flexible para adaptarse al riesgo modelado, pero al mismo tiempo evitará los problemas de sobreajuste (*overfitting*) asociados con polinomios de mayor grado (Carter y Signorino, 2010: 282).

<sup>203</sup> En todo caso, para comprobar la solidez de los hallazgos, el Anexo A Tabla A11 incluye también una réplica de los modelos *logit* estimados controlando el efecto del tiempo mediante *splines* cúbicos.

<sup>204</sup> El método de estimación de los modelos se corresponde con la llamada máxima verosimilitud (*maximum likelihood* o ML). Este procedimiento consiste en el cálculo de aquellos valores de los parámetros que maximizan la probabilidad (*likelihood*) de obtener la muestra observada si las asunciones del modelo son ciertas (Long y Freese, 2001: 63-64).

enriquecer las investigaciones al integrar – y trascender – las ventajas y virtudes propias de cada uno de los métodos por separado, contribuyendo asimismo a minimizar sus déficits o debilidades<sup>205</sup>.

Existen numerosas estrategias posibles de combinación de métodos y muy pocos consensos establecidos que guíen su implementación y desarrollo. Ante la constatación del tal circunstancia, Lieberman (2005) plantea una propuesta de “análisis anidado” (*nested analysis*) que conjuga perspectivas metodológicas diversas. Según el citado autor, la puesta en práctica de un estudio inicial de *N* grande, acompañado a continuación por un análisis en profundidad de *N* pequeña, produce importantes beneficios a la hora de realizar inferencias causales válidas en los estudios de carácter comparado. Así, el análisis cuantitativo previo permite al investigador observar y estimar los efectos de hipótesis rivales y variables de control sobre el fenómeno específico objeto de interés (Lieberman, 2005: 438). Por su parte, el posterior abordaje cualitativo de uno o varios casos específicos podrá cumplir dos funciones esenciales: testar los modelos estimados mediante el análisis cuantitativo o, en su caso, contribuir a la construcción de nuevos modelos. De este modo, la aproximación cualitativa sirve de complemento al análisis estadístico de los datos, otorgándole una mayor profundidad y facilitando, a través de narrativas sobre los casos, la identificación y examen de los procesos causales que operan tras las tendencias observadas en los datos (Lieberman, 2005: 440-442). En este sentido, Bennett y Braumoeller (2002: 31)<sup>206</sup> señalan los principales beneficios aducidos por aquellos autores partidarios de dicha combinación entre enfoques<sup>207</sup>:

El análisis estadístico puede identificar generalizaciones a través de poblaciones, mientras que los estudios de caso pueden protegernos de potenciales correlaciones estadísticas espurias o endógenas a través del seguimiento de procesos [*process-tracing*], para observar en detalle si los supuestos mecanismos causales que se esconden tras las

---

<sup>205</sup> Como apunta Ragin (1989: 69), la principal debilidad de las ya mencionadas aproximaciones *case-oriented* es su propensión a la particularización – a menudo acompañada de una pretensión de generalidad que excede las potencialidades del método – así como su incapacidad para el abordaje de un amplio volumen de casos. Por el contrario, las estrategias *variable-oriented* se enfrentan, de acuerdo con el autor, al riesgo de generalizaciones excesivas e incluso vacuas, chocando además con argumentos causales complejos o asociados a coyunturas concretas.

<sup>206</sup> Referimos el número de página de la versión del manuscrito de que disponemos, pudiendo variar en otras versiones al tratarse de un trabajo no editado.

<sup>207</sup> Los autores se referirán también en este trabajo a las posibles formas de integración y conciliación de estas dos perspectivas con la tradición metodológica de los modelos formales.

correlaciones estadísticas operaron efectivamente en casos históricos particulares.

Esta investigación bebe de los posicionamientos metodológicos expuestos, consciente de las ventajas de conjugar diferentes perspectivas de aproximación al objeto de estudio. Por tal motivo, y pese a la centralidad que el análisis estadístico de los casos tiene en el presente trabajo, los resultados arrojados por la aplicación de los modelos de duración serán enmarcados dentro de las especificidades propias de las coordenadas espacio-temporales en que los grupos insurgentes desarrollaron su actividad<sup>208</sup>. La ilustración histórica de las relaciones entre variables a través de la aproximación cualitativa a casos concretos nos permitirá aprehender los procesos causales subyacentes. Así, el recurso a ejemplos históricos, a partir de datos secundarios de diverso tipo, contribuirá a arrojar luz sobre los mecanismos y microfundamentos que actúan bajo las hipótesis teóricas contrastadas. No se tratará de estudios exhaustivos, sino más bien de narrativas que complementan los hallazgos cuantitativos y nos permiten constatar la validez de las asunciones y predicciones de los modelos. Para ello, prestaremos atención a relatos sobre aquellos grupos armados considerados representativos y relevantes para ilustrar las dinámicas de desmovilización y abandono de la “vía armada” en América Latina<sup>209</sup>.

### **3.3. DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS: EL “LIBRO DE CÓDIGOS”**

El siguiente paso en la exposición de nuestro diseño metodológico será la caracterización de la base datos empleada en los posteriores análisis empíricos para su explotación estadística. Elaborada expresamente para este trabajo de investigación doctoral, recopila un extenso volumen de información referida tanto a los grupos armados activos en América Latina entre 1970 y 2000, como al contexto sociopolítico de los países en que llevaron a cabo sus operaciones. El conjunto de datos combina, por tanto, variables asociadas a distintos niveles analíticos, integrando la perspectiva micro

---

<sup>208</sup> Recordemos, según señalábamos en páginas previas, que nos encontramos ante un estudio de área comparado con una *N* intermedia, en el que el contexto geográfico se convierte en un elemento digno de consideración a la hora de llevar a cabo nuestras pesquisas.

<sup>209</sup> Autores como Lieberman (2005: 443-448) o Bennett y Braumoeller (2002: 31-32) señalan cómo la selección de los casos es, precisamente, una de las cuestiones más controvertidas de esta estrategia de combinación de métodos, existiendo un considerable abanico de opciones que oscilan entre la selección de casos anómalos o confirmatorios y aleatorios o deliberados. Tales decisiones dependerán tanto de la disponibilidad de información como de los propósitos del investigador, no existiendo por tanto una única opción “*one-size-fits-all*” (Bennett y Braumoeller, 2002: 31).

de las organizaciones insurgentes con el enfoque macro del contexto internacional y los sistemas políticos estatales.

Buena parte de esas variables independientes incluidas en los análisis experimentan cambios a lo largo del periodo temporal observado (*time-varying covariates*), permitiéndonos examinar los efectos de tales modificaciones sobre la propensión a la ocurrencia del evento estudiado. Dicha variación temporal, capturada mediante registros anuales de ciertos indicadores, dota a la base de datos de una estructura de tipo “periodo-unidad de análisis”. De este modo, y tras un proceso de partición de los episodios (*episode splitting*), nuestro fichero se encontrará organizado en unidades de observación redefinidas como “año-grupo armado”. En consecuencia, y según mencionamos anteriormente, la base de datos incluirá diversas entradas o sub-episodios – no independientes entre sí y por ello señalados con un mismo identificador de caso – para cada organización insurgente, expandiendo así la dimensión del fichero al incrementar el número total de filas registradas.

A lo largo del proceso de investigación empírica hemos hecho uso de diversos programas informáticos necesarios para la construcción, análisis y explotación de dicha base de datos. Por lo que respecta a la estimación de los modelos, ésta ha sido efectuada mediante el empleo del paquete de software estadístico *Stata* en su versión 11. Asimismo, y como herramientas de apoyo para el tratamiento de variables, realización de gráficos, montaje y fusión de archivos hemos utilizado también el programa *IBM-SPSS Statistics 19* y la aplicación *Excel* de *Microsoft* para el uso de hojas de cálculo.

Una vez planteados los rasgos generales del diseño y explotación del conjunto de datos, procederemos a la descripción detallada de las variables contenidas en la base, atendiendo a los pormenores de su codificación y explicitando las diversas fuentes de información manejadas. En primer lugar, abordaremos la operacionalización de la variable dependiente, señalando tanto los criterios de selección de las organizaciones armadas, como el procedimiento adoptado para el cómputo de su duración. A continuación, especificaremos el listado de variables independientes incluidas en los modelos, con el objetivo de precisar las diferentes estrategias de medición adoptadas.

### 3.3.1. Operacionalización de la variable dependiente

De acuerdo con lo expuesto en capítulos previos, este trabajo de investigación indaga las causas explicativas del abandono de la violencia como estrategia de lucha política, analizando la duración y desmovilización de las organizaciones insurgentes latinoamericanas. Para el abordaje empírico de dicha cuestión, y con el propósito de operacionalizar nuestra variable dependiente, hemos empleado la *Global Terrorism Database* (GTD) como principal fuente de información relativa a los grupos armados activos en la región durante el periodo analizado. Desarrollada por el National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) (2010a), radicado en la Universidad de Maryland, esta base de datos reúne información extensiva sobre los incidentes armados registrados en todos los países del mundo entre 1970 y 2011<sup>210</sup>.

La recopilación de datos relativos al empleo de la violencia en política es una labor compleja, en la que tanto fuentes como procedimientos de recolección de información suelen estar sujetos a fuertes críticas y cuestionamientos. Asimismo, la propia naturaleza clandestina de las organizaciones armadas, el carácter subrepticio de sus operaciones y el frecuente anonimato de sus miembros, llena de obstáculos la carrera del investigador al intentar conocer los pormenores de la actividad insurgente. Pese a tales dificultades, y con el propósito de paliar, en la medida de lo posible, sus efectos adversos sobre calidad de los datos, START emplea un amplio abanico de fuentes, apoyándose en archivos de noticias electrónicas, bases de datos preexistentes y otros materiales bibliográficos como libros, revistas o documentos legales<sup>211</sup>. Así, y pese a las posibles debilidades o deficiencias de los datos incluidos en los ficheros de la GTD, se trata de la base más amplia y completa sobre incidentes armados existente en la actualidad, utilizada en buena parte de las investigaciones sobre violencia política no estatal desarrolladas a lo largo de los últimos años.

---

<sup>210</sup> Los datos para el periodo 1970-1997 de la GTD proceden de una base previa, elaborada por la agencia de seguridad privada Pinkerton Global Intelligence Services (PGIS). Conviene señalar que la información relativa a los ataques acaecidos en 1993 fue accidentalmente extraviada, pudiendo llevarse a cabo únicamente una recuperación parcial de la misma.

<sup>211</sup> Para más detalles sobre las fuentes de información utilizadas y el procedimiento de recolección de datos seguido para la creación de la GTD, remitimos a la “Data Collection Methodology” disponible en: <http://www.start-dev.umd.edu/gtd/using-gtd/>.

### *3.3.1.1. Criterios de selección de los grupos armados*

Los criterios generales adoptados por la GTD para la inserción de incidentes violentos en la base de datos responden a una firme vocación de inclusividad. La heterogeneidad de los casos registrados está orientada a satisfacer las posibles necesidades de información de las diversas investigaciones consagradas al estudio de la violencia política, con el propósito de resultar útil para un público lo más amplio posible (START, 2010b: 4). De ahí que, pese a su catalogación como actos de “terrorismo”, la base incluya en la práctica una extensa gama de manifestaciones de la violencia política colectiva no estatal<sup>212</sup>.

Como ya señalamos en páginas previas, los incidentes referidos por la GTD habrán de ser intencionales, implicar violencia o amenaza de la violencia y ser perpetrados por actores no estatales. Junto a tales criterios, cumplirán además al menos dos de las siguientes exigencias: a) los ataques estarán orientados a la consecución de objetivos políticos, económicos, religiosos o sociales; b) tendrán la intención de coaccionar, intimidar o transmitir un mensaje a una audiencia más amplia que las víctimas directas de la acción; y c) se situarán al margen de los preceptos establecidos por las leyes internacionales humanitarias que regulan los enfrentamientos armados (START, 2010b: 5). Como resultado de la aplicación de estos requisitos, los investigadores tienen a su disposición un conjunto exhaustivo de datos, aglutinador de las distintas formas adquiridas por la actividad insurgente.

Las mencionadas ventajas de la amplitud en la definición de las unidades de observación incluidas en la GTD vienen acompañadas, no obstante, de importantes retos para el trabajo del investigador. Así, la precisión y rigor perseguidos en la delimitación de nuestra variable dependiente han exigido un extenso trabajo de selección y depuración de los casos contenidos en el conjunto de datos diseñado por el START. Desde nuestra óptica, esta labor de concreción del objeto de estudio resulta de vital importancia en el proceso de investigación, ya que si diferentes expresiones de violencia colectiva responden también a diferentes mecanismos causales, su tratamiento indistinto podría distorsionar los resultados obtenidos en los análisis. Por este motivo, y frente a otras investigaciones sobre la supervivencia de las organizaciones armadas (v.g. Jones y

---

<sup>212</sup> Remitimos aquí al Capítulo I de este trabajo de investigación donde se exponen de manera detallada los diversos debates académicos existentes en torno a las distintas expresiones de la violencia política colectiva desafiadora del Estado.



Libicki, 2008; Young y Dugan, 2010; Blomberg et al., 2011; Phillips, 2011), este trabajo lleva a cabo un exhaustivo ejercicio previo de acotación de nuestro objeto específico de estudio, con el propósito de no mezclar fenómenos con distinto origen y naturaleza.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con la propuesta teórica planteada en capítulos previos, los criterios generales de inclusión establecidos por la GTD han sido complementados por otros específicos para este trabajo de investigación. En primer lugar, y retomando la definición conceptual de nuestra variable dependiente, las unidades de análisis seleccionadas se caracterizarán por ser: i) organizaciones armadas – quedan excluidos los incidentes llevados a cabo por individuos aislados, no atribuidos a grupos específicos (“*unknown*”) <sup>213</sup> o registrados mediante categorías genéricas (v.g. “*left wing guerrillas*”, “*strikers*”, “*contras*”, etc.) –; ii) de ciudadanos contra el Estado – no contemplaremos organizaciones “vigilantistas”, escuadrones de la muerte o grupos paramilitares, sospechosos habituales de connivencia con el Estado, cuyos ataques no van destinados a los centros de poder gubernamental, sino a determinados colectivos de ciudadanos (v.g. “*Death to Kidnappers (MAS)*”, “*Unión Guerrera Blanca (UGB)*”, “*United Self Defense Units of Colombia (AUC)*”) –; iii) con objetivos políticos – suprimimos, por ende, las organizaciones armadas de carácter eminentemente criminal (v.g. “*narco terrorists*”, “*The Extraditables*”) – <sup>214</sup>. En segundo lugar, atenderemos a grupos insurgentes de índole doméstica, excluyendo de nuestros análisis los casos de terrorismo internacional <sup>215</sup>. De este modo, y ante las posibles divergencias existentes en objetivos, motivación e impactos entre violencia interna y transnacional, este trabajo sitúa el foco exclusivamente sobre la primera. En tercer lugar, los actores colectivos analizados habrán llevado a cabo, según la GTD, al

---

<sup>213</sup> Esta categoría incluye numerosos casos en algunos países, donde existe un elevado volumen de información incompleta que hace necesario introducir las debidas cautelas. Tal es el caso, por ejemplo, de Guatemala, donde la mayor parte de los ataques violentos registrados en la GTD para el periodo analizado se atribuyen a autor desconocido.

<sup>214</sup> En los ejemplos expuestos recogemos la denominación de los perpetradores de los ataques tal y como aparece registrada en la GTD.

<sup>215</sup> En ocasiones muy concretas, algunas de las organizaciones insurgentes seleccionadas registran ataques violentos esporádicos más allá de las fronteras estatales. Sin embargo, su naturaleza, base de operaciones, eje de actividad y objetivos políticos son de carácter nacional. Un caso particularmente ambiguo es el del ya mencionado Batallón América, integrado por miembros de organizaciones procedentes de diversos países, fundamentalmente: M-19 (Colombia), Quintín Lame (Colombia), ¡Alfaro Vive, Carajo! (Ecuador) y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru - MRTA (Perú). No obstante, todas las acciones del Batallón registradas por la GTD fueron perpetradas en Colombia, por lo que, para nuestros análisis, hemos asociado a la organización con este país andino.

menos 5 ataques violentos a lo largo del periodo de observación. Mediante el establecimiento de un umbral mínimo de actividad, introducimos un criterio de relevancia que nos permite seleccionar a aquellos grupos con una cierta estabilidad y vocación de continuidad, frente a los ataques esporádicos de grupúsculos no organizados o “lobos solitarios” que desaparecen, en numerosas ocasiones, tras una única intervención armada<sup>216</sup>. Se trata, además, de un umbral suficientemente bajo como para no introducir un sesgo de selección que excluya de los análisis a las organizaciones pequeñas y con escasa capacidad operativa. Por último, descartamos de la muestra a los grupos insurgentes que, en su desafío al Estado, consiguen tomar el poder por la vía de las armas<sup>217</sup>. En tales casos, es precisamente la victoria quien explica el abandono de la estrategia insurgente, por lo que la lógica de desmovilización de dichas organizaciones no responde a los mecanismos postulados en nuestras hipótesis, quedando al margen de los objetivos planteados por esta investigación<sup>218</sup>.

Tras la aplicación de los criterios de selección establecidos, y una vez llevada a cabo una minuciosa labor de “limpieza y depuración” de la base de datos<sup>219</sup>, el número total de grupos insurgentes contemplados por este estudio será de 79 (en el Anexo A Tabla A1 se presenta un listado detallado de grupos y fechas de actividad armada). Entre ellos pueden encontrarse organizaciones de diferente tamaño y capacidad

---

<sup>216</sup> De acuerdo con Young y Dugan (2010: 19, nota 26), el 60% de los grupos registrados en sus análisis, realizados a partir de la GTD, llevan a cabo tan sólo un ataque. De modo similar, Blomberg et. al (2010: 307) señalan que las organizaciones esporádicas (*one-hit wonders*) perpetran, frente a las reincidentes (*recidivist*), más de la mitad de los ataques de terrorismo transnacional, constituyendo la mayor parte de su muestra, procedente de la base de datos “International Terrorism: Attributes of Terrorist Events” (ITERATE) diseñada por Mickolus et. al (2008).

<sup>217</sup> En realidad, dentro del marco geográfico y temporal analizado, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nicaragüense es el único grupo armado que se ajusta a dicho patrón de desmovilización.

<sup>218</sup> Otro posible tratamiento de los grupos “victoriosos” que lograron alcanzar sus objetivos políticos sería seguir considerándolos “activos” dentro de la base de datos, en la medida en que nunca experimentaron un proceso de disolución *stricto sensu*. Podrían, asimismo, ser agrupados en una categoría diferenciada dentro de un análisis de “riesgos competitivos”. En todo caso, y de acuerdo con David Carter (2012: 137, nota 36), los tres procedimientos expuestos arrojan resultados estadísticos equivalentes.

<sup>219</sup> Para llevar a cabo esa “limpieza” de la base ha sido preciso un rastreo pormenorizado de cada uno de los más de 500 casos registrados por la GTD para América Latina. El objetivo de dicha tarea es incluir información robusta y contrastada sobre los grupos insurgentes activos en la región, eliminando posibles fuentes de “ruido” o distorsión de los resultados. Mediante este trabajo, hemos suprimido de la base, por ejemplo, organizaciones catalogadas erróneamente como grupos terroristas (v.g. partidos políticos como el “*Institutional Revolutionary Party (PRI)*” y el “*Democratic Revolutionary Party*” (PRD) en México, o movimientos sociales como el “*Landless Peasants Movement (MST)*” de Brasil). Asimismo, hemos eliminado del conjunto de datos aquellos grupos incluidos en la GTD de los que, no obstante, no hemos encontrado ninguna referencia en otras fuentes bibliográficas consultadas, desconociendo por tanto su duración, perfil y características específicas.

operativa, distintos perfiles ideológicos – aunque con un claro predominio de lo que podríamos denominar “violencia revolucionaria” –, estructuras organizativas variadas<sup>220</sup> y conflictos de muy diversa envergadura. Dichos grupos pertenecen, asimismo, a un amplio espectro de Estados latinoamericanos, dibujando un mapa detallado de la violencia política en la región en el último tercio del siglo XX. Así, las organizaciones armadas observadas en este trabajo de investigación desarrollaron su actividad insurgente en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela<sup>221</sup>. La GTD registra, además, numerosas organizaciones armadas procedentes de Puerto Rico, incluidas también en nuestros análisis. No obstante, el peculiar status territorial de la isla como Estado Libre Asociado y territorio no incorporado de los Estados Unidos requiere ser cautelosos en la interpretación de los resultados<sup>222</sup>.

Para terminar, el Gráfico 3.3 ofrece una visión general del número de grupos insurgentes y ataques violentos incluidos en nuestra base datos para el periodo de observación considerado. Organizada por países, la ilustración deja patente la enorme heterogeneidad de los casos objeto de estudio, reflejando los diferentes escenarios de violencia desarrollados en el subcontinente entre las décadas de 1970 y 2000. En ella puede observarse cómo Colombia, Puerto Rico<sup>223</sup>, El Salvador, Argentina, Nicaragua y

---

<sup>220</sup> Entre las numerosas dimensiones constitutivas de la estructura propia de las organizaciones armadas se encuentra su pertenencia a coaliciones o asociaciones de cooperación estable con otros grupos rebeldes. Muchas de las organizaciones registradas en nuestra base de datos constituyeron, durante su periodo de actividad, coordinadoras guerrilleras como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) o la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) en Colombia. Siguiendo el criterio de la GTD, en nuestra base de datos podrán encontrarse tanto las organizaciones integrantes como la coalición resultante de la unión armada.

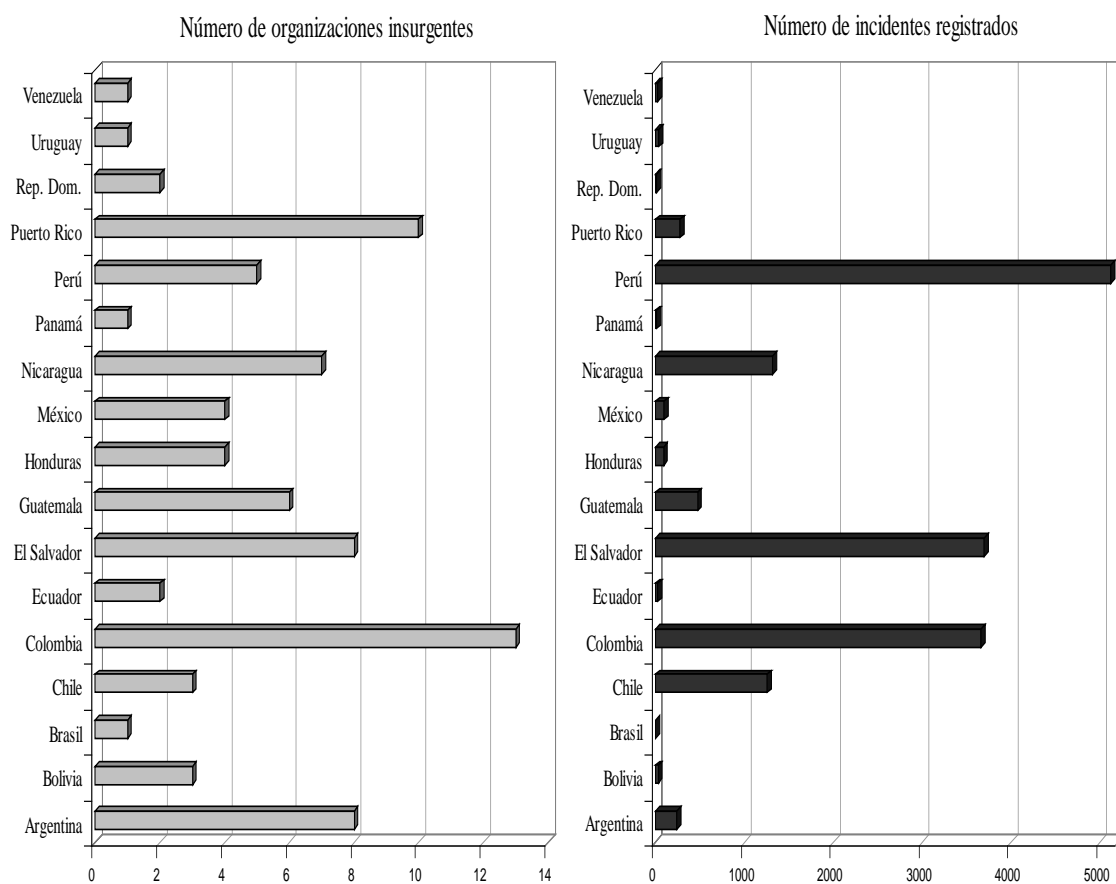
<sup>221</sup> Hemos excluido de los análisis a las posibles organizaciones armadas procedentes de países que, ubicados en la región, se caracterizan por su influencia británica, holandesa o francesa, tales como Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bermudas, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam o Trinidad y Tobago.

<sup>222</sup> Al no tratarse de un Estado independiente, buena parte de las bases consultadas para el seguimiento de las variables explicativas no contienen datos específicos para esta isla caribeña, por lo que en muchos casos ha sido necesario emplear como aproximación la información referida a los Estados Unidos (el Anexo A Tabla A2 presenta una sistematización de las variables para las que se dispone de información específica para Puerto Rico). En este sentido, y para constatar la ausencia de sesgos derivados de tal circunstancia, los modelos han sido también replicados sin las organizaciones insurgentes puertorriqueñas (véase Anexo A Tablas A9 y A10).

<sup>223</sup> Este importante peso de las organizaciones puertorriqueñas podría encontrarse asociado a la autoría estadounidense de la GTD y su mayor acceso a la información vinculada a los incidentes violentos producidos en dicho territorio.

Guatemala concentran la mayor parte de las organizaciones insurgentes presentes en el conjunto de datos. Por otro lado, si atendemos al volumen de incidentes registrados, la disparidad intrarregional resulta aún mayor. Este indicador ofrece una aproximación a la fortaleza y capacidad operativa de las organizaciones analizadas, mostrando la virulencia de los conflictos armados desarrollados en países tales como Perú, El Salvador, Colombia o Nicaragua, atravesados por intensas guerras civiles<sup>224</sup>.

**Gráfico 3.3.** Número de organizaciones insurgentes e incidentes registrados por países en América Latina (1970-2000)



Fuente: Global Terrorism Database (START, 2010a). Elaboración propia.

### 3.3.1.2. El cálculo de la duración de los grupos armados

La operacionalización de nuestra variable dependiente requiere el cómputo de la duración de las organizaciones insurgentes previamente seleccionadas. El establecimiento de las fechas de inicio y finalización del episodio examinado,

<sup>224</sup> Junto a conflictos de menor intensidad, en nuestra base de datos pueden hallarse contextos de enfrentamiento armado catalogados como “guerra civil” según las definiciones expuestas en el Capítulo I. En este sentido, y de acuerdo con Fearon y Laitin (2003a: 9-10; 2003b), Argentina, Colombia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua o Perú experimentan este tipo de contienda violenta a lo largo del periodo de observación.

fundamental para la realización de un análisis de supervivencia, exige al investigador una definición precisa de los límites temporales del fenómeno objeto de estudio. Sin embargo, ésta no es siempre una tarea fácil. Dichos límites son con frecuencia difusos, máxime cuando nos enfrentamos a procesos complejos y con importantes déficits de información como son los asociados a la violencia política. Por ello, y en el caso particular de esta investigación, se vuelve necesario aclarar el modo en que acotaremos los márgenes de existencia de las organizaciones insurgentes.

Por lo que respecta al inicio de los episodios de violencia analizados, situaremos el hito de demarcación en el año en que el grupo comienza su actividad armada. Sólo en aquellos casos en que no dispongamos de tal dato, recurriremos a la fecha de formación de la organización rebelde. En muchas ocasiones la distancia entre ambos momentos es tan pequeña que, en la práctica, resulta irrelevante. Sin embargo, en otras, el tiempo transcurrido desde la fundación del movimiento hasta su toma *efectiva* de las armas es suficientemente amplio como para ser tenido en consideración. Pensemos, por ejemplo, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México. De acuerdo con el estudio Jones y Libicki (2008: 156), tomado posteriormente como fuente de referencia por diversos autores, el punto de arranque del episodio de violencia zapatista tiene lugar en 1983, coincidiendo con los primeros pasos fundacionales de la organización en la Selva Lacandona. Sin embargo, el alzamiento armado del EZLN no tuvo lugar hasta una década más tarde, el 1 de enero de 1994. Fue entonces cuando la organización insurgente declaró la guerra al gobierno mexicano, coincidiendo, por cierto, con la fecha simbólica de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La presencia de casos como el aquí descrito nos sitúan ante la necesidad de determinar el periodo concreto de actividad armada, con el propósito de conocer el contexto y causas explicativas de su duración.

La datación del cese de la violencia se encuentra también sujeta a discusión, debido a la recurrente vaguedad de las fechas y a las múltiples formas en que la desmovilización de los grupos rebeldes puede llevarse a cabo. Existen, de hecho, muchos “finales” posibles para la lucha armada. Así lo muestra Audrey K. Cronin (2009) en su estudio sobre el declive y suspensión de las campañas terroristas. Según la autora, hay al menos seis patrones diferenciados de finalización de la actividad violenta desarrollada por las organizaciones armadas, a saber: la decapitación – captura o asesinato del líder del grupo –, las negociaciones – transición hacia un proceso político

legítimo –, el éxito – logro de objetivos –, el fracaso – implosión o marginalización –, la represión – eliminación por la fuerza – y la reorientación – tránsito a otros *modus operandi* –. De modo similar, Jones y Libicki (2008: 101) aluden a las escisiones, la victoria, la fuerza militar o policial y las salidas políticas como vías de desaparición de los grupos insurgentes. David Carter (2012) sintetiza toda esa pluralidad de caminos hacia la paz en dos grandes bloques, ampliables a un tercero: a) la eliminación forzosa, b) la disolución interna, y c) la victoria. Tratados como eventos singulares, el autor codifica la variable dependiente en distintas categorías, llevando a cabo un análisis de supervivencia con “riesgos competitivos”, con el propósito de determinar así las posibles divergencias causales entre unos y otros patrones de cese de la actividad armada<sup>225</sup>.

Este trabajo, sin embargo, atiende a la suspensión de la lucha insurgente, con independencia de las sendas atravesadas para alcanzar tal resultado. De este modo, es la pacificación general del conflicto violento, cuyas rutas de llegada se entrecruzan y solapan en la práctica, quien motiva y vertebra este trabajo de investigación. Codificaremos, por tanto, un único evento de interés, analizando de manera global el cese de la actividad insurgente y la disolución de los grupos rebeldes, e indagando así en los motivos que subyacen a la heterogeneidad en la duración de los mismos. Para ello, hemos establecido como fecha de finalización de las organizaciones insurgentes el año en que se produce la entrega oficial de las armas, se firma un acuerdo de paz, se desarticula su estructura o se registra su último ataque violento.

La voluntad de rigor que guía a este trabajo de investigación, unida a la ya mencionada dimensión “intermedia” de nuestra base de datos, explican la atención particularizada que se ha prestado a cada uno de los 79 grupos armados que integran nuestra muestra a la hora de fijar sus límites temporales. Se han tomado, así, decisiones individualizadas en función de las características específicas de cada organización, del contexto de su desarme y de la información disponible en cada caso. Para ello hemos empleado una amplia gama de fuentes de datos y referencias bibliográficas, que hacen

---

<sup>225</sup> Este tipo de enfoque ha sido aplicado también al estudio de la finalización de las guerras civiles. Así, autores como DeRouen y Sobek (2004) o Cederman et al. (2012) analizan la terminación de este tipo de contienda armada a través del examen de los “riesgos competitivos”, atendiendo a sus posibles resultados. En particular, examinan los factores que conducen a *outputs* tales como la victoria gubernamental, la victoria rebelde, una tregua o un tratado, indagando en las dinámicas específicas que rodean a dichas circunstancias.

posible alcanzar, dentro de las restricciones impuestas por el propio objeto de estudio, notables niveles de precisión en el seguimiento de sus trayectorias. Entre dichas fuentes, cabe destacar la ya mencionada *Global Terrorism Database* (GTD) (START, 2010a), los ficheros de *Terrorist Organization Profiles* (TOPs)<sup>226</sup>, los listados de organizaciones incluidos en el estudio de Jones y Libicki (2008) publicado bajo el título *How terrorist groups end*, o la guía *Political Terrorism* elaborada por Schmid y Jongman (2005). Asimismo, y como materiales de apoyo, hemos recurrido al *Historical dictionary of terrorism* (Anderson y Sloan, 2009), el *Dictionary of contemporary politics of Central America and the Caribbean* (Gunson et al., 1991), el informe *Terrorist Group Profiles* redactado por la Task Force on Combatting Terrorism (1989) del vicepresidente de los Estados Unidos, los documentos emitidos por las Comisiones de la Verdad creadas en la región, monografías sobre países o grupos rebeldes específicos, artículos de prensa, recursos bibliográficos *online*, etcétera. Mediante toda esta amalgama de fuentes de información hemos tratado de construir una base de datos sólida a través de la aproximación singularizada a cada una de nuestras unidades de análisis.

Una vez realizadas las labores de búsqueda descritas, el cómputo de la duración de las organizaciones insurgentes incluidas en este estudio muestra, como puede constatar en el Gráfico 3.4, una gran variabilidad. Esto pone de relieve la importancia de llevar a cabo estudios sobre las causas explicativas de la longevidad de este tipo de actores colectivos, que no parecen ajustarse a una pauta única de supervivencia. Así, entre los casos observados, pueden encontrarse desde grupos armados con apenas algunos meses de duración, hasta aquéllos cuya existencia supera incluso los treinta años. En todo caso, y pese tal disparidad, la ilustración revela cómo una buena parte de los grupos analizados se desmoviliza a lo largo del primer decenio de actividad armada. De hecho, la duración mediana de las organizaciones registradas en la región, señalada en la gráfica mediante una barra de distinto color, es de 9 años<sup>227</sup>. De este modo, teniendo en cuenta la duración de cada uno de los movimientos armados presentes en

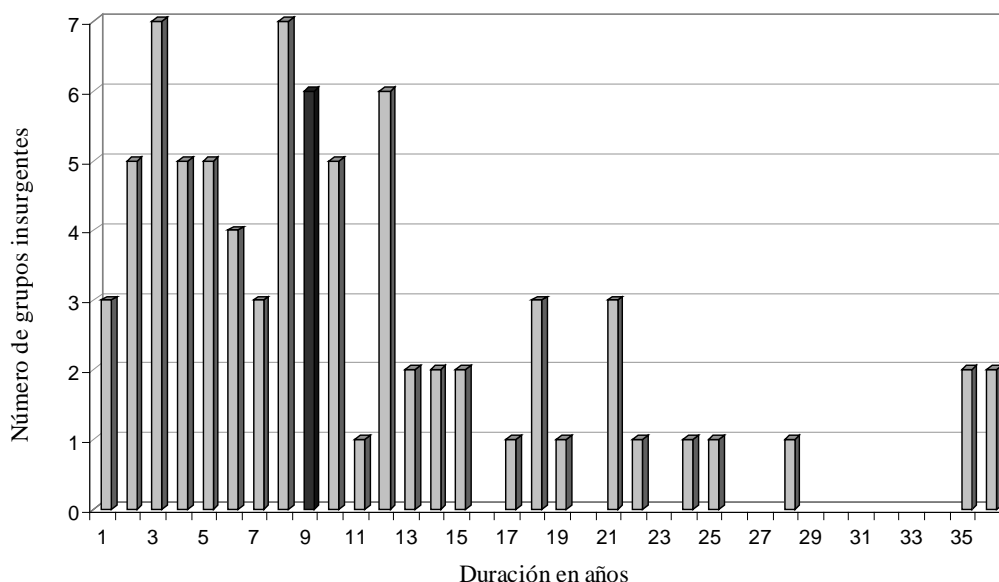
---

<sup>226</sup> Este archivo recoge información sobre más de 850 organizaciones armadas operativas en todo el mundo durante las cuatro últimas décadas. Hasta 2008, tales datos fueron recopilados en la Terrorism Knowledge Base® (TKB®), gestionada por el Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT). En la actualidad, se encuentra disponible en el sitio web del National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). Para más información, véase [http://www.start.umd.edu/start/data\\_collections/tops/](http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/).

<sup>227</sup> Cuando, como en este caso, existen censuras a la derecha, la mediana resulta una medida de tendencia central más adecuada que la media, pues el desconocimiento de la duración total de los episodios censurados podría distorsionar el cálculo de la segunda.

nuestra muestra, y adoptando el “año-grupo” como unidad de análisis, el número total de observaciones en nuestra base de datos asciende a 803.

**Gráfico 3.4.** La duración de las organizaciones insurgentes en América Latina (1970-2000)



Fuente: Elaboración propia.

Para terminar, y por lo que respecta al procedimiento de codificación de la información referida a la duración y desmovilización de los grupos armados, nuestra base de datos recoge las siguientes variables:

**Duración de la organización insurgente** [*Tiempo*]. Tiempo transcurrido en años desde el inicio de la actividad armada hasta la desmovilización del grupo. Para el cálculo de la duración, y siguiendo el criterio adoptado por Phillips (2011), aplicamos la siguiente fórmula: (Año de fin – Año de inicio) + 1. De este modo, evitamos la aparición de cálculos de edad iguales a 0 para aquellas organizaciones que estuvieron activas tan sólo durante algunos meses dentro de un mismo año natural.

**Finalización de la organización insurgente** [*Abandono*]. Variable de evento que recoge la desmovilización del grupo armado y su abandono de la estrategia de la violencia. Se trata de una variable *dummy* que codifica con un ‘1’ el año de finalización de la actividad armada y con un ‘0’ el resto. Aquellos grupos que no se desmovilizan a



lo largo de nuestro periodo de observación (casos censurados) registrarán un valor ‘0’ para todos sus años<sup>228</sup>.

Estas variables contienen información imprescindible para la realización de un análisis de supervivencia. En el caso de los modelos de tiempo continuo, ambas serán fundamentales para definir el conjunto de datos como historia de acontecimientos e identificar los episodios. Por lo que respecta a los modelos *logit* para tiempo discreto, utilizaremos la variable dicotómica *Abandono* como dependiente y *Tiempo* como control de la dependencia temporal.

### 3.3.2. Operacionalización de las variables independientes

Con el propósito de comprobar las hipótesis teóricas expuestas en el capítulo previo y comprender así las causas de la desmovilización de los grupos armados, nuestra base de datos introduce una serie de variables independientes consideradas relevantes para la aproximación al fenómeno estudiado<sup>229</sup>. Dichas variables combinan información referida tanto a la dimensión macro del sistema político, como a aspectos de carácter micro vinculados a nuestras unidades de observación (Landman, 2008: 19). Así, como señala Steele (2005: 12), y retomando la clasificación propuesta por Kalbfleisch y Prentice (1980), el análisis de la historia de acontecimientos permite contemplar covariables de naturaleza tanto interna como externa. Las primeras estarían específicamente asociadas a los individuos objeto de estudio – en este caso, las organizaciones insurgentes –, mientras que las segundas, vinculadas a factores contextuales, se atribuirían bien a toda la muestra – v.g. escenario internacional de Guerra Fría –, bien a determinados subgrupos de la misma – v.g. características de país aplicadas a los diferentes movimientos armados activos en su territorio –.

Muchas de las variables independientes contempladas en este trabajo de investigación registran, como ya señalamos con anterioridad, variaciones a lo largo del periodo observado (*time-varying covariates*). La incorporación de tales modificaciones en el conjunto de datos permite analizar los posibles efectos de un cambio en la variable

---

<sup>228</sup> Nuestra base registra, por tanto, un gran volumen de ‘0’ en comparación con los ‘1’. Dicha disposición de la variable dependiente se corresponde con el concepto de *rare events*. De acuerdo con Gary King y Langche Zeng (2001: 137), dicho término alude a las “variables dependientes binarias caracterizadas por tener desde docenas a miles de veces menos unos (eventos como guerras, vetos, casos de activismo político o infecciones epidemiológicas), que ceros (no-eventos)”.

<sup>229</sup> El Anexo A Tabla A4 incluye estadísticos descriptivos de todas las variables explicativas incluidas en los análisis.

explicativa X sobre la proclividad al acontecimiento estudiado, es decir, a un cambio en la variable explicada Y (Bernardi, 2006: 24). Sin embargo, no siempre resulta posible disponer de información precisa sobre las transformaciones experimentadas por las variables a lo largo del marco temporal analizado. De hecho, la naturaleza clandestina propia de las organizaciones insurgentes dificulta enormemente el acceso a datos referidos a las variables internas o de nivel micro. Por ello, en términos generales, dispondremos de información anual para las variables contextuales y constante para las características del perfil organizacional.

### 3.3.2.1. Variables de nivel macro

A lo largo del presente apartado detallaremos las estrategias adoptadas para la operacionalización de las variables independientes de nivel macro, así como las fuentes utilizadas para la obtención de los datos. Para su exposición, organizaremos la información en cuatro grandes bloques correspondientes a cada una de las líneas de argumentación teórica seguidas en el planteamiento de hipótesis presentado en el capítulo previo. De este modo, los *proxies* empleados para la medición y estudio de las diferentes dimensiones propuestas son los siguientes:

#### a. El régimen político

a.1. **Democracia** [*DemoVan*, *DemoSIPv2*, *checks*]. La literatura cuantitativa ofrece una amplia variedad de fuentes útiles para la aproximación empírica al concepto de democracia. Entre los indicadores de referencia se encuentran la *Poliarchy Dataset* de Vanhanen (2000; 2002), el *Scalar Index of Politics (SIP)* propuesto por Gates et al. (2006a; 2006b), la *Democracy and Dictatorship Measure (DD)* de Cheibub et al. (2010a; 2010b), el *Polity IV Project* de Marshall et al. (2010), el *Democracy Index* elaborado por The Economist (2012)<sup>230</sup> o el *Freedom in the World* de Freedom House (2013). Sin embargo, y de acuerdo con las cautelas introducidas por Vreeland (2008), no todos ellos resultan igualmente válidos para el estudio de fenómenos asociados a la violencia política. De acuerdo con el citado autor, algunos de estos indicadores se encuentran “contaminados” en su composición por elementos definidos en relación a la

---

<sup>230</sup> De elaboración reciente, este índice sólo dispone de información a partir del año 2006.

violencia<sup>231</sup>, lo que podría distorsionar los resultados e introducir sesgos derivados de la endogeneidad de los modelos<sup>232</sup>. Por eso propone su propio indicador, el *X-Polity*, resultado de eliminar los componentes de *Polity* codificados en referencia a las guerras civiles, y sugiere asimismo el empleo de los índices de Vanhanen y SIP como instrumentos apropiados para el estudio de la democracia en escenarios de violencia. Teniendo en cuenta tales consideraciones, ambos indicadores han sido incorporados en nuestra base de datos como punto de partida para la aproximación al régimen político imperante en los países en que operan las organizaciones armadas, incluyéndose en nuestros modelos estadísticos básicos<sup>233</sup>.

Tatu Vanhanen (2000) propuso su índice de democracia en el artículo “A new dataset for measuring democracy, 1810-1998”, actualizado dos años más tarde mediante una nueva versión de su *Poliarchy Dataset (v2.0)* (Vanhanen, 2002). Según el mencionado artículo, la combinación de dos dimensiones básicas de la democracia, participación y competición, permiten medir de manera adecuada el grado de democratización alcanzado por un país dado. Se sitúa así en la senda de autores como Robert Dahl (1997), quien, como apuntamos ya en capítulos previos, alude precisamente a los derechos de participación política y contestación pública como factores clave en la configuración de las poliarquías. Sin embargo, y como apunta el propio Vanhanen (2000: 252), la principal dificultad estriba, precisamente, en consensuar los procedimientos adecuados para la operacionalización de las dimensiones teóricas planteadas. El autor formula entonces su propuesta de aproximación a tales componentes. Como él mismo expone, la medición de la competición política es calculada sustrayendo a 100 el porcentaje de votos obtenido en las elecciones por el partido más grande, mientras que la participación alude, básicamente, al porcentaje de la población total que emitió su voto en los comicios (Vanhanen, 2000: 253 y ss.). La

---

<sup>231</sup> En particular, alude a los componentes PARCOMP (“Competitiveness of Political Participation”) y PARREG (“Regulation of Political Participation”) de *Polity*, definidos explícitamente en función de la existencia de guerras civiles, así como a los datos del índice elaborado por Freedom House.

<sup>232</sup> Cuestiona, concretamente, la extendida hipótesis de la “U-invertida”, según la cual los regímenes híbridos son más propensos que las democracias o las dictaduras al estallido de guerras civiles. Según el autor, este hallazgo no se debe, en muchos estudios, a la existencia de una relación sustancial entre las características institucionales de este tipo de regímenes y los conflictos armados, sino más bien a la constatación de una asociación – obvia – entre violencia política y guerra civil, resultado de la composición de los indicadores de democracia utilizados.

<sup>233</sup> La réplica de los modelos con cada una de estas dos mediciones nos permitirá, además, verificar la robustez de los hallazgos, contrastando los resultados obtenidos en los análisis.

clasificación de los regímenes políticos de Vanhanen se concreta en su índice de democratización (*ID*) – recogido en este estudio a través de la variable *DemoVan* –, en el que combina, otorgándoles el mismo peso, los dos componentes expuestos, multiplicándolos entre sí y dividiendo entre 100 el resultado obtenido. De este modo, los valores más altos indicarán mayores grados de democracia, partiendo desde el valor ‘0’, definitorio de un contexto de autocracia absoluta, hasta la puntuación máxima de ‘49’.

Por su parte, el *Multidimensional Institutional Representation of Political Systems (MIRPS)/Scalar Index of Politics (SIP)* fue planteado por Gates, Hegre, Jones y Strand (2006a) en su artículo “Institutional inconsistency and political instability: Polity duration, 1800-2000”. En este trabajo, los autores clasifican los distintos regímenes políticos existentes a través de la variable *sip2*, incluida en nuestro conjunto de datos como *DemoSIPv2*. Este indicador recopila información relativa a tres dimensiones institucionales básicas: el reclutamiento del ejecutivo, las restricciones impuestas a la autoridad ejecutiva en la toma de decisiones y el nivel de participación política. De este modo, y a partir de datos fundamentalmente extraídos del *Polity Project* y la *Poliarchy Dataset* de Vanhanen<sup>234</sup>, los autores crean un índice de democracia que, oscilando dentro del rango comprendido entre ‘0’ y ‘1’, es capaz de aglutinar los factores expuestos y situar a los países en un *continuum* dentro del eje autocracia (valor ‘0’) – democracia (valor ‘1’). En nuestros datos emplearemos la versión anualizada de la MIRPS/SIP (Gates et al., 2006b), apropiada para la estructura año-grupo de nuestro estudio, de modo que en caso de proceso de cambio se reporta el régimen existente a 31 de diciembre.

Por último, y recogiendo la propuesta de Marta Reynal-Querol (2005), aludiremos al grado de inclusividad-exclusividad del sistema como herramienta de aproximación a la relación entre democracia y violencia. La operacionalización de esta variable procede de la *Database of Political Institutions (DPI)*, planteada por Keefer et

---

<sup>234</sup> En concreto, para la dimensión “reclutamiento del ejecutivo”, el SIP se basa en los componentes XRREG (“Regulation of Chief Executive Recruitment”), XRCOMP (“Competitiveness of Executive Recruitment”) y XROPEN (“Openness of Executive Recruitment”) de *Polity*, mientras que la información referente a las “restricciones al ejecutivo” procede del componente XCONST (“Decision constraints on the Chief Executive”) de la misma base. Por lo que respecta a la dimensión de “participación política”, el índice de referencia procede del ya mencionado conjunto de datos elaborado por Tatu Vanhanen (Gates et al., 2006a: 897). Como puede constatarse, este índice de democracia excluye los componentes codificados en relación a la violencia política.

al. (2001) en su artículo “New tools in comparative political economy: the Database of Political Institutions”. La DPI, de la que emplearemos su última versión disponible (Keefer et al., 2012), contiene numerosas variables asociadas a diversas características institucionales del sistema político de 181 países entre los años 1975 y 2012<sup>235</sup>. En particular, abordaremos la dimensión propuesta a través de la variable *checks* (Keefer y Stasavage, 2003). De acuerdo con Keefer et al. (2001: 169), esta aproximación a los “pesos y contrapesos” alude al “número de decisores cuyo acuerdo es necesario para que cambie una política pública”. Así, la mencionada variable pretende dar cuenta del volumen de actores con poder de veto, es decir, con capacidad de bloquear aquellas políticas lejanas a sus preferencias, excluyendo a determinados grupos sociales del proceso de toma de decisiones (Reynal-Querol, 2005: 450). Para su elaboración, los autores emplean información relativa a las normas del sistema electoral, a su competitividad y a ciertas características de los poderes ejecutivo y legislativo<sup>236</sup>. De este modo, valores altos en la variable se encontrarían asociados a mayores niveles de inclusividad y consenso, mientras que las puntuaciones más bajas aludirían a sistemas políticos más excluyentes, caracterizados por contar con un menor número de decisores clave. Para la muestra seleccionada, esta variable oscila entre los valores ‘1’ y ‘6’<sup>237</sup>.

a.2. **Transiciones democráticas y democracias postransición** [*DemoDD*, *AgeDemoCat*, *DemoPost*]. Junto a los indicadores citados, y con el propósito de profundizar en la hipótesis de la “paz democrática”, nuestro conjunto de datos incluye también una serie de variables orientadas al estudio del papel desempeñado por los procesos de democratización y cambio político. Para el abordaje de dichas cuestiones partiremos de la *Democracy and Dictatorship Measure (DD)* propuesta por Cheibub et al. (2010a; 2010b)<sup>238</sup>. Se trata de un indicador dicotómico (*DemoDD*) que codifica con el valor ‘1’ la presencia de regímenes democráticos y con el ‘0’ los gobiernos de carácter dictatorial. De acuerdo con este índice, el sistema político habrá de cumplir,

<sup>235</sup> Los modelos en que introduzcamos este indicador tendrán datos perdidos para los primeros años del marco temporal observado, debido a que nuestro estudio arranca en 1970.

<sup>236</sup> Uno de los aspectos tomados en consideración por este índice es el carácter presidencial o parlamentario del sistema político. En el caso de América Latina es preciso tener en cuenta la “homogeneidad” de la región en este sentido, con un total predominio del presidencialismo.

<sup>237</sup> En la versión 2012 de la DPI, la variable *checks* adopta valores entre ‘1’ y ‘18’. Otros estudios, no obstante, presentan un grado de variabilidad menor en el citado índice. Por ejemplo, en el caso del ya mencionado trabajo de Reynal-Querol (2005: 453) esta variable fluctúa entre ‘1’ y ‘9’.

<sup>238</sup> Esta clasificación de regímenes políticos se basa, a su vez, en los trabajos previos de Álvarez et al. (1996) y Przeworski et al. (2000).

para ser catalogado como democracia, los siguientes criterios: i) el jefe del ejecutivo será elegido por votación popular – o por un cuerpo conformado de tal modo –; ii) el legislativo será elegido por votación popular; iii) habrá más de un partido político que concorra a elecciones; y iv) habrá una alternancia en el poder bajo reglas electorales idénticas a las que llevaron al cargo al actual titular del mismo (Cheibub et al., 2010a: 69).

Según los autores del índice, las ventajas de esta estrategia de codificación estriban en que resulta clara, rigurosa, objetiva y fácilmente reproducible. Por lo que a nuestra investigación respecta, y pese a su concepción minimalista de la democracia, una de las grandes bondades de este indicador es la posibilidad de determinar los momentos de cambio de régimen político y calcular la “edad” de los sistemas democráticos. Esto nos permitirá explorar, como planteamos en el capítulo previo, si se registran diferencias en las probabilidades de finalización de las organizaciones armadas en función del estadio de evolución en que se encuentre el régimen democrático, distinguiéndose así entre estrategias rebeldes de corto y de medio/largo plazo. De este modo, nuestra variable de edad democrática, *AgeDemoCat*<sup>239</sup>, codificará con un valor ‘0’ los regímenes autoritarios (‘Dictadura’), con un ‘1’ los primeros cuatro años de democracia, que se corresponderían con periodos de transición política (‘Demo Transición’)<sup>240</sup>, y con un ‘2’ aquellas democracias con al menos 5 años de duración, es decir, lo que podrían denominarse “democracias postransicionales” (‘Demo Postransición’). Dicha operacionalización pretende observar los diferentes efectos de cada uno de estos “momentos” del régimen democrático sobre las estrategias de la insurgencia. Finalmente, y como operacionalización alternativa de la cuestión aquí expuesta, incluimos también la variable dicotómica *DemoPost* que registra con el valor

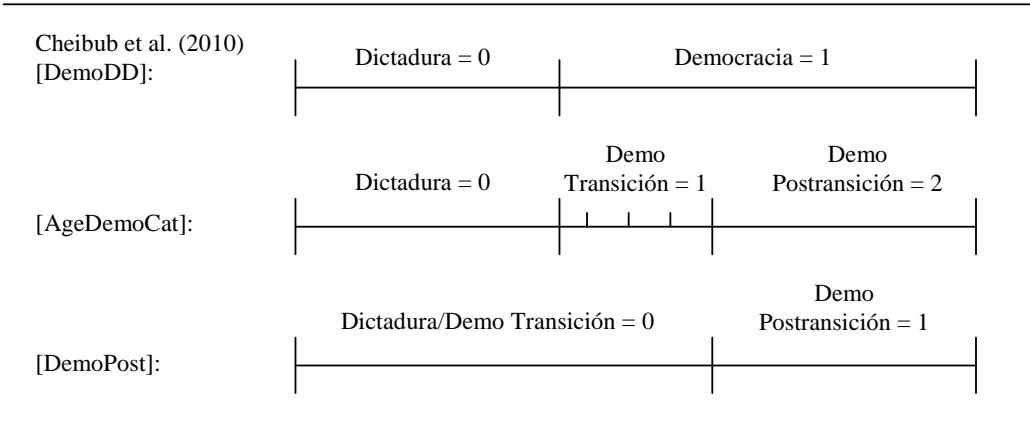
---

<sup>239</sup> El punto de partida para el cómputo de la edad del régimen será el año 1946, fecha en que comienza la base de datos empleada como referencia.

<sup>240</sup> Como ya planteamos en el anterior capítulo teórico, existe un amplio debate en torno a la determinación de los límites temporales de los procesos de transición democrática. Se trata de momentos difusos cuya operacionalización requiere, por tanto, la toma de decisiones por parte del investigador. Así, el establecimiento de un periodo de cuatro años, equivalente a la duración de una “legislatura tipo”, tiene en realidad un fuerte componente de arbitrariedad. No obstante, cabe mencionar que este tipo de codificación de las etapas de democratización se sitúa en la línea del trabajo ya realizado por otros autores, destacando la investigación de Cederman, Hug y Krebs (2010), publicada bajo el título “Democratization and civil war: empirical evidence”. En ella, se generan una serie de algoritmos identificativos, mediante variables *dummies* que señalan periodos de 1 a 4 años, de los diversos procesos de cambio de régimen – tanto democratizaciones como retrocesos democráticos – acaecidos entre 1946 y 2004. En todo caso, reiteramos, la elección de tales demarcaciones temporales y no otras está sujeta a discusión.

‘1’ la presencia de regímenes democráticos que, transcurrido el periodo de transición, permanecen estables y avanzan hacia la consolidación – equivalente a la categoría ‘2’ en la variable *AgeDemoCat* –, asignando un ‘0’ a todos los demás casos. Este indicador se encontrará, por tanto, asociado a las democracias con una longevidad mínima de 5 años. Mediante estas variables nos aproximaremos, en definitiva, al concepto de “paz democrática postransicional”<sup>241</sup>. La Figura 3.2 ofrece una representación visual de tales indicadores:

**Figura 3.2.** Generación de variables de transición democrática y democracias postransición



Elaboración propia a partir de Cheibub et al. (2010b; 2010a)

a.3. **Represión estatal** [*RepresiónA*]. Para el abordaje empírico de los niveles de represión estatal, emplearemos la *Political Terror Scale (PTS)*, 1976- 2009 elaborada por Gibney, Cornett y Wood (2010). La PTS proporciona información anual sobre las violaciones de los derechos humanos asociados a la integridad física de las personas en todos los países del globo desde 1976<sup>242</sup>. Esta variable se encuentra codificada en una escala de cinco categorías, si bien será tratada como continua en nuestros análisis estadísticos. Los autores atribuyen el valor ‘1’ a aquellos países gobernados bajo el imperio de la ley, donde no se producen – o son muy escasos y excepcionales – los encarcelamientos, asesinatos o detenciones políticas, y el valor máximo ‘5’ a los casos

<sup>241</sup> Autores como Christina Schatzman (2005: 302) realizan operacionalizaciones similares de la variable de consolidación democrática. En su estudio sobre la rebelión y la protesta colectiva en América Latina, la autora contempla la edad de la democracia como posible factor interviniente en los niveles de movilización social. De este modo, codifica el efecto de las democracias consolidadas atribuyendo el valor ‘1’ a aquéllas con al menos 10 años de duración.

<sup>242</sup> Los modelos que incorporan esta variable independiente contarán, por tanto, con un menor número de casos, perdiendo la información referente a los años 1970-1975 y excluyendo del análisis a los grupos desmovilizados durante ese primer lustro.

en que los líderes actúan con total discrecionalidad y el terror se extiende al conjunto de la población. Los datos para la elaboración de dicha escala proceden de dos fuentes fundamentales: los informes anuales publicados por Amnistía Internacional y los “Country Reports on Human Rights Practices” del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La información extraída de cada una de estas fuentes ha sido codificada en una variable diferenciada, de manera que el investigador puede escoger el origen de los datos con que desea trabajar. En este caso hemos optado por la codificación desarrollada a partir de los estudios realizados por Amnistía Internacional, asumiendo una mayor independencia e imparcialidad de la fuente.

b. La capacidad estatal

b.1. **Producto Interior Bruto *per cápita*** [*gdpmad*]. PIB *per cápita* de cada país medido en dólares Geary-Khamis (también denominados dólares internacionales) de 1990. Se trata de una unidad monetaria hipotética equivalente al poder de compra de los dólares estadounidenses en Estados Unidos en un momento determinado del tiempo. Los datos proceden de la base recopilada por Angus Maddison (2010) bajo el título *Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD*.

b.2. **Población** [*pop2*]. Población de cada país a mitad de año, medido en miles de personas. Cifras obtenidas de la ya mencionada base de datos de Angus Maddison (2010) *Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD*.

b.3. **Proporción de terreno montañoso** [*Mont*]. Porcentaje de terreno montañoso estimado para cada país observado. Esta información ha sido extraída de la base diseñada por Fearon y Laitin (2003b) para su investigación “Ethnicity, insurgency, and civil war”. Se corresponde, en particular, con la variable *mtnest* contenida en su conjunto de datos. Como los propios autores señalan en los apéndices que acompañan al citado artículo, para la elaboración de este indicador se han basado en el trabajo previamente desarrollado por el geógrafo A. J. Gerard, en el marco del proyecto “Economics of civil war, crime and violence” del Banco Mundial (Fearon y Laitin, 2003a: 3-4). Si bien es cierto que el estudio de Fearon y Laitin engloba el arco temporal comprendido entre 1945 y 1999, los datos relativos a este indicador han sido también aplicados al año 2000 debido a su carácter invariable a lo largo del periodo analizado.



### c. Los agravios socioeconómicos

c.1. **Porcentaje de alfabetización** [*school12*]. Porcentaje de población alfabetizada en cada uno de los países considerados (los datos precisan ser multiplicados por 0,1 para reescalar). Información obtenida a partir de la variable *school12* del *Cross-National Time-Series Data Archive (CNTS)* de Arthur S. Banks y Kenneth A. Wilson (2010).

Pese a que, como ya vimos, buena parte de la literatura hace referencia a la relación entre insurgencia y agravios socioeconómicos a través del concepto de inequidad, lo cierto es que las fuentes de datos sobre la desigualdad de los ingresos, medida a través del coeficiente de Gini, ofrecen una información muy incompleta para los países latinoamericanos, fundamentalmente durante los primeros años del periodo analizado. Dichos déficits sugieren la conveniencia de utilizar *proxies* alternativos en los análisis, con el propósito de minimizar imprecisiones y no reducir de manera drástica el número de observaciones incluidas en los modelos. Otros indicadores considerados de los que sí encontramos un amplio volumen de datos disponibles, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o la esperanza de vida, presentaban no obstante problemas de colinealidad con el resto de variables introducidas en las estimaciones<sup>243</sup>. Habida cuenta de tales circunstancias, optamos finalmente por considerar la tasa de alfabetización como medida de aproximación al concepto de injusticia social y agravios socioeconómicos.

### d. El contexto internacional

d.1. **Guerra Fría** [*GF*]. Variable dummy de elaboración propia codificada con valor ‘1’ para el periodo de Guerra Fría y ‘0’ para el resto. Tomamos el año 1991, momento del colapso definitivo de la Unión Soviética, como punto de referencia del final de dicha etapa<sup>244</sup>.

---

<sup>243</sup> El IDH desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010b) muestra una correlación de 0,8237 con el PIB *per cápita* y de -0,5702 con el índice de represión estatal. Por su parte, la esperanza de vida calculada por el Banco Mundial (2014b) correlaciona al 0,7069 con el PIB *per cápita* y al -0,4984 con la represión del Estado.

<sup>244</sup> Otros autores toman la caída del Muro de Berlín en 1989 como hito indicativo de la clausura del periodo de Guerra Fría.

### 3.3.2.2. Variables de nivel micro

#### e. Recursos y fortaleza de las organizaciones insurgentes

e.1. **Tamaño de la organización** [*Tamaño*]. Tamaño máximo alcanzado por el grupo insurgente, expresado en número de miembros. Se trata de una variable categórica de carácter ordinal, tratada como continua en los análisis, codificada con los siguientes valores: ‘1’ = menos de 100 combatientes; ‘2’ = entre 100 y 999 combatientes; ‘3’ = entre 1.000 y 9.999 combatientes; ‘4’ = más de 10.000 combatientes. La información básica para el cómputo de este indicador procede del trabajo de Jones y Libicki (2008), quienes en su estudio sobre el final del terrorismo registran tales datos a través de la variable *peak-size* (10s, 100s, 1.000s, 10.000s). Para aquellas organizaciones armadas no incluidas en el mencionado texto, hemos recurrido a diversas fuentes adicionales con el propósito de completar así la información faltante. Entre ellas se encuentran los trabajos de Gunson et al. (1991), Crenshaw (1995), Schmid y Jongman (2005) o Anderson y Sloan (2009) entre otros<sup>245</sup>.

## 3.4. SISTEMATIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

A lo largo de los epígrafes que anteceden a estas líneas, hemos detallado el *cuándo*, el *dónde* y el *cómo* de esta investigación. Nos encontramos, así, ante un estudio de área sobre la duración y desmovilización de las organizaciones insurgentes, ubicado en América Latina durante el periodo comprendido entre los años 1970 y 2000. Por lo que respecta a los procedimientos específicos adoptados para la aproximación empírica a los casos, este trabajo se sitúa en la órbita de los estudios comparados de *N* intermedia. En particular, empleamos una estrategia cuantitativa de análisis estadístico de los datos recopilados, basada en la aplicación de los denominados modelos de duración. Los resultados extraídos de tal manera serán complementados mediante la ilustración histórica de los casos, en cuanto que herramienta cualitativa útil para el examen de los mecanismos y microfundamentos subyacentes a las dinámicas generales observadas mediante el estudio estadístico de la realidad latinoamericana.

---

<sup>245</sup> En el caso de los grupos insurgentes sobre los que no se han encontrado datos referidos al volumen de su membresía y de los que nos consta una escasa capacidad operativa – registran pocos incidentes violentos en la GTD –, hemos asumido el valor ‘1’ para esta variable, es decir, menos de 100 combatientes.

Para finalizar este capítulo consagrado al diseño metodológico, y como paso previo al análisis empírico de los datos, ofrecemos una breve recapitulación del camino recorrido hasta el momento por este trabajo de investigación. Presentamos, para ello, un cuadro-resumen (Tabla 3.1) en el que figuran las hipótesis teóricas que serán comprobadas a través del estudio empírico llevado a cabo en el próximo capítulo. En dicha tabla mostramos también, de manera sistemática, los niveles analíticos observados, las variables independientes incluidas en los análisis, los procedimientos adoptados para su operacionalización y las principales fuentes de información utilizadas en tal proceso. Disponiendo así de los instrumentos teóricos y metodológicos expuestos en el transcurso de las páginas precedentes, daremos paso al último bloque de esta tesis doctoral. En él expondremos los resultados obtenidos en los análisis empíricos, así como las principales conclusiones que se derivan de nuestra investigación.

			Variable	Hipótesis	Operacionalización	Fuente
Niveles de análisis	Macro: País	HIPÓTESIS PRINCIPALES	Régimen político	<p><i>H1a:</i> Incrementos en los niveles de democracia favorecen la desmovilización de los grupos insurgentes a través de la apertura de oportunidades y canales de participación no violenta para la promoción de sus objetivos políticos.</p> <p><i>H1b:</i> Los efectos positivos de la democratización para el desarme operan, fundamentalmente, tras la consolidación democrática. Durante los periodos de transición disminuyen, por tanto, las probabilidades de abandono de la lucha armada.</p> <p><i>H1c:</i> El ejercicio de la represión estatal por parte del régimen político imperante disminuye las probabilidades de desarme de la insurgencia, retroalimentando la lucha armada. Por tanto, los efectos positivos para la paz de la democratización y consolidación democrática se inhibirán, en gran medida, en contextos de represión estatal severa.</p>	<p>Índice de democracia Vanhanen Índice de democracia SIP Índice de inclusividad</p> <p>Periodos de transición Democracias postransición</p> <p>Índice de represión estatal (Political Terror Scale)</p>	<p>Vanhanen (2002) Gates et al. (2006b) Keefer et al. (2012)</p> <p>Elaboración propia a partir de Cheibub et al. (2010a; 2010b)</p> <p>Gibney, Cornett y Wood (2010)</p>
			Capacidad estatal	<i>H2:</i> La fortaleza del Estado contribuye a obstaculizar las actividades subversivas, por lo que una mayor capacidad estatal incrementará las probabilidades de abandono de la violencia por parte de las organizaciones insurgentes.	<p>PIB <i>per cápita</i> Población Porcentaje de terreno montañoso</p>	<p>Maddison (2010) Maddison (2010) Fearon y Laitin (2003b)</p>
			Agravios socioeconómicos	<i>H3:</i> Las mejoras en los indicadores de agravios socioeconómicos y desigualdad social irán acompañadas de un incremento en las probabilidades de desarme de los grupos insurgentes.	Porcentaje de alfabetización	Banks y Wilson (2010)
			Contexto internacional	<i>H4:</i> El contexto internacional incide en el desarrollo de los conflictos internos. En particular, la finalización de la Guerra Fría fue favorable a la desmovilización de la insurgencia, aumentando las probabilidades de pacificación de los enfrentamientos violentos.	Guerra Fría	Elaboración propia
	Micro: Grupo insurgente	HIPÓTESIS ALTERNATIVAS	Recursos y fortaleza de las organizaciones insurgentes	<i>H5:</i> Las características internas de las organizaciones armadas afectan también a sus tasas de supervivencia. Así, una mayor capacidad y fortaleza de la insurgencia irá asociada a un descenso en las probabilidades de desmovilización y a una duración más prolongada.	Tamaño de la organización	Jones y Libicki (2008) (entre otros)

**Tabla 3.1.** Cuadro resumen de las hipótesis y variables independientes de la investigación  
Elaboración propia

## CAPÍTULO IV

---

### **SUPERVIVENCIA Y DESACTIVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INSURGENTES LATINOAMERICANAS: ANÁLISIS EMPÍRICO**

Los capítulos previos han tratado de encajar, en su transcurso, las piezas que configuran el armazón de este trabajo de investigación doctoral. El recorrido realizado hasta el momento nos sitúa en la senda analítica de la violencia política insurgente, orientando nuestras pesquisas hacia la indagación de las causas del cese de la actividad armada desarrollada por las organizaciones rebeldes latinoamericanas entre 1970 y 2000. Este último bloque de la investigación estará consagrado, en particular, a la comprobación empírica de las hipótesis de trabajo propuestas. Los epígrafes que lo componen irán mostrando, por tanto, los resultados obtenidos a través de la aproximación a los casos. Comenzaremos, para ello, con un breve estudio preliminar de carácter descriptivo sobre la supervivencia de los grupos armados en América Latina. A continuación, y una vez establecidas las pautas generales de duración de tales actores colectivos, procederemos al análisis de las variables, mecanismos y microfundamentos que explican el final de la lucha armada, examinando la estructura de oportunidades, restricciones e incentivos a la actividad insurgente. En primer término, atenderemos a una serie de factores de carácter sistémico y contextual, entre los que se encuentran el régimen político, la capacidad estatal, los agravios socioeconómicos y el marco internacional en que se desarrollan los enfrentamientos. Asimismo, y como complemento a dicha perspectiva, este trabajo incorpora una mirada hacia los factores de carácter micro-sociológico, aludiendo a la relevancia de la fortaleza y recursos a disposición de los actores rebeldes. A modo de conclusión, realizaremos un balance de los hallazgos empíricos alcanzados, ofreciendo una visión panorámica de los principales motivos de supervivencia y desmovilización de las organizaciones insurgentes latinoamericanas.

#### 4.1. ¿CUÁNTO DURA EL CAMINO DE LA LUCHA ARMADA?

La estimación de la función de supervivencia del fenómeno estudiado es generalmente uno de los primeros pasos dados a la hora de abordar un análisis estadístico de duración. En el capítulo metodológico de este trabajo de investigación definíamos la función de supervivencia, cuya expresión formal es  $S(t) = \Pr(T > t)$ , como la probabilidad de que el evento analizado – la finalización del grupo insurgente – no haya tenido lugar antes del tiempo  $t$ , es decir, que la unidad de análisis haya sido capaz de sobrevivir hasta un momento dado en el estado de origen – en este caso, en el ejercicio de la actividad armada –. El cálculo de esta función nos permitirá obtener una fotografía de conjunto en la que queden reflejadas, de manera descriptiva, las pautas de supervivencia de los grupos rebeldes presentes en nuestra muestra. Dicha estimación no incorpora el impacto de las variables independientes sobre la trayectoria de las organizaciones armadas. Esta tarea será abordada más adelante. Por el momento, se trata más bien de observar el comportamiento general de nuestras unidades de análisis.

Para ello recurriremos al método descriptivo no paramétrico de estimación de la función de supervivencia formulado por Edward L. Kaplan y Paul Meier (1958), llamado también estimador de producto-límite (*product-limit estimator*) (Blossfeld y Rohwer, 2002: 71-76; Bernardi, 2006: 55-56; Jenkins, 2008; Golder, 2013). Este procedimiento parte de la identificación de todos aquellos puntos del eje temporal en que se produce al menos un acontecimiento, es decir, en que finaliza alguno de los episodios de actividad armada analizados<sup>246</sup>. Así, para cada uno de esos puntos de tiempo  $t_k$ , el método de Kaplan-Meier calculará: el número de eventos – desarmes – producidos en dicho momento ( $E_k$ ); el número de episodios censurados a la derecha ( $Z_k$ ) en el intervalo  $[t_{k-1}, t_k)$ ; y el número de sujetos en riesgo de experimentar el evento ( $R_k$ ) en el punto  $t_k$ . El cómputo de las unidades en riesgo estará asociado al cálculo de  $Z_k$ , correspondiente a aquellos sujetos cuya trayectoria resulta inconclusa en el transcurso del estudio, saliendo del diseño de observación debido a motivos distintos al registro del evento investigado<sup>247</sup>. De este modo, en caso de existir censuras,  $R_k$  será igual al número

---

<sup>246</sup> El cálculo de la función de supervivencia mediante el estimador de Kaplan-Meier asume, por tanto, continuidad en la variable temporal. Otro método de estimación de dicha función es el de las denominadas tablas de vida que, sin embargo, agrupa la duración de los episodios en intervalos discretos de tiempo (Blossfeld y Rohwer, 2002: 71-72; Jenkins, 2008).

<sup>247</sup> Ejemplos de tal circunstancia serían aquellos individuos que, en un estudio panel, dejan de participar en las oleadas realizadas a partir de un momento dado, con la consiguiente imposibilidad de seguir

de supervivientes justo antes del momento  $t_k$  menos el número de casos censurados  $Z_k$ . Una de las principales características del estimador de producto-límite será, por lo tanto, su capacidad para tomar en consideración la posible existencia de información incompleta asociada a la presencia de episodios censurados a la derecha en el conjunto de datos.

Tras el cálculo de las magnitudes previamente expuestas, estaremos ya en disposición de estimar la función de supervivencia de acuerdo con el método de Kaplan-Meier, cuya formulación matemática es la siguiente:

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_k < t} \left( \frac{R_k - E_k}{R_k} \right)$$

donde  $\frac{R_k - E_k}{R_k}$ , también expresado como  $1 - \frac{E_k}{R_k}$ , alude a la probabilidad de que el evento no suceda en el tiempo  $t_k$  (Bernardi, 2006: 56).

La aplicación del estimador de Kaplan-Meier a nuestra base de datos nos permite aproximarnos a la duración de las organizaciones insurgentes operativas en América Latina a lo largo del periodo comprendido entre los años 1970 y 2000. El Gráfico 4.1 ofrece una representación de la función de supervivencia para los grupos armados objeto de investigación<sup>248</sup>. En él podemos contemplar la evolución de la probabilidad de supervivencia de los episodios de lucha armada (eje Y) a medida que transcurre el tiempo contabilizado en años (eje X). La curva presenta una forma escalonada decreciente, mostrando cómo la probabilidad de que las organizaciones armadas sobrevivan, manteniendo su actividad insurgente, disminuye de manera progresiva con el paso del tiempo. Así, mientras observamos cómo cerca de la mitad de los grupos rebeldes permanecen activos en el curso de la primera década, la proporción de supervivientes disminuye de manera acusada a lo largo de los siguientes lustros, siendo muy escasos quienes consiguen superar los tres decenios<sup>249</sup>.

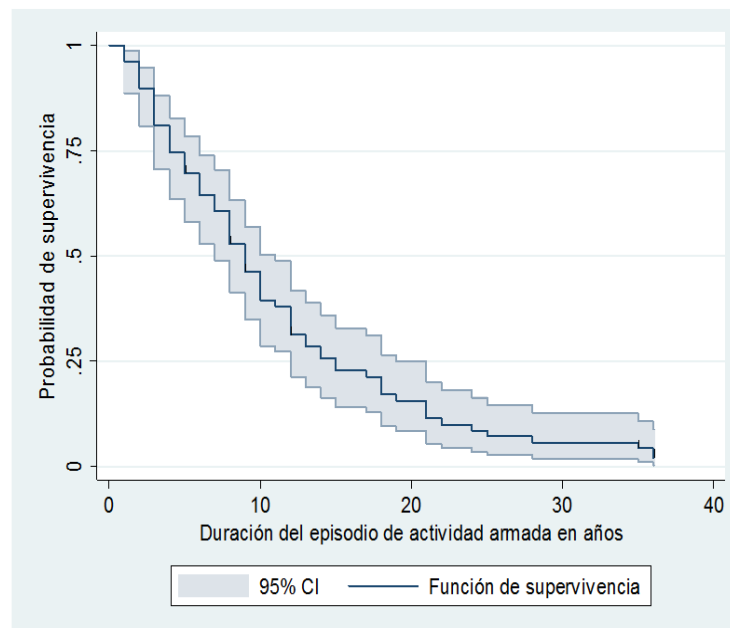
---

recopilando información sobre su itinerario, o los episodios que aún no han experimentado el acontecimiento en el momento de finalización del periodo de observación.

<sup>248</sup> En el Anexo A Gráfico A1 mostramos también una ilustración de esta función obtenida a través del ya mencionado método de las tablas de vida. La forma de la curva resultante es, según puede comprobarse, prácticamente idéntica a la alcanzada mediante el estimador de Kaplan-Meier.

<sup>249</sup> Otros estudios sobre duración de grupos armados presentan funciones de supervivencia con características muy diferentes a las que aquí se exponen. Tales divergencias se asocian a las

**Gráfico 4.1.** Representación gráfica de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Estimador de Kaplan-Meier



Pese a la capacidad ilustrativa de esta representación gráfica, tal vez nos resulte útil en términos interpretativos observar los valores estimados de la función de supervivencia. La Tabla 4.1 recoge la salida de *Stata* con el listado de datos que configuran dicha función, así como información adicional que nos permitirá profundizar en la discusión de los resultados obtenidos. La primera columna (*'Time'*) muestra todos aquellos puntos del eje temporal en que se produce al menos un acontecimiento. A través de ella puede constatar la enorme variabilidad existente en la longevidad de los grupos insurgentes objeto de análisis. Así, junto a organizaciones con menos de 5 años de actividad armada (v.g. VPR, FAL-ZW, M-20, MIRA), encontramos otras que superan incluso los 25 (v.g. FAR, FARC, ELN). De hecho, la duración mínima registrada es de tan sólo un año – o incluso unos meses dentro del mismo año –, mientras que la máxima asciende a 36.

---

peculiaridades de nuestra muestra – grupos insurgentes latinoamericanos entre 1970 y 2000 –, así como a los criterios de selección de las unidades de observación descritos en el capítulo previo. De acuerdo, por ejemplo, con los resultados obtenidos por Young y Dugan (2010), tan sólo un 25% de los grupos – terroristas, según su definición – sobrevive al primer año de vida, limitándose a un 11% pasados cinco años. Sin embargo, como apuntan los propios autores, tales hallazgos tienen que ver en gran medida con la inclusión de organizaciones que realizan tan sólo un atentado. Así, un 60% de los grupos de su muestra perpetrar un único ataque. Desde la perspectiva de nuestro estudio, la consideración de ese tipo de actores violentos, grupúsculos o “lobos solitarios” sin vocación o capacidad de continuidad, puede introducir importantes sesgos a la hora de analizar la violencia colectiva organizada contra el Estado, objeto de interés de esta investigación.



Esta heterogeneidad esconde, no obstante, algunas tendencias que merece la pena señalar. Para ello, atenderemos a los datos presentados en las siguientes columnas de la tabla. Bajo el epígrafe '*Beg. Total*' se detallan las unidades de observación en riesgo de sufrir un acontecimiento –  $R_k$  según la fórmula previamente expuesta –, es decir, los grupos armados aún operativos en cada una de las unidades de tiempo. Comprobamos así cómo al inicio del intervalo el número de organizaciones en riesgo de experimentar un desarme es 79, es decir, la totalidad de grupos incluidos en nuestra muestra. Tal magnitud irá descendiendo a medida que finalicen los grupos observados ( $E_k$ ), o se produzcan pérdidas de información debido a la presencia de censuras a la derecha ( $Z_k$ ). La incidencia de ambos procesos aparecerá en los dos registros inmediatamente posteriores. Así, el número concreto de eventos producidos en cada año se incluye en la columna '*Fail*'. En ella podemos observar cómo el primer decenio concentra un volumen considerable de desarmes. A partir de entonces, y durante las dos décadas posteriores, irán finalizando de manera gradual el resto de organizaciones insurgentes. Por su parte, el rótulo '*Net Lost*' alude a la presencia de episodios censurados en el estudio – representados, por cierto, también en el Gráfico 4.1 mediante pequeñas muescas en la curva de supervivencia –. Observamos un total de 6 censuras, correspondientes a aquellos grupos que no se habían desmovilizado aún en el año 2000, momento de cierre de nuestra ventana de observación. Es el caso de organizaciones como la facción “Proseguir” de Sendero Luminoso en Perú<sup>250</sup>, el EPR mexicano, o las FARC y el ELN de Colombia.

---

<sup>250</sup> Como veremos más adelante, tras la captura en 1992 del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán alias “Presidente Gonzalo”, la organización quedó prácticamente desarticulada. Sin embargo, una pequeña facción de la misma, autodenominada “Proseguir – la guerra popular –”, continuó realizando operaciones armadas. En 1999 el grupo sufre el arresto de su principal dirigente, conocido como Camarada Feliciano. A partir de entonces la organización sería comandada por Víctor Quispe Palomino, el Camarada José.

**Tabla 4.1.** Valores de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Estimador de Kaplan-Meier<sup>251</sup>

Failue\_d: Abandono  
Analysis time\_t: Tiempo  
Id: Grupo

Time	Beg. Total	Fail	Net Lost	Survivor Function	Std. Error	[95% Conf. Int.]	
1	79	3	0	0,9620	0,0215	0,8869	0,9876
2	76	5	0	0,8987	0,0339	0,8077	0,9480
3	71	7	0	0,8101	0,0441	0,7050	0,8809
4	64	5	0	0,7468	0,0489	0,6356	0,8286
5	59	4	1	0,6962	0,0517	0,5819	0,7849
6	54	4	0	0,6446	0,0540	0,5284	0,7392
7	50	3	0	0,6060	0,0551	0,4891	0,7041
8	47	6	1	0,5286	0,0564	0,4126	0,6318
9	40	5	1	0,4625	0,0566	0,3491	0,5684
10	34	5	0	0,3945	0,0558	0,2855	0,5015
11	29	1	0	0,3809	0,0556	0,2731	0,4878
12	28	5	1	0,3129	0,0533	0,2125	0,4183
13	22	2	0	0,2844	0,0521	0,1877	0,3887
14	20	2	0	0,2560	0,0506	0,1635	0,3587
15	18	2	0	0,2276	0,0488	0,1399	0,3282
17	16	1	0	0,2133	0,0478	0,1283	0,3127
18	15	3	0	0,1707	0,0441	0,0949	0,2652
19	12	1	0	0,1564	0,0427	0,0842	0,2490
21	11	3	0	0,1138	0,0375	0,0536	0,1989
22	8	1	0	0,0996	0,0354	0,0441	0,1817
24	7	1	0	0,0853	0,0331	0,0350	0,1641
25	6	1	0	0,0711	0,0305	0,0265	0,1460
28	5	1	0	0,0569	0,0275	0,0185	0,1275
35	4	1	1	0,0427	0,0240	0,0114	0,1083
36	2	1	1	0,0213	0,0193	0,0022	0,0882

Las últimas columnas de la tabla presentan los datos calculados para la función de supervivencia, el error estándar de la estimación y los intervalos de confianza. Prestaremos atención, en particular, a la información referida a la primera de dichas cuestiones, presentada en el apartado encabezado como ‘*Survivor Function*’. Aquí se contemplan los resultados obtenidos tras la aplicación de la fórmula de Kaplan-Meier en el cómputo de las probabilidades de supervivencia de las unidades de análisis. Éstas disminuyen, como era de esperar, con el transcurso del tiempo, siendo ya muy escasas durante los últimos lustros. De acuerdo con los resultados obtenidos, el 25% de los grupos insurgentes de nuestra muestra finaliza durante los 4 primeros años, abandonando a lo largo de tal periodo la estrategia de la “vía armada”. Asimismo, en

<sup>251</sup> En el Anexo A Tabla A5 se muestran los datos de la tabla de vida calculada para los grupos insurgentes latinoamericanos. Como puede constatar, arrojan resultados muy similares a los que aquí se presentan, si bien expresados en intervalos temporales.

torno a la mitad de las organizaciones analizadas se habían desarmado en el transcurso de 9 años, donde  $\hat{S} = 0,4625$ . Es en este punto, por lo tanto, y como ya habíamos mencionado en el capítulo previo, donde se sitúa la duración mediana de nuestras unidades de observación. Finalmente, las probabilidades de mantener la actividad insurgente más allá de dos décadas serán muy escasas. Así, a partir de  $t = 22$  menos de un 10% de las organizaciones permanecen operativas.

Para terminar, y complementando lo hasta ahora expuesto, echaremos un primer vistazo al riesgo de finalización de los grupos armados de nuestra muestra, aunque sin modelarlo aún mediante la consideración del efecto de las variables explicativas. Dicha aproximación descriptiva recurrirá, en primer término, a la función de riesgo acumulado o integrado:

$$H(t) \equiv \Lambda(t) = \int_0^t h(t)dt = -\ln[S(t)]$$

Como su nombre indica, esta función expresa la cantidad total de riesgo que se ha acumulado hasta el tiempo  $t$ , y es resultado de la integración de la función de riesgo  $h(t)$  planteada en el anterior capítulo metodológico. Para el cómputo de tal magnitud recurriremos al estimador de Nelson-Aalen <sup>252</sup>, cuya expresión formal es:

$$\hat{H}(t) = \sum_{t_k \leq t} \frac{E_k}{R_k}$$

donde, según apuntamos previamente,  $E_k$  se corresponde con el número de eventos producidos en el instante  $t_k$ , y  $R_k$  con las unidades en riesgo de experimentar el acontecimiento en dicho punto del tiempo. El Gráfico 4.2a muestra la representación de la función de riesgo acumulado para nuestras unidades de análisis. Como apunta Golder (2013), la interpretación de  $H(t)$  puede resultar complicada y poco intuitiva. Sin embargo, de acuerdo con el autor, podría entenderse como el número de eventos esperados – matemáticamente – en el intervalo temporal  $(0, t)$  para un sujeto dado, si el

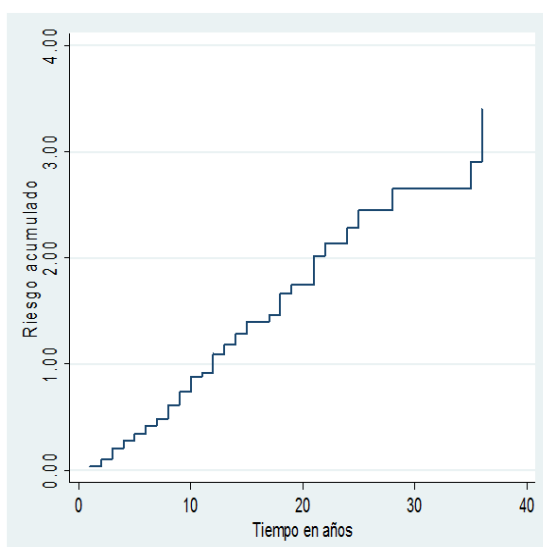
---

<sup>252</sup> Golder (2013) señala cómo, según las fórmulas expuestas, la función de riesgo acumulado podría ser calculada a partir de la estimación de Kaplan-Meier para la función de supervivencia. No obstante, de acuerdo con el autor, el estimador de Nelson-Aalen resulta más adecuado para muestras pequeñas, como es el caso del presente estudio.

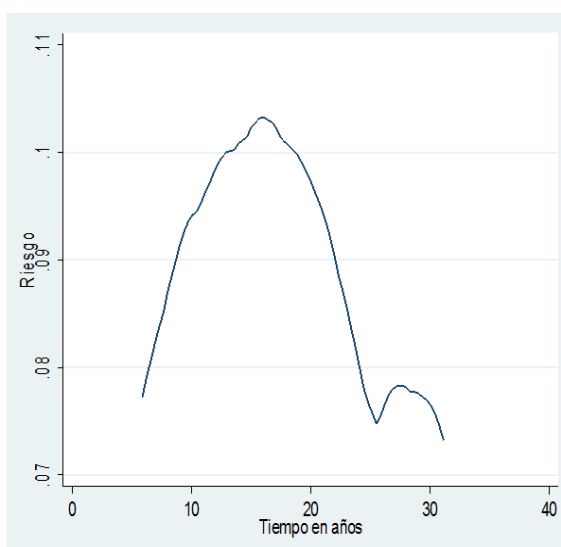
acontecimiento fuera un proceso repetible<sup>253</sup>. En este caso, la función ilustra el riesgo de desmovilización de las organizaciones insurgentes latinoamericanas. Observando la gráfica, cabría esperar que un grupo insurgente finalizara dos veces en un periodo aproximado de 20 años, “acumulando” tres desarmes después de alcanzados los 35 años de actividad insurgente<sup>254</sup>. Como puede constatarse, el ritmo de crecimiento del riesgo de desmovilización no es uniforme a lo largo de todo el periodo, sino que tiende a disminuir en la segunda mitad del intervalo observado.

**Gráfico 4.2.** El riesgo de finalización de los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000)

*Gráfico 4.2a. Función de riesgo acumulado  
Estimador de Nelson-Aalen*



*Gráfico 4.2b. Función de riesgo suavizada  
Estimación basada en el método kernel*



Sin embargo, la no replicabilidad del evento objeto de análisis – cuando un grupo finaliza una vez, no lo hará una segunda, puesto que nuestros datos sólo registran desmovilizaciones permanentes –, puede restar claridad explicativa a la función de riesgo acumulado. Por ello, conviene recurrir también a la propia función de riesgo para dar cuenta de la realidad estudiada. Como exponíamos en páginas previas,  $h(t)$  alude, planteado de manera sencilla, a la probabilidad de que ocurra el evento analizado en el momento  $t$ , condicionada a que dicho evento no haya sucedido con anterioridad a tal punto del tiempo, es decir, teniendo en cuenta que la unidad de análisis haya

<sup>253</sup> Cleves et al. (2008: 13-14) recurren a un ejemplo ficticio, pero ilustrativo, para abordar la interpretación del riesgo acumulado. Así, según explican,  $H(t)$  equivaldría al registro de vidas perdidas por el personaje de un videojuego que, cada vez que muere, resucita de manera instantánea para continuar su peligroso camino. De acuerdo con los autores, esta aproximación a la función de riesgo acumulado se denomina interpretación de datos de recuento (*count-data interpretation*).

<sup>254</sup> El Anexo A Tabla A6 incluye el listado de valores de la función de riesgo acumulado calculados según el método de Nelson-Aalen.

sobrevivido hasta entonces. Si bien el cálculo de  $h(t)$  podría parecer una tarea sencilla, consistente en la mera estimación de la derivada de  $H(t)$ , lo cierto es que su cómputo se complica debido a que la función de riesgo acumulado es una función escalonada y no puede, por tanto, derivarse de manera directa. Por este motivo, su estimación requiere ir tomando escalones de la función de riesgo acumulado y suavizarlos basándonos en el método kernel. De acuerdo con este procedimiento, el valor suavizado en un punto será resultado del cálculo de una media ponderada de los valores circundantes a tal punto (Cleves et al., 2008: 113 y ss.; Jenkins, 2008; Golder, 2013)<sup>255</sup>.

En el Gráfico 4.2b se muestra la función de riesgo suavizada para los grupos insurgentes operativos en América Latina. De acuerdo con la forma de la curva estimada, la probabilidad de finalización – condicionada a haber sobrevivido hasta el momento  $t$  – de las organizaciones armadas incluidas en nuestra muestra aumenta de manera progresiva a lo largo de aproximadamente las dos primeras décadas de actividad. Sin embargo, resulta interesante constatar cómo el riesgo de experimentar el acontecimiento del desarme comienza a decrecer en torno a los 20 años de vida de la organización. Este resultado se encuentra posiblemente asociado a las características de los grupos que alcanzan dicha longevidad, así como de los contextos sociopolíticos en que desarrollan su actividad violenta. En una primera interpretación de estos resultados, podríamos aventurar que el descenso experimentado por la función de riesgo tiene que ver con el hecho de que tan sólo las organizaciones de un cierto tamaño, fortaleza y capacidad operativa, activas en escenarios específicos sometidos a un considerable nivel de conflicto, superan las dos décadas de duración. Con tales características se generan dinámicas favorables a la perpetuación de la lucha armada que disminuyen las probabilidades de desmovilización de la insurgencia. En todo caso, dichas cuestiones, entre otras, serán analizadas en profundidad en los próximos apartados de este capítulo.

---

<sup>255</sup> Como advierte Jenkins (2008), la anchura de los arcos de datos empleados para el cálculo de la función suavizada afectará a la forma de la curva, al determinar qué valores se toman en consideración para la estimación de la media en cada punto. Cuanto más amplio sea el rango (*bandwidth*) considerado, mayor será el suavizado de la gráfica. En el caso que nos ocupa, mostramos la función suavizada resultante de la determinación de la anchura de rango que *Stata* realiza por defecto.

## **4.2. MODELOS Y EVIDENCIA EMPÍRICA: OPORTUNIDADES, RESTRICCIONES E INCENTIVOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARMADA EN AMÉRICA LATINA**

Una vez descritos los patrones generales de supervivencia de los grupos insurgentes latinoamericanos, afrontaremos el estudio empírico de las causas explicativas de su duración y desarme. Como hemos señalado en páginas previas, son muchos los finales posibles para las organizaciones rebeldes y muy heterogéneos los procesos de abandono de la lucha armada (v.g. Ryan, 1994: 28; Jones y Libicki, 2008: 101; Cronin, 2009; Carter, 2012). Por ello, este capítulo rastrea las principales vías de salida de la violencia insurgente en América Latina, tratando de recomponer las trayectorias de desmovilización seguidas por las organizaciones operativas en el subcontinente. Con este propósito, atenderemos a las condiciones del contexto sociopolítico en que se desenvuelve la contienda, así como a los rasgos de los actores colectivos contendientes, para buscar en ellos las claves de la suerte que corrieron las organizaciones armadas. Mediante la exploración de evidencia empírica de carácter cuantitativo y la ilustración histórica cualitativa de los procesos analizados, el presente apartado irá contrastando una por una las hipótesis anteriormente planteadas.

Comenzaremos nuestra andadura de aproximación a los casos sometiendo a examen las relaciones trabadas entre régimen político y violencia colectiva, situadas en el eje central de nuestra reflexión teórica. Abordaremos, igualmente, el estudio empírico de potenciales explicaciones alternativas a la duración y llegada a término de los desafíos violentos desarrollados en la región. Así, cuestiones como la fortaleza del Estado, los agravios socioeconómicos o el papel del escenario internacional de la Guerra Fría, estarán presentes a lo largo de las siguientes páginas. Mediante la exploración de todas estas variables independientes observaremos los incentivos y desincentivos a la actividad insurreccional derivados del entorno específico en que tienen lugar los enfrentamientos violentos. Finalmente, atenderemos al impacto de la fortaleza insurgente sobre la supervivencia de la lucha armada. En definitiva, y de acuerdo con el enfoque de acción colectiva propuesto, se trata de contemplar los efectos de la estructura de oportunidades y restricciones políticas, así como de los marcos cognitivos y recursos a disposición de los rebeldes, sobre los planteamientos estratégicos de las organizaciones armadas.

#### **4.2.1. El régimen político y la supervivencia de las organizaciones insurgentes latinoamericanas**

Emprendemos nuestro análisis empírico sobre la incidencia de la actividad insurgente y su relación con el escenario sociopolítico en que se enmarca haciendo referencia a los efectos derivados del tipo de régimen establecido. Esta variable puede considerarse uno de los principales elementos constitutivos de la estructura de oportunidades políticas, ayudándonos a calibrar el grado de apertura o cierre del sistema que alberga a las organizaciones armadas. Para el estudio de la contienda política en América Latina, situaremos el foco en los vínculos que se establecen entre democracia, violencia y pacificación a lo largo de un periodo de grandes transformaciones políticas, consecuencia de los procesos de democratización experimentados por los países del subcontinente. Asimismo, el ejercicio de la violencia desde los Estados mediante prácticas de contrainsurgencia se situará en el centro de nuestras indagaciones, en las que atenderemos al impacto de la represión estatal sobre la supervivencia de los movimientos de insurgencia latinoamericanos. El descubrimiento de las múltiples interacciones existentes entre las diversas dimensiones expuestas nos irá acercando, en el transcurso de este apartado, a las causas de la desmovilización de los grupos armados operativos en la región.

##### *4.2.1.1. Democracia, democratización y paz en América Latina*

Donde un Gobierno haya subido al poder por alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos una apariencia de legalidad constitucional, el brote guerrillero es imposible de producir por no haberse agotado las posibilidades de la lucha cívica.

Ernesto Che Guevara (1977: 12)

La década de 1980 trajo consigo profundos cambios políticos para América Latina. Como vimos en el capítulo previo, a lo largo de este periodo numerosos países de la región fueron dejando atrás las dictaduras que asolaron al subcontinente en los años sesenta y setenta. El nuevo escenario transformador de la tercera ola democratizadora alteró de manera fundamental el panorama político latinoamericano. Las transiciones acaecidas durante aquellos años instalaron gobiernos civiles electos al frente de prácticamente todos los Estados de la región. Así, a las democracias – de calidad cuestionada y dispar – presentes a mediados de la década de los setenta en Costa Rica, Venezuela, Colombia o República Dominicana, se fueron uniendo aquéllas

resultantes del nuevo impulso democratizador (Smith, 2009: 33-54). Países como Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, El Salvador o Chile iban expandiendo de manera paulatina los límites geográficos del dominio democrático. De este modo, y tras la llegada de la tardía transición mexicana<sup>256</sup>, en los umbrales del siglo XXI Cuba era ya el último reducto regional en que podía encontrarse un gobierno no elegido mediante las urnas. La democracia liberal representativa se convertía entonces, como nunca antes lo había sido, en el régimen político dominante en los extensos territorios de América Latina.

Las coordenadas de nuestro marco geográfico y temporal nos sitúan, por tanto, frente a un escenario cambiante en el que puede registrarse la presencia de regímenes políticos de muy diverso tipo. La primera de las cuestiones a las que trataremos de dar una respuesta empírica alude, precisamente, al impacto de la forma de gobierno imperante en un país dado sobre la supervivencia de las organizaciones insurgentes que operan en su interior. La Tabla 4.2 presenta los resultados de nuestros modelos estadísticos de partida. En ellos hemos incluido, junto a una serie de controles de capacidad estatal a los que nos referiremos más adelante, distintas aproximaciones al concepto de democracia que nos permitirán testar la robustez de los hallazgos<sup>257 258</sup>. En particular, hemos observado el comportamiento de los indicadores del nivel democrático propuestos por la *Poliarchy Dataset* (Vanhanen, 2000; 2002) y el *Scalar Index of Politics* (SIP) (Gates et al., 2006a; 2006b), así como la medición de la inclusividad del sistema político planteada por Keefer et al. (2001; 2012). Las características e información incompleta de tales indicadores serán quienes expliquen

---

<sup>256</sup> No será hasta las elecciones federales del año 2000 cuando se considere efectivo el proceso gradual de apertura y democratización en México. Estos comicios resultaron en una victoria electoral del Partido Acción Nacional (PAN) y el nombramiento como presidente de la República de Vicente Fox Quesada. Esta “transición votada”, como la denominó Rogelio Ortega (2001) en su tesis doctoral, dirigida por Secundino González, o Mauricio Merino (2003) en su trabajo sobre el cambio político en México, puso fin mediante la alternancia al sistema de partido hegemónico que mantuvo en el poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante setenta años.

<sup>257</sup> En el Anexo A Tabla A7 presentamos los coeficientes de correlación (calculados mediante el método *pairwise*) existentes entre todas las variables independientes consideradas. Como puede constatar, los indicadores introducidos en cada uno de los modelos mantienen entre sí correlaciones inferiores a |0,5|. Tal será el criterio general adoptado en este trabajo de investigación, con el propósito de evitar posibles problemas de multicolinealidad. En aquellos casos concretos en que la correlación entre variables independientes presente algún tipo problema o particularidad, realizaremos los comentarios y aclaraciones pertinentes.

<sup>258</sup> Como se indica en la base de la tabla, y según explicamos en el capítulo anterior, todos los modelos han sido además estimados con errores típicos robustos.



las diferencias observadas en el tamaño de la muestra ( $N$ ). Los *Modelos 1a y 1b* incluyen 803 observaciones, es decir, la totalidad de casos registrados en nuestra base. Sin embargo, los modelos *1c, 1d, 1e y 1f* presentan una  $N$  menor (751 casos en los dos primeros y 700 en los siguientes). Esto es debido, por un lado, a la existencia de valores perdidos para estas variables en las bases originales y, por otro, a las limitaciones del periodo de observación incluido en el conjunto de datos de Keefer et al., que se inicia como ya indicamos en 1975. Finalmente, y también con el propósito de llevar a cabo análisis más robustos, cabe recordar que cada modelo ha sido estimado bajo la asunción de tiempo continuo –mediante un modelo Cox de riesgos proporcionales– y de tiempo discreto –mediante una regresión logística (*logit*) –<sup>259</sup>.

Esta tabla, así como las que iremos mostrando a lo largo de todo el capítulo, incluye también en su sección inferior dos mediciones adicionales que nos ayudarán a determinar la bondad del ajuste de nuestros modelos. En primer lugar, puede observarse el *Bayesian Information Criterion* (BIC), frecuentemente empleado como herramienta de comparación tras la realización de las estimaciones (Long y Freese, 2001: 86-87; Escobar et al., 2009: 393-394). Esta medida de información se interpreta teniendo en cuenta que valores más bajos del estadístico indican un nivel superior de ajuste, sirviendo por tanto como criterio para optar por el mejor entre los diferentes modelos calculados. Junto al BIC, se indica también el *Log-likelihood* de cada modelo. Como señalan Escobar et al. (2009: 389-390), la verosimilitud del modelo completo o *restricted* ( $\hat{L}_F$ ) es una medida de la probabilidad de que los datos observados hayan sido generados por el modelo en que se han considerado las variables independientes, frente al modelo *unrestricted* ( $\hat{L}_0$ ) en que se incluye tan sólo la constante o intercepto<sup>260</sup>. Cuanto mayor sea el *Log-likelihood* –teniendo en cuenta que son magnitudes negativas –, mayor será también la bondad del ajuste. Tanto el BIC como el logaritmo de la

---

<sup>259</sup> Para más detalles sobre las variables independientes, la estimación de los modelos y sus características o la introducción de controles temporales, remitimos al Capítulo III, consagrado al diseño metodológico del estudio.

<sup>260</sup> El denominado *likelihood ratio test* (o LR test) es una prueba de hipótesis que indica si la diferencia entre ambas medidas de verosimilitud resulta estadísticamente significativa (Long y Freese, 2001: 79-80; Escobar et al., 2009: 390). La formulación matemática de dicho test puede expresarse del siguiente modo:  $LR = 2\ln\hat{L}_F - 2\ln\hat{L}_0$ . Por ejemplo, en los modelos logísticos aquí calculados (*1b, 1d y 1f*), podría aceptarse la hipótesis alternativa de que al menos alguno de los coeficientes es significativamente distinto de 0, pues la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula, para 7 grados de libertad, es de 0,008; 0,046 y 0,021 respectivamente. Todos los modelos que se presentarán en esta tesis doctoral resultan estadísticamente significativos a nivel global, es decir, todos ellos añaden algún tipo de información significativa respecto del modelo que incorpora únicamente la constante.

verosimilitud nos serán de utilidad no sólo en el análisis de estas primeras estimaciones, sino, fundamentalmente, a la hora de comparar los sucesivos modelos aditivos que iremos exponiendo en el transcurso de los siguientes epígrafes.

**Tabla 4.2.** Estimaciones Cox y *logit* para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. *Modelo 1: El efecto de la democracia*

	Cox		Logit		Cox		Logit		Cox		Logit	
	Modelo 1a	Modelo 1b	Modelo 1c	Modelo 1d	Modelo 1e	Modelo 1f	Modelo 1e	Modelo 1f	Modelo 1e	Modelo 1f	Modelo 1e	Modelo 1f
PIB <i>per cápita</i>	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0001 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)
Población	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9831*** (0,0055)	0,9816*** (0,0061)	0,9823*** (0,0062)	0,9808*** (0,0069)	0,9860*** (0,0053)	0,9837*** (0,0059)	0,9860*** (0,0053)	0,9837*** (0,0059)	0,9860*** (0,0053)	0,9837*** (0,0059)	0,9860*** (0,0053)	0,9837*** (0,0059)
Democracia (Van)	1,0573*** (0,0182)	1,0623*** (0,0201)										
Democracia (SIP)			2,6300* (1,3837)	2,6587* (1,4901)								
Inclusividad demo					1,3196** (0,1477)	1,4443*** (0,1917)	1,3196** (0,1477)	1,4443*** (0,1917)	1,3196** (0,1477)	1,4443*** (0,1917)	1,3196** (0,1477)	1,4443*** (0,1917)
Tiempo		1,2186 (0,1640)		1,2172 (0,1632)							1,1690 (0,1599)	1,1690 (0,1599)
Tiempo <sup>2</sup>		0,9881 (0,0099)		0,9867 (0,0096)							0,9905 (0,0102)	0,9905 (0,0102)
Tiempo <sup>3</sup>		1,0002 (0,0002)		1,0002 (0,0002)							1,0002 (0,0002)	1,0002 (0,0002)
N	803	803	751	751	700	700	700	700	700	700	700	700
BIC	524,9106	523,6245	511,0217	513,1466	444,4188	468,6302	444,4188	468,6302	444,4188	468,6302	444,4188	468,6302
Log-Lik Full Model	-249,0786	-235,0588	-242,2681	-230,0877	-209,1073	-208,1108	-209,1073	-208,1108	-209,1073	-208,1108	-209,1073	-208,1108

Coefficientes exponenciados (*hazard ratios* y *odds ratios*). Errores estándar robustos (en clústeres por grupo armado) presentados entre paréntesis. \*  $p < 0,10$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*\*\*  $p < 0,01$

Los resultados obtenidos apuntan hacia la confirmación de la primera de nuestras hipótesis principales (*H1a*), frecuentemente referida en la literatura como “hipótesis de la paz democrática”. Los *proxies* utilizados para la observación del tipo de régimen vigente muestran una relación positiva – coeficientes superiores a 1 – y significativa entre la apertura democrática del sistema político y la finalización de los grupos insurgentes. Estos hallazgos resultan consistentes no sólo en las réplicas Cox y *logit* de cada estimación – como puede observarse los coeficientes son prácticamente idénticos en los diversos pares de modelos –, sino también entre los diferentes indicadores considerados. Tanto el índice de poliarquía de Vanhanen como el indicador de inclusividad democrática presentan un grado de significatividad muy elevado, a un nivel de confianza de entre el 99% ( $p < 0,01$ ) y el 95% ( $p < 0,05$ ). La variable SIP, por su parte, es significativa al 90% ( $p < 0,10$ ), apuntando también en la dirección y sentido

esperados de acuerdo con nuestra formulación de hipótesis<sup>261</sup>. De tales datos podemos colegir que los contextos políticos más democráticos aumentaron de manera significativa las probabilidades de desmovilización de los grupos insurgentes latinoamericanos o, lo que es lo mismo, disminuyeron su duración y tasas de supervivencia. En particular, y en vista de la mejora comparativa de la bondad del ajuste con la introducción de este indicador en los dos últimos modelos, cuán incluyente sea el sistema político se presenta como una dimensión destacable para el análisis de la supervivencia de las organizaciones armadas. Así, en consonancia con las conclusiones de estudios como los de Reynal-Querol (2002a; 2002b; 2005), mencionados ya en nuestro corpus teórico, los *Modelos 1e* y *1f* sugieren la relevancia de contar no sólo con sistemas políticos democráticos, sino además, con democracias inclusivas. Desde esta perspectiva, la presencia de mecanismos consociacionales de pesos y contrapesos que incorporen al mayor número de decisores posibles en la formulación de las políticas públicas se mostraría favorable a la pacificación de la contienda violenta.

No es sencillo, sin embargo, interpretar el peso específico de cada una de estas variables independientes y valorar la magnitud de su efecto sobre la dependiente. Como se indica en la base de la tabla, en sus celdas se muestran los coeficientes exponenciados o cocientes de razones: *hazard ratios* en el caso de los modelos Cox y *odds ratios* en las estimaciones *logit*. Tales magnitudes aluden al cambio en la razón de ocurrencia del evento analizado – en este caso, la desactivación de un grupo insurgente – dado el incremento de una unidad en la covariable en cuestión, manteniendo constantes el resto de variables (Long y Freese, 2001: 132-134; Escobar et al., 2009: 402-405). En este caso, la razón de finalización de las organizaciones armadas será aproximadamente 1,06 veces mayor ante el aumento de una unidad en el índice de Vanhanen, en torno a 2,6 veces en el caso del SIP, y entre 1,3 y 1,4 si consideramos la variable de inclusividad. No obstante, dada la existencia de métricas muy distintas con diferentes rangos de variación en los indicadores considerados, conviene contemplar además la magnitud del cambio en las razones derivado del aumento en una desviación típica de la variable independiente, con el propósito de estandarizar y hacer comparables los coeficientes. Dicha consideración acerca los resultados obtenidos mediante los diferentes índices de apertura democrática en los modelos *logit*, de modo que la razón de ocurrencia del

---

<sup>261</sup> Los *Modelos 1c* y *1d*, en los que se incluye este indicador, se han mostrado no obstante más frágiles en las pruebas de robustez realizadas, tal y como puede comprobarse en el Anexo A Tablas A9, A10 y A11.

desarme se verá multiplicada por 1,51; 1,34 y 1,61 respectivamente. En todo caso, teniendo en cuenta la naturaleza “convencional” de estos indicadores y lo escasamente intuitiva que puede resultar en ellos la interpretación de los cocientes de razones, lo verdaderamente relevante de tales hallazgos es, en realidad, la observación de la significatividad y sentido del impacto del régimen político sobre el fenómeno estudiado.

Las conclusiones que se derivan de esta primera aproximación empírica a los casos señalan a la democracia como un mecanismo útil para la pacificación de los enfrentamientos violentos desarrollados en América Latina. La apertura – o fortalecimiento – de canales de participación política y expresión de demandas incrementa las probabilidades de abandono de la “vía armada” por parte de las organizaciones insurgentes. En los contextos democráticos, éstas encontrarán ante sí diversas rutas de acceso e integración en el sistema, incentivando la adopción de estrategias no violentas para la búsqueda de objetivos políticos. Así, y de acuerdo con el trabajo editado por Cynthia J. Arnson (1999a) sobre los procesos de paz en la región<sup>262</sup>, existe en términos generales una relación causal positiva entre la democratización experimentada por el subcontinente a lo largo del periodo temporal observado y la resolución de los conflictos armados latinoamericanos. Según la autora, ambas dinámicas se refuerzan además mutuamente, en la medida en que la apertura democrática previa del régimen resulta fundamental para el inicio del camino hacia la paz, pero es a su vez este proceso de negociación y clausura de la contienda el que hace posible la ampliación y profundización de la democracia vigente (Arnson, 1999c: 6; 1999b: 447-448).

Esta asociación entre las posibilidades de acceso a la arena política y la renuncia al ejercicio de la actividad armada se manifestó de múltiples maneras en los distintos escenarios de conflicto localizados en América Latina. Los procesos de paz centroamericanos constituyen un buen ejemplo de tales vínculos. Así, la democratización y la integración de los grupos insurgentes dentro del sistema político fueron elementos clave en la finalización de las guerras civiles que atravesaron a los diversos países del istmo. La actividad mediadora del Grupo de Contadora, iniciada en 1983 con el propósito de promover la paz en Centroamérica, y las posteriores

---

<sup>262</sup> Esta investigación, en la que intervienen numerosos autores, analiza la finalización de grupos armados activos en Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú durante la segunda mitad del siglo XX.

declaraciones de Esquipulas firmadas con tal objetivo en 1986 y 1987 (Harto de Vera, 1991: 109-254), apuntaban precisamente en esta dirección<sup>263</sup>. Así, el segundo de los acuerdos suscritos en la mencionada ciudad guatemalteca, señalaba la reconciliación nacional – incluyendo la emisión de decretos de amnistía y el diálogo con las fuerzas opositoras –, la democratización y la realización de elecciones libres, como requisitos para la instauración de una “paz firme y duradera” en la región<sup>264</sup>. En virtud de dicho documento, los gobiernos signatarios sellaban el siguiente compromiso:

[Realizar], de manera verificable, las medidas conducentes al establecimiento y, en su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos, representativos y pluralistas que garanticen la participación de partidos políticos y la efectiva participación popular en la toma de decisiones y aseguren el libre acceso de las diversas corrientes de opinión a procesos electorales honestos y periódicos, fundados en la plena observancia de los derechos ciudadanos<sup>265</sup>.

La inclusión de las distintas voces que conforman la polifonía social y la articulación de alternativas políticas para los grupos levantados en armas fueron concebidas, por tanto, como herramientas imprescindibles para el cese de las hostilidades en América Central. Es, de hecho, el progresivo establecimiento de sistemas democráticos el que hizo posible la reunión efectiva en torno a la mesa de diálogo entre organizaciones armadas y representantes de la autoridad estatal. De acuerdo con Arnson (1999c: 7), los procesos de negociación requieren, para ser exitosos, de interlocutores gubernamentales que gocen de un cierto grado de legitimidad para los distintos actores políticos clave y, cómo no, para la propia insurgencia. Según señalábamos en capítulos previos, la confianza en el cumplimiento de los pactos alcanzados con el gobierno será un componente esencial en la definición estratégica de los grupos rebeldes. Esta superación de los denominados “problemas de compromiso”

---

<sup>263</sup> Los países integrantes del denominado Grupo de Contadora fueron Colombia, México, Panamá y Venezuela. Pese al alcance limitado de los resultados de su intento de mediación, Contadora sentó las bases para el posterior Acuerdo de Paz de Esquipulas, impulsado por el presidente costarricense Óscar Arias. En estos nuevos diálogos participaron los mandatarios centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

<sup>264</sup> Junto a ellos, se contemplaba también el cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales, así como la prohibición del uso del propio territorio a quienes trataran de agredir a otros países vecinos; el impulso a las negociaciones en materia de seguridad, control y limitación del armamento; la atención a los refugiados y desplazados como consecuencia de los conflictos armados; la cooperación para el desarrollo económico y social o el establecimiento de una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento.

<sup>265</sup> El texto de los Acuerdos de Paz de Esquipulas I (5 de mayo de 1986) y II (7 de agosto de 1987) se encuentra disponible, entre otros sitios web, en la página del Parlamento Centroamericano: [www.parlacen.int/](http://www.parlacen.int/) [Consulta: 12-02-2014].

es sólo factible en contextos democráticos, y sólo sostenible mediante la consolidación de la democracia.

En el caso de El Salvador, la finalización del enfrentamiento armado tuvo lugar el 16 de enero de 1992 (González y Harto de Vera, 1994; Arnson, 1999c: 15-20; Cañas y Dada, 1999; Montobbio, 1999; Kruijt, 2009: 187-191). Fue entonces cuando el gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) liderado por Alfredo Cristiani y las organizaciones integrantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) firmaban en México los denominados Acuerdos de Paz de Chapultepec, tras un proceso de diálogo que, iniciado en 1989<sup>266</sup>, se desarrolló bajo el auspicio de las Naciones Unidas. En el transcurso de la contienda, los combatientes habían llegado a una situación de “empate militar” que dejaba pocas alternativas más allá de la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Para ello, era condición *sine qua non* lograr la incorporación del FMLN al sistema político salvadoreño. Así lo reconocía años más tarde el propio presidente Cristiani:

Era importante tenderle al FMLN un puente de oro (...). Toda la guerrilla, o su gran mayoría, de alguna manera habían tratado de participar en elecciones para buscar una entrada política al poder por la vía de elecciones. Sin embargo, los militares les inhibieron. Ya sea que ganaran o perdieran, siempre ganaron los militares. Y eso fue generando violencia de ambos lados hacia ambos lados. Entonces era importante proponerle al FMLN que buscásemos un acuerdo de paz, que fortaleciera la institucionalidad democrática en el país (cit. en Kruijt, 2009: 187-188).

De este modo, y como resultado de los acuerdos de paz, el FMLN se inscribía como partido político legal el 14 de diciembre de 1992. Dos años más tarde, en las elecciones de 1994, calificadas como “las elecciones del siglo”, participaba en un proceso electoral en el que por primera vez en la historia salvadoreña concurrían en las urnas todas las fuerzas políticas, independientemente de su ubicación dentro del espectro ideológico (González y Harto de Vera, 1994: 76).

---

<sup>266</sup> Aquel mismo año tuvieron lugar diversos sucesos que marcarían de manera significativa el posterior curso del conflicto armado. El FMLN lanzaba una gran ofensiva militar, con incursiones en la capital y un amplio despliegue de tropas, que fracasaría no obstante en su propósito de lograr una insurrección popular masiva. Las fuerzas armadas salvadoreñas perpetraron entonces una serie de asesinatos que tendrían un fuerte impacto en la opinión pública nacional e internacional, incrementando las presiones hacia una solución política de la contienda. Se trataba de la ejecución del Padre Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana y crítico con el gobierno, junto a la de otros cinco sacerdotes jesuitas, una empleada de la residencia en que habitaban y su hija adolescente (Arnson, 1999c: 16-17; Kruijt, 2009: 188-189).

Por su parte, los Acuerdos de Paz de 1996 ponían fin a 36 años de guerra civil en Guatemala, clausurando así uno de los conflictos bélicos más cruentos y duraderos de la región (Azpuru, 1999; Pásara, 2003; Torres-Rivas, 2006; Kruijt, 2009: 191-197). El tortuoso camino de las negociaciones para el final de los enfrentamientos armados culminaba con la firma de los compromisos alcanzados entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), muy debilitada ya en el plano militar, y el gobierno de Álvaro Arzú<sup>267</sup>. Si algo caracterizó a los pactos sellados en Guatemala fue la gran amplitud de la agenda de negociaciones, cuyo propósito era abordar las diversas causas que habían dado origen al enfrentamiento armado<sup>268</sup>. La profundización democrática del sistema político fue, de nuevo, uno de los ejes fundamentales de las conversaciones de paz, en las que la mediación de la ONU jugó también un papel destacado. Para ello, se pactaba la integración de la guerrilla en la arena política guatemalteca y su incorporación a la legalidad “en condiciones de seguridad y dignidad”, bajo la consideración de que el conflicto había estado determinado “por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática”<sup>269</sup>. La URNG finalizaría su proceso de conversión en partido político en 1998. Al año siguiente se presentaba por vez primera a unas elecciones dentro de una coalición de partidos de izquierdas constituida bajo el nombre de Alianza Nueva Nación (ANN). Además, junto al fortalecimiento de la democratización del régimen, los acuerdos firmados contemplaban cuestiones de carácter económico, social y cultural, tales como la lucha contra la pobreza y la desigualdad o el reconocimiento de los derechos e identidad de los pueblos indígenas, dimensión crucial dado el fuerte componente racista del conflicto armado. Debido a este ambicioso contenido de las negociaciones, que trascienden las tradicionales

---

<sup>267</sup> La larga travesía hacia la paz se iniciaría en 1987, bajo la presidencia de Vinicio Cerezo, primer civil al frente de Guatemala tras años de dominio castrense, elegido en las elecciones de 1985. El proceso negociador se extendería a lo largo de los mandatos de Jorge Serrano Elías – quien protagonizó un fallido auto-golpe de Estado, conocido como “el Serranazo”, en 1993 – y Ramiro de León Carpio, concluyéndose con el gobierno de Álvaro Arzú, miembro del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

<sup>268</sup> Se firmaría, de hecho, una docena de acuerdos, cada uno de los cuales abordaría alguna de las dimensiones incluidas en las negociaciones. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el “Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos”, el “Acuerdo global sobre derechos humanos”, el “Acuerdo sobre identidad y derechos indígenas” o el “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria”. Todos ellos entrarían en vigor con la suscripción final del Acuerdo de Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996.

<sup>269</sup> Esta última aseveración será, de hecho, la que abra el denominado “Acuerdo para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad”. La página web de la Misión Permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas recoge la letra de todos los acuerdos aprobados en el curso de las conversaciones de paz: [www.guatemalaun.org/paz.cfm](http://www.guatemalaun.org/paz.cfm) [Consulta: 15-02-2014].

consideraciones sobre el cese de hostilidades, Torres-Rivas (2006: 12) señalaría que, en sentido estricto, en el caso guatemalteco no ha de hablarse de “acuerdos de paz”, sino más bien de “Acuerdos de Desarrollo y Democracia”<sup>270</sup>.

El enfrentamiento armado desarrollado en Nicaragua durante los años ochenta revistió características bien distintas a las exhibidas por los dos conflictos bélicos anteriormente citados. Sin embargo, en él se observó también este discurrir conjunto de pacificación y democratización (Spalding, 1999; Kruijt, 2009: 183-187). Como ya señalamos en páginas previas, la victoria de la revolución nicaragüense de 1979 llevó al poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con la presidencia de Daniel Ortega. Desde que el nuevo gobierno diera apenas sus primeros pasos, se enfrentó al desafío de un fuerte movimiento de oposición armada, respaldado por los Estados Unidos: la denominada Contra (-revolución). Pese a sus fallas en términos de competitividad, las elecciones de 1984 marcarían, junto a la Constitución promulgada tres años más tarde, el inicio de la liberalización del régimen sandinista, componiéndose en su transcurso los primeros compases de la transición democrática en Nicaragua (González, 1991). En 1988 tiene lugar el acuerdo de Sapoá, un primer intento de reducción de los efectivos de la Contra. Al año siguiente, dichas organizaciones firmarían dos acuerdos preliminares de desarme, aunque tras ellos continuarían aún los enfrentamientos violentos. Fueron los comicios celebrados en 1990 los que traerían consigo el final de la guerra civil en este país centroamericano<sup>271</sup>. Así, tras la victoria electoral de la Unión Nacional Opositora (UNO), liderada por Violeta Barrios de Chamorro, se produjo la desmovilización y entrega de armas por parte de las fuerzas de la Contra – unidas por aquel entonces bajo el nombre de Resistencia Nicaragüense –, mediante la firma del compromiso de Toncontín.

En los ejemplos referidos, la finalización de las organizaciones insurgentes estuvo de algún modo asociada a una mayor permeabilidad y apertura del sistema

---

<sup>270</sup> Los resultados de los acuerdos suscritos se mostraron, a la larga, mucho más limitados que los planteamientos iniciales de transformación de la sociedad guatemalteca. Buena parte del contenido sustantivo de los acuerdos ha sido incumplido, constituyendo, a día de hoy, una cuenta pendiente para la sociedad guatemalteca (Pásara, 2003; Torres-Rivas, 2006).

<sup>271</sup> En realidad, como expone Martí i Puig (1998), la violencia política siguió aún presente en diversos rincones del país a lo largo de la década de los noventa. Sus protagonistas fueron los llamados “recompas” y “recontras”, antiguos combatientes sandinistas y antisandinistas, cuyo proceso de reinserción había fracasado. De acuerdo con el balance realizado por el ejército en 1992, a mediados de aquel año se habían rearmado 21.905 combatientes. Debido a esta situación de “violencia posbélica”, Rose J. Spalding (1999) hablará del establecimiento de una “paz de baja intensidad”.



político. La presencia de regímenes democráticos supuso la habilitación de diversos canales de participación, oposición y expresión de demandas<sup>272</sup>. En este contexto, la conversión de los grupos armados en partidos políticos hacía posible dar el salto desde la contienda bélica hasta la contienda electoral. La concurrencia a elecciones se presentaba entonces como una alternativa a la lucha armada y, en último término, como una vía de acceso al poder. Este cambio estratégico en la búsqueda de objetivos políticos, derivado de la incursión de los antiguos movimientos insurreccionales en la arena electoral, no estuvo en ningún caso limitado a organizaciones como el FMLN, la URNG o el propio FSLN. De hecho, ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de toda América Latina, si bien cosechando éxitos muy desiguales en función de los casos<sup>273</sup>. La oposición armada hondureña, con la que completamos el mapa insurgente centroamericano, dirigió también sus pasos hacia las urnas a partir de 1991. Aquel año el gobierno anunciaba una ley de amnistía, tras la que las diversas organizaciones armadas operativas en el país, por aquel entonces ya prácticamente derrotadas, abandonarían la lucha armada (Allison, 2006: 150). En 1994 la denominada Unificación Democrática (UD) alcanzaba el reconocimiento legal como partido político, concurriendo por primera vez a elecciones en 1997<sup>274</sup>. A ella se unirían diversos miembros de los grupos subversivos previamente desmovilizados, tales como el Frente

---

<sup>272</sup> En realidad, si bien es cierto que la apertura de vías de acceso al sistema afecta a la estrategia de las organizaciones insurgentes, también lo es que no necesariamente llega a concretarse en oportunidades reales de representación para algunas voces excluidas. En este sentido, María Inclán (2009: 815) explica cómo el progresivo aumento de la competitividad y fragmentación electoral en México – y más específicamente en los municipios chiapanecas – estuvo asociado a un decremento de la protesta Zapatista. De acuerdo con la autora, tales resultados pudieron deberse a las nuevas esperanzas derivadas del paulatino proceso de democratización electoral atravesado por el país. Los Zapatistas confiaron entonces en la activación de nuevos canales para la representación de sus reivindicaciones. Sin embargo, según Inclán (2009: 815), “las concesiones procedimentales otorgadas a los Zapatistas nunca se materializaron como se pretendió inicialmente y sus demandas no fueron institucionalizadas”. Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, firmados con el gobierno mexicano en 1996, quedaron en gran medida convertidos en papel mojado. Hernández Navarro (1999: 304) destaca, por ello, la brecha existente entre la realidad y lo pactado, afirmando incluso que “San Andrés fue la ruta para reintegrar a los rebeldes en la sociedad civil sin concederles ninguna ganancia política significativa”.

<sup>273</sup> Por ejemplo, tanto el FMLN como el FSLN han llegado a convertirse en partidos de gobierno a través de su concurso en procesos electorales. Sin embargo, la URNG ha obtenido hasta la fecha escasos resultados en los diversos comicios en que ha participado. Así, en las elecciones presidenciales de 2011, por citar tan sólo la última de las competiciones electorales celebradas en Guatemala, el Frente Amplio de Izquierdas al que pertenecía la URNG-MAÍZ obtuvo únicamente un 3,2% de los votos.

<sup>274</sup> La UD surgía como resultado de la unión de cuatro partidos clandestinos de izquierda: el Partido para la Transformación de Honduras (PTH), el Partido Revolucionario Hondureño (PRH), el Partido Morazanista de Liberación Nacional (PMLN) o el Partido de Renovación Patriótica (PRP).

Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLH) o las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya (FPR-LZ).

En Sudamérica pueden registrarse también diversos casos de organizaciones insurgentes o integrantes de las mismas que, después de su renuncia a la “vía armada”, han aspirado a participar en los procesos de toma de decisiones mediante su intervención en la pugna electoral. Entre ellos se encuentra el ejemplo del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). Tras abandonar la prisión con la amnistía decretada por la democracia uruguaya en 1985, y con más de una década de internamiento a sus espaldas, el líder histórico del MLN-T, Raúl Séndic, afirmaba: “Salimos a la calle con un ánimo de paz y de trabajar intensamente en el marco de la legalidad vigente. Sin entrar en ningún tipo de provocación, nosotros postulamos la vida” (Estellano, 1985). Tal idea era corroborada algunos días más tarde por otro dirigente excarcelado de la organización, Eleuterio Fernández Huidobro: “Consideramos que se ha abierto una etapa de democracia primaveral, que es obra del pueblo uruguayo y tiene que ser respetada, pues es una orden popular. Vamos a luchar en el marco de esa democracia” (Estellano, 1985)<sup>275</sup>. Con dicho propósito, y en virtud de las nuevas oportunidades políticas creadas por el final del régimen dictatorial, muchos Tupamaros se integrarían en el Frente Amplio (FA) en 1989, constituyendo en su interior el denominado Movimiento de Participación Popular (MPP) (Garcé, 2010). Iniciaban así su andadura en el ámbito de la competencia electoral, adquiriendo un peso cada vez mayor en el panorama político uruguayo. En los comicios de 2009 uno de los antiguos integrantes del MLN-Tupamaros, José Mujica, llegaría a alzarse con la presidencia de Uruguay mediante su candidatura dentro del FA<sup>276 277</sup>.

---

<sup>275</sup> Como señalaremos de nuevo más adelante, los Tupamaros habían sido derrotados *de facto* por las fuerzas armadas en 1972 (Garcé, 2010: 1598; Waldmann, 2010: 9-10), poco antes del golpe de Estado que sumiría al país en 12 largos años de dictadura. El régimen militar intensificó la represión contra los miembros de la organización. Sin embargo, como señala Waldmann (2010: 10), “el ejército uruguayo no escribió el último capítulo de la historia de los Tupamaros”. Con el retorno de la democracia, numerosos miembros de la organización regresaron a la lucha política, esta vez mediante métodos no violentos.

<sup>276</sup> Según indica Garcé (2010: 1599), varios de los trece ministros del gobierno de Mujica habían militado en el MLN-T. Es el caso de Eduardo Bodoi (Ministro del Interior), Ricardo Ehrlich (Ministro de Educación), Daniel Olesker (Ministro de Salud Pública) y Luis Rosadilla (Ministro de Defensa), relevado en el cargo por el también extupamaro Eleuterio Fernández Huidobro.

<sup>277</sup> Podrían señalarse otros ejemplos de antiguos integrantes de organizaciones armadas que, como Daniel Ortega o José Mujica, han ocupado altos cargos en diversos países de la región. Dilma Rousseff, presidenta electa de Brasil en los comicios de 2010 por el Partido de los Trabajadores (PT), fue miembro de la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares) durante los años de la dictadura. Por

Las diversas organizaciones armadas operativas en Colombia nos ofrecen asimismo interesantes elementos para la reflexión sobre el papel del régimen político en la prevalencia de la actividad insurgente latinoamericana. De hecho, el caso colombiano constituye en buena medida un contraejemplo a las dinámicas generales observadas hasta el momento. Los grupos insurgentes objeto de análisis emergieron y desarrollaron su actividad, como otras organizaciones de nuestro conjunto de datos, en un contexto al menos formalmente democrático. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en otros casos, la violencia política ha mantenido su vigencia de manera persistente en el marco de la democracia colombiana. Así, en el año de cierre de nuestra ventana de observación, organizaciones de gran envergadura como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuaban aún operativas<sup>278</sup>. En este caso, la presencia del entramado institucional propio de la democracia liberal representativa no ha sido suficiente hasta el momento para alcanzar la paz. El análisis pormenorizado de las causas explicativas de esta situación, así como el estudio de las lógicas que rigen la violencia en Colombia, trascienden ampliamente los límites y objetivos de este trabajo de investigación. La literatura ha señalado, no obstante, la confluencia de numerosos factores conducentes a tal circunstancia, algunos de los cuales serán sugeridos a lo largo de las siguientes páginas. Entre ellos se han destacado cuestiones como la tradicional falta de inclusividad de la democracia colombiana<sup>279</sup>, el ejercicio de la represión por parte del

---

su parte, Álvaro García Linera llegaría a la Vice-Presidencia de Bolivia con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales tras las elecciones de 2005. Algunos años antes, durante la década de 1990, García Linera había militado en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).

<sup>278</sup> En el momento de escribir estas líneas se mantiene abierto un proceso de diálogo, iniciado oficialmente en el año 2012, entre las FARC y el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos. Aunque como los propios negociadores señalan “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, cabe mencionar que el 6 de noviembre de 2013 se comunicó en La Habana un preacuerdo provisional para la participación política de la organización armada (Reyes, 2013). Según el propio texto del compromiso alcanzado, su contenido “profundiza y robustece nuestra democracia, ampliando los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición, al igual que espacios de participación política y ciudadana. Promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales y el robustecimiento de una cultura política democrática”. Este documento, así como otros textos y comunicados de las conversaciones de paz, se encuentran disponibles en la página web: <https://www.mesadeconversaciones.com.co/> [Consulta: 21-02-2014].

<sup>279</sup> Ya hemos aludido con anterioridad a la relevancia de esta variable para el estudio de la actividad insurgente. De hecho, en el caso de Colombia, el origen de los grupos armados que operan en el país puede asociarse en buena medida a los déficits democráticos generados por el Frente Nacional (1958-1975), un acuerdo para el reparto de poder entre Liberales y Conservadores que, si bien redujo los enfrentamientos protagonizados por ambas fuerzas políticas durante La Violencia, excluyó a amplios

Estado, la desigualdad y el conflicto agrario, la debilidad estatal, la presencia de grupos paramilitares o el complejo solapamiento de prácticas e intereses entre violencia política y violencia criminal.

En todo caso, incluso dentro de este contexto de enfrentamientos en el que sobreviven aún importantes organizaciones armadas, pueden hallarse interesantes intentos – fallidos y exitosos – de integración al sistema de antiguos miembros de la insurgencia. Uno de los episodios más dramáticos e ilustrativos de la expulsión de una alternativa partidaria del escenario político colombiano fue el protagonizado por la denominada Unión Patriótica (UP). En 1985, y en el marco de las conversaciones de paz promovidas por el gobierno de Belisario Betancur, las FARC presentaban oficialmente a la UP como movimiento político con el propósito de concurrir a elecciones. A ella pertenecían no sólo combatientes desmovilizados, sino que se trataba de un movimiento más amplio y heterogéneo del que también formaban parte sindicalistas, campesinos, intelectuales y militantes del Partido Comunista. En las elecciones de 1986, el partido obtenía un 4,5% de los votos para la candidatura presidencial, logrando además una representación significativa en los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, pronto se desencadenó una terrible ola de asesinatos contra sus miembros. En 1987, sólo dos años después del inicio de su andadura, 1.000 integrantes de la UP habían sido ejecutados por fuerzas armadas, grupos paramilitares, narcotraficantes y oficiales gubernamentales (Gómez-Suárez, 2007: 641-645). En total, se estima que perecieron entre 3.000 y 5.000 personas debido a sus vínculos con el partido político. La dimensión y características de esta campaña de exterminio han llevado a algunos autores a calificar los hechos de genocidio (Gómez-Suárez, 2007).

Sin embargo, entre finales de los ochenta y comienzos de la década de los noventa se desarrollan en Colombia diversas experiencias de negociación y desmovilización cuyos resultados positivos merece la pena recordar. Durante una entrevista concedida en 1988, Carlos Pizarro, comandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), afirmaba: “La solución no puede ser masacrar una nación en función de una revolución. Tenemos que plantearnos objetivos revolucionarios que garanticen un camino distinto en el ejercicio democrático de la vida de esta nación con objetivos donde nos podamos integrar todos” (cit. en Feldmann, 2005: 23). Algunos meses más

---

sectores de la población que no se sentían representados por los partidos históricos tradicionales (Fischer, 1999: 265-266; Gómez-Suárez, 2007: 650; Lozano, 2008: 153-162; Feldmann y Hinojosa, 2009: 48-49).

tarde, en 1989, arrancaban las conversaciones de paz entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19. Como consecuencia de este proceso de diálogo, la organización insurgente abandonaría las armas en 1990, “devolviendo la espada de Bolívar”<sup>280</sup> y transitando de la lucha armada a la lucha electoral mediante su transformación en partido político (Chernick, 1999: 179; Grabe, 2010). De este modo, la célebre consigna “¡Por Colombia, por la paz, dejad las armas!” marcaba su reintegración en la vida civil a través de la recién constituida Alianza Democrática M-19 (AD-M-19). Este nuevo partido político concurría por primera vez a elecciones – para el Congreso, departamentos y municipios – en marzo de 1990, tan sólo dos semanas después de la desmovilización del grupo armado. En mayo de ese mismo año, participaba en los comicios presidenciales obteniendo el 12,5% de los votos<sup>281</sup>.

El nuevo presidente salido de las urnas, César Gaviria, convocaría entonces elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente en cumplimiento de los compromisos previos de reforma política. En este escenario, se producirían los desarmes de otras tres organizaciones insurgentes. Así, después de una serie de conversaciones con el gobierno nacional, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Popular de Liberación (EPL)<sup>282</sup> renunciaban a la “vía armada” como precondition para participar en la próxima Asamblea Constituyente (Chernick, 1999: 180; Grabe, 2010: 20). En particular, se pactó que tanto el PRT como el MAQL contaran con un portavoz en la convención, mientras que al EPL se le asignaron dos representantes con pleno poder de voto. Este último conformaría además el partido político Esperanza, Paz y Libertad<sup>283</sup>.

---

<sup>280</sup> Esta devolución no es tan sólo un recurso metafórico para referir su renuncia a la violencia. Como ya indicamos con anterioridad, el M-19 había hecho su gran aparición pública en 1974 mediante el robo de la espada de Simón Bolívar. Ésta fue devuelta a la casa-museo Quinta de Bolívar durante una ceremonia que tendría lugar a comienzos de 1991 como símbolo del cese de la actividad armada.

<sup>281</sup> El día 26 de abril, poco antes de los comicios, tenía lugar el asesinato de Carlos Pizarro, antiguo líder del M-19 y candidato presidencial de la AD-M-19. A pesar de ello, el M-19 se mantuvo firme en su compromiso con la paz, nombrando a Antonio Navarro Wolff nuevo candidato bajo el eslogan: “Los votos de Pizarro, van para Navarro”. Durante esa campaña electoral fueron también asesinados Luis Carlos Galán, candidato del Partido Liberal, y Bernardo Ossa Jaramillo, candidato de la Unión Patriótica.

<sup>282</sup> Una pequeña facción del EPL, la llamada línea disidente comandada por Francisco Carballo, continuó realizando operaciones armadas a pesar de los acuerdos de desmovilización de 1991.

<sup>283</sup> Poco después de su formación, los militantes de Esperanza, Paz y Libertad, a los que se conoció como “esperanzados”, comenzaron a ser víctimas de numerosos ataques violentos por parte de combatientes de la insurgencia – se ha apuntado fundamentalmente a la propia disidencia del EPL y a miembros de las FARC – y grupos paramilitares (Chernick, 1999: 182-183). Se estima que entre 1991 y 1995 fueron asesinados más de 200 miembros de la organización.

Por su parte, el MAQL daba origen, junto a otras fuerzas sociales de carácter eminentemente indígena y campesino, a la llamada Alianza Social Indígena (ASI). El nuevo texto constitucional sería finalmente promulgado el 4 de julio de 1991, sustituyendo a la vieja Constitución de 1886. Según señala Villarraga Sarmiento (2013: 116), “la política gubernamental que estuvo en la base de estos procesos de paz fue la de propiciar la ampliación de las formas de participación política, facilitar la inclusión de actores políticos y sociales y promover el desarrollo regional en zonas afectadas por el conflicto armado”.

La evidencia empírica mostrada hasta el momento nos sugiere que el grado de apertura del sistema político es capaz de proporcionar algunas pistas relevantes sobre las pautas de duración y finalización de los grupos armados. La democracia puede, en este sentido, contribuir a la pacificación de la contienda violenta a través del establecimiento y vigorización de canales efectivos para la expresión de demandas y el ejercicio de la oposición política. La articulación de tales mecanismos genera estructuras de oportunidad que favorecen el tránsito desde la lucha armada hacia estrategias pacíficas para la toma del poder. En contextos democráticos los grupos opositores se mostrarían, por tanto, escasamente propicios al empleo de la violencia como herramienta de acción política, consagrándose en su lugar a la conquista “desarmada” de sus respectivos objetivos.

Junto a las dinámicas de inclusión y participación expuestas, Andreas Feldmann (2005) destaca el papel desempeñado por al menos dos elementos adicionales en el descenso de la actividad armada latinoamericana a partir de los noventa: la nueva valorización del juego democrático y el rechazo de la población al empleo de la violencia como método político. Por un lado, las organizaciones armadas realizaron una reevaluación de los costes y beneficios alcanzados mediante el recurso a la violencia, optando entonces por nuevos diseños estratégicos en que se priorizaban los mecanismos de actuación ofrecidos por la democracia representativa. De acuerdo con el citado autor, las traumáticas experiencias de represión estatal vividas en el subcontinente, unidas a la constatación de la habitual ineficacia de la “vía armada”, derivaban en una interpretación más pragmática de las ventajas potenciales de los sistemas democráticos. El tradicional escepticismo y desdén de buena parte de la izquierda latinoamericana

hacia la democracia liberal, frecuentemente interpretada en términos de impostura<sup>284</sup>, daba paso a planteamientos renovados que apostaban por vías pacíficas – ahora posibles – de acceso al poder (Castañeda, 1995: 387-398; Feldmann, 2005: 22). La nueva ola de democracia y su posterior consolidación hacían factible esa búsqueda de alternativas políticas no violentas orientadas a la promoción del cambio social. Por otro lado, las organizaciones insurgentes se encontraban frente a una sociedad cansada y desencantada de los conflictos armados. Una sociedad, cuyo creciente rechazo al empleo de la violencia constituía un importante obstáculo para la actividad de los grupos subversivos. En este sentido, la comandante del FMLN Ana Guadalupe Martínez reconocía en una entrevista: “Lo que nos obligó a sentarnos en la mesa [de diálogo] fue el empate [militar]. Pero lo que le obliga a uno a negociar es algo diferente. Vimos el desgaste de nuestras fuerzas y el rechazo de la sociedad a formas militares de lucha” (cit. en Arnson, 1999c: 17).

Asimismo, en su estudio sobre las guerrillas latinoamericanas, Wickham-Crowley (1993: 299) sostiene que, en presencia de una institucionalidad democrática que posibilite la alternancia en el gobierno a través del voto, la población tiende a convertirse en indiferente, cuando no en abiertamente hostil, a la actividad de las organizaciones insurgentes. Según palabras del autor, “la habilidad para expulsar del poder a los canallas que lo ostentan sigue siendo el principal impedimento para la difusión de la insurgencia en naciones con instituciones electorales” (Wickham-Crowley, 1993: 299). Desde esta óptica, la falta de apoyo social y colaboración ciudadana con los grupos armados dentro de los regímenes democráticos constituiría una fuente de menoscabo en la esperanza de vida de tales organizaciones. La interacción entre legitimidad democrática y deslegitimación de la violencia origina, en definitiva, una serie dinámicas que pueden mediar también en el proceso de desactivación de la insurgencia dentro de este tipo de sistemas políticos. Por tanto, de acuerdo con los últimos planteamientos presentados, el abandono de la “vía armada” en América Latina tendría que ver con un cambio de paradigma asociado a la transformación de los “repertorios culturales” de contienda (Wickham-Crowley, 1993: 32; Feldmann, 2005).

---

<sup>284</sup> Como subraya incluso el propio Castañeda (1995: 388-389), tal escepticismo apuntaba, sin lugar a dudas, hacia un problema real en la región. Las intentonas democráticas latinoamericanas habían sido, hasta el momento, bien derrocadas por la fuerza mediante golpes de Estado, bien limitadas *de facto* en cuanto a contenido y praxis, constituyendo en buena medida “democracias de fachada” que contribuían en poco a la mejora efectiva de la calidad de vida de sus ciudadanos.

En todo caso, volveremos de nuevo sobre esta cuestión al analizar los efectos del final de la Guerra Fría sobre la actividad insurgente en la región.

Los diversos argumentos desarrollados a lo largo de las páginas previas y la evidencia empírica que los sostiene muestran cómo la democracia se convirtió en un importante factor de pacificación para América Latina. Sin embargo, quedan aún en el aire ciertos interrogantes que es preciso esclarecer. Dada la mencionada asociación existente entre regímenes democráticos y desactivación de organizaciones armadas, el elevado nivel de violencia política no estatal registrado en la región durante la década de los ochenta podría resultar, cuando menos, contra-intuitivo (véase Gráfico 3.1, Cap. III). Aquéllos eran los años de la democratización y el cambio político. Sin embargo, fueron todavía numerosos los grupos insurgentes que permanecieron alzados en armas durante la llegada de esa tercera ola, cuyas aguas abrirían las puertas del subcontinente a la instauración paulatina de sistemas democráticos. De hecho, no faltan los trabajos que plantean incluso la vigencia de una posible relación positiva entre democracia y violencia en la región. Así, en su estudio sobre la oposición política en América Latina durante lo que ella misma define como una “era de democratizaciones” (1980-1993), Christina Schatzman (2005) obtiene un sorprendente resultado. De acuerdo con sus hallazgos, los incrementos en la democracia institucional parecen promover la rebelión violenta en el subcontinente latinoamericano (Schatzman, 2005: 303). Por su parte, Feldmann y Perälä (2004) analizan las causas del terrorismo no gubernamental experimentado por la región entre 1980 y 1995. Según el análisis empírico efectuado por dichos autores, las mejoras en las libertades civiles y políticas se encuentran asociadas a una mayor incidencia de este tipo de actividad violenta. El terrorismo impactaría, fundamentalmente, sobre regímenes con un cierto grado de apertura política que haga posible la movilización de recursos necesaria para la actuación de las organizaciones armadas (Feldmann y Perälä, 2004: 120).

La *hipótesis 1b* de este trabajo de investigación pretende arrojar algo de luz sobre este rompecabezas<sup>285</sup>. De acuerdo con el planteamiento que aquí se sostiene, junto al impacto del régimen político es preciso considerar también los posibles efectos derivados de los procesos de cambio. Así, la observación de los periodos de transición y

---

<sup>285</sup> Algunas de las hipótesis presentadas más adelante, entre las que se destaca la incidencia del marco internacional en que se desarrollan los enfrentamientos armados, contribuirán también a dar cuenta de esta aparente contradicción en los resultados.



consolidación democrática puede aportar información relevante sobre las estrategias adoptadas por los grupos armados. En particular, según nuestra formulación teórica, los efectos positivos de la democracia para el desarme de la insurgencia podrían manifestarse de manera diferida, evidenciándose una vez que el nuevo sistema político ha adquirido ya un determinado grado de consolidación. Por el contrario, los periodos transicionales, caracterizados por la incertidumbre, la inestabilidad y la indefinición política, serían especialmente propicios a la violencia, disminuyendo las probabilidades de abandono de la lucha armada. Según dicho enfoque, las democracias muy jóvenes no serían aún capaces, en sus primeros años de vida, de poner en funcionamiento los ya analizados mecanismos favorables a la desactivación de la contienda; hará falta una cierta madurez y trayectoria para que el régimen democrático se muestre apto para promover la paz.

Si tales asunciones son correctas, los resultados obtenidos en las investigaciones citadas estarían asociados en alguna medida a las limitaciones de su marco temporal, inmerso en plena oleada transformadora de la región. Son, de hecho, los propios autores quienes sugieren la posible presencia de esta *secuela transicional* en sus hallazgos. Así, Schatzman (2005: 303) indica cómo la relación positiva encontrada entre democracia y violencia podría ser consecuencia de su estrecho periodo de observación. Por ello, en sus conclusiones advierte que, debido a las restricciones del arco temporal, es probable que sus resultados estén “capturando un efecto de transición que no se encuentra, en este momento, bien definido” (Schatzman, 2005: 306)<sup>286</sup>. En este sentido, apela a la necesidad de considerar tanto la profundidad de la democracia como su grado de consolidación a la hora de aproximarse al estudio de la contienda política en la región. Feldmann y Perälä (2004: 127, nota 15) introducen también interesantes cautelas y matizaciones en una de sus notas aclaratorias, apuntando en la dirección aquí señalada. En ella enfatizan que no ha de colegirse, en virtud de sus averiguaciones, que el terrorismo es más probable en países plenamente democráticos. En realidad, explican, son los avances en la apertura del sistema y el reconocimiento de derechos y libertades quienes se asocian al incremento de la violencia en América Latina. Por tal motivo, los

---

<sup>286</sup> No obstante, la autora señala también la relevancia de casos como Colombia, Guatemala o Perú donde la violencia política se mantuvo pasados más de 5 años desde la transición democrática. Estos ejemplos cuestionan, según Schatzman (2005: 299), “tanto la asunción de que la democracia atenuará el desafío violento, como la expectativa de que dicha inestabilidad estará delimitada por un corto periodo de transición política”.

autores precisan entonces que “el terrorismo no gubernamental ha emergido durante las transiciones a la democracia o después de que los regímenes autoritarios hayan abierto espacios políticos”. En el texto citan algunos ejemplos de tal circunstancia, como los repuntes de violencia terrorista que acompañaron a las transiciones democráticas en Argentina (1984-1986), Perú (1980-1984), Chile (1990-1992), Ecuador (1980-1987) o Panamá (1989-1994) (Feldmann y Perälä, 2004: 121).

Esta misma intuición es la que vertebraba también el trabajo que realicé junto a Álvaro Martín (2012) sobre la prevalencia de la violencia política en América Latina a lo largo del periodo comprendido entre 1970 y 2010. En él se analizaba el impacto específico de los periodos de democratización – definidos siguiendo el criterio adoptado por Cederman et al. (2010)<sup>287</sup> – sobre el volumen de incidentes y víctimas mortales resultado de la actividad armada no estatal. De acuerdo con los hallazgos obtenidos entonces, la intensidad de la violencia en la región resultó significativamente mayor en estos periodos de cambio político. Los diversos modelos estimados confirmaban la existencia de una asociación positiva entre violencia política y procesos de transición, respaldando las tesis sobre las denominadas “democratizaciones peligrosas”<sup>288</sup>. Así puede constatar en el Gráfico 4.3 extraído de la citada investigación. Según los datos que en él se ilustran, tanto el número medio de ataques violentos perpetrados por país y año, como las muertes consecuencia de tales acciones, experimentaron un incremento

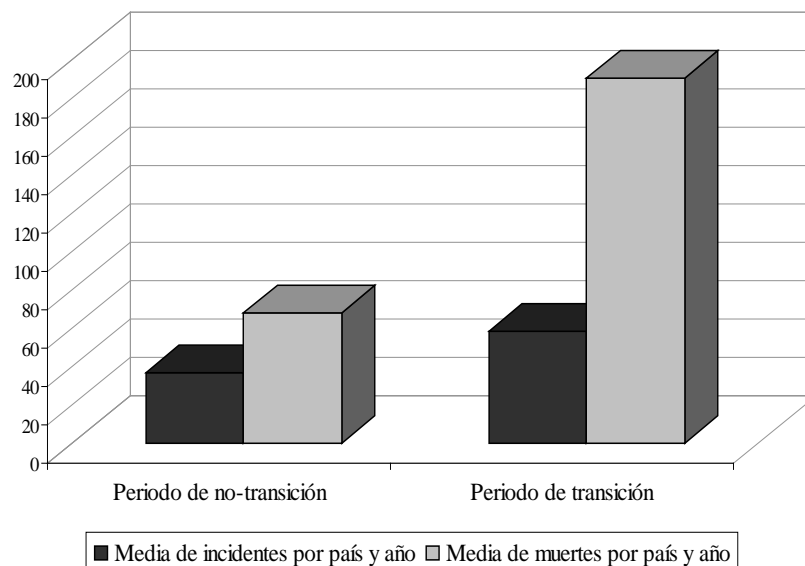
---

<sup>287</sup> Como ya indicamos en el capítulo previo, Cederman et al. (2010) codifican los periodos de cambio de régimen – democratizaciones y retrocesos democráticos – a través de una serie de variables dicotómicas que registran intervalos temporales de entre 1 y 4 años de duración a partir de las mediciones realizadas en el Polity IV Project (Marshall et al., 2010). En particular, en nuestro trabajo hicimos uso de la variable *cdem03r*, que señala con valor ‘1’ los tres años posteriores a cada avance democrático significativo.

<sup>288</sup> Cabe destacar que, en términos generales, los hallazgos de dicha investigación resultaron muy similares a los que aquí se presentan. No obstante, llama la atención cómo el índice de democracia introducido en aquel estudio – el *X-Polity* propuesto por Vreeland (2008) – arrojaba resultados poco concluyentes en lo que respecta a su relación con la intensidad de la violencia en la región. Si bien es cierto que la variable apuntaba hacia la esperada asociación negativa con el número de incidentes y víctimas registradas, ésta era significativa tan sólo en uno de los modelos estimados. Tal vez la democracia resulte más útil a la hora de dar cuenta de la supervivencia de las organizaciones armadas, que del volumen de actividad que éstas desarrollan durante su trayectoria. En todo caso, las numerosas diferencias existentes en el diseño metodológico de ambas investigaciones nos impiden extraer conclusiones definitivas a este respecto. Así, la delimitación del marco temporal, las variables de aproximación al efecto de democracia y democratizaciones, e incluso la propia definición de la violencia que se maneja – más amplia en aquel trabajo, en que se incluyen todos los incidentes perpetrados por agentes no estatales en la región según la ya mencionada *Global Terrorism Database* de START –, podrían explicar las divergencias observadas. Es preciso, en definitiva, seguir profundizando en dicha cuestión a través de futuras investigaciones.

porcentual sustantivo – del 59,7% y del 179,7% respectivamente – durante los años de avance democrático.

**Gráfico 4.3.** Violencia política no estatal según periodos de democratización en América Latina (1970-2010)



Fuente: Pinta y Martín (2012)

En el presente estudio, recurriremos a la variable dicotómica de regímenes políticos elaborada por Cheibub et al. (2010b; 2010a) para el abordaje empírico de la “violencia transicional” y la confirmación de nuestra hipótesis de la “paz democrática postransición” (*H1b*). Los indicadores del nivel de democracia introducidos en el modelo básico de partida (*Modelo 1*), presentaban un carácter continuo en el que difícilmente pueden señalarse los periodos de transición y cambio experimentados por los sistemas políticos del subcontinente. Sin embargo, y como ya explicamos en el anterior capítulo, la propuesta de Cheibub et al. nos permite delimitar con facilidad tanto el tipo de régimen vigente (democracia *versus* dictadura), como la edad de los distintos sistemas democráticos latinoamericanos. Así, podremos distinguir en una misma variable entre los regímenes autoritarios, las democracias más jóvenes en periodo de transición, y aquéllas que, habiendo superado ya las incertidumbres propias de los primeros pasos – en este caso hemos situado el umbral en una longevidad mínima de 5 años –, han alcanzado un cierto grado de consolidación. Para comenzar, la Tabla 4.3 ofrece una mirada descriptiva sobre las pautas de desactivación de las

organizaciones armadas a través de nuestra nueva variable categórica de “edad democrática” (*AgeDemoCat*)<sup>289</sup>.

**Tabla 4.3.** Fin de las organizaciones insurgentes según edad democrática (transición/consolidación). Porcentajes de columna

		Edad democrática		
		Dictadura	Democracia < 5 años (Transición)	Democracia ≥ 5 años (Postransición/Consolidación)
Fin de la organización	No	94,69%	95,80%	88,05%
		(196)	(114)	(420)
		[2,194]	[2,010]	[-3,409]
	Sí	5,31%	4,20%	11,95%
		(11)	(5)	(57)
		[-2,194]	[-2,010]	[3,409]
<i>Pearson chi2 (2) = 11,7319    Pr = 0,003</i>				
<i>Likelihood-ratio chi2 (2) = 12,7019    Pr = 0,002</i>				

Frecuencias mostradas entre paréntesis. Residuos ajustados de cada casilla entre corchetes

Como puede observarse, la información desplegada en la tabla sugiere la existencia de una asociación entre nuestra variable dependiente – desmovilización de las organizaciones armadas – y las distintas categorías de la variable independiente que nos ocupa. Tal asociación es, además, estadísticamente significativa en términos globales, como muestran tanto el  $\chi^2$  de Pearson como la razón de verosimilitud (*likelihood-ratio*  $\chi^2$ ). Ambos valores exhiben una significación muy alta, con una probabilidad de que las diferencias registradas entre categorías se deban a errores de muestreo de 0,003 y 0,002 respectivamente. Asimismo, y de acuerdo con los residuos – distancia entre el valor observado y el esperado en caso de independencia entre las variables –, dicha significatividad se mantiene también en todas las casillas de nuestra tabla. En ellas, el valor de los residuos ajustados – residuos de Pearson divididos por su desviación típica – es siempre superior a 1,96 en términos absolutos. Se cumple, por tanto, el criterio interpretativo generalmente aceptado para determinar la significatividad de la relación estudiada en cada celda con un 95% de confianza (Escobar et al., 2009: 241-243).

De acuerdo con los resultados de la tabla de contingencia, la finalización de los grupos armados recogidos en nuestra muestra se encuentra relacionada no sólo con el tipo de régimen imperante, sino también con los posibles efectos derivados de los

<sup>289</sup> Como era de esperar, la variable *AgeDemoCat* presenta elevados grados de correlación con los diversos índices de aproximación al concepto de democracia empleados en el *Modelo 1*. En particular, la correlación es de 0,7077 con la variable *DemoSIPv2*, de 0,5677 con la variable *checks*, y de 0,4867 en el caso de *DemoVan*.

procesos de cambio. Así, y teniendo en cuenta que se trata de observaciones anuales, comprobamos cómo es en contextos democráticos donde se produce, en términos comparados, la mayor proporción de desarmes registrados. De este modo, únicamente un 5,31% de las observaciones correspondientes a regímenes dictatoriales es testigo del cese de actividad de alguna organización insurgente. Dato similar es el que arrojan las democracias más jóvenes, en periodo de transición, con un porcentaje de desarmes del 4,2. Tal resultado parece apuntar hacia el concepto de violencia transicional, sugiriendo las dificultades de resolver enfrentamientos armados en escenarios de cambio e inestabilidad política. Finalmente, la magnitud de desarmes asciende a más del doble, un 11,95%, si nos referimos a la categoría perteneciente a aquellas democracias que, habiendo superado ya los primeros años de transición, encaminan sus pasos hacia la consolidación del nuevo régimen establecido.

Los porcentajes de columna mostrados permiten confirmar, en definitiva, la vigencia de un cierto efecto de la variable independiente sobre el comportamiento de la variable dependiente estudiada. Las diferencias halladas entre las distintas categorías constituyen un claro indicio de tal asociación. Sin embargo, se trata tan sólo de una aproximación preliminar de carácter descriptivo. Para valorar el impacto específico del régimen político y sus procesos de cambio, procederemos al cálculo del *Modelo 2* de este trabajo de investigación. De este modo, y en presencia de las variables de control de la capacidad estatal ya introducidas en los modelos previos, contrastaremos la segunda de nuestras hipótesis principales (*H1b*). La Tabla 4.4 ofrece los resultados obtenidos tras las estimaciones. Su estructura sigue los patrones definidos con anterioridad, incluyendo réplicas Cox y *logit* para cada uno de los modelos presentados. Todos ellos registran un total de 803 observaciones, indicando la ausencia de casos perdidos para las variables contempladas. Sus hallazgos apuntan, como veremos, hacia la confirmación de la hipótesis de la “paz democrática postransición”.

**Tabla 4.4.** Estimaciones Cox y *logit* para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. *Modelo 2: El efecto de la edad democrática (transición/consolidación)*

	Cox	Logit	Cox	Logit
	Modelo 2a	Modelo 2b	Modelo 2c	Modelo 2d
PIB <i>per cápita</i>	1,0000 (0,0001)	1,0001 (0,0001)	1,0001 (0,0001)	1,0001 (0,0001)
Población	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9782*** (0,0063)	0,9756*** (0,0074)	0,9782*** (0,0063)	0,9756*** (0,0074)
Categoría de ref:	Demo postransición			
<i>Dictadura</i>	0,4410** (0,1574)	0,3944** (0,1509)		
<i>Demo transición</i>	0,3755** (0,1863)	0,2951** (0,1533)		
Demo postransición (0/1)			2,3962*** (0,7490)	2,8134*** (0,9617)
Tiempo		1,2367 (0,1642)		1,2300 (0,1612)
Tiempo <sup>2</sup>		0,9853 (0,0095)		0,9856 (0,0094)
Tiempo <sup>3</sup>		1,0003 (0,0002)		1,0003 (0,0002)
N	803	803	803	803
BIC	529,8213	526,1254	523,2155	519,7038
Log-Lik Full Model	-248,1898	-232,9651	-248,2311	-233,0985

Coefficientes exponenciados (*hazard ratios* y *odds ratios*). Errores estándar robustos (en clústeres por grupo armado) presentados entre paréntesis. \*  $p < 0,10$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*\*\*  $p < 0,01$

El primer par de modelos incluye la variable categórica de edad democrática previamente analizada. En esta diada, conformada por los *Modelos 2a* y *2b*, hemos tomado como categoría de referencia a aquellas democracias que, con al menos 5 años de duración, han superado ya una fase inicial de la transición política. En primer lugar, y en coherencia con los hallazgos hasta ahora expuestos, constatamos cómo frente a estas democracias postransición, los regímenes dictatoriales reducen de manera notable las probabilidades de desmovilización de las organizaciones armadas, aumentando su supervivencia. Así lo muestran los coeficientes exponenciados obtenidos en las estimaciones Cox y *logit*, cuyos valores inferiores a 1 (0,4410 y 0,3944 respectivamente) ponen de manifiesto una asociación negativa con la variable dependiente. El vínculo descrito es además considerablemente significativo desde el punto de vista estadístico, a un nivel de confianza del 95%. De especial interés resulta observar a continuación el comportamiento de los grupos insurgentes en las democracias más jóvenes. En ellas, frente a los sistemas democráticos de mayor

longevidad y grado de consolidación, el riesgo de finalización de la actividad armada es también significativamente menor. Los coeficientes (0,3755 y 0,2951) indican cómo la razón de ocurrencia del evento objeto de análisis, es decir, la producción de un desarme, se ve drásticamente reducida durante los primeros pasos de las democracias recién instauradas. Tal hallazgo se sitúa en la línea argumental que postula el recrudecimiento y persistencia de la contienda en los marcos de incertidumbre, desconfianza e inestabilidad propios de los momentos transicionales. Las estrategias y *tempo* de las organizaciones armadas no resultan, por tanto, ajenas a los procesos de cambio político. En este sentido, la paz democrática no parece un efecto inmediato de la apertura política del régimen, sino más bien un resultado a medio plazo asociado a su progresiva consolidación.

Los *Modelos 2c* y *2d* incluyen, por su parte, una transformación de nuestra variable categórica. Como se explicaba ya en el capítulo precedente, y en coherencia con los resultados hasta ahora expuestos, el régimen político ha sido codificado en este caso como variable *dummy* (*DemoPost*). De este modo, se otorga el valor ‘1’ a las democracias postransicionales, frente a los demás regímenes políticos – dictaduras y democracias jóvenes de menos de 5 años – a los que se asigna el ‘0’. Las estimaciones realizadas corroboran las tendencias anteriormente descritas, y son consistentes con los hallazgos previos. Así, los sistemas democráticos que han superado los primeros años de la transición y el cambio político multiplican por 2 – o más exactamente por 2,4 y 2,8 en función del cálculo del modelo – la razón de abandono de la actividad armada<sup>290</sup>. Dicha variable manifiesta, además, un nivel de significatividad del 99%. El camino

---

<sup>290</sup> Como ya advertimos en nuestro “libro de códigos”, Christina Schatzman (2005) incluye en su trabajo una operacionalización similar del concepto de consolidación democrática. Así, la autora contempla dicha dimensión como posible factor condicionante de los niveles de protesta política registrados, en la medida en que “se espera que los Estados más viejos se beneficien de la estabilidad que las normas y el poder institucionalizado proporcionan” (Schatzman, 2005: 302). No obstante, en su análisis empírico los modelos no parecen respaldar dicha hipótesis – si bien la asociación hallada entre rebelión y consolidación muestra el esperado signo negativo, ésta no resulta estadísticamente significativa –. Tal circunstancia podría deberse, sin embargo, a la ya comentada limitación de su marco temporal – inmerso en plena oleada democratizadora –, unida a la propia codificación de su variable de edad democrática. A diferencia de la pauta que aquí se adopta, Schatzman otorga un ‘1’ a aquellas democracias con una longevidad superior a los 10 años. Se trata de un criterio muy exigente que, por otra parte, muchos sistemas políticos de la región no cumplían aún en el momento de cierre de su ventana de observación. Como ya hemos comentado, la década de los ochenta fue, para América Latina, la década de los tránsitos hacia la democracia. La consolidación vendría más tarde, máxime bajo el establecimiento de un requisito de cómputo tan restrictivo.

hacia la consolidación democrática es también, de acuerdo con tales datos, el camino hacia la finalización de los enfrentamientos armados.

Como hemos podido constatar, las variables introducidas en el *Modelo 2* nos permiten incorporar, frente a las estimaciones previas, una perspectiva temporal y dinámica del tipo de régimen. Mediante su empleo es posible observar el impacto del cambio político y calibrar, de algún modo, los efectos de los procesos de transición y consolidación democrática sobre la actividad insurgente<sup>291</sup>. Los relatos históricos anteriormente referidos contribuyen también a ilustrar las dinámicas generales aquí descritas, apuntando en la misma dirección que nuestros hallazgos estadísticos sugieren. Así, por ejemplo, los países centroamericanos experimentaron elevados niveles de violencia política en los años inmediatamente posteriores a la llegada de la democracia. Según hemos visto, si bien es cierto que la apertura de espacios políticos jugó un papel fundamental en su desmovilización, ésta no se produjo de manera *automática* con el cambio de régimen. Por el contrario, tuvieron que pasar todavía algunos años hasta que logró alcanzarse la paz en la región.

Asimismo, se ha señalado cómo los escenarios de la transición política hacia la democracia fueron testigo de actividad armada en países tales como Argentina, Panamá, Perú<sup>292</sup> o Chile. Tomaremos como referencia este último ejemplo, mostrando algunas claves sobre el proceso de cambio de régimen iniciado tras la dictadura de Augusto Pinochet y su relación con los grupos rebeldes. El día 5 de octubre de 1988 los ciudadanos chilenos votaron por el ‘No’ en el referéndum sobre la continuidad del pinochetismo<sup>293</sup>. Como consecuencia de tal resultado, a finales del año siguiente se

---

<sup>291</sup> Comparativamente, los diversos modelos estimados dentro del *Modelo 1* muestran, de acuerdo con los valores del BIC y el *Log-likelihood*, una bondad del ajuste levemente superior – las diferencias se amplían en el caso concreto de la variable de inclusividad del sistema –. Sin embargo, los indicadores democráticos que en ellos se incluyen no contribuyen a captar las dinámicas de transición y consolidación que este trabajo analiza. Por este motivo, el *Modelo 2* será empleado como base para la estimación de los modelos presentados a lo largo de los próximos epígrafes.

<sup>292</sup> Fue precisamente la celebración de la primera elección presidencial tras la dictadura la que marcó el estallido de la violencia en este país andino. Así, Sendero Luminoso irrumpía en la escena pública peruana en el año 1980. Su primera acción, toda una declaración de intenciones, consistió en la quema de urnas y material electoral en el departamento de Ayacucho (Pereyra, 1997: 217; Cronin, 2009: 18). El conflicto armado, no obstante, se prolongaría en este caso durante más de una década. En epígrafes posteriores regresaremos sobre este ejemplo con el propósito de destacar las peculiaridades del final de la insurgencia en Perú, cuyas pautas de desmovilización escapan a las dinámicas globales previamente expuestas.

<sup>293</sup> La convocatoria de este plebiscito respondía al cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Constitución aprobada en 1980. Su propósito era determinar la continuidad de Pinochet en el poder



convocaban las elecciones que darían paso a un nuevo episodio democrático en Chile. Las urnas declaraban vencedor a Patricio Aylwin, candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia. La transición chilena daba, de este modo, sus primeros pasos. Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado por Soto Carmona (2009) en el que basaremos las siguientes líneas, este proceso de transformación política no estuvo exento de incidentes violentos de una cierta magnitud, que sacudieron al recién inaugurado sistema democrático<sup>294</sup>. Así, durante los quince primeros meses del mandato de Aylwin se registraron hasta 1.283 acciones subversivas, de las que un 43% fue llevado a cabo por organizaciones armadas; para junio de 1991 la violencia se había cobrado ya 25 víctimas mortales (Soto Carmona, 2009: 115-116)<sup>295</sup>.

La incertidumbre y la ambigüedad son, como ya señalamos con anterioridad, un elemento central en los procesos de transición política. En el caso chileno, la definición de las nuevas reglas de juego estuvo lastrada por la influencia de importantes “enclaves autoritarios”, que mantenían aún vigentes normas, valores y estructuras del antiguo régimen dictatorial (Garretón, 1995; 1997)<sup>296</sup>. Algunas organizaciones armadas plantearon entonces la ausencia de cambios sustantivos con la llegada de la democracia. Su desafío contra el sistema permanecería, por ello, activo a través del ejercicio de la violencia. Poco después de iniciada la transición política, el MAPU-Lautaro

---

durante un nuevo mandato de ocho años, es decir, hasta el 11 de marzo de 1997. Un 54,7% de los votos respaldaron la opción por el ‘No’.

<sup>294</sup> Su término de comparación en este estudio es la transición democrática en España. En este sentido, el autor subraya cómo la intensidad de las acciones terroristas, el repertorio de las mismas y su duración fue siempre mayor en el caso español (Soto Carmona, 2009: 115).

<sup>295</sup> Del total de acciones violentas registradas entre enero de 1990 y junio de 1992, el MAPU-Lautaro había sido artífice de un 56%, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-Autónomo) de un 32%, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de un 6,3% (Soto Carmona, 2009: 120). Durante el proceso de transición existió además, aunque en menor grado, violencia ejercida por grupos de extrema derecha, entre los que se encontraban el Comando 11 de Septiembre, Patria y Libertad o la Acción Chilena Anticomunista (ACHA) (Soto Carmona, 2009: 121-122).

<sup>296</sup> Garretón (1995: 149) alude a tres tipos fundamentales de “enclaves autoritarios”: a) el institucional, representado por la Constitución de 1980 y sus restricciones a la soberanía popular; b) el ético-simbólico, encarnado por los crímenes no resueltos de la dictadura; y c) la propia presencia de Pinochet y su entorno. La alargada sombra del dictador se proyectaba sobre la nueva democracia, con la firme voluntad de mantener su influjo sobre el país. Resultan enormemente reveladoras de tal circunstancia las declaraciones realizadas por Augusto Pinochet en 1989, poco antes de abandonar la presidencia. En ellas, y ante los posibles juicios futuros vinculados a las violaciones de los derechos humanos perpetradas bajo su mandato, advertía: “Yo no amenazo. No acostumbro amenazar. No he amenazado a nadie en mi vida. Yo sólo advierto una vez: «nadie me toca a nadie». El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de Derecho. Eso lo he dicho una vez y no lo repito más, pero que sepan que va a ser así. Bien clara la cosa” (cit. en Soto Carmona, 2009: 123-124).

proclamaba: “Ahora vemos que en siete meses de gobierno no se ha hecho nada por satisfacer las necesidades básicas de la población (...). Sería mentir decir que no hay ninguna diferencia, pero lo básico sigue igual” (cit. en Soto Carmona, 2009: 117). La resistencia de los jóvenes militantes del MAPU-Lautaro contra la dictadura y el neoliberalismo se extendía, así, más allá del cambio de régimen, envolviendo los orígenes del proceso democratizador (Briceño Ramírez, 2012). De modo similar, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) continuó sus operaciones armadas, aunque con menor intensidad y en medio de un fuerte debate interno, durante los primeros años de la democracia. Algunas de ellas, como el asesinato de Jaime Guzmán – senador de la Unión Democrática Independiente (UDI) – en 1991, tuvieron una enorme repercusión, planteando una amenaza para la frágil estabilidad del nuevo régimen.

Sin embargo, la actividad armada fue disminuyendo de manera paulatina a medida que la democracia chilena marchaba hacia su consolidación. Son diversos los mecanismos que contribuyen a explicar dicha circunstancia. En primer lugar, es preciso señalar el innegable impacto del cerco policial (Soto Carmona, 2009: 115, 120; Briceño Ramírez, 2012: 30). En 1991, durante el gobierno de Patricio Aylwin, se creaba el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, comúnmente conocido como “La Oficina”. Entre sus objetivos figuraba, precisamente, la tarea de neutralizar, desarticular y eliminar a las organizaciones subversivas activas en el país. La represión y persecución sin tregua llevada a cabo por el aparato estatal estrechó los márgenes de maniobra de la insurgencia, debilitando su capacidad operativa<sup>297</sup>. Por otro lado, y retomando la línea argumental de las dinámicas explicativas anteriormente expuestas, la democracia trajo también consigo la deslegitimación social de la violencia. El creciente rechazo de la ciudadanía a manifestaciones armadas de oposición política, cada vez más desacreditadas en el nuevo contexto democratizador, supuso un serio obstáculo para las organizaciones armadas, provocando su aislamiento y dificultando la renovación de la militancia (Briceño Ramírez, 2012: 31). Esa desvinculación de la organización con las masas era expresada del siguiente modo por una antigua militante del MAPU-Lautaro:

La gente efectivamente estaba contenta con el cambio (...). Yo creo que no hubo una capacidad para decir, paremos un ratito, veamos cómo nos conectamos y empezamos a poner más cabecita a esta visión, y

---

<sup>297</sup> Cabe recordar aquí que, durante los años de la transición en Chile, diversos organismos nacionales e internacionales acreditaron la continuidad de prácticas, como la tortura y el maltrato a prisioneros, que vulneraban los derechos humanos (Soto Carmona, 2009: 124-125).

más bien lo que pasa es que la acción se radicaliza, se defiende aún más la decisión de destruir el sistema, aunque para la mayoría de los chilenos, el representante de ese sistema era válido porque era democrático (cit. en Briceño Ramírez, 2012: 31).

En esta línea, Soto Carmona (2009: 115) señala cómo, junto a otros factores, la creación de condiciones objetivas que anularan los argumentos de los insurgentes – señala, por ejemplo, la excarcelación de presos políticos – facilitó a los nuevos gobiernos democráticos avanzar hacia el cese de los grupos armados. La inauguración del nuevo régimen supuso, en definitiva, la activación de una serie de dispositivos cuya acción conjunta coadyuvó al ocaso de la actividad insurgente en Chile.

Según hemos observado a través de nuestra evidencia empírica, los momentos de transición y cambio constituyen a menudo un caldo cultivo propicio para la presencia de actividad armada. Se trata de coyunturas en las que convive una complicada mezcla de elementos autoritarios y democráticos, que genera escenarios en muchos casos marcados por la ambigüedad y la debilidad del régimen todavía en ciernes. De este modo, la inestabilidad, las dudas y la incertidumbre del momento marcan el tránsito entre ambas formas de gobierno, afectando también a las estrategias de la insurgencia. La desconfianza inicial hacia los recién inaugurados sistemas democráticos es, de hecho, un lugar común entre las organizaciones armadas, que con frecuencia mantienen – e incluso incrementan – su desafío al Estado en los escenarios de transformación política. Sin embargo, frente a las aguas turbulentas de los periodos de transición, la progresiva consolidación de la democracia contribuye a amainar el temporal de la violencia. En América Latina el afianzamiento de los sistemas democráticos fue clave, en términos generales, para el final de las numerosas contiendas de carácter violento que se habían planteado en el subcontinente. La creciente estabilidad de los regímenes instaurados, la progresiva resolución de los problemas de compromiso surgidos en contextos de incertidumbre, y el fortalecimiento de los valores y principios democráticos generarían entornos propicios para el final de la lucha armada. Por ello, y de acuerdo con las *hipótesis 1a* y *1b*, puede concluirse que en el contexto latinoamericano democracia y pacificación transcurrieron, en buena medida, por sendas paralelas.

Para terminar, realizaremos una breve reflexión a la luz de los hallazgos efectuados por otras investigaciones similares sobre la supervivencia de organizaciones insurgentes. Como indicamos al comienzo de este trabajo doctoral, durante los últimos

años diversos autores han abordado también, desde una perspectiva empírica cuantitativa, las causas explicativas del cese de la actividad armada. Los estudios de autores como Jones y Libicki (2008), Blomberg et al. (2011), Young y Dugan (2010), Phillips (2011), Carter (2012) o Gaibullov y Sandler (2013) comparten el propósito de esclarecer los factores conducentes al final de la violencia. Todos ellos contemplan, como nosotros, el posible impacto del régimen político sobre la duración de los grupos armados. Sin embargo, sus resultados distan de los hasta ahora expuestos. En términos generales, los trabajos citados no encuentran evidencia empírica de la asociación entre ambas variables. La forma de gobierno no parece, de acuerdo con sus análisis, un elemento relevante para la supervivencia de las organizaciones armadas. Algunos abogan, incluso, por la existencia de un vínculo negativo entre democracia y desarmes, apuntando así en el sentido contrario al que se plantea en el presente estudio. En vista de tales resultados, parece conveniente plantear algunas hipótesis e intuiciones sobre el porqué de las divergencias observadas.

Más allá del posible impacto de cuestiones metodológicas como el tipo de operacionalización del régimen político o el set de variables considerado en cada uno de los modelos, esas discrepancias detectadas en los hallazgos podrían deberse, desde nuestra óptica, a razones de carácter más sustantivo. En particular, consideramos que la definición del marco geográfico y temporal, así como los rasgos específicos de las organizaciones insurgentes operativas en su seno, ofrecen algunas claves para comprender este rompecabezas. Tal afirmación respaldaría, además, la pertinencia e interés de un estudio de área de las características del que aquí presentamos. Los trabajos referidos incluyen en su delimitación del objeto de estudio a grupos armados de todo el globo a lo largo de varias décadas, albergando entre sus observaciones a movimientos con diferentes aspiraciones y carácter tanto doméstico como transnacional. Las muestras cuentan, de este modo, con la ventaja de la amplitud – su *N* oscila entre las 367 y las 2.024 organizaciones violentas –, una valiosa cualidad para la realización de estudios de carácter estadístico. Sin embargo, encierran en su interior fenómenos, contextos y organizaciones de muy diverso tipo, que podrían por tanto responder también a distintas motivaciones. Por lo que a esta investigación respecta, las exigencias impuestas a la definición de nuestra variable dependiente nos sitúan ante organizaciones de una cierta magnitud – con al menos 5 ataques registrados –, ámbito doméstico, naturaleza insurgente – se excluye a grupos vigilantistas o paramilitares –, y activas

dentro de un determinado contexto histórico: América Latina entre 1970 y 2000 (véase Cap. III, apartado 3.3.1.1). Estos elementos estarán en la base de las siguientes consideraciones.

De acuerdo con el recorrido efectuado hasta el momento a lo largo del subcontinente latinoamericano, hemos podido constatar cómo, entre la variedad de organizaciones insurgentes operativas en su territorio, existe un claro predominio de aquéllas que en un sentido amplio podríamos calificar como “revolucionarias”. Nos referimos, en particular, a los grupos armados entre cuyas demandas destaca la ampliación de los espacios de participación política, el cambio de régimen y la implementación de medidas redistributivas. Desde la perspectiva que aquí se sostiene, el comportamiento observado en las variables referidas a la forma de gobierno podría estar asociado, precisamente, a la naturaleza de esas demandas y a la potencial capacidad de los sistemas democráticos para darles respuesta. El propio establecimiento de regímenes poliárquicos e inclusivos constituye, en algunos casos, un avance en las reivindicaciones de la insurgencia, lo que explicaría una mayor propensión a abandonar entonces su estrategia de la lucha armada. Asimismo, la posibilidad de acceder al poder y las expectativas de redistribución futura asociadas a la democracia podrían contribuir a un descenso en los niveles de agitación social.

Sin embargo, podría aventurarse la existencia de escenarios en que los sistemas democráticos presentan debilidades específicas a la hora de gestionar y poner fin a cierto tipo de conflictos y reivindicaciones. En el caso del terrorismo internacional, Blomberg et al. (2010: 311) señalan cómo las organizaciones armadas transnacionales dirigen con frecuencia sus ataques hacia sociedades democráticas, siendo éste un componente central en su diseño estratégico. Del mismo modo, Pape (2003; 2005) incide en el hecho de que han sido precisamente los países con sistemas políticos democráticos – y fuerzas militares en el extranjero – quienes se han erigido en objetivos prioritarios de los ataques suicidas<sup>298</sup>. En este sentido, podrían plantearse también los posibles obstáculos hallados por la democracia a la hora de dar salida a demandas de

---

<sup>298</sup> Para explicar la incidencia de dichas modalidades de terrorismo en entornos democráticos, y como ya señalamos en epígrafes previos, los citados autores aluden a cuestiones como la búsqueda de una mayor atención mediática internacional, la supuesta vulnerabilidad atribuida a las democracias, la capacidad de influir en los gobiernos a través de los electores o las constricciones a la hora de tomar represalias y aplicar castigos por parte de este tipo de regímenes políticos (Pape, 2003: 349-350; Blomberg et al., 2010: 311).

carácter territorial o secesionista en conflictos con un perfil religioso, étnico o nacionalista<sup>299</sup>. Los mecanismos y microfundamentos derivados de la implantación de regímenes democráticos hasta ahora expuestos podrían ser insuficientes en los casos que aquí se mencionan. Desde esta perspectiva, las particularidades del contexto latinoamericano en que se ubican nuestras indagaciones contribuyen a enmarcar – e interpretar – los resultados obtenidos. Cuestiones tales como las oleadas dictatoriales de los años sesenta y setenta, los procesos democratizadores de los ochenta, el impacto de la política de bloques y sus disputas ideológicas, y la naturaleza de las demandas de los grupos armados de nuestra muestra tienen, probablemente, mucho que decir a la hora de comprender los vínculos entre violencia y tipo de régimen.

#### *4.2.1.2. Represión estatal y contrainsurgencia: ¿estímulo o disuasión de la actividad armada?*

Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos.

General Saint-Jean, Interventor de la Provincia de Buenos Aires, 1977  
(cit. en Gutiérrez y Villegas, 1998: 22)

El ejercicio de la represión estatal y las vulneraciones de los derechos humanos devinieron protagonistas funestos de la arena política latinoamericana a lo largo del marco temporal observado. Prácticamente todos los países del subcontinente, desde el Cono Sur hasta el istmo centroamericano, sufrieron el azote de este tipo de violencia, cuyas víctimas se cuentan por millares. De hecho, y pese a la fuerte presencia de actores violentos no estatales, el impacto del terror gubernamental fue superior al ocasionado por otros sujetos y formas de coerción, siendo responsable de un número desproporcionado de muertos, heridos, desaparecidos y represaliados (Wickham-Crowley, 1990: 215; Feldmann y Perälä, 2004: 105). Esta marea represiva fue impulsada, de manera fundamental, por los regímenes dictatoriales que impusieron su

---

<sup>299</sup> Algunos trabajos sobre el estallido de enfrentamientos armados sugieren, de hecho, la existencia de diferencias significativas en el impacto del régimen político según se trate de conflictos gubernamentales o territoriales (Buhaug, 2006; Cederman et al., 2010: 386). A este respecto, Buhaug (2006: 705) plantea que “los sistemas democráticos están particularmente bien diseñados para evitar un descontento público generalizado dirigido hacia el régimen. Sin embargo, incluso las democracias pueden albergar grupos con identidades desviadas, posiblemente fortalecidas por vínculos transnacionales. Tales grupos pueden desear emplear las armas para alcanzar la anhelada independencia”. Asimismo, autores como Phillips (2011) o Carter (2012) detectan distintas pautas de supervivencia en función de determinados objetivos y perfil ideológico de las organizaciones armadas.

dominio en la región durante los años de plomo del autoritarismo. Así, el desdén hacia la vida, la libertad y la integridad física de los ciudadanos se convirtió en un trágico punto de encuentro entre los gobiernos establecidos en países tales como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Nicaragua, El Salvador o Guatemala.

Sin embargo, no fueron los militares y autócratas del subcontinente los únicos que hicieron uso de la represión con el propósito de proteger y consolidar las relaciones de poder existentes. La responsabilidad por los abusos cometidos alcanza también a ciertas democracias latinoamericanas (Waldmann, 1995: 22; Feldmann y Perälä, 2004: 127-128, nota 15; Rivera, 2010). De este modo, la celebración de elecciones y el reconocimiento de derechos y libertades civiles han convivido, en numerosas ocasiones, con los excesos y tropelías de la violencia estatal. Ejemplos como el de Colombia, Guatemala, El Salvador o Perú, acreditan la complejidad de las relaciones trabadas entre el tipo de régimen político y el respeto a los derechos humanos. Por ello, si bien es cierto que en términos generales los sistemas democráticos hacen un uso menor de la represión estatal, también lo es que no puede establecerse una correspondencia unívoca entre ambos fenómenos. Es preciso, por tanto, considerar de manera complementaria los posibles efectos derivados de estas dos dimensiones, rechazando la falsa asunción de que el empleo ilegal de la violencia se encuentra restringido a los Estados sometidos a un régimen dictatorial. Democracia y derechos humanos no son, en la práctica, conceptos equivalentes.

La *hipótesis 1c* de este trabajo de investigación se sitúa en la estela de dichos planteamientos. El argumento que en ella se postula presume la existencia de una relación negativa entre los niveles de represión estatal y las probabilidades de finalización de la actividad insurgente. De acuerdo con esta perspectiva, la violencia emanada desde los Estados pone en funcionamiento una serie de mecanismos que, contra el impacto deseado, retroalimentan a la oposición armada, incrementando su supervivencia. De este modo, los frutos pacificadores de la poliarquía podrían verse inhibidos o erosionados en contextos en que las instituciones democráticas coexisten con el ejercicio de la represión estatal.

La Tabla 4.5 ofrece una aproximación descriptiva a los vínculos establecidos entre la violencia gubernamental y el cese de operaciones por parte de los grupos insurgentes latinoamericanos. Los resultados obtenidos constatan, en primer lugar, la

presencia de una relación globalmente significativa entre ambas variables. Así lo indican las probabilidades asociadas a los valores de la razón de verosimilitud y el  $\chi^2$  de Pearson para 2 grados de libertad (en ambos casos se observa una  $p < 0,05$ ). Si atendemos, además, a cada una de las casillas de nuestra tabla de contingencia, comprobamos cómo aquéllas vinculadas a las categorías extremas de la variable independiente ('Represión muy baja/baja' y 'Represión alta/muy alta') resultan también estadísticamente significativas. En dichas celdas los residuos ajustados muestran valores superiores al umbral crítico de  $|1,96|$  ( $|4,734|$  y  $|3,072|$  respectivamente), confirmando la relación entre tales categorías y la variable dependiente estudiada. Sin embargo, los niveles intermedios de represión estatal no parecen guardar, de acuerdo con el valor de los residuos ajustados ( $|0,628|$ ), una asociación significativa con el desarme de los grupos rebeldes.

**Tabla 4.5.** Fin de las organizaciones insurgentes según nivel de represión estatal (recodificada en tres categorías<sup>300</sup>). Porcentajes de columna

		Represión estatal		
		Muy baja/Baja	Media	Alta/Muy alta
Fin de la organización	No	77,55%	92,11%	92,78%
		(76)	(105)	(450)
		[-4,734]	[0,628]	[3,072]
	Sí	22,45%	7,89%	7,22%
		(22)	(9)	(35)
		[4,734]	[-0,628]	[-3,072]
<i>Pearson chi2 (2) = 22,4606    Pr = 0,000</i>				
<i>Likelihood-ratio chi2 (2) = 17,9094    Pr = 0,000</i>				

Frecuencias mostradas entre paréntesis. Residuos ajustados de cada casilla entre corchetes

Las frecuencias que se muestran en esta tabla sugieren, además, una fuerte incidencia del terror estatal en el subcontinente latinoamericano a lo largo del periodo analizado. Así, buena parte de las observaciones computadas se concentran en las categorías de represión media/alta/muy alta<sup>301</sup>, dibujando un panorama de violencia gubernamental sobre el que incidiremos más adelante. Finalmente, si atendemos a los

<sup>300</sup> Como ya se expuso en el capítulo metodológico, la variable de represión estatal incluida en nuestros análisis consta de cinco categorías, que serán tratadas de manera continua en la estimación de los modelos estadísticos. Sin embargo, a efectos de una mayor claridad expositiva, esta tabla de contingencia ha sido elaborada con una versión recodificada de la *Political Terror Scale (PTS)* según el siguiente esquema: '1'. 'Represión muy baja/baja' = Categorías '1' y '2' de la PTS; '2'. 'Represión media' = Categoría '3' de la PTS; '3'. 'Represión alta/muy alta' = Categorías '4' y '5' de la PTS.

<sup>301</sup> De hecho, el valor medio de nuestra variable de represión estatal para el conjunto de la base de datos asciende a 3,810617 (sobre un total de 5), con una desviación típica de 1,188427.



porcentajes de columna expuestos, constatamos que sus magnitudes apuntan en la misma dirección que la hipótesis formulada. De este modo, tan sólo un 7,22% de las observaciones registradas en contextos de represión estatal severa es testigo de la finalización de alguna organización armada. No obstante, la proporción de desmovilizaciones se eleva hasta un 22,45%, algo más del triple, cuando el Estado garantiza y cumple con el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. De acuerdo con estos datos, la violencia gubernamental parece haber sido un instrumento escasamente efectivo para el combate de la insurgencia en la región.

Sin embargo, para comprobar la veracidad de nuestra tercera hipótesis (*H1c*) es preciso trascender el mero análisis descriptivo de los datos. Para ello, el *Modelo 3* incorpora de manera simultánea, junto al resto de controles considerados<sup>302</sup>, las dos variables explicativas que nos ocupan (democracia y represión estatal), con la intención de constatar los efectos de cada una de ellas sobre la trayectoria de las organizaciones insurgentes latinoamericanas. La Tabla 4.6 muestra los resultados de tal ejercicio. Como puede constatar, los hallazgos que a continuación se exponen resultan de la adición del índice de represión estatal y respeto a los derechos humanos al *Modelo 2* presentado en páginas previas. Las nuevas estimaciones realizadas incluyen un menor número de observaciones, viendo reducida su *N* desde los 803 casos inicialmente registrados en la base de datos hasta un total de 697. Este decremento se debe a las restricciones del arco temporal comprendido por la *Political Terror Scale (PTS)* de Gibney et al. (2010), cuyo punto de partida se sitúa en el año 1976<sup>303</sup>. Por tanto, las observaciones y unidades de análisis que desarrollaron su actividad en el primer lustro de los años setenta quedarán excluidas de aquellas estimaciones en las que incorporemos este *proxy* de la violencia estatal. Cabe reseñar también cómo, en todo caso, la inclusión de dicha dimensión mejora sustancialmente la bondad del ajuste de nuestros modelos. Tanto el BIC como el logaritmo de la verosimilitud (*Log-likelihood*) indican que todos los modelos parciales que componen este tercer bloque son sistemáticamente mejores a aquéllos en que no se consideraba aún el posible efecto de la represión ejercida por los Estados.

---

<sup>302</sup> Como puede observarse, el PIB *per cápita* se excluye, a partir de ahora, de todos los modelos estimados, debido a su elevado grado de correlación (-0,5157) con nuestra variable de represión estatal. Según señalamos anteriormente, el Anexo A Tabla A7 recoge los coeficientes de correlaciones entre todas las variables contempladas en el estudio, por lo que remitimos a él para más información a este respecto.

<sup>303</sup> La variable de represión estatal presenta, además, información incompleta para las observaciones de Ecuador en los años 1983 y 1984 y Venezuela en 1982.

**Tabla 4.6.** Estimaciones Cox y *logit* para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. *Modelo 3: El efecto de la represión estatal*

	<i>Cox</i>		<i>Logit</i>	
	<i>Modelo 3a</i>	<i>Modelo 3b</i>	<i>Modelo 3c</i>	<i>Modelo 3d</i>
Población	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000* (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9869** (0,0051)	0,9843*** (0,0060)	0,9867*** (0,0049)	0,9847** (0,0059)
Categoría de ref:	Demo postransición			
<i>Dictadura</i>	0,5429* (0,1876)	0,5236* (0,1945)		
<i>Demo transición</i>	0,1750** (0,1233)	0,1440*** (0,1046)		
Demo postransición (0/1)			2,4958*** (0,8203)	2,7773*** (0,9916)
Represión estatal	0,7782*** (0,0743)	0,7365** (0,0884)	0,7740*** (0,0744)	0,7331*** (0,0874)
Tiempo		1,2043 (0,1720)		1,1942 (0,1705)
Tiempo <sup>2</sup>		0,9883 (0,0101)		0,9888 (0,0101)
Tiempo <sup>3</sup>		1,0002 (0,0002)		1,0002 (0,0002)
N	697	697	697	697
BIC	442,5413	464,0088	438,4928	460,7277
<i>Log-Lik Full Model</i>	-204,9037	-202,5439	-206,1528	-204,1767

Coefficientes exponenciados (*hazard ratios* y *odds ratios*). Errores estándar robustos (en clústeres por grupo armado) presentados entre paréntesis. \*  $p < 0,10$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*\*\*  $p < 0,01$

Los resultados obtenidos en el *Modelo 3* respaldan nuestra *hipótesis 1c*. Las prácticas represivas mantienen, según los cálculos realizados, una relación negativa con la desactivación de las organizaciones insurgentes. Su coeficiente en torno 0,7 – inferior, por tanto, al valor 1 – expresa cómo los incrementos de la violencia estatal irán acompañados de una reducción en la razón de ocurrencia de los desarmes en América Latina. Los escenarios en que el Estado viola de manera persistente los derechos humanos tienden, por tanto, a prolongar la duración de los grupos armados que actúan en su interior. Esta variable resulta además estadísticamente significativa en todos y cada uno de los modelos expuestos, con un nivel de confianza de entre el 95% y el 99%. Por consiguiente, la represión aparece, en términos generales, como una estrategia contraproducente para la clausura de los desafíos armados planteados a la autoridad del Estado. El empleo de medidas tales como la tortura, las desapariciones, los encarcelamientos por motivos políticos y el asesinato contribuye, en realidad, a perpetuar la contienda violenta.

Los nuevos modelos estimados con la introducción del índice de terror estatal confirman, asimismo, los supuestos planteados hasta el momento en relación al tipo de régimen imperante. Las variables vinculadas al impacto de la democracia sobre la insurgencia mantienen el sentido de la asociación detectada en los modelos previos, si bien con ciertas alteraciones en los coeficientes y grado de significatividad<sup>304</sup>. Como vemos, aun controlando por la variable de represión gubernamental, las dictaduras y democracias jóvenes en periodo de transición disminuyen, frente a las democracias de mayor edad, las probabilidades de finalización de la actividad armada. Según habíamos concluido con anterioridad, son los sistemas democráticos postransicionales, es decir, aquéllos que caminan hacia la consolidación del régimen, quienes constituyen los marcos más favorables para el cese de la lucha insurgente. Democracia y represión, indicadores ambos del grado de apertura y oportunidades de acceso a la arena política, emergen así como factores relevantes para el estudio de la violencia subversiva. A la hora de comparar la magnitud de sus efectos es preciso, no obstante, estandarizar los coeficientes estimados debido a las diferencias de escala existentes entre las dos variables. Si atendemos, por ejemplo, al último de los modelos presentados (*Modelo 3d*), dicha estandarización revela diferencias sustanciales respecto a las *odds ratios* mostradas en la tabla. De este modo, comprobamos cómo ante el incremento de una desviación típica en la variable independiente, la razón de finalización de los grupos armados se multiplica por 1,6491 en el caso de las democracias postransición, y por 0,6915 en lo que a la represión estatal respecta. Sin embargo, según advierten Escobar et al. (2009: 403-404), estas variaciones positivas y negativas en los cocientes de razones son difícilmente comparables de manera inmediata. Mientras que los efectos negativos varían en un rango comprendido entre 0 y 1, los positivos pueden oscilar entre 1 e infinito. Por este motivo, la solución que dichos autores proponen consiste en el cálculo del valor inverso de uno de los datos objeto de comparación. Si llevamos a cabo tal operación, observamos que el efecto negativo de la variable de represión estatal es de 1,4461, muy similar – aunque ligeramente inferior – al impacto derivado de los sistemas democráticos postransición.

En vista de los resultados que arrojan los modelos estimados, podemos concluir que la represión estatal contribuyó a avivar las llamas de la insurgencia en América

---

<sup>304</sup> Destaca, en particular, cómo la introducción de la represión estatal en el modelo sustrae parte de su significatividad a la categoría ‘Dictaduras’ de la variable de régimen político, reduciéndose a un nivel de confianza del 90%.

Latina. La mayor parte de los grupos armados de nuestra muestra actuó en contextos caracterizados por un elevado nivel de violencia emanada desde los Estados. El caso guatemalteco es un claro ejemplo de la magnitud alcanzada por el terror gubernamental en la región. El informe “Guatemala: Nunca más”, redactado por el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de Memoria Histórica (REMHI) (1998) bajo la dirección de Juan Gerardi<sup>305</sup>, reveló los terribles abusos cometidos contra la población civil durante las décadas de conflicto armado. Las investigaciones realizadas documentaron miles de vulneraciones de los derechos humanos registradas entre los años 1960 y 1996. En torno a un 90% de las mismas fueron atribuidas al ejército guatemalteco, la policía, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y los Escuadrones de la Muerte, mientras que menos del 10% se consideró responsabilidad de la guerrilla. Las cifras sobre el saldo de víctimas resultan aterradoras. Se estima que hubo 200.000 muertos y desaparecidos, un millón de desplazados internos, más de 400 aldeas arrasadas, y miles de casos de torturas, vejaciones y violaciones masivas<sup>306</sup>. La violencia en Guatemala supuso, además, un genocidio contra la población indígena. Las comunidades mayas sufrieron con especial crudeza el racismo y la brutalidad de las prácticas contrainsurgentes, convirtiéndose en víctimas de todo tipo de atrocidades y masacres sistemáticas<sup>307</sup>.

El terror impuesto por el Estado guatemalteco, si bien supera en envergadura al registrado en otros regímenes de la región, no fue en absoluto una excepción en el subcontinente latinoamericano. Organismos nacionales e internacionales, así como las Comisiones de la Verdad impulsadas en diversos países tras las dictaduras y conflictos

---

<sup>305</sup> Dos días después de la publicación del informe, el 26 de abril de 1998, Monseñor Gerardi muere asesinado en el garaje de la casa parroquial. En 2001, tres oficiales del Ejército, y un sacerdote en calidad de cómplice, fueron condenados por el asesinato. No obstante, este crimen continúa siendo a día de hoy una cuestión polémica sobre la que se ciernen numerosas dudas, sospechas y controversias en torno a su proceso judicial y autoría intelectual. Por ello, diversos trabajos como *The art of political murder*, escrito por Francisco Goldman (2008), han seguido indagando en las circunstancias que rodearon a la muerte del obispo Gerardi.

<sup>306</sup> El informe “Guatemala, memoria del silencio”, desarrollado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (1999) bajo el auspicio de las Naciones Unidas, ofrece testimonios y datos similares sobre la magnitud de la violencia en este país centroamericano, ratificando el alcance de la barbarie.

<sup>307</sup> El 10 de mayo de 2013 Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos contra el pueblo maya Ixil durante su gobierno *de facto* entre 1982 y 1983. El tribunal consideró probada su responsabilidad por la matanza de 1.771 indígenas en el departamento de Quiché. Sin embargo, la sentencia fue anulada poco después por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca debido a supuestas irregularidades en el trámite de una recusación presentada por la defensa del exdictador. En el momento de escribir estas líneas, el caso continúa abierto a la espera de un nuevo juicio, mientras las víctimas reclaman el fin de la impunidad en Guatemala.

armados desarrollados en el último tercio del siglo XX, han dado fe de los crímenes perpetrados. En El Salvador, la represión estatal y la colaboración de los Escuadrones de la Muerte en la “guerra sucia” contra la oposición política resultaron en miles de muertos, en su mayoría civiles, entre 1980 y 1991 (Comisión de la Verdad para El Salvador, 1993)<sup>308</sup>. Las políticas de exterminio y “tierra arrasada” tenían como objetivo, según se dijera entonces, “quitarle el agua al pez”, es decir, ahogar a la insurgencia suprimiendo toda base de apoyo – efectivo o potencial – a las organizaciones de la guerrilla. Matanzas campesinas indiscriminadas como las masacres de El Mozote en 1981, en las que perecieron a manos del ejército salvadoreño más de 800 personas – incluyendo hombres, mujeres y niños –, respondieron a esa lógica macabra.

Las dictaduras militares del Cono Sur fueron también tristemente conocidas por el alcance de la violencia ejercida desde el Estado y sus continuas vulneraciones de los derechos humanos. En el transcurso de la última dictadura militar argentina (1976-1983), las fuerzas de seguridad asesinaron a entre 10.000 y 30.000 personas en su lucha contra el “enemigo interno” (Gutiérrez y Villegas, 1998: 19). Las investigaciones posteriores dieron cuenta de la existencia de al menos 8.961 desaparecidos y 340 centros clandestinos de detención y tortura (CONADEP, 1984). En Chile, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada para la desarticulación y eliminación de todo elemento social considerado subversivo, se convertía en símbolo del terror y la barbarie estatal, siendo responsable de numerosos casos de asesinato, tortura y secuestro durante la dictadura de Augusto Pinochet. La represión adquirió, además, carácter supranacional a través de la Operación Cóndor, inspirada por la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional (Gutiérrez y Villegas, 1998: 20-23; McSherry, 2002). Según vimos anteriormente, se articuló toda una política de cooperación en el control y supresión de la disidencia en la que participaron numerosos países sudamericanos. Esta red clandestina de violencia estatal instrumentó la desaparición y muerte de opositores chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, bolivianos, etc.

Pero la represión no fue, como ya dijimos, exclusiva de contextos dictatoriales. Por ejemplo, la democracia colombiana ha sido testigo – y víctima –, junto a la

---

<sup>308</sup> El asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero se convirtió en un símbolo de la crudeza mostrada por la actividad represora desplegada en El Salvador. Este sacerdote, defensor de los derechos humanos y crítico de la violencia y la injusticia, fue asesinado por un Escuadrón de la Muerte mientras oficiaba misa en la capilla del hospital La Divina Providencia el 14 de marzo de 1980.

actividad de las organizaciones insurgentes, de la violencia desplegada por el Estado y los grupos paramilitares. A lo largo del conflicto armado, las fuerzas de seguridad han protagonizado ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y acoso a la población civil con el propósito de neutralizar los desafíos y amenazas planteados al poder establecido (Feldmann y Hinojosa, 2009). Destaca, asimismo, la frecuente connivencia o tolerancia por parte de los agentes estatales hacia las acciones violentas llevadas a cabo por el paramilitarismo (Avilés, 2006)<sup>309</sup>. El terror sembrado por estas organizaciones de extrema derecha, entre las que destacan estructuras como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha alcanzado dimensiones colosales, convirtiéndose en responsables de una gran parte de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el país a lo largo de las últimas décadas<sup>310</sup>. Su existencia ha estado vinculada no sólo a los objetivos contrainsurgentes del Estado colombiano, sino también a la defensa de los intereses de grandes terratenientes y narcotraficantes. Prácticas como las masacres, los asesinatos selectivos – sindicalistas, comunistas, líderes de organizaciones populares y activistas de los derechos humanos han sido víctimas prioritarias de la violencia paramilitar – o el desplazamiento forzoso de miles de campesinos expulsados de áreas tomadas bajo su control – fundamentalmente territorios ricos en recursos naturales – figuran en el oscuro haber de estos grupos (Feldmann, 2005: 25-28; Avilés, 2006). Todo ello ha ido tejiendo un complejo entramado en el que la violencia insurgente, la violencia criminal, la represión estatal y la represión paraestatal conforman un funesto teatro de operaciones.

Como ya explicamos, la tendencia general detectada en el análisis cuantitativo de los datos sugiere que los escenarios represivos sirvieron, en América Latina, de estímulo y acicate para la actividad insurgente. Trabajos como el de Feldmann y Perälä (2004) o Christina Schaztman (2005) apuntan también en esta misma dirección, propugnando la existencia de una asociación positiva entre las vulneraciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales y la violencia de carácter

---

<sup>309</sup> Avilés (2006: 381) alude, en este sentido, a una cierta limitación de las prácticas *directas* de contra-insurgencia por parte del Estado colombiano, en favor de una participación más sutil e *indirecta* a través de los grupos paramilitares, fundamentalmente desde los años noventa. Afirmar, así, la existencia de un proceso de privatización de la represión “por el que la responsabilidad de perseguir a individuos y comunidades sospechosos de simpatía con los movimientos guerrilleros fue en gran medida desplazado a grupos privados de civiles armados”.

<sup>310</sup> Según datos de la Comisión Colombiana de Juristas, referidos por William Avilés (2006: 403), en el año 2000 las guerrillas fueron responsables de un 16,3% de las muertes y desapariciones forzosas de no combatientes, las fuerzas de seguridad de un 4,6% y las organizaciones paramilitares de un 79,2%.

subversivo. La represión gubernamental asegura el bloqueo de los canales de acceso a la arena política. La rebelión es percibida, entonces, como única alternativa posible – y realista – para el ejercicio de la oposición y el disenso por parte de la ciudadanía. Las posiciones de carácter moderado, reformista y legalista parecen no tener cabida en entornos dominados por el terror del Estado, quedando frecuentemente desplazadas en favor de opciones políticas más radicales. De este modo, la violencia estatal se torna una estrategia altamente contraproducente para el gobierno, capaz de fortalecer a quienes desafían su poder. Jeff Goodwin (2001: 142-213) defiende esta hipótesis en su trabajo sobre los movimientos revolucionarios en Centroamérica<sup>311</sup>. De acuerdo con el autor, la fuerte represión llevada a cabo en países como Guatemala, El Salvador o la Nicaragua de Somoza reclutó, de manera no intencionada, a cientos de miembros para las organizaciones armadas operativas en su territorio. Víctor Perera (1993: 106-107) describe del siguiente modo los efectos de las masacres llevadas a cabo por el Estado en ciertas comunidades indígenas de Guatemala:

[Las ejecuciones en Chajul] tuvieron el efecto contrario al que [las autoridades estatales] pretendían. Cientos de ixiles continuaron uniéndose al Ejército Guerrillero de los Pobres; y miles proporcionaron al EGP comida, refugio e información sobre los movimientos del ejército. Para el año siguiente [1980], el propio ejército estimó que aproximadamente la mitad de la población del triángulo [Ixil, en el norte de El Quiché] se había convertido en colaborador activo o potencial de los insurgentes (cit. en Goodwin, 2001: 163).

La búsqueda de amparo frente a las agresiones del Estado incentivó el ingreso de la población en numerosas organizaciones de la insurgencia, ampliando el número de militantes que se contaban entre sus filas. De acuerdo con Francisco Herreros (2005b: 152-153), la aleatoriedad del terror estatal aplicado en casos como el salvadoreño hizo de la pertenencia a los grupos rebeldes una estrategia racional de autoprotección y actuó como estímulo de la movilización popular armada. De modo similar, en su estudio sobre la revolución sandinista en Nicaragua, Carlos M. Vilas (1986: 112-113) señalaba cómo “el carácter indiscriminado – y finalmente genocida – de la represión (...) convirtió a la rebelión y participación activa en la lucha revolucionaria en una cuestión defensiva – de vida o muerte –” (cit. en Goodwin, 2001: 162). Así lo expresaba una madre

---

<sup>311</sup> Recordemos cómo, según señalamos ya en una nota previa, Goodwin (2001: 169-176) sostiene, junto a otros autores, que el reformismo militar y los niveles relativamente menores de represión estatal registrados en Honduras se encuentran en la base del llamado “excepcionalismo hondureño”, contribuyendo a dar cuenta de la incidencia limitada de la actividad insurgente en comparación con los demás países de su entorno.

nicaragüense de Estelí, cuyo esclarecedor testimonio era también recogido por el mencionado autor (Vilas, 1986: 122): “Y yo le dije a mis chavalos que mejor se metían en el Frente, porque si no, de todos modos la Guardia me los mataba, por ser jóvenes no más, figúrese” (cit. en González, 2012b: 109)<sup>312</sup>.

La violencia estatal era, de este modo, generadora de nuevos agravios. Los abusos cometidos contra la población civil intensificaban el rechazo hacia un Estado carente de legitimidad como consecuencia de las barbaries cometidas. Cuando la familia, los amigos y los compañeros son asesinados, torturados o desaparecidos, son muchas y muy intensas las razones que pueden empujar al combate de la autoridad vigente. Resultan ilustrativas, en este sentido, las palabras de Salvador Samayoa, excomandante del FMLN salvadoreño, recogidas en una entrevista realizada en 1990 con Jorge Castañeda (1995: 286):

Yo creo que la gente tiene motivos de lucha diferentes a los que ha adquirido una dirigencia más sofisticada. (...) Muchas veces no le queda otra opción, como en el caso del campesinado, un componente tan importante de la lucha en El Salvador, que se unió a la guerrilla porque no podía estar en el otro bando, que simplemente asesinaba a sus familias. Los campesinos saben desde que nacieron que el ejército es malo y que las guerrillas están en contra del ejército.

La rabia, la indignación y la ira ante la injusticia y el maltrato al que era sometida la ciudadanía – esas *passionate politics* de las que hablaban Goodwin, Jaspers y Polleta (2001a) – jugaron también, por tanto, un papel destacado en la perpetuación de la lucha armada latinoamericana. Wickham-Crowley (1990) alude a las frecuentes reacciones combativas generadas en el campesinado de la región como resultado del terror estatal practicado durante la primera oleada insurgente. La cólera desatada debido a las vulneraciones de los derechos humanos perpetradas por los agentes gubernamentales facilitó, en numerosas ocasiones, nuevos alistamientos para los movimientos rebeldes. De acuerdo con el citado autor, una de las organizaciones de la guerrilla venezolana sugería, en este sentido, que “había probablemente un nuevo recluta por cada mujer violada por los soldados” (Wickham-Crowley, 1990: 234). Este impacto de la furia ante las masacres y asaltos de los que fue víctima la población civil

---

<sup>312</sup> Si bien aquí hemos aludido, en coherencia con la referencia anterior, al texto de la obra de Vilas traducido al inglés por Judy Butler, Secundino González refiere la versión original del libro en castellano, publicado en 1984 bajo el título *Perfiles de la revolución sandinista* por la Casa de las Américas en La Habana.



era expresado, de manera descarnada, por un campesino guatemalteco mediante la siguiente sentencia: “Lucho bien porque odio bien” (Wickham-Crowley, 1990: 235).

Sin embargo, y a pesar de las tendencias generales descritas, es preciso señalar también cómo determinados grupos armados de la región sucumbieron a la represión ejercida por las fuerzas del Estado. En tales casos, la violencia gubernamental sirvió de herramienta de constricción, e incluso disuasión, de la actividad insurgente. Organizaciones como los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina fenecieron víctimas del terror estatal. Entre 1969 y 1979, este país fue testigo de una oleada de violencia insurgente en la que se registraron más de 4.000 incidentes en los que murieron 920 personas (Moyano, 1999: 239; Rasmussen, 2010: 1). Inicialmente, y en coherencia con las dinámicas previamente expuestas, el ejercicio de la represión resultó desfavorable para las autoridades estatales. La violencia gubernamental proporcionó argumentos para la subversión y fortaleció a unas organizaciones armadas que contaban, además, con un considerable nivel de apoyo social vinculado a su combate contra un régimen dictatorial ilegítimo<sup>313</sup>. De hecho, según un sondeo de opinión realizado en 1971, un 45,5% de los encuestados en el Gran Buenos Aires, y hasta un 49,5% en el interior del país, consideraba “justificada” la lucha armada (Moyano, 1999: 237; Rasmussen, 2010: 5). Sin embargo, la violencia ejercida por los escuadrones de la muerte – entre los que destacó la temible Triple A<sup>314</sup> – y la ya mencionada barbarie estatal desatada tras el golpe militar de 1976<sup>315</sup> acabarían

---

<sup>313</sup> En 1966, tras el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía, había dado comienzo la autoproclamada “Revolución Argentina”, un nuevo periodo de dictadura militar que finalizaría en 1973 (Moyano, 1999: 235-236). Ese régimen encarnó una forma de Estado que Guillermo O’Donnell (1996) definiría más tarde como modelo burocrático-autoritario.

<sup>314</sup> La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), generalmente conocida como Triple A, inició su actividad a finales de 1973 – después, por tanto, del retorno de la democracia con las elecciones de marzo de ese año, en las que fue elegido presidente el candidato de Perón, Héctor José Cámpora –. Se trató de un grupo paramilitar de la extrema derecha peronista, liderado por José López Rega, Ministro de Bienestar Social. Se la considera responsable de la desaparición y muerte de cientos de personas, entre los que se encuentran intelectuales, periodistas, artistas, sindicalistas y políticos de la izquierda argentina.

<sup>315</sup> En marzo de 1976 se inauguró el “Proceso de Reorganización Nacional”, nombre con el que los golpistas apelaron a la dictadura de las Juntas Militares que gobernaría el país hasta 1983, bajo las presidencias de Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone. La retórica sobre la *necesidad* de la intervención militar, y su lectura en términos de *cruzada* que habría de poner fin a la *sedición*, fue una constante en ésta y otras dictaduras de la región. Leopoldo Galtieri lo expresaba con las siguientes palabras: “Fue necesario que el ejército argentino y las restantes fuerzas armadas se unieran para erradicar ese azote (...) que ponía en peligro la existencia misma de la Patria (...). En este país no hubo ni pudo haber ninguna violación de los derechos humanos.

por acorralar a las organizaciones rebeldes. Sus militantes fueron literalmente exterminados; en torno al 80% de los miembros del ERP y Montoneros murieron como consecuencia de la “guerra sucia” (Rasmussen, 2010: 13). En palabras de María Rasmussen (2010: 25), “el terrorismo en Argentina terminó como consecuencia de otra campaña de terror, de diferente orientación ideológica”. De este modo, siguiendo con los planteamientos de dicha autora, la magnitud e intensidad de la violencia practicada por los agentes estatales, unida a la progresiva pérdida de respaldo popular hacia los grupos armados tras su decisión de continuar la lucha insurgente más allá del retorno de la democracia – y de Perón – en 1973<sup>316</sup>, figuran entre los factores explicativos de dicho desenlace.

En el país vecino, Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) había tenido un destino similar. Durante sus primeros años de lucha, iniciada a mediados de los sesenta, los sucesivos golpes del gobierno a la organización armada habían provocado la activación de mecanismos de solidaridad que fortalecieron su posición. Waldmann (2010: 8-9) señala, en este sentido, cómo la censura a la prensa y las duras medidas represivas adoptadas por el presidente Pacheco Areco tuvieron un efecto polarizador, acabando por situar a los sectores progresistas de la sociedad del lado de la insurgencia. Sin embargo, cuando ante la fortaleza creciente de la organización armada el gobierno decidió encomendar al ejército la lucha contrainsurgente – hasta entonces en manos de la policía –, la suerte de los rebeldes cambió de manera radical. En tan sólo algunos meses, a finales de 1972, la organización había sido prácticamente desarticulada<sup>317</sup>. Al año siguiente, en junio de 1973, las fuerzas armadas daban un golpe de Estado; su dictadura se prolongaría durante más de diez años. Según el mencionado autor, “los militares habían tomado su rápida victoria [sobre los insurgentes] no sólo como prueba de sus cualidades profesionales, sino también de su superioridad moral y política sobre el resto de la sociedad y

---

Hubo una guerra, una guerra absurda, desencadenada por una barbarie traicionera y criminal” (cit. en Smith, 2009: 90).

<sup>316</sup> Ese mismo año, el nuevo presidente electo, Héctor José Cámpora, anunció en su discurso inaugural una amnistía para todos los combatientes, así como la legalización de las organizaciones armadas (Moyano, 1999: 237). En el mes de junio, Perón regresaba definitivamente a Argentina.

<sup>317</sup> Conviene recordar que, a pesar de que fue entonces cuando tuvo lugar final de su actividad armada, esto no significó también el final de su recorrido político. Según expusimos con anterioridad, con el retorno de la democracia a Uruguay en 1985 numerosos miembros del MLN-T decidieron, tras años de cautiverio y exilio, participar en la nueva vida democrática del país a través de su integración en el Frente Amplio.

especialmente sobre la clase política” (Waldmann, 2010: 9-10). Sin embargo, cabría preguntarse aún, ¿por qué una organización del tamaño del MLN-T fue derrotada de una manera tan abrupta?, ¿qué hizo que la represión estatal cumpliera en este caso con sus propósitos? Peter Waldmann (2010: 18 y ss.) ofrece múltiples respuestas a dichos interrogantes. Por un lado, apunta a la juventud e inexperiencia de los militantes Tupamaros, en contraposición a la efectividad del ejército y su formación en tácticas antsubversivas. Asimismo, la relativa escalada de violencia protagonizada por los rebeldes en su última etapa hizo que las clases medias fueran retirándoles su simpatía<sup>318</sup>. Finalmente, y en la línea de los postulados generales que se han ido planteando en páginas previas, el mencionado autor sostiene que el carácter democrático del sistema que los insurgentes trataban de derrocar restó apoyos a la organización por parte de la ciudadanía, reacia a atacar a un gobierno que ellos mismos habían elegido.

Para terminar, haremos una breve referencia al caso del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL). Como ya señalamos, la organización dio sus primeros pasos en pleno proceso de transición democrática en el país andino. De acuerdo con Audrey K. Cronin (2009: 125), la ineptitud en el uso de la fuerza por parte del gobierno peruano sirvió inicialmente para impulsar la campaña de violencia promovida por la organización. Los agentes estatales llevaron a cabo más de 7.300 ejecuciones extrajudiciales, un 45% de las cuales tuvo lugar entre 1983 y 1985; en aquella etapa, marcada por el racismo de los cuerpos de seguridad del Estado hacia el campesinado, eran asesinados 39 civiles por cada muerto procedente de las filas de la policía o el ejército (Cronin, 2009: 126). Las vulneraciones de los derechos humanos por parte del poder vigente fueron una constante en la guerra de contrainsurgencia peruana. Las víctimas del terror estatal trascendían los límites de las organizaciones insurgentes, fundamentalmente Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), afectando sobremanera a población civil no armada que hubo de soportar los abusos cometidos por ambas partes contendientes. En este sentido, Felipe Mansilla (1999: 286) sostiene que “los éxitos que entonces [entre 1984 y 1990] conocieron Sendero y el MRTA se debieron en gran parte a que la población campesina

---

<sup>318</sup> En todo caso, Audrey K. Cronin (2009: 131) señala cómo, en términos comparados, frente al limitado número víctimas mortales provocadas por la actividad armada de los Tupamaros, la represión desplegada por los militares tras el golpe de Estado de 1973 significó la muerte, tortura y desaparición de miles de ciudadanos uruguayos.

de la sierra central se sintió realmente afectada por la violencia indiscriminada de las fuerzas armadas”.

Sin embargo, el Estado consiguió finalmente neutralizar a las organizaciones rebeldes operativas en su territorio, al tiempo que la democracia sufría un severo proceso de erosión (Basombrío, 1999). De hecho, en el mes de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori suspendía el Congreso y la Judicatura, protagonizando un “auto-golpe de Estado” que incrementaba el poder del Ejecutivo. Buena parte de la población, cansada ya de la crisis y el conflicto del armado, vio entonces con buenos ojos la instauración de un “gobierno fuerte” en el que los elementos autoritarios tenían un peso cada vez mayor (Basombrío, 1999: 218; Cronin, 2009: 127). Por lo que respecta a la lucha contrainsurgente, medidas como la mejora de los servicios de inteligencia o el fortalecimiento de las denominadas “rondas campesinas”<sup>319</sup>, contribuyeron a poner fin a la actividad armada de los senderistas. El 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán, líder del PCP-SL conocido como “Presidente Gonzalo”, era capturado junto a otros dirigentes de la organización. Ésta se había distinguido por su marcado carácter jerárquico, acompañado por un culto a la personalidad de su caudillo que adquiría tintes cuasi religiosos, convirtiéndolo en guía político y espiritual de sus militantes a través del “Pensamiento Gonzalo”. Esa influencia desmesurada del líder hizo de su captura un auténtico golpe de gracia para el grupo armado; sus imágenes entre rejas, con un traje a rayas de presidiario, constituyeron un varapalo del que ya no podría recuperarse. En los meses siguientes aumentaron las deserciones y disminuyó la actividad insurgente<sup>320</sup>.

---

<sup>319</sup> Diversos autores coinciden en destacar el papel que las llamadas rondas campesinas contrasubversivas jugaron en la derrota de Sendero Luminoso (v.g. Mansilla, 1999: 293; McClintock, 1999: 235, 237). Se trataba de comités para la autodefensa armada de las zonas rurales frente a la actividad violenta de las organizaciones insurgentes. El rechazo cada vez mayor del campesinado hacia el PCP-SL y la creciente dotación de recursos, formación y adoctrinamiento a los ronderos por parte de las fuerzas armadas, fortaleció su posición en el campo. Según datos referidos por McClintock (1999: 236), a mediados de 1993 existían más de 4.000 comités de autodefensa, que incluían alrededor de 300.000 miembros, y a los que se había provisto de aproximadamente 10.000 rifles. Pese al clamor creciente de la población contra las organizaciones insurgentes, lo cierto es que en determinadas áreas del país la participación campesina en las rondas fue también resultado de la imposición de militares y miembros de los propios comités (McClintock, 1999: 237; Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), 2003: 453-454). Así, la CVR (2003: 453-455) recuerda cómo, en su lucha contra los abusos insurgentes, las rondas fueron también responsables de la comisión de excesos violentos.

<sup>320</sup> En nuestro estudio hemos tomado la decapitación de la organización armada como punto de inflexión y fecha simbólica de clausura de su trayectoria. No obstante, y según señalamos en páginas previas, lo cierto es que una facción del grupo insurgente, denominada “Proseguir”, continuó activa bajo la comandancia de Óscar Ramírez, alias “Feliciano”. Dicha tendencia disidente ha sido también registrada en nuestro conjunto de datos, si bien codificada como organización diferenciada del PCP-SL originario.

Poco después, el propio Guzmán emitía desde prisión un sorprendente comunicado en el que instaba a los integrantes de la organización a que abandonaran la lucha armada: “Como ayer bregamos por iniciar la guerra popular, hoy con una nueva e igual firmeza y resolución debemos luchar por un Acuerdo de Paz, como necesidad histórica insoslayable, el cual demanda con igual necesidad suspender las acciones de la guerra popular, salvo de las de defensa, con el correlato de que el Estado suspenderá las suyas” (Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), 2003: 118).

Junto al impacto de la represión ejercida sobre la organización senderista, es preciso señalar el peso de la deslegitimación y creciente repulsa social hacia la actividad desarrollada por el grupo armado. De acuerdo con Mansilla (1999: 290), su “política de destrucción masiva de bienes públicos, matanzas indiscriminadas y terrorismo cotidiano (...) motivó el rechazo de Sendero por parte de los sectores más pobres y humildes de la población peruana”. El PCP-SL fue, de hecho, uno de los movimientos insurgentes más sanguinarios y violentos de la región. Según datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), el conflicto armado desarrollado en Perú terminó con la vida de aproximadamente 70.000 personas, de las cuales un 54% perecieron a manos de Sendero Luminoso, mientras que en torno a un tercio fueron víctima de los diversos agentes del Estado. El PCP-SL se convertía, así, en el principal ejecutor de crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas en el transcurso de la guerra. En este contexto, el campesinado, objeto frecuente de los abusos y asesinatos perpetrados por los senderistas, fue retirando su apoyo al grupo armado – combatiéndole incluso de manera activa a través de las ya citadas rondas –, a diferencia de lo que había ocurrido en otros escenarios insurgentes como Guatemala y El Salvador (McClintock, 1999: 235). Un miembro desencantado de la organización, referenciado por Lewis Taylor (1998: 49), lo expresaba del siguiente modo tras su captura: “¿Cómo van a ganar masacrando a los campesinos? Así sólo atraen odio” (cit. en Goodwin, 2001: 243).

En resumen, y como hemos podido ver a lo largo de las páginas que anteceden, la existencia de canales de acceso al sistema político favorece la desactivación de los grupos armados que desafían a la autoridad del Estado. En este sentido, el establecimiento de regímenes democráticos puede resultar una herramienta útil para la finalización de las contiendas violentas, en la medida en que impulsa la puesta en funcionamiento de mecanismos de participación y ejercicio del disenso por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la democracia no es siempre – como debiera – un buen

sinónimo de la ampliación de espacios políticos. Según hemos podido constatar, la presencia de sistemas democráticos excluyentes o represivos plantea importantes trabas al final de la lucha armada. Régimen político y grado de observancia de los derechos humanos no son, por tanto, variables equivalentes. La violencia estatal tiene, de este modo, efectos propios y significativos sobre el curso de la insurgencia más allá del tipo de sistema político imperante, desincentivando el cese de las hostilidades. La deslegitimación del Estado agresor, la búsqueda de refugio ante los ataques gubernamentales, el cierre de opciones pacíficas de disidencia y la generación de nuevos agravios alimentan la subversión, presentándose como principales factores explicativos de la asociación negativa entre represión y finalización de la actividad rebelde registrada para América Latina. Por ello, y aun teniendo en cuenta la existencia de excepciones como las arriba señaladas, podemos concluir que las democracias consolidadas, inclusivas y respetuosas con los derechos humanos constituyen, en términos generales, un antídoto eficaz contra la oposición armada al Estado, reduciendo la supervivencia de las organizaciones insurgentes.

#### **4.2.2. Una mirada más allá del régimen: explorando las hipótesis alternativas**

La siguiente etapa de nuestro recorrido conduce al estudio empírico de las variables de control planteadas en capítulos previos. Con ello pretendemos comprobar algunas de las principales explicaciones que, más allá del tipo de régimen vigente, han sido formuladas por la literatura con el propósito de dar cuenta de la presencia de actividad insurgente en el interior de los Estados. En primer término, este apartado se referirá al impacto de una serie de variables con las que concluiremos nuestro examen del nivel macro de la investigación. Así, situaremos el foco sobre la capacidad estatal de los países del subcontinente latinoamericano, el papel desempeñado por los agravios socioeconómicos y el contexto internacional de la Guerra Fría. Finalmente, el último subapartado de este bloque introducirá, de manera sucinta, la consideración de la dimensión micro-sociológica, mediante la observación del efecto de la fortaleza insurgente en la duración de los desafíos violentos organizados contra el gobierno. En definitiva, a lo largo de las siguientes páginas iremos exponiendo, para cada una de las diversas variables señaladas, la medida en que nuestros hallazgos nos permiten confirmar o no las hipótesis alternativas propuestas en el *corpus* teórico del presente estudio.

#### 4.2.2.1. *La debilidad estatal como fortaleza rebelde*

La montaña es algo más que una inmensa estepa verde.  
Omar Cabezas (1982), Comandante guerrillero del FSLN

La primera de nuestras hipótesis alternativas (*H2*) hace referencia a los nexos que unen la fortaleza del Estado y la supervivencia de los grupos armados que operan en su interior. De acuerdo con el argumento planteado, una mayor capacidad estatal incrementaría las probabilidades de finalización de la actividad insurgente, asociándose a duraciones inferiores de las organizaciones rebeldes. Según dicha perspectiva, en aquellos contextos en que el aparato del Estado disponga de los recursos necesarios para el ejercicio de un control efectivo sobre población y territorio, las prácticas subversivas encontrarán serios obstáculos para su desarrollo, por lo que la esperanza de vida de los actores armados se verá reducida de manera sustancial. Por el contrario, la fragilidad estatal facilitará las operaciones de los rebeldes, ampliando sus márgenes de maniobra y perspectivas de supervivencia; la quiebra del Estado se convertirá, entonces, en una baza a favor de la insurgencia mediante la generación de estructuras de oportunidad para el desarrollo de su actividad violenta. Como ya expusimos en el capítulo previo, para el abordaje de esta cuestión nos situamos en la senda trazada por autores como Fearon y Laitin (2003b), valiéndonos del empleo de tres indicadores frecuentemente utilizados en la literatura para la aproximación empírica al concepto de capacidad estatal, a saber: el PIB *per cápita*, la población y el porcentaje de terreno montañoso.

Para comprobar la validez de esta hipótesis y su aplicabilidad al caso de la insurgencia latinoamericana, atenderemos a los resultados arrojados por los diversos modelos expuestos hasta el momento (*Modelo 1*, *Modelo 2*, *Modelo 3*)<sup>321</sup>. Según puede observarse, en todos ellos figuran las variables de control seleccionadas para el abordaje de los efectos de la fortaleza estatal sobre la lucha armada<sup>322</sup>. Comenzaremos haciendo referencia al papel que desempeña la orografía de un país dado en el desarrollo de las organizaciones rebeldes que actúan en su seno. En este caso, como ya indicaba el título de la obra de Omar Cabezas que abría el presente apartado, “la montaña es algo más que

---

<sup>321</sup> Las estimaciones presentadas en epígrafes posteriores, asociadas al análisis de otras dimensiones e hipótesis alternativas, continúan mostrando hallazgos consistentes con los que aquí se discuten.

<sup>322</sup> Como ya señalamos en su momento, la elevada correlación (-0,5157) existente entre el PIB *per cápita* y el índice de represión estatal (PTS), impide la consideración de ambas variables dentro de un mismo modelo. Por ello, la variable de ingresos estará ausente en los cálculos realizados a partir del *Modelo 3*.

una inmensa estepa verde”. La irregularidad del relieve y la existencia de áreas de difícil acceso aluden, desde esta óptica, a las posibles trabas halladas por el Estado en este tipo de entornos naturales a la hora de ejercer el control sobre el territorio que se extiende dentro de sus fronteras. Asimismo, las zonas selváticas y escarpadas pueden constituir una ventaja para la insurgencia, brindando cobijo para los rebeldes alzados en armas, que levantarán allí – resguardados de la vigilancia de los agentes estatales – sus campamentos y bases de operaciones. Esta imagen y contenido atribuido a las altas colinas, refugio de los insurgentes, es expuesta del siguiente modo por Omar Cabezas (1982: 28) en el relato sobre su participación en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN):

Cuando me fui a la montaña, subí con la idea de que la montaña era un poder (...). Y en la ciudad los clandestinos y los legales hablábamos de la montaña como algo mítico, donde estaba la fuerza e incluso las armas, los mejores hombres, la indestructibilidad, la garantía del futuro, la balsa para no hundirse en lo más profundo de la dominación de la dictadura, la determinación de no resignarse.

De acuerdo con los análisis llevados a cabo, parece que los mecanismos expuestos estuvieron de algún modo presentes en las numerosas luchas que se libraron en el subcontinente latinoamericano a lo largo del periodo de observación. Así, los resultados de los modelos sugieren que la presencia de terreno montañoso se encuentra asociada a mayores duraciones y niveles de supervivencia de las organizaciones armadas de la región. Esta variable registra un coeficiente de 0,97 a 0,98 – con leves variaciones en el resto de decimales – en las diversas estimaciones realizadas<sup>323</sup>. Tales *hazard ratios/odd ratios* señalan cómo la razón de desactivación de la insurgencia se verá reducida en contextos caracterizados por amplias extensiones de montañas. Se constata, por tanto, la existencia de una relación negativa entre orografía escarpada y probabilidades de finalización de los grupos rebeldes. Dicha relación es, además, altamente significativa desde el punto de vista estadístico, con un nivel de confianza situado entre el 95 y el 99% en todos los modelos calculados.

En uno de sus trabajos sobre los movimientos guerrilleros surgidos en América Latina a partir de los años sesenta, Wickham-Crowley (1995) narraba cómo algunas de

---

<sup>323</sup> Esta magnitud será algo menor – indicando, por tanto, un mayor efecto sobre la variable dependiente – si calculamos los coeficientes estandarizados por unidad de desviación típica, es decir, si tomamos en consideración la escala de medición de la variable. En este caso, el cociente de razón descenderá hasta valores comprendidos entre 0,64 y 0,79 aproximadamente, en función de la composición de los modelos estimados que se muestran a lo largo de este trabajo.



estas organizaciones armadas consolidaron de tal modo su autoridad en el campo, que llegaron a constituir una suerte de contra-estados dentro del Estado. Para explicar tal situación, el citado autor acude a los conceptos de “poder dual” y “soberanía múltiple” acuñados por Trotsky y Tilly, dando cuenta del proceso de fragmentación de la legitimidad propio de situaciones revolucionarias. Esta instauración de lo que denomina “gobiernos de la guerrilla”, prestos a llenar el vacío estatal que caracterizaba a numerosas regiones del subcontinente<sup>324</sup>, fue también común durante las décadas de 1970 y 1980 en países como Nicaragua, El Salvador, Perú<sup>325</sup> o Guatemala (Wickham-Crowley, 1995: 12). En estos casos, el campo fue testigo, por tanto, de la emergencia de nuevas autoridades guerrilleras que planteaban un desafío al monopolio del poder gubernamental, cuestionando la tríada “soberanía-población-territorio” definitoria del concepto de Estado. Como ilustración de dicha circunstancia, Wickham-Crowley (1995: 12) menciona la manera en que “un campesino venezolano resumía perfectamente la situación, distinguiendo el *gobierno de arriba* de las guerrillas, o gobierno de las montañas, del gobierno normal de las ciudades, o *gobierno de abajo*”.

Desde esta perspectiva, la ausencia de Estado en determinadas áreas de los países latinoamericanos, en especial aquéllas caracterizadas por su inaccesibilidad o lejanía respecto a los centros decisorios, podría contribuir a explicar las estrategias<sup>326</sup>, supervivencia y éxito relativo alcanzado por algunas organizaciones armadas. El caso colombiano ha sido también frecuentemente referido como ejemplo de esa incapacidad estatal para el ejercicio de un control eficaz sobre su propio territorio, fundamentalmente en ciertos parajes selváticos y montañosos. Si atendemos a los datos del Alto Comisionado para la Paz, apuntados por Víctor de Currea-Lugo (1999: 25) en

---

<sup>324</sup> De acuerdo con Wickham-Crowley (1995), en determinados casos las guerrillas fueron capaces de ofrecer a la población local servicios básicos de defensa, policía/administración y bienestar social – fundamentalmente atención médica y alfabetización –, lo que fortaleció su autoridad y legitimidad entre el campesinado.

<sup>325</sup> De acuerdo con McClintock (1999: 225), hasta un 25% de las municipalidades peruanas – especialmente en las regiones montañosas del centro y el sur del país – llegaron a estar bajo el control de Sendero Luminoso.

<sup>326</sup> En su trabajo sobre los Tupamaros uruguayos, Peter Waldmann (2010: 2) alude a la importancia de las condiciones orográficas a la hora de analizar las tácticas adoptadas por la organización armada. Según señala, en este país sudamericano el campo está eminentemente compuesto por grandes llanuras fácilmente controlables por las fuerzas de seguridad del Estado. Además, cerca de la mitad de la población vive en el área de la capital, Montevideo, por lo que las ciudades habían de ocupar un lugar central en cualquier intento de transformar el orden político vigente. Por ello, y respondiendo a una adaptación al medio en que operaban, Waldmann considera a los Tupamaros los inventores de la “guerrilla urbana”.

un trabajo de finales de los años noventa, al menos 130 de los algo más de 1.000 municipios colombianos se encontraban en manos de las organizaciones insurgentes – cifra que, según el mencionado texto, era aún mayor en la realidad –. A ellos habría que añadir, de acuerdo con el autor, aquellas localidades sometidas al control de los paramilitares, contrabandistas, grupos esmeralderos o narcotraficantes. Por estos – y otros<sup>327</sup> – motivos, De Currea-Lugo (1999: 26) llegaba a afirmar entonces:

En Colombia hay múltiples Estados (y tal vez el Estado central es el más débil y deslegitimado), estados-insurgencia, estados-delincuencia, estados-paramilitares, legitimados por la sociedad bajo su control gracias a que reproducen las mismas formas de relación burocráticas y clientelares aprendidas del Estado central. Estos para-estados no sólo tienen sus propios ejércitos sino que cobran impuestos y controlan el tránsito de la población (algunos grupos han desarrollado formas de prestación de servicio militar en sus propias filas).

Sin embargo, más allá del impacto de la variable orográfica en la supervivencia de las organizaciones insurgentes, nuestros modelos empíricos parecen tener poco que decir sobre el papel desempeñado por la fortaleza del Estado en el desarrollo de la lucha armada. Resulta interesante constatar que, pese a lo que cabría esperar, y en disonancia con una postura ampliamente extendida en la literatura especializada – fundamentalmente en estudios sobre guerras civiles –, el PIB *per cápita* no otorga demasiadas pistas para el análisis de la violencia en el caso latinoamericano. Este indicador no resulta significativo en ninguno de los modelos en que se incluye. No es posible afirmar, en definitiva, que los grupos armados registren una duración significativamente menor en aquellos Estados que disponen de mayores recursos y nivel de ingresos<sup>328</sup>.

Llegados a este punto, cabría cuestionarse si tales resultados se deben a las limitaciones de esta variable a la hora de captar la dimensión de la capacidad estatal, o si bien suponen un indicativo de un posible excepcionalismo latinoamericano. Lo cierto

---

<sup>327</sup> El artículo referenciado alude también a otras cuestiones, vinculándolas al “naufregio” del Estado colombiano, como son su falta de legitimidad, su ineptitud en la aplicación de las leyes, la impunidad o la ausencia de un monopolio estatal de la justicia, que redundan en casos recurrentes de justicia privada y vigilantismo.

<sup>328</sup> Para la estimación de nuestros modelos, se contemplaron también otros indicadores frecuentemente utilizados como *proxy* de la fortaleza estatal, entre los que destaca el *Composite Index of National Capabilities* (CINC) (Singer et al., 1972; Singer, 1987; Correlates of War Project, 2012), integrado por el consumo de energía, la producción de hierro y acero, el gasto y personal militar, el total de la población y la población urbana; sin embargo, la consideración de tal índice no arrojó resultados concluyentes y estadísticamente significativos.

es que determinados autores han puesto ya en cuestión la validez del PIB *per cápita* como *proxy* de la fortaleza del Estado. Tal es el caso de Gleditsch y Ruggeri (2010: 301), quienes plantean serias dudas sobre esta operacionalización del concepto, señalando que “es, en el mejor de los casos, una medición muy indirecta” del mismo. En este sentido, advierten que no todos los países pobres pueden ser catalogados como estructuralmente frágiles y que el incremento de los recursos disponibles podría, incluso, tener un efecto adverso, contribuyendo a debilitar el aparato estatal y obstaculizar la gobernabilidad a través del aumento de las prácticas rentistas (*rent-seeking*). Además, recuerdan cómo el PIB *per cápita* ha sido utilizado en la literatura para aproximar nociones muy diferentes, desde los costes de oportunidad para los rebeldes, hasta los agravios socioeconómicos de la población sublevada (Gleditsch y Ruggeri, 2010: 301). Finalmente, no faltan los trabajos que han aludido a las peculiares relaciones trabadas entre el nivel de desarrollo económico y la democracia en América Latina, cuestión clave, como ya hemos visto, para el análisis de la violencia insurgente en la región (v.g. Collier, 1979; Landman, 1999; Mainwaring y Pérez-Liñán, 2005; Smith, 2009: 59-63)<sup>329</sup>. Sea como fuere, no parece factible extraer conclusiones sólidas sobre la influencia de este indicador en nuestro objeto de estudio.

Aludiremos, por último, al comportamiento de la variable poblacional en la estimación de los modelos estadísticos. Este *proxy* de la fortaleza del Estado tampoco ha presentado resultados significativos en los diversos cálculos realizados a lo largo de la investigación<sup>330</sup>, por lo que no contribuye a arrojar luz sobre el papel de tal dimensión en la persistencia y eventual desactivación de la lucha armada. Así, la reiterada hipótesis de que el Estado podrá ejercer un mejor control sobre poblaciones reducidas, de modo que en tales escenarios disminuya el riesgo de estallidos de violencia, no parece

---

<sup>329</sup> La tan predicada asociación positiva existente entre modernización/progreso económico y establecimiento de sistemas democráticos, propuesta por numerosos autores entre los que podría destacarse a Seymour M. Lipset (1960), no resulta tan clara para el caso latinoamericano. Así lo han señalado diversos trabajos como los que aquí se mencionan. David Collier (1979: 19) plantea, por ejemplo, cómo las dictaduras burocrático-autoritarias del Cono Sur, imperantes precisamente en algunos de los países económicamente más avanzados del subcontinente, suponen un auténtico reto analítico para los estudiosos del cambio político. Asimismo, y tras realizar toda una serie de pruebas empíricas de carácter cuantitativo con el propósito de comprobar la aplicabilidad de esta hipótesis al área geográfica latinoamericana, Todd Landman (1999: 624) concluye que “al nivel regional de América Latina, no parece haber una relación directa entre el nivel de desarrollo económico y la democracia”.

<sup>330</sup> Únicamente en los *Modelos 3c* y *4c* puede observarse una cierta significatividad de la variable, a un nivel de confianza del 90%. Sin embargo, el carácter aislado e inconsistente de tales resultados, y una *odd ratio* próxima a 1, confirman la irrelevancia de esta dimensión en el análisis de la duración de los grupos armados latinoamericanos.

ajustarse al contexto latinoamericano. Prueba de ello podrían ser las poderosas guerrillas activas en los pequeños países de Centro América, cuyo volumen de población es comparativamente inferior a otros Estados de la región de dimensiones mucho mayores (Lehoucq, 2011: 2). Casos como el del victorioso Frente Sandinista y la Contra nicaragüense, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) o el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, todos ellos capaces de plantear serios y prolongados desafíos en sus respectivos Estados, pondrían en tela de juicio la presunta relación entre el tamaño del país y las probabilidades de actividad armada.

En conclusión, y de acuerdo con la evidencia empírica con la que contamos, no estamos en disposición de confirmar nuestra *Hipótesis 2*. Es cierto que el relieve montañoso parece ofrecer sugerentes pistas sobre la relación existente entre el control territorial de Estado y rebeldes, y la prolongación de los enfrentamientos armados. Sin embargo, la ausencia de resultados significativos en lo que al PIB y la población respecta nos impone la necesidad de ser cautelosos en la generación de conclusiones sobre la apertura de estructuras de oportunidad para la insurgencia en contextos de debilidad estatal. No podemos, por tanto, rechazar con certeza la hipótesis nula. Por ello, y a través de futuros estudios, sería interesante profundizar en la asociación entre supervivencia de grupos armados y fortaleza del Estado, bien a través de nuevos – y mejores – *proxies* de este concepto, bien a través de análisis cualitativos que permitan abordar en detalle los pormenores de dicha cuestión.

#### *4.2.2.2. Los agravios socioeconómicos: pobreza, desigualdad y conflicto armado*

Cuba y Nicaragua no inventaron los padecimientos que hicieron posible la insurrección en El Salvador y en otras partes. Estos padecimientos son reales y agudos.

*Informe de la Comisión Nacional Bipartita sobre América Central*  
– conocido como “Informe Kissinger” –, 1984  
(cit. en Pereyra, 1997: 11)

Como ya vimos en capítulos previos, los agravios socioeconómicos han sido situados con frecuencia en la base de las explicaciones dadas a numerosas revueltas y revoluciones que han ido sucediéndose en el transcurso de la historia. La pobreza y la desigualdad se han interpretado, desde esta óptica, bien como la chispa que hace prender el fuego revolucionario, bien como el fuelle con que se avivan las llamas de la insurrección. El peso específico de esta dimensión en el estallido de los levantamientos

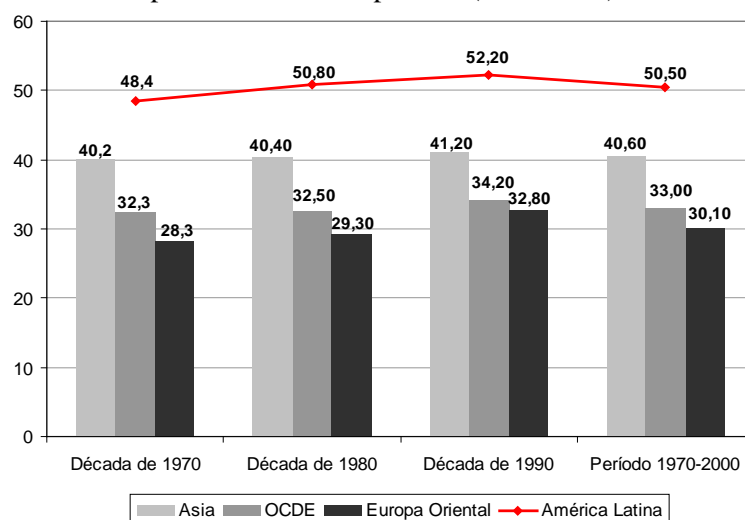
armados acaecidos en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX ha sido objeto de profusas discusiones y argumentos rivales, cuyo análisis desbordaría ampliamente los límites del presente estudio; sin embargo, lo que sí parece fuera de toda cuestión es la magnitud de los agravios de los que el subcontinente fue víctima a lo largo de este periodo. Los padecimientos de la población latinoamericana, según llegara a reconocer incluso el propio “Informe Kissinger” referido al comienzo de este apartado, fueron “reales y agudos”. De hecho, son numerosos los indicadores socioeconómicos que desvelan el rostro de la injusticia y la desigualdad en la región. A modo de ilustración, atenderemos en primer término a la inequidad en la distribución del ingreso, medida a través del índice de Gini<sup>331</sup> – donde 0 sería la perfecta igualdad y 100 la desigualdad absoluta –, en diversas áreas geográficas. Los resultados son abrumadores: como muestra el Gráfico 4.4, y de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2010a: 25), América Latina constituye, durante todo el arco temporal considerado, la región más desigual del planeta. Una desigualdad que, según la citada institución, “se transmite de una generación a otra debido a que su intensidad y persistencia se combinan con una baja movilidad social” (PNUD, 2010a: 25). De este modo, si observamos las diferentes regiones representadas en el gráfico propuesto<sup>332</sup>, constatamos cómo Europa oriental (30,1%) y los países miembros de la OCDE (33%) registran una distribución del ingreso comparativamente mejor a lo largo de todo el periodo. A continuación se encuentra el continente asiático, cuyos datos sugieren mayores niveles de desigualdad y concentración de la riqueza, con un índice de Gini promedio del 40,6%. Finalmente, América Latina muestra, de manera sistemática, los mayores desequilibrios en el reparto del ingreso. A unos 20 puntos de distancia respecto a los países del Este Europeo y la OCDE, y a 10 unidades porcentuales de la región asiática, la inequidad es una de las grandes cuentas pendientes del subcontinente latinoamericano, cuyo elevado índice de Gini supera el 50%.

---

<sup>331</sup> Según la definición ofrecida por el Banco Mundial (2014a), “el índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea”.

<sup>332</sup> Los autores de la ilustración no han incluido en ella datos sobre la desigualdad en África.

**Gráfico 4.4.** Índice Gini de la distribución del ingreso por regiones. Promedios decenales y promedio total del periodo (1970-2000)



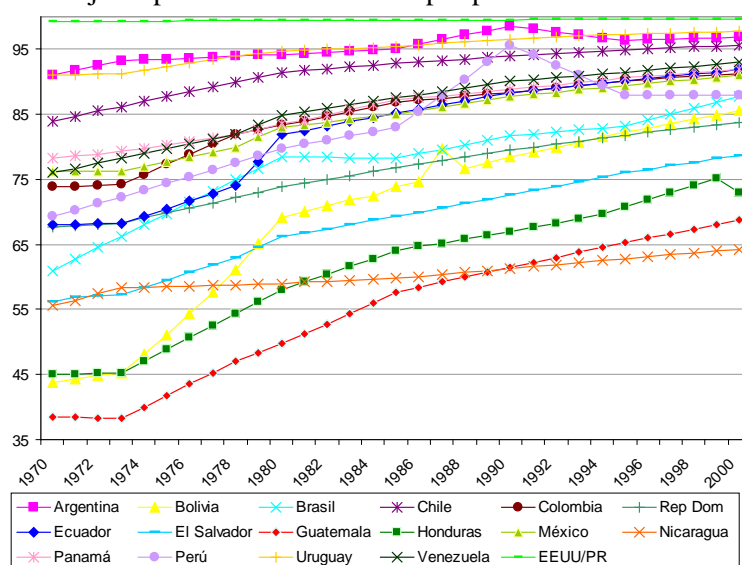
Fuente: PNUD (2010a: 26) a partir de De Ferranti et al. (2004).

Dado este escenario, parece oportuno indagar el modo en que los fuertes agravios socioeconómicos sufridos por América Latina pudieron influir en la supervivencia y finalización de los grupos armados operativos en la región entre 1970 y 2000. De acuerdo con la *Hipótesis 3* de este trabajo de investigación, los contextos caracterizados por niveles de pobreza y desigualdad severos tenderían a perpetuar los conflictos armados activos en su seno, prolongando la vida de las organizaciones rebeldes desafiadoras del poder establecido. Por el contrario, una mayor justicia social sería, desde este enfoque, un buen antídoto contra la violencia insurgente, reduciendo la duración de los movimientos insurreccionales y facilitando el final de la lucha armada. La comprobación empírica de tales planteamientos se enfrenta a la dificultad de seleccionar un indicador capaz de captar el contenido y esencia de esta dimensión teórica, sin acusar problemas de disponibilidad de datos y multicolinealidad con el resto de variables contempladas<sup>333</sup>. El índice de Gini más arriba expuesto, si bien útil para la captura de una visión panorámica de la región, presenta serias limitaciones a la hora de obtener datos fiables de carácter anual para todos los países de la muestra,

<sup>333</sup> Como ya indicamos en el capítulo previo, en el transcurso de la investigación se consideraron otras posibles alternativas para la operacionalización de este concepto. Entre ellas cabe destacar, por su carácter comprensivo – incluye mediciones del nivel de vida, la educación y la salud de la población – y ampliamente aceptado, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el PNUD (2010b). Tal indicador presentaba, no obstante, un elevado nivel de correlación con la variable de represión estatal (-0,5702), por lo que no pudo ser incorporado a nuestros modelos. Asimismo, y como señalamos anteriormente, el propio PIB *per cápita* podría ser interpretado como una medida de aproximación a los agravios socioeconómicos. Ya hemos comentado, no obstante, la ausencia de resultados concluyentes asociados a esta variable.

especialmente durante los primeros lustros del periodo temporal analizado<sup>334</sup>; tal circunstancia aumentaría el número de casos perdidos, reduciendo aún más nuestro ya limitado conjunto de datos. Por ello, y teniendo en cuenta las consideraciones previas, este trabajo aproximará el concepto de agravios socioeconómicos a través del porcentaje de población alfabetizada. Dicho indicador permite observar la magnitud y evolución de tales agravios, detectando además las diferencias en la posición relativa ocupada por los distintos países estudiados.

**Gráfico 4.5.** Porcentaje de población alfabetizada por países en América Latina (1970-2000)



Fuente: Elaboración propia a partir de Banks y Wilson (2010)

El Gráfico 4.5 ilustra los cambios experimentados por la tasa de alfabetización en América Latina durante el periodo contemplado a través de nuestra ventana de observación. En él, aunque puede constatarse una clara tendencia general de mejora en los valores registrados para este indicador, se advierten amplias divergencias entre países, revelando contextos de severa precariedad e injusticia. En el margen inferior de la gráfica encontramos, junto a Bolivia, a la mayor parte de los Estados centroamericanos (Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador). Durante los años setenta, el porcentaje de analfabetismo en estos países llegaba a rondar – superándolo incluso en algunos casos – el 50% de la población. Tales datos dibujan un escenario en

<sup>334</sup> A este respecto, Leohucq (2011: 3) señala que “la ausencia de datos sistemáticos sobre la distribución del ingreso es una importante razón por la que las investigaciones estadísticas comparativas de varios países (*cross-national*) guardan silencio sobre el impacto de la desigualdad en la guerra civil”. De hecho, continúa, si exceptuamos las sociedades económicamente más desarrolladas, “sólo podemos especular sobre los niveles de desigualdad previos a 1980, puesto que las encuestas de hogares – el bloque básico para la construcción de los coeficientes de Gini y medidas similares – simplemente no existían para una gran cantidad de países hasta las últimas décadas del siglo XX”.

el que una elevada proporción de la ciudadanía se ve privada de un derecho fundamental, careciendo de oportunidades de acceso a un sistema educativo que les permita adquirir competencias básicas para su adecuado desarrollo – y empoderamiento – dentro de la sociedad. Por su parte, en la franja superior de la gráfica, y a gran distancia en términos porcentuales, se hallan Argentina, Uruguay y Chile – todos ellos ubicados el Cono Sur de la región –, junto a Puerto Rico/Estados Unidos<sup>335</sup>. En estos países el porcentaje de población alfabetizada supera el 90% a lo largo de prácticamente todo el periodo, alcanzando cifras próximas al 100% durante los últimos años observados.

Este pequeño mapeo de los agravios socioeconómicos del subcontinente parece sugerir, a simple vista, una cierta relevancia de tal variable para el análisis de la supervivencia de los grupos armados latinoamericanos. De hecho, buena parte de los países que registran un porcentaje menor de ciudadanos alfabetizados fue testigo, en el transcurso del periodo analizado, de la emergencia de fuertes y duraderas organizaciones rebeldes. Por ejemplo, como hemos ido viendo a lo largo del estudio, Centroamérica se convirtió en escenario de cruentos enfrentamientos, que en algunos casos llegaron a prolongarse durante décadas. Así, este istmo azotado por la pobreza y la desigualdad fue cuna de movimientos como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) o el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Si observamos la relación de nuestro *proxy* de los agravios con la variable dependiente estudiada, constatamos que registra el tipo de comportamiento que cabría esperar según la hipótesis teórica previamente formulada: los mayores índices de alfabetización parecerían estar asociados a tasas de supervivencia más bajas para las organizaciones armadas. Sin embargo, dicho indicador pierde su significatividad en presencia del resto de variables consideradas en el modelo. Así puede constatar en la Tabla 4.7, en la que se presentan los resultados de las diversas estimaciones realizadas; como vemos, en ninguna de ellas aparece como estadísticamente significativo.

---

<sup>335</sup> El *Cross-National Time-Series Data Archive* (CNTS) de Banks y Wilson (2010), fuente de datos de donde se extrajo la información sobre esta variable, no contiene registros específicos para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por tal motivo, en los análisis se incluyen las tasas de alfabetización de los Estados Unidos. En todo caso, y como ya se ha señalado en ocasiones previas, los Anexos incorporan una réplica de todos los modelos excluyendo a los grupos armados puertorriqueños, con el propósito de detectar así posibles sesgos derivados de la inexactitud de la información referida a esta isla con un peculiar estatus jurídico.



**Tabla 4.7.** Estimaciones Cox y *logit* para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. *Modelo 4: El efecto de los agravios socioeconómicos*

	<i>Cox</i>		<i>Logit</i>	
	<i>Modelo 4a</i>	<i>Modelo 4b</i>	<i>Modelo 4c</i>	<i>Modelo 4d</i>
Población	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000* (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9874** (0,0052)	0,9847** (0,0061)	0,9872** (0,0049)	0,9849** (0,0060)
Categoría de ref:	Demo postransición			
<i>Dictadura</i>	0,5177* (0,1915)	0,4997* (0,1993)		
<i>Demo transición</i>	0,1668** (0,1193)	0,1366*** (0,1003)		
Demo postransición (0/1)			2,6309*** (0,9302)	2,9294*** (1,1348)
Represión estatal	0,7485*** (0,0738)	0,7065*** (0,0866)	0,7430*** (0,0760)	0,7036*** (0,0892)
Alfabetización	0,9993 (0,0010)	0,9993 (0,0011)	0,9993 (0,0010)	0,9993 (0,0012)
Tiempo		1,2020 (0,1729)		1,1907 (0,1716)
Tiempo <sup>2</sup>		0,9885 (0,0102)		0,9890 (0,0103)
Tiempo <sup>3</sup>		1,0002 (0,0002)		1,0002 (0,0002)
N	697	697	697	697
BIC	448,7802	470,2423	444,7153	466,9791
<i>Log-Lik Full Model</i>	-204,7498	-202,3872	-205,9907	-204,0290

Coefficientes exponenciados (*hazard ratios* y *odds ratios*). Errores estándar robustos (en clústeres por grupo armado) presentados entre paréntesis. \*  $p < 0,10$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*\*\*  $p < 0,01$

De acuerdo con los resultados obtenidos, y pese a las pistas que sugieren una posible relación entre agravios y duración de las organizaciones armadas, no podemos con nuestros datos rechazar la hipótesis nula. La consideración empírica de otras dimensiones resta relevancia a los aspectos de carácter socioeconómico a la hora de estudiar la finalización de la contienda violenta en América Latina<sup>336</sup>. En este sentido, Krumwiede (1999: 117-119) alude al papel de la justicia social en la pacificación de los conflictos armados desarrollados en Guatemala y El Salvador. Según el autor, los

<sup>336</sup> Más en particular, parece ser la represión estatal la que, en este modelo, “expulsa” a nuestra variable de agravios socioeconómicos. De hecho, ambas mantienen una notable correlación entre sí – aunque dentro de los márgenes aceptables para su consideración conjunta – con un coeficiente de - 0,3588. Este tipo de asociación sugiere que en aquellos contextos de mayor pobreza y desigualdad – es decir, menores tasas de alfabetización según nuestro *proxy* – el Estado tenderá a aplicar políticas más represivas. En esta misma línea de planteamiento, Acemoglu y Robinson (2006: 37) señalaban cómo, en países con niveles muy severos de desigualdad, las elites tendrían mucho que perder con la democratización del sistema que cuida y protege sus intereses, por lo que en tales escenarios será probable que impulsen regímenes no democráticos con altos niveles de represión estatal.

grupos insurgentes de ambos países aceptaron, en los procesos de negociación, reformas de carácter menor y promesas generales, sin que los acuerdos de paz firmados plantearan una solución seria al acuciante problema de la desigualdad (Krumwiede, 1999: 118). Por ello, y en consonancia con la discusión y hallazgos mostrados en páginas precedentes, Krumwiede (1999: 118) concluye que “en los casos de El Salvador y Guatemala hay que notar respecto a este problema que indudablemente la injusticia social fue una causa importante de la guerra revolucionaria, pero hubo factores políticos que tuvieron, como mínimo, la misma importancia”. Desde esta perspectiva, y siguiendo la línea argumental del mencionado autor, el establecimiento de sistemas democráticos – “merecedores de tal nombre”, según apostilla – y el retroceso de la represión por parte del Estado permitirían dirimir los agravios socioeconómicos a través de los cauces pacíficos facilitados por este tipo de régimen, desplazando el recurso a la violencia como estrategia de acción política en la lucha contra la desigualdad.

#### *4.2.2.3. El impacto de la Guerra Fría en América Latina: recursos, discursos y marcos para la acción*

No nos proponemos quedarnos aquí sentados de brazos cruzados en nuestra mecedora y permitir que los comunistas implementen cualquier gobierno en el hemisferio occidental.

Lyndon Johnson (1965)

Bajo el eslogan «no permitiremos otra Cuba» se encubre la posibilidad de agresiones a mansalva (...), y la clara advertencia de que las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América donde el orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses (...).  
¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la superficie del globo (...)!  
Ernesto Che Guevara (1967)

Ernesto Che Guevara (1967)

Los convulsos años de la Guerra Fría dejaron a su paso una profunda huella en la realidad política de América Latina. A lo largo de dicho periodo histórico el subcontinente se vio convertido, según ha sido señalado ya en epígrafes previos, en un escenario clave de los enfrentamientos y disputas ideológicas que derivaron del orden bipolar fraguado tras la Segunda Guerra Mundial. Las dinámicas propias de la política de bloques atravesaron, de este modo, las fronteras de los Estados nacionales, conectando de manera crucial el curso de los acontecimientos desarrollados en las esferas doméstica e internacional. Dichas circunstancias ponen de relieve la importancia del marco exterior para el análisis del devenir político de los países de la región,

planteando la necesidad de trascender los factores de carácter interno<sup>337</sup>. La *hipótesis 4* de este trabajo de investigación emana de dichas consideraciones. Desde la perspectiva que en ella se sostiene, el contexto internacional jugaría un papel destacado en la evolución y características de las contiendas violentas que recorrieron las tierras latinoamericanas a lo largo de la etapa estudiada. Más específicamente, esta hipótesis secundaria sugiere que el final de la Guerra Fría generó un entorno favorable a la desactivación de las organizaciones insurgentes operativas en la región, coadyuvando a la finalización de los enfrentamientos armados.

**Tabla 4.8.** Fin de las organizaciones insurgentes según contexto internacional de Guerra Fría.  
Porcentajes de columna

		Guerra Fría	
		Sí	No
Fin de la organización	No	93,86%	79,76%
		(596)	(134)
		[5,652]	[-5,652]
	Sí	6,14%	20,24%
		(39)	(34)
		[-5,652]	[5,652]
<i>Pearson chi2 (2) = 31,9424    Pr = 0,000</i>			
<i>Likelihood-ratio chi2 (2) = 26,8282    Pr = 0,000</i>			

Frecuencias mostradas entre paréntesis. Residuos ajustados de cada casilla entre corchetes

Para verificar la validez de los argumentos formulados, tomaremos como punto de partida una breve aproximación descriptiva a los procesos objeto de análisis. La Tabla 4.8 muestra la relación existente entre la vigencia de la política de bloques y la desmovilización o abandono de la actividad armada por parte de los grupos rebeldes presentes en América Latina. Los resultados indican la existencia de una relación estadísticamente relevante entre ambas variables. De acuerdo con los cálculos realizados, dicha asociación resulta significativa tanto a nivel global – así lo constatan el  $\chi^2$  de Pearson y la razón de verosimilitud – como en cada una de las celdas que conforman la tabla de contingencia – los residuos ajustados son siempre superiores al valor crítico absoluto de 1,96 –. Si atendemos a los porcentajes de columna mostrados, observamos que las probabilidades de finalización de la insurgencia parecen

<sup>337</sup> De hecho, de acuerdo con Peter H. Smith (2009: 109), la posición subordinada de América Latina dentro del sistema mundial ha hecho de ella una región especialmente “vulnerable a las presiones y tendencias internacionales”. De este modo, el entorno global, las organizaciones multilaterales y las intervenciones de las grandes potencias han afectado, de formas diversas, a la configuración política y procesos de cambio acaecidos en el subcontinente.

intensificarse tras la clausura de la Guerra Fría. De este modo, mientras que tan sólo un 6,14% de las observaciones registradas durante tal periodo son testigo de la desactivación de una organización armada, tal proporción asciende a un 20,24% después del colapso de la Unión Soviética en 1991.

**Tabla 4.9.** Estimaciones Cox y *logit* para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. *Modelo 5: El efecto de la Guerra Fría*

	Cox	Logit	Cox	Logit
	Modelo 5a	Modelo 5b	Modelo 5c	Modelo 5d
Población	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9802*** (0,0057)	0,9754*** (0,0073)	0,9801*** (0,0054)	0,9759*** (0,0070)
Categoría de ref:	Demo postransición			
<i>Dictadura</i>	0,5401* (0,1978)	0,5168 (0,2224)		
<i>Demo transición</i>	0,1777*** (0,1121)	0,1431*** (0,0979)		
Demo postransición (0/1)			2,5326*** (0,8375)	2,8336*** (1,1197)
Represión estatal	0,7476** (0,0912)	0,7164** (0,1141)	0,7427** (0,0937)	0,7148** (0,1179)
Alfabetización	0,9990 (0,0011)	0,9990 (0,0013)	0,9989 (0,0011)	0,9990 (0,0013)
Guerra Fría (0/1)	0,2567*** (0,0707)	0,1900*** (0,0649)	0,2593*** (0,0701)	0,1904*** (0,0645)
Tiempo		1,1917 (0,1760)		1,1778 (0,1731)
Tiempo <sup>2</sup>		0,9864 (0,0102)		0,9871 (0,0102)
Tiempo <sup>3</sup>		1,0002 (0,0002)		1,0002 (0,0002)
N	697	697	697	697
BIC	434,4548	450,1332	430,3017	446,7454
Log-Lik Full Model	-194,3136	-189,0593	-195,5105	-190,6388

Coefficientes exponenciados (*hazard ratios* y *odds ratios*). Errores estándar robustos (en clústeres por grupo armado) presentados entre paréntesis. \*  $p < 0,10$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*\*\*  $p < 0,01$

Sin embargo, la confirmación de nuestra cuarta hipótesis (*H4*) requiere que pongamos a competir la variable de contexto internacional con el resto de supuestos planteados a lo largo del estudio. Por ello, el *Modelo 5* incorpora, junto a las otras dimensiones anteriormente consideradas, un indicador dicotómico de la Guerra Fría<sup>338</sup>.

<sup>338</sup> En el Anexo A Tabla A8 se muestran los resultados globales del test de riesgos proporcionales para los modelos Cox presentados a lo largo de esta investigación. En todos ellos, sin excepción, el test de los residuos de Schoenfeld avala el cumplimiento de este principio. Lo mismo sucede si observamos cada una de las covariables incluidas en los modelos. No obstante, como se apunta en el citado anexo, el

Según puede observarse en la Tabla 4.9, las estimaciones efectuadas constatan, de manera contundente, el efecto del orden bipolar y los procesos políticos asociados al mismo sobre la supervivencia de las organizaciones insurgentes latinoamericanas. La asociación detectada es altamente significativa desde el punto de vista estadístico, con un nivel de confianza del 99% en todos los modelos. Los coeficientes, menores que 1, revelan que la relación existente entre esta variable explicativa y la variable explicada tiene un carácter negativo. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en la *H4*, puede concluirse que el marco internacional imperante durante los años de la Guerra Fría disminuyó sustancialmente las probabilidades de finalización de los movimientos subversivos que recurrieron a la violencia como estrategia de lucha en la mayor parte de los países de la región<sup>339</sup>. La llegada a término de la contienda entre los bloques oriental y occidental favoreció, por tanto, la resolución de los enfrentamientos armados en curso.

Las demás proposiciones teóricas contrastadas con anterioridad mantienen aquí el comportamiento predicho en los modelos precedentes. Así, el terreno montañoso, la represión estatal y los periodos de transición democrática exhiben una asociación negativa con la variable dependiente<sup>340</sup>. Por su parte, las democracias postransición conservan, frente al resto de regímenes políticos, un efecto positivo sobre la desactivación de la lucha armada latinoamericana, mostrándose propicias a la pacificación de los conflictos violentos desarrollados durante el periodo temporal sometido a examen. Finalmente, cabe hacer una breve referencia al ajuste de los modelos estimados hasta el momento. Como puede comprobarse a través del BIC y el logaritmo de la verosimilitud, los diversos modelos parciales que integran el *Modelo 5* ofrecen comparativamente un mejor nivel de ajuste que aquéllos presentados en

---

indicador de Guerra Fría empleado podría resultar problemático, al vulnerar dicho supuesto. En todo caso, el cálculo de las estimaciones *logit* permitirá, en los modelos en que se ha considerado esta variable, corroborar la robustez de los hallazgos.

<sup>339</sup> Los cocientes de razones muestran, asimismo, la magnitud de estos efectos. Si estandarizamos dichos valores por unidad de desviación típica, comprobamos cómo la Guerra Fría muestra un impacto comparativamente elevado en relación a otras variables. Tomando como referencia el último de los modelos estimados (*Modelo 5d*), y realizando las transformaciones necesarias para la comparación entre valores positivos y negativos – en este caso *1/(odd ratio)* menor a la unidad –, los resultados serían los siguientes: Terreno montañoso = 1,4584; Democracia postransición = 1,6654; Represión estatal = 1,4903; Guerra Fría = 2,0338.

<sup>340</sup> Es preciso señalar que en las estimaciones efectuadas para el *Modelo 5b* la categoría ‘Dictadura’ pierde levemente su significatividad estadística, si bien mantiene el signo negativo esperado. Lo mismo sucede en algunas de las réplicas de los modelos que se presentan en el Anexo A Tablas A9, A10 y A11.

epígrafes previos. De tales datos podemos colegir la relevancia de nuestra variable de contexto internacional, en la medida en que su inclusión contribuye sustancialmente a la mejora en la calidad de los cálculos realizados. De acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos, la Guerra Fría cuenta, y mucho, a la hora de analizar la actividad insurgente en América Latina.

Estos hallazgos empíricos plantean interrogantes sobre los posibles mecanismos que subyacen al comportamiento registrado en el indicador del marco exterior de la contienda. Según se ha ido apuntando en anteriores páginas, y como reza el propio encabezado del presente bloque, los efectos de la Guerra Fría sobre las organizaciones armadas activas en la región podrían sintetizarse, a grandes rasgos, en recursos, discursos y marcos para la acción. Como es bien sabido, el orden bipolar estuvo marcado por la pugna entre las dos grandes superpotencias, en cuyo transcurso cada uno de los bloques aspiró a ampliar su control estratégico sobre las regiones geográficas. Esta competencia alimentó las prácticas intervencionistas de la Unión Soviética y los Estados Unidos en numerosos países de la periferia. América Latina, territorio limítrofe del imperio norteamericano, ocupó un lugar destacado en los enfrentamientos librados por reforzar dichas áreas de influencia. Las prioridades políticas estadounidenses para el subcontinente estaban claras. John F. Kennedy las planteaba del siguiente modo, aludiendo a la posición de los Estados Unidos frente a la dictadura imperante en República Dominicana:

Hay tres posibilidades, en orden descendiente de preferencia: un régimen decente y democrático, una continuación del régimen de Trujillo, o un régimen castrista. Nosotros tenemos el deber moral de apuntar al primero, pero en realidad no podemos renunciar al segundo hasta estar seguros de poder evitar el tercero (cit. en Castañeda, 1995: 397)<sup>341</sup>.

En su firme propósito de impedir la expansión del comunismo en la región,

---

<sup>341</sup> Rafael Leónidas Trujillo encabezó durante décadas un régimen dictatorial en República Dominicana, clausurado con su asesinato en 1961. En diciembre del año siguiente se celebraron los primeros comicios democráticos tras la tiránica “Era de Trujillo”, en los que Juan Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, resultó elegido presidente. Con su llegada al poder impulsó un programa de reformas que fue visto con recelo por los poderes fácticos del momento. En apenas unos meses, tuvo lugar un golpe de Estado que derrocaría al reciente gobierno democrático. Finalmente, en un contexto de enfrentamientos e inestabilidad política, los Estados Unidos ocuparían militarmente la isla en 1965, bajo la presidencia de Lyndon Johnson, escudándose en el riesgo de aparición de “otra Cuba”. En las elecciones de 1966, aún con presencia estadounidense en el país, el candidato conservador Joaquín Balaguer era proclamado vencedor.

Estados Unidos no dudó en invertir importantes recursos, de muy diversa índole, que afectarían a la trayectoria de las organizaciones armadas latinoamericanas. La promoción de golpes de Estado militares y el respaldo a dictaduras anticomunistas en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional fue, según hemos ido viendo a lo largo del estudio, una práctica frecuente en la política exterior norteamericana del periodo (Leal, 2003)<sup>342</sup>. De acuerdo con Wickham-Crowley (1993: 68 y ss.), su participación en la lucha contrainsurgente se plasmó, en América Latina, a través de cuatro canales fundamentales: asistencia económica y venta de armamento; entrenamiento militar y servicios de inteligencia; presiones informales; y compromiso de tropas. El caso de El Salvador ilustra bien los enormes esfuerzos realizados por las administraciones estadounidenses para controlar lo que consideraban su “patio trasero”. De hecho, este país centroamericano fue uno de los principales receptores de ayuda económica y militar procedente de los Estados Unidos durante los años ochenta, sólo por detrás de Egipto, Israel y Pakistán (Sanahuja, 1996: 390)<sup>343</sup>. Asimismo, debido a su relevancia para este estudio, vale la pena recordar el ya mencionado caso de las organizaciones insurgentes contrarrevolucionarias en Nicaragua, para cuya actividad resultó crucial el apoyo estadounidense<sup>344</sup>. De este modo, como señala José Antonio Sanahuja (1996: 656), “con o sin aprobación del Congreso, por medios legales o ilegales, la Administración [del Presidente Reagan] logró mantener un constante flujo de armamento, dinero y equipo a la Contra”<sup>345</sup>.

---

<sup>342</sup> En este sentido, Jorge Castañeda (1995: 299) afirmaba: “Sin la Guerra Fría son incomprensibles Playa Girón y la Alianza para el Progreso, el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras de seguridad nacional en Brasil, Uruguay, Bolivia, Argentina y Chile durante los años sesentas y principios de los setentas, así como las sucesivas renegociaciones multimillonarias de la deuda externa mexicana y la aventura de la contra en Nicaragua”.

<sup>343</sup> El monto destinado al gobierno y las fuerzas armadas salvadoreñas ascendió a 4.000 millones de dólares a lo largo de esta década. Como señala Sanahuja (1996: 390), en su afán por evitar un nuevo triunfo revolucionario en el istmo, Estados Unidos “aplicó una estrategia de «Guerra de Baja Intensidad» que exigía una completa articulación de las iniciativas militares, económicas, políticas, sociales y diplomáticas en un esfuerzo contrainsurgente común”.

<sup>344</sup> Con motivo de su injerencia y participación en la guerra de la Contra, Nicaragua demandó a los Estados Unidos ante el Tribunal Internacional de la Haya en 1984. La Corte de Justicia falló a favor del gobierno nicaragüense, obligando al país norteamericano a reparar los daños económicos provocados durante el conflicto. Los Estados Unidos se negaron a cumplir la sentencia y, tras la victoria electoral de las fuerzas opositoras al sandinismo en 1990, la nueva presidenta Violeta Chamorro retiró los cargos (Kruijt, 2009: 169).

<sup>345</sup> En 1984 el Congreso estadounidense prohíbe la ayuda destinada a la financiación de las fuerzas contrarrevolucionarias operativas en Nicaragua. A partir de entonces, comenzaba a tejerse toda una trama que, al margen de la legalidad, continuaría brindando apoyo económico y logístico a dichas

Por otra parte, la Unión Soviética llevaba a cabo su propia estrategia de fortalecimiento y ampliación del bloque socialista. La victoria guerrillera en Cuba supuso, además, un destacado impulso a las luchas revolucionarias en la región, convirtiendo a la isla en una pieza clave del apoyo a múltiples organizaciones armadas latinoamericanas. Así, de acuerdo con Feldmann y Perälä (2004: 109), ambos países contribuyeron al suministro de “fondos, armamento, entrenamiento, respaldos políticos y asistencia logística, tal como pasaportes, servicios de inteligencia y empleo de instalaciones diplomáticas” a grupos insurgentes operativos a lo largo del subcontinente. Este flujo de recursos, si bien de dimensiones imprecisas, pudo constituir un importante balón de oxígeno para los movimientos subversivos receptores de la ayuda, favoreciendo su actividad y probabilidades de supervivencia.

Sin embargo, tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética se desencadenaba un proceso de reconfiguración del panorama internacional que afectaría también a la trayectoria de las organizaciones rebeldes. Con el final de las dinámicas propias del enfrentamiento de bloques, los recursos destinados a prácticas insurgentes y contrainsurgentes procedentes de cada uno de los polos del sistema mundial experimentaron un acusado declive. Por un lado, y ante el desvanecimiento de la “amenaza comunista”, Estados Unidos reducía el esfuerzo económico y militar destinado al combate de los grupos revolucionarios. El caso de la guerra civil salvadoreña es, de nuevo, un buen ejemplo de tal circunstancia. Según apunta Cynthia Arnson (1999c: 18), en 1990 el Congreso estadounidense aprobaba un recorte del 50% de la ayuda suministrada al ejército de este país centroamericano, favoreciendo el aislamiento de los militares y presionando a la Administración Bush a secundar una salida negociada al conflicto. En realidad, como ya analizamos en páginas previas, la actividad represora no había sido, en términos generales, una estrategia eficaz contra los grupos armados de la región. Así, pese a que la violencia estatal consiguió infligir importantes daños a la insurgencia, lo cierto es que actuó con frecuencia como estímulo de la subversión, alimentando a los movimientos rebeldes alzados en armas. Por otro lado, muchas organizaciones revolucionarias se vieron huérfanas de ayuda ante un nuevo escenario geopolítico en el que el bloque socialista desaparecía del mapa

---

organizaciones armadas. Dos años más tarde, en 1986, estallaría el denominado escándalo “Irán-Contra” – también conocido como “Irangate” –, al descubrirse que parte de los fondos empleados para el apoyo financiero – ilegal – de la Contra procedían de la venta – también ilegal – de armamento al régimen iraní de Jomeini (Sanahuja, 1996: 659-661).



internacional. Esta privación de recursos afectaría, en grados diversos, a su capacidad operativa y expectativas de sostenimiento de la actividad armada. En definitiva, la combinación de las dinámicas de financiación descritas pudo favorecer, con la clausura de la Guerra Fría, la terminación de los conflictos violentos desarrollados en América Latina.

Pero el derrumbe de la Unión Soviética no sólo implicó el cierre de canales de obtención de recursos. Desde la perspectiva que aquí se sostiene, es preciso considerar la entrada en juego de un segundo eje explicativo asociado a los discursos y marcos cognitivos disponibles para la articulación de la acción colectiva. La existencia de un sistema de gobierno alternativo al capitalismo y la democracia liberal sirvió de inspiración y modelo para organizaciones armadas a lo largo de toda América Latina. Asimismo, el triunfo del movimiento insurreccional cubano mostraba al subcontinente la posibilidad de subvertir el orden vigente y promover el cambio político a través de la lucha armada. Dichas circunstancias impulsaron, empleando los términos de Orellana (2012), una nueva “utopía generacional” en la región. Sin embargo, el descalabro de los regímenes socialistas supuso, para numerosos movimientos y organizaciones de la izquierda latinoamericana, la pérdida de un referente y paradigma político (Castañeda, 1995: 289). Las creencias revolucionarias, cuyo discurso había gozado de un fuerte potencial ilusionante y movilizador, sufrieron un importante menoscabo – cuando no un severo descrédito – con la quiebra de la dimensión ideológica Este-Oeste. Así, el final de la Guerra Fría venía acompañado de un cambio en los procesos enmarcadores y repertorios de contienda, que redundaría en un descenso de la actividad insurgente registrada en la región<sup>346</sup>.

---

<sup>346</sup> Dichos efectos se asocian al perfil mayoritariamente revolucionario – o contrarrevolucionario – de las organizaciones insurgentes presentes en nuestra muestra. Feldmann (2005) advierte, de hecho, cómo frente al impacto decreciente del terrorismo latinoamericano durante la era pos-Guerra Fría, la tendencia se invierte si consideramos el conjunto de organizaciones armadas operativas en el globo – entre las que se encuentran, por ejemplo, aquéllas vinculadas al terrorismo fundamentalista de carácter internacional –, mostrando en su lugar un claro comportamiento ascendente desde mediados de los noventa. Por tanto, las características y aspiraciones políticas de las organizaciones armadas no son, como ya vimos, una cuestión baladí a la hora de analizar los mecanismos explicativos de su supervivencia y desactivación.

#### 4.2.2.4. *Apuntes sobre el nivel micro-analítico*

A mí solo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones.

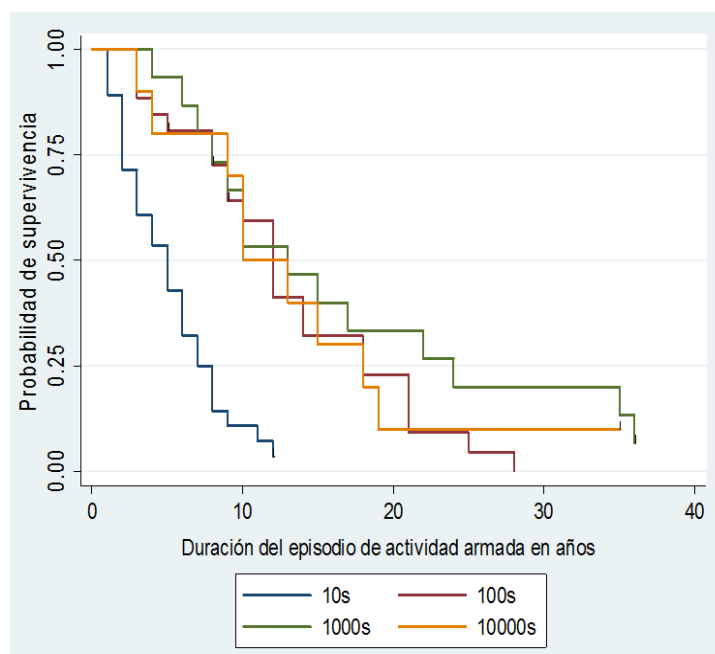
Frase atribuida a Túpac Katari, 1781

El presente apartado conforma el último tramo de nuestro recorrido empírico a través de la insurgencia en América Latina. El objetivo que en él se plantea tiene su origen en las propuestas realizadas por las teorías de la movilización de recursos procedentes de los estudios sobre acción colectiva. Como ya expusimos en el marco teórico de este trabajo de investigación, dichas teorías subrayan la necesidad de dar un paso más allá del contexto sociopolítico en el que se desarrolla la contienda, atendiendo a la organización y recursos de los propios actores contestatarios. De acuerdo con este enfoque teórico, las características internas de los sujetos colectivos desempeñan un papel destacado en la evolución y éxito de la movilización social, por lo que han de ser tomadas en consideración a la hora de analizar los procesos de protesta y oposición política. Cuestiones como las fuentes de financiación – a las que aludimos, en parte, en el epígrafe anterior –, la estructura organizativa, el tipo de liderazgo, las opciones estratégicas o el alcance de su reclutamiento pasan a un primer término en esta clase de aproximaciones. La *hipótesis 5* de esta investigación se enmarca, según explicamos en el correspondiente capítulo, dentro de esta lógica interpretativa. De este modo, el último de los supuestos considerados sostiene que, junto a las ya analizadas condiciones contextuales en que operan las organizaciones armadas, sus recursos internos incidirán también en las tasas de supervivencia alcanzadas; así, una mayor fortaleza y capacidad operativa irá asociada a una mayor duración del grupo insurgente.

Este salto analítico desde las estructuras de oportunidad política hasta las estructuras de movilización de las organizaciones opositoras no está, sin embargo, exento de obstáculos en el caso de los movimientos armados de carácter subversivo. Y es que la propia naturaleza clandestina de estos actores colectivos supone un límite al volumen – y calidad – de la información disponible sobre sus recursos y rasgos internos. Así, los datos con los que contamos son, en muchas ocasiones, estimaciones o cálculos imprecisos, retazos que permiten, no obstante, hacerse una composición de lugar sobre cuál es la fortaleza relativa de los distintos grupos insurgentes considerados. Para ello, este estudio recurre al tamaño de la organización rebelde, medido en número máximo de

miembros, como *proxy* de las capacidades materiales y potencial movilizador de los insurrectos.

**Gráfico 4.6.** Representación gráfica de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos según el tamaño de la organización en número de miembros (1970-2000).  
Estimador de Kaplan-Meier



Comenzaremos, igual que en ocasiones anteriores, por un análisis descriptivo de las tendencias de desmovilización registradas en nuestra muestra. El estimador no paramétrico de Kaplan-Meier nos permite, como ya vimos, efectuar una primera aproximación a la duración de nuestras unidades de análisis. El Gráfico 4.6 muestra la representación de las diferentes curvas de supervivencia asociadas a los grupos insurgentes en función de la magnitud de su membresía. Los resultados parecen orientarse en la dirección prevista por nuestra formulación de hipótesis. De esta forma, los episodios de actividad armada protagonizados por las organizaciones que integran a un menor número de militantes (por debajo de 100) presentan tasas de supervivencia inferiores a aquéllas que cuentan con un volumen superior de miembros entre sus filas. El riesgo de disolución resulta, por tanto, mayor en el caso de pequeños grupos con un limitado nivel de apoyo, reduciéndose especialmente entre quienes superan los 1.000 integrantes.

Estas diferencias detectadas en la comparación entre funciones de supervivencia son, además, estadísticamente significativas. Así lo indica el *log-rank test*<sup>347</sup>, cuyos resultados se incluyen en la Tabla 4.10. Esta prueba se basa, como señala Bernardi (2006: 60-61), en la hipótesis nula de que las disparidades registradas entre las curvas se deban al azar o aleatoriedad de la muestra, es decir, que no exista una diferencia real entre las poblaciones observadas en cuanto a la probabilidad de ocurrencia del evento estudiado. De acuerdo con el citado autor, los estadísticos de este test de contraste se distribuyen según un  $\chi^2$  con  $m-1$  grados de libertad, siendo  $m$  el número de subgrupos para los que se ha estimado la función (en este caso 4). Como puede constatarse en la tabla que se presenta a continuación, al valor del  $\chi^2$  obtenido en los cálculos (36,12) le corresponde una probabilidad inferior al umbral de significatividad generalmente aceptado de 0,05 ( $Pr > \chi^2 = 0,0000$ ), por lo que la hipótesis nula de igualdad de funciones puede ser rechazada. En definitiva, los datos obtenidos sugieren que los grupos armados con un diferente tamaño y volumen de militancia presentan también diferentes tasas de supervivencia.

**Tabla 4.10.** Test del *log-rank* para la comparación de funciones de supervivencia

Tamaño de la organización	Eventos observados	Eventos Esperados
10s	27	10,75
100s	23	27,92
1.000s	14	22,46
10.000s	9	11,87
Total	73	73,00
$\chi^2 (3) = 36,12 \quad Pr > \chi^2 = 0,0000$		

Para concluir la verificación de esta hipótesis introduciremos la variable de control sobre el tamaño de la organización armada en nuestras estimaciones Cox y *logit*. El *Modelo 6*, presentado en la Tabla 4.11, muestra los resultados derivados de la adición de este último indicador al resto de variables consideradas a lo largo de la investigación. Los hallazgos confirman la asociación existente entre la fortaleza de los grupos

<sup>347</sup> El denominado test de Wilcoxon reviste características muy similares a esta prueba, siendo también empleado con frecuencia para la comparación entre funciones de supervivencia. No obstante, según Bernardi (2006: 60), mientras que el *log-rank test* resulta especialmente sensible a las diferencias detectadas en las curvas hacia el final del periodo temporal considerado, éste lo es para aquéllas que se registran al comienzo del mismo. Por tal motivo, y para confirmar nuestros hallazgos, los cálculos fueron replicados mediante la prueba de Wilcoxon, obteniendo resultados equivalentes ( $\chi^2(3) = 33,36$ ;  $Pr > \chi^2 = 0,0000$ ).

insurgentes y las probabilidades de cese de su actividad violenta. Así, los cocientes de razones menores que la unidad indican un impacto negativo del volumen de la militancia sobre el riesgo de finalización de la organización rebelde. De acuerdo con dichos resultados, serán los grupos de mayor envergadura y, por ende, capacidad operativa quienes registren una mayor duración en su trayectoria armada. Este efecto de los recursos – personales – a disposición de los insurgentes resulta estadísticamente significativo en todas las estimaciones realizadas, con un nivel de confianza que varía entre el 90% y el 95%. Finalmente, y por lo que al marco de la contienda se refiere, el resto de variables contextuales mantiene el sentido de las relaciones detectadas en los modelos previos, aunque con leves variaciones en sus coeficientes y grado de significatividad<sup>348</sup>.

Estos resultados respaldan nuestra última hipótesis (*H5*), revelando la importancia de considerar la fortaleza y capacidades del grupo armado en el análisis de su duración y cese de la actividad violenta. Los recursos organizativos son, de acuerdo con las estimaciones realizadas, un factor influyente en la configuración de las opciones estratégicas de la insurgencia. De este modo, la persistencia y continuidad de la lucha armada estará también asociada a la disponibilidad de medios – materiales y de militancia – que hagan posible su sostén. En este sentido, el número de combatientes y el acceso a canales de captación de fondos contribuirán a explicar la longevidad de las organizaciones rebeldes. El caso del conflicto armado en Colombia permite ilustrar la importancia de dichos elementos. Así, la disponibilidad de diversas fuentes de financiación (p.ej. el cobro de rescates por secuestros o los vínculos con el narcotráfico), el ejercicio de un amplio control territorial y la participación de miles de reclutas entre sus filas, muestran la fortaleza de organizaciones que, como el ELN y las FARC, han sido capaces de mantener durante décadas su desafío violento al Estado colombiano.

---

<sup>348</sup> Cabe destacar que, como ya habíamos señalado en el *Modelo 5b*, la categoría ‘Dictadura’ pierde ligeramente su significatividad en los *Modelos 6a* y *6b*, aunque el coeficiente estimado alude al tipo de relación negativa pronosticada en las hipótesis de investigación.

**Tabla 4.11.** Estimaciones Cox y *logit* para la finalización de las organizaciones insurgentes en América Latina. *Modelo 6: El efecto de la fortaleza del grupo armado*

	Cox		Logit	
	Modelo 6a	Modelo 6b	Modelo 6c	Modelo 6d
Población	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9766*** (0,0062)	0,9721*** (0,0077)	0,9765*** (0,0060)	0,9724*** (0,0074)
Categoría de ref:	Demo postransición			
<i>Dictadura</i>	0,5629 (0,2077)	0,5379 (0,2327)		
<i>Demo transición</i>	0,1966** (0,1246)	0,1595*** (0,1096)		
Demo postransición (0/1)			2,3642** (0,7937)	2,6369** (1,0518)
Represión estatal	0,7629** (0,1000)	0,7342* (0,1247)	0,7584** (0,1029)	0,7337* (0,1293)
Alfabetización	0,9982 (0,0012)	0,9982 (0,0015)	0,9980 (0,0012)	0,9981 (0,0015)
Guerra Fría	0,2668*** (0,0743)	0,1969*** (0,0689)	0,2688*** (0,0735)	0,1973*** (0,0686)
Tamaño organización	0,7357** (0,1091)	0,7268* (0,1262)	0,7268** (0,1096)	0,7139* (0,1264)
Tiempo		1,2207 (0,1766)		1,2130 (0,1758)
Tiempo <sup>2</sup>		0,9860 (0,0101)		0,9864 (0,0101)
Tiempo <sup>3</sup>		1,0003 (0,0002)		1,0002 (0,0002)
N	697	697	697	697
BIC	437,7038	453,5054	433,2716	449,7532
Log-Lik Full Model	-192,6648	-187,4720	-193,7221	-188,8693

Coefficientes exponenciados (*hazard ratios* y *odds ratios*). Errores estándar robustos (en clústeres por grupo armado) presentados entre paréntesis. \*  $p < 0,10$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*\*\*  $p < 0,01$

Sin embargo, es preciso advertir que el *Modelo 6* reviste una considerable inestabilidad, probablemente debido a la confluencia de diversas variables con niveles relativamente elevados – si bien dentro de los umbrales considerados generalmente aceptables – de correlación<sup>349 350</sup>. Asimismo, si atendemos al BIC, observamos que la

<sup>349</sup> Como puede constatarse en el Anexo A Tabla A7, las variables de alfabetización (*school12*), represión estatal (*RepresiónA*) y tamaño de la organización (*Tamaño*) presentan, entre sí, niveles de correlación superiores a |0,3|. Así, los coeficientes de correlación existentes entre estos pares de variables son los siguientes: Alfabetización-Represión = - 0,3588; Alfabetización-Tamaño = -0,3994; Represión-Tamaño = 0, 3594.

<sup>350</sup> Las réplicas de los modelos calculados sin los grupos armados puertorriqueños, disponibles en el Anexo A Tablas A9 y A10, confirman la inestabilidad de las estimaciones en las que se ha introducido este indicador de fortaleza insurgente. Así, como puede constatarse, la variable pierde su significatividad en algunos de los modelos estimados.

bondad de ajuste de todos los modelos estimados dentro de este último bloque empeora ligeramente respecto a los cálculos efectuados en el *Modelo 5*<sup>351</sup>. Dicho estadístico pondría en cuestión la contribución realizada por la nueva variable sobre fortaleza insurgente en la mejora de la calidad del modelo. Tales consideraciones plantean, en definitiva, la necesidad de interpretar los resultados con las debidas cautelas, tomándolos sólo como una primera aproximación al impacto de la estructura y recursos de las organizaciones armadas sobre sus probabilidades de supervivencia. Es preciso, por tanto, continuar avanzando por esta senda en el transcurso de futuras investigaciones, pues son aún muchos los interrogantes que se plantean sobre el papel del nivel micro-analítico en el estudio de la insurgencia.

#### **4.3. UN BALANCE DE LA SUPERVIVENCIA Y DESMOVILIZACIÓN DE LOS GRUPOS INSURGENTES LATINOAMERICANOS**

Las páginas que componen este último capítulo han realizado un recorrido empírico por la senda de la actividad insurgente desarrollada en América Latina entre 1970 y 2000. La relevancia de este fenómeno en la región, con la presencia de numerosas organizaciones armadas en buena parte de los países del subcontinente, hace de ella un terreno favorable para el examen de la contienda política violenta. En el transcurso de este camino de aproximación a los casos, el presente estudio ha desentrañado algunas claves interpretativas de la trayectoria y finalización de los grupos rebeldes que desafiaron mediante las armas a sus respectivas autoridades estatales. De este modo, los hallazgos encontrados nos permiten no sólo profundizar en el conocimiento de la realidad latinoamericana durante el periodo temporal observado, sino que además nos brindan interesantes herramientas para la reflexión en torno al papel y características de la violencia como repertorio de acción política.

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de los epígrafes previos, la supervivencia de las organizaciones armadas – cuya duración mediana se sitúa, según vimos, en 9 años

---

<sup>351</sup> Sí se registra, no obstante, una muy leve mejora en las estimaciones del *Modelo 6* si atendemos, en su lugar, al logaritmo de la verosimilitud (*Log-Lik Full Model*). Lo mismo sucede cuando calculamos el *Akaike Information Criteria* (AIC), otra medida estadística de uso frecuente para la comparación de modelos. Así, los resultados del AIC serían: *Modelo 5a* = 402,6273; *Modelo 5b* = 400,1186; *Modelo 5c* = 403,021; *Modelo 5d* = 401,2776; *Modelo 6a* = 401,3296; *Modelo 6b* = 398,9439; *Modelo 6c* = 401,4441; *Modelo 6d* = 399,7385. Las divergencias registradas entre ambas medidas de información se deben a que el BIC introduce en sus cálculos una penalización mayor a la inclusión de nuevos parámetros en el modelo.

– parece encontrarse íntimamente asociada con el contexto sociopolítico en que éstas irrumpen y desarrollan su actividad. El punto de partida de la investigación, y eje vertebrador de sus hipótesis principales, situaba el foco de las indagaciones en los posibles efectos del régimen político sobre las pautas de desactivación de la insurgencia. La democracia, o más específicamente los sistemas democráticos que han superado los primeros años de transición y avanzan hacia la consolidación del régimen, emergen de los análisis como un elemento clave para la finalización de los movimientos subversivos latinoamericanos. La apertura de canales alternativos de participación y oposición política, el incremento de la legitimidad del sistema o la deslegitimación social de la violencia explicarían el sentido de tales efectos. Asimismo, este trabajo incorpora en sus análisis la dimensión de la represión estatal, cuya presencia en contextos democráticos pone de manifiesto la complejidad de sus vínculos con el tipo de régimen establecido. La democracia y el respeto a los derechos humanos no siempre han sido, en América Latina, realidades políticas de trayectorias concurrentes. Así, los resultados empíricos han mostrado, junto al mencionado impacto de los sistemas democráticos, la vigencia de una relación negativa entre el ejercicio de la represión estatal y las probabilidades de desactivación de las organizaciones armadas. Entre los mecanismos que subyacen a la asociación detectada se han hallado cuestiones tales como la generación de nuevos agravios que alimentan la subversión, la búsqueda de protección frente a la violencia gubernamental o la deslegitimación del Estado agresor.

El examen empírico realizado en este capítulo ha incluido, además, una serie de variables de control, operacionalización de las hipótesis alternativas, que complementan la aproximación a nuestro objeto de estudio. Atendimos, en primer lugar, a los posibles efectos de la fortaleza estatal sobre la supervivencia de los grupos rebeldes. Sin embargo, los resultados fueron limitados en este sentido, restringiéndose a la constatación de la presencia de terreno montañoso como escenario favorable al ejercicio de la actividad insurgente. No se encontró tampoco evidencia sólida sobre el papel de los agravios socioeconómicos en la finalización de la lucha armada. Por el contrario, el contexto internacional de la Guerra Fría ha resultado ser uno de los factores explicativos clave para el análisis de la violencia política subversiva en la región. De este modo, la disponibilidad de recursos procedentes de las grandes potencias, así como los discursos y marcos cognitivos asociados a la política de bloques, contribuyen también a explicar la persistencia de prácticas insurreccionales en América Latina. Finalmente, este trabajo



ha incorporado una breve aproximación al nivel micro-analítico, cuyos resultados estadísticos parecen sugerir la influencia de la fortaleza y capacidad operativa de las organizaciones armadas en el incremento de sus tasas de supervivencia.

Para concluir este breve balance de los hallazgos expuestos, realizaremos un último ejercicio de ilustración de sus principales resultados empíricos. Con este propósito, y debido a su claridad en términos interpretativos, consideramos pertinente recurrir al cálculo de las probabilidades de ocurrencia del evento estudiado – es decir, la desactivación de las organizaciones insurgentes latinoamericanas – dados diversos escenarios hipotéticos tipo (Escobar et al., 2009: 412-413)<sup>352</sup>. Este análisis de perfiles actuará, por tanto, como resumen de las principales dinámicas apuntadas en el transcurso de las páginas que anteceden. Nos basaremos, para ello, en el último bloque de modelos presentados – concretamente en el *Modelo 6d* –, cuyas estimaciones incluyen la totalidad de variables consideradas en el estudio. Pensemos, en primer lugar, en un contexto en el que, manteniendo el resto de variables en su media, nos encontramos ante un régimen dictatorial o en fase de transición democrática (*DemoPost* = 0), en el que se registran además elevados niveles de represión estatal y violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía (*RepresiónA* = 5), dentro del marco internacional de la Guerra Fría (*GF* = 1). En una situación tal, las probabilidades de finalización de la lucha armada protagonizada por los grupos rebeldes de nuestra muestra ( $Pr(y=1/x)$ ) serían altamente remotas, situándose en apenas un 1,75%. Esta predicción varía de manera acusada si otorgamos diferentes valores a las citadas variables independientes, configurando un escenario sociopolítico proclive, según nuestras investigaciones, a la pacificación de la contienda. Así, una vez clausurado el orden bipolar característico de la Guerra Fría (*GF* = 0), un entorno democrático que goza de cierto grado de consolidación (*DemoPost* = 1) y se muestra respetuoso con los derechos humanos (*RepresiónA* = 2)<sup>353</sup> elevaría la probabilidad de finalización de las organizaciones armadas hasta un 37,56%<sup>354</sup>.

---

<sup>352</sup> En el Anexo A Tabla A12 puede encontrarse toda la información generada en las salidas de *Stata* para el cálculo de probabilidades mediante la instrucción *prvalue*.

<sup>353</sup> Otorgamos el valor ‘2’ a la variable de represión estatal debido a que todos los casos asociados a la categoría ‘1’ se corresponden en nuestra base de datos con grupos armados puertorriqueños, a los que se atribuye, como ya indicamos en su momento, información referida a los Estados Unidos.

<sup>354</sup> Debido a la ya mencionada inestabilidad de nuestro *Modelo 6*, y para contrastar la solidez de los hallazgos, la estimación de probabilidades ha sido también replicada para el *Modelo 5d*, arrojando resultados comparables. Así, mientras que en el primero de los escenarios hipotéticos considerados las

Este aumento en el riesgo de desactivación de la insurgencia resulta aún mayor cuando consideramos en nuestros cálculos los valores extremos del indicador de la fortaleza rebelde – recordemos que en las anteriores estimaciones manteníamos dicha variable en su media –. De este modo, si completamos el primer perfil considerando el volumen máximo de militancia (*Tamaño* = 4), y añadimos al segundo sus niveles mínimos (*Tamaño* = 1), observamos cómo las probabilidades de desmovilización de las organizaciones armadas ascienden desde el 1,05% hasta el 49,58%. Estos resultados confirman, en definitiva, la relevancia de las principales variables explicativas consideradas a lo largo del presente estudio, mostrando de una forma intuitiva el sentido de sus efectos sobre la variable dependiente.

---

probabilidades de finalización de la insurgencia se situarían en torno a un 1,65%, el segundo llegaría a elevarlas hasta un 40,59%.

## EPÍLOGO Y CONCLUSIONES

---

Día 4 de septiembre de 2012. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmaba mediante una alocución oficial el inicio de nuevas conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). No era la primera vez, en el curso del conflicto armado, que se abrían espacios de acercamiento y negociación entre la insurgencia y el gobierno colombianos. El país andino había sido testigo ya de diversos intentos fallidos – aunque con algún éxito parcial como la desmovilización del M-19 junto a otros grupos armados – de acabar con el doloroso enfrentamiento bélico que atraviesa su territorio desde hace más de medio siglo. Por ello, el presidente de la República insistía entonces en la necesidad de aprender de los errores del pasado para llegar a un acuerdo definitivo que ponga fin, “de una vez por todas, a esta violencia entre hijos de una misma nación”. Algunas horas más tarde, la comandancia guerrillera de las FARC, representada por su jefe máximo Rodrigo Londoño Echeverri alias “Timochenko”, emitía también un comunicado en el que manifestaba su voluntad de concurrir a la recién inaugurada mesa de concertación. “La salida no es la guerra sino el diálogo civilizado”, declaraba, haciendo público el propósito de la organización armada de participar en este intento renovado de poner fin a la longeva confrontación civil activa en Colombia. El llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera delimitaba los contornos de este proceso de contactos y negociaciones entre insurgencia y Estado, desarrollados en las ciudades de Oslo y La Habana. Se iniciaba así un camino largo, tortuoso y de final incierto que continúa siendo transitado en el momento de escribir estas líneas. Los sucesivos avances y retrocesos del recorrido han sembrado numerosas dudas sobre su credibilidad y expectativas de éxito. Sin embargo, aún hay lugar para la esperanza en una solución dialogada al conflicto armado, que haga posible alcanzar la anhelada paz para el pueblo colombiano.

El episodio descrito pone de manifiesto la relevancia científica y vigencia del problema de investigación abordado a lo largo de las páginas que anteceden. La presencia activa de organizaciones insurgentes en numerosos rincones del planeta hace necesaria una labor de reflexión y análisis sobre el empleo de la violencia como estrategia de oposición política al Estado. Es preciso, por ello, indagar en los escenarios favorables a la pacificación de los enfrentamientos armados y aproximarse a las diversas causas que subyacen a la desactivación de los grupos rebeldes. Tal ha sido, precisamente, el propósito de esta tesis doctoral. Nuestra búsqueda de respuestas al cese de la actividad armada ha tenido a América Latina como ámbito geográfico de referencia. Sus características sociopolíticas a lo largo del periodo temporal examinado, entre los años 1970 y 2000, convierten al subcontinente en un marco propicio para el abordaje empírico de las cuestiones teóricas propuestas. A continuación, realizaremos una breve recapitulación de los principales hallazgos encontrados en el transcurso de este trabajo de investigación.

El examen de los vínculos existentes entre el régimen político y la presencia de organizaciones armadas ha constituido el núcleo fundamental de nuestras pesquisas. Los resultados de los análisis empíricos confirman la validez de la denominada hipótesis de la “paz democrática”. Así, el examen estadístico de los casos y la ilustración histórica de las dinámicas detectadas sugieren que la apertura – o fortalecimiento – de canales de acceso a la arena política ha tenido, en América Latina, un importante efecto disuasorio en el recurso a la violencia insurgente. La permeabilidad e inclusividad del sistema político se presenta como un antídoto de efectividad notable contra el uso de repertorios violentos de contienda. De este modo, la posibilidad de expresar el disenso y plantear reivindicaciones a través de la participación en partidos políticos, sindicatos, manifestaciones o movimientos sociales, supone un incremento en las probabilidades de finalización de las organizaciones armadas. La integración al sistema político de las múltiples voces que componen la polifonía social es, además, una inestimable fuente de legitimidad y apoyo social para los regímenes democráticos. Asimismo, la perspectiva de alcanzar el poder a través de cauces electorales se presenta como un incentivo destacado para el abandono de la estrategia insurgente. La conversión de diversos grupos armados de la región en partidos políticos concurrentes a elecciones, algunos de los cuales ostentan hoy en día responsabilidades de gobierno, da buena cuenta de esta tendencia. La contienda electoral supone, en definitiva, una alternativa a la actividad

insurreccional, donde las balas dejan paso a los votos – esas ya mencionadas “piedras de papel” de las que hablaba Engels (cit. en Przeworski y Sprague, 1986) – como herramienta de transformación política.

Sin embargo, los dispositivos de pacificación expuestos no actúan, de acuerdo con nuestros hallazgos, de una manera inmediata tras la implantación de los sistemas democráticos. Los procesos de cambio de régimen afectan de manera directa a las estrategias y supervivencia de las organizaciones armadas. Según los análisis realizados, los periodos de democratización suponen un terreno abonado para la violencia colectiva. La inestabilidad, incertidumbre, debilidad gubernamental y problemas de compromiso propios de los escenarios de cambio político disminuyen significativamente las probabilidades de desmovilización de los grupos insurgentes, respaldando el argumento de la violencia transicional. El abandono de las tácticas insurreccionales estará, en este sentido, vinculado a la superación de la ambigüedad y desconfianza generadas en las fases iniciales del régimen. De este modo, la interpretación como permanente del nuevo contexto político y el afianzamiento de la democracia como “the only game in town” favorecerán la renuncia insurgente a la actividad armada. Las etapas de tránsito entre distintos regímenes políticos son, además, momentos de definición de las reglas de juego que regirán el nuevo orden establecido, determinando la posición que los distintos actores ocuparán en él. Por ello, la presión y los enfrentamientos orientados a influir en la configuración del sistema político en ciernes se verán agudizados con frecuencia durante estos periodos de interludio.

Todas estas dinámicas contribuyen a explicar, según los análisis realizados, los niveles de violencia registrados en América Latina durante la década de los ochenta, cuando las aguas de la “tercera ola democratizadora” (Huntington, 1991a; 1991b) recorrían las tierras del subcontinente. Así, las transiciones democráticas en la región estuvieron a menudo acompañadas de actividad rebelde y presencia de movimientos armados. Fue, por tanto, el camino hacia la consolidación de las democracias latinoamericanas lo que impulsó de manera decisiva el cese de la violencia política insurgente en los países del área. La creciente estabilidad de estos regímenes políticos, unida al fortalecimiento progresivo de los procedimientos, valores y principios democráticos, propiciaría el desarme de los grupos rebeldes. En este sentido, sería preciso distinguir entre el corto plazo de los convulsos periodos de transición política, y el largo/medio plazo de la consolidación, conducente a lo que podríamos denominar una

“paz democrática postransicional”. En todo caso, y a la luz de los análisis realizados, no parece aventurado afirmar que democracia y pacificación transcurrieron, en América Latina, por travesías paralelas.

Es preciso, no obstante, introducir un nuevo elemento adicional para comprender la relación de los regímenes políticos latinoamericanos con el desarrollo y eventual desactivación de las organizaciones armadas. De acuerdo con nuestro estudio, la represión desplegada por el Estado ha jugado un importante papel en la trayectoria de los grupos insurgentes de la región. A pesar de la evidencia y consenso generalizado sobre la reducción de la violencia estatal en contextos democráticos, lo cierto es que la asociación entre régimen político y prácticas coercitivas es con frecuencia más compleja de lo que cabría esperar. Democracia y respeto a los derechos humanos no son siempre las dos caras de una misma moneda. Las atrocidades cometidas por los Estados latinoamericanos a lo largo del periodo observado no fueron responsabilidad exclusiva de militares y autócratas, sino que una parte de los gobiernos electos del subcontinente contribuyó también a sembrar el terror entre la población civil. Es precisamente esta falta de equivalencia entre ambos conceptos la que vuelve imprescindible su consideración conjunta en el análisis empírico. De este modo, el estudio de los casos confirma, de acuerdo con nuestra hipótesis, los efectos contraproducentes de la represión en el combate a la insurgencia en América Latina. El ejercicio de la violencia estatal puede poner en funcionamiento una serie de mecanismos que alimentan las llamas del enfrentamiento, fortaleciendo a las organizaciones armadas e incrementando su supervivencia. La pérdida de legitimidad por parte del gobierno represor, la obstrucción de los canales pacíficos de oposición, la polarización de la sociedad, la generación de nuevos agravios y las reacciones emocionales de rabia, indignación e ira ante los abusos del poder, provocan a menudo una escalada en la dureza de las tácticas adoptadas. Del mismo modo, la búsqueda de protección frente a la represión del Estado y la supresión de incentivos a la sumisión política en escenarios de violencia indiscriminada pueden coadyuvar a engrosar las filas de la insurgencia y ampliar su longevidad. De tales afirmaciones no puede colegirse, no obstante, una ausencia total de efectividad en las políticas de coerción practicadas en el subcontinente. Como hemos visto en el curso de la investigación, diversos grupos armados sucumbieron, bajo determinadas circunstancias, a los envites de la violencia estatal. Sin embargo, la dinámica general fue la contraria. Por ello, los ya mencionados efectos positivos de la

democracia sobre la pacificación de los conflictos armados podrían verse inhibidos, o cuando menos erosionados, en contextos en que las instituciones del gobierno representativo conviven con la represión de las autoridades estatales.

Junto a los grandes ejes de interpretación expuestos, este trabajo ha contemplado también la posible influencia de explicaciones alternativas a la supervivencia y desactivación de las organizaciones armadas latinoamericanas. Hemos atendido, en primer lugar, al impacto de la capacidad estatal sobre el grado de prevalencia de la actividad insurgente. De acuerdo con la hipótesis planteada, una mayor fortaleza del Estado aumentaría las probabilidades de finalización de los grupos rebeldes, al restringir, mediante un control efectivo de población y territorio, sus márgenes de maniobra. Sin embargo, las limitaciones de la evidencia empírica con la que contamos no permiten corroborar, de manera sólida, el mencionado argumento. La presencia de terreno montañoso, potencial refugio para la insurgencia, incrementa efectivamente la esperanza de vida de las organizaciones armadas. Sin embargo, no hemos podido extraer conclusiones significativas sobre el papel desempeñado por otras variables de control como el PIB *per cápita* o el tamaño poblacional del país. Es preciso, por ello, continuar avanzando en la investigación sobre los nexos que unen la fortaleza del Estado y la trayectoria de los movimientos insurreccionales activos en su interior.

Caso similar es el que se refiere a la dimensión de los agravios socioeconómicos. La literatura ha señalado con frecuencia a la pobreza y la desigualdad como factores explicativos de la violencia contestataria. Su influencia específica en las revueltas y levantamientos armados acaecidos en América Latina, una región severamente castigada por la injusticia social, ha sido, de hecho, objeto de un amplio debate. No obstante, nuestros datos no permiten confirmar que tales elementos, de los que se ha tomado como *proxy* el porcentaje de alfabetización, tuvieran un impacto sustantivo en el cese de actividad de las organizaciones insurgentes de nuestra muestra. La hipótesis nula no ha podido, por tanto, ser descartada.

Los análisis llevados a cabo han incorporado, además, la dimensión del contexto internacional mediante la consideración del efecto de la Guerra Fría sobre la insurgencia. La posición geoestratégica de América Latina durante la política de bloques, unida al impacto de la revolución cubana, convirtieron al subcontinente en escenario de enfrentamientos y disputas ideológicas propias de tal periodo. Los asuntos

internacionales adquirirían, así, un peso fundamental en la configuración y curso de la política doméstica. De acuerdo con los resultados obtenidos, las organizaciones insurgentes no se mantuvieron ajenas al influjo de las dinámicas exteriores. La clausura de la Guerra Fría incrementó de manera significativa las probabilidades de finalización de los grupos armados latinoamericanos. La caída del “telón de acero” significó no sólo la pérdida de recursos destinados a insurgencia y contrainsurgencia procedentes de ambos polos del sistema, sino también la crisis de una serie de creencias, discursos y marcos cognitivos que habían servido de inspiración y modelo para las luchas armadas desarrolladas en la región.

La estructura de oportunidades políticas para la acción y los procesos enmarcadores de carácter cognitivo resultan, como hemos visto, fundamentales para entender la evolución de las organizaciones insurgentes que actuaron en América Latina durante el último tercio del siglo XX. Además del análisis de dichas cuestiones, esta investigación ha efectuado también una breve incursión en el nivel micro-analítico a través del estudio de la capacidad y recursos a disposición de los actores colectivos. Pese a las limitaciones de la información manejada, las características internas de los grupos rebeldes parecen ofrecer algunas pistas sobre las pautas de supervivencia de la movilización armada. Así, y de acuerdo con nuestra hipótesis de trabajo, una mayor fortaleza de las organizaciones insurgentes se encontraría asociada, en términos generales, a una mayor longevidad de las mismas. La persistencia del desafío violento al Estado dependerá, en este sentido, de la disponibilidad de medios materiales y humanos para su sostenimiento. De este modo, aquellos grupos subversivos que cuentan con un gran número de militantes entre sus filas presentan un menor riesgo de disolución y cese de su actividad armada. Sin embargo, la debilidad de nuestros hallazgos en relación a esta variable nos impide extraer aquí conclusiones definitivas. El papel de los recursos organizativos en la configuración estratégica de los insurrectos constituye, por tanto, una interesante vía de investigación en la que son aún numerosos los interrogantes que se plantean: ¿cuál es la relación existente entre la fortaleza del grupo armado y el contexto sociopolítico en que éste emerge? ¿Es la democracia un mecanismo eficaz para la desactivación de las organizaciones violentas, independientemente de su tamaño y capacidad de desafío al Estado? ¿Tiene la represión estatal el mismo tipo de efecto sobre movimientos insurgentes de diferente envergadura? ¿Qué tipo de estructura,



estrategia y recursos son capaces de potenciar la supervivencia de los grupos subversivos?

Esta tesis doctoral ha ido dibujando, en definitiva, un mapa de la insurgencia latinoamericana que permite rastrear el recorrido y desenlace de sus organizaciones armadas. El enfoque y metodología propuestos para realizar dicha tarea ha pretendido aportar una nueva mirada a los estudios sobre violencia política y pacificación de conflictos armados en la región. Para ello, junto a la ilustración histórica de los fenómenos analizados, se ha desarrollado una amplia base de datos sobre la que hemos aplicado diversos modelos econométricos. Vale la pena recordar aquí el carácter probabilista de los resultados arrojados por este tipo de aproximaciones cuantitativas a la realidad social. Los hallazgos expuestos no determinan, por tanto, el curso de los acontecimientos, ni agotan las explicaciones posibles a la pluralidad de procesos de desactivación de la insurgencia registrados en América Latina. Sí ofrecen, no obstante, una valiosa panorámica sobre tendencias generales, de las que parece oportuno concluir el peso fundamental que los factores políticos jugaron en el declive de las organizaciones armadas del subcontinente. De este modo, cuestiones como la democracia, los procesos de cambio político, la represión estatal o las dinámicas internacionales de la Guerra Fría nos han otorgado importantes claves interpretativas para el estudio de la pacificación de las disputas violentas. Hemos constatado, en definitiva, el modo en que el contexto sociopolítico afecta a las tácticas y porvenir de las organizaciones rebeldes. Este trabajo no ha explorado, sin embargo, la posible bidireccionalidad de dicho proceso. Los actores colectivos responden al entorno en que desarrollan su actividad, pero son también creadores – o destructores – de oportunidades políticas, contribuyendo a modelar en direcciones y grados diversos el mundo que les rodea. En este sentido, cabría preguntarse: ¿cómo afecta la presencia de organizaciones insurgentes a los regímenes y procesos de cambio político? ¿Es la actividad armada una herramienta inhibidora o impulsora de transiciones democráticas? ¿Bajo qué condiciones y en virtud de qué mecanismos? ¿Cómo influye el desarrollo de la violencia insurgente en la aplicación y características de la represión estatal?

Los resultados obtenidos sugieren, además, la relevancia del marco geográfico de la investigación, subrayando el potencial e interés científico de los estudios de área. Las dinámicas de conjunto observadas presentan notables diferencias respecto a los hallazgos ofrecidos por otras investigaciones similares, consagradas también al estudio

de la supervivencia de grupos armados. Tales discrepancias, referidas fundamentalmente al impacto del régimen político sobre la insurgencia, podrían encontrarse parcialmente asociadas a la propia delimitación espacial y temporal del estudio. De acuerdo con este planteamiento, las particulares características sociopolíticas del contexto latinoamericano y el perfil predominante de sus organizaciones rebeldes estarían en la base de ciertas divergencias detectadas. Como se ha ido señalando a lo largo de este trabajo, los grupos localizados dentro de nuestra ventana de observación se distinguen por su ámbito doméstico, reincidencia en los ataques, carácter insurgente y vocación mayoritariamente – aunque no sólo – “revolucionaria”. Estos rasgos definitorios, unidos a la evolución política de la región, podrían contribuir a explicar el comportamiento registrado en las variables vinculadas a la forma de gobierno. Desde esta perspectiva, el propio establecimiento de regímenes poliárquicos constituiría un avance en las reivindicaciones de apertura de espacios políticos formuladas por buena parte de los movimientos insurrectos de nuestra muestra, contribuyendo así al cese de su actividad armada. No obstante, sería oportuno cuestionarse si los mecanismos activados por la democracia serían igualmente efectivos para gestionar o poner fin a otro tipo de reclamaciones y conflictos violentos. ¿Son las instituciones democráticas una herramienta útil de pacificación frente a organizaciones armadas de carácter transnacional? ¿Cuál es su relación con aquellos movimientos que plantean demandas territoriales o secesionistas en conflictos de índole nacionalista, étnica o religiosa? En definitiva, ¿cómo afecta la naturaleza de las organizaciones insurgentes a sus vínculos con el régimen político y a las perspectivas de pacificación de los conflictos armados? Todas estas preguntas configuran un sugestivo terreno de exploración por el que adentrarse en futuras investigaciones, en las que las peculiaridades regionales y el perfil de los grupos rebeldes podrían facilitar algunas pistas sobre la finalización de las contiendas violentas.

No podemos concluir este trabajo de investigación sin incidir en el profundo dolor que la violencia política y los enfrentamientos armados han provocado a lo largo de toda América Latina. Miles de víctimas mortales, heridos, desaparecidos y desplazados de sus tierras dan cuenta del funesto saldo arrojado por los combates. Reiteramos, por ello, nuestro compromiso con la búsqueda de vías pacíficas de resolución a las tensiones y disputas que atraviesan las sociedades humanas. Esperamos que el estudio realizado constituya una modesta contribución en la aproximación a tal

objetivo. Es necesario, asimismo, aclarar que el declive – aunque no extinción – de la violencia política en el subcontinente ha dado paso al azote de otras formas de violencia, con un acusado incremento de la criminalidad en diversos países del área. Los procesos de pacificación y desarme no han desterrado, por tanto, a la coacción, el miedo, la extorsión y el asesinato de las vivencias cotidianas de numerosos habitantes de la región. De acuerdo con el último *Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina* elaborado por el PNUD (2013: v), entre los años 2000 y 2010 la tasa de homicidios creció en el subcontinente un 11%. En el transcurso de una década, más de un millón de personas han perecido víctimas de la criminalidad y alrededor de 460 individuos, fundamentalmente mujeres, sufren cada día las consecuencias de la violencia sexual. Según el mencionado documento, y conforme a los datos disponibles, los delitos contra el patrimonio han ido también en aumento y el volumen de robos se ha visto próximo a triplicarse en los últimos 25 años. La inseguridad es, de este modo, uno de los grandes desafíos a los que la región ha de enfrentarse en la actualidad. La violencia común supone un serio obstáculo para el avance del desarrollo humano en América Latina: el crimen organizado y el narcotráfico, las pandillas y delitos callejeros, la violencia contra las mujeres o la corrupción y violencia ilegal ejercida por agentes estatales ponen en severo riesgo el progreso, integridad física y bienestar de la población (PNUD, 2013: 73-90). Es necesario, por tanto, realizar un esfuerzo colectivo de aprendizaje orientado al diseño de nuevas fórmulas y políticas públicas capaces de aplacar la amenaza del crimen y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el subcontinente.



## ANEXOS

### ANEXO A: INFORMACIÓN Y ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS

**Tabla A1.** Listado de las organizaciones insurgentes incluidas en la base de datos

País	Nombre del grupo insurgente	Periodo de actividad armada		Evento
		Inicio	Fin	
Argentina	Montoneros	1970	1979	1
	Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)	1979	1977	1
	Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP)	1992	1997	1
	Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)	1968	1974	1
	Frente Argentino de Liberación (FAL)	1970	1974	1
	Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)	1970	1973	1
	Brigada Che Guevara	1988	1990	1
	OAS-MRP	1988	1988	1
Bolivia	Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK)	1991	1993	1
	Fuerzas Armadas de Liberación Zarate Willka (FAL-ZW)	1988	1990	1
	Falange Socialista Boliviana (FSB) - Clandestinidad	1980	1981	1
Brasil	Vanguardia Popular Revolucionária (VPR)	1968	1971	1
Chile	Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)	1983	1997	1
	Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)	1967	1994	1
	Movimiento de Acción Popular Unitaria - Lautaro (MAPU-L)	1983	1994	1
Colombia	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)	1966	2000	0
	Ejército de Liberación Nacional (ELN)	1965	2000	0
	Movimiento 19 de Abril (M-19)	1974	1990	1
	Ejército Popular de Liberación (EPL)	1968	1991	1
	Ejército Popular de Liberación - Disidentes	1992	2000	0
	Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB)	1985	1994	1
	Frente Ricardo Franco (FRF)	1984	1988	1
	Movimiento de Autodefensa Obrera (MAO)	1978	1984	1
	Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL)	1984	1991	1
	Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)	1982	1991	1
	Batallón América	1986	1988	1
	Comando Pedro León Arboleda (PLA)	1979	1986	1
	Grupo Jaime Batemán Cayón (JBC)	1989	2000	0
Ecuador	Alfaro Vive, ¡Carajo! (AVC)	1983	1991	1
	Montoneras Patria Libre (MPL)	1986	1991	1

El Salvador	Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) <sup>355</sup>	1980	1992	1
	Fuerzas Populares de Liberación (FPL)	1972	1992	1
	Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)	1972	1992	1
	Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN)	1975	1992	1
	Bloque Popular Revolucionario (BPR)	1975	1992	1
	Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28)	1979	1992	1
	Frente de Acción Popular Unificada (FAPU)	1974	1992	1
	Frente Democrático Revolucionario (FDR)	1980	1988	1
Guatemala	Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)	1975	1996	1
	Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)	1982	1996	1
	Organización del Pueblo en Armas (ORPA)	1979	1996	1
	Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)	1962	1996	1
	Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)	1961	1996	1
	Frente Popular 31 de Enero (FP-31)	1981	1982	1
Honduras	Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya (FPR-LZ)	1980	1991	1
	Frente Patriótico Morazanista (FPM)	1988	1995	1
	Movimiento Popular de Liberación - Cinchonero (MLP-C)	1980	1991	1
	Frente Morazanista para la Liberación de Honduras (FMLH)	1980	1991	1
México	Liga Comunista 23 de Septiembre	1973	1981	1
	Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)	1994	1997	1
	Unión del Pueblo (UP)	1973	1978	1
	Ejército Popular Revolucionario (EPR)	1996	2000	0
Nicaragua	Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN)	1981	1990	1
	Resistencia Nicaragüense (RN)	1987	1990	1
	Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE)	1982	1990	1
	MISURASATA	1981	1988	1
	KISAN	1983	1988	1
	Unidad Nicaragüense Opositora (UNO)	1985	1987	1
	Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses (FARN)	1981	1990	1
Panamá	Movimiento 20 de Diciembre (M-20)	1990	1992	1

<sup>355</sup> Según mencionamos ya en el cuerpo de la investigación, este trabajo incluye como unidades de observación tanto a las coordinadoras guerrilleras operativas en el subcontinente latinoamericano, como a las organizaciones insurgentes que las integran, siempre que aparezcan registradas en la GTD. El FMLN constituye un buen ejemplo de tal circunstancia. Como puede constatarse en esta tabla, junto a dicha coalición rebelde se han introducido también grupos armados pertenecientes a la misma (ej. FPL, ERP o FARN) y organizaciones populares de masas a las que la GTD atribuye algún tipo de acción violenta (ej. BPR, LP-28, FAPU o FDR).

Perú	Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL)	1980	1992	1
	Sendero Luminoso - Proseguir	1993	2000	0
	Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)	1984	1997	1
	Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) [Voz Rebelde] <sup>356</sup>	1984	1994	1
	Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP)	1985	1986	1
Puerto Rico	Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros)	1978	1998	1
	Organización de Voluntarios para la Revolución Puertorriqueña (OVPR)	1978	1986	1
	Fuerzas Armadas de Resistencia Popular (FARP)	1979	1986	1
	Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)	1974	1985	1
	Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP)	1977	1980	1
	Comandos Revolucionarios Independientes Armados (CRIA)	1976	1977	1
	Movimiento Independentista Revolucionario en Armas (MIRA)	1969	1973	1
	Comandos Armados de Liberación (CAL)	1968	1972	1
	Fuerzas Revolucionarias Pedro Albizu Campos	1988	1990	1
	Fuerzas Guerrilleras de Liberación	1987	1987	1
Rep. Dominicana	Brigada Revolucionaria Maximiliano Gómez	1987	1988	1
	Fuerza de Resistencia y Liberación Popular (FRLP)	1989	1989	1
Uruguay	Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T)	1966	1972	1
Venezuela	Bandera Roja (BR)	1970	1994	1

<sup>356</sup> Pese a que la GTD no lo especifica, asumimos que los incidentes violentos registrados corresponden a la escisión Voz Rebelde del MIR peruano.

**Tabla A2.** Disponibilidad de información para el caso puertorriqueño

Variable	Operacionalización	Fuente	Datos para Puerto Rico
Régimen político	Índice democracia Vanhanen	Vanhanen (2002)	No (datos EEUU)
	Índice democracia SIP	Gates et al. (2006b)	No (datos EEUU)
	Índice de inclusividad del sistema	Keefer et al (2012)	No (datos EEUU)
	Periodos de transición/ Democracias postransición	Elaboración propia a partir de Cheibub et al. (2010a; 2010b)	Sí <sup>357</sup>
	Índice represión estatal (PTS)	Gibney, Cornett y Wood (2010)	No (datos EEUU)
Capacidad estatal	PIB <i>per cápita</i>	Maddison (2010)	Sí
	Población	Maddison (2010)	Sí
	Porcentaje terreno montañoso	Fearon y Laitin (2003b)	No (datos EEUU)
Agravios socioeconómicos	Porcentaje alfabetización	Banks y Wilson (2010)	No (datos EEUU)
Contexto internacional	Guerra Fría	Elaboración propia	Sí
Recursos y fortaleza de las organiz. insurgentes	Tamaño de la organización	Jones y Libicki (2008) (entre otros)	Sí

<sup>357</sup> Si bien es cierto que el estudio original de Cheibub et al. (2010a; 2010b) no incluye información para Puerto Rico, en este caso hemos realizado una adaptación de los datos, considerando que la isla elige a su propio Gobernador desde 1948.



**Tabla A3.** Estadísticos descriptivos de la variable dependiente

<b>Variable</b>	<b>Periodo</b>	<b>N</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Eventos</b>	<b>Media</b>	<b>Desv. Típica</b>
Abandono	1970-2000	803	0	1	73	0,0909091	0,287659

**Tabla A4.** Estadísticos descriptivos de las variables independientes

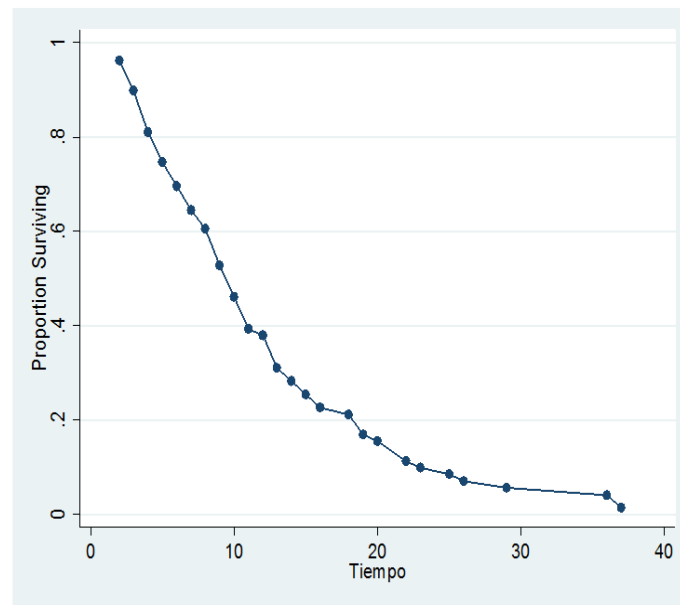
<b>Variable</b>	<b>Periodo</b>	<b>N</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Media</b>	<b>Desv. Típica</b>
DemoVan	1970-2000	803	0	33,32	10,80001	6,8205
DemoSIPv2	1970-2000	751	0	0,9577676	0,6540484	0,2981986
checks	1975-2000	700	1	6	2,595714	1,288547
AgeDemoCat	1970-2000	803	0	2		
DemoPost	1970-2000	803	0	1	0,5940224	0,4913863
RepresiónA	1976-2000	697	1	5	3,810617	1,188427
gdpmad	1970-2000	803	1437,449	13250,9	4388,229	2329,458
pop2	1970-2000	803	2393	99926,62	15889,64	15954,6
Mont	1970-2000	803	0	57,59999	31,82254	15,15253
school12	1970-2000	803	383	996	776,5554	151,4033
GF	1970-2000	803	0	1	0,7907846	0,407002
Tamaño	1970-2000	803	1	4	2,433375	0,9613384

**Tabla A5.** Valores de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Método de las tablas de vida (ltable)<sup>358</sup>.

Interval		Beg. Total	Deaths	Lost	Survival	Std. Error	[95% Conf. Int.]	
1	2	79	3	0	0,9620	0,0215	0,8869	0,9876
2	3	76	5	0	0,8987	0,0339	0,8077	0,9480
3	4	71	7	0	0,8101	0,0441	0,7050	0,8809
4	5	64	5	0	0,7468	0,0489	0,6356	0,8286
5	6	59	4	1	0,6958	0,0518	0,5813	0,7846
6	7	54	4	0	0,6442	0,0540	0,5279	0,7389
7	8	50	3	0	0,6056	0,0552	0,4887	0,7038
8	9	47	6	1	0,5274	0,0565	0,4113	0,6309
9	10	40	5	1	0,4607	0,0567	0,3471	0,5668
10	11	34	5	0	0,3929	0,0559	0,2839	0,5000
11	12	29	1	0	0,3794	0,0556	0,2716	0,4864
12	13	28	5	1	0,3104	0,0534	0,2101	0,4160
13	14	22	2	0	0,2822	0,0521	0,1856	0,3866
14	15	20	2	0	0,2540	0,0506	0,1617	0,3567
15	16	18	2	0	0,2257	0,0487	0,1384	0,3262
17	18	16	1	0	0,2116	0,0477	0,1270	0,3108
18	19	15	3	0	0,1693	0,0440	0,0939	0,2635
19	20	12	1	0	0,1552	0,0425	0,0833	0,2474
21	22	11	3	0	0,1129	0,0373	0,0531	0,1976
22	23	8	1	0	0,0988	0,0352	0,0437	0,1805
24	25	7	1	0	0,0847	0,0329	0,0347	0,1630
25	26	6	1	0	0,0705	0,0303	0,0262	0,1450
28	29	5	1	0	0,0564	0,0273	0,0184	0,1266
35	36	4	1	1	0,0403	0,0238	0,0100	0,1065
36	37	2	1	1	0,0134	0,0174	0,0004	0,0917

<sup>358</sup> Las tablas de vida de *Stata* realizan, por defecto, un “ajuste actuarial” en el número de sujetos en riesgo de experimentar el evento al comienzo de cada intervalo. De acuerdo con Bernardi (2006: 143-144, nota 69), tal ajuste “consiste en considerar que los sujetos que han experimentado el acontecimiento o la censura a la derecha entre el tiempo  $t$  y  $t+1$  han pertenecido al grupo de riesgo sólo durante la mitad del intervalo de tiempo”. Por lo tanto, de acuerdo con el cálculo realizado por *Stata*, el número ajustado de individuos en riesgo al comienzo del intervalo (tiempo  $t$ ) es igual al total de individuos en riesgo en el momento  $t$  – (el número de eventos o censuras en el intervalo)/2. Si incluyésemos el comando “noadjust” el número de individuos en riesgo sería, simplemente, el total al inicio del intervalo, correspondiéndose con la asunción de la estimación Kaplan-Meier y obteniéndose, por tanto, resultados idénticos a los que se presentan en la Tabla 4.1 del presente estudio.

**Gráfico A1.** Representación gráfica de la función de supervivencia para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Método de las tablas de vida (ltable)



**Tabla A6.** Valores de la función de riesgo acumulado para los grupos insurgentes latinoamericanos (1970-2000). Método de Nelson-Aalen (sts)

Time	Beg. Total	Fail	Net Lost	Nelson-Aalen Cum. Haz.	Std. Error	[95% Conf. Int.]	
1	79	3	0	0,0380	0,0219	0,0122	0,1177
2	76	5	0	0,1038	0,0367	0,0519	0,2075
3	71	7	0	0,2024	0,0523	0,1219	0,3358
4	64	5	0	0,2805	0,0629	0,1807	0,4353
5	59	4	1	0,3483	0,0714	0,2330	0,5206
6	54	4	0	0,4224	0,0805	0,2907	0,6136
7	50	3	0	0,4824	0,0876	0,3379	0,6886
8	47	6	1	0,6100	0,1019	0,4396	0,8464
9	40	5	1	0,7350	0,1163	0,5391	1,0022
10	34	5	0	0,8821	0,1336	0,6555	1,1869
11	29	1	0	0,9166	0,1380	0,6824	1,2311
12	28	5	1	1,0951	0,1594	0,8233	1,4567
13	22	2	0	1,1860	0,1719	0,8928	1,5756
14	20	2	0	1,2860	0,1859	0,9688	1,7071
15	18	2	0	1,3971	0,2018	1,0527	1,8543
17	16	1	0	1,4596	0,2112	1,0992	1,9383
18	15	3	0	1,6596	0,2407	1,2490	2,2054
19	12	1	0	1,7430	0,2548	1,3088	2,3211
21	11	3	0	2,0157	0,2995	1,5065	2,6971
22	8	1	0	2,1407	0,3245	1,5904	2,8814
24	7	1	0	2,2836	0,3546	1,6844	3,0959
25	6	1	0	2,4502	0,3918	1,7910	3,3521
28	5	1	0	2,6502	0,4399	1,9143	3,6692
35	4	1	1	2,9002	0,5060	2,0603	4,0825
36	2	1	1	3,4002	0,7113	2,2565	5,1237

**Tabla A7.** Matriz de correlaciones entre las variables independientes<sup>359</sup> (método pairwise<sup>360</sup>)

	<b>gdpmad</b>	<b>pop2</b>	<b>Mont</b>	<b>DemoVan</b>	<b>DemoSIPv2</b>	<b>checks</b>	<b>AgeDemoCat</b>	<b>DemoPost</b>	<b>RepresiónA</b>	<b>school12</b>	<b>GF</b>	<b>Tamaño</b>
<b>gdpmad</b>	1,0000											
<b>pop2</b>	0,2459	1,0000										
<b>Mont</b>	0,1149	0,2082	1,0000									
<b>DemoVan</b>	0,4024	0,0442	0,0215	1,0000								
<b>DemoSIPv2</b>	0,1535	-0,0006	-0,1126	0,7231	1,0000							
<b>checks</b>	0,4780	0,0483	0,1052	0,6063	0,4918	1,0000						
<b>AgeDemoCat</b>	0,1862	-0,0275	0,1022	0,4867	0,7077	0,5677	1,0000					
<b>DemoPost</b>	0,2225	0,0418	0,1310	0,3610	0,5602	0,5135	0,9341	1,0000				
<b>RepresiónA</b>	-0,5157	0,1987	0,0751	-0,4657	-0,1645	-0,4459	-0,2021	-0,1888	1,0000			
<b>school12</b>	0,6978	0,3803	0,1599	0,4533	0,3893	0,4547	0,1823	0,2261	-0,3588	1,0000		
<b>GF</b>	-0,1371	-0,2580	-0,1999	-0,1563	-0,1689	-0,1815	-0,1479	-0,1696	0,0062	-0,2133	1,0000	
<b>Tamaño</b>	-0,3660	-0,0637	-0,1536	-0,2851	-0,1106	-0,3343	-0,0498	-0,0943	0,3594	-0,3994	0,0153	1,0000

<sup>359</sup> Esta tabla muestra las correlaciones existentes entre todas las variables independientes que se han tomado en consideración a lo largo del estudio. Como puede constatar, ninguno de los modelos estimados introduce variables cuya correlación sea superior a |0,5|.

<sup>360</sup> El método de *pairwise correlation* calcula las correlaciones entre pares de variables tomando en consideración todos aquellos casos que tienen valores válidos en las variables observadas, independientemente de que alguno de ellos presente información incompleta en otras variables. Es decir, a diferencia del procedimiento *listwise*, no se eliminan del cálculo los casos a los que le faltan datos en alguna de sus variables.

**Tabla A8.** Test del supuesto de proporcionalidad de Cox basado en los residuos de Schoenfeld (phtest)

Modelo Cox	Schoenfeld Residuals – Global test		
	<i>chi2</i>	<i>df</i>	<i>Prob&gt;chi2</i>
<i>Modelo 1a</i>	3,01	4	0,5568
<i>Modelo 1c</i>	2,04	4	0,7288
<i>Modelo 1e</i>	4,60	4	0,3306
<i>Modelo 2a</i>	6,21	5	0,2861
<i>Modelo 2c</i>	2,75	4	0,5997
<i>Modelo 3a</i>	3,48	5	0,6266
<i>Modelo 3c</i>	1,88	4	0,7572
<i>Modelo 4a</i>	3,40	6	0,7574
<i>Modelo 4c</i>	1,76	5	0,8816
<i>Modelo 5a</i>	6,18	7	0,5186
<i>Modelo 5c</i>	5,84	6	0,4413
<i>Modelo 6a</i>	6,02	8	0,6447
<i>Modelo 6c</i>	5,97	7	0,5436

Note: robust variance-covariance matrix used

Los resultados del test llevado a cabo, basado en los residuos de Schoenfeld, avalan el cumplimiento del supuesto de riesgos proporcionales en todos nuestros modelos Cox. Este principio se cumple tanto a nivel global – según se muestra en la Tabla A8 –, como en cada una de las distintas covariables incluidas en las estimaciones. Hay, no obstante, una excepción que es preciso señalar. De acuerdo con el test realizado, la variable Guerra Fría estaría vulnerando, especialmente en los *Modelos 5c* y *6c*, la asunción de proporcionalidad (*Modelo 5a*, var. GF: Prob>chi2= 0,0533; *Modelo 5c*, var. GF: Prob>chi2= 0,0284; *Modelo 6a*, var. GF: Prob>chi2= 0,0663; *Modelo 6c*, var. GF: Prob>chi2=0,0319). Tomaremos, por ello, las debidas cautelas, prestando atención a las estimaciones *logit* efectuadas para el cálculo de los *Modelos 5* y *6* (recordemos, en todo caso, que los modelos *logit* para tiempo discreto arrojaban resultados similares a los derivados de la aplicación de modelos de riesgos proporcionales de Cox).

**Tabla A9.** Réplica de los *Modelos Cox* sin los grupos armados puertorriqueños<sup>361</sup>

	<i>Modelo 1a'</i>	<i>Modelo 1c'</i>	<i>Modelo 1e'</i>	<i>Modelo 2a'</i>	<i>Modelo 2c'</i>	<i>Modelo 3a'</i>	<i>Modelo 3c'</i>	<i>Modelo 4a'</i>	<i>Modelo 4c'</i>	<i>Modelo 5a'</i>	<i>Modelo 5c'</i>	<i>Modelo 6a'</i>	<i>Modelo 6c'</i>
PIB <i>per cápita</i>	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)								
Población	1,0000* (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9841*** (0,0058)	0,9830** (0,0066)	0,9856** (0,0062)	0,9788*** (0,0068)	0,9789*** (0,0068)	0,9854*** (0,0055)	0,9852*** (0,0053)	0,9831** (0,0067)	0,9834*** (0,0063)	0,9776*** (0,0065)	0,9781*** (0,0062)	0,9751*** (0,0068)	0,9755*** (0,0065)
Democracia (Van)	1,0678*** (0,0200)												
Democracia (SIP)		2,4687 (1,3684)											
Inclusividad demo			1,3546*** (0,1554)										
Categoría de ref:				Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos	
<i>Dictadura</i>				0,4505** (0,1650)		0,5258* (0,1866)		0,5661 (0,1987)		0,5998 (0,2133)		0,6217 (0,2205)	
<i>Demo transición</i>				0,3868* (0,1907)		0,1515*** (0,1047)		0,1580*** (0,1081)		0,1674*** (0,1026)		0,1832*** (0,1113)	
Demo postrans (0/1)					2,3387*** (0,7456)		2,6800*** (0,8949)		2,5259*** (0,8531)		2,4208*** (0,7929)		2,2754** (0,7424)
Represión estatal						0,6274*** (0,0775)	0,6289*** (0,0796)	0,6383*** (0,0781)	0,6405*** (0,0804)	0,6682*** (0,0942)	0,6734*** (0,0981)	0,6799** (0,1028)	0,6851** (0,1071)
Alfabetización								1,0014 (0,0013)	1,0012 (0,0012)	1,0003 (0,0013)	0,9999 (0,0013)	0,9996 (0,0014)	0,9992 (0,0013)
Guerra Fría										0,2605*** (0,0802)	0,2615*** (0,0805)	0,2733*** (0,0866)	0,2740*** (0,0868)
Tamaño organización												0,7769* (0,1166)	0,7645* (0,1171)
N	736	684	644	736	736	639	639	639	639	639	639	639	639
BIC	437,6065	426,7996	378,6516	445,3348	438,8064	370,6845	367,2886	376,2750	373,0818	363,5549	360,2828	367,8377	364,2702
<i>Log-Lik Full Model</i>	-205,6008	-200,3439	-176,3904	-206,1643	-206,2008	-169,1925	-170,7245	-168,7578	-170,3911	-159,1678	-160,7617	-158,0792	-159,5254

<sup>361</sup> Las Tablas A9, A10 y A11 muestran los coeficientes exponenciados y presentan los errores estándar robustos (en clústeres por grupo armado) entre paréntesis. \*  $p < 0,10$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*\*\*  $p < 0,01$

**Tabla A10.** Réplica de los *Modelos logit* sin los grupos armados puertorriqueños

	<i>Modelo 1b'</i>	<i>Modelo 1d'</i>	<i>Modelo 1f'</i>	<i>Modelo 2b'</i>	<i>Modelo 2d'</i>	<i>Modelo 3b'</i>	<i>Modelo 3d'</i>	<i>Modelo 4b'</i>	<i>Modelo 4d'</i>	<i>Modelo 5b'</i>	<i>Modelo 5d'</i>	<i>Modelo 6b'</i>	<i>Modelo 6d'</i>
PIB <i>per cápita</i>	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)								
Población	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9824*** (0,0064)	0,9813** (0,0072)	0,9827** (0,0072)	0,9758*** (0,0079)	0,9759*** (0,0080)	0,9813*** (0,0065)	0,9815*** (0,0065)	0,9781*** (0,0082)	0,9789*** (0,0078)	0,9691*** (0,0085)	0,9703*** (0,0082)	0,9667*** (0,0091)	0,9677*** (0,0086)
Democracia (Van)	1,0742*** (0,0228)												
Democracia (SIP)		2,5020 (1,4980)											
Inclusividad demo			1,4891*** (0,2012)										
Categoría de ref:				Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos	
<i>Dictadura</i>				0,4000** (0,1586)		0,4912* (0,1926)		0,5364* (0,2027)		0,5710 (0,2376)		0,5927 (0,2456)	
<i>Demo transición</i>				0,2966** (0,1549)		0,1211*** (0,0860)		0,1282*** (0,0904)		0,1277*** (0,0851)		0,1411*** (0,0926)	
Demo postrans (0/1)					2,7822*** (0,9857)		3,1045*** (1,1563)		2,8569*** (1,0588)		2,7686*** (1,0817)		2,5913** (0,9981)
Represión estatal						0,5477*** (0,0953)	0,5502** (0,0968)	0,5593*** (0,0977)	0,5636*** (0,0993)	0,5847*** (0,1161)	0,5949** (0,1208)	0,5909** (0,1243)	0,6013** (0,1300)
Alfabetización								1,0020 (0,0014)	1,0019 (0,0014)	1,0011 (0,0016)	1,0007 (0,0015)	1,0004 (0,0016)	1,0001 (0,0016)
Guerra Fría										0,1863*** (0,0704)	0,1876*** (0,0710)	0,1957*** (0,0763)	0,1973*** (0,0772)
Tamaño organización												0,7614 (0,1338)	0,7449 (0,1341)
Tiempo	1,2525 (0,1882)	1,2578 (0,1871)	1,2528 (0,1810)	1,2757* (0,1866)	1,2675* (0,1825)	1,2694 (0,1981)	1,2530 (0,1952)	1,2851 (0,2032)	1,2709 (0,2021)	1,2703 (0,2087)	1,2519 (0,2061)	1,3082* (0,2128)	1,2990 (0,2135)
Tiempo <sup>2</sup>	0,9871 (0,0109)	0,9849 (0,0105)	0,9858 (0,0107)	0,9835 (0,0103)	0,9838 (0,0102)	0,9847 (0,0106)	0,9853 (0,0106)	0,9834 (0,0107)	0,9840 (0,0108)	0,9828 (0,0110)	0,9838 (0,0110)	0,9818* (0,0108)	0,9824 (0,0109)
Tiempo <sup>3</sup>	1,0002 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)	1,0003 (0,0002)
N	736	684	644	736	736	639	639	639	639	639	639	639	639
BIC	463,2425	455,6113	420,8326	468,7093	462,3902	407,7423	405,1504	412,6186	410,2410	393,7211	391,5129	397,9289	395,3436
<i>Log-Lik Full Model</i>	-205,2163	-201,6938	-184,5455	-204,6491	-204,7902	-174,8016	-176,7356	-174,0098	-176,0509	-161,3311	-163,4569	-160,2050	-162,1423

**Tabla A11.** Réplica de los *Modelos logit* introduciendo *cubic splines*

	<i>Modelo 1b</i>	<i>Modelo 1d</i>	<i>Modelo 1f</i>	<i>Modelo 2b</i>	<i>Modelo 2d</i>	<i>Modelo 3b</i>	<i>Modelo 3d</i>	<i>Modelo 4b</i>	<i>Modelo 4d</i>	<i>Modelo 5b</i>	<i>Modelo 5d</i>	<i>Modelo 6b</i>	<i>Modelo 6d</i>
PIB <i>per cápita</i>	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)	1,0000 (0,0001)								
Población	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)	1,0000 (0,0000)
Terreno montañoso	0,9818*** (0,0061)	0,9812*** (0,0069)	0,9839*** (0,0061)	0,9759*** (0,0074)	0,9759*** (0,0074)	0,9849** (0,0060)	0,9853** (0,0060)	0,9854** (0,0061)	0,9856** (0,0060)	0,9767*** (0,0069)	0,9771*** (0,0066)	0,9736*** (0,0073)	0,9739*** (0,0070)
Democracia (Van)	1,0638*** (0,0204)												
Democracia (SIP)		2,7064* (1,5306)											
Inclusividad demo			1,4457*** (0,1872)										
Categoría de ref:				Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos		Demo Pos	
<i>Dictadura</i>				0,3930** (0,1509)		0,5299* (0,1988)		0,5032* (0,2044)		0,5209 (0,2257)		0,5461 (0,2371)	
<i>Demo transición</i>				0,2937** (0,1516)		0,1475*** (0,1068)		0,1392*** (0,1023)		0,1452*** (0,0994)		0,1633*** (0,1121)	
Demo postrans (0/1)					2,8226*** (0,9700)		2,7250*** (0,9843)		2,8890*** (1,1407)		2,8014*** (1,1174)		2,5886** (1,0426)
Represión estatal						0,7346** (0,0891)	0,7314*** (0,0881)	0,7023*** (0,0871)	0,6993*** (0,0899)	0,7155** (0,1141)	0,7143** (0,1182)	0,7336* (0,1247)	0,7331* (0,1294)
Alfabetización								0,9993 (0,0011)	0,9993 (0,0011)	0,9990 (0,0013)	0,9989 (0,0014)	0,9982 (0,0015)	0,9981 (0,0015)
Guerra Fría										0,1934*** (0,0651)	0,1942*** (0,0647)	0,2016*** (0,0691)	0,2022*** (0,0688)
Tamaño organización												0,7283* (0,1277)	0,7155* (0,1275)
Spline1	1,1223 (0,1459)	1,1367 (0,1458)	1,0607 (0,1362)	1,1778 (0,1454)	1,1682 (0,1438)	1,0859 (0,1472)	1,0678 (0,1435)	1,0884 (0,1472)	1,0682 (0,1431)	1,1035 (0,1613)	1,0786 (0,1555)	1,1046 (0,1579)	1,0861 (0,1539)
Spline2	0,6121 (0,7050)	0,4499 (0,5066)	0,9122 (1,0711)	0,3187 (0,3433)	0,3390 (0,3681)	0,7614 (0,9170)	0,8676 (1,0383)	0,7467 (0,8956)	0,8631 (1,0285)	0,4773 (0,5938)	0,5780 (0,7135)	0,5722 (0,7210)	0,6658 (0,8358)
Spline3	2,2074 (4,9896)	4,1407 (9,1436)	1,0321 (2,3788)	8,0078 (16,9259)	7,1237 (15,2043)	1,4604 (3,4356)	1,1346 (2,6548)	1,5173 (3,5500)	1,1478 (2,6715)	3,5917 (8,6339)	2,4797 (5,9243)	2,4633 (6,0261)	1,8329 (4,4734)
N	803	751	700	803	803	697	697	697	697	697	697	697	697
BIC	524,4407	514,2459	469,1225	527,1774	520,7580	464,8365	461,4842	471,0263	467,6890	451,0444	447,6061	454,4878	450,6847
<i>Log-Lik Full Model</i>	-235,4669	-230,6373	-208,3570	-233,4911	-233,6256	-202,9577	-204,5549	-202,7792	-204,3840	-189,5149	-191,0691	-187,9632	-189,3350



**Tabla A12.** Probabilidades de ocurrencia de la variable dependiente para determinados valores de las variables independientes (prvalue). Cálculos sobre el *Modelo 6d*

*Valores de las variables independientes:* DemoPost = 0; RepresiónA = 5; GF = 1; rest = mean

<b>logit: Predictions for Abandono</b>							
Confidence intervals by delta method							
		95% Con. Interval					
Pr(y=1 x):	<b>0,0175</b>	[0,0017 , 0,0333]					
Pr(y=0 x):	<b>0,9825</b>	[0,9667 , 0,9983]					
x =	pop2	Mont	DemoPost	RepresiónA	GF	school12	Tamaño
	15480,504	32,170729	0	5	1	778,35581	2,4591105
	Tiempo	tiempo2	tiempo3				
	10,143472	167,77618	3616,8666				

*Valores de las variables independientes:* DemoPost = 1; RepresiónA = 2; GF = 0; rest = mean

<b>logit: Predictions for Abandono</b>							
Confidence intervals by delta method							
		95% Con. Interval					
Pr(y=1 x):	<b>0,3756</b>	[0,2076 , 0,5435]					
Pr(y=0 x):	<b>0,6244</b>	[0,4565 , 0,7924]					
x =	pop2	Mont	DemoPost	RepresiónA	GF	school12	Tamaño
	15480,504	32,170729	1	2	0	778,35581	2,4591105
	Tiempo	tiempo2	tiempo3				
	10,143472	167,77618	3616,8666				

Valores de las variables independientes: DemoPost = 0; RepresiónA = 5; GF = 1;  
Tamaño = 4; rest = mean

<b>logit: Predictions for Abandono</b>							
Confidence intervals by delta method							
95% Con. Interval							
Pr(y=1 x):	<b>0,0105</b>	[0,0003 , 0,0206]					
Pr(y=0 x):	<b>0,9895</b>	[0,9794 , 0,9997]					
x =	pop2	Mont	DemoPost	RepresiónA	GF	school12	Tamaño
	15480,504	32,170729	0	5	1	778,35581	4
	Tiempo	tiempo2	tiempo3				
	10,143472	167,77618	3616,8666				

Valores de las variables independientes: DemoPost = 1; RepresiónA = 2; GF = 0;  
Tamaño = 1; rest = mean

<b>logit: Predictions for Abandono</b>							
Confidence intervals by delta method							
95% Con. Interval							
Pr(y=1 x):	<b>0,4958</b>	[0,3007 , 0,6909]					
Pr(y=0 x):	<b>0,5042</b>	[0,3091 , 0,6993]					
x =	pop2	Mont	DemoPost	RepresiónA	GF	school12	Tamaño
	15480,504	32,170729	1	2	0	778,35581	1
	Tiempo	tiempo2	tiempo3				
	10,143472	167,77618	3616,8666				

**ANEXO B: RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL EN INGLÉS**  
**[PhD Thesis Summary]**

Title:

**The end of armed struggle: A study of insurgent groups' survival and  
demobilisation in Latin America (1970-2000)**

*Introduction and objectives*

Violence has played a prominent role in the origin, development, and structure of human societies. It is present in institutions and social bonds, acquiring multiple forms of expression and levels of intensity (González Calleja, 2002: 11). In this way, violence – which is ‘as old as the world’ (Domenach, 1978: 777) – has accompanied human beings from the very beginning of time. Consequently, the study of this phenomenon constitutes an unavoidable task for those who aim to understand the prevailing social order and to explain the relationships established between different individuals, organisations, and groups. In Hannah Arendt’s (2005: 16) words, ‘no one concerned with History and Politics can remain unaware of the enormous role that violence has always played in human affairs’.

Nevertheless, political science has usually neglected violence as a particular object of consideration. It is not difficult to find the organisation of congresses, the publication of handbooks, or the design of syllabi for this discipline where the analysis of violence occupies, at best, a marginal position. This research places it, however, at the centre of its inquiries by examining the existing ties between politics and violent activity. More specifically, this study analyses the finalization of those armed conflicts where the opposing sides are the Government and insurgent groups. The resolution of these scenarios of confrontation represents an issue of major importance due to the numerous and profound consequences of violence in conflict-torn societies. For that reason, this dissertation is committed to peace research and intends to contribute to the clarification of favourable conditions for the end of violent political disputes.

This question is approached from a collective action perspective. Thus, insurgent organisations become our main units of observation and analysis. In contrast with state-centred studies, this research focuses on rebels' viewpoint and strategic decisions, offering an alternative insight into the analysis of insurrectional violence. This work builds on a set of recent studies devoted to the examination of armed groups' duration (Jones and Libicki, 2008; Blomberg, et al. 2010; 2011; Young and Dugan, 2010; Phillips, 2011; Carter, 2012; Gaibullov and Sandler, 2013). The main objective of this dissertation is, therefore, the systematic examination of the factors that lead to insurgent movements' survival or demise. In brief, we seek to answer the following research questions: Why do rebel organisations fail? Under what conditions do they abandon violence? Why do some insurgent groups endure much more than others? What kind of mechanisms can expand or restrict their longevity?

Our empirical analysis of violent contentious politics tests several theoretical hypotheses. Firstly, we deal with the impact of political regimes on armed groups' survival. The intense and unfinished debate on the existing dynamics between form of government and insurgent activity is at the core of this investigation. We explore the so-called 'democratic peace argument', looking at the ability of *polyarchies* to deter – or encourage – the use of subversive violence. Additionally, the specific influence of regime change on rebels' strategies is taken into account. The observation of democratic transition and consolidation periods allows us to analyse the behaviour of these collective actors in changing political scenarios. Finally, we look at state repression, examining the consequences of governmental violence on the repertoires of action adopted by insurgency.

Together with the aforementioned elements, the literature has also provided several alternative explanations for the incidence of insurrectionary armed activity. Questions such as state capacity, material living conditions and socioeconomic grievances, international context, or the available resources for subversive movements have been frequently pointed out as relevant for the study of insurgency. These rival arguments, the 'usual suspects' influencing the levels of collective violence, shape the secondary hypotheses of this research.

### *Methodology and research design*

For the empirical approach to violent conflict resolution we have carried out an area study focused on Latin America from 1970 through to 2000. During this period, the region witnessed numerous episodes of insurgent violence. Armed rebel organisations emerged and gained political relevance in virtually every country of the subcontinent. Furthermore, Latin America experienced an intense process of political transformation. The third wave of democratisations (Huntington, 1991a; 1991b) swept the ruling authoritarian governments away, bringing new democratic institutions to the region. Finally, the open debate on Latin American state fragility, the scourge of inequality in the subcontinent, its particular geostrategic position during the Cold War, and the strength of its armed movements also confirm the suitability of this geographical framework for the observation of our research problem.

The empirical design of this dissertation proposes a comparative study with an intermediate *N* strategy. From a methodological point of view, this research will combine several approaches. On the one hand, it includes a quantitative analysis based on the estimation of duration models, also known as survival analysis or event history analysis. This statistical technique is applied to a detailed and extensive database specifically compiled for the realisation of this research project. It contains information referring to the units of observation, that is to say Latin American insurgent groups, as well as to the socio-political context where they operate. This dataset is, therefore, a valuable tool for addressing the reality of the region during the time period under consideration. Besides, this kind of quantitative approach has been rather uncommon in the analysis of rebellion in Latin America. Most of the research on this issue consists of case studies or comparative studies with small samples, which – despite being an inestimable source of knowledge – lack generalisable empirical results. On the other hand, the statistical models are accompanied by a brief historical illustration of the cases. This qualitative perspective facilitates the identification of the causal mechanisms and micro-foundations underlying the general trends detected by the statistical analysis of the data. This methodological design is mid-way between the intensive strategies of case-oriented comparisons and the extensive character of variable-oriented perspectives. This combination of approaches and techniques aims to generate synergies that amplify the virtues of different methods while minimising their deficits and weaknesses.

### *Main results and conclusions*

The empirical assessment of the existing relationship between political regime and insurgent activity supports the ‘democratic peace hypothesis’. Opening access to the political arena had an important peace-making effect in Latin America during the period observed. The permeability and inclusivity of political systems is quite an effective antidote against the use of violent repertoires of protest. Thus, the possibility of expressing dissent or demands through participation in political parties, unions, demonstrations, or social movements increases the probabilities of armed groups’ demobilisation. The integration of multiple social voices into the system is also a valuable source of legitimacy and social support for democratic regimes. Additionally, the prospect of alternation of power through elections is an important incentive to abandon the costly strategy of insurgency. The transformation of several rebel organisations into political parties, some of which today have government responsibilities, is a clear example of this regional trend. Electoral competition has been, in short, a good alternative to insurrectional activity in Latin America. In democratic contexts, bullets have usually given way to votes – referred by Engels as ‘paper stones’ (cf. Przeworski and Sprague, 1986) – as an instrument of political transformation.

However, these pacification devices do not operate, according to our findings, immediately after the implementation of democratic institutions. Regime change processes affect armed groups’ strategies and can be a breeding ground for collective violence. Thus, instability, uncertainty, governmental weakness, and commitment problems during democratisation periods significantly reduce the probabilities of insurgent movements’ demobilisation. Our analysis supports, therefore, the transitional violence argument. The abandonment of insurrectional tactics is linked to the overcoming of the original ambiguity and mistrust as well as to the consolidation of democracy as ‘the only game in town’. Hence, although democratic transitions were frequently accompanied by rebel activity in Latin America, the path to consolidation favoured the end of insurgent violence. In consequence, it is necessary to distinguish between the short run of tumultuous transition periods and the long run of consolidation, conducive to what could be called ‘post-transitional democratic peace’.

State repression also played an important role in the development of Latin American armed groups. The study confirms, according to our hypothesis, the counterproductive effects of repression in combating insurgency. Governmental violence can set in motion several mechanisms that feed confrontation and strengthen rebel organisations. The discredit of repressive governments, the obstruction of peaceful channels of opposition, the polarisation of society, the generation of new grievances, and the emotional reactions of rage against the abuses of power may produce an escalation of violence. Similarly, the search for protection against state repression can swell the ranks of rebel groups and increase their longevity. These assertions do not mean that coercion is never effective. This research shows how several armed organisations were neutralised, under certain conditions, through state violence. However, the general trend was the opposite. For this reason, the aforementioned positive effects of democracy on peace-making could be inhibited, or at least weakened, when democratic institutions coexist with governmental repression.

Regarding the control variables, this study also offers some interesting empirical evidence. According to several authors, greater state capacity increases the probabilities of rebel groups' termination by limiting their leeway for action. In this sense, our analysis shows how mountainous terrain can hinder a state's control of its territory, constituting an important haven for insurgents and extending their life expectancy. However, other proxies of this variable such as GDP *per capita* or population did not yield any significant results. Consequently, future research is required in order to verify this state strength argument. A similar case is that of socioeconomic grievances. Literature has usually considered poverty and inequality as explanatory factors for insurrectionary violence. Nonetheless, the results of the data analysis, based on literacy rates, fail to reject the null hypothesis. The international context is, however, a very relevant and significant variable. The end of the Cold War raised the probabilities of Latin American armed groups' demobilisation. The fall of the Iron Curtain meant a decline in the external assistance received by insurgent and counterinsurgent forces and provoked a crisis in the revolutionary beliefs and discourses that had inspired the armed struggles that had developed throughout the region. Finally, together with the political opportunities structure and the cognitive frameworks, this dissertation has taken rebels' capacity and resources into account. Internal characteristics of insurgent organisations

can offer some valuable insights into their survival. Thus, bigger groups seem to have a substantially greater duration.

Some of the findings, especially those referring to the relationship between rebellion and political regime, differ from the results obtained by other similar studies. These divergences could be associated with our geographical and time frames as well as with the specific characteristics of our units of observation. The Latin American organisations included in our sample are domestic, recidivist, insurgent, and mainly revolutionary. These features, along with the political evolution of the region, can help to understand the behaviour of the variables related to the form of government. From this viewpoint, the establishment of democratic regimes meets the demands for political opening formulated by many of the insurrectional movements observed, contributing to the end of their armed struggle. However, we may ask ourselves whether the mechanisms activated by democracy are equally effective in managing other types of claims and violent conflicts. Are democratic institutions a useful pacification tool against transnational armed organisations? What is the relationship between *polyarchies* and rebel groups that raise territorial or secessionist claims in nationalist, ethnic, or religious conflicts? In short, how does the nature of insurgent organisations affect their relationship with the political regime and the prospects of resolution of armed confrontations?

### *Epilogue*

In September 2012 Juan Manuel Santos, President of Colombia, confirmed the beginning of new peace talks with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). It was not the first time that government and insurgency groups had tried to open a space for negotiation. The Andean country had already witnessed several failed attempts to put an end to the painful armed conflict initiated more than fifty years ago. For that reason, Santos insisted on the need to learn from the mistakes made in the past so that they were not repeated. Some hours later, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, main leader of the FARC, also announced the guerrillas’ goodwill to take part in the peace talks, asserting that ‘the way out is not war but civilised dialogue’. The so-called General Agreement for the Termination of the Conflict and the Construction of a Stable and Lasting Peace was the starting point of this long, difficult, and uncertain process of negotiation, still underway at the time of this writing.



Finally, we cannot conclude this dissertation without emphasising the profound grief that political violence has caused in Latin America. Thousands of citizens killed, injured, disappeared, and displaced all over the subcontinent show the terrible consequences of armed combats. For this reason, we reiterate our commitment to the search for peaceful conflict resolution. It is also important to clarify that the decline – though not extinction – of insurgency has given way to other forms of violence with a sharp increase in criminality in several countries of the region. According to the most recent *Human Development Report for Latin America* (PNUD, 2013: v), between 2000 and 2010 the murder rate rose by 11 per cent. During the last ten years, more than one million people have died as a result of criminal violence. Insecurity is, therefore, a great challenge for Latin America: organised crime and drug trafficking, violence against women, gangs and street crimes, or corruption and illegal violence exerted by state agents threaten the progress, physical integrity, and well-being of the population (PNUD, 2013: 73-90). It is necessary to make a collective effort to design new formulas and public policies capable of combating this kind of violence and improving the quality of life of Latin American citizens.



## BIBLIOGRAFÍA

---

- Abadie, Alberto. 2006. "Poverty, political freedom, and the roots of terrorism", *The American Economic Review*, 96 (2): 50-56.
- Abendroth, Wolfgang. 1980. *Historia social del movimiento obrero europeo*. Barcelona: Laia.
- Acemoglu, Daron y James A. Robinson. 2000. "Why did the West extend the franchise? Democracy, inequality, and growth in historical perspective", *The Quarterly Journal of Economics*, 115 (4): 1167-1199.
- Acemoglu, Daron y James A. Robinson. 2006. *Economic origins of dictatorship and democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Acemoglu, Daron; Davide Ticchi y Andrea Vindigni. 2010. "Persistence of civil wars", *Journal of the European Economic Association*, 8 (2-3): 664-676.
- Ahram, Ariel I. 2009. "The theory and method of comparative area studies", *Committee of Concepts and Methods Working Paper Series*, 19.
- Alberoni, Francesco. 1984. *Movimiento e institución: teoría general*. Madrid: Editora Nacional.
- Alexander, Yonah (ed.) 2002. *Combating terrorism: strategies of ten countries*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Alexander, Yonah (ed.) 2006. *Counterterrorism strategies: successes and failures of six nations*. Washington D.C.: Potomac Books.
- Álvarez, Mike; José Antonio Cheibub; Fernando Limongi y Adam Przeworski. 1996. "Classifying political regimes", *Studies in Comparative International Development*, 31 (2): 3-36.
- Allison, Michael E. 2006. "The transition from armed opposition to electoral opposition in Central America", *Latin American Politics and Society*, 48 (4): 137-162.
- Anderson, Lisa. 1999. "Introduction", en L. Anderson (ed.), *Transitions to democracy*. New York: Columbia University Press.
- Anderson, Sean K. y Stephen Sloan. 2009. *Historical dictionary of terrorism*. Lanham, Maryland: Scarecrow Press.

- Arenal, Celestino del. 1987. La investigación sobre la paz: pasado, presente y futuro. *Congreso Internacional sobre la Paz*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Arendt, Hannah. 2005. *Sobre la violencia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Ares, Carlos. 1988. Alfonsín culpa a la ultraderecha de la ola de bombas en la 'calle de los cines' de Buenos Aires. *Diario EL PAÍS*, 31-03-1988. [http://elpais.com/diario/1988/03/31/internacional/575762407\\_850215.html](http://elpais.com/diario/1988/03/31/internacional/575762407_850215.html) [Consulta: 15-01-2014].
- Aristóteles. 1997. *Política*. Madrid: Espasa Calpe.
- Arnsón, Cynthia J. (ed.) 1999a. *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Arnsón, Cynthia J. 1999b. "Conclusion: lessons learned in comparative perspective", en C. J. Arnsón (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Arnsón, Cynthia J. 1999c. "Introduction", en C. J. Arnsón (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Aróstegui, Julio. 1994. "Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia", *Ayer*, 13: 17-56.
- Avilés, William. 2006. "Paramilitarism and Colombia's low-intensity democracy", *Journal of Latin American Studies*, 38 (2): 279-408.
- Azpuru, Dinorah. 1999. "Peace and democratization in Guatemala: two parallel processes", en C. J. Arnsón (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Bali, Valentina A. 2007. "Terror and elections: lessons from Spain", *Electoral Studies*, 26: 669-687.
- Banco Mundial. 2014a. *Datos e Indicadores: Índice de Gini* [Online]. Disponible en: <http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI> [Consulta: 30-04-2014].
- Banco Mundial. 2014b. *World Development Indicators: Life expectancy at birth, total (years)* [Online]. Disponible en: <http://databank.worldbank.org/data/> [Consulta: 08-11-2013].
- Banks, Arthur S. y Kenneth A. Wilson. 2010. *Cross-National Time-Series Data Archive (CNTS)*. Databanks International. Jerusalem, Israel. Véase: [www.databanksinternational.com](http://www.databanksinternational.com).

- Bapat, Navin A. y Kanisha D. Bond. 2012. "Alliances between militant groups", *British Journal of Political Science*, 42 (4): 793-824.
- Basedau, Matthias y Patrick Köllner. 2007. "Area studies, comparative area studies, and the study of politics: context, substance, and methodological challenges", *Zeitschrift Für Vergleichende Politikwissenschaft*, 1 (1): 105-124.
- Basombrío, Carlos. 1999. "Peace in Peru: an unfinished task", en C. J. Arnson (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Bates, Robert H. 1996. "Letter from the President: area studies and the discipline", *Newsletter of the APSA Comparative Politics Section*, 7 (1).
- Bates, Robert H. 1997. "Area studies and the discipline: a useful controversy?", *PS: Political Science and Politics*, 30 (2): 166-169.
- Beck, Colin J. 2008. "The contribution of social movement theory to understanding terrorism", *Sociology Compass*, 2 (5): 1565–1581.
- Beck, Nathaniel; Jonathan N. Katz y Richard Tucker. 1998. "Taking time seriously: time-series-cross-section analysis with a binary dependent variable", *American Journal of Political Science*, 42 (4): 1260-1288.
- Bennett, Andrew y Bear Braumoeller. 2002. Where the model frequently meets the road: combining statistical, formal, and case study methods. *Annual Meeting de la American Political Science Association (APSA)*. Boston, 28-31 de agosto.
- Berdal, Mats. 1996. *Disarmament and demobilisation after civil wars: arms, soldiers and the termination of armed conflicts*. Oxford: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.
- Bermeo, Nancy. 1999. "Myths of moderation: confrontation and conflict during democratic transitions", en L. Anderson (ed.), *Transitions to democracy*. New York: Columbia University Press.
- Bernardi, Fabrizio. 2006. Análisis de la historia de acontecimientos. *Cuadernos Metodológicos*, Vol. 38. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Berrebi, Claude y Esteban F. Klor. 2008. "Are voters sensitive to terrorism? Direct evidence from the Israeli electorate", *American Political Science Review*, 102 (3): 279-301.
- Bjørge, Tore y John Horgan (eds.) 2009. *Leaving terrorism behind: individual and collective disengagement*. New York: Routledge.
- Black, Donald. 2004. "The geometry of terrorism", *Sociological Theory*, 22 (1): 14-25.

- Blomberg, S. Brock; Rozlyn C. Engel y Reid Sawyer. 2010. "On the duration and sustainability of transnational terrorist organizations", *Journal of Conflict Resolution*, 54 (2): 303-330.
- Blomberg, S. Brock; Khusrav Gaibulloev y Todd Sandler. 2011. "Terrorist group survival: ideology, tactics, and base of operations", *Public Choice*, 149 (3-4): 441-463.
- Blomberg, S. Brock y Gregory D. Hess. 2002. "The temporal links between conflict and economic activity", *The Journal of Conflict Resolution*, 46 (1): 74-90.
- Blossfeld, Hans-Peter y Götz Rohwer. 2002. *Techniques of event history modeling: new approaches to causal analysis*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bobbio, Norberto. 1994. "Política", en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino (eds.), *Diccionario de política*. México D.F.: Siglo Veintiuno.
- Booth, John A. 1991. "Socioeconomic and political roots of national revolts in Central America", *Latin American Research Review*, 26 (1): 33-73.
- Briceño Ramírez, Laura. 2012. "Subversivos y alegres: los jóvenes militantes del MAPU-Lautaro", *Revista Divergencia*, 1 (2): 9-37.
- Brockett, Charles D. 1991. "The structure of political opportunities and peasant mobilization in Central America", *Comparative Politics*, 23 (3): 253-274.
- Bueno de Mesquita, Ethan. 2005. "The quality of terror", *American Journal of Political Science*, 49 (3): 515-530.
- Bueno de Mesquita, Ethan y Eric S. Dickson. 2007. "The propaganda of the deed: terrorism, counterterrorism, and mobilization", *American Journal of Political Science*, 51 (2): 364-381.
- Buhaug, Halvard. 2006. "Relative capability and rebel objective in civil war", *Journal of Peace Research*, 43 (6): 691-708.
- Cabezas, Omar. 1982. *La montaña es algo más que una inmensa estepa verde*. México D.F.: Siglo XXI Editores.
- Canizales, Rolando. 2008. El fenómeno de los movimientos guerrilleros en Honduras. El caso del Movimiento Popular de Liberación Cinchonero (1980-1990). *Revista Estudios* [Online], 21. Disponible en : <http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no21/papers/isec9.html>. [Consulta: 04-03-2014].

- Cañas, Antonio y Héctor Dada. 1999. "Political transition and institutionalization in El Salvador", en C. J. Arnson (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Carter, David B. 2012. "A blessing or a curse? State support for terrorist groups", *International Organization*, 66 (1): 129-151.
- Carter, David B. y Curtis S. Signorino. 2010. "Back to the future: modeling time dependence in binary data", *Political Analysis*, 18 (3): 271-292.
- Casanova, Julián. 1987. "Revoluciones sin revolucinarios: Theda Skocpol y su análisis histórico comparativo", *Zona Abierta*, 41/42: 81-101.
- Castañeda, Jorge G. 1995. *La utopía desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina*. Barcelona: Ariel.
- Cederman, Lars-Erik; Kristian S. Gleditsch; Nils W. Metternich y Julian Wucherpfenning. 2012. "Ethnicity, the state, and the duration of civil war", *World Politics*, 64 (1): 79-115.
- Cederman, Lars Erik; Simon Hug y Lutz F. Krebs. 2010. "Democratization and civil war: empirical evidence", *Journal of Peace Research*, 47 (4): 377-394.
- CEME. 2003-2007. *Proclama de José T. Merino Castro* [Online]. Centro de Estudios Miguel Enríquez (CEME) - Archivo Chile. Disponible en: [http://www.archivochile.com/Dictadura\\_militar/doc\\_jm\\_gob\\_pino8/DMdocjm0018.pdf](http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0018.pdf) [Consulta: 04-06-2013].
- Clausewitz, Carl Von. 1984. *On war*. Princeton: Princeton University Press.
- Cleves, Mario; William Gould; Roberto Gutiérrez y Yulia Marchenko. 2008. *An introduction to survival analysis using Stata*. Texas: Stata Press.
- Cohn, Norman. 1997. *En pos del Milenio : revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos en la Edad Media*. Madrid: Alianza.
- Cole, George Douglas Howard. 1961. *Historia del pensamiento socialista. Vol.1, Los precursores 1789-1850*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Cole, George Douglas Howard. 1974. *Historia del pensamiento socialista. Vol. 2, Marxismo y anarquismo 1850-1890*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Collier, David. 1979. "Overview of the bureaucratic-authoritarian model", en D. Collier (ed.), *The new authoritarianism in Latin America*. Princeton: Princeton University Press.

- Collier, Paul y Anke Hoeffler. 2004. "Greed and grievance in civil war", *Oxford Economic Papers*, 56 (4): 563-595.
- Collier, Paul; Anke Hoeffler y Måns Söderbom. 2004. "On the duration of civil war", *Journal of Peace Research*, 41 (3): 253-273.
- Comisión de la Verdad para El Salvador. 1993. *De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador*. San Salvador: Naciones Unidas.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 2003. *Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú* [Online]. Lima. Disponible en: <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/> [Consulta: 31-03-2014].
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). 1999. *Guatemala, memoria del silencio*. Ciudad de Guatemala: Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
- CONADEP. 1984. *Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)*. Buenos Aires: Eudeba.
- Conteh-Morgan, Earl. 2004. *Collective political violence: an introduction to the theories and cases of violent conflicts*. New York: Routledge.
- Correlates of War Project. 2012. *National Material Capabilities, 1816-2007 (v4.0)* [Online]. Disponible en: <http://www.correlatesofwar.org/datasets.htm> [Consulta: 12-01-2012].
- Cramer, Christopher. 2005. "Inequality and conflict: a review of an age-old concern", *Identities, Conflict and Cohesion*, United Nations Research Institute for Social Development, Programme Paper Number 11.
- Crenshaw, Edward M.; J. Craig Jenkins y Kristopher K. Robinson. 2006. "Ideologies of violence: the social origins of islamist and leftist transnational terrorism", *Social Forces*, 84 (4): 2009-2026.
- Crenshaw, Martha. 1981. "The causes of terrorism", *Comparative Politics*, 13 (4): 379-399.
- Crenshaw, Martha. 1991. "How terrorism declines", *Terrorism and Political Violence*, 3 (1): 69-87.
- Crenshaw, Martha. 1995. *Terrorism in Context*. University Park, P.A.: The Pennsylvania State University Press.
- Criado, Henar. 2011. "Bullets and votes: public opinion and terrorist strategies", *Journal of Peace Research*, 48 (4): 497-508.



- Cronin, Audrey K. 2006. "How al-Qaida ends: the decline and demise of terrorist groups", *International Security*, 31 (1): 7-48.
- Cronin, Audrey K. 2009. *How terrorism ends: understanding the decline and demise of terrorist campaigns*. Princeton: Princeton University Press.
- Cunningham, David E.; Kristian Skrede Gleditsch y Idean Salehyan. 2009. "It takes two: a dyadic analysis of civil war duration and outcome", *Journal of Conflict Resolution*, 53 (4): 570-597.
- Cheibub, José Antonio; Jennifer Gandhi y James Raymond Vreeland. 2009. *Democracy and Dictatorship Revisited [Codebook September 2009]* [Online]. Disponible en: <https://sites.google.com/site/joseantoniocheibub/datasets/democracy-and-dictatorship-revisited> [Consulta: 03-10-2011].
- Cheibub, José Antonio; Jennifer Gandhi y James Raymond Vreeland. 2010a. "Democracy and dictatorship revisited", *Public Choice*, 143: 67-101.
- Cheibub, José Antonio; Jennifer Gandhi y James Raymond Vreeland. 2010b. *Democracy and Dictatorship Revisited [Datafile]* [Online]. Disponible en: <https://sites.google.com/site/joseantoniocheibub/datasets/democracy-and-dictatorship-revisited> [Consulta: 3-10-2011].
- Chenoweth, Erica. 2010. "Democratic competition and terrorist activity", *The Journal of Politics*, 27 (1): 16-30.
- Chernick, Marc. 1999. "Negotiating peace amid multiple forms of violence: the protracted search for a settlement to the armed conflicts in Colombia", en C. J. Arnsón (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Dahl, Robert A. 1957. "The concept of power", *Behavioral Science*, 2 (3): 201-215.
- Dahl, Robert A. 1992. *La democracia y sus críticos*. Barcelona: Paidós.
- Dahl, Robert A. 1997. *La poliarquía: participación y oposición*. Madrid: Tecnos.
- Dahl, Robert A. 1999. *La democracia: una guía para los ciudadanos*. Madrid: Taurus.
- Darby, John y Roger MacGinty (eds.) 2003. *Contemporary peacemaking: conflict, violence and peace processes*. New York: Palgrave Macmillan.
- Davenport, Christian. 1995. "Multi-dimensional threat perception and state repression: an inquiry into why states apply negative sanctions", *American Journal of Political Science*, 39 (3): 683-713.
- Davenport, Christian. 1996. "The weight of the past: exploring lagged determinants of political repression", *Political Research Quarterly*, 49 (2): 377-403.

- Davenport, Christian. 2007a. *State repression and domestic democratic peace*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Davenport, Christian. 2007b. "State repression and political order", *Annual Review of Political Science*, 10: 1-23.
- Davies, James C. 1962. "Toward a theory of revolution", *American Sociological Review*, 27 (1): 5-19.
- De Currea-Lugo, Víctor. 1999. "Un intento por explicar la violencia en Colombia, ¿y si no somos nación?", *América Latina Hoy*, 23: 17-27.
- De Ferranti, David; Guillermo E. Perry; Francisco Ferreira y Michael Walton. 2004. *Inequality in Latin America and the Caribbean: breaking with History?* Washington D.C.: The World Bank.
- De la Calle, Luis e Ignacio Sánchez-Cuenca. 2011a. The repertoire of insurgent violence. *Annual Meeting de la American Political Science Association (APSA)*. Seattle, 1-4 de septiembre.
- De la Calle, Luis e Ignacio Sánchez-Cuenca. 2011b. "What we talk about when we talk about terrorism", *Politics & Society*, 39 (3): 451-472.
- De la Corte, Luis. 2006. "El terrorismo visto desde las teorías sobre movimientos sociales", *Revista de Psicología Social*, 21 (2): 185-190.
- Debray, Régis. 1967. *Revolución en la revolución*. La Habana: Casa de las Américas.
- Debray, Régis. 1974. *La critique des armes*. París: Éditions du Seuil.
- Della Porta, Donatella. 1995. *Social movements, political violence, and the state: a comparative analysis of Italy and Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Della Porta, Donatella. 2008. "Research on social movements and political violence", *Qualitative Sociology*, 31 (3): 221-230.
- DeRouen, Karl R. y David Sobek. 2004. "The dynamics of civil war duration and outcome", *Journal of Peace Research*, 41 (3): 303-320.
- Dollard, John; Leonard William Dobb; Neal Elgar Miller; Orval Hobart Mowrer y Robert Richardson Sears. 1939. *Frustration and aggression*. New Haven: Yale University Press.
- Domenach, Jean-Marie. 1978. "La ubicuidad de la violencia", *Revista Internacional de Ciencias Sociales (RICS)*, XXX (4): 777-785. París: UNESCO.
- Doyle, Michael W. 1986. "Liberalism and World Politics", *The American Political Science Review*, 80 (4): 1151-1169.

- Doyle, Michael W. y Nicholas Sambanis. 2000. "International Peacebuilding: a theoretical and quantitative analysis", *The American Political Science Review*, 94 (4): 779-801.
- Droz, Jacques (ed.) 1976. *Historia general del socialismo. Vol.1, De los orígenes a 1875*. Barcelona: Destino.
- Eckstein, Harry. 1980. "Theoretical approaches to explaining collective political violence", en T. R. Gurr (ed.), *Handbook of political conflict*. New York: Free Press.
- Eisinger, Peter K. 1973. "The conditions of protest behavior in American cities", *The American Political Science Review*, 67 (1): 11-28.
- Elias, Norbert. 1994. "Civilización y violencia", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*, 65: 141-151.
- Enders, Walter y Todd Sandler. 1999. "Transnational terrorism in the post-Cold War era", *International Studies Quarterly*, 43 (1): 145-167.
- Escobar, Modesto; Enrique Fernández y Fabrizio Bernardi. 2009. Análisis de datos con Stata. *Cuadernos Metodológicos, Vol. 45*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Estellano, Jorge. 1985. Los tupamaros se comprometen a la lucha pacífica y democrática en Uruguay. *Diario EL PAÍS*, 16-03-1985. [http://elpais.com/diario/1985/03/16/internacional/479775616\\_850215.html](http://elpais.com/diario/1985/03/16/internacional/479775616_850215.html) [Consulta: 18-02-2014].
- Eubank, William Lee y Leonard Weinberg. 1994. "Does democracy encourage terrorism?", *Terrorism and Political Violence*, 6 (4): 417-443.
- Eubank, William Lee y Leonard Weinberg. 1998. "Terrorism and democracy: what recent events disclose", *Terrorism and Political Violence*, 10 (1): 108-118.
- Eubank, William Lee y Leonard Weinberg. 2001. "Terrorism and democracy: perpetrators and victims", *Terrorism and Political Violence*, 13 (1): 155-164.
- Fanon, Frantz. 1977. *Los condenados de la tierra*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Fearon, James. 2004. "Why do some civil wars last so much longer than others?", *Journal of Peace Research*, 41 (3): 257-301.
- Fearon, James y David Laitin. 1999. Weak states, rough terrain, and large-scale ethnic violence since 1945. *Annual Meeting de la American Political Science Association (APSA)*. Atlanta, 2-5 de septiembre.

- Fearon, James y David Laitin. 2003a. Additional tables for "Ethnicity, insurgency and civil war". Disponible en: <http://www.stanford.edu/~jfearon/> [Consulta: 14-05-2011].
- Fearon, James y David Laitin. 2003b. "Ethnicity, insurgency, and civil war", *The American Political Science Review*, 97 (1): 75-90.
- Fein, Helen. 1995. "More Murder in the Middle: life-integrity violations and democracy in the world, 1987", *Human Rights Quarterly*, 17 (1): 170-191.
- Feldmann, Andreas E. 2005. "A shift in the paradigm of violence: non-governmental terrorism in Latin America since the end of the Cold War", *Revista de Ciencia Política*, 25 (2): 3-36.
- Feldmann, Andreas E. y Víctor J. Hinojosa. 2009. "Terrorism in Colombia: logic and sources of a multidimensional and ubiquitous phenomenon", *Terrorism and Political Violence*, 21 (1): 42-62.
- Feldmann, Andreas E. y Maiju Perälä. 2004. "Reassessing the causes of nongovernmental terrorism in Latin America", *Latin American Politics and Society*, 46 (2): 101-132.
- Findley, Michael G. y Joseph K. Young. 2011. "Terrorism, democracy and credible commitments", *International Studies Quarterly*, 55 (2): 357-378.
- Findley, Michael G. y Joseph K. Young. 2012. "Terrorism and civil war: a spatial and temporal approach to a conceptual problem", *Perspectives on Politics*, 10 (2): 285-305.
- Fisas, Vicenç. 2004. *Procesos de paz y negociación en conflictos armados*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Fischer, Thomas. 1999. "La constante guerra civil en Colombia", en P. Waldmann y F. Reinares (eds.), *Sociedades en guerra civil: conflictos violentos de Europa y América Latina*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Francisco, Ronald A. 2001. The dictator's dilemma. *Conference on Repression and Mobilization: What Do We Know and Where Do We Go From Here?* University of Maryland, 21-24 de junio.
- Freedom House. 2013. *Freedom in the World, 1973-2013 [Datafile]* [Online]. Disponible en: <http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world> [Consulta: 24-07-2013].
- Fukuyama, Francis. 1992. *El fin de la Historia y el último hombre*. Barcelona: Planeta.

- Gaibullov, Khusrav y Todd Sandler. 2013. "Determinants of the demise of terrorist organizations", *Southern Economic Journal*, 79 (4): 774-792.
- Galtung, Johan. 1969. "Violence, peace and peace research", *Journal of Peace Research*, 6 (3): 167-191.
- Gamson, William A. 1994. *Talking politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gamson, William A. 1995. "Constructing social protest", en H. Johnston y B. Klandermans (eds.), *Social movements and culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Gamson, William A. y David S. Meyer. 1999. "Marcos interpretativos de la oportunidad política", en D. McAdam, J. D. McCarthy y M. N. Zald (eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.
- Ganor, Boaz. 2002. "Defining terrorism: is one man's terrorist another man's freedom fighter?", *Police Practice & Research: An International Journal*, 3 (4): 287-304.
- Ganor, Boaz. 2005. *The counter-terrorism puzzle: a guide for decision makers*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Garcé, Adolfo. 2010. De guerrilleros a gobernantes: el proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral en Uruguay (1985-2009). *XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. Congreso Internacional "200 años de Iberoamérica (1810-2010)"*. Santiago de Compostela, 15-18 de septiembre.
- Garretón, Manuel Antonio. 1995. "Redemocratization in Chile", *Journal of Democracy*, 6 (1): 146-158.
- Garretón, Manuel Antonio. 1997. "Revisando las transiciones democráticas en América Latina", *Nueva Sociedad*, 148 (Marzo-Abril): 20-29.
- Gates, Scott; Håvard Hegre; Mark P. Jones y Håvard Strand. 2006a. "Institutional inconsistency and political instability: Polity duration, 1800-2000 ", *American Journal of Political Science*, 50 (4): 893-908.
- Gates, Scott; Håvard Hegre; Mark P. Jones y Håvard Strand. 2006b. *Multidimensional Institutional Representation of Political Systems (MIRPS) - Scalar Index of Politics (SIP) [Datafile]* [Online]. The Peace Research Institute Oslo (PRIO). Disponible en: <http://prio.no/Data/Governance/MIRPSSIP/> [Consulta: 05-04-2011].
- Geddes, Barbara. 1999. "What do we know about democratization after twenty years?", *Annual Review of Political Science*, 2: 115-144.

- Gibney, Mark; Linda Cornett y Reed Wood. 2010. *Political Terror Scale 1976-2009 [Datafile]* [Online]. Disponible en: <http://www.politicalterroryscale.org/> [Consulta: 01-04-2011].
- Giddens, Anthony. 1987. *The nation-state and violence: volume two of a contemporary critique of historical materialism*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.
- Gleditsch, Kristian S. y Andrea Ruggeri. 2010. "Political opportunity structures, democracy and civil war", *Journal of Peace Research*, 47 (3): 299-310.
- Gleditsch, Kristian S. y Michael D. Ward. 1998. "Democratizing for peace", *American Political Science Review*, 92 (1): 51-61.
- Gleditsch, Kristian S. y Michael D. Ward. 2000. "War and peace in space and time: the role of democratization", *International Studies Quarterly*, 44 (1): 1-29.
- Gleditsch, Nils Petter; Peter Wallensteen; Mikael Eriksson; Margareta Sollenberg y Håvard Strand. 2002. "Armed conflict 1946-2001: a new dataset", *Journal of Peace Research*, 39 (5): 615-637.
- Goffman, Erving. 1974. *Frame analysis: an essay on the organization of experience*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Golder, Matt. 2013. *Introduction to duration models* [Online]. Course Material. New York University (NYU), New York. Disponible en: <https://files.nyu.edu/mrg217/public/essex.htm> [Consulta: 23-01-2014].
- Goldman, Francisco. 2008. *The art of political murder: who killed the bishop?* New York: Grove Press.
- Goldstein, Robert Justin. 1978. *Political repression in modern America: from 1870 to the present*. Cambridge: Schenkman.
- Gómez-Suárez, Andrei. 2007. "Perpetrator blocs, genocidal mentalities and geographies: the destruction of the Unión Patriótica in Colombia and its lessons for genocide studies", *Journal of Genocide Research*, 9 (4): 637-660.
- González Calleja, Eduardo. 2002. *La violencia en la política : perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- González Calleja, Eduardo. 2006. Sobre el concepto de represión. *Hispania Nova - Revista de Historia Contemporánea* [Online], 6. Disponible en: <http://hispanianova.rediris.es/6/dossier.htm> [Consulta: 28-01-2013].

- González Calleja, Eduardo. 2012. La represión estatal como proceso de violencia política. *Hispania Nova - Revista de Historia Contemporánea* [Online], 10. Disponible en: <http://hispanianova.rediris.es/10/dossier.htm> [Consulta: 04-09-2012].
- González, Secundino. 1991. "La transición a la democracia en Nicaragua", *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, 74 (Octubre-Diciembre): 449-469.
- González, Secundino. 1994. "Los procesos de cambio político", en M. Pastor (ed.), *Fundamentos de Ciencia Política*. Madrid: McGraw-Hill.
- González, Secundino. 2012a. "La democracia en Sudáfrica", *Revista Española de Ciencia Política*, 28: 55-84.
- González, Secundino. 2012b. *Nicaragua: de la revolución a la democracia*. México: Universidad Autónoma de Guerrero-IIEPA-Quadrivium Editores.
- González, Secundino y Fernando Harto de Vera. 1994. "Transición y elecciones en El Salvador", *América Latina Hoy*, 8: 73-80.
- Goodwin, Jeff. 2001. *No other way out: states and revolutionary movements, 1945-1991*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goodwin, Jeff. 2004. "Review essays: What must we explain to explain terrorism?", *Social Movements Studies*, 3 (2): 259-265.
- Goodwin, Jeff. 2006. "A theory of categorical terrorism", *Social forces*, 84 (4): 2027-2046.
- Goodwin, Jeff y James M. Jaspers. 1999. "Caught in a winding, snarling vine: the structural bias of political process theory", *Sociological Forum*, 14 (1): 27-54.
- Goodwin, Jeff y James M. Jaspers. 2004. "Caught in a winding, snarling vine: the structural bias of political process theory", en J. Goodwin y J. M. Jaspers (eds.), *Rethinking social movements: structure, meaning and emotion*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- Goodwin, Jeff; James M. Jaspers y Francesca Polletta (eds.) 2001a. *Passionate politics: emotions and social movements*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Goodwin, Jeff; James M. Jaspers y Francesca Polletta. 2001b. "Why emotions matter", en J. Goodwin, J. M. Jaspers y F. Polletta (eds.), *Passionate politics: emotions and social movements*. Chicago: The Chicago University Press.
- Gowa, Joanne S. 1999. *Ballots and bullets: the elusive democratic peace*. Princeton: Princeton University Press.



- Grabe, Vera. 2010. M-19: De la lucha armada a la renuncia a la violencia. *IV Jornadas Internacionales Sobre Terrorismo: "Los finales del terrorismo. Lecciones desde la perspectiva comparada"*. Zaragoza, 15 y 16 de noviembre.
- Grossman, Herschel I. 1999. "Kleptocracy and revolutions", *Oxford Economic Papers*, 51 (2): 267-283.
- Guevara, Ernesto. 1967. *Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental* [Online]. Biblioteca de Textos Marxistas en Internet. Disponible en: [http://www.marxists.org/espanol/guevara/04\\_67.htm](http://www.marxists.org/espanol/guevara/04_67.htm) [Consulta: 19-05-2014].
- Guevara, Ernesto. 1977. *La guerra de guerrillas*. Madrid: Júcar.
- Guevara, Ernesto. 2005. *El diario del Che en Bolivia*. México D.F.: Siglo XXI.
- Guillén, Abraham. 1966. *Estrategia de la guerrilla urbana*. Montevideo: Manuales del Pueblo.
- Gunson, Phil; Greg Chamberlain y Andrew Thompson. 1991. *The dictionary of contemporary politics of Central America and the Caribbean*. London: Routledge.
- Gurr, Ted Robert. 1970. *Why men rebel*. Princeton: Princeton University Press.
- Gutiérrez, Juan C. y Myrna R. Villegas. 1998. "Derechos humanos y desaparecidos en dictaduras militares", *América Latina Hoy*, 20: 19-40.
- Hall, Stuart. 1982. "The rediscovery of "ideology": return of the repressed in media studies", en M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran y J. Woollacott (eds.), *Culture, society and the media*. London: Methuen.
- Hanson, Stephen E. 2008. "The contribution of area studies", *Newletter of the APSA Organized Section for Qualitative and Multi-Method Research*, 6 (2): 35-43.
- Harto de Vera, Fernando. 1991. *Los procesos de negociaciones de paz en América Central (1979-1991)*. Tesis Doctoral. Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos I. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid.
- Harto de Vera, Fernando. 2004. *Investigación para la paz y resolución de conflictos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Hegre, Håvard. 2004. "The duration and termination of civil war", *Journal of Peace Research*, 41 (3): 243-252.
- Hegre, Håvard; Tanja Ellingsen; Scott Gates y Nils Petter Gleditsch. 2001. "Toward a democratic civil peace? Democracy, political change, and civil war, 1816-1992", *American Political Science Review*, 95 (1): 33-48.



- Hegre, Håvard y Nicholas Sambanis. 2006. "Sensitivity analysis of empirical results of civil war onset", *The Journal of Conflict Resolution*, 50 (4): 508-535.
- Henderson, Conway W. 1991. "Conditions affecting the use of political repression", *The Journal of Conflict Resolution*, 35 (1): 120-142.
- Hernández Navarro, Luis. 1999. "Between memory and forgetting: guerrillas, the indigenous movement, and legal reform in the time of the EZLN", en C. J. Arson (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Herreros, Francisco. 2005a. "Introducción: el estudio de la violencia política", *Zona Abierta*, 112/113: 1-20.
- Herreros, Francisco. 2005b. "La lógica del terror estatal aleatorio", *Zona Abierta*, 112/113: 145-174.
- Hobbes, Thomas. 1980. *Leviatán: o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Hobsbawn, Eric J. 1974. *Rebeldes primitivos : estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX*. Barcelona: Ariel.
- Hobsbawn, Eric J. 1975. Revolution. *14th International Congress of Historical Sciences*. San Francisco, 22-29 de agosto.
- Hobsbawn, Eric J. 1987. *El mundo del trabajo : Estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera*. Barcelona: Crítica.
- Hobsbawn, Eric J. 1989. *La era del imperio (1875-1914)*. Barcelona: Labor.
- Hobsbawn, Eric J. 1991. *La era de la revolución (1789-1848)*. Barcelona: Labor.
- Hobsbawn, Eric J. 2003. *La era del capital (1848-1875)*. Barcelona: Crítica.
- Hoddie, Matthew y Caroline Hartzell. 2003. "Civil war settlements and the implementation of military power-sharing arrangements", *Journal of Peace Research*, 40 (3): 303-320.
- Hoffman, Bruce. 2006. *Inside terrorism*. New York: Columbia University Press.
- Horgan, John. 2009. *Walking away from terrorism: accounts of disengagement from radical and extremist movements*. Nueva York: Routledge.
- Hosmer, David W. y Stanley Lemeshow. 1999. *Applied survival analysis: regression modeling of time to event data*. New York: John Wiley and Sons.
- Huntington, Samuel P. 1991a. "Democracy's third wave", *Journal of Democracy*, 2 (2): 12-34.

- Huntington, Samuel P. 1991b. *The third wave: democratization in the late twentieth century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Huntington, Samuel P. 1996. *Clash of civilizations and the remaking of world order*. New York: Simon & Schuster.
- Ibarra, Pedro; Salvador Martí y Ricard Gomà. 2002. *Creadores de democracia radical: movimientos sociales y redes de políticas públicas*. Barcelona: Icaria.
- Inclán, María. 2009. "Repressive threats, procedural concessions, and the Zapatista cycle of protests, 1994-2003", *The Journal of Conflict Resolution*, 53 (5): 794-819.
- Inglehart, Ronald. 1977. *The silent revolution: changing values and political styles among western publics*. Princeton: Princeton University Press.
- Jenkins, Brian M. 1974. "International terrorism: a new kind of warfare", *The Rand Paper Series*, Documento P-5261: 1-13.
- Jenkins, J. Craig. 1983. "Resource mobilization theory and the study of social movements", *Annual Review of Sociology*, 9: 527-553.
- Jenkins, Stephen P. 2008. *Survival Analysis with Stata* [Online]. Course Material. Institute for Social & Economic Research (ISER). University of Essex, Colchester. Disponible en: <http://www.iser.essex.ac.uk/survival-analysis> [Consulta: 12-10-2013].
- Johnson, Chalmers. 1966. *Revolutionary change*. Boston: Little Brown & Company.
- Johnson, Lyndon B. 1965. *Remarks to the 10th National Legislative Conference, Building and Construction Trades Department, AFL-CIO* [Online]. The American Presidency Project. Disponible en: <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=26934> [Consulta: 19-05-2014].
- Jones, Seth G. y Martin C. Libicki. 2008. *How terrorist groups end: lessons for countering al Qaeda*. Washington D.C.: RAND Corporation.
- Kalbfleisch, John D. y Ross L. Prentice. 1980. *The statistical analysis of failure time data*. New York: Wiley.
- Kaldor, Mary. 1999. *New and old wars: organized violence in a global era*. Stanford: Stanford University Press.
- Kalyvas, Stathis N. 2001. "'New' and 'old' civil wars: a valid distinction?", *World Politics*, 54 (1): 99-118.
- Kalyvas, Stathis N. 2004. "The paradox of terrorism in civil war", *The Journal of Ethics*, 8 (1): 97-138.

- Kalyvas, Stathis N. 2006. *The logic of violence in civil war*. New York: Cambridge University Press.
- Kalyvas, Stathis N. 2007. "Civil wars", en C. Boix y S. C. Stokes (eds.), *The Oxford Handbook of comparative politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Kalyvas, Stathis N. y Laia Balcells. 2010. "International system and technologies of rebellion: how the end of the Cold War shaped internal conflict", *American Political Science Review*, 104 (3): 415-429.
- Kant, Immanuel. 2005. *Perpetual peace*. New York: Cosimo.
- Kaplan, Edward L. y Paul Meier. 1958. "Nonparametric estimation from incomplete observations", *Journal of the American Statistical Association*, 53 (282): 457-481.
- Kaufmann, Chaim. 1996. "Possible and impossible solutions to ethnic civil wars", *International Security*, 20 (4): 136-175.
- Keefer, Philip; Thorsten Beck; George Clarke; Alberto Groff y Patrick Walsh. 2001. "New tools in comparative political economy: The Database of Political Institutions", *World Bank Economic Review*, 15 (1): 165-176.
- Keefer, Philip; Thorsten Beck; George Clarke; Alberto Groff y Patrick Walsh. 2012. *Database of Political Institutions 2012 [Datafile]* [Online]. Disponible en: <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:20649465~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html> [Consulta: 17-01-2013].
- Keefer, Philip y David Stasavage. 2003. "The limits of delegation: Veto players, Central Bank independence and the credibility of monetary policy", *American Political Science Review*, 97 (3): 407-423.
- King, Gary. 1996. "Why context should not count", *Political Geography*, 15 (2): 159-164.
- King, Gary y Langche Zeng. 2001. "Logistic regression in rare events data", *Political Analysis*, 9 (2): 137-163.
- Klandermans, Bert. 1988. "The formation and mobilization of consensus", en B. Klandermans, H. Kriesi y S. Tarrow (eds.), *International social movements research. Vol. 1. From structure to action: comparing social movements across cultures across cultures*. Greenwich, Conn.: JAI Press.

- Kriesi, Hanspeter; Ruud Koopmans; Jan W. Duyvendak y Marco G. Giugni. 1992. "New social movements and political opportunities in Western Europe", *European Journal of Political Research*, 22 (2): 219-244.
- Kruijt, Dirk. 2009. *Guerrillas. Guerra y paz en Centroamérica*. Barcelona: Icaria.
- Krumwiede, H.-W. 1999. "Posibilidades de pacificación de las guerras civiles: preguntas e hipótesis", en P. Waldmann y F. Reinares (eds.), *Sociedades en guerra civil: conflictos violentos de Europa y América Latina*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Kydd, Andrew H. y Barbara F. Walter. 2006. "The strategies of terrorism", *International Security*, 31 (1): 49-80.
- Landman, Todd. 1999. "Economic development and democracy: the view from Latin America", *Political Studies*, 47 (4): 607-626.
- Landman, Todd. 2008. *Issues and methods in Comparative Politics: an introduction*. London - New York: Routledge.
- Lartéguy, Jean. 1970. *The guerrillas*. New York: World Press.
- Leal, Francisco. 2003. "La Doctrina de la Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur", *Revista de Estudios Sociales*, 15: 74-87.
- LeBon, Gustave. 2000. *Psicología de las masas*. Madrid: Morata.
- Lehoucq, Fabrice. 2011. Why is overthrowing governments so hard? Central America in comparative perspective. *Annual Meeting de la American Political Science Association*. Seattle, 1-4 de septiembre.
- Lenin, Vladimir. 1975. *¿Qué hacer?* Madrid: Fundamentos.
- Levi, Lucio. 1994. "Régimen político", en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino, (eds.), *Diccionario de política*. México D.F.: Siglo Veintiuno.
- Lewis, Bernard. 2002. "In the finger zone", *The New York Review of Books*, 49 (9): 61-63.
- Leyte, Arturo. 2005. "¿Violencia o poder en la constitución de la filosofía moderna?", *Quaderns de filosofia i ciència*, 35: 107-117.
- Li, Quan. 2005. "Does democracy promote or reduce transnational terrorist incidents?", *Journal of Conflict Resolution*, 49 (2): 278-297.
- Licklider, Roy (ed.) 1993. *Stopping the killing: how civil wars end*. New York: New York University Press.
- Licklider, Roy. 1995. "The consequences of negotiated settlements in civil wars, 1945-1993", *The American Political Science Review*, 89 (3): 681-690.

- Lichbach, Mark Irving. 1987. "Deterrence or escalation? The puzzle of aggregate studies of repression and dissent", *The Journal of Conflict Resolution*, 31 (2): 266-297.
- Lichbach, Mark Irving. 1989. "An evaluation of 'does economic inequality breed political conflict?' studies", *World Politics*, 41 (4): 431-470.
- Lieberman, Evan S. 2005. "Nested analysis as a mixed-method strategy for comparative research", *The American Political Science Review*, 99 (3): 435-452.
- Linz, Juan J. y Alfred Stepan. 1996. *Problems of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Lipset, Seymour M. 1960. *Political man: the social bases of politics*. New York: Doubleday and company.
- Long, J. Scott y Jeremy Freese. 2001. *Regression models for categorical dependent variables using Stata*. College Station, TX: Stata Press.
- Lozano, Carlos. 2008. "El conflicto con las FARC: medio siglo a la espera de la paz con democracia y justicia social", en A. Rangel, Y. Arteta, C. Lozano y M. Medina (eds.), *Qué, cómo y cuándo negociar con las FARC*. Bogotá: Intermedio.
- Lukes, Steven. 2005. *Power: a radical view*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Maddison, Angus. 2010. *Historical Statistics of the World Economy: 1-2008 AD [Datafile]* [Online]. Disponible en: <http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm> [Consulta: 18-05-2011].
- Mainwaring, Scott y Aníbal Pérez-Liñán. 2005. "Why regions of the world are important: regional specificities and region-wide diffusion of democracy", *Kellogg Institute Working Papers*, 322.
- Mair, Peter. 1998. "Comparative Politics: an overview", en R. E. Goodin y H.-D. Klingemann (eds.), *A new handbook of Political Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Mann, Michael. 1986. *The sources of social power. Vol I: A history of power from the beginning to a.d. 1760*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mansfield, Edward D. y Jack Snyder. 1995. "Democratization and the danger of war", *International Security*, 20 (1): 5-38.
- Mansfield, Edward D. y Jack Snyder. 2002. "Democratic transitions, institutional strength, and war", *International Organization*, 56 (2): 297-337.

- Mansilla, Felipe. 1999. "La violencia política en Perú: un esbozo interdisciplinario de interpretación", en P. Waldmann y F. Reinares (eds.), *Sociedades en guerra civil: conflictos violentos de Europa y América Latina*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Maquiavelo, Nicolás. 1996. *El Príncipe*. Madrid: Alianza Editorial.
- Maravall, José M. 1978. *Dictadura y disenso político: obreros y estudiantes bajo el franquismo*. Madrid: Alfaguara.
- Marighella, Carlos. 1969. *Minimanual del guerrillero urbano* [Online]. Disponible en: <http://www.marxists.org/espanol/marigh/obras/mini.htm> [Consulta: 10-01-2014].
- Marshall, Monty G.; Ted Robert Gurr y Keith Jagers. 2010. *Polity IV Project: Political regime characteristics and transitions, 1800-2009 [Datafile]* [Online]. Center for Systemic Peace. Disponible en: <http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm> [Consulta: 06-04-2011].
- Martí i Puig, Salvador. 1998. "La violencia política en Nicaragua. Élités, bases sandinistas y contras en los 90", *Nueva Sociedad*, 156 (Julio-Agosto): 32-43.
- Martí i Puig, Salvador. 2002. "La izquierda revolucionaria en Centroamérica: el FSLN desde su fundación a la insurrección popular", *Working Papers - Institut de Ciències Polítiques i Socials*, 203.
- Marx, Karl y Friedrich Engels. 2001. *Manifiesto comunista*. Madrid: Akal.
- Mason, David y Patrick J. Fett. 1996. "How civil wars end: a rational choice approach", *Journal of Conflict Resolution*, 40 (4): 546-568.
- McAdam, Doug. 1999a. "Oportunidades políticas: orígenes terminológicos, problemas actuales, futuras líneas de investigación", en D. McAdam, J. D. McCarthy y M. N. Zald (eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.
- McAdam, Doug. 1999b. *Political process and the development of Black insurgency, 1930-1970*. Chicago: University of Chicago Press.
- McAdam, Doug; John D. McCarthy y Mayer N. Zald. 1999. "Oportunidades, estructuras de movilización y procesos enmarcadores: hacia una perspectiva sintética y comparada de los movimientos sociales", en D. McAdam, J. D. McCarthy y M. N. Zald (eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.
- McAdam, Doug; Sidney Tarrow y Charles Tilly. 2001. *Dynamics of contention*. Cambridge: Cambridge University Press.

- McCarthy, John D. 1999. "Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades", en D. McAdam, J. D. McCarthy y M. N. Zald (eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.
- McCarthy, John D. y Mayer N. Zald. 1973. *The trend of social movements in America: professionalization and resource mobilization*. Morristown, N.J.: General Learning Press.
- McCarthy, John D. y Mayer N. Zald. 1977. "Resource mobilization and social movements: a partial theory", *American Journal of Sociology*, 82 (6): 1212-1241.
- McClintock, Cynthia. 1999. "The decimation of Peru's Sendero Luminoso", en C. J. Arnsón (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- McSherry, J. Patrice. 2002. "Tracking the origins of a state terror network: Operation Condor", *Latin American Perspectives*, 29 (1): 38-60.
- Melucci, Alberto. 1995. "The process of collective identity", en H. Johnston y B. Klandermans (eds.), *Social movements and culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Merari, Ariel. 1993. "Terrorism as a strategy of insurgency", *Terrorism and Political Violence*, 5 (4): 213-251.
- Merino, Mauricio. 2003. "México: la transición votada", *América Latina Hoy*, 33: 63-72.
- Mickolus, Edward F.; Todd Sandler; Jean M. Murdock y Peter A. Flemming. 2008. *International Terrorism: Attributes of Terrorist Events (ITERATE), 1968-2007 [Datafile]*. Dunn Loring, VA: Vinyard Software.
- Mills, Charles Wright. 2000. *The power elite*. New York: Oxford University Press.
- MIPT/START. 2008. *Terrorist Organization Profiles (TOPs) - Terrorism Knowledge Base® (TKB®)* [Online]. U.S. Department of Homeland Security - University of Maryland. Disponible en: [http://www.start.umd.edu/start/data\\_collections/tops/](http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/) [Consulta: 15-06-2011].
- Mires, Fernando. 1988. *La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina*. Madrid: Siglo Veintiuno.
- Mitchell, Christopher R. 1991. "Cómo poner fin a guerras y conflictos: decisiones, racionalidad y trampas", *Revista Internacional de Ciencias Sociales (RICS)*, 127: 35-58. París: UNESCO.

- Mitchell, Christopher R. y Michael Nicholson. 1983. "Rational models and the ending of wars", *Journal of Conflict Resolution*, 27 (3): 495-520.
- Montobbio, Manuel. 1999. *La metamorfosis de pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador*. Barcelona: Icaria.
- Morlino, Leonardo. 1986. "Consolidación democrática. Definición, modelos, hipótesis", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*, 35: 7-61.
- Morlino, Leonardo. 2008. "Hybrid regimes or regimes in transition?", *FRIDE Working Papers*, 70.
- Morlino, Leonardo. 2009. *Democracias y democratizaciones*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Mouffe, Chantal. 1999. *El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.
- Moyano, María José. 1999. "Argentina: guerra civil sin batallas", en P. Waldmann y F. Reinares (eds.), *Sociedades en guerra civil: conflictos violentos en Europa y América Latina*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Muller, Edward N. 1985. "Income inequality, regime repressiveness, and political violence", *American Sociological Review*, 50 (1): 47-61.
- Muller, Edward N. y Erich Weede. 1990. "Cross-national variation in political violence: a rational action approach", *Journal of Conflict Resolution*, 34 (4): 624-651.
- Munck, Gerardo L. y Richard Snyder. 2005. Debating the direction of comparative politics: an analysis of leading journals. *Annual Meeting de la American Political Science Association (APSA)*. Washington, D.C., 1-4 de septiembre.
- Münkler, Herfried. 2004. *The new wars*. Cambridge: Polity.
- Nagel, Jack. 1974. "Inequality and discontent: a nonlinear hypothesis", *World Politics*, 26 (4): 453-472.
- O'Donnell, Guillermo A. 1996. *El Estado burocrático autoritario: triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
- O'Donnell, Guillermo y Philippe C. Schmitter. 1988. *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas (Vol. 4)*. Buenos Aires: Paidós.
- Oberschall, Anthony. 2004. "Explaining terrorism: the contribution of collective action theory", *Sociological Theory*, 22 (1): 26-37.
- Olson, Mancur. 1992. *La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y teoría de grupos*. México D.F.: Limusa.



- Opp, Karl-Dieter. 1994. "Repression and revolutionary action: East Germany in 1989", *Rationality and Society*, 6 (1): 101-138.
- Orellana, Macarena. 2012. "Utopías generacionales. De la radicalización política a la lucha armada. Jóvenes en el surgimiento del PRT-ERP (Argentina), MIR (Chile) y MLN-Tupamaros (Uruguay). 1960-1970", *Revista Divergencia*, 2: 91-110.
- Ortega, Rogelio. 2001. *La transición votada: reformas electorales en México, 1986-1996*. Tesis Doctoral. Departamento de Ciencia Política y de la Administración I. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid.
- Pape, Robert A. 2003. "The strategic logic of suicide terrorism", *American Political Science Review*, 97 (3): 343-361.
- Pape, Robert A. 2005. *Dying to win: the strategic logic of suicide terrorism*. New York: Random House.
- Paramio, Ludolfo. 2001. Tiempos del golpismo latinoamericano. *Documentos de Trabajo - Unidad de Políticas Comparadas CSIC* [Online], 2. Disponible en: <http://digital.csic.es/bitstream/10261/1468/1/dt-0102.pdf> [Consulta: 21-11-2012].
- Paramio, Ludolfo. 2006. "Crisis y cambio del modelo económico", en M. Alcántara, L. Paramio, F. Freidenberg y J. Déniz (eds.), *Reformas económicas y consolidación democrática*. Madrid: Síntesis.
- Pásara, Luis. 2003. "Acuerdos de paz y cambio en Guatemala", *Nueva Sociedad*, 183 (Enero-Febrero): 38-51.
- Perera, Víctor. 1993. *Unfinished conquest: the guatemalan tragedy*. Berkeley, CA y Los Ángeles: University of California Press.
- Pereyra, Daniel. 1997. *Del Moncada a Chiapas: historia de la lucha armada en América Latina*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Phillips, Brian J. 2011. How terrorist organizations survive: cooperation and competition in terrorist group networks. *Annual Meeting de la American Political Science Association (APSA)*. Seattle, 1-4 de septiembre.
- Pinta, Patricia y Álvaro Martín. 2012. Democracy and political violence: an insight on democratization processes in Latin America. *23rd Congress of Political Science - International Political Science Association (IPSA)*. "Reordering Power, Shifting Boundaries". Madrid, 8-12 de julio.

- PNUD. 2010a. *Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe*. New York: PNUD.
- PNUD. 2010b. *Informe sobre Desarrollo Humano 2010 - Edición del Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano* [Online]. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Disponible en: <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2010/capitulos/> [Consulta: 12-11-2013].
- PNUD. 2013. *Informe regional de Desarrollo Humano para América Latina, 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina* [Online]. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Disponible en: <http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human-development-report-for-latin-america-2013-2014/> [Consulta: 02-07-2014].
- Poe, Steven C. y C. Neal Tate. 1994. "Repression of human rights to personal integrity in the 1980s: a global analysis", *American Political Science Review*, 88 (4): 853-872.
- Przeworski, Adam. 1995. *Democracia y mercado: reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Przeworski, Adam. 2001. Why democracy survives in affluent societies? *New York University - Politics Department Seminars*. New York.
- Przeworski, Adam. 2004. "Democracy and economic development", en E. D. Mansfield y R. Sisson (eds.), *The evolution of political knowledge: democracy, autonomy, and conflict in comparative and international politics*. Columbus: Ohio State University.
- Przeworski, Adam. 2005. "Democracy as an equilibrium", *Public Choice*, 123: 253-273.
- Przeworski, Adam. 2008. "Conquered or granted? A history of suffrage extensions", *British Journal of Political Science*, 39 (2): 291-321.
- Przeworski, Adam; Mike Álvarez; José Antonio Cheibub y Fernando Limongi. 2000. *Democracy and development: political institutions and well-being in the world, 1950–1990*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Przeworski, Adam y John Sprague. 1986. *Paper stones: a history of electoral socialism*. Chicago: University of Chicago Press.

- Przeworski, Adam y Henry Teune. 1970. *The logic of comparative social inquiry*. New York: Wiley-Interscience.
- Ragin, Charles C. 1989. *The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies*. Berkeley: University of California Press.
- Rapoport, David C. 2004. "The four waves of modern terrorism", en A. K. Cronin y J. M. Ludes (eds.), *Attacking terrorism: elements of a grand strategy*. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Rasmussen, María. 2010. Argentina: the end of terrorism through state terrorism. *IV Jornadas Internacionales Sobre Terrorismo: "Los finales del terrorismo. Lecciones desde la perspectiva comparada"*. Zaragoza, 15 y 16 de noviembre.
- Recuperación de Memoria Histórica (REMHI). 1998. *Guatemala: Nunca más*. Ciudad de Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
- Regan, Patrick M. y Sam R. Bell. 2010. "Changing lanes or stuck in the middle: why are anocracies more prone to civil wars?", *Political Research Quarterly*, 63 (4): 747-759.
- Regan, Patrick M. y Daniel Norton. 2005. "Greed, grievance, and mobilization in civil wars", *The Journal of Conflict Resolution*, 49 (3): 319-336.
- Reinares, Fernando. 1995. "Orígenes y efectos de la violencia independentista en el proceso político puertorriqueño", *América Latina Hoy*, 10: 71-78.
- Reinares, Fernando. 1998. *Terrorismo y antiterrorismo*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Reiter, Dan y Allan C. Stam. 2002. *Democracies at war*. Princeton: Princeton University Press.
- Reyes, Elizabeth. 2013. Colombia alcanza con las FARC un acuerdo de participación política. *Diario EL PAÍS*, 06-11-2013. [http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/06/actualidad/1383755904\\_861301.html](http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/06/actualidad/1383755904_861301.html) [Consulta: 10-02-2014].
- Reynal-Querol, Marta. 2002a. "Ethnicity, political systems and civil wars", *The Journal of Conflict Resolution*, 46 (1): 29-54.
- Reynal-Querol, Marta. 2002b. "Political systems, stability and civil wars", *Defence and Peace Economics*, 13 (6): 465-483.
- Reynal-Querol, Marta. 2005. "Does democracy preempt civil wars?", *European Journal of Political Economy*, 21: 445-465.

- Rivera, Mauricio. 2010. "Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos: teorías, métodos, hallazgos y desafíos", *Política y Gobierno*, 17 (1): 59-95.
- Romanos, Eduardo. 2011. "Emociones, identidad y represión: el activismo anarquista durante el franquismo", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)*, 134: 87-106.
- Ross, Jeffrey I. y Ted R. Gurr. 1989. "Why terrorism subsides: a comparative study of Canada and the United States", *Comparative Politics*, 21 (4): 405-426.
- Ross, Lee D. 1977. "The intuitive psychologist and his shortcomings: distortions in the attribution process", en L. Berkowitz (ed.), *Advances in experimental social psychology*, Vol. 10. London: Academic Press.
- Rucht, Dieter. 1999. "El impacto de los contextos nacionales sobre la estructura de los movimientos sociales: un estudio comparado transnacional y entre movimientos", en D. McAdam, J. D. McCarthy y M. N. Zald (eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.
- Rudé, George. 1960. *The crowd in the French Revolution*. Oxford: Clarendon Press.
- Rudé, George. 1978. *Protesta popular y revolución en el siglo XVIII*. Barcelona: Ariel.
- Rummel, Rudolph J. 1983. "Libertarianism and international violence", *The Journal of Conflict Resolution*, 27 (1): 27-71.
- Russell, Diana E. H. 1974. *Rebellion, revolution and armed force*. New York: Academic.
- Russett, Bruce M. 1964. "Inequality and instability: the relation of land tenure to politics", *World Politics*, 16 (3): 442-454.
- Russett, Bruce M. 1993. *Grasping the Democratic Peace: principles for a post-cold War World*. Princeton: Princeton University Press.
- Rustow, Dankwart A. 1970. "Transitions to democracy: toward a dynamic model", *Comparative Politics*, 2 (3): 337-363.
- Ryan, Jeffrey J. 1994. "The impact of democratization on revolutionary movements", *Comparative Politics*, 27 (1): 27-44.
- Sambanis, Nicholas. 2000. "Partition as a solution to ethnic war: an empirical critique of the theoretical literature", *World Politics*, 52 (4): 437-483.
- Sambanis, Nicholas. 2004. "What is civil war? Conceptual and empirical complexities of an operational definition", *Journal of Conflict Resolution*, 48 (6): 814-858.

- Sambanis, Nicholas. 2008. "Terrorism and civil war", en P. Keefer y N. Loayza (eds.), *Terrorism, economic development, and political openness*. New York: Cambridge University Press.
- Sambanis, Nicholas y Katherine Glassmyer. 2008. "Rebel–military integration and civil war termination", *Journal of Peace Research*, 45 (3): 365-384.
- Sanahuja, José Antonio. 1996. *La ayuda norteamericana en Centroamérica, 1980-1992*. Tesis doctoral. Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad Complutense de Madrid.
- Sánchez-Cuenca, Ignacio. 2009. "Terrorism and territory", *Instituto Juan March - Working Papers*, 2009/244.
- Sánchez-Cuenca, Ignacio y Paloma Aguilar. 2009a. "Terrorist violence and popular mobilization: the case of the Spanish transition to democracy", *Politics & Society*, 37 (3): 428-453.
- Sánchez-Cuenca, Ignacio y Paloma Aguilar. 2009b. "Violencia política y movilización social en la transición española", en S. Baby, O. Compagnon y E. González Calleja (eds.), *Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX*. Madrid: Casa de Velázquez.
- Sánchez-Cuenca, Ignacio y Luis de la Calle. 2009. "Domestic terrorism: the hidden side of political violence", *Annual Review of Political Science*, 12: 31-49.
- Santamaría, Julián. 1982. "Transición controlada y dificultades de consolidación: el ejemplo español", en J. Santamaría (ed.), *Transición a la democracia en el Sur de Europa y América Latina*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- Sarkees, Meredith Reid y Frank Wayman. 2010. *Resort to war: 1816-2007*. Washington, D.C.: CQ Press.
- Sartori, Giovanni. 1970. "Concept misformation in Comparative Politics", *The American Political Science Review*, 64 (4): 1033-1053.
- Savun, Burcu y Brian J. Phillips. 2009. "Democracy, foreign policy, and terrorism", *Journal of Conflict Resolution*, 53 (6): 878-904.
- Schatzman, Christina. 2005. "Political challenge in Latin America: rebellion and collective protest in an era of democratization", *Journal of Peace Research*, 42 (3): 291-310.

- Schellenberg, James A. 1996. *Conflict resolution: theory, research and practice*. Albany, New York: SUNY Press.
- Schmid, Alex P. 1992. "Terrorism and democracy", *Terrorism and Political Violence*, 4 (4): 14-25.
- Schmid, Alex P. 2004. "Frameworks for conceptualising terrorism", *Terrorism and Political Violence*, 16 (2): 197-221.
- Schmid, Alex P. y Albert J. Jongman. 2005. *Political terrorism: a new guide to actors, authors, concepts, databases, theories & literature*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Schmitt, Carl. 2002. *El concepto de lo político*. Buenos Aires: Editorial Struhart.
- Schmitter, Philippe C. 1994. "La Transitología: ¿ciencia o arte de la democratización?", en A. Balletbó (ed.), *La consolidación democrática en América Latina*. Barcelona: Hacer.
- Schmitter, Philippe C. 2010. "Twenty-five years, fifteen findings", *Journal of Democracy*, 21 (1): 17-28.
- Schulz, Donald E. y Deborah Sundloff Schulz. 1994. *The United States, Honduras, and the crisis in Central America*. Boulder, CO: Westview Press.
- Schumpeter, Joseph A. 1976. *Capitalism, socialism and democracy*. London: George Allen & Unwin.
- Singer, J. David. 1987. "Reconstructing the Correlates of War Dataset on Material Capabilities of States, 1816-1985", *International Interactions*, 14: 115-132.
- Singer, J. David; Stuart Bremer y John Stuckey. 1972. "Capability distribution, uncertainty, and major power war, 1820-1965", en B. M. Russett (ed.), *Peace, war, and numbers*. Beverly Hills: Sage.
- Singer, J. David y Melvin Small. 1972. *The wages of war, 1816-1965: a statistical handbook*. New York: John Wiley & Sons.
- Singer, J. David y Melvin Small. 1982. *Resort to arms: international and civil war, 1816-1980*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Skocpol, Theda. 1979. *States and social revolutions. A comparative analysis of France, Russia and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, Peter H. 2009. *La democracia en América Latina*. Madrid: Marcial Pons.
- Snow, David A. y Robert D. Benford. 1988. "Ideology, frame resonance, and participant mobilization", *International Social Movement Research*, 1 (1): 197-217.

- Snow, David A. y Robert D. Benford. 2000. "Framing processes and social movements: an overview and assessment", *Annual Review of Sociology*, 26 (1): 611-639.
- Snow, David A.; E. Burke Rochford; Steven K. Worden y Robert D. Benford. 1986. "Frame alignment processes, micromobilization, and movement participation", *American Sociological Review*, 51 (4): 464-481.
- Snyder, Jack. 2000. *From voting to violence: democratization and nationalist conflict*. New York: Norton&Company.
- Sorel, Georges. 1976. *Reflexiones sobre la violencia*. Madrid: Alianza.
- Soto Carmona, Álvaro. 2009. "Violencia política y transiciones a la democracia: Chile y España", en S. Baby, O. Compagnon y E. González Calleja (eds.), *Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX*. Madrid: Casa de Velázquez.
- Spalding, Rose J. 1999. "From low-intensity war to low-intensity peace: the nicaraguan peace process", en C. J. Arnson (ed.), *Comparative peace processes in Latin America*. Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- START. 2010a. *Global Terrorism Database [Data file]* [Online]. U.S. Department of Homeland Security - University of Maryland. Disponible en: <http://www.start.umd.edu/gtd> [Consulta: 15-06-2011].
- START. 2010b. *Global Terrorism Database: GTD variables & inclusion criteria [Codebook May 2010]* [Online]. U.S. Department of Homeland Security - University of Maryland. Disponible en: <http://www.start.umd.edu/gtd/> [Consulta: 15-06-2011].
- Stedman, Stephen John; Ronald Rotchild y Elizabeth M. Cousens (eds.) 2002. *Ending civil wars: the implementation of peace agreements*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Steele, Fiona. 2005. Event history analysis. *NCRM Methods Review Papers* [Online]. Disponible en: <http://eprints.ncrm.ac.uk/88/1/MethodsReviewPaperNCRM-004.pdf> [Consulta: 30-03-2012].
- Stepan, Alfred. 1988. "Camino hacia la redemocratización: consideraciones teóricas y análisis comparativos", en G. O'Donnell, P. C. Schmitter y L. Whitehead (eds.), *Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas* (Vol. 3). Buenos Aires: Paidós.
- Tarrow, Sidney. 1999. "Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales", en D. McAdam, J. D. McCarthy y M. N. Zald (eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid: Istmo.

- Tarrow, Sidney. 2009. *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Taylor, Lewis. 1998. "Counter-insurgency strategy, the PCP-Sendero Luminoso and the civil war in Peru, 1980-1996", *Bulletin of Latin American Research*, 17 (1): 35-58.
- The Economist. 2012. *Democracy Index 2012: Democracy at a standstill [Datafile]* [Online]. The Economist Intelligence Unit. Disponible en: [https://www.eiu.com/public/topical\\_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12](https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12) [Consulta: 24-07-2013].
- Thompson, Edward P. 1977. *La formación histórica de la clase obrera: Inglaterra 1780-1832*. Barcelona: Laia.
- Thompson, Edward P. 1979. *Tradición, revuelta y consciencia de clase: estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Barcelona: Crítica.
- Tidwell, Alan C. 1998. *Conflict resolved? A critical assessment of conflict resolution*. London: Pinter.
- Tilly, Charles. 1978. *From mobilization to revolution*. New York: McGraw-Hill.
- Tilly, Charles. 2007a. *Contienda política y democracia en Europa, 1650-2000*. Barcelona: Editorial Hacer.
- Tilly, Charles. 2007b. *Violencia colectiva*. Barcelona: Hacer.
- Torres-Rivas, Edelberto. 2006. "Guatemala: desarrollo, democracia y los acuerdos de paz", *Revista Centroamericana de Ciencias Sociales*, 3 (2): 11-48.
- Tullock, Gordon. 1971. "The paradox of revolution", *Public Choice*, 11: 89-100.
- Vallès, Josep M. 2000. *Ciencia Política: una introducción*. Barcelona: Ariel.
- Vanhanen, Tatu. 2000. "A new dataset for measuring democracy, 1810-1998", *Journal of Peace Research*, 37 (2): 251-265.
- Vanhanen, Tatu. 2002. *Polyarchy Dataset v2.0 [Datafile]* [Online]. Peace Research Institute of Oslo (PRIO). Disponible en: <http://prio.no/Data/Governance/Vanhanens-index-of-democracy/> [Consulta: 05-04-2011].
- Vilas, Carlos M. 1986. *The Sandinista revolution: national liberation and social transformation in Central America*. New York: Monthly Review Press.
- Villarraga, Álvaro. 2013. "Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia", *Colombia Internacional*, 77: 107-140.



- VP Task Force on Combatting Terrorism. 1989. *Terrorist Group Profiles*. Darby, P.A.: Diane Publishing.
- Vreeland, James Raymond. 2008. "The effect of political regime on civil war", *Journal of Conflict Resolution*, 52 (3): 401-425. Incluye "Web Appendix".
- Waldmann, Peter. 1992a. "Diferentes formas de violencia política", *Revista Internacional de Sociología*, 3:2 (Mayo-Agosto): 121-148.
- Waldmann, Peter. 1992b. "Terrorismo y guerrilla: la violencia organizada contra el Estado en Europa y América Latina. Un análisis comparativo", *Estudios Internacionales*, 98 (Abril-Junio): 275-313.
- Waldmann, Peter. 1995. "Represión estatal y paraestatal en Latinoamérica", *América Latina Hoy*, 10: 21-28.
- Waldmann, Peter. 1999. "Guerra civil: una aproximación a un concepto difícil de formular", en P. Waldmann y F. Reinares (eds.), *Sociedades en guerra civil: conflictos violentos de Europa y América Latina*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- Waldmann, Peter. 2010. How terrorism ceases: the Tupamaros in Uruguay. *IV Jornadas Internacionales Sobre Terrorismo: "Los finales del terrorismo. Lecciones desde la perspectiva comparada"*. Zaragoza, 15 y 16 de noviembre.
- Walt, Stephen M. 1992. "Revolution and war", *World Politics*, 44 (3): 321-368.
- Walter, Barbara F. 2001. *Committing to peace: the successful settlement of civil wars*. Princeton: Princeton University Press.
- Weber, Max. 1946. *From Max Weber: Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Weinstein, Jeremy M. 2007. *Inside rebellion: the politics of insurgent violence*. New York: Cambridge University Press.
- Wickham-Crowley, Timothy P. 1990. "Terror and guerrilla warfare in Latin America, 1956-1970", *Comparative Studies in Society and History*, 32 (2): 201-237.
- Wickham-Crowley, Timothy P. 1993. *Guerrillas and revolution in Latin America: a comparative study of insurgents and regimes since 1956*. Princeton: Princeton University Press.
- Wickham-Crowley, Timothy P. 1995. "Auge y declive de los gobiernos de la guerrilla en América Latina", *América Latina Hoy*, 10: 7-20.
- Wilkinson, Paul. 1986. *Terrorism and the liberal state*. London: MacMillan.
- Wilkinson, Paul. 2000. *Terrorism versus democracy*. London: Frank Cass Publishers.

- Wilson, John. 1973. *Introduction to social movements*. New York: Basic Books.
- Wittman, Donald. 1979. "How a war ends: a rational model approach", *Journal of Conflict Resolution*, 23 (4): 743-763.
- Wooldridge, Jeffrey M. 2003. "Cluster-sample methods in applied econometrics", *The American Economic Review*, 93 (2): 133-138.
- Yamaguchi, Kazuo. 1991. *Event history analysis*. London: Sage.
- Young, Joseph K. y Laura Dugan. 2010. Why do terrorist groups endure? *International Studies Association Annual Meeting*. New Orleans, 17-20 de febrero.
- Zartman, I. William. 1978. *The negotiation process: theories and applications*. Beverly Hills: Sage.
- Zimmerman, Ekkart. 1980. "Macro-comparative research on political protest", en T. R. Gurr (ed.), *Handbook of political conflict: theory and research*. New York: Free Press.
- Zimmerman, Ekkart. 1990. "On the outcomes of revolutions: some preliminary considerations", *Sociological Theory*, 8 (1): 33-47.
- Zimmermann, Doron y Andreas Wenger (eds.) 2007. *How states fight terrorism: policy dynamics in the West*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Zorn, Christopher. 2006. "Comparing GEE and robust standard errors for conditionally dependent data", *Political Research Quarterly*, 59 (3): 329-341.

